UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

**** HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO ****

ACTA N° 386

Correspondiente a la **sesión ordinaria** del 30 de noviembre de 2011.

Presidencia del señor Decano, **Abog. Hernán GÓMEZ**
Secretaria de Asuntos Académicos, **Abog. Rita GAJATE**
Secretario de Postgrado, **Abog. Fabián SALVIOLI**

CONSEJEROS PRESENTES

Por el Claustro de Profesores
Abog. Vicente Santos ATELA (Vicedecano)
Abog. Ángel Eduardo GATTI
Abog. Marcelo KRIKORIAN
Abog. Juan Carlos MARTÍN
Abog. Sergio DELUCIS
Abog. Liliana ZENDRI
Abog. María Florencia FRANCHINI (suplente)

Por el Claustro de Jefe de Trabajos Prácticos
Abog. Edwin MONTERO LABAT

Por el Claustro de Graduados
Abog. Manuel BOUCHOUX

Por el Claustro de Estudiantes
Sr. Gerardo CAMPIDOGLIO
Sr. Matías BALSAMELLO
Sr. Joaquín MUELE SOLER
Sr. Joaquín ELISECHE
Sr. Damián BRUMER

Por el Claustro No Docente
Sra. Cecilia SAUER

CONSEJEROS AUSENTES

Por el Claustro de Profesores
Dr. Amós GRAJALES (c/aviso)

Por el Claustro de Graduados
Abog. Federico AYLLON (c/aviso)

ÍNDICE

PUNTO 1.- Aprobación de solicitud de tratamiento sobre tablas.-.....3

PUNTO 2.- Designación de docentes para asignaturas del Doctorado en Ciencias Jurídicas.- (Expte. 400-3108/11).- 3

PUNTO 3.- Conocimiento del informe del señor Decano. 4

3.1) Inscripción para el ciclo lectivo 2012.-..... 4
3.2) Colaciones de grado.-..... 4
3.3) Acto académico.-..... 4
3.4) Premio a la labor Científica, Tecnológica y Artística - UNLP.-..... 5
3.5) Clínica jurídica en Derechos Humanos.- 5
3.6) Obras edilicias.- 5
3.7) Reforma del Plan de Estudios.-..... 5

PUNTO 4.- Aprobación del Acta Nº 385 del HCD.-.....6

PUNTO 5.- Conocimiento del informe de las comisiones de trabajo sobre la posible reforma del plan de estudios.- 6

5.1) Comisión de Materias Iniciales o Propedéuticas.- 9
5.2) Comisión de Derecho Público.-..... 22
5.3) Comisión de Derecho Privado.-..... 40
5.4) Comisión de Diseño del Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho.-..... 50
5.5) Próximos informes de comisiones temáticas.- 57

APÉNDICE

I. INFORME DE LA COMISIÓN DE MATERIAS INCIALES O PROPEDÉUTICAS..... 58
II. INFORME DE LA COMISION DE "DERECHO PUBLICO"..... 123
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO PRIVADO.- 224
IV. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERFIL PROFESIONAL, PERFIL CURRICULAR Y ENSEÑANZA DEL DERECHO.- 231

- En la ciudad de La Plata, a treinta de noviembre de dos mil once, a las 17 y 40, dice el

Sr. DECANO.- Queda abierta la sesión.

PUNTO 1.- SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.-

Sr. ATELA.- Pido la palabra.

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de una propuesta presentada por el señor Secretario de Postgrado, para la designación de docentes del Doctorado en Ciencias Jurídicas. La razón de urgencia para efectuar este pedido es que tales designaciones no podrían postergarse hasta la próxima sesión del Honorable Consejo Directivo, ya que son necesarias para cumplir con las pautas de acreditación ante las autoridades que categorizan postgrados.

Asimismo, de aprobarse este pedido y teniendo en cuenta que la consideración del tema principal de esta sesión puede ser extenso y hasta podríamos quedarnos sin quórum, solicito que se altere el orden del día y se trate en primer lugar.

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas formulado por el consejero Atela.

- Se aprueba por unanimidad.

Sr. DECANO.- Se va a votar la alteración del orden del día mocionada por el consejero Atela.

- Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 2.- SALVIOLI, Fabián. S/Designación de docentes para asignaturas del Doctorado en Ciencias Jurídicas.- (Expte. 400-3108/11).-

Sr. DECANO.- Por Secretaría se dará lectura a la propuesta elevada por el profesor Salvioli.

Sra. SECRETARIA.- Los docentes propuestos son: Taller de Metodología de la Investigación en Ciencias Jurídicas. Docentes a cargo, doctores Eduardo Thenon y Sandra Nilda Grahl.

Debates actuales en la Filosofía Jurídica. Docente a cargo, doctor Eduardo Luis Tinant. Equipo docente: doctores Eduardo Luis Tinant, Carlos Enrique Pettoruti y Amós Arturo Grajales.

Debates actuales en la Sociología Jurídica. Docente a cargo, doctora Olga Luisa Salanueva. Equipo docente: doctoras Olga Luisa Salanueva y Manuela Graciela González, y doctores Mario Silvio Gerlero y Daniel Cieza.

Actualidad del Derecho Público. Docente a cargo, doctor Carlos Alfredo Botassi.

Actualidad del Derecho Privado. Docente a cargo, doctor Rubén Héctor Compagnucci de Caso.

Sr. ATELA.- Pido la palabra.

Todos los propuestos reúnen el requisito reglamentario de poseer título de doctor. Además, son conocidos los antecedentes de cada uno de ellos.

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar la designación de los docentes propuestos.

- Se aprueba por unanimidad, designándose a los docentes propuestos.

PUNTO 3.- INFORME DEL SEÑOR DECANO.

3.1) Inscripción para el ciclo lectivo 2012.-

Sr. DECANO.- Al día de hoy la inscripción a la carrera de Abogacía para el ciclo lectivo 2012 alcazaba un total de 1.650 personas.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

3.2) Colaciones de grado.-

Sr. DECANO.- El 6 de diciembre se realizará la última colación de grado de abogados de este año.

En tanto, el 12 de diciembre se llevará a cabo la colación de grados de martilleros y corredores públicos.

Están todos invitados.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

3.3) Acto académico.-

Sr. DECANO.- El 14 de diciembre, a las 18, se realizará un acto académico muy trascendente para nosotros porque se entregarán diplomas de profesores extraordinarios a los doctores Humberto Quiroga Lavié, en carácter de emérito, y Carlos Bisso, en carácter de consulto.

También se hará entrega de diplomas a aquellos profesores que cumplieron treinta años de ejercicio de la docencia y a los no docentes con veinticinco años de antigüedad.

Asimismo, recibirán sus diplomas los profesores que en los últimos tiempos obtuvieron sus cargos de titular y/o adjunto por concurso.

En esta oportunidad, también se hará un reconocimiento a los profesores que renunciaron a sus cargos por haber llegado a la edad máxima para jubilarse.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

- Se incorpora la consejera Sauer.

3.4) Premio a la labor Científica, Tecnológica y Artística - UNLP.-

Sr. DECANO.- La Universidad Nacional de La Plata entregó los premios a los mejores investigadores, edición 2011.

En lo que respecta a nuestra Facultad, fueron distinguidas la abogada Noemí Mellado como investigadora formada, y la abogada Laura Bogado Bordazar como investigadora joven. Ambas recibieron sus diplomas muy emocionadas.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

3.5) Clínica jurídica en Derechos Humanos.-

Sr. DECANO.- Autorizado por este Consejo Directivo, el responsable de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos hizo distintas presentaciones en defensa de vecinos del barrio La Rotonda, de Florencio Varela, y como resultado se ha obtenido el dictado de una medida cautelar que ordena el cierre preventivo de dos empresas, Industrial Varela SRL y Gibaut Manufacturas de Cuero SA, por las actividades contaminantes que realizan.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

3.6) Obras edilicias.-

Sr. DECANO.- Se han comenzado obras en el quinto piso de este edificio, en la terraza, un lugar que no se estaba usando. Se están haciendo dos aulas para responder a requerimientos de alumnos y profesores para dictado de clases, así como también para actividades de investigación o extensión que se realizan en esta Casa.

También está proyectado iniciar durante las próximas vacaciones el acondicionamiento de un lugar que podría asociarse a un salón de usos múltiples, para que los docentes puedan utilizarlo para leer, preparar clases, escribir, recibir alumnos o realizar reuniones de cátedra; el sentido no es que se convierta en otra Sala de Profesores sino en un lugar cómodo que les permita a los docentes permanecer más en la Facultad para realizar esas otras funciones cómodamente.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

3.7) Reforma del Plan de Estudios.-

Sr. DECANO.- Comenzamos otro tramo más en la tarea que nos propusimos todos juntos: avanzar en el estudio de la reforma del plan de estudios de la carrera de Abogacía.

Se ha cumplido con todo el proceso de recopilación de datos, inquietudes, propuestas y proyectos a través de las comisiones de trabajo que presidieron los consejeros que, de alguna manera, tuvieron el auxilio técnico de otros profesores y demás recursos de la Casa.

Realmente me parece algo muy favorable que a esta altura del año hayamos cumplido con esas etapas y se haya avanzado tanto, no obstante una prórroga en esas actividades.

La percepción del Decanato es que, a medida que se fue avanzando, se movilizaron mucho los integrantes de nuestra comunidad educativa, principalmente de docentes y estudiantes. Pero, además, esto tuvo un efecto afuera de la Facultad, es decir, en la sociedad; en este sentido, recibimos una propuesta del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ofreciendo su colaboración para participar en este proyecto y poniéndose a disposición en todo lo que se necesite para la posible reforma del plan de estudios de la carrera de Abogacía.

Hoy escucharemos los informes de avance de cada una de las comisiones que ustedes integraron y, repito, me parece algo muy importante para esta unidad académica.

En consideración.

- Se toma conocimiento.

PUNTO 4.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA Nº 385 DEL HCD.-

Sr. DECANO.- En consideración el Acta N° 385 del Honorable Consejo Directivo, correspondiente a la sesión ordinaria del 10 del corriente mes.

Sra. SAUER.- Pido la palabra.

Es para solicitar autorización para abstenerme de votar, porque estuve ausente en esa sesión.

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el Acta N° 385.

- La consejera Sauer se abstiene de votar, con la aprobación del HCD.
- Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 5.- INFORME de las comisiones de trabajo sobre la posible reforma del plan de estudios.-

Sr. ATELA.- Pido la palabra.

Las actividades comenzaron el 8 de junio del corriente, en la sesión que este Consejo Directivo analizó y discutió el proyecto elevado por el señor Decano y la señora Secretaria de Asuntos Académicos para generar un ámbito institucional y un programa tendiente a evaluar críticamente el actual plan de estudios de Abogacía, Escribanía y Procuración.

En tal sentido, la propuesta invitaba al Consejo Directivo a establecer distintas comisiones temáticas para que se reunieran periódicamente, que citaran a los profesores de las distintas cátedras, así como también para que recibieran alumnos, no docentes, investigadores y demás actores vinculados con la vida universitaria, para escucharlos y recepcionar propuestas, proyectos, inquietudes, ideas, con una apertura amplia hacia todos.

Las comisiones temáticas fueron constituidas el 21 de junio de este año y, de acuerdo con la resolución marco de esta tarea, cada una de ellas estuvo integrada por tres consejeros directivos. Por esto, la integración de las comisiones quedó de la siguiente:

Comisión de Materias Iniciales o Propedéuticas: abogados Juan Carlos Martín y Liliana Zendri, doctor Amós Arturo Grajales y señor Gerardo Campidoglio.

Comisión de Derecho Público: abogados Ángel Eduardo Gatti y Vicente Santos Atela y señores Mario Barloqui, Damián Brumer y Joaquín Muele Soler.

Comisión de Derecho Privado: abogados Sergio Delucis, María Florencia Franchini y Edwin Montero Labat, y señor Joaquín Muele Soler.

Comisión de Diseño del Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho: abogados Vicente Santos Atela, Marcelo Krikorian y Cecilia Sauer, y señor Matías Balsamello.

Comisión de Ciencias Sociales y Áreas del Conocimiento Complementarias para la Formación del Abogado: abogados Marcelo Krikorian y Fabio Isaac Arriagada.

Comisión de Prácticas Profesionales: abogados Manuel Alberto Bouchoux y Federico Ayllon, y señor Joaquín Eliseche.

Después de mi intervención harán lo propio los demás consejeros que integraron comisiones, incluso otros profesores y graduados que colaboraron en las actividades de estos equipos de trabajo, para contar sus experiencias y exponer las conclusiones de cada comisión.

Lo que pretendemos en esta sesión es generar el espacio para reflexionar sobre qué se entiende hoy que es un abogado y qué debe saber en la sociedad argentina de 2011, también tratando de romper con el esquema tradicional que tiene la Facultad y el actual plan de estudios, de formar un abogado para ejercer la profesión liberal independiente y preparado simplemente para la judicialización de todos los conflictos, algo que no responde a lo que cada uno de nosotros fuimos viviendo y evaluando en las comisiones temáticas, que hoy se está demandando un abogado totalmente distinto a un abogado de pleito o de tribunales; es más, una comisión específica informará más concretamente qué es lo que demanda la sociedad de un abogado litigante hoy en día.

Más allá de las actividades de las comisiones, hasta hace pocas horas hemos recepcionado proyectos y propuestas por correo electrónico y lo positivo es que no sólo son de profesores que están ejerciendo en esta Facultad actualmente, sino que pertenecen a graduados y hasta lectores del diario El Día, que difundió la noticia de este proceso de reforma, lo que permitió que ciudadanos comunes enviaran sus opiniones o sugerencias acerca del rol del abogado.

En total se recibieron sesenta y cinco proyectos en el mail institucional para la reforma del plan de estudios y están referidos a materias o a disciplinas o áreas del conocimiento, esto es, ciencias sociales o ciencias jurídicas. Quizás, con el transcurso del tiempo recibamos más propuestas, como la recibida en el Decanto de parte del Colegio de Abogados. En ese sentido, una vez que tengamos el proyecto de reforma, me parece que sería interesante darle intervención a ese Colegio y a otras instituciones vinculadas con el ejercicio del Derecho, como la Suprema Corte de Justicia, la Procuración de la Suprema Corte de Justicia y, por qué no, las cámaras legislativas también, para recibir sus opiniones y para saber cómo ven la formación del abogado por la universidad pública.

A su vez, en el marco de estas actividades, se contó con el auxilio de la Secretaría de Asuntos Académicos para generar algunos espacios que nos ayudaran a los consejeros en la tarea de reflexionar acerca de qué es un plan de estudios y cómo debe evaluarse una reforma del plan de estudios.

Fue así que se realizaron dos actividades a las que concurrieron dos especialistas en la materia. Una fue la conferencia "Los planes de estudio y la formación universitaria. Los diferentes modelos", el 30 de junio del corriente, con el profesor Martín Federico Böhmer y la otra se hizo el 21 de septiembre del corriente, a cargo de la magíster Mónica Ros, directora de Currículum y Planes de Estudio de la Presidencia de la Universidad, sobre "Dinámicas institucionales en contextos de transformación. A propósito de la reforma del plan de estudios". Estas disertaciones complementarias nos han ayudado a los consejeros para pensar sobre lo que implica la reforma del plan de estudios de una carrera.

Así hemos trabajado y tratado de dar respuestas a algunas preguntas y dudas que teníamos respecto de "hacia dónde ir" y qué aspectos abordar en la reforma del plan de estudios, lo que de alguna manera sintetizamos con tres preguntas: qué formamos, cómo formamos y para qué formamos.

Si se reforma el plan de estudios, se responderán dos de ellas: qué y para qué formamos. Contestar el cómo quizás sea una tarea posterior, que tendrá que ver con el régimen de enseñanza. Pero hoy damos el primer paso, subimos el primer escalón para responder qué y para qué formamos, en función de qué implica hoy ser abogado y de lo que consideramos debe ser el abogado.

Hoy damos un paso más al dar este debate respecto a mejorar el actual plan de mejorar, cuya matriz es de 1953, que responde a una estructura curricular y de

conocimientos de ese entonces pero que no se condice con la realidad de lo que es un abogado hoy.

Hasta aquí mi aporte por el momento, para dar lugar a los demás consejeros con los informes de las comisiones temáticas.

5.1) <u>Comisión de Materias Iniciales o Propedéuticas.-</u>

Sr. DECANO.- En primer lugar, escucharemos el informe de la Comisión de Materias Iniciales o Propedéuticas, integrada por los consejeros Juan Carlos Martín, Liliana Zendri, Amós Arturo Grajales y Gerardo Campidoglio.

Sr. MARTÍN.- Pido la palabra.

Antes de que hagan uso de la palabra los responsables del trabajo de la Comisión, ante el señor Decano y mis pares consejeros, en primer lugar, quiero pedir disculpas porque fui designado para intervenir pero, por muchos motivos, personales y laborales, no pude participar y no quiero llevarme los laureles por un esfuerzo que no hice, fueron otros los consejeros que trabajaron en esta Comisión.

No obstante ello, quiero hacer un comentario desde un plano más personal. No es que no esté convencido con este proyecto, pero sucede que cuando uno es joven es más reformista y cuando uno es más adulto se vuelve más cauto en muchas cosas.

Veo que en los últimos años la Facultad hizo un gran avance, muchos de nosotros venimos de la etapa donde no podíamos participar ni cursar ni escuchar clases de los docentes y llegábamos a las mesas examinadoras sufriendo -algunos tomando pastillas para calmar los nervios-, pero se logró que un gran porcentaje de los alumnos ahora pueda cursar, se priorizó que el docente esté más en contacto con los alumnos, les pueda transmitir sus conocimientos y, a través de eso, que puedan enriquecerse con el intercambio.

Y en todo este avance y cambios muy importantes que se fueron dando, quiero hacer una crítica a muchos de mis colegas y también a muchos alumnos -quizás también me la hagan- y es que no he visto mucho compromiso para mejorar. A los alumnos, la Facultad les ha dado profesores titulares y adjuntos, jefes de trabajos prácticos y auxiliares docentes para ayudarlos a realizar un trabajo mejor, para acompañarlos y, lamentablemente, muchos docentes -lo vimos, lo escuchamos- no han tenido el compromiso fundamental de trabajar con los alumnos, de estar presentes y formarlos. A través de esa formación se podrá comenzar a discutir qué tipo de abogado uno quiere, pero si en toda esta reforma que se hace en función de un nuevo perfil, los formadores no están, se genera un problema y es complicado.

Entonces, en todo este proceso me surgió pensar que podemos llegar a hacer una gran reforma -todos lo estamos esperando, se puede ver en los proyectos presentados, los que leí a pesar de no haber participado en la comisión-, pero mi

temor es que en esta gran transformación que podamos llegar a hacer, modificando y dando otro perfil a la carrera, hagamos una estructura con esos docentes y termine siendo una estructura vacía. Por ejemplo, una de las cosas que se trabajó mucho desde el Decanato fue que cada materia reformara su programa adaptándolo a la realidad y creo que el resultado fue muy leve, porque no hubo un fuerte compromiso, no obstante que se les diera esa posibilidad a los docentes.

Estoy diciendo lo que siento en todo esto. De pronto, me puse más en observador.

Disiento con algo que dijo el señor Vicedecano, que hoy la Facultad forma para litigar, para mí no es así, creo que falta una formación de abogados más comprometidos socialmente. Mientras en una reforma del plan de estudio no se profundice en quiénes tienen que dar las materias con ese nuevo perfil, con las que irán formando, no se va llegar a ese abogado más comprometido socialmente. Esto sucede porque nos encontramos con una variedad de docentes que opinan distinto y debe respetarse el principio de libertad de cátedra.

Reitero mi pedido de disculpas porque, por motivos personales, no tuve participación; me dedico a mi profesión, que es de lo que vivo. Además, preferí ser más un observador del proceso, pensaba que con mi opinión no podía bloquear las de otros, ya que podía influir para que otros no trajeran sus posturas, porque debía estar abierto a muchas cosas.

Por todo esto pido disculpas, no es que pretenda que no se reforme, sí quiero ver y acompañar porque, como dije anteriormente, con el paso del tiempo uno se convierte en menos transformador y en más observador, y tengo temor de que esta gran reforma lleve a que muchos docentes y alumnos no tengan el compromiso pertinente y tengamos un plan de estudios que no sea operativo.

Sra. ZENDRI.- Pido la palabra.

Contestando un poco lo que plantea el consejero Martín, quiero aclarar la metodología que usé en la comisión que es, estrictamente, opuesta a las consideraciones que él efectuó, en el sentido de no vengo a formular propuestas ni consideraciones personales, me atuve al modelo de informe sugerido para unificar criterios y, realmente, traté de trabajar de manera objetiva, o sea, siguiendo los ítems que marcaba ese esquema, sin poner una impronta personal, al contrario, tratando de traer hoy un paneo de la situación lo más objetivo posible, de tal manera que en esta primera instancia se les presenta una reseña, sobre la que después podrán hacer preguntas y consideraciones.

Formulada esta aclaración, debo decir que la comisión de Materias Iniciales y Propedéuticas incluía Introducción al Derecho -materia de la que soy profesora ordinaria adjunta-, Historia Constitucional, Derecho Romano, Derecho Político e Introducción a la Sociología.

Las incumbencias de esta comisión están dispuestas en el artículo 2° de la Resolución N° 198 y, textualmente, son: *"… Se analizarán los espacios iniciales de formación de la carrera de Abogacía, la necesidad de revisión de los contenidos generales básicos y la metodología de enseñanza en la educación en el primer tramo de la formación del profesional en Ciencias Jurídicas y Sociales contemplando nuevos contenidos disciplinares e interdisciplinares"*.

En esta comisión se planteó reiterada y sostenidamente el problema del nombre, los contenidos y la ubicación de las asignaturas. Entonces, para no incurrir en errores, con el texto de cada proyecto en mano hice una relación de los mismos.

Los miembros de la comisión fuimos los consejeros Juan Carlos Martín, Amós Grajales, el señor Gerardo Campidoglio, yo y los auxiliares propuestos oportunamente para participar.

En cuanto al punto atinente a la descripción de los encuentros realizados, en mi informe listo el material, es decir, las actas que se confeccionaron el día de las reuniones, también los proyectos que fueron a nuestra comisión y los presento en el orden que fueron produciendo. En tal sentido, voy a enumerar la fecha, los asistentes, los aportes, las consideraciones y los temas abordados, tratando de seguir el orden que tuvieron los mismos a partir, como dije recién, de las actas confeccionadas por mí y de la documentación agregada por todos los participantes, no solo mediante la presentación de proyectos escritos sino, además, las consideraciones y reflexiones recibidas vía correo electrónico, que también trate de relacionar.

Dejo aclarado que todas las convocatorias a las distintas cátedras de las materias de primer año se cursaron a las direcciones de correo electrónico de todos sus integrantes, conforme a los registros obrantes en esta Facultad y que nos fueron suministrados a la Comisión, respecto de los cuales tengo las constancias respectivas y las pongo a disposición de todos ustedes.

Finalmente, en el informe listo el material incorporado en esta Comisión con un sumario de cada proyecto.

Paso al tercer ítem: descripción de las reuniones realizadas. La primera reunión fue con integrantes de la asignatura a la que pertenezco, Introducción al Derecho, celebrada el 9 de agosto. A la convocatoria asistieron los consejeros Atela, Grajales, Krikorian y yo, los profesores titulares de las tres cátedras, el doctor Carlos Pettoruti y los abogados Sabina Podrez Yaniz y Guillermo Peñalva, así como también profesores Mónica Bornia, María Laura Deluchi, Javier Dente y Sebastián Manz.

Conforme el acta que tengo elaborada y que será acompañada al informe, en esa oportunidad obraban agregados en la carpeta correspondiente a esta Comisión un proyecto de reforma presentado por el consejero Grajales, como profesor

adjunto ordinario de la cátedra 3 de Introducción al Derecho, de creación de un Ciclo Propedéutico Inicial en la carrera de Abogacía y también una propuesta de creación de materias de contenido interdisciplinario vinculadas a epistemología, metodología de la investigación y escritura de documentos científicos, de autoría del doctor Sebastián Piana, secretario de Investigación de la Facultad.

Luego de que los asistentes aludieran expresamente a la conveniencia de esta instancia de debate, abordaron la consideración y crítica del proyecto del doctor Grajales; después, en un tercer momento, debatieron sobre diferentes cuestiones referidas a la asignatura, haciendo cada uno una serie de consideraciones que me parece importante señalar en el orden que se fueron produciendo.

En primer término, la profesora Sabina Podrez Yaniz se refirió a la necesidad de adoptar una posición constructiva respecto de la reforma del plan de estudios y un enfoque que ella misma denominó amplio e integrador, evitando compartimientos estancos, por lo que propuso interrelacionar los contenidos de todas las materias de primer año. Manifestó que coincidía en la implementación de un ciclo introductorio, pero con acento en los aspectos metodológicos necesarios que el mismo debería contener. Después, la profesora Podrez Yaniz, en una propuesta por escrito, realiza una pormenorizada crítica al proyecto en consideración.

Respecto a la asignatura de la que es titular, la profesora Podrez Yaniz sostuvo enfáticamente la necesidad de mantener el nombre y los contenidos de la misma, abogando por una correlación mayor con la asignatura Filosofía del Derecho. Se opuso a la incorporación de la llamada Teoría General del Derecho, por entender que la misma se ocupa sólo de aspectos relacionados con el estudio del Derecho positivo y que deja contenidos de la Introducción muy valiosos fuera de su marco.

La Profesora Titular elevó propuesta para la reforma del plan de estudios y lleva el número 25 y también intercambió opiniones en más de una oportunidad acerca de los contenidos de la propuesta presentada por el doctor Carlos Pettoruti.

En segundo término, el profesor Guillermo Peñalva, titular de la cátedra 1, coincidió con la necesidad de un ciclo propedéutico, aunque manifestó dudas acerca de los contenidos en orden a la dificultad que el mismo podría presentar, haciendo hincapié en la ausencia de comprensión y desconocimiento de técnicas de estudio por parte de muchos alumnos ingresantes, lo que, a su entender, amerita que -cito textualmente- *"hay que ir desde lo más básico para poder desarrollar luego estructuras más complejas"*. El profesor Peñalva apoya la incorporación de una asignatura denominada Teoría General del Derecho pero en un momento posterior a Introducción al Derecho y menciona como imprescindible

que se establezca una materia metodológica al bloque de asignaturas de primer año.

A ello, siguió el profesor Dente, quien proponía el cambio de nombre de la asignatura Introducción al Derecho por Teoría General del Derecho, lo que generó opiniones encontradas entre y con el resto de los asistentes que, con posterioridad a la reunión, nos llevaría a intercambiar correspondencia con algunos integrantes de las cátedras acerca de este tema.

El profesor Dente coincidió en el establecimiento de un ciclo propedéutico, pero también consideró que debía estudiarse con mayor detenimiento las materias del mismo y sus contenidos.

Respecto al cambio de nombre de la materia, en una instancia posterior a la reunión aclaró sobre la conveniencia de deslindar los tiempos para discutir el plan de estudios de aquellos tiempos relativos a temas que se podrían denominar internos. Posteriormente a la reunión presentó una propuesta por escrito que, en síntesis, alude al cambio de nombre de la materia con una breve referencia al ciclo denominado propedéutico.

La profesora María Laura Deluchi presentó su propuesta acerca de incorporar en el primer cuatrimestre del primer año temas de metodología, lenguaje y lógica. En tal sentido, argumentó basándose en su necesidad y los aportes que estas disciplinas podrían arrojar a la Introducción.

En un momento posterior a la reunión también participó con relación a la conveniencia de discutir el cambio de nombre de la asignatura, señalando algo dicho durante la celebración de la reunión. Textualmente dijo: *"De ninguna manera el nombre Teoría General del Derecho implica una toma de posición ius naturalista y positivista, ni significa sacrificar contenidos ius naturalistas del programa"*.

Casi al final de la reunión intervino el profesor titular de la cátedra 2 de Introducción al Derecho, doctor Carlos Pettoruti, refiriéndose a la importancia que traía el debate que estábamos generando. Habló de la importancia de la ocasión recurriendo a una metáfora, diciendo que la reforma de un plan de estudios es un tren de muchos vagones. Así pretendió señalar la importancia del enfoque metodológico que la reforma lleva ínsito y coincidió con la profesora Podrez Yaniz en mantener el nombre de la asignatura.

También presentó una propuesta por escrito y consideraciones, formuladas con posterioridad al intercambio que tuvo con la profesora titular de la cátedra 3 que, en síntesis, fundamentan la posición exhibida en la reunión respecto a la ubicación de la asignatura en la carrera, pues textualmente dice el profesor Pettoruti: *"Las materias iniciales están y deben continuar estando en el primer año de estudios y no en una suerte de anteaño. No son materias previas sino que inician al alumno en el complejo estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales",* señalando

que Introducción al Derecho se ubica en ese ámbito, citando a la profesora emérita María Teresa López al decir que *"la materia es una introducción a la ciencia del Derecho y a la filosofía del Derecho*" y así la vincula con todas las demás materias de primer año en una serie de temas transversales relativos al Derecho, la sociedad, la política, la economía y la historia, que conforman la perspectiva jurídica y social de la carrera.

Consideró que no se puede prescindir de los contenidos fundamentales de las actuales materias sino que hay que vincularlas con la problemática social en general, exigiendo numerosos puntos de contacto entre el Derecho y la Antropología, la Psicología, que no debían ser dejados de lado en un mundo que sostiene la diversidad cultural y se enriquece eventualmente por ella.

Su propuesta centra en que cada materia de primer año, sin modificar su carga horaria, tenga como complemente un taller de temas de actualidad. También propicia la inclusión de una materia en primer año que proporcione herramientas para el estudio, la comprensión, el análisis y la crítica de los temas fundamentales de las asignaturas, sugiriendo que podría denominarse Metodología para el Estudio y la Investigación en las Ciencias Sociales, cuya aprobación podría cumplirse conjuntamente con las demás asignaturas de primer año, finalizando con la integración de un trabajo de investigación sobre un tema transversal a todas las materias del inicio.

La segunda reunión de la comisión fue con integrantes de la materia Historia Constitucional, celebrada el 23 de agosto. Asistieron a la convocatoria los consejeros Grajales y Campidoglio junto con los profesores Marucci y Torres Molina. No estuve en la reunión y, por lo tanto, no tengo acta para agregar y desconozco el tratamiento y debate que haya podido suscitarse. Sin perjuicio de ello, tengo material presentado por escrito que está sintetizado en el punto correspondiente del informe.

La tercera reunión fue con los integrantes de la asignatura Derecho Político, celebrada el 20 de septiembre. Asistieron a la convocatoria el consejero Grajales, yo, el profesor titular de la cátedra 1, doctor Juan Carlos Corbetta, profesores adjuntos e integrantes de esa cátedra: abogados López Calendino, Cabrera y Médici.

Inicialmente se abordó el problema de la correlatividad con Historia Constitucional, ya que todos los integrantes de Derecho Político coincidieron en la inconveniencia de que esta materia se ubique antes de la mencionada, lo que deviene en la ausencia del marco conceptual imprescindible -se refirieron al marco tempo espacial- para el correcto abordaje de la asignatura.

Sr. DECANO.- ¿Qué orden pretenden de las materias?

Sra. ZENDRI.- Ellos señalan que Historia Constitucional debe estar necesariamente antes que Derecho Político.

Prefiero seguir el orden del informe porque si no me disperso, pero adelanto que esta cátedra propuso por escrito que esta asignatura -también estaba presente el consejero Atela, ahora lo recuerdo- estuviera a la altura de un cuarto año.

Sr. ATELA.- Pido la palabra para una aclaración.

Ellos la equipararían a Sociología Jurídica y buscan que en lugar de Derecho Político sea Ciencia Política, por eso proponen que esté en un grado más avanzado de la carrera. Su postura de que sí o sí Historia Constitucional esté antes es inversa a la de los profesores de esta última, que sostienen que para ellos sería beneficioso que estuviese Derecho Político primero, porque hablar de formas de Estado -centralismo, federalismo, unitarismo- implica profundizar conceptos que son ajenos a la Historia pero que hacen a la Historia Constitucional, por lo que si Derecho Político estuviese antes, no tendrían que dedicar tiempo en desarrollar esos conceptos. Son posturas.

Sra. ZENDRI.- También tengo una reseña del proyecto.

Sr. ATELA.- Disculpe la interrupción, consejera Zendri.

Sra. ZENDRI.- Al contrario, le agradezco su aporte, ya que estuvo presente.

Les mencioné que en la reunión participó el abogado Médici, quien planteaba preliminarmente que la materia debería ubicarse en una etapa posterior a la que hoy ocupa, concretamente a la altura de cuarto año, en una ubicación similar a Filosofía del Derecho y a Sociología del Derecho *"... a fin de que el alumno cuente con mayor madurez y formación que permita aprovechar los contenidos de las mismas..."*. Además, señaló la conveniencia de ubicarla como correlativa de Historia Constitucional, Introducción al Derecho, Derecho Constitucional y, de paso, incluyó Economía Política.

Conforme después lo detalla en la propuesta presentada por escrito, la misma gira en torno a dos ejes. El primero es atinente a la ubicación en la carrera y el segundo relativo al primer año de la carrera y la necesidad de incorporar una nueva asignatura que entiende podría hacerse en el ciclo propedéutico; se refiere a una etapa introductoria a la historia de las corrientes políticas y jurídicas, dando ubicación tempo espacial y de conocimiento preliminar acerca de las principales corrientes del pensamiento de la política y del Derecho en sus contextos históricos, la que tendría como eje temático el estudio de la historia no solo de las ideas políticas y jurídicas universales sino también, en particular, de América Latina.

Respecto a la denominación de la materia, todos los miembros coincidieron en la conveniencia de mantenerla como está actualmente.

Por último, los integrantes de las asignaturas Derecho Romano e Introducción a la Sociología no efectuaron propuestas en reunión porque no se realizó encuentro alguno. No obstante ello, debo dejar a salvo que en Introducción

a la Sociología hubo dos circunstancias que merecen ser apuntadas: una es de la titular de la cátedra 3, doctora Olga Salanueva, que cursó invitación a los consejeros integrantes de esta Comisión y las autoridades de la Facultad para asistir a una clase especial dirigida a los alumnos, referida a la eventual reforma del plan de estudios, para 29 de noviembre, de 10 a 12. No pude asistir y no puedo informar al respecto.

Por otro lado, respecto a la invitación cursada a titulares y adjuntos de esas materias para la reunión fijada para el 11 de octubre, el titular de la cátedra 2 de Introducción a la Sociología, profesor Felipe Fucito, envió a vuelta de correo electrónico sus reflexiones que obran agregadas y se resumen en este informe. En definitiva, refieren a un diagnóstico subjetivo del profesor sobre la actualidad de la materia y de los alumnos cursantes de la misma. Mediante esa presentación formula el comentario también positivo respecto a la propuesta de un ciclo propedéutico, pero señalando *"que deben evaluarse, y hacerlo correctamente, su costo y su tiempo"*, haciendo notar que *"los contenidos son complejos para la baja calificación educativa de muchos de los aspirantes"*. También alude a lo que él llama "nota", que es la propuesta de la profesora de Letras, considerando que resulta más que necesario incorporar un curso introductorio de redacción en esa instancia.

En el modelo que planeé seguir -y que realmente me ayudó mucho-, viene la mención de la recopilación de los proyectos presentados con relación al eje temático de esta Comisión. Además de agregar las tres actas de reunión, listé los proyectos presentados, con un pequeño sumario que me parece apropiado reproducir.

Sr. ATELA.- La idea, consejera Zendri, es que estos informes se anexen como complemento a la versión taquigráfica de esta sesión y junto con los textos de cada proyecto se den a conocimiento de toda la comunidad académica, para que todos puedan acceder a esa información de manera completa.

Sra. ZENDRI.- Así lo entendí y por eso preparé el listado y la documentación referida, pero entiendo prudente relatar al menos un par de sumarios, si me lo permiten.

Sr. DECANO.- Adelante.

Sra. ZENDRI.- No obstante que su proyecto merece una lectura integral, me parece importante señalar que el consejero Grajales básicamente atiende la problemática del ingreso al grado universitario, realiza un diagnóstico de la situación actual del ingreso a nuestra Facultad, se interroga acerca de las herramientas o métodos de estudio para adquirir conocimiento, partiendo de la necesidad de quienes aborden las materias troncales de la carrera -haciendo alusión a Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal y Derecho Comercial-, accedan a las mismas capacitados para adquirir el conocimiento con un

pensamiento crítico, es decir, que puedan utilizar diversas metodologías de estudio y que puedan estructurar lo que él llama razonamientos válidos y correctos.

Propone, entonces, un Ciclo Propedéutico Introductorio, pensado como una primera fase de la vida universitaria, aclarando que no se trata de un curso de preingreso o de ingreso. Lo denomina con la sigla CPI y, según su autor, permitirá que los conceptos introductorios al campo de lo jurídico sean abordados y evaluados, precisamente, en un ciclo propiamente diseñado a ello.

Para él esto evitaría ocupar cantidad de horas cátedra de las materias jurídicas propiamente introductorias a la carrera. Su contenido aproximado remite a lo siguiente -es válido que lo diga porque es la crítica que le formulan dos de las tres cátedras de Introducción al Derecho-: nociones introductorias a la Lógica, Lógica simbólica, Lógica proposicional, Lógica de cuantificadores, Lógica de clases, aplicación al Derecho, Lógica deóntica, razonamientos correctos, falacias en su relación con el discurso jurídico, criterios lógicos utilizados en el Derecho, introducción a la Semiótica y su relación con el mundo jurídico. También contempla introducir la asignatura Cultura Jurídica, para referir un recorrido que ilustre los hitos jurídicos con relevancia para la carrera y los contextualice históricamente.

Propone incluir articulación de expresión oral y escrita, metodología y técnicas de estudio, atento a la necesidad de lo que el llama "entender estudio del lenguaje y su cambios en los últimos tiempos".

En cuanto a las características de las tres materias a las que se refiere, señala la cursada obligatoria de todas y recomienda, además en el mismo proyecto, el diseño de la materia Lógica y Lenguaje del Derecho.

Sería oportuno ahora pasar a la crítica que le formulan los profesores titulares de las cátedras…

Sr. MONTERO LABAT.- Pido la palabra.

Ese ciclo CPI, ¿lo plantea como eliminatorio o de qué manera?

Sra. ZENDRI.- No soy la autora de ese proyecto y no lo he podido descifrar de su texto. Es extenso y para no desvirtuarlo he tratado de manejarme casi con las mismas palabras del consejero Grajales en una apretada síntesis, porque la interpretación es un tema muy difícil.

Sr. KRIKORIAN.- Pido la palabra.

De su lectura se interpreta que el curso estaría integrado a la currícula por lo que, como bien dijo la consejera Zendri, parecería no ser un curso de ingreso.

Sra. ZENDRI.- Exacto.

Sr. KRIKORIAN.- Pareciera que el bloque de materias se integraría al primer tramo de la carrera.

Sr. ATELA.- Serían las primeras materias del ingresante.

Sr. KRIKORIAN.- Exacto.

Sr. ATELA.- Y por lo que surge del proyecto, tendrían una carga horaria similar a un cuatrimestre o semestre. Sería la materia de apertura, de inicio para quien pretende ingresar a la carrera de Abogacía.

Sr. MUELE SOLER.- Pido la palabra.

Para nosotros sí es eliminatorio. Cuando en su momento se lo preguntamos al profesor Grajales, él planteaba que se cursaría en el primer cuatrimestre y en caso de no aprobarse, en el segundo cuatrimestre no podía seguir cursando.

Es un sistema parecido, a nuestro entender, al de las tres primeras materias de la Facultad de Ciencias Económicas.

Tampoco pudimos descifrar si es introductorio o no, porque por momentos dice que lo es y por momentos que forma parte de la carrera.

Sr. DECANO.- Esperemos a que venga el consejero Grajales para aclarar este tema.

Sr. MONTERO LABAT.- Me parecía oportuna la pregunta porque, para comprender bien la propuesta, esta es la oportunidad para tratarlo, independientemente que no esté presente el consejero Grajales, quien después podría ampliarlo.

Sr. MUELE SOLER.- Es nuestra interpretación.

Sra. ZENDRI.- Me abstengo de interpretar, sólo estoy intentando dar una síntesis.

Siguiendo el orden numérico, está el proyecto autoría del doctor Sebastián Piana, propone el dictado para los alumnos de grado de algunos contenidos mínimos de epistemología y metodología de la investigación, la creación de una materia especifica de contenido interdisciplinario vinculado a la ciencia política. La creación de esta materia implicaría profundizar aspectos teóricos, incluiría algunos ya abordados pero con algunas temáticas y prácticas nuevas vinculadas al ejercicio profesional en ámbitos gubernamentales.

El objetivo de la materia que él propone sería darle a los alumnos un marco general para la comprensión, descripción y explicación de fenómenos políticos con las problemáticas que los rodean, dándole especial importancia al poder como eje central para el estudio de proyectos esenciales. Asimismo, propone la lectura analítica de textos representativos de Ciencia Política del siglo XX, a fin de la comprensión de diversas perspectivas teóricas para el abordaje de las mismas.

Sr. DECANO.- Discúlpeme una interrupción, consejera. ¿Dentro de esa materia de metodología de la investigación se incluirían esos contenidos acerca de poder y todos los demás?

Sra. ZENDRI.- Exacto.

Hay un proyecto del abogado García Zeballos que se refiere a la necesidad de la inclusión definitiva del Ciclo de Adaptación Universitaria como una asignatura más de la currícula. Relata haber sido ingresante en 1994 y califica

que el curso es de enorme ayuda para iniciar al alumno en los temas de las primeras asignaturas.

Me parece interesante ir definitivamente al proyecto 14, del doctor Pettoruti, que formula propuestas tendientes a la reforma del plan de estudios de la carrera bajo el título "Propedéutica para el estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales". En síntesis, sostiene que las materias iniciales de la carrera de Procuración, Abogacía y Escribanía están y deben continuar estando en el primer año de estudios y no en una suerte de anteaño -como ya lo dije-, porque entiende que no son previas sino que inician directamente al alumno en el complejo estudio de las ciencias jurídicas y sociales.

Dice que Introducción al Derecho se ubica en este ámbito y, por lo mismo, se vincula con todas las demás materias de primer año, con una serie de temas transversales relativos al Derecho, la sociedad, la política, la economía y la historia, confirmando justamente la perspectiva jurídica y social de la carrera.

Su propuesta, en síntesis, consiste en que cada materia de primer año, sin modificar su carga horaria, se complemente con un taller de temas de actualidad; propicia la inclusión de una materia en primer año que suministre herramientas de estudio, de comprensión, de análisis y de crítica de temas fundamentales, sugiriendo la denominación "Metodología para el estudio y la investigación de las Ciencias Jurídicas", que coincide en mucho con el proyecto del profesor Piana.

No me referiré al proyecto de la profesora Manuela González, directora del Instituto de Cultura Jurídica, que remite aportes realizados por el grupo de investigación que ella dirige en el marco del proyecto J-101, porque tiene su grado de complejidad y creo que otros consejeros pueden hablar acerca del mismo. No obstante, les comento que plantea cuestiones estructurales como el alcance del proceso de cambio y la necesidad de que sea precedido por un acuerdo político -me estoy refiriendo a esta instancia de la reforma-, y la necesidad de una orientación general que después se profundice.

En su proyecto, la profesora Podrez Yaniz hace consideraciones acerca del proyecto de Ciclo Propedéutico Inicial presentado por el consejero Grajales. Comparte criterios con el profesor Pettoruti respecto a que la propedéutica no es una etapa previa a la enseñanza sino de inicio a la enseñanza misma, cuya tarea es introducir al alumno en el estudio de la disciplina. También insta a que los profesores del resto de las materias de primer año emitan opiniones al respecto.

Básicamente el proyecto de la profesora Podrez Yaniz gira en torno a dos ejes, señalados por ella misma: mantener la asignatura Introducción al Derecho con su nombre y sus contenidos actuales, y analizar la propuesta de implementar un ciclo propedéutico inicial.

Respecto al primero, señala diferencias con Teoría General del Derecho, habla de la elaboración profunda y sustancial de los conceptos jurídicos

fundamentales que para ella constituyen una teoría del Derecho positivo y de Filosofía del Derecho, que refieren al análisis del Derecho en su realidad universal; a su entender, son disciplinas definitivamente distintas ya que la segunda representaría un segundo grado de los elementos provistos por la primera. A su criterio, sintetiza que Teoría General del Derecho debe analizarse en un tercer grado, ya con un conocimiento acabado de la Ciencia Jurídica.

Respecto al segundo eje, formula críticas al proyecto de ciclo propedéutico del consejero Grajales, con relación a la excesiva exigencia para el ingresante en una asignatura como Introducción a la Lógica Jurídica y al Lenguaje del Derecho. De igual forma, no le parece conveniente la creación de la materia Introducción a la Cultura Jurídica. Sí apoya, bajo el calificativo de imprescindible, ejercitar a los alumnos en la expresión oral y escrita con asignaturas como técnicas de estudio, incluso, se refiere a la mitología aplicada para desandar el camino de una lectura crítica.

Finalmente, el profesor adjunto de Introducción al Derecho, Julio Scatolini, elevó una extensa propuesta con un análisis acerca de la denominación, aspectos y contenidos de esta disciplina, que he tratado de ,sintetizar en pocas líneas. Propone, como cuestión previa, indagar sobre el concepto de propedéutica, a fin de desgajar la discusión que se plantea acerca de las materias de primer año de la carrera, o sea, si las mismas conforman una enseñanza preparatoria de una disciplina o si son el inicio de la enseñanza misma.

El profesor Scatolini considera que todas las materias de primer año de la carrera están ubicadas donde corresponde y que su materia en particular es el inicio al estudio del fenómeno jurídico. Entiende que el debate debe realizarse pero con límites vinculados a la autonomía disciplinar, el objeto, la ubicación y la denominación.

Asimismo, considera que el fundamento, la razón de ser de Introducción al Derecho es que aborda al Derecho como una totalidad. Sostiene que la asignatura es mucho más que teoría general, no es un conjunto sistemático de conocimientos que una vez estudiados sean considerados un saber autónomo y, por lo tanto, se adopte ese saber, sino que debe ser profundizado. Entonces, para él, Introducción al Derecho es un punto de partida para el conocimiento del fenómeno jurídico en su visión totalizadora, previo a los estudios dogmáticos posteriores. A su criterio, la teoría general es un estudio realizado sobre los mismos temas pero en un acto reflexivo de segundo grado, que equivaldría a lo que la profesora Podrez Yaniz llama de tercer grado, o sea, estaríamos hablando quizás de una posibilidad del dictado de Teoría General del Derecho en una instancia avanzada de la carrera.

Con esto concluiría respecto a Introducción al Derecho, me quedaría el análisis de otros proyectos como el del graduado Luis Nielsen, el del Colectivo de Abogados La Ciega y el del consejero Brumer.

No quiero dejar de abordar brevemente que hubo una compleja situación de debate con el profesor Dente, que acercó un escrito que está anexo a nuestra carpeta. En síntesis, su propuesta es cambiar el nombre de la materia, en oposición a lo que sostienen los profesores titulares de las cátedras 2 y3, por el de Teoría General del Derecho, que es apoyada por el profesor titular de la cátedra 1.

Como me insistió, les transmito su pensamiento leyéndolo textualmente: *"El nombre actual de la materia no designa nada"*. Según él, pretende aludir a una actitud propedéutica de la misma y sostiene que "*hoy no designa disciplina alguna y no se la puede asociar con esta función propedéutica que ha venido modificándose en la Facultad".*

Propone concretamente la denominación Teoría General del Derecho por dos razones: una, convencional, porque es la que se le da a la materia en diversas facultades, como la de la UBA; y otra, porque podría tener como temática lo que llamaríamos, en términos generales, Filosofía del Derecho, que tiene más vinculación con la función propedéutica.

Respecto a la propuesta de ciclo propedéutico del consejero Grajales, apoya la idea de implementar un ciclo de esa naturaleza, pero cree que deberían estudiarse con mayor detenimiento las materias y sus contenidos, teniendo para ello dos referencias: el llamado CBC implementado en la UBA y los programas del Ciclo de Nivelación dictado por nuestra Facultad en 1994, al menos en lo referente a las asignaturas Nociones de Lógica y de Lenguaje, cuyo programa diseñara la doctora Cecilia Sicard.

Con relación a Introducción a la Sociología, el profesor titular de la cátedra 2, doctor Fucito, formuló consideraciones por escrito, un diagnóstico de situación -como dije antes- de la materia y de los alumnos de la misma a partir de su experiencia. Le parece positivo incorporar un plan propedéutico, pero señala que deben evaluarse costo y tiempo -como también referí-, relacionando la complejidad de los contenidos y lo que él denomina la baja calidad educativa de muchos ingresantes. Reflexiona también acerca del aporte de la profesora en Letras y con eso hace su contribución frente a la imposibilidad que tuvo de celebrara una reunión porque le coincidía con el horario de otra actividad.

No sé si me quieren formular alguna consideración o pregunta. Tengo el sumario de los proyectos, que pongo a disposición para ser incorporados al acta.

Sr. ATELA.- Le agradecemos su informe a la consejera Zendri, que será incorporado -como dije antes- junto con los proyectos al conjunto documental que se ha recolectado por todas las comisiones temáticas.

Sra. ZENDRI.- Les pido disculpas por lo extenso, pero recibimos numerosos proyectos, omití comentar algunos pero, reitero, están a disposición de todos.

Sr. ATELA.- La importancia del tema lo amerita y la idea es que todos podamos saber del trabajo intenso que ha desarrollado cada comisión.

Sr. BRUMER.- Pido la palabra.

En relación a las reuniones con docentes de Derecho Romano y de Introducción a la Sociología, ¿por qué no pudieron reunirse?

Sra. ZENDRI.- Cursamos sucesivas invitaciones, las copias de los correos están a disposición, pero excepto el profesor Fucito que se disculpó porque no podía concurrir e hizo una presentación por escrito, no recibimos propuestas ni asistencia de otros docentes, solo estuvimos nosotros en el horario que habíamos fijado.

En las convocatorias siempre estuvimos presentes el consejero Grajales y yo, aunque ya aclaré que no lo hice en una oportunidad.

Sr. DECANO.- En consideración.

- Se toma conocimiento.

- Ver punto I del Apéndice (p. 58).

5.2) <u>Comisión de Derecho Público.-</u>

Sr. DECANO.- A continuación, escucharemos el informe de la Comisión de Derecho Público, integrada por los consejeros Ángel Eduardo Gatti, Vicente Santos Atela, Mario Barloqui, Damián Brumer y Joaquín Muele Soler.

Tiene la palabra el consejero Atela.

Sr. ATELA.- Para dar comienzo y estructurar el informe de esta Comisión, en virtud de que graduados y auxiliares docentes también han tenido participación en todas las reuniones, entre los consejeros directivos hemos acordado darles la palabra a ellos.

La presentación de la Comisión estará a cargo del graduado Nicolás Meschiani; luego, se abordarán dos de las materias de estudio de esta comisión: Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal; después, el consejero Gatti se referirá a Derecho Social; seguirá el consejero Brumer con relación a las propuestas de su agrupación y finalizaré yo para sintetizar el resto de los aspectos no abordados por ellos.

Sr. DECANO.- Con el asentimiento de los señores consejeros, tiene la palabra el abogado Meschiani.

- Asentimiento.

Sr. MESCHIANI.- Buenas tardes.

Como todos saben, la Resolución N° 198 de este Consejo Directivo dispuso la creación de seis comisiones temáticas con la finalidad de analizar el actual plan de estudios y su posible reforma.

Las materias objeto de análisis de nuestra Comisión fueron Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Constitucional, Derecho Penal I y II, Derecho Administrativo I y II, Derecho Social, Derecho Procesal I y II, Finanzas y Derecho Financiero, Derecho Notarial y Registral, Derecho de Minería y Energía, y Derecho Internacional Público.

La comisión la integramos siete personas: por los docentes, los doctores Gatti y Atela, por los alumnos Damián Brumer y Joaquín Muele Soler, por los no docentes Mario Barloqui, el abogado Gonzalo Fuentes como coordinador y yo en mi condición de graduado.

En cuanto a la metodología de trabajo, nos reunimos en esta Sala cada quince días aproximadamente y citamos a todos los profesores de las materias que anteriormente nombré.

Convocamos a los docentes con una nota enviada por correo electrónico y por fax que tiene el siguiente texto: *"Señor profesor titular de la materia … de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. … Su despacho. De nuestra consideración.*

"En nuestro carácter de miembros de la Comisión de Derecho Público del programa de estudio y análisis para la reforma del plan de estudios, lo invitamos a participar de la reunión a realizarse el día … a las … horas, en la sala del Consejo Directivo, donde se analizarán aspectos de su disciplina.

"Es de nuestro interés que participe del encuentro así como que formule las propuestas o análisis críticos que vinculan a su materia y al plan de estudios de la carrera de Abogacía.

"En tal sentido, y sin ánimo de limitar el debate que usted realice dentro de la cátedra, le sugerimos que analicen cuestiones que como ser: 1) el régimen de las correlatividades, 2) la ubicación de la materia en el plan de estudios, 3) la enseñanza teórica y práctica de la disciplina, 4) la relación de la materia y el perfil profesional. La idea es analizar la materia bajo la perspectiva del plan de estudios y no los contenidos de actualización del programa de la materia.

"Del encuentro podrán participar todos los profesores y auxiliares que integran su cátedra, siendo recomendable que previamente hayan interactuado y debatido dentro del ámbito de la misma. En un segundo encuentro serán invitados para participar los miembros de la otra cátedra de su misma disciplina.

"Asimismo, rogamos que la propuesta que realice tenga la amabilidad de remitirla electrónicamente a la dirección plandeestudios@jursoc.unlp.edu.ar

"Ante cualquier duda o inquietud puede dirigirse a la dirección ut supra indicada o a los miembros de la Comisión.

"Sin más y descontando la plena participación en el trabajo de la Comisión, lo saludamos a usted muy atentamente".

Quiero dejar en claro que las invitaciones fueron realizadas a los titulares de cátedra, con la idea de que ellos se lo transmitiesen a sus adjuntos, jefes de trabajos prácticos y auxiliares docentes.

Las distintas reuniones estuvieron estructuradas en siete encuentros: el 11 de agosto citamos a los titulares de Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Constitucional y al director del Instituto de Derecho Político y

Constitucional; el 25 de agosto concurrieron los docentes de Derecho Penal I y II y del Instituto de Derecho Penal; el 8 de septiembre asistieron los profesores de Derecho Procesal I y II y del Instituto de Derecho Procesal; el 15 de septiembre vinieron los profesores de Derecho Administrativo I y II así como también integrantes del Instituto de Derecho Administrativo; el 6 de octubre hicieron lo propio los docentes de Derecho de Minería y Energía, Derecho Social e integrantes del Instituto de Derecho Social; el 13 de octubre citamos a los profesores de Derecho Notarial y Registral, y de Finanzas y Derecho Financiero, así como a los integrantes del Instituto de esa área; y por último, el 27 de octubre recibimos a profesores de Derecho Internacional Público.

En las reuniones, la modalidad de trabajo consistió en presentarnos y plantearles tres ejes principales sobre los cuales nos interesaba conocer sus posturas: el primero, sobre la ubicación de la materia en el plan de estudios; el segundo, acerca de las correlatividades y, el tercero, respecto a la duración de la misma, si estaban conformes con la situación actual o pensaban que había que extenderla. En base a ese esquema realizamos nuestra actividad durante esta segunda mitad del año.

Sr. ATELA.- Muchas gracias.

Personalmente estoy muy satisfecho por el trabajo realizado en la Comisión porque, en verdad, se hicieron muchísimas citaciones, quizás no fue la convocatoria ideal pero a todas las reuniones siempre concurrieron profesores y aún aquellos que no lo pudieron hacer enviaron propuestas u opiniones por correo electrónico. El índice de sesenta y cuatro proyectos ilustra que los docentes han hecho su aporte.

Vamos a transmitirles las ideas manifestadas por los participantes en las reuniones. Comenzamos con Gonzalo Fuentes que ha coordinado el ritmo de la agenda y citaciones, para que cada quince días nos reuniéramos y ha gestionado para que todos tuviéramos el material disponible en cada encuentro. Como él también es docente de Derecho Público Provincial y Municipal abordará lo que pasó en esa reunión y su relación con las realizadas con los docentes de otras asignaturas e integrantes del Instituto de Derecho Político y Constitucional.

Sr. DECANO.- Con el asentimiento de los señores consejeros, tiene la palabra el abogado Fuentes.

- Asentimiento.

Sr. FUENTES.- Buenas tardes.

Es un gusto haber prestado mi humilde colaboración y estoy muy contento por la invitación para participar en este hecho institucional de trascendencia como es la apertura para la reflexión sobre la reforma del plan de estudios y el acercamiento de propuestas.

Siguiendo lo que recién les comentaba el consejero Atela, en primer término debo referir que respecto a Derecho Público Provincial y Municipal, en mi doble

condición de coordinador de la Comisión y docente de una cátedra, en esa oportunidad, habiendo aguardado un tiempo prudencial y sin perjuicio de las citaciones que se cursaron, nos encontramos solamente el consejero Atela y yo.

No obstante ello, aprovechamos la oportunidad para debatir acerca de la materia, sacar conclusiones y hacer nuestro aporte que quedó reflejado en el acta de esa reunión.

En ese sentido, hicimos un relevamiento de cómo es abordaje de la materia en distintas unidades académicas del país y observamos distintas experiencias: que se encuentra adosada al programa de Derecho Constitucional; que la Facultad de Derecho de la UBA no presenta un desarrollo de la misma, por lo que se puede inferir hacia donde apunta la formación de los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que forma parte del régimen de correlatividades entre Derecho Administrativo I y II en la Universidad de La Matanza; y en el resto de las unidades académicas con asiento en la Provincia de Buenos Aires, en un alto porcentaje, la materia se encuentra con la denominación que tiene aquí.

Hicimos un análisis acerca de la pertinencia de mantener dentro de la currícula una asignatura particular, aparte de lo que es el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. En ese sentido, concluimos en los hilos conductores que tiene la asignatura en cuanto al abordaje del derecho federal, al deslindamiento de las competencias, al estudio particularizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por sobre todas las cosas, que se estudia en profundidad y desde una óptica sociológica y política el funcionamiento del municipio como sujeto político dentro de las relaciones de un estado federal.

Con relación a las correlatividades previas que debe tener Derecho Público Provincial y Municipal resultaría mucho más interesante para el alumno que se acerca a la materia ya sea por el régimen de cursos por promoción o por el de examen libre, contar con conocimientos de Derecho Penal y de Derecho Civil, en cuanto a la diferenciación de la persona, persona jurídica y responsabilidades de los funcionarios, porque le brindaría un abordaje más completo al alumno al momento de estudiar.

Otro tema que consideramos es la particularidad de que alumnos que tan solo cuenten con seis materias pueden cursarla y, a su vez, como contrapunto, los alumnos pueden finalizar la carrera rindiendo esta materia. Entonces, acerca de la ubicación de la misma, si bien entendemos que está bien ubicada en tercer año, propondríamos que tenga un régimen de correlatividades más acorde, que la haga una materia de nivel medio dentro de la carrera.

De la reunión con los profesores de Derecho Administrativo, estuvieron los titulares de las cátedras y el profesor Mamberti, surgió la necesidad de que Derecho Público Provincial y Municipal se convierta en correlativa previa de

Derecho Administrativo I, sobre todo por el aporte que hace con relación al funcionamiento burocrático del Estado, la división de los poderes y demás.

Asimismo, se sugirió por parte de los profesores Soria y Caputo Tártara, de Derecho Procesal, que conocer el marco de división del Poder Judicial, las misiones y funciones que el mismo tiene, también ayudaría para el estudio de Derecho Procesal I o de la teoría general del proceso, que es lo que están proponiendo ellos concretamente.

En referencia a Derecho Constitucional, tuvimos la presencia de los titulares de las cátedras, doctores Mayón y Ziulu, con la adhesión y disculpas del caso del doctor Loñ. Llegamos a una conclusión genérica acerca de lo que ellos consideran sobre la apertura de este proceso para la reforma del plan de estudios y se manifestaron muy predispuestos para hacer los aportes necesarios desde sus asignaturas.

En cuanto al régimen de correlatividades entienden que la materia está bien ubicada en el segundo año de la carrera y como un aporte pedagógico consideran que debería ser previa a Derecho Penal I, por las cuestiones de legalidad y de procesos de internacionalización de los derechos.

Con relación a lo que es estrictamente su asignatura, nos manifestaron que por lo que es el abordaje del Derecho Constitucional hoy, en relación a la incorporación de derechos internacionales, pactos internacionales, el estudio del recurso extraordinario federal, la parte del Derecho Constitucional Transnacional o del Derecho Procesal Constitucional propiamente dicho, se presenta con alguna dificultad el dictado de la materia en un cuatrimestre. No propusieron que se vuelva semestral pero verían con buenos ojos un aumento de la carga horaria actual.

En relación con lo que hemos recolectado de las opiniones de los profesores titulares e integrantes de los distintos claustros que se acercaron a nuestra comisión, un planteo respecto de Derecho Constitucional es la escasa posibilidad que tienen de realizar tareas de reflexión sobre fallos y doctrina emanada de tribunales superiores, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ellos advierten una carencia en nivel de razonamiento por parte de los alumnos, lo cual dificulta el abordaje de la asignatura que, por sus características, se va actualizando permanentemente, sobre todo por la cuestión del control convencional, el control de supremacía federal que ejerce la Corte. Ellos ven que se dificulta la reflexión por parte de los estudiantes.

Y abonando la postura de los docentes de Derecho Constitucional, como dato conclusivo de lo que fue el funcionamiento de la Comisión, efectivamente hemos notado que una de las demandas en las que mayor énfasis se ha hecho, es el tema de incorporar cuestiones prácticas a la enseñanza del Derecho. Es decir, el marco de un abordaje del Derecho desde el conocimiento situado, la enseñanza

basada en problemas, tanto los profesores de Derecho Procesal como los de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Social coincidieron que en esta instancia de readecuación o aggiornamiento del plan de estudios se incorporen cuestiones de práctica esenciales para la comprensión de los temas.

Por último, haciendo un breve balance del funcionamiento de nuestra Comisión, entiendo que esta primera etapa de recolección de inquietudes fue un éxito, más si tenemos en cuenta la convocatoria, la impronta y el compromiso con el que asistieron los docentes y alumnos, los más de sesenta proyectos presentados y las diversas inquietudes que se acercaron, como al inicio de la sesión lo comentaban los señores Decano y Vicedecano.

Y quiero destacar algo que me parece saludable institucionalmente: el hecho de que este proceso se haya encarado con la absoluta posibilidad de una deliberación amplia, pluralista y democrática, fortalece la pauta reformista que todos debemos tener en este tipo de procesos institucionales.

De mi parte, estoy muy agradecido y desde ya cuenten con mi absoluto compromiso y dedicación para lo que venga.

Sr. DECANO.- Tiene la palabra el consejero Gatti.

Sr. GATTI.- Quiero hacer unas breves consideraciones en general para, luego, pasar al tema que me concierne en particular.

Tengo que destacar que la universidad pública tiene un punto de referencia fundamental: la reforma de 1918, cuyos principios están tan vigentes hoy como al momento de su enunciación. Sin embargo, todo impulso reformista, incluso con la adhesión y perseverancia a los principios de aquel movimiento, no constituye un acto que queda consolidado en sí mismo y que permanece definitivamente para los tiempos. La reforma en sí es un verdadero proceso capaz de revitalizarse con su actualización permanente.

Lo mismo sucede respecto a los planes de estudio. Es muy difícil, en el correr de los tiempos, remover hábitos culturales que se arraigan en las comunidades de cualquier tipo, en el orden institucional, y que dan la sensación de estar cristalizados, lo que, de alguna manera, desalienta cualquier deseo de verificar si es necesaria una reforma.

Por eso, tengo que expresar mi reconocimiento sincero -y sin ninguna segunda intención- al señor Decano, por la voluntad de haber emprendido el proceso de reforma del plan de estudios y de hacerlo en circunstancias donde mayoritariamente, al inicio de la propuesta, prevalecía un escepticismo que, como postura y actitud ante este tipo de problemas y cualquier otro de la existencia, merece mi máximo respeto. Pero pienso siempre que la vitalidad se expresa por medio de actitudes de coraje capaces de modificar ciertas situaciones de quietismo social.

Tengo que elogiar también, con la misma sinceridad, el esfuerzo extraordinario realizado por el señor Vicedecano y la señora Secretaria de Asuntos Académicos, tanto en la firme convicción acerca de la posibilidad de reformar el plan de estudios como en la participación activa en todo este proceso que, en un plazo increíblemente breve, ha dado numerosos frutos.

No podría excusarme de mencionar el fervor, el empeño que han puesto los colaboradores en las comisiones, los coordinadores, quienes oficiaron de secretarios y, en última instancia, la labor de todos los colegas que en las diferentes comisiones trabajaron en defensa de cada una de sus propias posturas y aún más allá de lo que entendían se enfrentaba a sus convicciones, para llevar finalmente a cabo este primer ciclo del proceso de reforma.

Como decía al principio, esa reforma constituye un proceso, se vienen otras etapas, pero estoy absolutamente seguro de que ya no hay retrogradación al punto inicial, se puede anunciar hoy que la reforma es una realidad. Y esto es un mérito de todos, aún de aquellos que discreparon, porque ellos fueron los que principalmente avivaron los deseos de los que pensamos que es posible y necesario reformar un plan de estudios que, como se ha visto, sobre todo por la opinión de las instituciones extrauniversitarias, esta siendo reclamado más allá de nuestra propia Facultad.

Y eso es natural, porque el Derecho tiene una expresión absolutamente realista en el marco del funcionamiento de la sociedad y, más precisamente, de una comunidad democrática que pretende serlo, donde sin el Derecho es imposible la paz. Justamente, cuando se quiebran las fórmulas jurídicas que, como decía Segundo Linares Quintana, constituyen una extraordinaria aventura de racionalización de la vida en sociedad, avanza la fuerza y los resultados de esa violencia física, intelectual y moral mi generación los conoce en profundidad, los repudia y desea que no retornen nunca más al seno de la Argentina.

Con relación a Derecho Social tengo que hacer también una advertencia preliminar que es contraria a mi modo de pensar: la reducción de los problemas a un elemento. Acaso por compartir la teoría de Edgard Morin acerca de la complejidad, pienso que no hay una sola causa o dos causas únicamente en la problemática social y, por el contrario, hay una concurrencia de factores que, a veces, se hacen incontrolables, pero que deben ser abordados.

El Derecho Social está en una situación de resignificación por muchos factores y su interpenetración por otras disciplinas como la Antropología, la Psicología y la Sociología ha ido creciendo en los últimos tiempos de un modo exponencial.

Sin el ánimo de minimizar la cuestión al señalamiento de un solo factor, tengo que resaltar que un problema fundamental que hace a la supervivencia, no sólo en este país sino a nivel planetario, es el trabajo humano. En el siglo XXI

quizás el problema central pase por la resignificación del trabajo, como lo están señalando los acontecimientos que estamos viviendo, que revelan que el desempleo es una de las causas de angustia generalizada en el mundo entero.

A eso creo que ha contribuido cierta distracción o pereza intelectual que ha permitido desconocer la necesaria capacidad expansiva que tiene el Derecho Social y que, junto con otros elementos, ha ido construyendo sociedades que han modificado extraordinariamente las condiciones de vida de las personas. Por esto, no es una casualidad que actualmente la problemática del trabajo haya llevado a la consagración de muchos institutos, principios y valores del Derecho Social con la categoría de derecho humano fundamental.

Me alegra sobremanera que no hayan sido solamente las cátedras y el Instituto de Derecho Social los que promovieran esta necesidad de revalorizar la asignatura en el contexto del plan de estudios, sino que desde agrupaciones estudiantiles se ha profundizado seriamente en qué significa el trabajo humano, principalmente el trabajo humano en relación de dependencia, y que desde otros órganos que son expresivos de las necesidades sociales se haya señalado la necesidad de atender al Derecho Social en su verdadera magnitud.

Desde luego que en las reuniones de la Comisión, cuando nos tocó trabajar estas cuestiones, tuvimos propuestas de máxima que pueden haber parecido exageradas pero, sin embargo, no lo son para quienes ejercemos el Derecho del Trabajo que, en definitiva, es el derecho de protección al ciudadano en su calidad de trabajador, es decir, es la protección, la seguridad de los hombres y mujeres que trabajan, y que lo hacen en relación de dependencia que, según los informes de la Organización Internacional del Trabajo, constituyen el 80 por ciento de la población económicamente activa.

De manera que nos estamos preocupando de esa cantidad tan significativa de seres humanos, pero no lo hacemos solamente para conseguir mejores condiciones en sus ingresos, sino que propendemos al reconocimiento del trabajo como derecho fundamental que, además, está directamente vinculado a la dignidad de los hombres y mujeres. Sin trabajo hay miseria y está tan bien señalado, particularmente por los pactos de derechos humanos, que me voy a permitir hacer una referencia a algunas manifestaciones que formulan esos instrumentos internacionales para luego cerrar mi intervención.

Sin lugar a dudas, el más resonante es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por el artículo 6° de este pacto, los Estados parte se comprometen a reconocer el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado; y, además, esos mismos Estados parte se comprometen a lograr la plena eficacia de este derecho al trabajo mediante la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas

y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante -resalto este último término porque volveré sobre él-, y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana, es decir, las libertades fundamentales políticas y económicas de los hombres y mujeres están condicionadas a la promoción social por medio del trabajo.

Desde luego, este mismo pacto garantiza el derecho a tener sindicatos, a que estos funcionen en condiciones de libertad, el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social, la protección de la familia mediante el trabajo, la protección de las madres trabajadoras, una idea tan evocativa de aquellos proyectos legislativos del doctor Alfredo Palacios de principios del siglo XX, apoyados muchas veces por la labor maravillosa de esa mujer extraordinaria que fue Alicia Moreau de Justo, que hablaba de la unidad biológica madre-hijo, por lo que los argentinos podemos señalar una trayectoria de anticipación acerca del valor trabajo.

¿Por qué subrayé lo del desarrollo o promoción económico, social y cultural constante? Porque en esta Casa de Estudios se gestó la defensa del llamado principio de progresividad. El actual titular del Instituto de Derecho Social en aquel entonces era profesor titular de la cátedra en la que tengo el honor de sucederlo, el doctor Ricardo Cornaglia, y nos impulsaba a profundizar en este principio que significa la permanente ascensión y afirmación de las conquistas obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, y la prohibición de retrogradarlas a situaciones anteriores a su reconocimiento.

Fue desde el Instituto y las cátedras de Derecho Social que, en 1994, se impulsó el reconocimiento en la reforma constitucional. Se consiguió en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en el artículo 39 se expresara positivamente la sujeción del Estado provincial al principio de progresividad como a otros que aparecen mencionados en estos pactos.

Par ir cerrando esta breve información, quiero destacar que el trabajo de esos equipos que se propusieron introducir reformas fundamentales en materia de derechos sociales, encontró muchas veces una resistencia tenaz en la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Sólo en la composición actual del más Alto Tribunal de la República se ha ido avanzado en el reconocimiento de derechos sociales que consideramos de carácter fundamental. Por ejemplo, la aplicación de la ley antidiscriminación a los casos de despidos que afectaba a trabajadores que, por alguna condición particular, habían quedado segregados del trabajo, por sentencia de contenido inédito el Alto Tribunal decidió ya no el pago de la indemnización -que es algo anacrónico en materia de defensa de los derechos sociales- sino la reinstalación derivada de la ilicitud del despido.

En su sentido primigenio, la Constitución no permite el acto de desvinculación porque lo considera verdaderamente un acto ilícito. Lo sanciona mal en cuanto a las consecuencias porque prevé la indemnización y ninguna reparación -mal llamada indemnización, porque en rigor de verdad remuneración es una mera tarifa-, puede compensar la pérdida de la ocupación.

Ese es el sentido con el que ha venido expidiéndose la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos que son paradigmáticos. Del mismo modo, hace escasamente un mes, porque los fallos son del 5 de octubre del corriente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bajo la influencia de un voto que honra al Derecho, prestigia a la Justicia y enaltece a esta Facultad, fundado por el doctor Juan Carlos Hitters, modificó una jurisprudencia prácticamente centenaria acerca de la libertad sindical, que es una de las libertades más preciosas que existen, reconociendo el derecho a la protección de la tutela sindical a un activista gremial no afiliado al sindicato con personería gremial.

En los fallos Sandes y Ferulano, el primero con el voto del doctor Hitters y el segundo con el de la doctora Hogan, fundándose en el que había emitido el doctor Hitters, se ordenó la reinstalación de este trabajador que representaba a sus compañeros sin estar afiliado a un sindicato con personería gremial. Esto modifica la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El recurso llegó por la vía de la inaplicabilidad de la doctrina. Pero esto muestra la trascendencia, la evolución y la penetración del Derecho Social en una cultura jurídica que se resistía a un reconocimiento pleno.

Por estos mismos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Pellicori ha reconocido el principio de la carga dinámica de la prueba en materia laboral, donde existe la mayor dificultad probatoria para el trabajador, porque no es él el que completa los registros de la empresa ni está a su alcance conocer la realidad de su empleador.

Es decir, que todos tendremos que cambiar algo si queremos completar nuestro conocimiento. Tengo que destacar cuanto hizo en esto la doctrina de los derechos humanos, lo hago no para elogiar a uno de sus más prestigiosos doctrinarios que está presente en esta Sala, sino porque francamente es un punto valiosísimo que muestra el entrecruzamiento de las distintas disciplinas jurídicas.

Termino agradeciendo la paciencia que tuvieron y el extraordinario esfuerzo que hicieron en el ámbito de la Comisión de Derecho Público, y felicitando el interés que mostraron aquellos que, ajenos a la materia misma, sin embargo entendieron cómo anida en esta especialidad jurídica el principio fundamental de la Justicia.

Sr. DECANO.- Tiene la palabra el consejero Brumer.

Sr. BRUMER.- Básicamente agregaré un par de cuestiones porque la gran mayoría de las cosas relacionadas con el trabajo llevado a cabo en la Comisión de Derecho Público fueron expuestas.

En el marco de las reuniones donde pude participar, ya que en otras lamentablemente no pude hacerlo, la incorporación de la asignatura Derechos Humanos formó parte de los debates no solamente en tanto materia sino, desde mi punto de vista, en tanto temática transversal a todas o la mayoría de las materias de la carrera.

Desde el MIU entendemos que es una de las cuestiones fundamentales y centrales a analizar para poder construir un nuevo plan de estudios que, por supuesto, esté enfocado desde la óptica de los derechos humanos, sin perjuicio de la necesidad de incorporarla como materia autónoma.

En ese marco, otra de las cuestiones que estuvieron en debate en alguna que otra reunión es la necesidad de encarar algunas materias desde una perspectiva de género. Sabemos perfectamente que el Derecho forma parte de un sistema que está enmarcado -valga la redundancia- en parámetros discriminatorios, machistas, patriarcales y, en este sentido, entendemos que es fundamental construir un plan de estudios de la carrera enfocado desde esa perspectiva crítica: la cuestión de género.

Por otro lado, quiero adherir y remarcar la necesidad de profundizar el análisis, la reflexión y el aprendizaje en torno al Derecho Social. Creo que es una de las deudas más que pendientes que tiene nuestra carrera, nuestra Facultad, que, incluso, hace a la crítica fundamental, puntual, concreta de qué profesional tenemos en nuestra carrera, priorizando una serie de materias de Derecho Privado -los civiles y los comerciales- dejando casi a modo de descarte como una sola materia y cuatrimestral a Derecho Social.

Como decía recién, pienso que es necesario profundizar el análisis y agregar nuevas materias de Derecho Social para que los estudiantes podamos tener un conocimiento y aprendizaje más acabado. En relación a esto, el Instituto de Derecho Social hizo un aporte importantísimo, al que adherimos en la mayoría de sus puntos.

Otra cuestión relacionada y a la que se abocó la Comisión de Derecho Público fue la necesidad de entender la carrera de manera interdisciplinaria, es decir, de poder entrelazar las diferentes disciplinas del Derecho e, incluso, las de otras facultades como las de Humanidades, de Psicología y de Trabajo Social, para tener una formación profesional acorde justamente con el perfil que definamos en función de lo que es el ejercicio de nuestra profesión.

También relacionada con la interdisciplinariedad se trató la necesidad de construir junto con otros sectores que estén fuera de la Facultad y de la Universidad. Este tema fue parte de los debates en otras comisiones, incluso con

la idea de tener una carrera mucho más práctica que como está perfilada actualmente. Entonces, el tema es construir con otros sectores de la sociedad donde como futuros abogados y abogadas podamos aplicar los conocimientos y las herramientas que adquirimos en el marco de nuestra carrera, de modo tal que, al menos, nos permitan formarnos de una mejor y más eficiente manera.

En relación con lo que tiene que ver con la Comisión de Derecho Público esos eran los aportes que quería hacer. Obviamente, el resto de las opiniones y propuestas que hicimos desde nuestra agrupación, el MIU, y en conjunto con el Colectivo de Abogados La Ciega, los presentamos en el marco de la propuesta que seguramente han recibido a través de correo electrónico.

Por otro lado, a modo de crítica constructiva, si bien el trabajo realizado es absolutamente enriquecedor también es fundamental profundizarlo y esperamos que, de cara al año que viene, se pueda discutir un proyecto concreto de reforma del plan de estudios y que seamos más los actores de la Facultad, de la Universidad y de afuera de la Universidad que podamos participar activamente de los debates y las conclusiones que se den en torno a ello. Y cuando digo activamente, lo digo en el sentido de que podamos tener más herramientas necesarias para formar parte de esos debates y no solamente entender la participación como una mera asistencia a algo.

Nada más.

Sr. ATELA.- Continuando con el informe de lo acontecido en la Comisión de Derecho Público, voy a tratar de resumirles un poco las posturas que expusieron en cada encuentro los profesores que asistieron.

El abogado Fuentes les habló acerca de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, el consejero Gatti se refirió a Derecho Social y simplemente quisiera reforzarles dos ideas que si bien no hubo una resolución definitiva de eso, era unánime la idea de que no se puede seguir con Derecho Social incluyendo Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y todo lo que es la evolución del pensamiento y las ideas del Derecho Social en cuatro meses. En cuatro meses se hace agua en algo, no estamos formando de manera completa un ideal de abogado en esa área.

Las posturas fueron divergentes en cuanto a si había que se volverla semestral o directamente dividirla en una primera parte, Derecho Individual del Trabajo, y una parte posterior, con Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Pero éramos contestes que hoy por hoy, como está planteada, depende mucho del docente, en el sentido de que o termina dando Derecho Individual del Trabajo pero no da Derecho Previsional, o si da un poco de todo nunca llega con los cuatro meses. Eso es un toque de atención para profundizar la cuestión, sea por la carga horaria o por dividir la disciplina y reconocer las

distintas entidades u objetos que tendrían los espacios curriculares que tienen una matriz en Derecho Social, como ocurre en otras facultades de Derecho de universidades públicas del país.

En cuanto Derecho Penal I y II, en la reunión estuvieron presentes el profesor Domenech como titular de la cátedra 2 de Derecho Penal I y director del Instituto de Derecho Penal, el profesor Ramiro Pérez Duhalde como titular de la cátedra 1 de Derecho Penal I y la profesora Alejandra Moretti como adjunta de la cátedra 1 de Derecho Penal I.

Cuando les preguntamos cómo veían a Derecho Penal ubicado en la currícula, lo primero que manifestaron fue que resulta muy dificultoso enseñarlo y aprenderlo sin tener Derecho Constitucional. Hoy los alumnos están yendo a Derecho Penal I sin tener Derecho Constitucional y si no saben los principios constitucionales que hacen al poder punitivo del Estado, lo que tiene que ver con las garantías individuales de la libertad, no pueden afrontar seriamente una enseñanza del Derecho Penal.

La segunda cuestión clara que surgió de la reunión fue cuando les preguntamos cómo veían la ubicación de Derecho Penal I en segundo año y Derecho Penal II en tercero, y qué pasaba con cuatro y quinto año de la carrera sin que los alumnos viesen algo más vinculado a esta disciplina, más allá de Derecho Procesal Penal. Ellos nos dijeron que eso atentaba a una continuidad o profundización de conocimientos del alumno vinculada a la temática penal o, si se quiere, a temáticas vinculadas como el Derecho Contravencional o especificidades como el Régimen Penal de Menores, pero que era una realidad ver Derecho Penal I y II, Derecho Procesal Penal y después estar dos años de la carrera sin ver algo más relacionado con esta disciplina, no obstante que actualmente la media se cubre con seminarios temáticos de grado pero que son un intento esporádico, nada sistematizado u organizado.

A su vez, se le preguntó al profesor Domenech acerca de la experiencia de la cursada intensiva de Derecho Penal I y II, si existían resultados evaluativos de esta modalidad por la cual el alumno aprueba en un mismo acto las dos materias, y él nos dijo que no tienen un estudio profundizado del impacto y el resultado del mismo. Le transmitimos que teníamos comentarios en dos sentidos, que algunos lo veían favorable y otros no, porque los alumnos advertían que no habían visto teoría general del delito o vinculación a la teoría general del Derecho Penal, que es propio de Derecho Penal I, pero veían los delitos en particular, entonces ¿cómo aprender el delito de homicidio y los elementos del mismo si todavía no saben qué es un delito?

El profesor Domenech nos dijo que eso dependía mucho de la coordinación y la cooperación que se tuviese en ambos profesores que tenían que dar la parte general y la parte especial. Personalmente le dije que, entonces, dependíamos de la

buena armonía y la buena voluntad de ambos docentes y en cierto modo me respondió que sí, lo cual me parece, como opinión personal, que es un riesgo importante porque generamos un déficit relevante. Por esto, entiendo que es un tema prioritario discutir si este proyecto experimental da resultados favorables o no.

Asimismo, les preguntamos con relación a esta posibilidad de establecer nuevos contenidos vinculados al Derecho Penal y que pudiesen ser posteriores a Derecho Penal I y II. El profesor Domenech entendió que sea como materias o seminarios o talleres habría que continuar la cuestión interdisciplinar del Derecho Penal y era proclive a realizar seminarios vinculados con la Antropología, la Criminología, la Medicina Legal, que podrían incorporarse de manera complementaria de la disciplina penal.

Respecto del régimen de correlatividades sostuvieron que necesariamente deben tener como materias previas Derecho Constitucional y Derecho Civil II, por la teoría de la responsabilidad civil, que no se puede requerir menos.

En cuanto a la duración de Derecho Penal I y II consideran adecuado que sean cuatrimestrales.

Sr. MUELE SOLER.- ¿Todos los profesores están de acuerdo en que sean cuatrimestrales?

Sr. ATELA.- Sí, creen que es una carga horaria adecuada para cada una.

Sr. BOUCHOUX.- No este docente, en cuanto a Derecho Penal I.

Sr. DECANO.- ¿Cree que debería tener más duración o menos?

Sr. BOUCHOUX.- Pienso que semestral sería mejor.

Sr. ATELA.- Al encuentro también fueron citados los profesores de Derecho Penal II pero no asistieron. Sin perjuicio de ello, el profesor Marcelo Senna y la auxiliar docente María José Cuenca enviaron un proyecto en el cual abonan brevemente la postura de que necesitan que los alumnos sepan Derecho Constitucional y tengan su final aprobado antes de dar el de Derecho Penal.

En el segundo encuentro, se hicieron presentes los profesores Caputo Tártara, como titular interino de la cátedra 2 de Derecho Procesal I, y Pedro Luis Soria, como titular de la cátedra 1 de Derecho Procesal I. Ellos fueron críticos de la enseñanza del Derecho Procesal tanto teoría como práctica.

El profesor Caputo Tártara planteaba que las primeras bolillas del actual programa de Derecho Procesal I tienen un desarrollo vinculado a la teoría general del Derecho Procesal, que vincula conceptos como la jurisdicción judicial, la competencia, la acción, la titularidad de la acción, las excepciones o las defensas procesales, teoría general del Derecho Procesal que es propia tanto del Derecho Procesal Civil como del Derecho Procesal Penal. Él sostiene que debería propenderse a lo que se utiliza en los planes de estudios de otras facultades, que exista Teoría General del Derecho Procesal independiente al Derecho Procesal

Penal y al Derecho Procesal Civil, convirtiéndose en una suerte de tres disciplinas: Teoría General del Proceso, que se ocupe de los principios generales de esta rama del Derecho, la acción, las excepciones, la jurisdicción, la competencia; y después desembocar en lo que es el procedimiento penal, civil, comercial y laboral. A posteriori, aportó una propuesta escrita de programa de Teoría General del Proceso, en caso de crear esa materia, que se acompaña como anexo documental.

A su vez, los profesores Soria y Caputo Tártara entendieron que los alumnos que concurran a Derecho Procesal deben concurrir además con los exámenes finales aprobados de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, ya que actualmente tienen como exigencia los de Derecho Penal I y II. Lo innovador sería la exigencia de Derecho Público Provincial y Municipal, que hace a los principios de organización del Poder Judicial y demás ya comentado.

Sr. BRUMER.- Disculpen una interrupción.

Tengo que un compromiso y debo retirarme. Buenas tardes.

Sr. DECANO.- Se toma nota.

- Se retira el consejero Brumer.

Sr. ATELA.- Asimismo, los profesores Soria y Caputo Tártara entienden que hay que articular la teoría procesal con la práctica, por lo que propician que se haga más práctica, prácticas reales en el sentido de que los alumnos concurran a tribunales para ver audiencias, debates públicos o juicios orales en los cuales puedan vivenciar y profundizar los conceptos de la teoría con la realidad.

Son partidarios de la actual duración de cuatro meses, pero proponen esa materia inicial que se llamaría Teoría General del Proceso.

Sr. BALSAMELLO.- Pido la palabra.

¿La propuesta de Teoría General del Proceso es para que sea cuatrimestral y la parte especial también cuatrimestral?

Sr. ATELA.- Sí. Igualmente dejan abierta la posibilidad que la duración de Teoría General del Proceso sea menor a cuatro meses, pero que sea previa, una introducción común a ambos procesales.

Los profesores de Derecho Procesal II no concurrieron a la reunión, pero enviaron propuestas por correo electrónico el director del Instituto de Derecho Procesal, profesor emérito Roberto Berizonce, y el titular interino de la cátedra 1 de Derecho Procesal II, profesor Eduardo Fernández, que las anexamos al informe.

En líneas generales, ellos hicieron hincapié en el proceso de enseñanza de la disciplina y su vinculación con la práctica, fundamentalmente con la práctica profesional, siendo este último el punto destacable de sus propuestas.

Con relación a Derecho Administrativo I, asistieron a la reunión los profesores Andreucci, Marafuschi y Mamberti. Ellos son contestes en que se mantenga la diferencia actual entre Derecho Administrativo I y II. Hicieron mucho hincapié en que no se imite a otras unidades académicas de hablar de una

Introducción al Derecho Administrativo o una Teoría General de Derecho Administrativo, porque sostienen que no soluciona los déficit que pudiese tener actualmente en la formación de esa disciplina.

A su vez, el profesor Mamberti relató su experiencia con una cursada que tiene carácter experimental desde hace un tiempo -situación idéntica a la que tiene la profesora Franchini en Derecho Civil III-, que consiste en tener una mayor carga horaria no sólo para abordar la teoría sino, particularmente, una mayor dedicación a la práctica. El profesor Mamberti dice que le enseña a los alumnos a interpretar resoluciones administrativas o cómo confeccionar un acto administrativo o cómo leerlo, cómo se organiza la estructura funcional de la Administración Pública; si bien dijo que acercaría un informe parcial respecto a esa modalidad de cursada que está vigente, adelantó que considera altamente positivo la incorporación de práctica dentro de la teoría, porque el aprendizaje es más intenso y fuerte.

El profesor Marafuschi insiste en que, a su vez, hay que articular la actividad de las cátedras con el Instituto. A su entender, el Instituto de Derecho Administrativo no funciona ni cita a las cátedras y que en la época del doctor Fiorini se citaba a los alumnos y los profesores, se reunían a debatir, analizar casos y sugerir normativas a los organismos públicos, destacando que de esa manera los alumnos se involucran con el conocimiento y aprenden.

En cuanto a la ubicación de Derecho Administrativo I y II consideran que la actual es correcta. Respecto al régimen de correlatividades también fueron contestes al señalar que el aprendizaje sería distinto si se les exigiera a los alumnos tener aprobado Derecho Público Provincial y Municipal. Con relación a la carga horaria, entienden que debe quedar como está.

No asistió ningún docente de Derecho Administrativo II a pesar de que fueron citados.

El director y el secretario del Instituto de Derecho Administrativo, profesores Tomás Hutchinson y Marcelo Lamoglia, respectivamente, remitieron una propuesta que se anexa al informe y es en términos similares a lo que manifestara el profesor Mamberti.

Por Finanzas y Derecho Financiero asistieron al encuentro los profesores Gamaleri y Menucci. Les preguntamos si ellos veían la necesidad de desdoblar Finanzas Públicas del Derecho Tributario y contestaron convencidamente que no están de acuerdo en separar la disciplina. Coinciden en que, por los temas incluidos, debería tener una carga horaria mayor y ser una materia semestral.

El profesor Menucci argumentó que, por su experiencia docente y de cátedra, le da importancia al Derecho Tributario, tan es así que tienen carga horaria extra en su cátedra a la de cursada normal, destinada a talleres de

jurisprudencia y enseñanza práctica de esa rama del Derecho. Esa carga extra es de dos horas por semana.

Asimismo, el profesor Menucci sostuvo que Derecho Tributario es tan importante como una materia de práctica procesal tal como existe para Derecho Civil, Derecho Comercial y Derecho Penal, y que el Derecho Procesal debería diversificarse hacia el Derecho Procesal Tributario.

El profesor Menucci explicó que la enseñanza del Derecho Aduanero no es con demasiada profundidad a la deseada, por cuanto la carga horaria cuatrimestral no lo permite, pero que en su visión debería ser una faceta importante de enseñanza de esta Facultad.

Al respecto, marca la diferencia en la formación de nuestros graduados respecto a otras universidades. A su entender, la enseñanza de Derecho Aduanero aquí es de trascendencia por cuanto la ciudad de La Plata tiene puerto propio, zona franca propia y está a pocos kilómetros del puerto de la ciudad de Buenos Aires, y como no se da Derecho Aduanero dentro del grado en la UBA, es un plus que le podemos dar a nuestros alumnos.

Con relación a la ubicación de la materia, consideraron que es correcta la actual. A su vez, para ellos la duración de cuatro meses no alcanzaría para dar otros contenidos de Derecho Financiero, Derecho Tributario y Derecho Aduanero.

En cuanto a Derecho Notarial y Registral, asistieron a la reunión las profesoras Marcela Tranchini, Sabina Podrez Yaniz y Ana Scipioni. En honor a la brevedad, señalo que están de acuerdo con la ubicación de la materia, el carácter cuatrimestral de la misma y el régimen de correlatividades.

Al preguntárseles si debía desdoblarse el Derecho Notarial de lo que es el Derecho Registral, como dos disciplinas autónomas, consideraron que de ninguna manera, que el Derecho Registral por separado es propio del régimen español, pero que no da resultados, por lo que debe mantenerse el Derecho Notarial y Registral unificado.

A su vez, consultadas si debía dársele a las prácticas notariales algún plus o contenido curricular distinto a la hora de otorgar el título de escribano, contestaron que las condiciones actuales son adecuadas y que no cambiarían la carga horaria ni el contenido de las prácticas.

La profesora Scipioni manifestó que si bien las prácticas notariales para obtener el título de escribano constituyen una cursada denominada anual, lejos están de llegar a la realidad de doce meses o, al menos, de los diez meses y que, quizás, tener una mayor carga que se asemeje a los diez meses no vendría mal, intensificando en la capacitación para quien obtendrá el título de escribano.

En cuanto a Derecho Internacional Público fueron citados los profesores titulares y sólo concurrió el profesor Consani, el profesor Piombo envió una propuesta por correo electrónico. El profesor Salvioli no asistió a esa reunión

porque se encontraba en Ginebra, Suiza, desempeñando sus funciones en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ambos titulares son partidarios de que la materia esté ubicada en un momento más avanzado de la carrera, sostienen que tendría que estar a la misma altura que Derecho Internacional Privado, que no es lo mismo enseñar Derecho Internacional Público en tercer año cuando apenas tienen Derecho Civil III -Contratos- y no tienen una formación jurídica más intensa como sí la tendrían en una instancia similar a la de Derecho Internacional Privado.

El profesor Consani me dijo que tiene alumnos cursando con cinco finales o alumnos que se reciben con Derecho Internacional Público, produciéndose un gran desfase en cuanto al aprendizaje de esa materia por parte de los alumnos. Por eso, reafirmaba la idea de ubicarla en el último año de la carrera como existe en otras facultades de Derecho del país.

A su vez, preguntado sobre la posibilidad de desmembrar Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho de la Integración, él dijo que, sin lugar a dudas, para dar un salto de calidad y reconocimiento en el contexto de las universidades, Derechos Humanos tiene que ser una materia autónoma, que no tiene que ver necesaria o solamente con el Derecho Internacional, porque hoy tiene una realidad distinta, que después vamos a profundizar con el consejero Krikorian al respecto. No estaba muy convencido con relación a la autonomía de Derecho de la Integración, aunque no expresó una negativa rotunda.

Al preguntársele acerca de la cuestión de los idiomas, el profesor Consani dijo que por lo menos hay que enseñar inglés, que el abogado que quiera tener un plus de calidad necesariamente debe saber inglés y, a su vez, no cerraría las puertas que sea de manera optativa para otros idiomas como el portugués, francés e italiano, pero inglés resulta obligatorio.

Asimismo, sostuvo que si queremos ser pioneros como universidad y teniendo el Instituto Confucio en esta Facultad, tendríamos la posibilidad de enseñar chino, porque hay docentes a tal efecto, que sería una buena experiencia y tanto ese Instituto como las autoridades chinas en nuestro país verían con agrado la iniciativa.

En este tema de idiomas, el profesor Consani agregó que desde hace diez años los sábados se dicta japonés en el IRI, hay alumnos interesados y buena matricula para el aprendizaje de ese idioma.

En cuanto al régimen de correlatividades, el profesor Consani consideró que antes de dar Derecho Internacional Público hay que tener Derecho Civil III, al menos Derecho Comercial I y Economía Política, que tienen los contenidos mínimos exigibles para abordar la materia a su cargo.

Hasta aquí tengo para informar con relación a las materias objeto de estudio de la comisión temática de Derecho Público.

Sr. SECRETARIO.- Pido la palabra.

En relación a Derecho Internacional Público, viendo las encuestas que hacemos regularmente, los estudiantes dicen que vieron pocas materias previamente y que les hubiera sido más útil tenerla más adelante. Esto lo quiero agregar como un dato a tener en cuenta.

Sr. MARTÍN.- Al tener alumnos que están por recibirse y otros en tercer año, muchas veces, el profesor se tiene que detener a explicar cosas, lo que no haría si la materia estuviera ubicada más adelante en la carrera.

Sr. MUELE SOLER.- Parece que es una constante pedir que todas las materias estén en cuatro y quinto año.

Sr. DECANO.- En consideración.

- Se toma conocimiento.

- Ver punto II del Apéndice (p. 123).

Sra. SAUER.- Pido la palabra.

Es para comunicar que debo retirarme.

Sr. DECANO.- Se toma nota.

- Se retira la consejera Sauer.

5.3) <u>Comisión de Derecho Privado.-</u>

Sr. DECANO.- A continuación, escucharemos el informe de la Comisión de Derecho Privado, integrada por los consejeros Sergio Delucis, María Florencia Franchini, Edwin Montero Labat y Joaquín Muele Soler.

Tiene la palabra el consejero Delucis.

Sr. DELUCIS.- En cuanto a la labor de la Comisión de Derecho Privado, en primer lugar relataré la tarea desarrollada durante siete reuniones a las que fueron convocados los integrantes de distintas cátedras.

Luego, el consejero Montero Labat se referirá a las propuestas que recibimos, sobre todo de la cátedra de Derecho Civil V -Familia-, donde hay posturas para dividirla en Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones -que pasaría a ser Derecho Civil VI-. También aprovechará la oportunidad para explicar su propuesta referida a la extensión universitaria como metodología de enseñanza del Derecho.

En idéntico sentido, la consejera Frnachini explicará las propuestas de la profesora Noemí Olivera para incorporar Derecho Informático como nueva materia, la que hiciera el profesor Zandrino en 2008 en relación a dividir Derecho Comercial I, y la de su propia autoría sobre implementación de talleres experimentales -debatido en las reuniones de la comisión- y la introducción de una materia denominada Metodología de la Investigación.

Como ustedes saben, las materias que abarcaba esta comisión temática eran Derecho Civil I, II, III, IV y V, Derecho Comercial I y II, Derecho de la Navegación, Derecho Agrario y Derecho Internacional Privado.

Para las distintas reuniones, que fueron siete en total, desde la Comisión se dividió la convocatoria de los profesores titulares y adjuntos, a los efectos de que se acercaran a la misma para decir si entendían necesaria la reforma del plan de estudios y, en ese caso, aportar sus proyectos o ideas o propuestas al respecto.

En la primera reunión contamos con la presencia de los profesores Juan José de Oliveira y Karina Bigliardi, ambos de Derecho Civil V, que presentaron un proyecto con la doctora Barcos referido a la materia, que explicará el consejero Montero Labat.

En la siguiente reunión se presentaron la graduada Guillermina Rafaelli y el alumno Juan Pablo Rincón, que elevaron sus proyectos y fueron analizados. También se abordó algo que se venía perfilando en la Comisión, el régimen de correlatividades para iniciar a los alumnos en el estudio del Derecho Civil. La coincidencia fue que sería necesario que los alumnos contaran con conocimientos de Derecho Constitucional previamente a Derecho Civil I.

Eso fue reforzado en la reunión del 8 de septiembre, cuando se contó con la presencia del director del Instituto de Derecho Civil, profesor Leiva Fernández, y los profesores Martín Labombarda y Luis Valente, de Derecho Civil I. En esa ocasión se intercambiaron distintas opiniones sobre la ubicación de la materia y, en particular, se trató la posibilidad de extender al resto de los Civiles la implementación de los talleres experimentales que se vienen haciendo en la cátedra 2 de Derecho Civil III, cuestión que abordará la consejera Franchini.

A la reunión siguiente se presentaron el profesor Labombarda -nuevamente- y Homero Piccone, así como el alumno Juan Pablo Rincón. El primero de ellos presentó su proyecto de reforma del plan de estudios y las consideraciones con relación al ámbito de su materia. Del mismo modo lo hizo el alumno.

Al encuentro posterior asistió el abogado Pablo Muñoz, que hizo consideraciones en relación con la ubicación de las materias, la posibilidad de dividir Derecho Civil II en Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales, por un lado, y en Teoría General de la Responsabilidad Civil, por el otro. En esa oportunidad, se analizó también el proyecto de creación de la materia Derecho Informático, presentado por la profesora Noemí Olivera, que luego explicará la consejera Franchini.

En la última reunión, celebrada el 9 del corriente, se analizaron distintas propuestas que llegaron por correo electrónico y se coordinó la labor de la comisión.

Los distintos proyectos que se fueron recopilando ya sea en presentaciones directas en la comisión por parte de sus autores o bien por correo electrónico, son los siguientes:

"N° 32: Autor Pablo Labombarda, profesor adjunto de Derecho Civil I, eleva propuesta y reflexiones acerca del régimen de correlatividades de las materias de

Derecho Privado, programas de las materias y cargas horarias con las que son dictadas en la actualidad.

"N° 53: Autor Francisco Vértiz, auxiliar docente de 'Introducción a la Sociología', remite evaluación y análisis de la importancia de los procesos de reforma de un plan de estudios en la carrera de Abogacía, su implicancia en la enseñanza y formación de los nuevos abogados.

"N° 54: Autor Grupo Abogados 'La Cámpora', remite reflexiones y propuestas acerca de la reforma al plan de estudios, accesibilidad a la educación superior y universidades públicas.

"N° 49: Autor Diego De Rosa, jefe de trabajos prácticos de la materia Derecho Civil IV, remite consideraciones y evaluación crítica de la enseñanza del Derecho Privado a partir del análisis de la jurisprudencia.

"N° 12: Autor Noemí Olivera, profesora adjunta de Derecho Comercial I, propone la materia Derecho Informático.

"N° 1: Graduada María Guillermina Rafaelli, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera.

"N° 2: Autor Juan Pablo Rincón, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera.

"N° 60: Autor Florencia Burdeos y profesores de la materia Derecho Civil V, Cátedra 2, eleva reflexiones y análisis crítico de la disciplina Derecho de Familia y Sucesiones.

"N° 19: Autor Graciela Barcos (y otros) Profesora Titular interna de Derecho Civil V, propone la división de la materia en dos áreas: Derecho de Familia y Derecho Sucesorio.

"N° 57: Autor Luis Nielsen, graduado, remite evaluación del proceso de reforma del plan de estudios de la carrera, propuesta de nuevas materias o disciplinas, y propuesta de plan de estudios de la carrera.

"N° 18: Autor Fernando Castro Mitarotonda, profesor de Derecho Civil V, eleva consideraciones y reflexiones acerca de la enseñanza en la Universidad.

"N° 59: Autor Damián Brumer y Colectivo de Abogados Populares 'La Ciega', remite reflexiones acerca de la reforma del plan de estudios, el perfil social del abogado, la formación del abogado de hoy, la enseñanza en universidades popular, y propuesta de nuevos contenidos curriculares.

"N° 51: Autor Edwin Montero Labat, profesor adjunto de Derecho Civil II y ex Secretario de Extensión Universitaria, remite proyecto acerca de la metodología de la enseñanza del derecho a través de la extensión universitaria.

"N° 46: Autor María Florencia Franchini, Directora de Seminarios, remite propuesta de enseñanza de nociones elementales de epistemología y metodología de la investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales.

"N° 62: Autor Jorge Bru y Dante Rusconi, remiten propuesta de la creación de la materia Derecho del Consumidor.

"N° 8: Autor Juan José Zandrino, Profesor Titular de Derecho Comercial I, propone la reformulación de los contenidos estructurales de las actuales materias Derecho Comercial I y II".

Dejo aclarado que la convocatoria a estas siete reuniones se hizo por distintos medios, a veces en forma personal con quienes los miembros de la comisión nos cruzábamos en los pasillos o en Sala de Profesores o con quien por alguna razón tenía mayor contacto, pero además se cursaron invitaciones formales vía mail, indicando día, horario y temario.

- Se retira el consejero Balsamello.

Sr. DELUCIS.- En general, la mayoría de los proyectos proponen revisar el régimen de correlatividades, como la inclusión de Derecho Constitucional como requisito previo al estudio de los civiles, concretamente para Derecho Civil I, que es primero que se aborda.

En particular, el abogado Labombarda, profesor adjunto de Derecho Civil I, entiende además que sería importante dividir Derecho Civil II y crear una materia de Responsabilidad Civil en forma separada de lo que sería el Derecho de las Obligaciones. En cuanto a Derecho Civil III, cree que debería dictarse en forma semestral. Y con relación a Derecho Civil V ya estaba presentado el proyecto la doctora Barcos y adhirió a la división en Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones.

Me gustaría detenerme en el proyecto de creación de la cátedra de Derecho del Consumidor, propuesto por el abogado Jorge Bru argumentando que esto se enmarca en lo normado por el artículo 60 de la ley 24.240, ley nacional de Defensa del Consumidor, y el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde se establece la obligación del Estado de introducir en la currícula oficial de todos los niveles los preceptos contenidos en esta materia.

El abogado Bru comentó que esto ya se hizo en otras universidades de nuestro país con distintas modalidades en cuanto a su implementación curricular. En el proyecto efectúa consideraciones en cuanto a la regulación jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios en el mercado de consumo e indica las razones para la inclusión de la materia en el nuevo plan de estudios. Él entiende que existe autonomía del Derecho del Consumidor, a raíz del marco legal citado -la Constitución Nacional y la ley 24.240-.

A su vez, con el abogado Dante Rusconi, que es coautor de este proyecto, acompañan lo que entienden sería el contenido de la materia en caso de llegar a ser aprobado.

Esto es cuanto informo sobre la labor de la Comisión que, quiero destacar, no hubiese sido posible sin el trabajo conjunto, la colaboración de Edwin Montero

Labat, Bárbara Drake, María Florencia Franchini. En lo personal, me llena de orgullo participar en este proceso.

De más está decirles que todos los proyectos que he mencionado están a disposición en la carpeta de la Comisión, en el mismo orden que se los di. El informe que preparé no lo leí para no aburrirlos, pero sí hicimos un pequeño abstract con lo que consideramos más relevante de cada uno de estos proyectos.

Sr. DECANO.- Tiene la palabra el consejero Montero Labat.

Sr. MONTERO LABAT.- El proyecto sobre Derecho del Consumidor lo recibimos ayer y no íbamos a informarlo hoy sino simplemente mencionarlo. No hemos hecho un análisis de la propuesta porque es muy extensa.

Sr. ATELA.- Es cierto que el proyecto ingresó ayer y enseguida se los envié por correo electrónico. La propuesta contiene no solo una fundamentación del porqué esta disciplina sino también un programa, pero ¿dónde ubicarían esa materia dentro de la currícula y, a su vez, con qué carga horaria la sugieren?

Sra. FRANCHINI.- Ninguna de las dos cosas contestamos.

Sr. MONTERO LABAT.- Concretamente eso no se propone.

Continuando con la línea expuesta por el consejero Delucis, tengo el proyecto número 19, cuyos autores son la doctora Barcos y otros profesores de Derecho Civil V, por el que proponen dividir la materia en dos áreas Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones.

A tal efecto, alegan que el Derecho de Familia es una materia en constante avance, que necesita de otras ciencias para ser analizada, que Derecho de Familia debe darse en extenso en un semestre o en un cuatrimestre intensivo, con los agregados sobre Niñez, Fuero de Familia, Violencia Familiar, Matrimonio -su nueva concepción-, el concubinato, derecho de inventario, entre otros, rematando con la consideración de que es imposible exponerla cuando se comparte el espacio temporal con otra materia. En ese sentido, entienden que al separarse de Derecho de Sucesiones y que debería llamarse Derecho de Familia y de la Niñez.

Consecutivamente manifiestan que Derecho de Sucesiones difiere de la percepción del Derecho de Familia, mereciendo que se le dedique un cuatrimestre entero, para que los alumnos conozcan en profundidad el vasto articulado que esta materia posee y toda la temática del proceso sucesorio.

Por otro lado, tratan el tema de la correlatividad y, al respecto, se manifiestan descontentos con la situación de que con sólo seis materias previas se pueda acceder a rendir Derecho de Familia; no obstante, se encuentran con alumnos que tienen cinco materias y cursan Derecho de Familia.

Sr. ATELA.- Pido la palabra para un breve comentario.

Hace poco la señora Secretaria de Asuntos Académicos tuvo el caso de una alumna que está cursando Derecho Civil V y todavía no tiene aprobada Historia Constitucional.

Sr. DECANO.- ¿Qué materia tiene aprobadas?

Sra. SECRETARIA.- Introducción al Derecho, Derecho Romano y Derecho Civil I.

Sr. ATELA.- Pero cursa Derecho Civil V sin tener aprobada Historia Constitucional porque el actual plan de estudios se lo permite.

Sr. MONTERO LABAT.- En las reuniones que tuvimos, uno de los reclamos de parte de los profesores de Derecho Civil V fue revisar el sistema de correlatividades para que, más allá de la decisión que se adopte respecto a continuar con una sola materia o desdoblarla, no se llegue a la situación de que con cinco materias el alumno esté en condiciones de cursarla o rendirla libre. Al respecto, manifestaron que eso implica que en una misma cursada haya alumnos con seis materias previas y otros de veintisiete -algo similar se relató respecto de Derecho Internacional Público-, provocando dificultades notorias porque el alumno más avanzado en la carrera tiene mayor comprensión.

Expresaron también que la materia Derecho Constitucional debe ser correlativa para cualquier Derecho Civil y se manifestaron a favor de la correlatividad de Derecho Procesal previo a Derecho de Familia. En este sentido, en la reunión explicaron que era muy difícil explicar el juicio de divorcio, el proceso de divorcio, el proceso de alimentos, sin que el alumno hubiera cursado Derecho Procesal.

Pasando a otro proyecto también sobre Derecho Civil V, cuyos autores son los profesores Eduardo Roveda, Florencia Burdeos, Alejandra Manzano y Natalia Fagoto, se propone que la materia se siga dictando en forma semestral, o sea, contrariamente al proyecto anterior, sosteniendo que la misma se compone de Derecho Sucesorio y que dentro del Derecho de Familia, además de tantos temas que abarca y que últimamente ha sufrido reformas de gran entidad, se encuentra el estudio del régimen de bienes del matrimonio, temática que en otras facultades ha dado lugar a una asignatura independiente.

Sra. ZENDRI.- Así se estudia en el Postgrado, es una asignatura independiente.

Sra. SECRETARIA.- Derechos Humanos, régimen patrimonial del matrimonio.

Sr. MONTERO LABAT.- A su turno, resaltan que *"En los últimos años se han agregado diversos contenidos con notable trascendencia para nuestra materia, entre los que podemos mencionar: violencia familiar, en el marco de un nuevo proceso instaurado por la reciente normativa sancionada; responsabilidad de menores, con el consecuente cambio de régimen y del fuero que la abarca; la reforma de la ley 26.618 que, si bien modifica el Código Civil, obliga a enseñar el anterior régimen aún vigente y su implementación según interpretación doctrinaria; y, por último, el derecho procesal de familia"*.

En esa dirección, los docentes remarcan que semestralmente se logra una enseñanza más integrada y profundizada de estas dos ramas que, además, en la

actualidad han determinado la ampliación de las posibilidades laborales en torno a ambas.

Con relación al tema de las correlatividades consideraron que la asignatura Derecho Procesal II debe estar incluida entre las correlativas para Derecho Civil V, por la misma razón que también expuso la otra cátedra.

Por último, se refirieron a la importancia del método de enseñanza expresando que *"desde nuestra experiencia en el trabajo por el método de casos, que siempre hemos utilizado en nuestra cátedra, hemos visto considerables diferencias respecto de la enseñanza por el método convencional predominante en nuestra Casa de Estudios"*, que es algo que está sobrevolando desde que empezamos tratar el tema de la reforma del plan de estudios: el método de enseñanza del Derecho.

Antes de seguir avanzando, en lo que hace al Derecho Civil, eventualmente la propuesta más trascendente que hemos tenido es la escisión de Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones.

Sra. ZENDRI.- Disculpe una interrupción. Creo que la propuesta de dividir Derecho de las Obligaciones y Teoría General de la Responsabilidad Civil también tiene una importancia significativa.

Sr. MONTERO LABAT.- Sí.

Pero, en particular, quería señalar que la propuesta con mayor cantidad de adeptos por una y otra postura, es la de dividir Derecho Civil V, que luego tendremos que evaluar. Revisando los distintos programas de las diferentes unidades académicas cuyo compendio nos envió el señor Vicedecano, vemos que las universidades están divididas, la mitad tiene materias separadas y la otra mitad las tiene unificadas. Por lo cual, es un tema a profundizar y evaluar su conveniencia o no.

Todavía no hicimos las conclusiones, por eso solamente damos ahora un informe, pero las acercaremos próximamente.

Respecto al comentario de la consejera Zendri sobre la propuesta de dividir Derecho Civil II en Teoría General de la Responsabilidad Civil y Derecho de las Obligaciones, recibimos sólo un proyecto del profesor Labombarda, quien participó de una reunión con nosotros y la respectiva acta será agregada a la carpeta de la comisión.

En particular, el profesor Labombarda se refirió a la pertinencia o la conveniencia de la división de la materia y dictarlas en dos cuatrimestres. Es similar a lo que pasa con Derecho Civil V, el fundamento por el cual se expide acerca de la división es por la voluminosidad de conceptos, en este caso relativos al derecho de daños, la responsabilidad civil.

No obstante ello y que hay otras facultades que tienen dividida la materia, uno puede ver que en esta asignatura semestral se tratan temas de

responsabilidad desde el inicio del curso y durante toda su duración, por lo que se caería el fundamento para pedir su división. Repito, es un solo docente que trajo esa propuesta con ese fundamento.

Sr. DELUCIS.- Además, el profesor Labombarda lo funda en que ha tenido reuniones con profesores de Derecho Civil II y que en los cursos preevaluativos se termina enseñando lo que sería parte general de Obligaciones y se deja la parte de Responsabilidad para que el alumno la estudie en forma libre, entonces él considera necesario que esos conceptos se expliquen en un curso.

Eso se puede solucionar también reviendo la forma en que se encara, si se considera necesario continuar con los cursos preevaluativos, sin necesidad de dividir la materia.

Sr. MONTERO LABAT.- Para terminar, en honor a la brevedad y teniendo en cuenta el horario, les comento la propuesta que presenté en forma conjunta con mi hermana, Eugenia Montero Labat, que es Profesora en Ciencias de la Educación, titulada "La extensión universitaria como metodología de enseñanza del Derecho".

El objetivo del trabajo, tal como se los fui presentando a cada uno de ustedes, es que se considere la incorporación de la extensión universitaria como metodología de enseñanza del Derecho. En ese marco se destaca que el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata incorporó a la extensión como pilar de la educación superior y la situó en igualdad junto a la docencia y la investigación.

En el trabajo también hicimos referencia a la metodología de la enseñanza habitual que se implementa en esta Facultad y se plantea a la extensión como metodología de enseñanza del Derecho teniendo en cuenta las experiencias derivadas de mi paso por la Secretaría de Extensión Universitaria entre 2007 y 2010. No obstante lo cual, en la propuesta se analiza la extensión universitaria desde el inicio de la Facultad de Derecho.

Luego de citar viarios artículos del Estatuto que se refieren a la extensión universitaria, nos abocamos directamente a resaltar el tema concreto de los programas y proyectos de extensión que se implementan desde 2007 en la secretaría del área y que han crecido significativamente debido a la participación de los distintos actores de la Facultad.

Muchos programas, que no enumeraré porque los conocemos todos, tratan aspectos importantes del Derecho Privado, en particular del Derecho Civil; por ejemplo, hoy hablamos de las obligaciones, los contratos, derecho del consumidor, derecho de familia, derecho de sucesiones, que de alguna manera toca mencionar la extensión en esta Comisión de Derecho Privado.

De acuerdo con la conformación de la currícula y la experiencia como docentes, pensamos que se puede afirmar que aproximadamente el 95 por ciento de las materias de la carrera de Abogacía son dictados o abordados en forma

teórica, por lo que ponemos énfasis en que se debe aprender haciendo, que se aprenda mediante la experiencia y la práctica, es decir, el "ejecutar".

Concretamente no nos manifestamos acerca de la forma de implementar la extensión como metodología de la enseñanza, porque creemos que no corresponde, sí proponemos su incorporación sosteniendo que la enseñanza del Derecho requiere necesariamente de una propuesta didáctica que incluya los contextos sociales y culturales. Precisamente, las actividades de extensión universitaria permiten al estudiante, durante la trayectoria formativa, construir experiencias en las que se ponen en juego conocimientos teóricos y prácticos.

Y, de alguna manera, en la presentación se hace una crítica a la forma con la que hoy se enseña Derecho. Por esto, se intenta que los futuros abogados y abogadas hagan uso del Derecho, cumplan con sus deberes como profesionales de la Justicia pero teniendo en cuenta el contexto social que nos toca vivir.

En el final del proyecto hay una serie de reflexiones y también algunos interrogantes y puntos que pueden servir como disparadores para pensar si realmente es factible o no que la extensión universitaria sirva como metodología de enseñanza del Derecho, aunque creo que ya está sirviendo y que en la práctica está funcionando de esta manera, lo único que falta es que se incorpore formalmente al plan de estudios.

Sr. DECANO.- Tiene la palabra la consejera Franchini.

Sra. FRANCHINI.- Yo les resumo el proyecto número 12, de la profesora Noemí Olivera, que propone la creación de una nueva materia denominada Derecho Informático. Ella encuentra su fundamento en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que posibilitan nuevas formas de interacción social y generan nuevos problemas que no tendrían la solución más adecuada si se los aborda desde el Derecho actual. Es así que aparecen nuevos daños, nuevos delitos, incluso producto de la vinculación con las redes sociales, con la telefonía fija y celular e Internet. Considera que esto se internacionaliza de tal manera que, además, no puede considerarse exclusivamente una materia del Derecho Público o exclusivamente del Derecho Privado.

Por otra parte, el profesor Zandrino presentó un proyecto en 2008 que ahora figura con el número 8 y fue elevado desde el Instituto de Derecho Comercial. Se propone que la enseñanza del derecho mercantil se desarrolle en tres materias: Derecho Comercial primera parte, con dos ejes principales, el Derecho Comercial y la empresa; Derecho Comercial segunda parte, que abarque el régimen de las obligaciones generadas en los contratos comerciales; y Derecho Comercial tercera parte, que abarque los conflictos originados por insuficiencias patrimoniales, donde entrarían concursos, quiebras y regímenes especiales instrumentados por bancos y aseguradoras.

En cuanto al proyecto que presenté acerca de metodología de la investigación, seguramente será explicado por el consejero Krikorian, pero solamente quiero comentarles que involucra mi aporte puntualmente desde el Derecho Privado, donde he corregido seminarios.

Con relación a los talleres experimentales, surgieron en 2006 a partir de una propuesta del Claustro de Graduados al Consejo Académico y se implementaron en cinco comisiones, una materia por año. Desde aquel entonces hasta ahora, tengo el honor de llevar adelante este taller en la comisión a mi cargo en la cátedra 2 de Derecho Comercial III.

Hasta hoy el taller ha crecido porque hemos crecido junto con él, entonces, ahora el aporte es mayor. Con ese crecimiento, actualmente tiene como objetivos analizar casos jurisprudenciales donde están involucradas situaciones contractuales, confrontar los intereses de las partes a la hora de celebrar un contrato, redactar contratos en general y cláusulas contractuales específicas a partir de situaciones puntuales. El taller concluye con la presentación de una carpeta de trabajos prácticos y una evaluación final que se promedia con los parciales.

Desde que este emprendimiento se lleva a cabo no sólo no ha disminuido la cantidad de alumnos que se anotan, sino que a los alumnos de la cursada se le incorporan los libres que quieren ser evaluados antes de rendir el examen final, con el compromiso de participar en el taller. En este cuatrimestre tenemos veintiséis alumnos libres que cursan el taller, intervienen en los trabajos prácticos y, además, rindieron examen.

A mí me parece interesante el proyecto pero, además, consulté a los alumnos de la cursada actual, a los que ya cursaron comigo y ahora están en cursando Derecho Civil IV y a aquellos de los que conservo sus correos electrónicos. Todos fueron preguntados acerca de si sienten que tuvieron un plus, algo más con respecto a quien no tiene esta experiencia y unánimemente contestaron que sí.

Además los consulté acerca de la carga horaria, porque tienen dos horas semanales más que el resto de sus compañeros, no es actividad domiciliaria, concretamente les pregunté si sería lo mismo si los trabajos prácticos se dieran para hacerlos en sus casas y me contestaron que no.

También les pregunté si sería lo mismo con un vínculo de educación a distancia y me contestaron que no, que las horas presenciales les resultaban positivas para la elaboración de los trabajos prácticos, incluso, hicieron aportes muy interesante para el desarrollo del taller.

No podía dejar de comentarles esto porque es actual, son las respuestas que a la fecha dieron los alumnos.

Nada más.

Sr. DECANO.- En consideración.

- Se toma conocimiento.

- Ver punto III del Apéndice (p. 224).

5.4) Comisión de Diseño del Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho.-

Sr. DECANO.- A continuación, escucharemos el informe de la Comisión de Diseño del Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho, integrada por los consejeros Vicente Santos Atela, Marcelo Krikorian, Cecilia Sauer y Matías Balsamello.

Tiene la palabra el consejero Atela.

Sr. ATELA.- Con el consejero Krikorian vamos a abordar brevemente el informe.

Nos reunimos cada quince días. Primero, a partir del aporte de la señora Secretaria de Asuntos Académicos, tomamos los estándares consensuados por el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Públicas respecto al desarrollo del perfil profesional y, a su vez, qué incumbencias le caben hoy a un abogado y cómo se lo forma en función de ellas.

Como decíamos al principio de la sesión, hoy vemos que además del abogado como profesional liberal independiente y asesor en la defensa de los derechos de las personas en los tribunales, las incumbencias se han diversificado, por lo que advertimos que el abogado puede ejercer tranquilamente la docencia, la investigación, la mediación, la asesoría de una empresa, la magistratura o el ministerio público, ser funcionario público.

Esos perfiles no están definidos en el plan de estudios que tenemos actualmente; si bien cumplimos esas formaciones no están planificadas ni desarrolladas. A su vez, debemos preguntarnos cuántas materias o disciplinas tenemos dentro de la carrera en función de ese perfil profesional al que debe responder un abogado hoy.

Eso nos condujo a que nos aportaran distintas propuestas. Se recibieron proyectos para incorporar dentro de la currícula materias tales como Derechos Humanos, Mediación y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Ética de las profesiones jurídicas, Derecho del Consumidor, Derecho de la Integración.

En virtud de la experiencia que tiene la señora Secretaria de Asuntos Académicos, hemos recibido propuestas para implementar cursos de idiomas orientados a la interpretación y comprensión de textos jurídicos, tanto en inglés como en francés e italiano.

Asimismo, recibimos propuestas de graduados de esta Facultad planteando profundizar el aprendizaje en materia penal incorporando disciplinas que tengan que ver con la Criminología y la Medicina Legal. Algunos también propusieron la enseñanza a través de métodos no tradicionales, diferentes a los que hoy tenemos, fundamentalmente a través de la investigación o la extensión universitaria, como

planteó el consejero Montero Labat. Luego los profundizaremos, no por entenderlos como mecanismos de enseñanza aprendizaje modernos, sino que deben ser tenidos en cuenta por mandato del Estatuto de la Universidad, que establece que la misión de la Universidad, aparte de la enseñanza, es la de investigar y hacer extensión universitaria.

Esta es la presentación preliminar de esta Comisión. El consejero Krikorian abordará algunas de las propuestas recibidas.

Sr. DECANO.- Tiene la palabra el consejero Krikorian.

Sr. KRIKORIAN.- Continuando la línea discursiva del consejero Gatti, de otros consejeros y de los señores Decano y Vicedecano, creo que efectivamente hoy cerramos una etapa muy productiva, creamos un espacio de participación bien abierto, sin exclusiones, que se nutrió con más de sesenta proyectos aportados por personas de todos los claustros de nuestra Facultad.

Hago mías las palabras del consejero Gatti porque, sumadas al clima de trabajo desarrollado en el Consejo Directivo, anticipan que estamos en una situación de no retorno en cuanto a la reforma que se viene, quizás no será la reforma ideal pero, sin lugar a dudas, será la reforma posible, la que quiebre décadas de quietismo y cambie la matriz vetusta que hoy tiene el plan de estudios, para comenzar a transitar por un sendero de modernidad y aggiornamiento en lo que ha sido la evolución del Derecho en las últimas décadas.

Con relación a la tarea que compartimos en la Comisión de Diseño del Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho, en primer lugar, me referiré a dos proyectos presentados por el profesor Sebastián Piana.

Uno es para la creación de tres materias: Metodología de la Investigación Científica, que les brinde a los alumnos herramientas vinculadas con lo que representa un trabajo de investigación científica -el planteamiento del tema, su justificación, la construcción del marco teórico, el análisis crítico y las conclusiones-; Epistemología, orientada al estudio del conocimiento; y, por último, Escritura de documentos científicos. De acuerdo con lo que plantea el profesor Piana en su proyecto, las tres integrarían un núcleo especial dentro de la carrera orientado a aquellos estudiantes que se perfilan con intenciones de realizar tareas de investigación científica en el ejercicio profesional.

En cuanto a la carga horaria de estas materias, él entiende que deberían ser cuatrimestrales y las ubica en el tramo final de la carrera.

La otra propuesta que hizo el profesor Piana es crear una materia de contenido interdisciplinario vinculado a la Ciencia Política, entendiendo que el Derecho Político aporta conceptos que también abordaría la nueva materia pero su propósito sería profundizar y enriquecer esos conceptos, máxime teniendo en cuenta que nuestra Facultad tiene sede en la capital provincial, donde tienen asiento los poderes del Estado provincial, particularmente el Poder Judicial y el

Poder Ejecutivo, por lo que una materia de estas características sería de mucho valor. La ubica después de Derecho Administrativo y con una carga horaria equivalente a la de un seminario de grado.

Luego tenemos reflexiones del abogado José Orler, docente investigador de la Facultad y de la UBA, especialista en Educación Superior. Apunta a integrar la investigación científica con la enseñanza, especialmente en nuestra Facultad. Entiende que la producción de conocimiento no ha sido en los últimos años un eje en el modelo de enseñanza de las facultades de Derecho, particularmente en nuestra unidad académica, y señala que las universidades públicas que reducen su actividad a la enseñanza y no producen genuinamente conocimientos, no pueden llamarse universidades. Por eso, considera que el nuevo plan de estudios debe jerarquizar la tarea de la investigación científica y articularla con la función docente.

Hay una propuesta de la profesora Noemí Mellado para crear tres nuevas materias: Metodología de la Investigación Científica, de similares características a la proyectada por el profesor Piana; Derecho de la Integración; y Derechos Humanos pero, por lo que se observa en el proyecto, se llamaría Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A través del Instituto de Integración Latinoamericana la profesora Mellado se ha distinguido por ser una referente nacional y regional en la materia, y en este caso propone Derecho de la Integración como una materia autónoma, entendiendo que la constitución de los bloques regionales genera un derecho propio y cuestiones jurídicas que ameritan un abordaje por separado de materias como Derecho Internacional Público. Considera que la ubicación de la materia debería ser en cuatro año y que para cursarla habría que tener previamente Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica y Derecho Político.

Por su parte, los profesores Fabián Salvioli y Federico Di Bernardi, director y secretario del Instituto de Derechos Humanos, respectivamente, haciendo referencia a la muy fuerte presencia de las actividades en materia de derechos humanos en la Facultad, tanto en el grado como en el postgrado, el propio Instituto, las competencias locales y interuniversitarias, los seminarios de grado que se incorporan como oferta todos los cuatrimestres y la Maestría en Derechos Humanos como primera carrera en su tipo en el país, proponen crear una asignatura en el tramo inicial de la carrera, luego de cursar las primeras cuatro o cinco materias y de Derecho Político, y antes de Derecho Constitucional, Derecho Civil I y Derecho Penal I.

Si esa materia fuera creada y ubicada ahí, el plan de estudios tendría una impronta novedosa en cuanto a enseñar la teoría general de derechos humanos, conceptos fundamentales en esa materia, perspectiva de género, derechos de los niños y las niñas, derecho de la discapacidad, cuestiones que, en definitiva, le

permitan a los estudiantes hacer un abordaje del Derecho con una fuerte perspectiva en derechos humanos en las materias que luego deban cursar y rendir.

Al mismo tiempo habrá otros conceptos para profundizar en Derecho Internacional Público, básicamente los vinculados con las cuestiones procedimentales en el sistema interamericano o el de Naciones Unidas, cómo hacer valer los derechos humanos, etcétera, pero con la idea de profundizar, complementar y no superponer contenidos.

Nada más.

Sr. SECRETARIO.- Pido la palabra.

Complementando lo informado por el consejero Krikorian, luego de la reunión de la comisión donde analizamos y discutimos el tema con él y el señor Vicedecano, con el profesor Di Bernardi presentamos por escrito una proposición de contenidos mínimos, catorce puntos en total.

El enfoque es absolutamente novedoso en relación a cómo se enseña derechos humanos en todas las facultades de Derecho del país, sería la primera que tendría un abordaje integral desde una teoría y ciencia propia de Derechos Humanos como base para comprender todo el resto del fenómeno jurídico.

Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra.

En nuestro proyecto de reforma al plan de estudios incorporamos Derechos Humanos como materia de primer año, para que sea la de apertura al resto de las ramas del Derecho.

Sr. ATELA.- Como puede aportar para este debate, les sugiero que en la página web de la Universidad vean el programa "Pensando en la Universidad", donde muchas de las conclusiones y cuestiones que estamos analizando nosotros también las han reflexionado en conjunto las facultades en el ámbito de la Universidad. Una de ellas tiene que ver con es importante enseñar Derechos Humanos en todas las unidades académicas y con una perspectiva general.

Lo que propone el profesor Salvioli no es Derechos Humanos en el contexto internacional o respecto de los tratados internacionales, sino desde el Derecho interno. Por esto se lo ubicaría después de Derecho Político y antes de Derecho Constitucional, para que desde el inicio de las codificadas el alumno tenga una perspectiva de Derechos Humanos, para que desde el origen, lo filosófico y lo ideológico puedan comprender todo el Derecho escrito siempre con pensamiento crítico y en perspectiva de derechos humanos.

Continuando con el informe, tuvimos una propuesta del profesor Leonardo Pastorino para crear Derecho Ambiental como asignatura independiente de Derecho Agrario y de Derecho de Minería y Energía. Él considera que la protección del medioambiente hoy es una disciplina autónoma de aquellas dos, con una perspectiva que amerita tener un espacio propio dentro de la carrera de Abogacía.

Particularmente propone que sea cuatrimestral y de carecer obligatorio. En su momento le preguntamos si no era un poco excesivo que Derecho Ambiental, Derecho Agrario y Derecho de Minería y Energía fueran cuatrimestrales, y él contestó que considera importante la materia que propicia, que le lleva más de la mitad de Derecho Agrario abordar la cuestión ambiental pero, quizás, con una carga trimestral podría lograrlo.

A su vez, en su proyecto el profesor Pastorino establece los ejes temáticos mínimos de esta nueva disciplina, argumentando la necesidad de tener una asignatura autónoma desde su experiencia y el haber desarrollado su tesis doctoral sobre la materia.

Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra.

Dentro de nuestra propuesta incorporamos Derecho Ambiental como materia independiente, para centralizar en una el contenido que se ve disperso en varias asignaturas. Acerca de la carga horaria, en nuestro proyecto le asignamos que sea cuatrimestral pero, según se discuta, podría ser tenida en cuenta como trimestral, siempre con carácter obligatorio.

Sra. FRANCHINI.- Pido la palabra.

Pensé que el consejero Krikorian abordaría mí propuesta de Metodología de Investigación…

Sr. KRIKORIAN.- Falta el informe de la Comisión de Ciencias Sociales, ahí es donde la pienso informar.

Sra. FRANCHINI.- Está bien.

Es que las propuestas han tenido un crecimiento, porque las fui repensando. La que informará el consejero Krikorian dentro de unos instantes, se refiere al seminario.

Sr. KRIKORIAN.- Exacto.

Sra. FRANCHINI.- Pero quiero hacer un breve aporte.

Tengo el honor de ser egresada del Colegio Nacional de La Plata, donde tuve metodología de la investigación en primer año, tenía 13 años cuando la cursé. Hoy, conociendo a nuestros alumnos, no sé si tienen la madurez suficiente para abordar metodología de la investigación, por lo que podrían tener una etapa inicial de introducción a la metodología de la investigación y así la Facultad formar investigadores desde sus inicios. Creo que ese puede ser un análisis diferente en cuanto a la investigación en nuestra Facultad.

Si bien mi propuesta es para el final de la carrera, porque es el seminario de grado, en caso de pensar que formamos investigadores desde el inicio, también podría ser una materia inicial. La falencia de hoy es metodología de la investigación.

Sra. ZENDRI.- Así lo planteó inicialmente el profesor Pettoruti.

Sr. ATELA.- Otra propuesta es la de establecer la materia sobre mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos, que fue presentada desde el Instituto de Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos de la Facultad, sobre la base de la experiencia recogida por los profesores Liliana González, Graciela de la Loza, José María Lezcano y Rita Gajate a través de las actividades de postgrado y, desde hace un tiempo, con un seminario dentro del grado.

Refuerzan la argumentación académica y pedagógica en virtud de que la mediación es una técnica de resolución de conflictos instalada en el régimen jurídico de la Argentina, con una trayectoria de más de veinte años en la Justicia federal y que en la Provincia de Buenos Aires, a partir de la ley 13.951 se establece como instancia judicial previa y obligatoria. Ellos consideran que formarse en ese conocimiento y generar el desarrollo de estas habilidades para el ejercicio profesional merece un espacio curricular particular.

Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra.

En el mismo sentido que el caso anterior, nosotros también incorporamos esta materia en el sexto año de la carrera de nuestro proyecto de plan de estudios, porque creemos que el avance de las técnicas de mediación tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal, que son los distritos con los que tenemos más contacto por cercanía, los vemos constantemente y se vuelve imperioso conocerlos para el desempeño profesional.

De todas formas, también tenemos una discusión acerca de cuál sería la carga horaria. Nosotros proponemos que sea cuatrimestral, pero está abierta a la discusión, pero sí está como cierre de la rama de correlatividades generales del plan de estudios, al final de la carrera.

Sra. SECRETARIA.- El nombre de la materia que se propone en ese proyecto es Mediación y Medios Complementarios de Resolución de Conflictos, no alternativos.

Sr. ATELA.- La propuesta del graduado Luis Nielsen es amplia y sugiere que Derecho de la Navegación se transforme en Derecho del Transporte, que abarque el transporte marítimo, fluvial, aéreo y terrestre, apuntando a una especie de Derecho Comercial III, como tienen otras unidades académicas, pero con la denominación Derecho del Transporte.

En cuanto a los idiomas, tenemos un informe de Silvina Sartelli acerca de la experiencia recogida en la prueba piloto de la Secretaría de Asuntos Académicos con los cursos de lecto comprensión de textos en inglés, francés e italiano. Se recomienda que para fortalecer los lazos de intercambio y la posibilidad de políticas migratorias tanto para estudiantes como para docentes e investigadores, es necesario reforzar un segundo idioma al castellano.

A su vez, se manifiesta que hay un alto número de graduados y alumnos interesados en estos cursos, sobre todo que le han permitido a muchos alumnos, a

través de los convenios de intercambio que tiene la Universidad, acceder a becas y pasantías en universidades extranjeras.

Se considera que no debe entenderse como un módulo final de la carrera o un complemento, sino que debe haber un tránsito desde el inicio hasta los niveles superiores de la carrera, de modo que permita que el estudiante se acostumbre y se forme en un segundo idioma, no sólo para que pueda leer textos en otra lengua sino que le facilite la cuestión del intercambio recién comentada.

Sr. KRIKORIAN.- Cuando le preguntamos a Silvina Sartelli sobre la carga horaria, nos contestó que serían razonables 48 horas, que equivalen a un bimestre académico.

Más allá de si efectivamente se incluye o no en la currícula alguna asignatura vinculada a idioma extranjero, quiero destacar la calidad de las docentes que han dictado los cursos en la Facultad: Nelba Lema en inglés, Silvia Naciff en francés y Graciela Caparra en italiano.

Sr. ATELA.- Tanto las agrupaciones Construyendo Derecho, MIU y Franja Morada como el graduado Nielsen presentaron proyectos integrales y proponen nuevas materias y disciplinas, algunas de carácter opcional y otras optativas. Por ejemplo, en las que hay prácticamente coincidencia respecto del carácter obligatorio como nuevos espacios curriculares son Derechos Humanos, Mediación y Metodología de la Investigación; mientras que las materias opcionales se encuentran propuestas Derecho del Consumidor, Derecho de la Comunicación, Derecho Educativo y lo que tenga que ver con la exploración de disciplinas vinculadas a la realidad latinoamericana como, por ejemplo, Derecho Político Latinoamericano, Historia Latinoamericana, etcétera.

Por último, en el proyecto sobre Derecho Informático, la profesora Noemí Olivera sostuvo que si bien el conocimiento pasa también por el Derecho Civil, Derecho Penal y el Derecho Comercial, hoy las relaciones profesionales pasan por la Informática, desde que el abogado ejerce a través de una computadora: lo notifican electrónicamente, hace un contrato por el mismo medio, acepta y perfecciona la voluntad contractual a través de un sistema informático. Por esto, dice que hay que generar ese espacio de conocimiento. Es consciente de que no debe tener una carga horaria de cuatro meses, sostiene que empezar a explorar esos conocimientos con una carga de 30 o 32 horas sería prudente y se daría por satisfecha.

Nada más.

Sr. DECANO.- En consideración.

- Se toma conocimiento.

- Ver punto IV del Apéndice (p. 231).

5.5) <u>Próximos informes de comisiones temáticas.-</u>

Sr. DECANO.- Antes de continuar, como quedan dos comisiones para informar, quisiera saber si los señores consejeros desean hacer un cuarto intermedio.

Sr. MONTERO LABAT.- Pido la palabra.

Con todo respeto a los consejeros de las comisiones que restan informar, mi moción sería que lo hagan en la próxima sesión del Consejo Directivo. Entiendo que merecen toda la consideración por el esfuerzo que han realizado, pero llevamos mucho tiempo sesionando, no estamos con la capacidad de atención a pleno y, además, algunos consejeros se han retirado.

Mociono, entonces, que se postergue el informe de las dos comisiones restantes y se incluya en el orden del día de la próxima sesión.

Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra.

En nombre de la bancada estudiantil por la Franja Morada, es para acompañar la moción del consejero Montero Labat.

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar la moción del consejero Montero Labat.

- Se aprueba por unanimidad.

Sr. DECANO.- Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

- Es la hora 21 y 30.

Carlos A. Sorbelli
Taquígrafo
A.A.T.P. Nº 133

----------*Aprobada sin modificaciones en la sesión ordinaria del 1º de marzo de 2012 (Acta Nº 388).* ***<u>CONSTE</u>****.* ----------

Carlos A. Sorbelli
Taquígrafo
A.A.T.P. Nº 133

APÉNDICE

I. INFORME DE LA COMISIÓN DE MATERIAS INCIALES O PROPEDÉUTICAS

Consejera Informante Liliana Zendri [1]

Conforme Resolución Nº 198 del HCD, que en su art. 2º COMISIONES TEMATICAS establece; *"El Consejo Directivo en su integridad se constituirá en comisión de estudio, debate, análisis y recepción de propuestas, a cuyo efecto se constituirá en seis (6) comisiones temáticas, las que resultan. 2.1.* ***Comisión de Materias iniciales o propedéuticas****: en esta comisión se analizarán los espacios iniciales de formación de la carrera de Abogacía, la revisión de los contenidos generales básicos y la metodología de enseñanza en la educación al Derecho, Historia Constitucional; Derecho Romano, Derecho Político e Introducción a la Sociología. Asimismo se integrará con los responsables del Curso de Adaptación Universitaria y el Curso de Contención y Permanencia…"*; Y, atento la existencia de un modelo de informe, sugerido a fin de guardar identidad entre los distintos consejeros, **se acompaña el presente, dejando aclarado –de inicio- que además de ajustarse éste al patrón insinuado, este Consejero informante realizó relevamiento de las propuestas acercadas a la comisión tratando de efectuar el análisis objetivo de las mismas, motivo por el cual en esta instancia, NO SE APORTA VALORACION NI OPINION SOBRE LAS PROPUESTAS ACERCADAS SOBRE REFORMAS AL PLAN DE ESTUDIOS NI SOBRE LOS APORTES EFECTUADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA, sino que se SOLO se acerca informe circunstanciado de las propuestas recibidas en la Comisión, siguiendo la metodología del informe sugerido para esta instancia**, la que enumeran los siguientes ítems (en cursiva):

a) Denominación de la comisión y materias incluidas según resolución Consejo Directivo.

Denominación: "Comisión de Materias iniciales o propedéuticas".

Materias incluidas: Introducción al Derecho
Historia Constitucional
Derecho Romano
Derecho Político
Introducción a la Sociología

Incumbencia de la Comisión: analizar:

a.1. Los espacios iniciales de la formación de la carrera de abogacía

a.2. La necesidad de revisión de contenidos generales básicos

3.3. La metodología de la enseñanza en la educación en el primer tramo de la formación del profesional en Ciencias Jurídicas y Sociales contemplando nuevos contenidos disciplinares e interdisciplinares.

b) Miembros de la Comisión: consejeros directivos, coordinadores de comisión, graduados, estudiantes, no docentes, que participaron de todos o alguno de los encuentros

Miembros de la Comisión: Abog. Juan Carlos MARTIN, Mg. Liliana ZENDRI, Dr. Amos GRAJALES, Sr. Gerardo CAMPIDOGLIO. Auxiliares propuestos por el decanato para cooperar en coordinación: abogados Marucci y Paris.

Días de reunión: Martes 16.30 hs.

Cronograma preestablecido: Se planificaron reuniones quincenales, puntuales, no obstante lo cual, esto debió ser modificado sucesivamente por razones ajenas a la Comisión convocante pues ello obedeció a la mejor disponibilidad horaria de los integrantes de las materias invitadas a participar.

Participantes y descripción de encuentros realizados. Este informe lista el material (actas, proyectos y reuniones celebradas) en el orden en que se fue produciendo, en tal sentido enumera fecha, asistentes, aportes y/o consideraciones conforme se realizaron. Respecto los temas abordados, se trata de respetar el orden de los mismos a partir del Acta de reunión confeccionada por este Consejero informante y la documentación agregada por los participantes a las mismas, como asimismo de todo proyecto y/o consideraciones cuyo contenido sea de la incumbencia de esta Comisión informante.

La metodología que sigue el presente informe. Atiende en primara instancia las reuniones y proyectos debatidos en ella y en un segundo momento el resto de proyectos que se fueron incorporando. Si a la fecha de celebrarse la reunión obraban documentos (proyectos y/o propuestas y/o aportes) incorporados que sirvieran de disparador y/o sobre los cuales se haya debatido en su transcurso o se formulara alguna crítica a los mismos, se agrega una síntesis del/los contenidos abordados como también se relatan tópicos esenciales y el tratamiento realizado en el curso de la entrevista con y por los asistentes a la misma, durante la cual, los consejeros tratamos de mantener un rol de escucha.

También se aclara que todas las convocatorias a las distintas cátedras de las materias de primer año se cursaron a las direcciones de correos electrónicos de sus integrantes (titulares y adjuntos), conforme asientos obrantes en la facultad, suministrados a la Comisión, respecto lo cual, se acompaña constancia respectiva.

Auto convocados los integrantes de la comisión temática en todas las fechas programadas de inicio (martes por medio de 16.30 hs a 18hs), no obstante ello, en dos oportunidades -por no contar con la presencia de profesores de las materias comprendidas en la comisión temática- se debió reprogramar, aunque en términos generales es oportuno señalar el compromiso puesto de manifiesto por la generalidad de los titulares e integrantes de las cátedras invitadas como asimismo por graduados y estudiantes que participaron durante los encuentros.

Igualmente, corresponde destacar que se trabajó con numeroso material ya que se presentaron variados proyectos, sean ellos los realizados por distintas agrupaciones, como por docentes, graduados, investigadores y estudiantes, lo **que hace oportuno un reconocimiento previo a todos ellos por la demostración de interés y el intercambio de ideas.**

Finalmente, el presente lista y acompaña el material incorporado a esta Comisión y un breve sumario de los proyectos.

c) Descripción de las reuniones realizadas, indicando fecha, asistentes, profesores y/o cátedras citadas

1ra. Reunión: Asignatura Introducción al Derecho: Celebrada el día 9 de agosto.

[1] El profesor Amos Grajales debió ausentarse en el día de la fecha por razones académicas, por lo cual este Consejero asumió el rol de informar sobre la actividad desarrollada por ambos en el seno de la comisión que integramos.

Asistieron a la convocatoria los Consejeros V. Atela, A. Grajales, M. Kricorian y quien informa (L. Zendri), los titulares de las tres (3) cátedras de la asignatura: Dr. Carlos Pettoruti; abogados Sabina Podrez Yaniz y Guillermo G. Peñalva, conjuntamente con adjuntos e integrantes de las mismas, a saber, M. Bornia, M.L. Deluchi, J. Dente y S. Mantz. Se incorporó a la misma del Consejero Kricorian, ya iniciada la reunión.
Descripción: En la sala de consejo directivo, ámbito señalado al efecto, tuvo lugar el día 9 de agosto del corriente a las 16.30 hs., la primera reunión organizada entre integrantes de esta comisión y profesores de la asignatura "Introducción al Derecho", en el marco de los encuentros pautados con todas las cátedras de las asignaturas comprendidas y previamente notificados mediante correo electrónico enviado por el Consejero Grajales.
Conforme acta confeccionada por este consejero en la oportunidad, al tiempo de celebración estaban ya ingresados el Proyecto de reforma del Consejero Grajales (adjunto ordinario de Cátedra 3 de la asignatura citada) denominado "Implementación del ciclo propedéutico inicial a la carrera de abogacía" y también la propuesta de creación de materias de contenido interdisciplinar, vinculadas a la epistemología, metodología de la investigación y escritura de documentos científicos de autoría del Prof. Sebastián Piana (Secretario de Investigación), por lo cual de inicio y luego de que los asistentes aludieran expresamente a la conveniencia de esta instancia de debate, abordaron la consideración y crítica a la propuesta de Grajales, para luego tratar/debatir diferentes cuestiones referidas a la asignatura, que giraron en torno a las siguientes consideraciones:
La titular S. Podrez Yaniz refirió a la necesidad de adoptar una posición "constructiva" respecto la reforma del Plan de Estudios, propuso un enfoque amplio e integrador, evitar compartimentos estancos y en cambio, interrelacionar los contenidos de todas las materias del primer año; coincidió en la implementación de un ciclo introductorio pero que ponga acento en aspectos metodológicos necesarios, que el mismo debería abordar.
Como titular de la asignatura, sostuvo enfáticamente la necesidad de mantener el nombre y contenidos de la misma abogando por una mayor correlación con Filosofía del Derecho atento la continuidad de contenidos de esta última respecto la primera. Se opuso a la incorporación del nombre "Teoría General del Derecho" y en propuesta escrita fundó su decisión (proyecto nº 25), intercambiando asimismo sobre la propuesta presentada por el titular de la Cátedra II, el Prof. Pettoruti.
El titular de Cátedra I, G. Peñalva coincidió con la necesidad de un ciclo propedéutico aunque manifestó dudas acerca de los contenidos en orden a la dificultad del mismo, haciendo hincapié en la ausencia de comprensión y el desconocimiento de técnicas de estudio por parte de muchos alumnos ingresantes, lo que merita –a su entender- ir desde lo más básico para poder desarrollar luego estructuras más complejas; apoya la incorporación de la asignatura "Teoría General del Derecho" en un momento posterior a Introducción al Derecho y menciona lo imprescindible de incorporar (establecer) una materia metodológica al bloque de asignaturas del primer año.
El profesor J. Dente propuso cambio de nombre a la asignatura "Introducción al Derecho" por "Teoría General del Derecho" lo que generó opiniones encontradas entre y con el resto de asistentes, que luego de celebrada la reunión, lo llevaría a intercambiar correspondencia con algunos de los integrantes de las cátedras sobre el particular y a la presentación de propuesta escrita.
Coincidió con el establecimiento de un ciclo propedéutico pero consideró que debía estudiarse con mayor detenimiento las materias a incorporar en él y los contenidos de las mismas.
Respecto al cambio de nombre, aclaró –en instancia posterior a la reunión- sobre la conveniencia de deslindar los tiempos para discutir el plan de estudios, de los tiempos relativos a temas que dijo: "podrían denominarse internos" entendiendo que en tal sentido, se está en las preliminares de una discusión de fondo cual sería no solo el nombre sino también el programa de estudio de la materia.
Posterior a la reunión, este docente acercó propuesta escrita que anexada, alude en síntesis al cambio del nombre de la materia y en breve alusión al ciclo denominado "propedéutico" cuya idea apoya aunque señala reparo relativo al estudio -con mayor detenimiento- de sus materias y contenidos aludiendo a la necesidad de atender el modelo del año 1994 especialmente al programa diseñado en lo referente a "nociones de lógica y de lenguaje".
La profesora L. Deluchi propuso en la reunión, la incorporación al primer cuatrimestre, del primer año, de una asignatura sobre metodología, lenguaje y lógica argumentando en tal sentido. También se manifestó - en momento posterior a la reunión- sobre la conveniencia de discutir el cambio de nombre de la asignatura reiterando algo dicho en el transcurso de la misma atinente a que "de ninguna manera el nombre Teoría General del Derecho implica una toma de posición iuspositivista ni significa sacrificar contenidos iusnaturalistas del programa".
El titular de Cátedra II, Dr. C. Pettoruti refirió de inicio a la importancia del debate y ocasión sobre la reforma del Plan de Estudios, aunque recurriendo a la metafórica comparación de la reforma con "un tren de muchos vagones", señalando la importancia del enfoque metodológico de la misma y coincidiendo con Podrez Yaniz en mantener el nombre de la asignatura de que ambos son titulares.
Su propuesta y consideraciones llevan por título: "Propedéutica al estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales" en la cual fundamenta la posición exhibida en la reunión respecto ubicación de la asignatura en la carrera, al decir: "las materias iniciales…están y deben continuar estando en el primer año de estudios y no en una suerte de "ante año". Sostiene que "las materias iniciales a las carreras de Procuración, Abogacía y Escribanía están y deben continuar estando en el primer año de estudios y no en una suerte de "ante año" porque no son "previas" sino que inician directamente al alumno en el complejo estudio de las ciencias jurídicas y sociales". Señala expresamente que Introducción al Derecho se ubica en tal ámbito, citando a la Prof. emérita M. Teresa López al decir que la materia es una "Introducción a la Ciencia del Derecho y a la Filosofía del Derecho", y así, vincula con todas las demás materias de primer año en una serie de temas transversales relativos al derecho, a la sociedad, a la política, a la economía y a la historia que confirman la perspectiva "jurídica" y "social" de la carrera. Considera que no se puede prescindir de los contenidos fundamentales de las actuales materias, sino que "hay que vincularlos la problemática social en general, existiendo numerosos puntos de contacto entre el derecho, la antropología y la psicología que no deberían ser dejados de lado en un mundo que sostiene y se enriquece espiritualmente con la diversidad cultural".
Su propuesta centra en que cada materia de primer año, sin modificar su carga horaria, tenga como complemento un taller de temas de actualidad propiciando la inclusión entre las materias de primer año, que suministre herramientas para el estudio, comprensión, análisis y crítica en temas fundamentales de las demás asignaturas, la que consideró podría denominarse "Metodología para el estudio y la investigación en las ciencias jurídicas" planteando que su aprobación se cumpla juntamente con las demás asignaturas de primer año y finalice integrando el trabajo de investigación sobre un tema transversal a todas las materias del mismo.

2ra. Reunión: Asignatura Historia Constitucional, celebrada el día 23 de agosto.
Asistieron a la convocatoria los Consejeros A. Grajales y G. Campidoglio con los profesores Marucci y Torres Molina. Este Consejero estuvo ausente en la reunión por lo que no se agrega Acta de la misma. Se sugiere ver informe del Consejero Grajales, que en la parte pertinente dice:

"El profesor Torres Molina plantea mantener el nombre de la materia y dentro de la currícula de primer año. Historia constitucional conlleva ciertas dificultades para los alumnos demostrados con la gran cantidad de aplazos. Sostiene que el viejo programa era de historia argentina y en el último siglo la materia se duplicó. Es difícil para dictarla cuatrimestralmente. El contenido es ajustado actualmente (programa de cátedra II). Coincide con la implementación de un CPI con materias previas de ingreso. Propone colocar derecho político con carácter previo a historia constitucional. El contenido de derecho político (teoría política, doctrinas contractualistas, división de poderes, constitucionalismo, teorías de partidos políticos, leyes electorales) son elementos necesario para dar historia constitucional. Propone coordinar los contenidos de 4 materias: derecho político, historia, derecho constitucional y público y municipal. A su vez propone incorporar incluir el estudio de casos en todas la materias de forma coordinada v dejar el modelo decimonónico y focalizar sobre el siglo xx".

3ra. Reunión: Asignatura Derecho Político, celebrada en la sala de sesiones del consejo directivo el 20 de septiembre a partir de las 16.30 hs.
Asistieron a la convocatoria los Consejeros Grajales y Zendri; el titular de la cátedra 1 Prof. J. Carlos Corbeta, adjuntos e integrantes de la misma asignatura: abog. López Calendino, Cabrera y Medici. Presente también el Consejero V. Atela y la Sra. Secretaria Académica que se incorporó durante el curso de la reunión.
Se abordó inicialmente el problema de la correlatividad con Historia Constitucional ya que todos los integrantes de la signatura coincidieron en la inconveniencia de que esta materia se ubique antes de la citada porque deviene en ausencia de marco conceptual imprescindible (tempo espacial) para el correcto abordaje de derecho Político.
El Profesor Medici planteó preliminarmente que la materia debería ubicarse en una instancia posterior a la que hoy ocupa (a la altura de cuarto año en ubicación similar a Filosofía del Derecho y Sociología del Derecho) a fin de que el alumno cuente con mayor madurez y formación que permita aprovechar los contenidos de la misma, por lo que además, señala la conveniencia de ubicarla como correlativa de Historia Constitucional, Introducción al Derecho, Derecho Constitucional y Economía Política, conforme detalla la propuesta por escrito que acompañó y desarrolla sobre dos ejes, el primero atinente a la función y ubicación en la carrera, y el segundo relativo al primer año de la misma y a la necesidad de incorporar una nueva asignatura (que entiende podría hacerse en el ciclo propedéutico) que obre de etapa introductoria a la historia de las ideas políticas y jurídicas dando ubicación tempo espacial y de conocimiento preliminar acerca de las principales corrientes del pensamiento "de la política y el derecho en sus contextos históricos" la que "tendría como eje temático el estudio de la historia de las ideas políticas y jurídicas universales y de América Latina".
Respecto la denominación de la materia, se señaló la conveniencia de mantenerla.

Asignaturas incluidas en temática de esta Comisión de "materias iniciales o propedéuticas": Derecho Romano e Introducción a la Sociología. Estas materias no efectuaron propuestas en reunión convocada.
Con respecto a la última asignatura mencionada, "Introducción a la Sociología", es propicio señalar que la titular de Cátedra 3 Profesora Dra. Olga Salanueva, cursó reciente invitación a Consejeros integrantes de esta Comisión y autoridades de la facultad, para asistir a una clase especial dirigida a alumnos y referida a la posible reforma del Plan de Estudios, para el día 29 de noviembre en el horario de 10 a 12 hs a la que este informante no pudo concurrir.

Respecto la invitación cursada a titulares y adjuntos de la misma, para el día 11 de octubre del corriente, el titular de Cátedra 2 profesor Felipe Fucito envió a vuelta de correo electrónico (contra invitación de esta Comisión) sus reflexiones, que obran agregadas y en resumen refieren a su diagnóstico de la actualidad de la asignatura y los alumnos cursantes a la misma. En la presentación aludida, el profesor Fucito formula comentario positivo respecto la propuesta de un plan propedéutico pero señala que "debe evaluarse –si se hace correctamente- su costo y su tiempo", haciendo notar que "esos contenidos son complejos para la baja calificación educativa de muchos de los aspirantes". También alude a la nota (propuesta) enviada por la profesora "de letras", mencionando expresamente que considera necesario incorporar un curso introductorio de redacción

Finalizado el presente relato sobre las reuniones celebradas y sus circunstancias (material correspondiente a las mismas), se sigue con los demás ítems del modelo de informe sugerido, así:

Se agregan como Anexo los Proyectos y aportes, dos (2) actas de reunión y copia de la invitación cursada por la titular de la asignatura Introducción a la Sociología.
Respecto los proyectos ingresados a la Comisión, se listan los enumerados a continuación (ingresados hasta la fecha) seguidos del Sumario a los mismos, hecho por el informante.

Finalmente, se considera adecuado reiterar que entre los proyectos, propuestas y/o consideraciones recibidos, existen algunas que por su amplitud, o bien por contener diferentes modificaciones al plan de estudios, con diversa repercusión en variados aspectos, debieron ser analizadas en más de una Comisión Temática lo que hace adecuada su inclusión entre las listadas en el presente informe.

LISTADO DE PROPUESTAS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN ESTA COMISION

PROYECTO N° 2: Autor: Juan Pablo RINCÓN, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera
SE TRASCRIBE PROYECTO (a efectos de diferenciar los textos trascriptos del texto mismo del presente informe, se respeta letra y formato del autor/autores, pero se agrega su texto en letra color azur)
Reforma del Plan de Estudios- Año 2011
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata
Propongo las siguientes cuestiones sobre el tema ante el Honorable Consejo Directivo:

- Que las adaptaciones de procedimientos profesionales se desarrollen en el final de la carrera bajo la modalidad obligatoria, es decir, que una vez finalizadas la totalidad de las materias teóricas más, se proceda a la cursada obligatoria de las practicas, sobre todo las civiles y comerciales (que debieran de incluir no solo la presentación de escritos, sino la visita constante a los tribunales, juegos de roles rotativos, pasantías en la legislatura y tribunales de instancia inferior, nociones sobre litigiosidad y

medios alternativos de resolución de conflictos). Además de ello, no debieran circunscribirse solo a la parte penal, civil y comercial, sino ampliarse a otras ramas del derecho que tienen autonomía procesal y necesitan que el potencial abogado conozca en profundidad, como el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral.

- En cuanto al régimen de correlatividades puedo decir que hoy en día, y según lo visto hasta la actualidad en mi transcurso en la carrera, ciertas correlatividades no se corresponden con contenidos estructurales que deben de conocerse para continuar el camino de la curricula. Por ello me parece atinente realizar cambios como: A)que para cursar Derecho de las Obligaciones y Comercial Parte General, se tengan conceptos de Economía Política y que esta, a su vez, también sea nutrida por Introducción al Derecho e Historia Constitucional además de la Introducción a la Sociología. B) Que para cursar Procesal Civil y Comercial se exijan por lo menos conocimiento de Derecho de las Obligaciones o de los Contratos- hoy en día un alumno que solamente ha aprobado Civil Parte General estaría habilitado para cursarla y /o aprobarla- además de Derecho Comercial Parte General. C) Que para cursar Derecho Internacional Público (que debiera dividirse en Parte General y Derechos Humanos y Conflictos Internacionales) sea necesario no solo tener conocimiento de Derecho Constitucional sino del Procedimiento Penal y Civil y Comercial. D) Que para cursar Derecho Social se necesiten conocimientos del Derecho Procesal Penal y de Economía Política. E) Que para cursar Derecho Procesal Penal se exijan conocimientos de Derecho de las Obligaciones.
- Creo que sería interesante incorporar el sistema de materias optativas, que deberían darle al alumno la posibilidad de decidir entre un amplio número de problemáticas, aquellas entre las cuales quiera incursionar. Por ejemplo: de un listado de 10 materias adicionales deba seleccionar 2 y acreditar su aprobación para la obtención del título. El sistema expuesto evidentemente haría dejar de lado el sistema de los seminarios. Materias que sugiero pueden incorporarse como optativas serian: Derecho de la Integración, Derecho Constitucional Colectivo, Mediación y Conciliación, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Técnica Judicial y Legislativa, Nociones de Contabilidad, Elementos de psicología criminal, entre otras.
- Que se permita que aquellos alumnos a cuales le reste una materia teórica o práctica se le dé la posibilidad de cursar las prácticas notariales, evitando que el futuro escribano deba esperar un año más para conseguir el título esperado.
- Que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones sobre el cambio de carga horaria de las siguientes materias: Derecho Procesal Penal Teórico (4 meses), Derecho Procesal Civil y Comercial Teórico (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho de Familia y Sucesiones (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho Administrativo I (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho Comercial I y Derecho Constitucional debieran de tener una carga horaria semestral, esta última con la posibilidad de crear cursos intensivos que incluyan al Derecho Público, Provincial y Municipal.
- En la medida de lo posible, y la posibilidad real de que dispongan los docentes de implementar cursos intensivos de un mes de duración durante el Mes de Febrero para aquellos alumnos que vayan a rendir en el turno de Marzo.
- Por último, me parece pertinente poder plantearles dos ideas que para mi criterio también serian de gran utilidad para el estudiantado: la obligación de revisar los programas de las cátedras- contenidos y bibliografía- cada dos años y que se permita a aquellos alumnos que acrediten como nota promedio en sus evaluaciones la cantidad de 7- siete- puntos en los preevaluativos eximirse de la mesa final.

Cumpliendo con la posibilidad que se nos brindó de participación semidirecta en este proyecto dada por los señores consejeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es que les elevo mi humilde opinión al respecto, saludándolos con mi más grande respeto.-

Juan Pablo Rincón
Alumno Regular de la Carrera
(Legajo 113155/1)

PROYECTO N° 4: Autor: Arturo Amós GRAJALES Profesor Adjunto de "Introducción al Derecho" propone un "Ciclo Introductorio Propedéutico" destinado a los ingresantes a la carrera.

PROYECTO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DELCICLO PROPEDÉUTICO INICIAL A LA CARRERA DE ABOGACÍA - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Diversos factores han incidido en el diseño del presente proyecto, los cuales generan la idea de implementar un ciclo de adaptación propedéutico para los alumnos que ingresan a la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La problemática del ingreso al grado universitario por quienes cumplen con los requisitos formales para acceder a la misma se ha tornado una cuestión conflictiva y sensible para la comunidad universitaria.

En primer lugar no podemos obviar un diagnóstico de la situación actual del ingreso a nuestra Facultad. Contar con un diagnóstico confiable que nos advierta sobre el real dominio de conocimientos de los ingresantes, junto al análisis de las características socioeconómicos de los mismos, resulta indispensable para establecer las pautas de una urgente intervención institucional sobre la problemática del ingreso.

Obviar la realidad, nos llevará a la engañosa tranquilidad del ignorante y nos sumirá indefectiblemente en el estadio final de la pauperización educativa a la que nuestro país viene asistiendo casi sin resistencia.

Pensar que el cumplimiento de los requisitos formales de admisión que exigen actualmente nuestra Universidad pública para comenzar una carrera de grado en ella son representativos de los requisitos reales que exige una carrera universitaria, tiene algo de voluntarismo y mucho de autismo.

Muchas veces hemos oído en los ámbitos universitarios, discursos genéricos sobre el ingreso irrestricto, a nuestra Facultad, un discurso que frecuentemente se ha desentendido del “día después” de aquel ingreso teóricamente irrestricto. Ese día después, es el día después del fracaso. El de la deserción masiva y del desánimo estudiantil. Nos permitimos suponer que quien tenga la simple idea –reflexiva o irreflexiva- de realizar una carrera universitaria en una Universidad pública ingrese a la misma con la sola presentación de un certificado de cumplimento de estudios de nivel medio. Ello forma parte de una idea rectora, la cual es lo suficientemente vaga, abierta e irreflexiva como para adular a una enorme cantidad de oídos. Pero a su vez una idea que sin estar asociada a otras ideas sobre el “Día después” termina resultando un canto de sirena al que acuden una numerosa cantidad de nuestro jóvenes quienes ya viviendo el día después en gran cantidad terminan sumidos en la idea del fracaso y la desilusión.

La misma Facultad que les dice: No importa si tu certificado de aprobación del nivel medio refleja la realidad o no, Dejad todo y venir a mí... no les dice que luego de franquearle la puerta lo olvidará dentro de sus aulas. Le exigirá que sepa determinados conocimientos y en caso contrario simplemente lo someterá al escarnio académico de reprobar recurrentemente y sin fin. Jamás volverá a preguntarle por que se alejó de las aulas. Y en definitiva jamás le pedirá perdón por haberle exigido “el día después” algo que ya sabía jamás podría haber dado en virtud de que ese certificado acartonado de nivel medio con el que contaba el que

ingresó profesaba la peor de las falsedades ideológicas para un ámbito universitario: faltaba a la verdad sobre el conocimiento.

Se impone, entonces, por responsabilidad académica y por responsabilidad en asignación de presupuesto educativo, que pensemos en aquellos estudiantes que ingresan a nuestras aulas. Y precisamente lo pensemos en aquel "Día después". Lo ideal sería pensar en él desde antes de su ingreso, algo que lamentablemente nos veda nuestra competencia. Pero franqueando la puerta de nuestra Facultad es nuestra responsabilidad. He de colocar entonces como eje a los estudiantes. Que estructuras de razonamiento necesitan. Que conocimientos generales sobre otras disciplinas necesitan para comprender los conceptos jurídicos. Qué herramientas o métodos de estudio posee para adquirir conocimiento. Estas y otras cuestiones son de trascendencia para los alumnos y nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a la par de exigir conocimientos debe brindarlos mediante instrumentos adecuados. Entonces debemos diseñar con características propias que contemplen estos aspectos la primera etapa de la carrera de abogacía, una etapa introductoria, de adaptación de adquisición de conocimientos básicos con los cuales se puedan adquirir los conceptos propios del Derecho.

Vista entonces la necesidad de que quienes aborden las temáticas de la materias troncales de la carrera (Derecho Civil, Penal, Procesal, Comercial, etc.) accedan a las mismas capacitados para adquirir con pensamiento crítico los conocimientos de dichas materias, es decir que puedan utilizar diversa metodología de estudio, puedan estructurar sus razonamientos de modo válido y correcto y hayan adquirido conocimiento sobre el contexto social, económico, político en el que se desenvuelve el estudio del Derecho, es tiempo de pensar la implementación de esta primera etapa.

La idea de un ciclo propedéutico introductorio.

La idea de ciclo se asocia ineludiblemente a la de Bloque y también a la de "Fase". Ambas implican el reconocimiento de insertarse en un conjunto mayor.

Pensar un ciclo introductorio es pensar en una primera fase de la vida universitaria. Y esta idea aunque simple y fácilmente explicable tiene un contenido ideológico trascendente respecto a la idea rectora del ingreso a la Universidad. Idear un ciclo como el planteado, es pensar que se encuentra dentro de la carrera de abogacía y no es una etapa previa a la misma. No es un curso de pre ingreso o de ingreso. Es cómo se estructura y desenvuelve el "día después" del ingreso.

Pero por otra parte pensar que ya forma parte de la carrera, no implica necesariamente que garantice que quienes lo transiten, continúen hasta finalizar su carrera. Por el contrario nos permitirá preparar a los alumnos en conocimientos que les serán indispensables en la siguiente etapa. Quien haya adquirido tales conocimientos habrá superado la etapa y tendrá que trajinar con nuevos y más complejos conocimientos, quien no, podrá continuar adquiriendo los conocimientos del primer ciclo hasta obtenerlos, con los lógicos límites del régimen de regularidad y el indispensable apoyo del área de apoyo psicopedagógico que debe poseer la Facultad.

Esto último implica lo propedéutico del curso es decir lo preparatorio para un nuevo ciclo. El de las materias jurídicas en sí. Y siendo el ciclo el primero de otros con los que termina de conformarse la carrera, es propio denominarlo: Inicial. En definitiva debemos pensar que terminaremos diseñando los primeros pasos del camino en la carrera. Esos pasos donde el caminante necesita orientación, contención y contenidos.

El diagnóstico actual:

Debemos evaluar que en promedio en los últimos años en nuestra Facultad se han inscripto 3200 estudiantes de los cuales en promedio en los últimos 5 años se han presentado a cursar el curso de ingreso que se encontraba vigente 2800 estudiantes. Luego del primer año de estudios en la carrera se encuentran en condiciones de cursar las materias correspondiente al segundo año de la currícula un promedio de 800 es decir que el 72 % no continúa sus estudios –de conformidad al plan curricular- y por ende el proyecto de estudios universitarios en el ámbito de la carrera de abogacía de gran parte de ese 72% de alumnos ingresantes, fracasa.

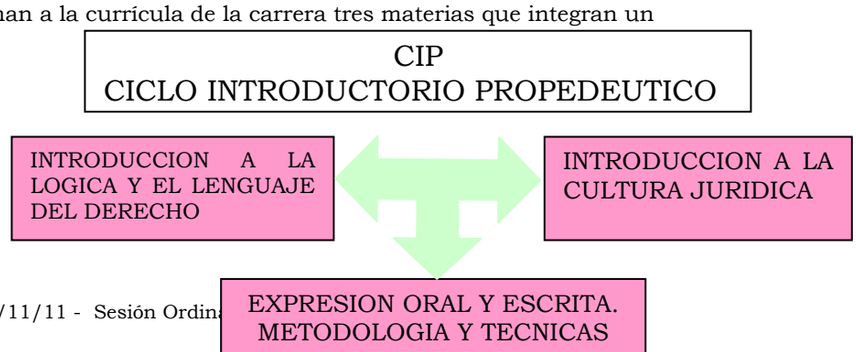
Los porcentajes de deserción señalados muestran un fracaso compartido: el del educador que no posibilita disminuir esos porcentajes y el del educando que no logra adquirir los conocimientos suficientes para superar las primeras materias de la carrera. Y puede deducirse que si es que no pueden adquirir los conocimientos de las primeras materias de la carrera es porque los conocimientos que deberían haber adquirido en el nivel medio y los métodos de estudio que les proveyó esa enseñanza media no han sido suficientes como para permitirles adquirir los nuevos conceptos jurídicos. Es posible también que dentro de los porcentajes de deserción indicados se encuentren también una porción de alumnos que -aunque dotados de los niveles de conocimiento suficiente parea adquirir nuevo conocimiento- igualmente desista pues ha advertido que la disciplina escogida no es la que corresponde a sus intereses, sentimientos o vocación. Por último también dentro de ese grupo que se aleja de las aulas de la facultad se encuentren alumnos que no tienen capacidad intelectual para adquirir conocimientos de una instancia de grado universitario.

Pues bien, el Ciclo precisamente está diseñado para acompañar a los alumnos que responden a alguna de estas características y también para aquellos que –aun sin la existencia del ciclo- hubiesen continuado en la carrera.

El CPI permitirá que los conceptos introductorios al campo de lo jurídico sean abordados y evaluados precisamente en un ciclo propiamente introductorio, de ese modo se evitará ocupar cantidad de horas cátedra de las materias introductorias propiamente jurídicas de la carrera para explicar y enseñar cuestiones que son propias de etapas educativas previas. Como correlato, la enseñanza de esas materias se verá claramente beneficiada pudiendo agotar el tratamiento de los temas de estudio propuestos.

Pautas sobre las que se asienta el CPI:

- A la Facultad podrán ingresar todos aquellos postulantes que tienen aprobado el nivel medio.
- La Facultad establece un ciclo de enseñanza, orientación y evaluación de alumnos que permitirá que los alumnos que lo realicen puedan abordar el estudio de los conceptos jurídicos de la carrera.
- Se suman a la currícula de la carrera tres materias que integran un



INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA JURÍDICA Y EL LENGUAJE DEL DERECHO

Su contenido aproximado

- pautas introductorias de lógica (a) Lógica simbólica. b) Lógica preposicional, de cuantificación y de clases. c) La lógica y su aplicación al derecho. e) La lógica deóntica).
- razonamientos correctos
- falacias en su relación al discurso jurídico
- los criterios lógicos utilizados en el derecho
- introducción a la semiótica en su relación con el mundo de lo jurídico
- Permita ejercitar y ejemplificar el uso de la lógica y su correlación con el discurso en los escritos que deba realizar.

INTRODUCCIÓN A LA CULTURA JURÍDICA

Con esta materia se haría un recorrido de línea histórica que ubique los hitos jurídicos de relevancia para la carrera y los contextualice históricamente, permitiéndole al alumno ubicar temporal y espacialmente los aportes jurídicos de los que le hablarán en el resto de las materias.

Es decir la parte de la historia de la civilización humana que tenga relación con lo jurídico. Es indispensable contextualizar determinadas ideas de la civilización humana que han servido como origen de ideas jurídicas. A modo de ejemplo podemos indicar que resultaría provechoso que un alumno conozca algunos elementos del pensamiento en Grecia y que luego de cursar la materia distinga períodos dentro de dicho pensamiento. Distinga entre Socráticos y pre Socráticos en que años se desenvolvieron unos y otros, como incidieron ellos en el campo de lo jurídico, etc. etc. Otro de los fines es para que comprendan la diversidad del mundo de lo jurídico y su extensión temporal. Y con ello se logre comprender que la ubicación tempo espacial de distintos pensadores y su obra, Sófocles, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás, Kant, Savigny, Ihering, Vélez Sarfield, Kelsen, Cossio y Bobbio (por mencionar algunos pocos) servirá para comprendan mejor el pensamiento de los mismos, su contexto social, histórico y el contexto ideológico donde primaron sus ideas.

Es, trazar una línea histórica que sirva para asociar ideas jurídicas a contextos históricos y autores.

EXPRESION ORAL Y ESCRITA. METODOLOGIA Y TECNICAS DE ESTUDIO

Esta materia atraviesa el contenido de las otras dos y su fin sería dotar de determinados métodos de aprendizaje y estudio a los alumnos ingresantes. Principalmente se dedicaría a ofrecer herramientas de estudio que puedan ser practicadas en los contenidos de las materias de Lógica y Cultura Jurídica. Aunque técnicamente resulta posible administrar los contenidos de esta materia insertados en las otras dos materias, resulta prudente otorgarle autonomía a fin de que sea enseñada por especialistas en la temática.

Todo ello realizado teniendo en cuenta los textos que han sido dados para su estudio en las otras dos materias.

Es necesario entender que el estudio del lenguaje ha cambiado profundamente en los últimos tiempos valorizando en particular el raciocinio, la capacidad de interpretación de los involucrados en la comunicación, es decir que excede el marco de la reproducción de las reglas gramaticales, profundizando por el contrario el estudio del uso del lenguaje de modo adecuado y creativo. La gramática ha dejado de ser encarada como finalidad, -lo cual no implica su olvido o desprecio- pero es considerada como instrumento para mejorar el desempeño del hablante. Teniendo en cuenta lo dicho la materia expresión oral y escrita y metodología de estudio está destinada a orientar al alumno en el uso del lenguaje y su interpretación en directa relación con el universo de lo jurídico. En definitiva prevé que, quienes se envuelvan en el estudio del derecho, precisarán del instrumento indispensable que resulta el lenguaje para su desarrollo de la carrera y en definitiva para el ejercicio profesional posterior.

Temas a desarrollar en la materia

- extracción de ideas principales y accesorias de los textos
- metodológicas de estudio (mapas conceptuales, líneas, etc.)
- redacción de textos
- Adquisición de conceptos lingüísticos asociados al Derecho
- expresión oral de textos jurídicos
- métodos y técnicas de búsqueda de material jurídico (búsqueda de jurisprudencia por medios tradicionales e informáticos, revistas y publicaciones de derecho, bibliotecas jurídicas, buscadores informáticos dedicados al derecho

IMPLEMENTACION DEL CICLO

Características de las tres materias:

- Se cursan todas (todos cursan obligatoriamente)
- Se recomienda que el diseño de la materia LOGICA Y LENGUAJE DEL DERECHO siguiendo las pautas esbozadas en el proyecto se encomiende a una comisión de redacción integrada por los tres profesores titulares de Introducción al Derecho.
- Se recomienda que el programa de la materia INTRODUCCION A LA CULTURA JURIDICA siguiendo las pautas esbozadas en el proyecto sea redactado por una comisión integrada por profesores Titulares pertenecientes a las cátedras de HISTORIA CONSTITUCIONAL, DERECHO ROMANO, INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA, INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA Y DERECHO POLITICO
- Se recomienda que el programa de la materia EXPRESION ORAL Y ESCRITA EN EL DERECHO. METODOLOGIA Y TECNICAS DE ESTUDIO sea redactado por el gabinete psicopedagógico y un representante de cada comisión redactora de las otras dos materias; además del asesoramiento de un bibliotecólogo/a de la Biblioteca de nuestra Facultad interiorizado en los sistemas informáticos de búsqueda de jurisprudencia y bibliografía.

DOCENTES A CARGO:

La materia 1, la dictan hasta que se concursen los cargos ordinarios y en un período de transición que no excedería de X cantidad meses, **profesores adjuntos y Jefes de trabajos prácticos con funciones de adjuntos** de las materias INTRODUCCION AL DERECHO Y FILOSOFIA DEL DERECHO, junto con otros **profesores adjuntos y Jefes de trabajos prácticos con funciones de adjuntos** de otras materias que acrediten especialidad en la temática de la Lógica jurídica.

La materia 2 la dictan hasta que se concursen los cargos ordinarios y en un período de transición que no excedería de X cantidad meses, **profesores adjuntos y Jefes de trabajos prácticos con funciones de adjuntos** de HISTORIA CONSTITUCIONAL, DERECHO ROMANO, INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA, INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA Y DERECHO POLÍTICO, junto con otros **profesores adjuntos y Jefes de trabajos prácticos con funciones de adjuntos** de otras materias que acrediten especialidad en la temática de la Lógica jurídica

La materia 3 -en caso de dotarse de autonomía a la misma la dictarían **profesores adjuntos y Jefes de trabajos prácticos con funciones de adjuntos** de carreras afines de la Facultad de HUMANIDADES junto a JTP de las materias de la carrera de abogacía, para orientar en los temas de búsquedas de jurisprudencia, legislación y doctrina jurídicas, etc.

REGIMEN DE CURSADA

- Se dicta durante el primer. Cuatrimestre de cada ciclo lectivo
- El de cursada por promoción, siendo las tres propedéuticas por lo que deben aprobarse las tres para poder continuar con el resto de correlativas**.**

PERIODO DE RECUPERACIÓN

- Con posterioridad a la finalización de las cursadas propedéuticas se abre un periodo de recuperación entre ..... y el 30 de diciembre del año en que se cursó el ciclo. El alumno que no logre los objetivos mínimos de conocimiento de alguna o todas las materias de ciclo, tiene mesas examinadoras finales de recuperación en los meses de agosto, octubre y diciembre.
- Se implementan clases de apoyo de las distintas materias durante el ciclo lectivo y un seguimiento permanente de los alumnos reprobados por parte del gabinete psicopedagógico.
- En el caso en que el alumno no logre aprobar las materias referidas durante el ciclo lectivo, es decir no logre promocionar la materia, ni logre aprobarla en las tres mesas finales recuperatorias del ciclo lectivo en el que cursó el ciclo, deberá cursar la materia reprobada en el siguiente ciclo lectivo.

PROYECTOS N° 6: Autor: Sebastián PIANA Secretario de Investigación Científica. Profesor adjunto de "Derecho Político". Propone reformular los contenidos de la asignatura "Derecho Político".

La Plata, 29 de junio de 2011
Sr. Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abog. Vicente ATELA
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar como propuesta la creación de una materia específica con contenido interdisciplinar vinculado a la Ciencia Política.

Sabido es que el actual perfil en la formación del abogado en nuestra Facultad se encuentra orientado, preferentemente, al ejercicio liberal de la profesión. Dicha orientación no se condice con las posibilidades laborales que encuentra en nuestra ciudad, sede del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial además de asiento del gobierno municipal y a muy poca distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde tienen sede numerosos organismos públicos internacionales, nacionales y locales.

Si bien algunos contenidos vinculados al Programa propuesto se encuentran tratados en la materia Derecho Político, la propuesta busca profundizar algunos de esos conceptos (y tratar nuevos) de forma sistemática, aportando al futuro abogado conocimientos teóricos y prácticos de diversas temáticas que debe manejar con solvencia si su orientación profesional se vincula al ejercicio profesional en ámbitos gubernamentales.

En efecto, el abogado que se desempeña en esos espacios públicos debe tener competencia y capacidad para elaborar informes técnicos, prestar asesoramiento, dictaminar y decidir cuestiones que no se encuentran estrictamente vinculadas sólo al derecho, sino también, a aspectos políticos – institucionales, de oportunidad y conveniencia que debe poder evaluar con solvencia.

El objetivo de la materia es proporcionar a los alumnos un marco general para la comprensión, descripción y explicación de los fenómenos políticos. La problemática del poder será el eje central para el estudio de conceptos esenciales del análisis político: Estado, nación y democracia; partidos políticos, representación y opinión pública, régimen político, gobierno y administración, clase política y élites, cultura política, movimientos sociales y cambio político en el orden interno e internacional.

El eje referido debería ser abordado buscando sus rasgos esenciales, el «modo de ser» de lo político.

A través de la lectura analítica de textos seleccionados y representativos de estas categorías en la Ciencia Política del siglo XX, se pretende que los alumnos comprendan las distintas perspectivas teóricas con que pueden estudiarse la realidad política.

A fin de una mayor justificación de la relevancia y necesidad de incluir esta materia, se adjunta un Programa con las temáticas a tratar.

Sin otro particular, saludo a usted muy cordialmente.

Dr. Ricardo Sebastián PIANA

PROGRAMA

Unidad 1. LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA.
La política como objeto de estudio (ciencia política) y como acción (conducción y liderazgo). Teoría y práctica. El malestar en la política.
El trabajo interdisciplinario de la Ciencia Política. Distintas corrientes.
La naturaleza humana como presupuesto y base del pensamiento político.
Esencia de lo político: relaciones público-privado; amigo-adversario; mando-obediencia en Julien Freund. El particularismo de la política. La Política, lo político.

Bibliografía principal
Freund, Julien, 1964. La esencia de lo político. Introducción. Cap. I. Política y Sociedad. Cap. II. Del origen de lo político. Editora Nacional, Madrid.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1988. Manual de Ciencia Política. Alianza. Cap. 1. Naturaleza y evolución de la disciplina. Alizanza, Madrid.
Sartori, Giovanni, 1991. Elementos de Teoría Política. Cap. 10. Política. Alianza, Madrid.

Bibliografía sugerida
Burnham, James, 1986. "La política y la verdad" en Los Maquiavelistas. Defensores de la Libertad. OLCESE, Buenos Aires.
Dahl, Robert, 1983. Análisis Político Actual. Eudeba, Buenos Aires.
Portinaro, Pier Paolo, 2007 El realismo político. Nueva Visión, Buenos Aires.
Schmitt, Carl, 1991. El concepto de lo político. Alianza, Madrid.
Trigg, Roger, 2001. Concepciones de la naturaleza humana: una introducción histórica. Alanza, Madrid.
Weber, Max, 1981. El político y el científico. Introducción de Raymond Aron. La política como vocación. Alianza Editorial, Madrid (séptima edición).

Bibliografía complementaria
Sartori, Giovanni, 1984. La política. Lógica y método de las ciencias sociales. FCE. México.
Albert Battle (comp.), 1992. Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Barcelona. Ariel.
Bauman, Zygmunt, 2001. En búsqueda de la política. FCE, Buenos Aires.
Bertín Hugo D. y Corbetta, Juan C. , 1997. "La noción de legitimidad en el concepto de lo político de Carl Schmitt" en La noción de legitimidad en el concepto de lo político de Carl Schmitt. Ed. Struhart. Buenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1977. Teorías políticas contemporáneas - Una introducción", Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
Bobbio, Norberto *et al.*, 1986. Diccionario de política. Siglo XXI, México.
Burdeau, Georges, 1976. Método de la Ciencia Política. Desalma, Buenos Aires.
Easton, David, 1973. Esquema para el análisis político. Amorrortu, Buenos Aires
Molina, Jerónimo, 2000. Julien Freund, lo político y la política. Sequitur, Madrid
Tansey, Stephen. D., 2000. Politics: the basics. Second Edition. Routledge. London and New York.
Pereira Menaut, Antonio–Carlos, 2000. Doce tesis sobre la política. UNAM, México.

Unidad 2. EL PODER
Tipo de Poderes. El poder político: diferencia con el poder económico, social e ideológico.
El tratamiento conceptual e histórico del poder. El fenómeno del crecimiento del poder en el análisis de Bertrand de Jouvenel.
Los fundamentos del poder. La legitimidad: tipos de dominación. Concepto y presupuestos de la legitimidad democrática. Legitimidad, legalidad y efectividad. Autoridad y coacción.

Bibliografía principal
Aron, Raymond, 1989. "Match, Power, Potencia, prosa democrática o poesía demoníaca (1964)" en Estudios Políticos. Espasa Calpe. Madrid.
De Jovenel, Bertrand, 1998. Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento. Selección de capítulos. Unión Editorial, Madrid.
Hobbes, Thomas, 1992. Behemoth. “Diálogo I”. Tecnos, Madrid.
Weber, Max, 1992. Economía y Sociedad. Selección de capítulos. FCE. México.
Preterossi, Geminello, 2002. Autoridad. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.

Bibliografía sugerida
Arendt, Hannah, 2005. Sobre la violencia. Alianza Editorial, Madrid.
Ferrero, Guglielmo, 1998. Poder. Los genios invisibles de la ciudad. Tecnos, Madrid.
Gramsci, Antonio, 2004. Antología. Siglo XXI, México.
Mosca, Gaetano, 1984. La clase política. FCE, México.
Peters, S. y Winch, Peter, 1974. "La autoridad" en Quinton, Anthony. Filosofía Política. FCE, México.

Bibliografía complementaria
Kliemt, Hartmut, 1979. Filosofía del Estado y criterios de legitimidad. Alfa, Buenos Aires.
del Águila, Rafael, 1997. Manual de Ciencia Política. Cap. I. La política: El poder y la legitimidad. Ed. Trotta, Madrid
Arendt, Hannah, 1987. Los Orígenes del Totalitarismo. Alianza, Madrid. 3 ts.
Bell, Daniel, 1964. El fin de las ideologías. Tecnos, Madrid.

Unidad 3. ESTADO.
El Estado: de la *Respublica Christiana* al nacimiento del Estado soberano. Elementos constitutivos del Estado.
Tipos históricos de Estado. Estado Total, Estado Absoluto, Estado máximo y Estado mínimo.
El Estado de Derecho y justicia. ¿El gobierno de las leyes o el gobierno de los jueces?
El debate sobre los fines del Estado: el Estado de bienestar y el rol social del Estado: crisis. ¿Reedición del Estado mínimo? Estado postsoberano y organizaciones supranacionales.

Bibliografía principal
Bobbio, Norberto, 1985. Estado, Gobierno y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México.
Portinaro, Pier Paolo, 2003. Estado. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Sicker, Martin, 1991. The Genesis of the State. Praeger. New York, Westport, London.
Vallespín, Fernando (2000). El futuro de la política. Taurus, Madrid.

Bibliografía sugerida
De Jouvenel, Bertrand, 1976. Los orígenes del estado moderno. Historia de las ideas políticas en el siglo XIX. E.M.E., Madrid.
Heller, Hermann, 1968. Teoría del Estado. Cap III. 1. Supuestos Históricos del Estado. FCE. México.

Poggi, Gianfranco, 1997. El desarrollo del Estado moderno. Una introducción sociológica. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Bibliografía complementaria
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, 2000. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Trotta, Madrid.
Cassirer, Ernst, 1968. El mito del Estado. Fondo de Cultura Económica, México.
García-Pelayo, Manuel, 1980. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Alianza Editorial, Madrid.
Passerin D'Entreves, Alessandro, 1970. La Noción de Estado. Euroamérica, Madrid.
Zippelius, Hans, 1985. Teoria del Estado. Ciencia de la política. UNAM, México.

Unidad 4. LA NACIÓN
El concepto de nación. Nación cultural, estatal y política.
Del Estado absolutista al Estado Nación.
Los procesos de formación del Estado. Naciones sin Estado y Estado con naciones.
Descolonización. Los nuevos nacionalismos y las minorías. Los movimientos de liberación nacional. Nacionalismo y Populismo.

Bibliografía principal
Breuilly, John, 1990. Nacionalismo y estado. Pomares-Corredor, Barcelona.
Campi, Alessandro, 2005. La Nación. Claves. Buenos Aires.
Chabod, Federico, 1987. La idea de Nación. FCE, México
Renan, Ernest, 2006. ¿Qué es una Nación? Sequitur, Madrid.
Sieyes, Emmanuel, 2003. ¿Qué es el Tercer Estado? Alianza. Madrid.

Bibliografía sugerida
Gellner, Ernest, 1988. Nación y Nacionalismo. Alianza, Madrid.
Habermas, Jürgen, 2000. La constelación posnacional. Paidós, Barcelona.

Bibliografía complementaria

Anderson, Benedict, 1993. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.
Garavaglia, Juan Carlos, 2007. Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata. S. XVIII-XIX. Prometeo, Buenos Aires.
Kaplan, Marcos, 1976. Formación del estado nacional en América Latina. Amorrortu, Caracas.
Segato, Rita Laura, 2007. La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad. Prometeo, Buenos Aires.

Unidad 5. DEMOCRACIA
Democracia: Características y presupuestos de los regímenes democráticos. El modelo democrático. Presupuestos sociales, económicos e institucionales. Las reglas del juego democrático.
Las nuevas vías de la legitimidad. Percepción sociológica y política de la noción de mayoría. La desacralización de la elección y su reducción a modo de designación de los gobernantes.
La democracia en el pensamiento contemporáneo. "La contrademocracia". Disociación de la legitimidad y de la confianza. La democracia de control. La "política negativa". Las nuevas vías de la democracia electoral-representativa.

Bibliografía principal
Dahl, Robert, 1992. "La Poliarquía" en Albert Battle (comp.). Diez textos básicos de ciencia política. Ariel, Barcelona.
Morlino, Leonardo, 1988. "Las democracias" en Pasquino, Gianfranco (dir.). Manual de Ciencia Política. Alizanza, Madrid.
Rosanvallon, Pierre, 2007. La contrademocracia. La Política en la era de la desconfianza. Manantial, Buenos Aires.
Schumpeter, Joseph A., 1996. Capitalismo, socialismo y democracia. Folios, Barcelona.

Bibliografía Sugerida
Zolo, Danilo, 1994. Democracia y complejidad. Un enfoque realista. Nueva Visión, Buenos Aires.
Bobbio, Norberto, 1992. El Futuro de la Democracia. FCE, México.
Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (comp.), 2001. Políticas e instituciones en las nuevas democracias Latinoamericanas. Paidós, Buenos Aires.
Dahl, Robert, 1998. La democracia. Una guía para los ciudadanos. Taurus, Madrid.
Dahrendorf, Ralf, Furet, François y Geremek, Bronislaw, 1993. La democracia en Europa. Alianza Editorial, Madrid.
Friedrich, Carl J. , 1975.Gobierno Constitucional y Democracia. Instituto de Estudios políticos, Madrid.
Kòjeve, Alexandre, 2005. La noción de autoridad. Nueva Visión. Buenos Aires.
Linz, Juan J., 1997. La quiebra de las democracias. Alianza, Madrid.
Sartori, Giovanni, 1989. Teoría de la Democracia. El Debate Contemporáneo, Tomo I y Los Problemas Clásicos, Tomo II. Alianza Universidad, México.

Bibliografía complementaria
Aron, Raymond, 1968. Democracia y totalitarismo. Seix Barral, Barcelona.
Dahl, Robert, 1989. La poliarquía: participación y oposición. Rei, Buenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1986. Los grupos de presión en la democracia. Ed. de Belgrano, Buenos Aires.
Fistetti, Franceso, 2004. Comunidad. Léxico de política. Nueva Visión. Buenos Aires.
Held, David, 1991. Modelos de democracia. Alianza Editorial, Madrid.
Iazzetta, Osvaldo, 2003. "Las asignaturas pendientes de nuestras democracias" en Democracia, desarrollo humano y ciudadanía: reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina. Homo Sapiens, Rosario.

Lijphart, Arend, 2000. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Ariel, Barcelona.
Pasquino, Gianfranco, 1999. La Democracia Exigente. F.C.E., Buenos Aires.
Touraine, Alain, 1995. ¿Qué es la Democracia? FCE, Buenos Aires.

Unidad 6. LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS
Los partidos políticos. Origen y evolución de los partidos políticos. Concepto. Funciones. Diferencias con otros grupos de poder. Su incorporación a las constituciones jurídicas.
El sistema de partidos: clasificaciones, dimensión ideológica. Sistema de partido único, de partido hegemónico, de partido predominante, bipartidista, de pluralismo limitado, de pluralismo extremo, y de pluralismo atomizado.
Los sistemas electorales: fuertes, débiles e intermedios. Consecuencias (incidencias) sobre el sistema de partidos políticos. División territorial o secciones electorales. Sistemas mayoritario (de mayoría "pura y simple"); de representación de las minorías o de representación proporcional (cociente electoral, D´Hont, del cociente progresivamente rectificado y otras variantes). Clases de sufragio. La extensión y profundización: el voto de la mujer y disminución de la edad. El cuerpo electoral.

Bibliografía principal
Alcántara Sáez, Manuel y Flavia Freidenberg, 2003. Partidos políticos de América Latina. Vols. 1 a 3. FCE, México.
Cheresky, Isidoro (comp.), 2007. La Política después de los partidos. Introducción: La Política después de los partidos. Prometeo, Buenos Aires.
Garcia-Pelayo, Manuel , 1986. El Estado de partidos. Alianza, Madrid.
Michels, Robert, 1969. Los partidos politicos. Amorrortu, Buenos Aires.
Oppo, Anna, 1986. "Partidos Políticos", en Bobbio, Norberto et al., 1986. Diccionario de política. Siglo XXI, México.
Panebianco, Angelo, 1990. Modelos de partido: organización y poder en los partidos políticos. Alianza, Madrid.

Bibliografía sugerida
Beyme von, Klaus, 1986. Los partidos políticos en las democracias occidentales. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas, coedición con Siglo XXI de España.
Di Tella, Torcuato S., 1998. Los partidos politicos. Teoría y Análisis Comparativo. A – Z Editora, Buenos Aires.
Duverger, Maurice , 1961. Los partidos políticos. F.C.E. México, 1961. , 2º Ed.
Nohlen, Dieter, 1981. Sistemas electorales del mundo. C.E.C., Madrid.
Nohlen, Dieter, 1995. Elecciones y sistemas electorales. Ed. Nueva Sociedad, Caracas.
Offe, Claus, 1998. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Editorial Sistema, Madrid
Sartori, Giovani, 2000. Partidos y sistemas de partidos. Alianza Universidad, Madrid.
Zampetti, Pier Luigi, 1969. Del Estado liberal al Estado de partidos. La representacion política. Ediar, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria
Baras, Montserrat y Juan Botella, 1996. El sistema electoral. Tecnos, Madrid.
Beyme, Klaus von, 1995. La clase política en el Estado de partidos. Madrid. Alianza Universidad.
Caboara, Lorenzo, 1967. Los partidos políticos en el Estado moderno. Ediciones Iberoamericanas, Madrid.
Corbetta Juan Carlos y Ricardo Sebastián Piana, 2006. Compendio de normas políticas del Estado Argentino. Quórum, Buenos Aires.
Garcia Cotarelo, Ramón , 1985. Los partidos políticos. Ed. Sistema, Madrid.
Jackish, Carlota, 1994. Los sistemas electorales. Sus características y consecuencias políticas. El caso argentino. Fund. K. Adenauer, Buenos Aires.
Neuman, Sigmund , 1965. Partidos políticos modernos. Tecnos, Madrid.
Schattschneider, E.E., 1964. Régimen de partidos. Tecnos, Madrid.
Zampetti, Pier Luigi, 1970. Democracia y poder de los partidos – El nuevo régimen político. Ed. Iberoamericana, Madrid.

Unidad 7. REPRESENTACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA
Concepto de representación. ¿Qué se representa? ¿A quién? Representación política y funcional.
Representación e identidad. Mayorías y minorías. Crisis de representación.
Concepto de opinión pública. Opinión publicada. Relación entre espacio público, opinión pública y representación.
Interés y utilidad. Interés del príncipe, interés del Estado y razón de Estado.

Bibliografía principal
Accarino, Bruno, 2003. Representación. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Ornaghi, Lorenzo, Cotellessa, Silvio, 2000. Interés. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Burke, Edmund, 1942. Textos Políticos. FCE. México.

Bibliografía sugerida
Habermas, Jürgen, 1989. Conocimiento e interés. Taurus, Madrid.
Meinecke Firedrich, 1997. La idea de razón de Estado en la Edad Moderna. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
Habermas, Jürgen, 2004. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Sartori, Giovanni, 1998. Homo videns, la sociedad teledirigida. Taurus, Madrid.

Bibliografía complementaria
Hirschman, Albert, 1999. Las pasiones y los intereses: argumentos políticos a favor del capitalismo previos a su triunfo. Península, Barcelona.
Hirschman, Albert, 1986. Interés privado y acción pública. FCE, México.

Quiroga, Hugo, 2006. La arquitectura del poder en un gobierno de la opinión publica, en Cheresky I. (comp.), La política después de los partidos. Prometeo.
Mora y Araujo, Manuel, 2005. El poder de la conversación. Elementos para una teoría de la opinión pública. La Crujía, Buenos Aires.
Pitkin, Hannah, 1985. El concepto de representación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

Unidad 8. RÉGIMEN POLÍTICO.
Aspectos normativos, culturales y políticos de la organización estatal.
Las tipologías clásicas y las nuevas formas de clasificación.
Constitución: constitución jurídica, real y natural. Tipos de constitución: el modelo de constitución inglesa, norteamericana y francesa. El modelo argentino. Presidencialismo, Parlamentarismo y formas intermedias.
Formas de Estado: el sistema unitario y el federalismo; descentralización, e integración. El federalismo argentino.
Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político argentino.

Bibliografía principal
Alcántara Sáez, Manuel, 1999. Sistemas Políticos de América Latina. vol 1 y 2. Tecnos, Madrid.
Almond, Gabriel y Bingham Powell, 1972. Política comparada. Una concepción evolutiva. Paidós, Buenos Aires.
Badía, Juan Fernando, 1995. Regímenes políticos actuales. Madrid Tecnos. 3º ed.
Easton, David, 1992. "Categorías para el análisis sistémico de la política", en Albert Battle (comp.). Diez textos básicos de ciencia política. Ariel, Barcelona.
Loewenstein, Karl, 1965. Teoría de la constitución. Ariel, Barcelona.
Oszlak Oscar, 2004. La formación del Estado Argentino. Ariel, Buenos Aires.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alizanza. Cap. 8. Los gobiernos, Maurizio Cotta.

Pasquino, Gianfranco (2004). Sistemas políticos comparados. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos". Prometeo Libros, Buenos Aires.
Sartori, Giovanni, 1994. Ingeniería Constitucional Comparada. FCE, México.
O´Donnell Guillermo, 1996. "Otra institucionalización" en La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, Nº 2. pags. 5-28. Paidós Ibérica.

Bibliografía complementaria
Aguilera de Prat, Cesareo y Martínez Rafael, 2000. Sistemas de Gobierno: Partidos y Territorio. Tecnos, Madrid.
Corbetta, Juan Carlos y Ricardo Sebastián Piana, 2005. Constitución Política de la República Argentina. Dimensiones normativas y jurisprudenciales de la realidad política argentina. Capítulo Introductorio. Ed. Scotti, La Plata.
Duverger, Maurice, 1980. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Ariel, Barcelona.
Fioravanti, Mauricio, 2001. Constitución, de la antigüedad a nuestros días. Selección. Trotta, Madrid.
LANZARO, Jorge (Comp.) (2003) "Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina". FLACSO, Buenos Aires.
Mateucci, Nicola, 1998. Organización del Poder y Libertad. Historia del constitucionalismo moderno. Selección. Ed. Trotta, Madrid.
Miller, Jonathan, Gelli, María A., Cayuso, Susana, 1995. Constitución y Poder Político. Astrea, Buenos Aires.
Nohlen, Dieter y Fernández, Mario (ed.), 1998. El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina. Nueva Sociedad, Caracas.

Unidad 9. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Gobierno: concepto. Administración Pública. La reglamentación como límite a la discrecionalidad y como instrumento de poder.
Burocracia y tecnocracia. Técnicas de decisión. Modernización/Reforma del Estado: los modelos de Estado.
El análisis institucionalista.

Bibliografía principal
Cotta, Maurizio, 1998. Cap. 8. Los gobiernos. Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alianza.
Colombo, Paolo, 2003. Gobierno. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
O´Donnell Guillermo, 1998. "*Acountabilitty* Horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza" en *La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad*, Nº 4, ISSN 1136-2251, pags. 161-188. Paidós Ibérica.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alianza. Cap. 9. Las burocracias. Panebianco, Angelo.
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Cap. 14. Técnicas de decisión.
Weber, Max, 1992. Economía y Sociedad. Selección de capítulos. FCE. México.

Bibliografía complementaria
Crozier, Michel, 1974. El fenómeno burocrático. Tomos I y II. Amorrortu, Buenos Aires
Dror, Yehezkel, 1990. Enfrentando el futuro. FCE, México.
Fedrich, Carl J., 1968. El hombre y el gobierno – Una teoría empírica de la política. Tecnos, Madrid.
García Pelayo, Manuel, 1974. Burocracia y tecnocracia y otros escritos. Alianza Universidad, Madrid.
March, James y Olsen, Johan, 1993. "El Nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida política" en *Zona abierta* 63/64, Madrid.
Meynaud, Jean, 1968. La tecnocracia: ¿Mito o realidad?" Tecnos, Madrid.
Olías de Lima, Blanca, 2001. La Nueva Gestión Pública. Alhambra, Madrid.
Oszlak, Omar (Comp), 1984. Teoría de la burocracia estatal. Paidós, Buenos Aires.
Peters, Guy. 2003. El Nuevo Institucionalismo: Teoría Institucional en la Ciencia Política. Gedisa, Barcelona.

Unidad 10. CLASE POLÍTICA Y ÉLITES
La teoría general de las elites y las doctrinas de la "clase gobernante".

La actualidad de Mosca y Gramsci a propósito de la "clase política". Hegemonía y "fórmula política". Personalidad, carisma y conducción política. La intelligentsia. Liderazgo político.

Bibliografía principal
Bobbio, Noberto, 1997. La duda y la elección. Intelectuales y poder en la sociedad contemporánea. Paidós, Barcelona.
Laurito, Agustina, 2006. Introducción y esquema de la Sociología Política de Robert Michels. Facultad de Ciencias Sociales. Material de la cátedra. USAL.
Mosca, Gaetano, 2004. La clase política. (Selección e introducción de Norberto Bobbio). FCE, México.
Pareto, Vifredo, 1980. Forma y equilibrio sociales. Extracto del Tratado de Sociología, Alianza, Madrid

Bibliografía complementaria
Beyme, Klaus von, 1995. La clase política en el Estado de partidos. Alianza Universidad, Madrid.
Bottomore, Thomas B, 1965 "La elite: concepto e ideología" en Minorías selectas y sociedad. Gredos, Madrid.
Dahl, Robert, 1961. Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press, New Haven.
Cavalli, Luciano, 1999. Carisma. La calidad extraordinaria del líder. Losada, Buenos Aires.
Gramsci, Antonio, 1985. "El príncipe moderno", en La política y el Estado moderno. Planeta-Agostini, Bogotá.
Lipset, 1963. El hombre político, Eudeba, Buenos Aires.
Mills, Wright, 1993. La Elite del Poder. Fondo de Cultura Económica. México.

Unidad 11. CULTURA POLÍTICA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y BIOPOLÍTICA
El concepto de cultura política. Tipos: parroquial, súbdito y participante. Tipos de cultura política mixtas. El concepto de subcultura política. La cultura cívica.
El desencanto de la política y los nuevos movimientos sociales. Las ONG´s y su participación política.
Nuevos temas: El problema del pluralismo y las sociedades multiétnicas. Biopolítica. Nuevas formas de comunicación política: Sociedad de la Información.

Bibliografía principal
del Águila, Rafael. Manual de Ciencia Política. Cap. 10. Cultura política. Torcal.
Foucault, Michel, 2007. Nacimiento de la Biopolítica. Selección. FCE, Buenos Aires.
Offe, Carl, 1998. Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Ed. Sistema. Cap. VII. Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alizanza. Cap. 5. Participación política, grupos y movimientos sociales.

Bibliografía sugerida
Almond, G. y Powell G. B., 1972. Política comparada. Paidós. Buenos Aires. Capítulo 7. La función de comunicación.
Almond, Gabriel y Sidney Verba, 1992. "La Cultura Política" en Albert Battle (comp.). Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Ariel. Barcelona.
Deutsch, Karl, 1971. Los nervios del Gobierno. Paidós. Buenos Aires. Cap. 9. Lewellen, Ted C., 1994. Introducción a la antropología política. Bellaterra, Barcelona.
Modelos de comunicaciones y sistemas de decisión.
Habermas, Jürgen, 2002. El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? Paidós, Barcelona.
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Cap. 13. Sociedad Libre.

Sartori, Giovanni, 2001. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid. Tecnos.

Unidad 12. REBELIÓN Y CAMBIO POLÍTICO
El cambio político. Las explicaciones evolucionistas. Reformismo institucional. La tesis socialista y liberal del reformismo. La explicación revolucionaria del cambio político. Teorías de las revoluciones. Consentimiento y rebelión en Hobbes y Locke.
La movilización política. Liderazgo, partido revolucionario y movimientos de masas. El problema de la guerra civil y la integración social.
Las revoluciones contemporáneas. Ideologías dinámicas, mitos políticos y religiones civiles. Los movimientos totalitarios de inclusión social. La violencia política.

Bibliografía principal
Bobbio, Norberto, 1997. "Cambio Político" en Norberto Bobbio: el filósofo y la política. FCE. México.
Etzioni, Amitai, 1980. La sociedad activa. Una teoría de los procesos sociales y políticos. Aguilar. Madrid. Parte V. "Mas allá del imperialismo" pp. 621-692.
Ricciardi, Mauricio, 2003. Revolución. Léxico de Política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Sorokin, Pitirim, 1962. Dinámica social y cultural. Instituto de Estudios Políticos, Madrid.

Bibliografía complementaria
Arregui Hernández, Juan José, 1963. ¿Qué es el ser nacional? Hachea, Nuenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1994. "Teorías del control político" (pp.88-134) en Teoría Política del siglo XX. De la modernidad a la postmodernidad. Alianza, Madrid.
Fanon, Franz, 1983. Los condenados de la tierra. FCE, México.
Skocpol, Theda, 1984. Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China. FCE, México
Simmel, Georg, 2002. "La lucha" (1908) y "La dominación" (1908) en Sobre la individualidad y las formas sociales. U.N.Q., Buenos Aires.
Taguieff, Pierre A. "Las ciencias políticas frente al populismo: de un espejismo conceptual a un problema real" en: Paul Picone et. al., 2003 Populismo Posmoderno. UNQ. Buenos Aires pp. 29-81
Taylor, Charles, 2006. Imaginarios sociales modernos. Paidós Básica, Barcelona.

Unidad 13. CAMBIO POLÍTICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
Dinámica de las relaciones internacionales. La Paz de Westfalia y el Ius publicum europaeum. Soberanía y globalización.
Funcionalismo y adaptación. La categoría de equilibrio de poder. El conflicto y la cooperación internacional.
La guerra y la paz en su formulación política moderna y contemporánea. La "guerra justa". Anticolonialismo y antiimperialismo.
Bloques regionales y proyecciones imperiales. El Imperio como forma política.

Bibliografía principal
Beck, Ulrich, 1998. ¿Qué es la globalización? Piados, Barcelona.
Giddens, Anthony, 2000. Un Mundo Desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid. Taurus.
Schmitt, Carl, 2003, El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del «*Ius publicum europaeum*». Comares, Granada. Selección de capítulos.
Zolo, Danilo, 2007. "El Imperio y la Guerra" en La justicia de los vencedores. Edhasa, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria
Aron, Raymond, 1985. Paz y guerra entre las naciones. Alianza, Madrid.
Arendt, Hannah, 1967. Sobre la revolución. Revista de Occidente, Madrid.
Habermas, Jürgen, 1997. Más Allá del Estado Nacional. Trotta, Madrid.
Schmitt, Carl, 1995. "El Concepto de Imperio en el Derecho Internacional" en Escritos Políticos. Heracles, Buenos Aires.
Stiglitz, Joseph E., 2002. El Malestar en la Globalización. Buenos Aires. Taurus.

PROYECTO Nº 7: Autor: Sebastián PIANA Secretario de Investigación Científica. Profesor adjunto de "Derecho Político". Propone el dictado a los alumnos del grado de algunos contenidos mínimos de epistemología y metodología de la investigación.

La Plata, 08 de julio de 2011
Sr. Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abog. Vicente ATELA
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar como propuesta la creación de tres materias específicas con contenido interdisciplinar vinculadas a la **epistemología**, la **metodología de la investigación** y a la **escritura de documentos científicos**.

Considerando mi propia experiencia formativa como investigador, entiendo que resulta importante ampliar las oportunidades de los futuros abogados en el ámbito de la investigación. A excepción del seminario de **Metodología de la Investigación Científica en Ciencias Jurídicas y Sociales** que se dicta actualmente en nuestra Facultad, los estudiantes sólo pueden recibir esa formación en el postgrado.

A tales fines, se propone la creación de las materias indicadas más arriba que podrían integrar un núcleo de especialización dentro de la carrera orientado a la investigación científica de las ciencias jurídicas.

El objetivo de la materia es proporcionar a los alumnos un marco general para la comprensión, descripción y explicación de los fenómenos epistemológicos, científicos y teórico prácticos en la redacción de documentos que den cuenta de los resultados de la investigación.

A fin de una mayor justificación de la relevancia y necesidad de incluir estas materias, se adjuntan Programas tentativos con las temáticas a tratar.

Sin otro particular, saludo a usted muy cordialmente.

Dr. Ricardo Sebastián Piana

A. EPISTEMOLOGÍA
Corrientes epistemológicas contemporáneas. Unidades de estimación del conocimiento, Criterios e indicadores de avance del conocimiento. Relaciones entre Epistemología, Lógica y Metodología de la Investigación. Distinción entre método y metodología; funciones del método. Fundamentos, teoría básica y matriz epistémica de la tesis.
Pluralidad de las estructuras racionales. Perspectivas de análisis. Marcos de referencia. Teorías presupuestas y esquema conceptual unificado. Marco teórico: función metodológica, delimitación, componentes, criterios de selección y composición.
Nociones, conceptos y categorías. La elucidación. La objetividad como asunto social y como producto de la crítica. La noción metodológica de intersubjetividad. La lógica de las ciencias sociales.
Estructura de la teoría: términos, enunciados y niveles. Concepción enunciativa y funciones de la teoría.
Textos sobre epistemología
KLIMOVSKY, Gregorio, Las desventuras del conocimiento científico, AZ, Buenos Aires, 1994.
KLIMOVSKY, Gregorio. y DE ASÚA, M., Corrientes epistemológicas contemporáneas, Editores de América Latina, Buenos Aires, 1997.
MERRYMAN, John H., La tradición jurídica romano canónica, FCE, México, 1979 (1971).
NAGEL, Ernest, La estructura de la ciencia, Paidós Ibérica, 2006.
NIETO, A. y A. GORDILLO, Las limitaciones del conocimiento jurídico, Trotta, Madrid, 2003.
PIAGET, Jean, Lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos de la epistemología, Proteo, Buenos Aires, 1970.
SCHUSTER, Félix Gustavo, "Los límites de la objetividad en las ciencias sociales", en Gaeta, A. y Robles, N. (comp.), Nociones de epistemología, Eudeba, Buenos Aires, 1985.

B. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Hipótesis: tipos y condiciones. Refutación y corroboración. Asimetría epistémica de la contrastación.
Diseños de investigación: noción y tipos. Investigación teórica. Estudios históricos y crítico-evaluativos. Trabajo de campo. Diseños cuasiexperimentales y factores de invalidación de los resultados en la investigación social.

Teoría de la explicación. Explicación y predicción, tesis de simetría. Explicación y comprensión en ciencias sociales. Explicación de generalizaciones estadísticas. Explicaciones causales, conceptuales, genéticas, por razones, funcionales, por motivos, por capacidades y por intenciones.
Objeto y unidad de análisis. Origen de los problemas investigables en las ciencias sociales. Variables e indicadores. Fuentes y medios de prueba.
Textos sobre metodología de la investigación
BORSOTTI, Carlos A., Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2007.
Buenos Aires, 1994.
CAMPBELL, D. y J. STANLEY, Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
CARNAP, Rudolf, "Sobre la elucidación", en Mario Bunge (dir.), Cuadernos de Epistemología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, s/d (ca. 1962), pp. 1-19.
EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice, Metodología de la investigación. ECAFSA, Thomson Learning, s.l., 2002.
GIANELLA DE SALAMA, Alicia, Introducción a la epistemología y a la metodología de la ciencia, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1995.
HEMPEL, Carl, La explicación científica, Paidós, Buenos Aires, 1979.
HERNÁNDEZ SAMPIERI y otros, Metodología de la Investigación, Editorial Mc Graw Hill. México, 2000.
HOROWITZ, Irving Louis (dir.), Historia y elementos de la sociología del conocimiento, Eudeba, 1974.
SAUTÚ Ruth, El método biográfico, edit. Lumiere, Buenos Aires, 2004.
SAUTÚ, Ruth y Catalina WAINERMAN (comp.): *La trastienda de la investigación.* Editorial Lumiere. Buenos Aires, 2001. Tercera edición.
SCHUSTER, Félix Gustavo, El Método en las Ciencias Sociales, Editores de América Latina, 2004.
SCHUSTER, Félix Gustavo, Explicación y predicción. La validez del conocimiento en ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 1982.
SCRIBANO, Adrián, Teoría social y hermenéutica, Centro Editor de América Latina,
TAYLOR y BOGDAN. Introducción a los métodos cualitativos de investigación edit. Paidos. Buenos Aires, 1998.
TOPOLSKY, Jerzy, Metodología de la Historia, Cátedra, Madrid, 1985.
VÁZQUEZ, Héctor, La investigación sociocultural: crítica de la razón teórica y de la razón instrumental, Biblos, Buenos Aires, 1994.

C. ESCRITURA DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS
Análisis del tema. Elementos temáticos y aspectos de la problemática. Aspectos descriptivos, estructurales, funcionales, genéticos, históricos, evolutivos y dialécticos; tensiones argumentativas.
Anteproyecto de investigación, finalidad y partes componentes. Objetivo general del proyecto de tesis; factibilidad. Articulación entre tema, problemática, enfoque, fuentes y diseño. Lógica interna, organización y ejecución del proyecto.
Plan general del anteproyecto de tesis/investigación. Estructura y aspectos de forma; función de las partes; Ítem complementarios. Utilidad del índice tentativo. Previsión de un sistema de referencias internas.
Análisis documental. Sistemas de información. Terminología de la documentación (UNESCO). Tesauros. Fuentes de catalogación indefinida.
La utilidad de las normas de la ABNT (Brasil).

Textos
ACOSTA HOYOS, Luis. E, Guía práctica para la investigación y redacción de Informes, Paidós, Buenos Aires, 1995.
CARDOSO, Ciro, F., Introducción al trabajo de investigación histórica, Crítica, Barcelona, 1981.
CHOMSKY, N. / FOUCAULT, M. y F. ELDERS, La naturaleza humana: justicia versus poder. Un debate, Katz, Buenos Aires, 2006.
FRANCIA, Álvaro, La investigación científica: guía para confeccionar y redactar trabajos de investigación, Librería Agropecuaria, Buenos Aires, 1995.
HEMPEL, Carl, La explicación científica, Paidós, Buenos Aires, 1979.
Paraninfo, Madrid, 1995.
SABINO, Carlos, *Como escribir una tesis.* Editorial Lumen Humanitas. Buenos Aires, 1998.
SIERRA BRAVO, Restituto, Tesis doctorales y trabajos de Investigación científica,

PROYECTO N° 10: Autor: Juan A. GARCIA ZEVALLOS, formula reflexiones acerca del "Curso de Adaptación Universitaria" para ingresantes a la carrera con propuesta de inclusión definitiva del curso de adaptación universitaria en el programa de la FCJ.
Sumario: Acompaña actualizaciones al programa de formación consiste en la inclusión definitiva al programa del CAU (Curso de adaptación universitaria) como una asignatura más de la curricula. Relata haber sido alumno ingresante del curso instrumentado en 1994 que califica de "enorme ayuda" para iniciarse en los temas de las asignaturas que seguirían. Le da carácter de ámbito positivo para el desarrollo académico.
(NO SE TRANSCRIBE POR ESTAR EN FORMATO PDF)

PROYECTO N° 11: Autor: Agrupación Estudiantil "Construyendo Derecho" realiza consideraciones y propuestas acerca de la reforma al plan de estudios de la carrera.

La Plata, Agosto de 2011
Proyecto de Reforma del Plan de Estudios
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

"Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana"***[1]***
"No basta con teorizar sobre la Justicia, sino que hay que luchar para realizarla"***[2]***

CONSIDERACIONES GENERALES
En la actualidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ha comenzado un proceso de reforma de su plan de estudios con el objetivo de actualizar contenidos, modificar

correlatividades, enunciar objetivos y propósitos, revisar metodologías y evaluar un mejor desarrollo de prácticas profesionales.

El **plan de estudios** vigente quedó configurado en el año 1985, siendo modificado por última vez en el año **1988**; tras esa reforma quedó estructurado de la siguiente manera: cuenta con 31 materias teóricas, dos prácticas y un trabajo de investigación - seminario.

Teniendo en cuenta que desde la última revisión han pasado casi 23 años y en el marco de un contexto nacional e internacional complejo y dinámico, resulta urgente renovar la actual estructura con el objeto de incorporar las nuevas demandas sociales y de delimitar objetivos acerca del Perfil del Profesional que se debe formar en nuestra facultad y del lugar que se le va a dar a la Enseñanza, la Investigación y la Extensión Universitarias.

Consideramos que los profundos **cambios** que se vienen sucediendo en la sociedad, en nuestro país y en la región, **impactan sobre la Universidad y obligan a repensar su rol y función**, se genera la posibilidad de discutir si la Educación Superior debe estar al servicio de los intereses de unos pocos, formando profesionales individualistas, meramente técnicos y reproductores de un saber concebido por otro, produciendo conocimiento para grupos económicos privados, con una universidad absolutamente desconectada de la realidad o, si por el contrario, trabajamos por construir un modelo de universidad en armonía con las necesidades de las mayorías, por recuperar una visión estratégica de un proyecto de educación pública, popular y masiva dentro de un Proyecto Nacional, Popular y Latinoamericano con una concepción humanista y crítica.

Nuestra meta debe ser la edificación de una **universidad comprometida socialmente**: con fomento de prácticas de extensión y articulación con otros sectores, con la promoción de investigaciones en función de los intereses y problemáticas de las mayorías, con la incorporación de sectores sociales, organizaciones gremiales y sindicales, junto a los actores de la comunidad universitaria, en las instancias de diseño, concepción y planificación.

En el año 2008, tras la lucha y el trabajo de los miembros de todos los claustros, se logró **reformar la Carta Magna de la UNLP**, a partir de lo cual se incorpora un conjunto de reivindicaciones que se encaminan en la construcción de una Universidad más inclusiva y comprometida socialmente.

Pudimos avanzar en la articulación de la Universidad con la sociedad, jerarquizando la Extensión Universitaria que antes de la reforma era un artículo perdido del Estatuto. Pudimos avanzar en aumentar considerablemente la cantidad de Proyectos de Extensión que hoy brinda la Universidad de La Plata, para que cada vez más estudiantes se involucren con las problemáticas sociales. Pudimos sumar a las organizaciones sociales, gremiales y políticas a la orientación del objeto de estudio de nuestras carreras, creando un Consejo Social donde los sectores populares tengan la posibilidad de expresar qué esperan de ésta Universidad Nacional. Pudimos establecer la condición de derecho adquirido e inalienable de los estudiantes las materias aprobadas, y que bajo ninguna circunstancia o situación puedan ser perdidas o derogadas. Logramos concretar la gratuidad de los doctorados para los docentes e investigadores que se desempeñan en las distintas Facultades de la UNLP. Se logro un profundo y contundente pronunciamiento por el ingreso libre e irrestricto a todos los estudiantes. La educación es un derecho, no es un servicio ni una mercancía. Un derecho de todos, no de unos pocos. Y como Universidad pública-estatal orientada a las necesidades de las mayorías, es inconcebible que hoy haya sectores que nos sigan planteando que hay algunos que pueden estudiar y otros que no. Conseguimos que quede sentado en el Estatuto la prohibición de ocupar cargos a personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y al terrorismo de Estado. Logramos incorporar al Bienestar Universitario como Título del Estatuto, para que la Universidad se comprometa a ejecutar políticas en la materia. Logramos la histórica incorporación de los trabajadores no-docentes, con voz y voto a los órganos de co-gobierno universitario.

En este nuevo momento histórico que estamos atravesando en Latinoamérica y Argentina se nos presentan nuevos desafíos como comunidad educativa para estar a la altura del proceso político que estamos viviendo y cumplir la tarea de nuestra generación: la verdadera independencia económica, política y cultural.

Dentro de este marco sabemos que solo con la organización del pueblo es que vamos a garantizar las condiciones para profundizar este proceso que comenzó en el 2003 de redistribución de riqueza, incorporación de sectores sociales que estaban excluidos de lo económico y de mejoramiento social; esto lo podemos ver en la estatización de Aerolíneas y las AFJP, la AUH, la sanción de la Ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, el avance del movimiento obrero como actor político fundamental, entre otras cosas. Sabemos que hay mucho por profundizar, pero también sabemos que es responsabilidad nuestra defender lo que conseguimos y avanzar por más, como región, como país, como universidad y como facultad.

Haciendo un **recorrido histórico** de cómo ha evolucionado el programa de estudios de esta unidad académica, se puede observar que el mismo ha sido la cristalización de un determinado momento histórico, de un proyecto de país y de un modelo de educación.[3]

Consecuentemente, la **actual reforma debe responder a los designios que marca la actual coyuntura social, política, económica y cultural**; los abogados que se gradúen en nuestra facultad deben ser profesionales conscientes de su responsabilidad social; magistrados, patrocinadores y asesores garantes del acceso a la justicia; mediadores en los conflictos y controversias; cuadros estatales con capacidad de diseñar e implementar políticas que respondan a los intereses del pueblo; militantes políticos representantes de sus territorios; profesionales capaces de contribuir a la transformación de su entorno, en la búsqueda de la libertad, la igualdad y la justicia.

Entendemos que la transformación que se haga debe ser la expresión del debate, la discusión y participación de todos los actores de la comunidad universitaria, del trabajo y construcción colectivos, que en el nuevo programa deben estar plasmadas las opiniones, miradas y aportes de las mayorías.

Celebramos la oportunidad que hoy se nos presenta de poder ser actores de este cambio, afirmamos y asumimos nuestra responsabilidad de ser protagonistas y promotores de los procesos de democracia participativa.

PERFIL PROFESIONAL, PERFIL CURRICULAR Y ENSEÑANZA DEL DERECHO

Antes de pasar a considerar cual el es perfil del profesional que debería orientar el diseño del nuevo Plan de Estudios, nos parece necesario analizar cual es la orientación actual del egresado de nuestra unidad académica.

Como desarrollamos en el apartado anterior, la misión, objetivos, orientación y perfiles que se forman en cada facultad, en cada universidad o institución, responde a un determinado momento histórico, a un determinado proyecto.

Nuestra Educación ha recreado una concepción neoliberal, que se cristalizó a través de la Ley de Educación Superior de los años '90 y que se tradujo en cuál debería ser la función de la universidad, la extensión y la investigación, cómo debería ser el financiamiento, la autonomía y el gobierno universitarios y de qué forma se debía estructurar la docencia y la enseñanza.

En la Educación del Neoliberalismo se forma un profesional individualista, distanciado de las problemáticas y las necesidades del pueblo; aislado, alejado de la situación socio-política-cultural nacional e internacional; un técnico, reproductor de un saber pensado y elaborado por otro.

Estos rasgos son palpables en el tipo de abogado que se forma en nuestra facultad.

El graduado no tiene conciencia ni visión colectivas, no se estimula la comprensión de la importancia que tiene entendernos como parte de una sociedad, como actores de un sistema, como beneficiarios de una educación pública, financiada gracias al esfuerzo de toda una Nación y, en ese sentido, conscientes de las responsabilidades políticas, jurídicas, sociales y éticas que tenemos como profesionales con los diferentes sectores del pueblo.

El "éxito profesional" está asociado con la acumulación material, con el "triunfo" judicial, con el "engorde" del currículo vitae; se construye una visión competitiva del rol que tenemos, haciendo primar nuestros intereses individuales por sobre las necesidades de un colectivo. La "víctima", el "imputado" que nos toca defender, asesorar, juzgar, acompañar, deja de ser una persona para pasar a ser el "cliente", un "sujeto de derecho", una mercancía; se pierde la humanidad en las relaciones, quedando desoída la necesidad social de formar juristas con capacidad de mediar y conciliar.

Nuestro plan de materias suele orientar al egresado a desempeñarse como "litigantes", sin fomentarse el desarrollo en otras esferas laborales; en términos porcentuales es escaso el número de egresados que deciden dedicarse a la docencia, la extensión y la investigación universitarias, sumado a una fuerte desarticulación entre esas prácticas.[4]

No se estimula una concepción crítica del Derecho; la evaluación del contexto socio-histórico-político y cultural de creación, sanción y ejecución de la ley; un análisis acerca del momento en que nace la norma, su proyección, adecuación y conexión con la situación nacional, regional e internacional actual. De esta forma, la "disposición legal" se dogmatiza; el estudiante, el egresado, no aprende a cuestionarla; no la concibe como la cristalización de una correlación de fuerzas, como la traducción de un proyecto, el fruto de una lucha, sino como una "verdad dada", como un precepto incorruptible.

En relación al perfil curricular y modelo de enseñanza, se observan los siguientes problemas:

-no se implementan estrategias que fomenten una participación activa de los estudiantes, la integración, trabajo e intercambio grupal; nos encontramos con "clases magistrales", puras exposiciones teóricas donde el debate, la pregunta y la repregunta suelen estar ausentes; el docente se relaciona de una forma impersonal con el estudiantado, hecho que se ve reforzado por el no aumento de la planta general de profesores frente al contiguo crecimiento del ingreso que genera alta cantidad de estudiantes por docente, dificultando aún más el proceso de aprendizaje;[5]

-dificultad para la integración de los conocimientos propios del plan de estudios y la necesidad de revisión del sistema de correlatividades vigentes;[6]

-la necesidad de fomentar la formación general del estudiante de derecho y aumentar su vinculación con otras disciplinas y su circulación en otras facultades;

-la dificultad para integrar los contenidos de la teoría con la práctica y la escasez de herramientas para el ejercicio práctico al concluir los estudios de grado;

-la poca centralidad que se le otorga a las prácticas de investigación científica: el programa vigente sólo contempla la realización de un "Seminario" (con la opción de hacerlo bajo la modalidad "libre" o "cursado"), que concluye con un trabajo monográfico;

-la falta de actualización e incorporación de ramas, temas y bloques de conocimiento afines con nuestra disciplina y que urge su contemplación para adecuar nuestra formación a las demandas sociales actuales.

Considerada la situación actual, nos parece apropiado comentar cual entendemos que debe ser el perfil profesional, curricular y de enseñanza del derecho que debe inspirar la reforma.

Como bien surge del documento de "Autoevaluación Académico- Institucional de la FCJS de la UNLP - 2007-2010", la abogacía debe ser comprendida como una profesión que implica obligaciones referidas a la traducción de demandas sociales colectivas e individuales en reclamos jurídicos y la inclusión de sectores excluidos del acceso a la justicia.

Se debe promover la formación de profesionales críticos, conocedores de sus deberes y derechos, con ideales democráticos, con sentido ético, humanista, con visión colectiva y solidaria, capaces no sólo de asimilar conocimientos teóricos, sino de crearlos y de asumir posiciones transformadoras en todos los aspectos, que rescaten nuestra identidad nacional y latinoamericana.

El egresado debe tener la capacidad de resolver problemas profesionales complejos, fomentando un espíritu creativo para imaginar y obtener soluciones jurídicas originales.

Para la mejora de nuestra formación profesional, es necesario apuntalar y consolidar la articulación entre docencia, extensión e investigación; profundizar la formación en tales prácticas con el objeto de que la facultad sea el ámbito de producción de conocimiento, que el mismo se oriente en función de las necesidades y problemas del pueblo; que sea a través de la experiencia acumulada en el terreno de articulación con otros sectores sociales que se redireccionen las prácticas futuras.[7]

El modelo de enseñanza debe estar basado en la resolución de problemas, en hacer del estudiante el centro de la actividad cognoscitiva y en el uso de las estrategias de interacción grupal con el propósito de que los alumnos sean sujetos activos en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. De esta forma el aprendizaje se da mediante el enfrentamiento directo a problemas reales en el contexto de la producción social: económica, política y cultural.

COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

A partir del diagnostico realizado y de los objetivos planteados, proponemos las siguientes reformas al plan de estudios vigente:

Materias iniciales o propedéuticas. Conforme los datos publicados en la página de nuestra facultad, entre un 25 y un 30% de los aspirantes a nuestra carrera, abandonan sus estudios durante el Curso de Ingreso; a esto hay que sumarle las tasas de deserción a lo largo del primer año. Entre las causales cabe mencionar: la dificultad para adaptarse a un nuevo nivel educativo, culminado el secundario; la falta de contención afectiva (sobre todo para aquellos que dejan su lugar de origen para venir a estudiar a esta ciudad); limitaciones de índole económica; los problemas que se presentan en materia de comprensión,

redacción y producción de textos, que tornan dificultoso la posibilidad de estudiar la cantidad de material que se exige, propio de una carrera de grado.

Entendemos que para que la posibilidad de acceso y permanencia sea real, desde cada unidad académica se deben tomar medidas de contención en cuatro aspectos: Económico (a través de las políticas de Bienestar Estudiantil), Psicológico-afectivo (a través de Gabinetes integrados por equipos interdisciplinarios: Psicólogos, Lic. en ciencias de la Educación, Trabajadores Sociales), Informativa (democratizando y garantizando el real acceso a la información necesaria para poder desempeñarse en el ámbito universitario) y Académica.

En lo concerniente al último punto, entendemos que el actual Curso de Adaptación Universitaria no está siendo una herramienta eficaz a los efectos de trabajar sobre los problemas que implican el pasaje de un nivel educativo a otro, ante todo, por su corta duración. En ese sentido, proponemos la implementación de un "Ciclo Básico", al igual que otras Facultades de Derecho del país, a partir del cual los aspirantes comenzarían a cursar materias propias de la currícula directamente (sin curso de ingreso); para ello habría que revisar las materias propedéuticas vigentes para, a las ya existentes, adicionarle otras.

Este ciclo podría quedar conformado de la siguiente manera:

Primer cuatrimestre
Taller de Producción y Comprensión de Textos [8]
Realidad Nacional y Latinoamericana[9]
Introducción al Derecho
Segundo Cuatrimestre
Derecho Romano
Historia Constitucional
Introducción a la Sociología

Materias optativas. Se podría agregar al actual plan la posibilidad de realizar dos o tres materias optativas para enriquecer nuestra formación. Para ello, proponemos dos modalidades:

❖ Interdisciplinariedad - Articulación con otras unidades académicas.

En muchas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata, la currícula esta conformada no sólo por materias propias de la respectiva carrera sino también por asignaturas optativas tendientes a complementar y enriquecer la formación.

En el ejercicio de nuestra formación nos encontramos ante la necesidad de especializarnos en distintos campos afines con las ciencias jurídicas: sociología, psicología, medicina (forense), geología (minería), historia, economía, inglés (relaciones internacionales), etcétera.

Se podría establecer un sistema de articulación con otras facultades a partir del cual los estudiantes de derecho tengan la posibilidad de optar por una, dos o tres materias, afines con la especialización u orientación a la que pretendan avocarse.

❖ Incorporación de materias a la currícula

Complementar el actual plan de estudios con otras materias expresivas de nuevas ramas del derecho, que han adquirido notoria relevancia en los últimos tiempos intentando dar respuestas a nuevos problemas, necesidades y avances sociales.

Algunas de esas materias, que hoy se dictan en otras Universidades Nacionales del país son:

-De Necesaria Incorporación (por su trascendencia conforme el momento histórico que estamos viviendo, los avances de la tecnología y evolución de la sociedad o por su relevancia para trabajar algunos de los problemas que se presentan en el plan actual)
DERECHOS HUMANOS[10]
MEDIACIÓN[11]
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN[12]
TALLER DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA[13]
TALLER DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DISCURSO Y LENGUAJE JUDICIAL[14]
-OPCIONALES
DERECHO DE LA COMUNICACIÓN[15]
DERECHO INDUSTRIAL[16]
DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES[17]
CRIMINOLOGÍA Y CONTROL SOCIAL[18]
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN[19]
DERECHO DE LA EDUCACIÓN[20]
IDIOMAS[21]
PEDAGOGÍA DEL DERECHO[22]

-Prácticas Profesionales. Una de las mayores dificultades con las cuales nos encontramos al recibirnos es con la falta de preparación para desempeñarnos en el campo laboral; consideramos que debe ser en la carrera de grado donde se nos deben brindar las herramientas necesarias para poder responder a las diferentes demandas con las cuales nos vamos a encontrar en la sociedad.
Para ello, creemos interesante la adición de una tercera materia práctica que consista en una especie de pasantía o residencia a lo largo de un cuatrimestre o durante todo un año. Los estudiantes elegiríamos un campo de intervención de la práctica forense como: Legislaturas, Ministerio Público, Poder Judicial, Colegial (colegios profesionales), Consultorio Jurídico Gratuito, Administrativo (Universidad, Ministerios, Municipio, Secretarías, etc).[23]

Agrupación Estudiantil **ConstruyendoDerechos**
MILES (Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil)
Comisión Interclaustro para la Reforma del Plan

ANEXO
Programa de Formación Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires

El nuevo plan de formación docente contempla 4 materias correlativas: Pedagogía Universitaria, Didáctica General, Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza. (Anexo 3)

Los contenidos incluidos en estas asignaturas en buena medida ya se desarrollaban en el plan anterior repartidos en los distintos módulos pedagógicos. Se realizará una adaptación entre los dos planes de modo que quienes estén cursando puedan continuar haciéndolo sin que se incremente el número de materias.

1) "Pedagogía Universitaria"

El proyecto académico de la universidad. Los modelos de universidad a fines del siglo XX y comienzos del XXI. Los sistemas nacionales y el contexto internacional. La legislación universitaria argentina y el Estatuto Universitario de la UBA. Los problemas pedagógicos de la educación superior argentina. La especificidad de las cuestiones académicas y su interdependencia mutua: docencia, investigación, extensión y transferencia. Disciplinas y profesiones. El curriculum universitario de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA.

El proceso de diseño curricular en el caso de las carreras de la Facultad de Derecho: el formato curricular, la adecuación, la pertinencia, la calidad y la dinámica de la oferta académica. Análisis de las asignaturas en el plan de estudios. Los problemas para la instalación de innovaciones curriculares. El lugar de teoría y de práctica en la formación de profesionales y sus relaciones en virtud del plan de estudios.

2) "Didáctica General"

La programación de la enseñanza: elaboración del programa de un curso. Unidades didácticas. Tipos de unidades. Selección de contenidos. Secuenciación de contenidos y de actividades. Distribución de tiempos. Enfoques de enseñanza. Fases de la enseñanza: pre-activa, interactiva y posactiva.

Enseñanza y evaluación. Los principios de la evaluación de los aprendizajes. Los principales enfoques teóricos de la evaluación de los aprendizajes. Las modalidades de la evaluación y su relación con los propósitos de la enseñanza y del aprendizaje.

Requisitos básicos de los programas y los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación. Escalas de calificación y regímenes de promoción. Análisis e interpretación de resultados.

3) "Didáctica Especial de la Disciplina"

3.1.) Didáctica del Derecho

Análisis de las asignaturas del plan de estudios de Abogacía: impacto de la formación general en filosofía, historia, sociología y economía para fortalecer la perspectiva del Derecho. La promoción de la integración de contenidos en cada asignatura a partir del conocimiento del diseño curricular de la carrera de Abogacía.

Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza del derecho. La comparación de sistemas jurídicos como criterio para enseñar derecho en perspectiva internacional. El análisis de casos; la utilización de los problemas como criterio para enseñar Derecho. Aprendizaje basado en problemas. Análisis de fallos jurídicos. La simulación como estrategia para enseñar derecho público y derecho privado. La enseñanza de la mediación: criterios y aspectos involucrados.

Laboratorio de casos reales y aplicación en la formación para la práctica profesional. La argumentación y el lugar de la lógica de la investigación en la enseñanza del derecho. La investigación sobre la propia práctica docente en la enseñanza del Derecho.

La evaluación de los aprendizajes y de la calidad de la docencia: la evaluación según el proyecto curricular de la carrera de Abogacía de la UBA. El diseño de un programa de evaluación acorde con los contenidos de cada área del derecho y de las asignaturas y cursos que las enseñan.

3.2) Didáctica para la carrera de Traductorado Público

Análisis de las asignaturas del plan de estudios de la carrera: impacto de la formación general en lengua materna y su vinculación con la lengua extranjera; impacto de la formación en derecho sobre los propósitos y el perfil del graduado de la carrera. La promoción de la integración de contenidos en cada asignatura a partir del conocimiento del diseño curricular de la carrera.

Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de la traducción pública y de la interpretación. La simulación como estrategia para enseñar traducción pública e interpretación.

Laboratorio de casos reales y aplicación en la formación para la práctica profesional. La investigación sobre la propia práctica docente en la enseñanza de la carrera. La evaluación de los aprendizajes y de la calidad de la docencia: la evaluación según el proyecto curricular de la carrera. El diseño de un programa de evaluación acorde con los contenidos de cada orientación y especialidad de la carrera y de los cursos que las enseñan.

4) "Práctica de la Enseñanza"

Los procesos de reflexión sobre la práctica docente aplicados a la enseñanza del Derecho y de las otras carreras de grado de la Facultad. Aproximaciones al análisis de las clases desde diferentes abordajes: el contexto institucional, las conformaciones grupales, la comunicación y la negociación de significados.

El auxiliar docente de derecho como planificador, enseñante y evaluador. Las configuraciones didácticas. La buena enseñanza del derecho.

La observación: registro y notas en el trabajo de campo. Análisis de lo observado. La entrevista anterior y posterior a la observación de clases.

La programación y evaluación de la clase: selección de contenidos, elaboración de propósitos y objetivos, selección de estrategias de enseñanza, elaboración de actividades, criterios de evaluación en virtud de la asignatura en la que se realizará la práctica pedagógica. La docencia en las instancias de formación para la práctica profesional.

Análisis y reflexión acerca de las prácticas de enseñanza. Práctica reflexiva e implicación crítica.

---

[1] Manifiesto Liminar, Reforma Universitaria de 1918

[2] Arturo Sampay, Constitucionalista argentino

[3] A continuación detallamos algunos ejemplos de los cambios que ha sufrido nuestro plan de estudios a lo largo de la historia. Fuente: "Autoevaluación Académico- Institucional de la FCJS de la UNLP - 2007-2010" Publicado en www.jursoc.unlp.edu.ar

"otra modificación operará en el Plan, al eliminarse las materias propias del Derecho Comparado, pasando a ocupar aquellos lugares ramas del derecho privado nacional en el año 1919, y en este mismo año se elimina la carrera de Doctorado de la Facultad", (Año 1919 / Presidencia de la Nación Argentina a cargo de Hipólito Yrigoyen)

"el Plan que se aprobara en el año 1922 será derogado en el año 1929, tras aprobarse un nuevo Plan en el que se reemplazan ciertas asignaturas del anterior y se incorporarán nuevas, conforme al desarrollo del país y a las nuevas necesidades de la sociedad de la época y la formación de profesionales"; "se agregan materias como: Finanzas, Régimen Jurídico de las Comunicaciones"

(Año 1929, Presidencia de la Nación Argentina a cargo de Hipólito Yrigoyen)

"El año 1949 vislumbrará la incorporación de una nueva asignatura en el plan vigente, tras la introducción de lamateria *Legislación Aérea"*

*"*en el año 1953 se modifica la estructura del plan de estudios, al incorporarse un año más a la carrera de derecho y nuevas materias, pasando a conformar el mismo un total de veintinueve asignaturas"; se agregan materias como: Derecho Político, Derecho Internacional Público, Derecho Social (del Trabajo y de la Previsión Social), Derecho Industrial" (Presidencia de la Nación a cargo de Juan Domingo Perón)

"el mismo será modificado en el año 1958 al suprimirse la Asignatura *Derecho Industrial;* en 1960 se desdobla la materia Derecho Administravo en Derecho Administravo I y Derecho Administravo II. En 1963 también se desglosa la asignatura Derecho Agrario y Minería en Derecho Agrario y Derecho de la Minería y la Energía.
Asimismo, en el año 1964 comienza a operar una nueva modalidad para los cursos, al establecerse el sistema de asignaturas *optativas,* y en el año 1967 se suprime la materia *Derecho Político* del Plan aprobado en el año 1953"
(Presidencia de Facto de Pedro Aramburu 1955-58 / Presidencia de Facto de Juan Carlos Onganía)
"En el año 1974 se incorpora al Plan de Estudios una nueva asignatura denominada *Curso de Realidad Nacional* como materia obligatoria para el ingreso a la Carrera, y en el año 1975 se incorpora también para el ingreso, la materia denominada *Tríptico Nacional,* que constaba de la enseñanza y aprendizaje del idioma nacional, historia argentina y geografía argentina. En el año 1975 por Resolución del 18 de agosto, las mismas pasarán a formar parte del Plan de Estudios como materias de primer año y será necesario aprobarlas para poder rendir las de segundo año, también en ese mismo año se reincorpora la asignatura *Derecho Político* en el Segundo año de la carrera, y por Resolución del 28 de agosto se incorpora la asignatura *Derecho Internacional Público* como materia obligatoria de quinto Año"
(Presidencia de la Nación a cargo de Juan Domingo Perón)
[4] Datos extraídos del documento "Autoevaluación" publicado en la página de la facultad (pág. 35 y stes.)
"Como se desprende del total de los encuestados, el 57% ha manifestado que ha cursado alguna Especialización en Docencia Universitaria, en tanto que el 35% negaron rotundamente estudios en esta materia. En relación a aquellos que si han realizado alguna especialización en esta temática, solo el 41% la ha culminado, en tanto que el 18% se ha manifestado por la negativa. Lamentablemente el 41% se abstuvo de responder esta pregunta"
"En relación a las actividades de investigación científica llevadas adelante por el plantel docente de la FCJyS, el 41% ha realizado o realiza actualmente investigaciones, mientras que el 48% no ha realizado ni tampoco las lleva adelante en la actualidad. De aquellos 41% que son investigadores, solo el 28% se ha desempeñado o lo hace actualmente en el ámbito de la UNLP; el 4% las realiza o las ha realizado en el ámbito del CONICET y solo el 1% en el ámbito de la CIC, mientras que el 7% lo han sido o lo son de otras instituciones, tanto públicas -como la propia Facultad- como privadas. Respecto a la categorización, del total encuestado solo el 18% del plantel se encuentra categorizado ante la CONEAU, mientras que el 25% no lo está."
"Tal como se observa del plantel docente de la FCJyS encuestado, solo el 34% realiza o ha realizado actividades de Extensión, mientras que más de la mitad no las ha realizado ni las realiza, representando esta categoría el 52%.
Desde otra perspectiva solo el 3% ha ejercido o ejerce cargos de Gestión Universitaria, en tanto que el 57% no lo ha hecho nunca. Respecto al ejercicio profesional, además de la docencia en la Facultad, el 86% de los profesores realiza otras actividades laborales -tanto en el ámbito público como en el privado-, mientras que solo el 8% de los encuestados solo se dedica a la docencia universitaria.
De lo anteriormente expuesto se desprende que el perfil docente de los profesores que se desempeñan en la Facultad, son abogados de edad media, mayoritariamente hombres que residen en la ciudad de La Plata y que están casados. Asimismo, en relación a la formación profesional la mayoría solo son abogados, y han realizado actividades de postgrado pero no las han concluido, lo mismo sucede con los cursos o especializaciones en Docencia Universitaria. La mayoría de ellos han comenzado sus estudios luego de graduarse a partir del año 2000, y casi no realizan actividades de postgrado en la actualidad."
"En relación a las actividades de Investigación muy pocos las llevan adelante, y los que lo hacen pertenecen mayormente a los programas de la UNLP. Muy pocos de ellos se encuentran categorizados, pero sin embargo han publicado trabajos de su autoría, al menos uno en el período marzo 2009/2010.
El perfil docente que se desprende de la encuesta, muestra que casi no se realizan actividades de extensión universitaria, ni ocupan ni han ocupado cargos de gestión universitaria, pero ejercen la profesión tanto en ámbitos privados como públicos."
[5] Datos extraídos del documento "Autoevaluación" publicado en la página de la facultad (pág. 60)
"De igual modo, es de destacarse que la relación existente entre cantidad de alumnos y planta docente no resulta satisfactoria. Será necesario incrementar la cantidad de cargos de profesores adjuntos y titulares en vistas a las modificaciones previstas respecto del plan de estudios y régimen de enseñanza"
[6] Es reiterado el reclamo de situar a la materia "Derecho Constitucional" como asignatura correlativa de las correspondientes al derecho de fondo (Civil, Penal, etc); la necesidad que las materias que comprenden al derecho de forma o procesal se cursen o evalúen con posterioridad a la incorporación de la legislación de fondo (que aunque sea Derecho Civil II sea materia condicionante para poder cursar o rendir Derecho Procesal II); que por su contenido económico, Derecho Comercial II tenga como correlativa a Economía Política.
Otras cuestiones que habría que rever es la extensión de materias como Derecho Civil V y Derecho Social, cuyo programa resulta prácticamente imposible de abordar en el tiempo de cursada, con lo cual quizás resulte necesario pensar en desdoblarlas.
En asignaturas como Derecho Internacional Público, Derecho Público Provincial y Municipal y Economía Política, es común encontrarse con estudiantes de 2º a 5º año, habría que detenerse a analizar de qué manera se puede solucionar esta circunstancia, para que ni los docentes se vean obligados a nivelar para "abajo" ni que estudiantes que no están avanzados en la carrera deban responder a requerimientos académicos para los cuales no están preparados.
[7] Nos parece relevante destacar la iniciativa que en la materia se adoptó a través de una resolución del año 2009: "A esos fines, se ha aprobado la Res. N°356/09 ref. por Res. N° 306/10 (Expte N° 400-1084/09) que establece las pautas para reformar los Programas de las asignaturas que contiene el actual plan de estudios. A esos efectos, en los nuevos programas que se aprueben a la luz de aquella resolución deberán preverse actividades de investigación y de extensión a realizarse en el marco de las materias de que se traten11. Ello con el objeto de formar a los alumnos, no solo desde el ámbito teórico-practico, sino también acercarlos a la investigación científica y a las actividades de extensión en pos de transferir sus conocimientos en la práctica a la comunidad. Lo anterior, también redobla el esfuerzo del plantel docente en adquirir nuevas habilidades y competencias para cubrir el objetivo de la mentada norma"
(Datos extraídos del documento "Autoevaluación" publicado en la página de la facultad, pág. 30)
[8] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Sur
"Ciclos temáticos: El Lenguaje y sus usos. El discurso argumentativo: superestructuras. La Argumentación: perspectivas de estudio. Argumentación y enunciación. Los implícitos en la Argumentación"
[9] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"Latinoamérica y su complejidad: análisis político, social, económico y cultural. Su devenir histórico como herramienta de análisis. El aporte cultural indígena, colo-nial e independiente en la conformación de la Latinoamérica contemporánea. América Latina y su inserción en el mundo del Siglo XX: los conflictos políticos. Democracia. Autoritarismo. El derecho en la evolución de las sociedades lati-noamericanas, problemas que enfrenta su vigencia. Latinoamérica y el mundo. Procesos de integración regional."
[10] Ver Programas del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la UBA
"Derechos Humanos: evolución histórica y reconocimiento internacional. Fundamento y principios básicos. Los Derechos Humanos en la Constitucional Nacional Argentina. Los derechos de I, II, III y IV generación. Instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Reconocimiento internacional de los Derechos Huma-nos. Sistemas de carácter internacional de protección. Mecanismos de control. Reconocimiento regional de los Derechos Humanos.
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la perspectiva del derecho argentino de fuente interna e internacional. Identificación de los criterios de clasificación de los derechos humanos. Análisis crítico de las clasificaciones.
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la perspectiva del derecho argentino de fuente interna e internacional. Estructura de los derechos: sujeto"
[11] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Conflicto. Formas tradicionales e aproximación al conflicto. Métodos alternativos. Negociación. Mediación Pública y privada, La figura del mediador y su reconocimiento legislativo"

[12] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"La investigación científica. El proceso, el diseño y el proyecto de investigación. Introducción a las fases del proceso de investigación. Enunciado de problemas. Conceptos metodológicos básicos en investigación. Principales métodos y técnicas de construcción del dato. Técnicas cuantitativas y cualitativas. El procesa-miento de los datos. Análisis e interpretación de la información. Problemas de interpretación de resultados. La investigación jurídica. Aplicación de diferentes estrategias de investigación en el campo específico del Derecho"
[13] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"A partir de los fallos de los órganos jurisdiccionales de las diferentes ramas del Derecho, los estudiantes:
- analizarán la teoría de la argumentación y de las decisiones.
- interpretarán los diversos repertorios de la doctrina legal"
[14] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"La palabra. El lenguaje. Los signos. El intérprete. El rito judicial: propedéutica. La institución. Lenguaje-Discurso Institucional. La documentación judicial: rito y norma. Lectura gramatical de una sentencia. La construcción del lenguaje. El derecho como sistema comunicativo. Niveles de lenguaje jurídico. El uso del lenguaje judicial."
[15] Ver Programa de la Materia "Derecho de la Comunicación" de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
"**Unidad Temática Nº4**: El derecho de la comunicación y su protección en nuestra Norma Fundamental. Declaraciones. Principios. Derechos y Garantías. La reforma de la Constitución Nacional: sus nuevos derechos y garantías, análisis de sus aspectos más relevantes. El derecho a la comunicación y su protección en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad Temática Nº5: Libertad de expresión. La libertad de pensamiento como presupuesto de la libertad de expresión. Libertad de prensa. Libertad religiosa y de conciencia. La censura. Análisis de: la constitución nacional, las constituciones provinciales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Pacto de
San José de Costa Rica.
Unidad Temática Nº6: El derecho de rectificación o derecho de réplica o respuesta. Análisis de la constitución nacional, las constituciones provinciales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Pacto de San José de Costa Rica.
Unidad Temática Nº7: Delitos cometidos por medio de la prensa. Delito de opinión. Derecho al honor y a la intimidad. Delito de calumnias e injurias. Delitos en que intervengan menores. Régimen del Código Penal y Civil Argentino. Legislación complementaria. Análisis de la jurisprudencia.
Unidad Temática Nº8: Delitos contra la libertad de prensa. Delitos contra el orden público. Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Análisis del Código Penal Argentino.
Unidad Temática Nº9: La real malicia. Concepto. Análisis de la jurisprudencia de derecho comparado. Su recepción en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Unidad Temática Nº10: Propiedad intelectual e información periodística. El contenido ético de la información periodística. El secreto profesional. Plagio. Reproducción no autorizada. Análisis de la Constitución Nacional.
Unidad Temática Nº11: La comunicación y su protección internacional. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Pacto de San José de Costa Rica. Estudio de los derechos protegidos, órganos y competencia. Análisis de la Constitución Nacional.
Unidad Temática Nº12: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Medios masivos de comunicación social. Análisis de su regulación legal. La misión comunicacional del siglo XXI.
Unidad Temática Nº13: La función del comunicador social de emitir opinión. Autocensura. Estatuto del periodista profesional. Análisis de su relación laboral.
Unidad Temática Nº14: El derecho de la comunicación en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Análisis del Tratado de Asunción y los Protocolos de Brasilia, Ouro Preto y Olivos. El MERCOSUR y su proyección ante la Comunidad Económica Europea (CEE). El Informador: su intervención protagónica en esta área regional y su inserción en la comunidad internacional. El comunicador social en el siglo XXI."
[16] Ver Programa de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNLP
Temas sugeridos:
"Capítulo 10:
a) Sistemas de ejecución de obra.
b) Obra pública. Diferencias con obra privada. Sistema federal de gobierno.
c) Obras municipales.
d) Órganos administrativos y jurisdiccionales.
Capítulo 11:
Derecho de aguas.
a) Aguas públicas, privadas y comunes.
b) Normas constitucionales y legales. Código Provincial de aguas.
c) Protección de agua y atmósfera. Efluentes industriales. Tratamiento. Ley provincial 5965 y Decreto nº 2009/60 y modificatorias.
d) Protección del medio ambiente. Norma Constitucional Nacional. Legislación nacional: compuestos químicos; residuos peligrosos. Norma constitucional provincial. Legislación provincial: medio ambiente; residuos especiales; residuos patogénicos. Certificación aptitud ambiental. Clasificación de industrias.
Capítulo 12:
a) Promoción industrial. Ley Provincial nº 10.547 y Decreto nº 1904/90.
b) Seguridad e higiene del trabajo. Ley Nacional nº 19.587 y Decreto nº 351/79.
Capítulo 13:
a) Derechos de propiedad intelectual: patentes de invención; marcas de fábrica; propiedad científica, literaria y artística. Derecho informático.
b) Propiedad Industrial. Transferencia de tecnología"
[17] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"Regulación jurídica de los Recursos Naturales. Enumeración e identificación. La diversidad biológica faunística como recurso natural y cultural. El recurso agrario. El recurso forestal. El recurso minero. Contratos Especiales. Régimen Especial para los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Derecho Ambiental: antecedentes. Participación pública. Prevención. Derecho del Desarrollo Sustentable. El daño ambiental. Responsabilidad civil. Responsabilidad colectiva. Responsabilidad penal. Delitos ecológicos. Evaluación de impacto ambiental. Las medidas precautorias"
[18] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Genealogía de la Criminología. La escuela clásica y la revolución positiva. La sociedad de normalización. La teoría social clásica: Marxs, Durkheim, Weber. Criminalidad y desviación como hechos sociales. Primera crisis del paradigma etiológico. Las primeras sociologías de la desviación de la criminalidad. Las bases de un nuevo paradigma. La nueva criminología y la criminología crítica. Los futuros de la criminología."
[19] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"El Derecho de la Integración. La economía internacional y sus proyecciones culturales. La transnacionalización y la globalización. La Unión Europea. El Nafta. Las Etapas en el proceso de integración latinoamericana. El MERCOSUR. La UNASUR."
[20] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Educación y Derecho de la Educación. Relaciones del Derecho de la Educación con las distintas ramas del mundo jurídico. La Educación en la Constitución Nacional. Derecho de la Educación y derechos fundamentales. La educación en los tratados internacionales de Derechos Humanos. La educación superior: la regulación jurídica en la ley 24521. Los antecedentes de las leyes universitarias. El gobierno y la coordinación del sistema. La evaluación y la acreditación. El régimen de títulos. La educación superior. Subsistema de educación superior universitario. Debate en torno de las

autonomías y autarquías de las Universidades Nacionales y la gratuidad y equidad de los estudios universitarios. Subsistema de educación superior no universitario: la formación docente para el nivel primario ara el nivel secundario. La formación técnica. Antecedentes normativos de la conformación del subsistema. La configuración actual. El régimen laboral docente en la educación pública y en la educación privada."
[21] En el Plan de Estudios de la Universidad Nacional del Sur los estudiantes deben optar por realizar uno entre los siguientes idiomas: portugués, inglés, italiano, francés, alemán
[22] Ver anexo
[23] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Residencia en el Instituto de la Minoridad: El Alumno patrocinará a un menor carenciado o en estado de abandono bajo la Supervisión del Instituto de la Minoridad y Familia de la Facultad de Derecho de integración interdisciplinaria.
Residencia en el Consultorio Jurídico: Esta residencia tiene como objetivo fundamental que los estudiantes, próximos a obtener su título, entren en contacto directo con el ejercicio profesional, evacuando consultas jurídicas de toda índole que permitan aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de su carrera. A través de a consulta tienen la posibilidad de entrar en contacto con el cliente, profesionales, contraparte, Tribunales y diversas oficinas de la administración pública, independientemente del estudio del caso en sí. Asimismo se presta un servicio a la comunidad"

PROYECTO N° 14: Autor: Carlos PETTORUTI Profesor titular de "Introducción al Derecho" formula propuestas tendientes a la reforma del plan de estudios de la carrera

Tema: Propedéutica al estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales

"La verdad es que para ser un buen abogado es necesario conocer el derecho y no es suficiente conocerlo"
Genaro R. Carrió

Algo breve sobre la propedéutica: límites y alcances.

Sabido es que la "propedéutica" está integrada por un conjunto de saberes que constituyen la base o punto de apoyo para el estudio de una ciencia o disciplina.

Tal vez estas palabras la caractericen mejor que su mera referencia etimológica: "pro" (antes) y "paideutikós" (de la enseñanza), pues en realidad la propedéutica no es una etapa previa a la enseñanza, sino que es el comienzo de la enseñanza misma.

Por esta razón las llamadas "materias iniciales" entendidas en el sentido de "materias propedéuticas" correspondientes a las carreras de Procuración, Abogacía y Escribanía están y deben continuar estando en el primer año de estudios y no en una suerte de "ante año", precisamente porque son las encargadas de iniciar al alumno en el complejo estudio de las ciencias jurídicas y sociales.

En realidad, ya en el Primer Encuentro de Profesores de Introducción al Derecho de Universidades Nacionales realizado en Córdoba se sostuvo en el caso específico de Introducción al Derecho –y entiendo de manera extensiva a todas las materias del primer año- que no se trata solamente de disciplinas propedéuticas, sino que además presentan cuestiones que habrán de mantenerse abiertas durante el resto del desenvolvimiento vital del jurista (Conf. conclusiones de la comisión presidida por el Prof. Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani).

Y también he de decir que, en definitiva, ninguna materia es puramente "inicial" o puramente "final". Cada etapa de nuestra larga carrera se halla colmada de inicios, finales y reinicios que, como pequeños mundos, se van descubriendo a lo largo de toda nuestra vida universitaria.

Conocimiento y motivación.

Más allá de las falencias con las que los alumnos ingresan en el ciclo universitario, la motivación es uno de los puntos de partida básicos en el primer año de la carrera: es el principal elemento que permite el arraigo, la permanencia y el sentido de pertenencia del alumno a la comunidad universitaria. Esta se trata de una tarea que debe ser iniciada por el docente. La motivación es difícil de hallar y también la falta de motivación es difícil de descubrir. Como señala Marcelo De Jesús "uno quiere motivar al alumno, piensa que lo está haciendo, pero no, uno en realidad no lo está haciendo, uno no se da cuenta. Darse cuenta de cómo actúa uno mismo como profesor es una de las tareas más difíciles. Y ello vale también cuando uno debe analizarse sobre si su trabajo para motivar está o no fallando"[2].

¿Cómo debemos hacer entonces para lograr que el alumno se motive y se introduzca al mundo de una ciencia jurídica vinculada con la realidad, pero a su vez no desentendida de sus bimilenarios fundamentos filosóficos, incorporando el cambio, pero a su vez reconociendo lo que el derecho tiene de común en todos los tiempos?.

Según Norberto Bobbio, como juristas debemos desarrollar una actividad teorética y una actividad técnica. La primera consiste en subir de la realidad de los hechos jurídicos al concepto y al sistema conceptual, y la segunda consiste en descender desde la solidificación de los conceptos y del sistema, que es el ordenamiento de las leyes, a los hechos[3].

Aquí comienza el largo camino de los objetivos que nos planteamos.

Objetivos pedagógicos de las materias propedéuticas.

Las llamadas "materias propedéuticas" no son otra cosa que el portal de acceso a las carreras de Procuración, Abogacía y Escribanía. Poseen por lo tanto dos objetivos fundamentales: por una parte, constituir el anclaje del alumno a un verdadero compromiso universitario, y por otro, motivar y estimular el aprendizaje y el conocimiento no sólo desde la perspectiva de una "materia" en particular, sino de desde la perspectiva de toda una carrera en su integralidad. En otras palabras, es una presentación de la problemática del conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales, y que por lo tanto propone alentar en el alumno la posibilidad de "pensar" al Derecho desde la perspectiva universitaria.

Con acierto señala Martín Böhmer[4] que "el objeto del entrenamiento que deben brindar las facultades de Derecho no es mero conocimiento de las normas jurídicas, sino justamente una práctica, una suma de destrezas vinculadas no sólo con el conocimiento de ciertas posiciones del saber humano, sino además con capacidad de combinar esos diferentes tipos de saber, de sopesar alternativas, de crear estrategias, de transmitir conocimientos en forma clara, concisa y precisa, de persuadir a otros, de convencer, de crear

[2] DE JESÚS, Marcelo "La motivación en la enseñanza de la abogacía", La Ley, 12 de junio de 2003.
[3] BOBBIO, Norberto, citado por FILIPPI, Alberto: "Bobbio y Cossio: la Filosofía jurídica de la interpretación analógica", La Ley 2 de septiembre de 2004.
[4] BÖHMER, Martín: "Algunas sugerencias para escapar del silencio del aula", en revista Academia, de la Facultad de Derecho de la UBA, 2003.

nuevos argumentos, de escuchar con empatía y también de poner distancia para juzgar". Por eso, como dice Aníbal D'Auría, poco o nada sabe de Derecho quien sólo códigos estudia.

El profesor Eugenio Bulygin también destaca que lo importante para el abogado no es precisamente la mera acumulación de datos, sino el manejo sistemático de los mismos, "porque los datos se olvidan o se desactualizan, aunque se haya aprobado la materia con diez"[5].

Esta perspectiva sirve como fundamental aporte para que el estudiante logre captar desde un inicio la esencia del quehacer jurídico, evitando limitarlo solamente a la ley positiva y, como señala Vigo[6], se lo encuadre desde la perspectiva del razonamiento legal como un saber prudente, elaborado sobre la base de problemas, lo cual necesariamente habrá de requerir una amplia consideración de los principios jurídicos.

Si entendemos entonces a un sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado[7], o también desde la perspectiva Kantiana, como conjunto de conocimientos ordenados según principios, es decir, unidad de formas diversas bajo una sola idea, podemos afirmar que las materias del primer año de la carrera tienen como objetivo o misión fundamental presentar al alumno una visión integral, dinámica, unificada e interrelacionada del Derecho.

De allí que cada una de esas materias deben propiciar la apertura del amplio abanico de la reflexión y la comprensión crítica de las distintas corrientes del pensamiento jurídico para poder asegurar una adecuada conciencia histórico-jurídica que habilite al estudiante universitario de Derecho a saber buscar, elegir, decidir y fundamentar, para que ni él ni sus profesores sean meramente "la boca a través de la cual se pronuncian las palabras de la ley".

Objetivos académicos.

Podemos entender por objetivos académicos aquellos que van dirigidos al perfil del estudiante, al perfil del profesional y al perfil del docente e investigador.

Una de las acepciones de la palabra "perfil" es, precisamente, el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien. Y si así lo entendemos, no será difícil comprender la importancia que poseen las materias de primer año para comenzar a bosquejar el perfil del futuro abogado en el contexto de la universidad pública, instando a la consolidación de un triple compromiso: con el conocimiento, con la ética y con la sociedad.

Si bien este triple compromiso se halla presente en todas las etapas de la carrera y de la posterior vida profesional, es en el primer año cuando se comienza a tomar conciencia de la importancia individual (como individuo) y social (comprometido con la problemática social) del "estado universitario", que no es un "status jerárquico" sino un estado que lleva a la mejor comprensión de una disciplina (dimensión teorética del Derecho), preparándose para la acción o su ejercicio (dimensión práctica del Derecho).

Dicho en palabras vivamente actuales: "urge hoy, más que nunca, meditar sobre la función social que cumplen las escuelas de abogacía, porque el espíritu jurídico de un pueblo no nace y crece arbitrariamente dentro de los muros de sus casas de estudio, desligado de la comunidad que lo condiciona y que, por esto, algo le exige" (Prof. Emérito Carlos Cossio, "La Función Social de las Escuelas de Abogacía", diciembre de 1942), y también recordemos: "La Universidad de nuestros días tiene que proyectarse dinámicamente como una función social formativa de una personalidad, de un estilo de vida, de una nueva conciencia epistemológica y tecnológica que buscará extraer del mundo que la circunda aquellos elementos objetivos con los cuales, en incesante quehacer, podrá superar las deficiencias de su presente y construir un futuro mejor" (Prof. Emérito Juan Carlos Smith "Docencia e Investigación en la Universidad Argentina", La Plata, 1984).

Evidentemente los objetivos académicos se hallan estrechamente vinculados a los objetivos pedagógicos: es imposible formar un universitario con sólidos conocimientos y compromiso social sin una visión integral del panorama de las ciencias jurídicas y sociales.

La actual situación.

Desde ya que lo antedicho no implica que no haya existido ni exista en el presente en nuestra unidad académica y en su cuerpo docente el firme propósito de sostener los objetivos antedichos, muy por el contrario, pero lo cierto es que ahora nos hallamos con la inigualable posibilidad de plasmar esos objetivos, propósitos y metodologías, lo que implica revisar contenidos disciplinares e interdisciplinarios, en este caso en particular, del conjunto de las materias iniciales que de acuerdo con el plan de estudios vigente está integrado por:

- Introducción al Derecho
- Historia Constitucional
- Introducción a la Sociología
- Derecho Político
- Economía Política

Cada una de estas materias tiene su "nombre". Un nombre se corresponde con la denotación de algo, es decir, mienta cosas u objetos: en este caso, las diversas materias del primer año de la carrera.

La necesidad del nombre de la materia no es casual ni arbitraria. Sería inimaginable referirnos a las materias de una carrera solamente con números o símbolos abstractos. Esto ocurre porque cada materia, a través de su nombre, designa una serie de características y propiedades que hacen a la esencia de sus contenidos: el nombre de la materia es la síntesis de su programa, de sus objetivos y de su propuesta.

En el caso de la materia en la cual me desempeño, Introducción al Derecho, tal como lo señaló la Prof. Emérita María Teresa López, se presenta "como introducción a la Ciencia del Derecho y a la Filosofía del Derecho", "tiene sus temas troncales tradicionales" aunque "ello no es óbice para que se pueda hacer una apertura en relación con temas actuales, podría decirse de gran importancia prospectiva"[8] . No en vano desde los primeros encuentros nacionales de profesores de Introducción al Derecho de Universidades Nacionales se ha sostenido y reafirmado la importancia de la identidad de la materia como asignatura que proporciona al alumno un sentido integral y unitario de la carrera de Derecho, pero sin hallarse circunscripta al enfoque parcializado de una única posición o teoría, ya que su misión, junto con la demás materias de primer año –agrego yo- es desarrollar en el alumno la capacidad de análisis, comprensión y crítica.

---

[5] BULYGIN, Eugenio: Entrevista publicada en La Ley del 24 de octubre de 2003.
[6] VIGO, Rodolfo Luis: "De la Ley al Derecho", Ed. Porrúa, México, 2003.
[7] FERRATER MORA, José: Diccionario de Filosofía", voz "sistema".
[8] LÓPEZ, María Teresa: "Propuesta de temas actuales de Introducción al Derecho", en II Jornadas de Profesores de Introducción al Derecho, La Plata, 2002.

Desde esta visión, y habiendo examinado los contenidos de los diversos programas de las materias de primer año, observo en ellas la vinculación de una serie de temas transversales relativos al derecho, a la sociedad, a la política, a la economía y a la historia que permite confirmar firmemente la perspectiva "jurídica" y "social" de la carrera, tal como visionariamente fuera pensada por Joaquín Víctor González.

Pero es cierto que se debería poner énfasis en la articulación de estos temas entre sí, de manera que las materias de primer año no se presenten frente al alumno como hitos inconexos que deben ser estudiados y aprobados por el alumno simplemente para poder alcanzar el segundo año como si fuera la meta de una maratón.

¿Nuevos cambios o nuevas relaciones?

Esta es la pregunta que me formulo a esta altura, e implica reconocer qué hay de bueno y qué hay de malo en el sistema actual de las materias de primer año. Su sentido es claro, su orientación unívoca, más allá de las consabidas exigencias de las actualizaciones o novedades programáticas que son una cuestión muy importante y aneja a lo que significa la reformulación de un plan de estudio.

A esta altura me permito pensar que el cambio a producir en el primer año de la carrera no es "ontológico" sino "metodológico". Creo que no es posible prescindir de los contenidos fundamentales de las actuales materias. Más aún, es necesario potenciarlos logrando la articulación sistemática de los diversos temas y extendiéndolos con amplitud a la problemática social en general: existen muchos puntos de contacto entre el derecho, la antropología y la psicología que no deberían ser dejados de lado en un mundo en el cual se pregona, se sostiene y se enriquece espiritualmente con la diversidad cultural.

Pero no sólo es misión de los docentes presentar, exhibir y explicar esa interrelación, también es nuestra misión proporcionar al alumno las herramientas metodológicas para que se desenvuelva en él la capacidad de hallarla.

Para ello sería muy útil que cada materia de primer año, sin modificar su carga horaria, tuviera como complemento un taller de temas de actualidad, a cargo de los auxiliares docentes de la asignatura.

También me permito sugerir la inclusión de una materia que debería desarrollarse en este primer año, que proporcione al alumno herramientas para el estudio, comprensión, análisis y crítica de los temas fundamentales de las asignaturas iniciales. La materia podría denominarse "Metodología para el estudio y la investigación en las ciencias jurídicas", y no necesariamente deberían depender de ella la correlatividad de las materias de primer año: bastaría con que su aprobación se cumpla juntamente con las demás asignaturas, y finalizar con un trabajo de investigación sobre un tema transversal a todas las materias del mismo, que permita cerrar la etapa del ciclo.

Invito a mis distinguidos colegas a debatir y completar estas ideas.

Doctor Carlos Enrique Pettoruti
Profesor Titular Ordinario
Introducción al Derecho (Cátedra II)

PROYECTO N° 15: Autor: Susana VEDOYA en su condición de profesora de lenguas y lingüística sugiere mejorar la formación en redacción, lenguaje y argumentación de abogados. (En igual sentido se recibió correo electrónico de Sr. José Benarrosh).

A la Comisión que corresponda:

A modo de presentación digo que, aunque no soy más que procuradora, tengo en mi haber 27 años de enseñanza de Lengua y Lingüística en el nivel superior, ya que también soy profesora en Letras. Por ello y por haber trajinado largos años por esta querida Facultad, me animo a acercar una propuesta.

He notado que los chicos que ingresan, y esto no es novedad, entre otras muchas falencias que arrastran del secundario, no saben redactar. Esto les acarrea graves inconvenientes a la hora de rendir los parciales por escrito. No pueden expresar lo que tal vez, en realidad, saben. Los profesores no entienden lo que quisieron decir, y así, los alumnos fracasan.

Concretando, mi propuesta es la siguiente: que en el Curso de adaptación universitaria, se den nociones básicas de redacción. Pero como esto no basta, por lo apretado del curso, sería ideal un acompañamiento, en ese sentido, durante el primer año de la carrera.

Otro problema lo presentan los noveles abogados que incurren en gruesos errores de redacción y sintaxis. Para esto sería deseable que, promediando la carrera, quizá en Procesal, se dieran nociones de la diferencia que existe entre lenguaje coloquial, literario y jurídico. Sé que esto parece un ideal inalcanzable, sin embargo, yo misma tuve un profesor de Procesal Civil que trajo a una profesora en Letras para explicar tales diferencias.

Pido disculpas por mi atrevimiento, pero si de algo sirviera podría asistir a la comisión que corresponda para aclarar estos conceptos.

Sin otro particular, los saludo atentamente

Susana Vedoya
DNI 4.508.250

PROYECTO N° 23: Autor: Manuela GONZALEZ Directora del Instituto de "Cultura Jurídica" remite aporte realizado desde el grupo de investigación en el marco del proyecto (J101): "Las nuevas configuraciones del campo de la formación del abogado en la Argentina: instituciones, planes de estudios y prácticas profesionales" que dirige.

La Plata, octubre de 2011

Aportes preliminares para una reforma del Plan de Estudios
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP[9]

Dra. Manuela González e integrantes
del proyecto de investigación J101

Introducción

[9] Por el Equipo de Investigación del Proyecto J101: "Las nuevas configuraciones del campo de la formación del abogado en la Argentina: instituciones, planes de estudios y prácticas profesionales", bajo la dirección de la **Dra. Manuela González**. En adelante, "equipo".

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ha decidido encarar un proceso de modificación del Plan de Estudios actual. Nuestro equipo de investigación saluda desde ya esta iniciativa y se compromete a realizar los mayores esfuerzos para que dicho proceso se desarrolle y concluya dando los mejores frutos.

Este escrito es simplemente un aporte preliminar para la discusión sobre la cuestión y así debe ser considerado, de ningún modo pretende agotar aquí la discusión y, en efecto, se plantean más interrogantes que respuestas certeras.

La historia de nuestro plan de estudios es extensísima y al mismo tiempo muy compleja. Nuestro equipo ha trabajado específicamente sobre el asunto[10]. Pero no es el espacio ni el momento para volver el curso a cero. Consideramos, con seguridad, que nuestros interlocutores tienen un conocimiento general sobre dicha historia.

Por eso, simplemente nos permitimos resaltar, al respecto, dos datos significativos:

1) el Plan de Estudios actual data del año 1953 y ha mantenido sus presupuestos fundamentales durante casi 60 años, con pequeñas modificaciones insustanciales. Habida cuenta de los cambios producidos en el mundo, en la Argentina, y en el campo específico de las relaciones jurídicas, debe llamarnos a la reflexión el hecho de que la orientación general de las carreras que se desarrollan en la Facultad, la formación intelectual, política y social que reciben los estudiantes y la construcción de herramientas técnicas para el ejercicio de la profesión, continúen rigiendo y estructurándose en función de un Plan de Estudios que ha sido pensado en y para un contexto socio-histórico extraordinariamente diferente, y que, por lo tanto, ha devenido en vetusto.

2) El conjunto de la comunidad académica de nuestra Facultad ve con buenos ojos la necesidad de un proceso de cambio: autoridades, docentes, administrativos, graduados y estudiantes. Se trata de un elemento en extremo favorable. Más allá de que seguramente habrán distintas caracterizaciones sobre el asunto, todas ellas se encuentran en un núcleo común: la necesidad de actualizar y modernizar los instrumentos y herramientas de formación de los profesionales del derecho en nuestra Casa de Estudios. Es un elemento que allana el camino, pues nos libera de discusiones corporativas y nos permite concentrar las energías en el verdadero problema, que todos visualizamos.

Por último, la necesidad de un cambio de Plan, por supuesto, alcanza al conjunto de la sociedad, que tiene una vinculación cada vez más cotidiana con abogados, en todos los ámbitos de la vida, públicos y privados.

En fin, no sólo estamos ante un anhelo compartido por la comunidad académica de nuestra Facultad, sino que, fundamentalmente, enfrentamos una gran responsabilidad ante el conjunto de la sociedad.

Primeros aportes

El primer punto a considerar es el **alcance** que habría de tener el proceso de cambio. Es necesario clarificar y especificar esta cuestión. A nuestro criterio, es el pilar fundamental que habrá de servir como basamento para cualquier discusión ulterior. Este primer punto tiene, como no podría ser de otro modo, una impronta esencialmente política y excede con mucho la mera discusión sobre el Plan. Toda discusión "académica" o "técnica" sobre el Plan de Estudios, debe estar precedida por un acuerdo político común sobre la orientación general y la profundidad que pretendemos de este proceso (y que, lógicamente, habría de verse plasmada en aquél). Dicho en otros términos: ¿Nos encontramos ante un proceso de reforma curricular que pretende discutir el problema desde la raíz, o bien la idea es realizar modificaciones al plan de estudios en su acepción más restringida?

De nuestra parte, adelantamos que la primera opción nos parece la más correcta y necesaria.

En este sentido, nos permitimos compartir sucintamente algunas críticas al currículum actual de la FCJyS, que surgen del trabajo de investigación que venimos realizando desde el Equipo, y que continúa la línea de investigación iniciada en el año 2004, a partir del proyecto J076[11].

Dentro del trabajo de campo, realizamos más de 35 entrevistas a docentes titulares y adjuntos y a graduados pertenecientes a esta casa de estudios, además de observaciones de clases, de mesas de exámenes libres[12] y encuestas a alumnos. A partir de la información recolectada en el trabajo de campo se han producido ponencias, artículos y capítulos de libros sobre distintos temas, entre ellos la cuestión de la reforma curricular en la FCJyS-UNLP que pueden ser utilizados como insumos para el debate.[13]

Del análisis de las entrevistas y las encuestas, se evidencia la disconformidad de una parte considerable de la comunidad académica con la formación actual de los abogados/as en la FCJyS. Entre las falencias resaltaron diferentes cuestiones relativas tanto al Derecho que se enseña como a cómo se enseña el Derecho.

- En cuanto al Derecho que se enseña, concretamente referidas al Plan de Estudios, por un lado hubo una crítica generalizada en cuanto al predominio de materias de derecho privado por sobre las asignaturas de derecho público. Asimismo se hizo referencia al escaso número de materias vinculadas a las Ciencias Sociales (Introducción a la Sociología, Historia Constitucional, Economía Política, Filosofía y Sociología Jurídica). También fue materia de crítica la concepción *normativista* del derecho, presente en la mayoría de las materias, que atiende exclusivamente al tratamiento lógico-dogmático del fenómeno jurídico, descuidando otros aspectos que constituyen al mismo. Esta situación nos lleva a plantearnos la necesidad de consensuar un plan de estudios que rompa con el tronco iusprivatista que domina el plan vigente, y por ende, modificar el actual sistema de correlativas ligado casi exclusivamente a los Derechos Civil (I, II, III, IV y V).
- En cuanto a cómo se enseña el Derecho se anotaron varias cuestiones. Por un lado, en lo relativo a las prácticas de enseñanza, criticaron con vehemencia la modalidad de las clases magistrales, donde generalmente es el docente quien más aprende y los estudiantes, reducidos a meros espectadores, aprenden muy poco. Un dato interesante resultado de la investigación fue que cuando se

[10] Puede consultarse al respecto: Cejas, Cristeche y Mattos, 2009; Carrera y otros, 2009; Carrera y Vértiz, 2010; entre otros.

[11] El proyecto se denominó *"El proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP"*, y se desarrolló entre los años 2004 y 2008, cuya dirección estuvo a cargo de las Dras. Manuela González y Nancy Cardinaux.

[12] El problema entre el examen libre como herramienta para el manejo de la masividad y el reclamo de "falta de enseñanza", planteado la mayoría de las veces como un dilema excluyente, ha sido trabajado extensamente en algunos artículos e informes producidos en el marco del proyecto de investigación (J076) mencionado en la introducción de este trabajo (ver nota al pie nº4). Algunos títulos son: BIANCO, DEMARCHE, BERISSO (2004) "Primer año en capilla, lo que dicen las normas y lo que opinan los profesores"; GONZALEZ y CARDINAUX (2004) "El proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP"; BERISSO, CARRERA, DEMARCHE (2005) "El Curso Introductorio de la carrera de Abogacía de la UNLP. La visión de los docentes"; GONZALEZ y CARDINAUX (2005) "La evaluación durante el ingreso y el primer año de la carrera de Abogacía de la UNLP".

[13] Cardinaux y González 2004; González y Cardinaux, 2004, 2007, 2010; Zudaire, 2004; Bianco y Carrera, 2008; Cejas, Cristeche y Mattos, 2009; Carrera y otros, 2009; Carrera y Vértiz, 2010; entre otros.

les preguntó a los estudiantes de los últimos años que nombren docentes innovadores para luego poder observar sus clases, la observación resultante mostró que el rasgo común de todos ellos no era la implementación de estrategias didácticas novedosas sino la habilitación del diálogo que propiciaban en sus clases. El diálogo se constituyó en un reclamo para el mejoramiento de la relación pedagógica y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Otro dato interesante es el bajo uso de tecnologías en el desarrollo de las clases.

- Otro de los puntos acometidos es el de la evaluación. La evaluación se torna crucial porque es el momento de mayor ejercicio de poder del docente. La evaluación restringida a la calificación suele combinarse incluso con prácticas de enseñanza que se pretenden democráticas, por ello es el verdadero meollo de cambio de las prácticas pedagógicas. Asimismo, la evaluación aparece como problema en el tema de las mesas de exámenes libres, donde los estudiantes no pueden evacuar dudas, ni compartir lecturas y debates con los docentes y sus compañeros. También refirieron que este tipo de examen deja un amplio margen para la arbitrariedad del docente, ya que el alumno en ningún momento es advertido sobre qué aspectos va a ser evaluado. No queda claro si se espera que explique el tema, o que lo relacione con otros contenidos o que sepa repetir de memoria algunas características del fenómeno en cuestión, entre otras posibilidades. En general, lo que se evalúa es la capacidad para memorizar y repetir y más allá de las críticas que puedan deslizarse sobre ese aspecto que son muchas, ni siquiera hay una instancia formal donde los alumnos sean anoticiados sobre las características del examen y lo que se espera de su desempeño.

En conclusión: como puede observarse, los avances empíricos (además de los teóricos) obtenidos hasta el momento, dan cuenta de que la discusión sobre la orientación general de las distintas carreras (en especial la de Abogacía) y el perfil y la práctica profesionales que se desprenden del proceso de enseñanza-aprendizaje, deben ser abordados a partir de una mirada holística, sin ataduras a una mera discusión "técnico-dogmática" de Plan de Estudios.

Por otro lado, nos permitimos una pequeña reflexión en cuanto al **método** que debería consensuarse para encarar este proceso. El cambio se ha hecho esperar y las transformaciones y mutaciones en las relaciones sociales generales y en el campo del derecho en particular, han sido muy profundas. Con lo cual, el desfasaje entre "norma" y "realidad" es elocuente. Por lo tanto, una vez llegados a este estado de cosas, el proceso debe ser encarado sin premura. Debemos tomarnos el tiempo necesario para que surta los efectos realmente deseados y cuyo resultado pueda contener el conjunto de las aspiraciones que se ponen en juego.
Por ello, desde este equipo propiciamos que se realicen todas las actividades e iniciativas que sean necesarias para que el conjunto de la comunidad universitaria pueda formar parte activamente de este proceso y para que se desarrolle con la profundidad que le corresponde. Ciclos de conferencias con especialistas, paneles de discusión, apertura de canales para realizar propuestas generales y específicas, asambleas interclaustros periódicas y abiertas, entre otras, son iniciativas que permitirían ir avanzando hacia un cambio sustancial, plural y extensible en el tiempo. En esta amplia gama de actividades consideramos indispensable la apertura de canales de participación de los estudiantes en el proceso de reforma. Es fundamental la realización de actividades vinculadas con el proceso de reforma en el contexto áulico, entendiendo por esto la realización de las mencionadas actividades en todas y cada una de las cursadas, ello en razón que algunos canales de participación como los ciclos de conferencias, los paneles de discusión, o las asambleas no permiten que aquel estudiante que carece del tiempo necesario para dar su opinión participe del proceso. Al mismo tiempo creemos que las voces de los estudiantes deben tener la misma "jerarquía" que la de los "expertos", "especialistas", personal de gestión, etc., ya que los estudiantes deben ser parte de un proceso que necesariamente va a tener repercusiones sobre su vida académica y profesional, y en ciertas ocasiones las agrupaciones estudiantiles no llegan a conformar una representación suficiente para todas las voces.

Por último, nos interesaría introducir en la discusión la necesidad de incluir a la investigación y la extensión como parte del plan de estudios. En ambos casos debería existir una instancia teórica y una instancia práctica. Incluir la investigación en el plan como una materia "teórica" sin una instancia de taller donde el estudiante pueda empezar a vivir la planificación y desarrollo de un proceso de investigación es un sinsentido.

En lo que respecta a la extensión, consideramos necesaria la realización de actividades apoyadas en fundamentos teórico-metodológicos que permitan a cada uno de los participantes reflexionar sobre las actividades que desarrollara, para evitar con ello que la extensión signifique "solamente" ayudar a alguien, o en el peor de los casos, practicar con los pobres. Esta última frase que puede sonar desafortunada, es un peligro que la actividad extensionista transita constantemente en el derecho, la confusión entre práctica profesional y extensión universitaria.

Esperamos que este pequeño aporte contribuya a la reflexión sobre la necesidad de generar un espacio democrático de debate sobre la formación académica y profesional que se ha venido implementando hasta el momento, dando lugar a un diagnóstico serio y concienzudo sobre el actual estado de cosas, en términos de fortalezas y debilidades, para construir el futuro que deseamos. Qué abogadas y abogados queremos formar, qué lugar deben tener la docencia, la extensión y la investigación en la formación, son algunos puntos medulares. Al mismo tiempo, ese espacio debe incluir a todos los sectores pertenecientes a la comunidad académica –docentes, graduados, estudiantes y no docentes.
Por supuesto, que esta manera de encarar un proceso de cambio lleva tiempo, pero consideramos que es la única forma de que pueda diseñarse una propuesta que responda real y efectivamente a los desafíos que nos plantea la realidad social actual. Estamos ante una oportunidad histórica y seguramente lograremos colocarnos a la altura de las circunstancias.

PROYECTO N° 24: Autor: Ezequiel KONSTENWEIN, auxiliar docente de la asignatura Introducción a la Sociología (Cátedra III) y Sociología Jurídica (Cátedra I) e investigador Becario de Perfeccionamiento de Comisión de Investigaciones Científicas, remite algunas reflexiones acerca del orden jurídico y sistemas jurídicos, acerca de la formación propedeutica del ingresante a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La Plata, 31 de Agosto de 2011.
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Dr. Hernán Gómez
S/D

Proyecto sobre implementación del Ciclo Propedéutico Inicial a la Carrera de Abogacía. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata.

La importancia de la Sociología Jurídica para el estudiante de abogacía. Orden jurídico y sistemas normativos: reseña mínima en torno al dilema. Existe un problema que se halla en el centro de la preocupación socio-jurídica: precisar la relación que se hilvana entre el conjunto de las normas sociales, y las

que dentro de ellas son estrictamente jurídicas. Y afirmamos que la cuestión es medular porque ha suscitado disputas enconadas entre aquellos que sostienen una concepción normativista del derecho, atendiendo exclusivamente al tratamiento lógico-dogmático de este último, y quienes apelando a una visión antinormativa, se aferran al derecho vivo. Ahora bien, lo que resulta importante aquí es destacar que entre los dos extremos ya apuntados encontramos a la ciencia del derecho, ocupada en elaborar un auténtico sistema jurídico que ofrezca coherencia entre las distintas normas que lo componen, y la sociología jurídica, que reflexiona sobre el derecho como producto y productor de procesos sociales. Entre estas dos últimas, a diferencia de los primeros enfoques expuestos, es posible hablar de compatibilidad, e incluso, de complementariedad.

Dada la estructuración del currículo de las carreras de abogacía en las distintas universidades nacionales, que históricamente ha tendido a limitar el papel de nuestra disciplina –cuestión que nos excede por completo detallar en este comentario-, presentaremos al menos una contribución significativa que desde la sociología jurídica podría ayudar a no reproducir, si es que se la tiene presente en los espacios donde se forman futuros abogados, un enfoque sesgado en relación al papel que el derecho tiene en la sociedad.

El lugar que las normas jurídicas poseen como punto de orientación en la conducta de las personas que interactúan cotidianamente, su eficacia o ineficacia, debe ser entendido al calor del vínculo que surge entre dichas normas y los usos, las costumbres, las mentalidades, esto es, el resto de los sistemas normativos que guían la acción social: entender esta relación es llegar a dar cuenta de las funciones reales que el ordenamiento jurídico posee en la vida colectiva. La mayor polémica desatada por la sociología jurídica, y que quizá sea una de las causas de su lugar periférico dentro de los programas de estudio de derecho, es la hipótesis según la cual éste último tiene por lo general una importancia más bien limitada en tanto rector de los comportamientos individuales. Pero aquí es importante desechar un malentendido: lo que nuestra disciplina no acepta es el argumento que considera a toda conducta regida por el derecho, y por ello intenta explicar de qué manera los individuos piensan normativamente su accionar, y qué lugar tiene allí el derecho; pero esto no equivale a excluir categóricamente las normas jurídicas en la explicación de dichas conductas.

Por lo dicho, se puede concluir que existen numerosas posibilidades para que normas no jurídicas dejen sin efecto al sistema legal: partiendo de favorecer la elección de un funcionario no por su aptitud sino por simpatía, podemos llegar al decreto 1.555 que en 1996 Duhalde promulgó como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que no tuvo ninguna eficacia en sus propósitos: intentar limitar los horarios a las salidas nocturnas. Ambos son ejemplo de lo mismo: cuando el derecho se opone a las costumbres, y a su vez carece de legitimidad, es muy difícil que logre imponerse.

Concisamente, uno de los grandes aportes de la sociología jurídica, que consideramos debería tener un lugar más destacado en el estudio, debate e investigación dentro de las carreras de grado de derecho es el siguiente: el fenómeno jurídico no comienza ni se extingue en la descripción de las normas jurídicas, sino que es un proceso social complejo donde no sólo el derecho escrito tiene relevancia. La ciencia jurídica sólo describe aquello que debería ser, como por ejemplo, que ?las cárceles sean sanas y limpias?, pero nada nos informa acerca de porque pasa lo que pasa y no lo que debería pasar; no nos dice, por lo común, nada sobre lo que hacen los particulares con esas normas jurídicas que están en los códigos, ni con los casos que pudiendo no llegan a los tribunales (que son la mayoría), ni con las figuras de escasa o nula aplicación. En un manual de derecho procesal, por citar, no se nos explica las razones que hacen posible que la mayoría de las personas detenidas sean jurídicamente inocentes: para entender mejor todo lo que encierra la práctica jurídica de la prisión preventiva, es imprescindible apelar a la sociología jurídica.

En suma, es importante que los estudiantes adviertan que el derecho no es un fenómeno objetivo ajeno al sentido que los actores le otorgan al actuar considerando que lo hacen conforme a derecho: pensar el derecho es pensar los procesos de interacción vinculados con la idea de derecho, y es aquí cuando la sociología jurídica está en condiciones de brindarnos una gran ayuda.

Ezequiel Kostenwein
Becario de Perfeccionamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas.
Auxiliar Docente de Introducción a la Sociología (Cátedra III) y
de Sociología Jurídica (Cátedra I) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP).

Bibliografía.

A. Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal, Siglo XXI, Bs. As., 2004.
R. Cotterrell, Introducción a la sociología del Derecho, Ariel, Barcelona, 1991.
E. Díaz, Sociología jurídica y concepción normativa del derecho [1965 -Revista de Estudios Políticos Nro 143].
F. Fucito, Sociología del Derecho, Ed. Universidad, Bs. As., 1993

PROYECTO N° 25: Autor: Sabina PODREZ YAÑIZ, Profesora Titular de "Introducción al Derecho".
Tema: Propedéutica al estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales.

Luego de analizar con detenimiento los conceptos vertidos por quienes me antecedido en la pluma, en especial el Profesor Carlos Pettoruti y el proyecto de reforma del plan de ingreso propuesto por el Profesor Amos Grajales me permito hacer algunas consideraciones.

Coincido con los conceptos del Profesor Pettoruti, en cuanto a que "en realidad la propedéutica no es una etapa previa a la enseñanza, sino que es el comienzo de la enseñanza misma". Motivo por el cual me inclino a referir a "materias iniciales".aquellas a las que al aula nos convoca desde hace ya tantos años.

Tarea que consiste en "**introducir"** al alumno en el complejo estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales.

A los efectos de no repetir ideas compartidas, aclaro que coincido plenamente con la descripción de la situación académica actual de nuestra Facultad efectuada por ambos Profesores, el primero Titular de la Cátedra II y el segundo, Adjunto la Cátedra III, de la que soy Titular..

Corresponderá a los Profesores del resto de las asignaturas de igual carácter, a saber: Historia Constitucional, Introducción a la Sociología; Derecho Político y Economía Política, emitir su opinión al respecto.

Mis acotaciones versarán, en cambio, sobre dos cuestiones: 1) Mantenimiento de la asignatura "Introducción al Derecho" con su nombre y apellido, por decirlo de algún modo y 2) Análisis de la propuesta sobre la implementación del ciclo propedéutico inicial tal (CPI) como lo formula el Profesor Grajales.

A la primera:

Haciendo un poco de historia la asignatura "Introducción al Derecho" fue considerada como un mero nomenclador jurídico o una exposición enciclopédica de las nociones básicas generales.

La esencia de la asignatura, a mi modo de ver, ha cambiado con el correr del tiempo.

"No constituye una rama autónoma de contenido autónomo dentro de la Ciencia Jurídica, sino que es una disciplina introductoria como herramienta absolutamente necesaria para quienes intenten aproximarse al mundo jurídico" (ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel. Introducción a una Teoría General del Derecho. Editorial Astrea. 1975).

Su objetivo principal, es esbozar los elementos generales y medulares del Derecho con la mayor amplitud y máxima profundidad posible (ontología, gnoseología, lógica jurídica. normas y orden jurídico, métodos de interpretación, axiología jurídica).

"Introducción al Derecho", brinda, además, una visión introductoria a la Filosofía del Derecho, en la que caben el estudio de las distintas concepciones doctrinarias con la mayor amplitud posible sin opciones ideológicas personalísimas. Por lo menos no debiera.

Es claro que la tarea es ardua y por demás complicada. Los alumnos no conocen el idioma de la Ciencia que abordamos, su contenido, y en mucho de los casos no han sido ejercitados en el razonamiento de problemática alguna, y menos la filosófica, lo que no impide hacer una apertura en relación con temas actuales de gran importancia prospectiva

Matafóricamente hablando, como curso tras curso repito a mis alumnos, la tarea consiste en ayudarlos a construir los basamentos del edificio sobre el cual ellos luego apoyarán cada ladrillo, que no será más que el conocimiento sistemático de las distintas ramas del derecho.

Se constituye así en un saber primario que se convertirá en definitivo cuando el alumno ya iniciado en su carrera vuelva como un movimiento de reflujo, de retorno a esas nociones básicas que le ha aportado la materia, pero en esa instancia llenas de contenido. La experiencia así lo indica, y basta re encontrarse con ex alumnos en los pasillos de la Facultad para comprobarlo día a día.

A la pregunta formulada por el Profesor Pettoruti: "¿Cómo debemos hacer entonces para lograr que el alumno se motive y se introduzca al mundo de una ciencia jurídica vinculada con la realidad, pero a su vez no desentendida de sus bimilenarios fundamentos filosóficos, incorporando el cambio, pero a su vez reconociendo lo que el derecho tiene de común en todos los tiempos?. Su respuesta es nuestro desafío de cada clase.

En razón de lo expuesto, y para ahorrar equívocos, y evitar así posibles discriminaciones ideológicas, es necesario señalar que asignaturas distintas las constituyen "Teoría General del Derecho" (elaboración profunda y sustancial de los conceptos jurídicos fundamentales, constituye una teoría del derecho positivo. No caben aquí planteos del tipo jusnaturalistas), y "Filosofía del Derecho" (análisis del Derecho en su realidad universal).

Podrán esgrimirse argumentos de "parentesco sutiles", y "límites imprecisos" con sustento científico, pero lo cierto es que constituyen disciplinas definitivamente distintas.

La Filosofía del Derecho se convierte en un estudio de segundo grado de los elementos provistos por Introducción al Derecho en un primer grado de conocimiento.

La Teoría General de Derecho, a mi juicio, debe analizarse en un tercer grado, teniendo ya un conocimiento previo y acabado del contenido de la Ciencia Jurídica.

Mi propuesta concreta es mantener el nombre y apellido de nuestra asignatura, como respetar su contenido, porque así se corresponde con un serio criterio científico.

A la segunda.

Por todo lo expuesto, el crear un Ciclo Introductoria Propedéutico (CIP), aporte que desde ya valoro de parte del Profesor Grajales, no lo encuentro inconveniente en alguno de sus puntos y en cambo en otros acertado.

Me parece de una excesiva exigencia para un alumno ingresante crear una asignatura como "Introducción a la lógica jurídica y el lenguaje del Derecho" con contenidos como los que explicita, a saber: pautas introductorias de lógica (a) Lógica simbólica. b) Lógica preposicional, de cuantificación y de clases. c) La lógica y su aplicación al derecho. e) La lógica deóntica); razonamientos correctos; falacias en su relación al discurso jurídico; los criterios lógicos utilizados en el derecho; introducción a la semiótica en su relación con el mundo de lo jurídico:; todo lo permita ejercitar y ejemplificar el uso de la lógica y su correlación con el discurso en los escritos que deba realizar.

De igual forma que la anterior, no me parece conveniente, crear una asignatura "Introducción a la Cultura Jurídica". Cuando el alumno aún no sabe que es "lo jurídico". Referir a autores como Sófocles, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás, Kant, Savigny, Ihering, Velez Sarfield, Kelsen, Cossio y Bobbio (por mencionar algunos pocos),

El autor del proyecto propone "trazar una línea histórica que sirva para asociar ideas jurídicas a contextos históricos y autores". Y yo me pregunto ¿cómo podrá asociai un alumno a los distintos autores con ideas jurídicas que no sabe ni cuáles son?.

Sí creo **imprescindible** que los alumnos deban ejercitar la "Expresión oral y escrita con una asignatura como Mitología y Técnicas de Estudio". Cuyo contenido sea "dotar de determinados métodos de aprendizaje y estudio a los alumnos ingresantes" y agrego, técnicamente aplicables a toda la carrera de Derecho. Cuyos contenidos podrían ser los propuestos, extracción de ideas principales y accesorias de los textos, metodológicas de estudio (mapas conceptuales, líneas); redacción de textos; adquisición de conceptos lingüísticos asociados al Derecho; expresión oral de textos jurídicos; métodos y técnicas de búsqueda de material jurídico (búsqueda de jurisprudencia por medios tradicionales e informáticos, revistas y publicaciones de derecho, bibliotecas jurídicas, buscadores informáticos dedicados al derecho.

Algunas consideraciones finales:

Felicito al Profesor Amós Grajales por su iniciativa que no es otra que mejorar la calidad de la enseñanza, tarea que compartimos codo a codo, día, tras día, la que en los días que corren se ha convertido en un verdadero sacerdocio..

Saludo y me complazco que después de tantos años de actividad académica compartida con el Profesor Carlos Pettoruti, aún sigamos pensando como cuando éramos dos jóvenes inexpertos en estas lides (tal vez se lo debamos a quienes fueron nuestros maestros compartidos). .

Agradezco además el pertenecer al claustro académico de esta querida Facultad en donde siempre se me ha permitido sostener libremente mis creencias.

Y es que ser dueño de ideas y saber sostenerlas con firmeza y convencimiento hace a nuestra dignidad humana y a la trascendencia que le atribuimos a nuestro pensamiento.

Si todo nos diera igual, nos asemejaríamos a los sofistas y las contradicciones se apoderarían definitivamente de todo nuestro ser. Solo el silencio absoluto propio de los sepulcros sería nuestra constante.

La verdad resulta del ámbito de la búsqueda y no de la posesión.

Ya decía Aristóteles: "La búsqueda de la verdad es, a la vez, difícil y fácil: nadie puede alcanzarla absolutamente ni carecer completamente de ella".

Las palabras que quiero emplear en estas humildes consideraciones **no son** "es evidente que..." **y sí** "me parece que" o "puedo estar equivocada...".

Estoy convencida que estas formas hacen al respeto y a la verdadera tolerancia con el que piensa distinto propia de los seres humanos.

La tarea titánica resulta mantener la pasión por nuestras ideas recordando en forma sostenida que el excesivo entusiasmo ha sido siempre enemigo de la libertad.

Sabina Podrez Yaniz.
Prof. Titular Ordinaria.
Introducción al Derecho.
Cátedra III
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

PROYECTO N° 26: Autor: Sebastián IRAZUSTA, graduado remite análisis crítico y propuesta acerca de una reforma al plan de estudios a la carrera de abogacía.

Entiendo que desde hace tiempo el plan de estudios esta precisando una seria revisión. Hay muchas cosas que creo se deberían cambiar para ayudar a los estudiantes y graduados que quieran volver, o sigan en la facultad, a afrontar los desafíos del duro campo laboral.

Creo que me encuentro en una buena posición para realizar una crítica constructiva no solo por ser un estudiante comprometido a esta hermosa carrera universitaria que es la de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino además por haber trabajado por más de dos años en un estudio jurídico, en el cual pude aprender y resolver asuntos de índole laboral, civil y administrativa.

Ahora bien, con respecto al plan de estudios creo que el primer tema a resolver y que salta a la vista es el de las correlatividades. Creo que bajo ningún punto de vista los alumnos tendrían que empezar a ver materias codificadas sin antes haber pasado por Derecho Constitucional, ya que según entiendo por lo poco que he aprendido en estos años, que siendo la Constitución Nacional la norma jurídica fundamental de nuestro ordenamiento, todas las demás ramas del derecho, directa o indirectamente remiten a ella. Con la currícula actual un alumno bien podría cursar hasta Derecho Civil V, los dos Derechos Penales y Comercial I sin siquiera saber nada acerca del sistema republicano de gobierno, los contralores, la división de poderes y las atribuciones del 75 Inc. 12 del Congreso Nacional que indican el dictado de los códigos de fondo, por nombrar algunas de las faltas mas graves.

Siguiendo con los temas más generales para luego adentrarme en algunas materias en particular entiendo que se deber ser consciente que a la hora de cuatrmiestralizar una materia, estamos corriendo el riesgo de dejar de lado temas importantes de las asignaturas. A decir verdad las materias "cuatrimestrales" entre inicio de clases, entrega de notas y feriados suelen durar algo más de tres meses. Ante la falta obvia de tiempo los profesores por clara necesidad optan por quitarle tiempo de estudio o de explicación a temas aprobados en los programas de las diferentes asignaturas. Resulta obvia la necesidad de no intentar ajustar todas las asignaturas a cuatro meses de cursadas, porque hay materias que simplemente no son para ser estudiadas en tan poco tiempo.

Creo también que el estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales, requiere una carrera de grado que le otorgue al profesional una formación integral para poder desenvolverse con soltura en diferentes campos como ser abogados litigantes, defensores, relacionistas internacionales, diplomáticos, etc. Entiendo que de agregarse algunas materias (quizás optativas) a la curricula se pueda lograr una formación más integral.

Entonces de agregarse materias como Derecho Ambiental, Contabilidad, Macroeconómica, Arbitraje, Ciencia Política, Practicas Forenses le estaríamos dando al graduado de la UNLP un espectro y por lo tanto una inserción laboral mucho más amplia. Entiendo que el agregar materias y por lo tanto alargar la duración de la carrera podría acarrear el descontento de cierta parte del alumnado, por lo tanto propongo que sean materias optativas, que luego puedan acreditarse en el analítico final de la Universidad, ya que muchos estudiantes, queremos día a día mejorar profesionalmente y poder generar un cambio positivo en la sociedad gracias a nuestra formación.

Además de las materias que hagan a una formación integral, se deberían agregar materias que involucren mayor tiempo de prácticas. Lo más probable es que un graduado de la carrera salga de la misma sin saber hacer una liquidación laboral, sin impugnar una pericia, sin realizar alegatos de bien probado, sin saber lo que es un testimonio en un juicio de divorcio, etc. La necesidad de materias prácticas salta a la vista en el día a día de Tribunales. Son luego los jueces o los auxiliares o secretarios de Tribunales y Juzgados los que deben enseñarle a los graduados como realizar estas tareas, y está claro que el más perjudicado siempre es el cliente.

Ahora entrando a algunas materias en particular, quisiera empezar por Derecho Social, la cual pude cursar y además ejercer en la práctica. Creo que esta materia por lo menos se debería desdoblar en dos. Por lo extenso de la misma los alumnos pasan un cuatrimestre entero leyendo acerca de cuestiones sindicales, la historia del Derecho Laboral en Argentina y otros temas, y sin de ninguna manera desmerecer a estos temas por demás importantes, se dejan de lado cuestiones sumamente fundamentales como el proceso laboral, el que ocupa una bolilla en Derecho Procesal Civil, y por la envergadura y la extensión de esa materia, nunca se llega a dar. Entiendo por lo tanto que se le deberían sacar este y otros temas a Derecho Procesal Civil que resulta una materia troncal de la carrera y por lo tanto su estudio no debe hacerse pormenorizadamente. Y agregar a Derecho Social una segunda materia para estudiar cuestiones de tipo prácticas fundamentales. En el transcurso de este año se dictó por iniciativa del Colegio de Abogados un curso de Practica Laboral para profesionales, dictado justamente por profesores que se encuentran en la Facultad y que bien podrían hacer lo mismo allí. Cabe decir que la asistencia a dicho curso fue masiva, evidenciando una clara falta de formación por parte de la Carrera de Grado.

Creo además que debemos revalorizar la importancia de Filosofía del Derecho en la carrera de grado. Una asignatura que nos enseña acerca de la importancia y el hábito de cultivar los valores, de estudiar la evolución del pensamiento filosófico occidental, y de analizar todos los basamentos filosóficos y morales del ejercicio profesional no se debe pasar por alto de esa manera. Actualmente por una decisión unilateral la cual resulta contraria al Reglamento de la Facultad una Cátedra de Filosofía del Derecho promociona a sus alumnos luego de una cursada de solo DOS horas semanales en un cuatrimestre. Considero que ese tiempo

no alcanza para revisar los temas de una materia tan vasta como Filosofía del Derecho, en donde se enseñan cuestiones de Bioética, Fertilización In Vitro, Eutanasia, etc., todos temas por demás actuales. Los alumnos ante la elección de promocionar una materia por medio de la asistencia a clases de dos horas semanales, o la asistencia de 6 horas semanales como cualquier cursada normal que promueve una de las cátedras, desgraciadamente eligen la salida mas fácil pero la más costosa en el plano de formación intelectual.

En cuanto al primer año de la carrera, creo necesario no solo conservar el ciclo introductorio sino hacerlo intensivo. Se observan dificultades insalvables para los alumnos ingresantes a la hora de empezar a cursar las materias de primer año, porque cuestiones que se consideran básicas como comprensión de textos y redacción son vallas infranqueables para los alumnos menos favorecidos por una educación secundaria seria. Creo además que a riesgo de generar malestar en muchos estudiantes, se deberían tomar exámenes rigurosos no solo al inicio de la carrera sino al final. En el inicio creo que es importante para desalentar a quienes no tengan real convicción de comenzar a cursar la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y le estén con su presencia en la facultad, quitando la posibilidad de cursar materias a alumnos que realmente vayan a estudiar. Me ocurrió en carne propia que en los primeros años de la carrera me vi obligado a rendir gran cantidad de materias libres, por no haber cupo en las cursadas, que habían sido ocupadas por gente que no solo no se presentaba a cursar, sino que al poco tiempo abandonaba la carrera, ocupando un espacio que podría haber sido aprovechado por gente realmente dedicada al estudio de las diferentes asignaturas. Creo además que un examen final comprendedor de las materias más importantes de la curricula antes de la entrega del título, es necesario no solo para medir el nivel de conocimientos con que egresan los estudiantes, sino además para que los mismos estudiantes debamos por obligación refrescar conceptos de materias como Obligaciones, Derecho Constitucional, y diferentes asignaturas de las que sus conceptos se van perdiendo a través de los años.

Entrando ahora un poco en los programas de estudio de todas las materias de la facultad, entiendo que los mismos se deben revisar en plazos no mayores de 5 años. El derecho como me han enseñado a lo largo de la Carrera, cambia, muta y se transforma por cuestiones de tipo sociales, políticas o económicas. Si queremos estar a la altura de ese acontecer creo que debemos hacer un análisis crítico de los programas de las diferentes materias. Encontramos en los pasillos de la facultad y en las aulas Docentes y Profesionales con gran preparación y un gran amor por sus asignaturas, en donde la frase de cabecera siempre resulta ser “Este programa es viejo”, “Lo que pasa es que hay que actualizarlo”, “Este programa hay que tirarlo a la basura” y cuestiones del estilo, que denotan un alto grado de des-actualización de los temas dados. Por lo tanto la conclusión que rescato es la siguiente, si tenemos en nuestra misma facultad docentes comprometidos y apasionados por sus asignaturas, y si estos mismos docentes son quienes critican los programas que ellos mismos exponen, ¿por qué entonces no hacer una revisión más crítica y periódica de los mismos?

Quisiera finalizar estas humildes propuestas remarcando la importancia que hoy día merece la reforma del plan de estudios, y la encomiable tarea de los directivos, estudiantes y agrupaciones de la Facultad que se han lanzado a esta labor.

Muchas Gracias,

Atte.

Sebastian Irazusta Badi.

PROYECTO N° 33: Autor: Julio SCATOLINI, Profesor Adjunto de “Introducción al Derecho”, eleva propuesta y análisis acerca de la denominación, objeto y contenidos de su disciplina.

Tema: Acerca de la denominación y ubicación curricular de la asignatura “Introducción al Derecho”

La reforma a la estructura del plan de estudios o curricula de la carrera de abogacía nos plantea una trampa lingüística falaz en el caso de las materias iníciales o propedéuticas, ya que algunos podrán plantearse si la **o** es incluyente o excluyente, el sentido común nos indicaría que se pretende distinguir las materias que van a integrar la curricula de grado en el primer año de la carrera de aquellas que solamente van a ser parte de un Ciclo Básico Inicial.

La primera cuestión que nos surge es indagar acerca del concepto propedéutica integrado por el prefijo Pro que significa “antes o delante de” y paideutikos relacionado con la “enseñanza” en la que “Paidos” significa niño o hijo y el sufijo “ikos” que es una partícula que nos permite construir sustantivos. Nos lleva a preguntarnos si la universidad tiene que seguir considerando a los alumnos como niños o hijos y estimamos que desde el punto de vista del “Paidos” sí, ya que la pedagogía es “la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza”. Y la discusión que se pretende plantear acerca de las materias del primer año de la carrera consiste en sí las mismas conforman una enseñanza preparatoria para “el estudio de una disciplina o ciencia” o si es si es el “inicio de la enseñanza misma”. Consideramos que todas las materias del primer año de la carrera están ubicadas en el lugar que les corresponde y nuestra materia en particular es el inicio del estudio del fenómeno jurídico.

Creemos que el debate debe realizarse pero poniendo ciertos límites que van a estar vinculados con la autonomía disciplinar, el objeto, la denominación y la ubicación.

En cuanto a la autonomía se puede plantear y discutir si una asignatura para ser tal debe ser disciplinar y por tal motivo si tiene objeto propio y ¿cuál es?

En cuanto a la denominación de la misma implica ponernos a debatir acerca de las razones de tal denominación y por último si está bien ubicada en la curricula de la carrera y la correlatividad con otras materias.

En diversas Facultades del país, se denomina “Teoría General del Derecho” a las materias que se dictan en primer año de la carrera, pretendiendo responder a criterios disciplinares. Pero, hay que realizar una salvedad, las asignaturas no siempre responden a estos criterios. El fundamento o razón de ser de la asignatura “Introducción al Derecho” recorre un camino inverso al que se cree y tiene sus motivos, uno de ellos es que toda disciplina tiene cierto grado de autonomía y delimita el campo de conocimiento a un objeto que le es propio, dentro de lo que es el fenómeno jurídico e “Introducción al Derecho” es una asignatura que no delimita el campo de conocimiento jurídico, sino que aborda al Derecho como una totalidad, Integralmente.

En este sentido podemos sostener que el objeto sobre el que recae el conocimiento de la asignatura no es un problema menor sino que es central en el debate, por tal motivo si sólo fuese una “Introducción” esta sería “a algo” y así la introducción sería “hacia un objeto determinado”, el sustantivo sobre el que recae, en nuestro caso “Derecho”.

No es el objetivo profundizar esta discusión que lleva años con relación a la “Teoría General del Derecho” ´pero si clarificar que nuestra asignatura es mucho más que Teoría General.

Rodolfo Vigo, en el "Segundo Encuentro de Profesores de Introducción al Derecho" planteo que los docentes de esta asignatura tienen una gran responsabilidad como difusores de una cambiante realidad que conforma una nueva cultura jurídica, en consonancia con ello creemos que nos hallamos "Inmersos en una crisis de conocimiento, envueltos en un notable culto a la rapidez y a la superficialidad que pareciera constituir un rasgo de esta época posmoderna"[14].

Es entonces cuando, en el contexto posmoderno mencionado, se pretende minimizar a la asignatura y tratar de sacarla de su ubicación y además, cambiarle la denominación al plantearse, entre otras cosas, que no existe una "Introducción a la Arquitectura" para dar un ejemplo, pero, en algunas Universidades existe, como en la Universidad de Morón que les presentará en el primer año de la carrera los temas inherentes a la misma con ciertos contenidos mínimos que deben saber cómo: La Arquitectura: definición y roles del arquitecto en la sociedad. Conceptualización de espacio. Ejercicios con espacios de características diversas: cerrados, abiertos, lineales; reconocimiento de los aspectos funcionales, formales y tecnológicos en la obra de arquitectura y podemos seguir aumentando la lista de contenidos (remitirse al plan de estudio de la carrera de Arquitectura de dicha Universidad que data del 2004).

Para continuar con la ejemplificación En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora también existe una asignatura denominada "Introducción a la Economía" que constituye el primer espacio curricular de esta disciplina dentro del plan de estudio de las carreras de grado aportando a los alumnos los conocimientos, interpretación y aplicación necesarios para su formación posterior. Es entonces cuando volvemos a sostener la importancia de la denominación de la asignatura y su ubicación curricular.

Entonces nos preguntamos ¿Cuál es el motivo por el que se pretende cambiarle la denominación y la ubicación? Por el momento no vamos a dar una respuesta a este interrogante pero sí nos planteamos lo siguiente ¿Si no responde estrictamente a un criterio disciplinar es una asignatura? La primera respuesta es muy obvia, está en los planes de estudio de la mayoría de las Facultades de Derecho. Pero, esa respuesta resulta insuficiente para fundamentar su denominación por la sola ubicación en la curricula, sea por costumbre, por cuestiones históricas o afectivas.

Lo más común es que se fundamente una materia por la arista disciplinar, siendo la génesis de distintas asignaturas que van tomando el nombre de la disciplina de la que deriva e integran la curricula de la carrera y nadie objeta su denominación.

Me pregunto ¿Por qué? Por tener un mismo origen: la Dogmática Jurídica, pues de ella se desprenden la dogmática constitucional, la dogmática civil, la dogmática penal con sus respectivas denominaciones en los planes de estudios: Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal.

Existen otras que no provienen de la dogmática pero son consideradas asignaturas como Sociología del Derecho o Filosofía del Derecho, que si bien no responden a criterios disciplinares, a nuestro juicio no se pone en duda la importancia de las mismas en los planes de estudio.

Cuál es el motivo que subyace en el intento de cambiar la denominación a la asignatura "Introducción al Derecho": Que no responde a un criterio disciplinar.

Pues bien, desde ese punto de vista podemos decir que existen ciertas necesidades que se relaciona con la reforma al plan de estudio que responde a un nuevo perfil del abogado, más moderno, esa es la intención planteada por el Vice Decano Vicente Atela cuando dijo *que "hoy en día hay temáticas claves, como el derecho ambiental, los derechos humanos, el derecho comunitario -entre otras-, que no son materias de la carrera. Apenas se las ve en un punto de una bolilla de alguna asignatura" (Diario EL Día 13 de agosto de 2011).*

Y como se puede apreciar para tomar un ejemplo de los planteados por el Vice Decano, los "derechos humanos" son abordados por distintas asignaturas en distintos puntos del programa ¿nos preguntamos si los derechos humanos son una disciplina autónoma del "Derecho Constitucional", del "Derecho Internacional", de la "Filosofía del Derecho"? o acaso ¿no es un eje temático que traspasa transversalmente a toda la dogmática? Si se le otorga el rango de disciplina lo tenemos que considerar autónoma y con un objeto de estudio delimitado, desde el punto de vista ontológico, y en ese sentido la "Teoría de los Derechos Humanos" no se ha puesto de acuerdo en Qué son los derechos humanos: "libertades fundamentales", "derechos fundamentales", "derecho público subjetivo", "garantías individuales", y sigue la lista. Desde el punto de vista de la fundamentación tampoco, ya que el ¿Por qué?, la justificación de su existencia posee varias posturas y es un debate abierto. Entonces, ¿puede ser una asignatura? Personalmente creemos que sí, pero no por el contenido disciplinar, no por ser autónoma, sino por la necesidad de ser abordada con mayor profundidad que lo que actualmente se lo hace, atento que tales cuestiones son consideradas fundamentales desde distintos ámbitos, como los medios de comunicación, la sociedad, la política, en fin es un tema que hace a la mejor cultura jurídica de todo ciudadano y para tal fin está nuestra Facultad.

En este rango de ideas existen disciplinas que no son asignaturas como la antropología jurídica o la psicología jurídica y nadie niega la importancia que tiene en la *actualidad "Se apuntará a formar un profesional con un perfil más mediador, conciliador, que sepa desenvolverse con soltura en la solución de problemas en ámbitos extrajudiciales, algo que, por caso, precisa de herramientas de la psicología, y que está ganando mucho terreno, no sólo en nuestro país"* expresa el Vice Decano en el diario citado al referirse a *la mediación.* Entonces la "Mediación" es una interdisciplina o una transdisciplina que necesita de otras herramientas, si se la pretende incluir dentro de la curricula como la mencionada psicología. Bien, si vamos por el camino de las disciplinas creemos que se tienen que incluir todas las que versen sobre contenidos disciplinares en el nuevo plan. Pero respondiendo con el "sentido común", creemos que no, ya que se inflaría la curricula y se alargaría el plazo de la carrera a más años que los actuales.

Hecha esta digresión, vuelvo sobre "Introducción al derecho", a pesar de no ser disciplinar es la materia más importante del fenómeno jurídico de los primeros años de la carrera ya que, no es una instancia previa sino que es el inicio del estudio del fenómeno Derecho en su integralidad. No es un conjunto sistemático de conocimientos que una vez estudiados sean considerados un saber autónomo y por lo tanto se agote en ese saber, ya que debe ser profundizado posteriormente.

"Introducción al Derecho" es el punto de partida hacia el conocimiento del fenómeno jurídico en su visión totalizadora previo a los estudios dogmáticos posteriores. Su contenido es tomado de la filosofía del derecho, de la sociología, de la teoría jurídica, y también de la dogmática jurídica: versará sobre temáticas ontológicas, lógicas, gnoseológicas y axiológicas. Para mencionar algunas: la teoría general de las normas, la

[14] PETTORUTI, Carlos y SCATOLINI, Julio: "Introducción al Derecho puerta de acceso a la enseñanza-aprendizaje del Derecho en la Universidad". Primer Encuentro de Profesores de Introducción al Derecho. Vaquerías. Córdoba. 2000. Ponencia.

teoría de las normas jurídicas, la teoría sobre el ordenamiento jurídico, fuentes del derecho, interpretación y valores jurídicos, con la omisión de algunas otras que en otros programas existen.

Pero lo cierto es que el objetivo de la asignatura a través de sus contenidos es brindarle al estudiante los conceptos básicos y fundamentales que posteriormente van a profundizar en las disciplinas de la dogmática jurídica que luego transitarán.

La asignatura cumple una función instrumental que le permite al alumno incorporar conceptos y un lenguaje jurídico mínimo que le posibilite el acceso a la dogmática jurídica disciplinar.

Si bien "Introducción al Derecho" es una materia "instrumental", no por eso es carente o vacía de contenidos, y que si bien toda ciencia, teoría, o carrera no tienen un punto final, pues, permanentemente se van renovando y cuestionando los conocimientos, pero sí debe tener un punto de partida. Y a nosotros, como docentes, precisamente, nos toca ser el punto de partida no sólo de una materia, ni de una rama del derecho, ni de una disciplina jurídica, sino de todo el "Derecho", ya que todo el fenómeno jurídico es nuestro contenido.

A los estudiantes se los "inicia en el proceso cognitivo orientándolo en el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para la comprensión y la abstracción".[15]

Compartimos las ideas expresadas por Ciuro Caldani en el 1 Encuentro de profesores de Introducción al Derecho en el que concibiera al Derecho como una totalidad, con mayúscula, como sustantivo, siendo la función instrumental enseñarle al alumno esa totalidad que, posteriormente va a ser abordada por las diferentes disciplinas que estudian el derecho con minúscula, adjetivado, parcializado. En otras palabras, el abordaje filosófico de la totalidad es el objetivo de nuestra asignatura, ya que al acceder al estudio del fenómeno jurídico lo realizamos en su total dimensión y complejidad, dotando al estudiante de los conceptos mínimos que necesitan saber en esa instancia. Posteriormente, en las disciplinas de la dogmática jurídica se estudia esa parcialidad, ese aspecto es abordado por las asignaturas en que se dividen las distintas ramas del derecho.

Asimismo, creemos que "Introducción al Derecho" es una materia que debe en la curricula ser previa a cualquier contenido de la dogmática jurídica.

No comprendemos cómo se puede rendir "Derecho Constitucional", "Derecho Internacional Público" o "Derecho Público Provincial y Municipal" sin haber aprobado "Introducción al Derecho". Pues "Introducción al Derecho" dentro de los contenidos nos presenta cuestiones vinculadas al ordenamiento jurídico, al estudio de la constitución como la primer norma positiva, como también un conocimiento mínimo acerca de las relaciones jurídicas entre los Estados y de las distintas ramas del derecho que la dogmática jurídica se encargará de profundizar.

Nuestra asignatura como, permítanos esta contradicción, disciplina introductoria para los estudiantes y los estudiosos del derecho tiene como virtud permitir ingresar al tratamiento de los conceptos y fundamentos científicos generales y planteando, a su vez, una visión filosófica para que el alumno pueda ser un ser crítico, pensante, analítico y buscador de nuevas verdades que lo formen con una visión holística acerca del derecho.

A nuestro criterio la Teoría General es un estudio realizado sobre los mismos temas, pero en un acto reflexivo de segundo grado, cuando ya se poseen ciertos conocimientos básicos que nos permite realizar un movimiento dialectico desde las nociones básicas y fundamentales aportadas desde " Introducción al Derecho" hacia las particulares adquiridas en las distintas ramas del derecho positivo.

En ese proceso de enseñanza-aprendizaje en que nos situamos consideramos que la asignatura "Filosofía del Derecho" debe seguir siendo una materia que, una vez dotado el alumno de un bagaje cultural, pueda repensar los conocimientos adquiridos a través de nuevos planteamientos que en algunos casos pueda cuestionar el ordenamiento jurídico vigente, para poder analizar desde lo que es para pasar a preguntarse sobre lo que debe ser, ya que es importante una visión que posibilite una construcción nueva sobre los conocimientos adquiridos y realizar un planteo general sobre los mismos. El lugar curricular de la misma no pude bajar del año en que se encuentra y el estudiante debe de haber aprobado como mínimo la mitad de la carrera.

En esta línea de ideas concebimos que habría que plantearse la posibilidad de incorporar una "Teoría General del Derecho aplicable al Caso" como última materia que posibilite al alumno aplicar todos los conceptos generales, sin tocar la denominación "Introducción al Derecho" como materia inicial y troncal de primer año, ni "Filosofía del Derecho" que busca los fundamentos o razón de ser del derecho, dentro del mundo de la cultura al cual pertenecemos. Esto posibilitaría al alumno prepararse para lo que le vendrá: su actividad profesional, que en muchos casos, por no haber fomentado el espíritu crítico necesario se pierde en unos conceptos adquiridos memorísticamente y de aplicación dogmática que no hacen a un abogado que cuestione y busque con avidez nuevos conocimientos para poder rebatir y revisar posturas que, a veces, son simplemente legalistas y no justas.

La asignatura "Introducción al Derecho" tiene como finalidad que el alumno, desde el inicio mismo de la carrera, se prepare, dentro de su etapa formativa, para comprender el fenómeno jurídico como una unidad compleja.

Julio César Scatolini
Prof. Adjunto Ordinario
Introducción al Derecho - Cátedra II
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

PROYECTO N° 35: Autor: José ORLER, Auxiliar Docente de "Introducción al Derecho" remite análisis y evaluación acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de abogacía

INVESTIGACION y PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL CAMPO DEL DERECHO.
Aportes para un diagnóstico y reflexión sobre sus perspectivas.

Autor: José Orler [16]

I.- Introducción

El presupuesto básico de que la producción de conocimiento debe constituir eje esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también integrar la batería de recursos formativos con que deben contar

[15] SCATOLINI, Julio C. y Otros: "Reflexiones sobre problemas de la asignatura Introducción al Derecho". Ponencia "III Encuentro de Profesores de Introducción al Derecho" Santa Rosa, La Pampa 7 y 8 de noviembre de 2003

[16] Abogado. Docente e Investigador UNLP- UBA. Especialista en Educación Superior; Maestría en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales; Doctorando en Derecho.

los docentes, se constituye hoy en eje de las preocupaciones centrales de las más avanzadas instituciones académicas del mundo.

La integración de la investigación a la enseñanza en las instituciones académicas, y particularmente en las Facultades de Derecho, aparece como elemento clave en la formación de los futuros operadores del derecho, especialmente a partir de enfoques constructivistas del proceso de enseñanza-aprendizaje que parten de conceptualizar novedosamente al mismo, entendiéndolo básicamente como una tarea de indagación.

En consonancia con ello, el objetivo de articular la *docencia* y la *investigación* en un proceso simbiótico que se retroalimente y vaya configurando un nuevo modo de entender los estudios superiores, se constituye en medular y su operacionalización en un desafío que debe asumirse.

La tradición académica que caracterizó el modelo de enseñanza del derecho en los claustros universitarios de nuestro país a lo largo de su historia, en que la producción de conocimiento no fue un eje jerarquizado, viene derivando en los últmos 20 años hacia una consolidación de la idea referida, en el sentido de entender a la investigación como actividad indispensable e inherente a las instituciones de educación superior, que tienen como misión fundamental "*…la promoción de la investigación científica.…*"

Esta importancia de la articulación entre docencia e investigación incluso excede el campo de acción de las universidades para transformarse en una política estatal generalizada. La Ley de Educación Superior 24.521, formula como objetivos de la Educación Superior a) Formar científicos, Profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte; b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; c) Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación.

Por su parte, la Ley de Educación Nacional, fija como uno de los objetivos de la política educativa nacional "promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea". Y entre los objetivos de la política nacional de formación docente, establece el de "incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares."

El Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas, por su parte, así lo ha entendido. En su documento "Estándares para la autoevaluación de la gestión institucional y las funciones de la enseñanza-docencia, de investigación científica y de extensión universitaria de las Facultades de Derecho de las Universidades Publicas" afirma de manera terminante que las universidades que "*…reducen su actividad a la enseñanza y no producen conocimiento…*" no son tales: "*…utilizan esta denominación de manera ilegitima…*".

En el acápite "Estándares para la autoevaluación de la Investigación Científica" especifica: "La Facultad o Unidad Académica promueve y ejecuta las actividades de investigación como uno de los aspectos privilegiados de sus políticas institucionales" (Pto. 2); y que: "Las políticas institucionales de investigación que desarrolla la Unidad Académica están articuladas estrechamente con la formación y actualización de los docentes, con el perfeccionamiento de los graduados, y promueven la elevación de la calidad académica de las actividades de enseñanza de grado y posgrado…" (Pto. 4).

Esta jerarquización de las actividades de Investigación Científica constituye un modo de institucionalización del debate que desde hace algunas décadas se viene dando en torno a esta cuestión y de los estudios al respecto.

II.- Incorporación de la Investigación al proceso de enseñanza-aprendizaje?

La pregunta acerca de cómo implementar el deseado paradigma, deviene medular, pero se bifurca en otras múltiples: Qué experiencias/prácticas pueden revisarse al respecto?, qué evaluación critica puede hacerse de ellas?, cuáles son sus limitaciones y sus fortalezas?, qué modelos de enseñanza-aprendizaje ponen en juego?, qué relación docente-alumno importan?, qué presupuestos pedagógicos y didácticos conllevan?, qué formas de evaluación?. Por otra parte, qué relaciones con el contexto social e institucional y qué relaciones ciencia-técnica-sociedad suponen?, qué relación con las tradiciones cognitivas de la disciplina despliegan?, qué perfil de graduado contribuyen a formar?.

El problema de cómo se enseña a investigar atraviesa a todas las instituciones académicas y proyectos pedagógicos de enseñanza superior en Ciencias Sociales en nuestro país y Latinoamérica (Nino C., Zanoni E., Spolansky N., Cueto Rua J., Floria C., 1984; Bhomer Martin 2003; Ciuro Caldani Miguel Angel 2003; Stenhouse L. 1987; Eichelbaum de Babini A., 1991; Schuster F., Giarraca N., Aparicio S., Chiaramonte J., Sarlo B., 1995; Gibbons M. 1997; Kluger Viviana 2004; Wainerman C., Sautu R., 1998; Rojas Soriano R., 2000; Ruiz G. 2002; Cardinaux N., Clerico L., Molinari A., Ruiz G., Bianco C., Alvarez G., Starowlansky V., 2005; Cardinaux N., Gonzalez M, 2003; Santos, Boaventura de Sousa 2005; entre otros).

Las estrategias de abordaje conocidas, que históricamente se han seguido, transitan por "*…dos caminos que pueden ser compatibilizados…*"[17]: el primero es insertar al alumno en proyectos de investigación en carácter de becarios, aprendices o pasantes. El segundo, más específico, es crear un espacio curricular propio. En la tensión entre ambas alternativas se ubican las experiencias empíricas y los debates teóricos respecto de la cuestión, en la actualidad (Orler y Varela, 2008).

La primera vía de las enunciadas quizás abreve en aquella iniciática sentencia comtiana que corrió como un legado hasta nuestros días: "*…El método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en que se lo emplea …*" (Comte, 1926). En nuestro país, particularmente, desde las primeras experiencias llevadas adelante por Gino Germani al crear la carrera de Sociología en la UBA, ese ha sido el "modelo" implementado. La formación de investigadores se hace en la "*pedagogía del silencio*", como la denomina Bourdieu: "*….una parte muy importante del oficio intelectual se adquiere a través de modos totalmente prácticos; el espacio de la pedagogía del silencio, que da un lugar débil a la explicitación, a los temas transmitidos, es sin duda, cada vez más grande en una ciencia en la que los contenidos, los saberes, los modos de pensar y de actuar son menos explícitos, menos codificados…*" (Bourdieu y Wacquant, 1992).

Esa tradición parece imponerse en nuestras Facultades de Derecho. Concentra alrededor de un proyecto de investigación determinado a alumnos y docentes, siendo los cursos y seminarios de metodología de carácter complementario. Es el viejo aserto que sostiene que a investigar sólo se aprende investigando y contradice las potencialidades de cursos de metodología o seminarios de investigación que impostan esas actividades.

---

[17] Nancy Cardinaux "La articulación docencia e investigación en el derecho", en "Metodología de la Investigación Científica en el Campo del Derecho", José Orler y Sebastián Varela, Edit. UNLP, 2008.

Sin embargo, las transformaciones que viene evidenciando la Universidad Argentina desde fines del siglo pasado, parecen obligar a una revisión de tal estrategia. Efectivamente, la masividad que ha adquirido la enseñanza universitaria, fundamentalmente a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983, pone en evidencia la escasez de grupos de investigación y de presupuesto para dar lugar a esas instancias de formación de investigadores. Los proyectos de investigación, pocos y escasos en recursos y financiamiento, no son suficientes para que los alumnos que nuestras Facultades de Derecho reciben cada año puedan integrarse efectivamente a los equipos de investigación.

La segunda vía, es lo que ha sucedido en algunas carreras y en particular en los estudios de postrado de derecho. El formato más empleado ha sido el de los seminarios de investigación o de metodología de la investigación.

El sistema tiene un mayor nivel de implementación. Comenzó con la oferta académica de posgrado, de la mano del requerimiento de producción de tesis y tesinas para aprobar Especializaciones, Maestrías y Doctorados, normado por CONEAU, y actualmente forma parte de la currícula de grado en algunas facultades, como la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires[18].

Pero esta alternativa, reconoce una dificultad operativa no menor en la conformación de los cuerpos docentes de las facultades de derecho. Éstos, mayoritariamente, no tienen experiencia alguna en investigación y tampoco una dedicación exclusiva a la tarea docente. Tales carencias, tornan al menos muy dificultosa, la enseñanza de contenidos y destrezas que no son propias de sus ejercicios profesionales y a las que tampoco podrían dedicar tiempo para capacitarse por cuanto su ocupación principal no es la docencia sino el ejercicio profesional.

Asimismo, muchas y diversas son las dificultades que no deben desconocerse y que pueden enumerarse al momento de la implementación. El diagnóstico efectuado por Fernández Lamarra (2008) en relación a las universidades en nuestro país cabe perfectamente para caracterizar la realidad de la investigación en las Facultades de Derecho. Enuncia la cuestión referida a la "*falta de articulación entre docencia e investigación*", enumerando además: problemas para definir políticas institucionales de investigación; fuertes limitaciones en la disponibilidad de recursos académicos (falta de dedicaciones) y de apoyo (falta de recursos materiales y financieros, etc.); insuficiente articulación entre diferentes unidades y proyectos de investigación; falta de consolidación de los grupos de investigación existentes e insuficiente acompañamiento para la formación de nuevos grupos; insuficiente formación en investigación de muchos docentes-investigadores; entre otros.

No obstante ello, actualmente parece ir imponiéndose una tendencia a la creación de estos espacios curriculares en los estudios de grado, en las distintas Facultades y Carreras de las Facultades de Derecho de nuestro país y del exterior. Los mismos, con diversas características, jerarquías y requerimientos, asumen la tarea de formación en la producción de conocimiento.

III.- A modo de conclusión.

De lo expuesto surgen algunos interrogantes que no queremos dejar de compartir: Es posible el desarrollo de una disciplina o área del conocimiento que prescinda de la producción de conocimiento validado científicamente?, asimismo, podemos seguir llevando adelante proyectos exclusivamente teóricos?, resulta adecuado articular toda una serie de recursos humanos, económicos, institucionales, etc. en el hábito de una producción sin sustento en la investigación científica?, hay todavía, a esta altura de las circunstancias y del desarrollo del conocimiento en las sociedades contemporáneas, margen para aproximarse a "lo jurídico" de un modo meramente teórico, ensayístico y especulativo?, podemos seguir transitando por los caminos del Derecho y su producción académica, solo desde la cómoda, elegante y autista doctrina?.

Las definiciones institucionales y la propia tradición histórica de nuestra Universidad de La Plata desde su fundación, centran la razón de su existencia en la producción de conocimiento, y entendemos que debe asumirse esta esencia en el renovado emprendimiento de modificar el Plan de Estudios de nuestra facultad.

Ello a partir del presupuesto teórico de que la respuesta a la pregunta por el Derecho necesariamente habrá de ser polifónica y plural, porque pensamos en una construcción teórica de nuestro objeto de estudio que debe necesariamente incorporar la multiplicidad y la diferencia a su acervo.

El rescate de los "puntos de vista" habrá de ir situando explícitamente a la ciencia de "lo jurídico" en el ámbito de las luchas, intereses y contradicciones que configuran su campo, y que, al decir de Bordieu[19], dinamizan las estrategias de "sucesión" y "subversión" que en su seno se despliegan, y van socavando indeseables "acuerdos forzados".

Las prácticas académicas en el campo del Derecho —la docencia y la investigación— sus modos de articulación y sus tradiciones institucionales, requieren de discusión crítica, configurando tópicos que deben ser identificados, expuestos y revisados, sin dejar de advertir el constitutivo carácter que asume el campo disciplinar del Derecho, con su conformación multiparadigmática, su difusa y reñida delimitación ontológica, sus divergencias teóricas y epistemológicas, y sus particulares prácticas académicas y profesionales.

Un proyecto curricular de enseñanza del derecho no puede ser ajeno a todas estas definiciones. Se deben tomar decisiones que excedan la determinación de los contenidos informativos, las habilidades y las estrategias docentes y de enseñanza, debiendo promover, además, sólidos vínculos entre las funciones de docencia e investigación, consolidando formatos del proceso de enseñanza-aprendizaje con sentido crítico, en los que la producción de conocimiento aporte un perfil caracterizador.

La Plata, primavera 2011.-

PROYECTO N 39. Autor Cecilia LOPEZ PUERTAS, Remite propuesta de reforma del plan de estudios considerando la necesidad de incorporar nuevos espacios curriculares, actualizando los programas de estudios de las materias actuales, régimen de enseñanza y prácticas profesionales.

La Plata, Septiembre de 2011.

APORTES PARA PENSAR LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS

[18] La asignatura "*Metodología de la Investigación*" forma parte del Ciclo Profesional Orientado en el actual Plan de Estudios de la carrera de Abogacía. También se incluyó la asignatura "*Epistemología y Metodología de la Investigación*" en el Plan de Estudio del Profesorado en Ciencias Jurídicas de esa Facultad de la UBA creado en 2005.

[19] Pierre Bourdieu, "*Los usos sociales de la ciencias*", Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 2003.

DE LA CARRERA DE ABOGACIA DE LA UNLP.

Como graduadxs y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, celebramos que esta comunidad académica se encuentre discutiendo la reforma al plan de estudios vigente. Consideramos que ello resulta sumamente necesario dado que la estructura de nuestra currícula actual data de 1953 (con algunas modificaciones insustanciales posteriores), habiendo sido pensada para un contexto socio histórico sumamente distinto del presente, sobre la base de ideas y prácticas que se impone revisar desde una perspectiva crítica, no para desechar todo el conocimiento y la experiencia ganados a lo largo de nuestra historia, sino por el contrario, para enriquecer esa trayectoria con el aporte de nuevas miradas que tiendan a la generación de profesionales del derecho fuertemente comprometidxs con las necesidades populares.

Entendemos que este es el sentido que debe darse al proceso de reforma, que bajo ningún modo debe supeditarse a exigencias extrañas a nuestra casa de estudios y por ende contrarias a la autonomía universitaria, como las vinculadas con el proceso de acreditación de la carrera ante la CONEAU que intentará abrirse.

En el sentido indicado, entendemos que el actual proceso de reforma debe aspirar a una modificación profunda del plan vigente, asentándose principalmente en los siguientes ejes:

(1) CONCEPCIÓN DEL DERECHO:

En forma claramente predominante, la formación impartida en las aulas de nuestra Facultad asume un punto de vista dogmático-positivista, centrado en el estudio de la norma legal de manera aislada y descontextualizada, que tiende al aprendizaje memorístico y acrítico, desvinculando al derecho de su contenido ético, social y político. Se enseña a aplicar las normas de manera mecánica, de forma de ajustar los hechos a la norma, en lugar de buscar que el derecho sirva para dar soluciones justas a las distintas realidades.

Esta visión atraviesa toda la estructura de nuestro plan de estudios, hasta el punto de que las pocas materias que ofrecen perspectivas diferentes, en general son percibidas como ajenas a nuestra disciplina y "desubicadas" en la currícula. Más aún, el marcado influjo de esta escuela lleva a que los programas de gran cantidad de asignaturas, se construyan siguiendo casi al pie de la letra el método expositivo de las leyes, con la pretensión de abarcar la totalidad del plexo normativo involucrado, a despecho de cualquier consideración sobre la pertinencia de tal enfoque, la efectiva vigencia de muchos de los institutos estudiados y la utilidad de semejante intención, en un contexto normativo cada vez más complejo, que por otra parte el enorme desarrollo de las tecnologías de la información, permite consultar en forma casi permanente. Así, hasta la jurisprudencia, es decir, el derecho según la propia práctica tribunalicia, resulta relegada en las clases, en los programas y en el estudio del derecho que se realiza en nuestra Facultad.

Ante ello, se impone avanzar en una reforma integral, que sin desconocer la fundamental importancia de las normas en una disciplina como la nuestra, ofrezca las herramientas necesarias para contextualizarlas en la realidad humana, social, económica y política en que se insertan, incorporando también a la enseñanza del derecho, todas las prácticas jurídicas que innegablemente marcan sus contornos. A los efectos de contribuir con ese camino, sobre el final formulamos algunas propuestas.

(2) **PERFIL PROFESIONAL:**

Probablemente como resultado del peso de tradiciones muy arraigadas en nuestra comunidad académica y profesional, el plan de estudios vigente, tal como es implementado en las aulas, se orienta de manera casi exclusiva a la formación de abogadxs litigantes, a pesar de que ello constituye sólo una de las alternativas de inserción laboral de lxs egresadxs.

De este modo, la Facultad no provee herramientas adecuadas para quienes deban o prefieran desempeñarse en otras funciones, que revisten una gran importancia para la sociedad, tales como las de asesores, consultores de agentes económicos y políticos (ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en asociaciones representativas, etc.), integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público, docentes o investigadores, entre otras. En este último sentido, la falta en la currícula de materias pedagógicas o de metodología de la investigación, representa una grave omisión que nos diferencia negativamente de otras carreras sociales.

Mientras tanto, el marcado sesgo hacia un tipo de profesional liberal habituado a plantear los conflictos individuales de sus clientes en los tribunales, conspira contra la posibilidad de dar una respuesta satisfactoria a las problemáticas de carácter colectivo en las que cada vez más se requiere la intervención de operadores jurídicos, pero con un abordaje distinto que muchas veces debe partir de una relación diferente con los sectores representados, que contemple la existencia de intereses heterogéneos y la articulación con políticas públicas, en el marco del llamado litigio estratégico.

Ante ello, deviene necesario que la reforma en curso amplíe el abanico de posibilidades ofrecidas a lxs estudiantes, desarrollando habilidades profesionales que actualmente no son tenidas en cuenta, a cuyos efectos, sobre el final, formulamos algunas propuestas.

(3) **CONTENIDOS CURRICULARES:**

Estrechamente vinculada con las cuestiones antes señaladas, se observa la necesidad de introducir cambios profundos en los contenidos curriculares actuales, de modo tal que ellos reflejen la concepción del derecho postulada, a partir de un fuerte compromiso con las problemáticas de la sociedad y los intereses populares.

En efecto, en la actualidad prima en nuestro plan de estudios, un carácter esencialmente iusprivatista, caracterizado por un importante predominio de las materias de derecho privado por sobre las de derecho público, en el que se destaca asimismo la escasa cantidad de contenidos vinculados a las ciencias sociales y políticas, que permitan a lxs estudiantes contextualizar y tener herramientas para pensar los fenómenos sociales en los que la actividad del abogadx se enmarca.

Además, en relación con las asignaturas que actualmente forman parte del diseño curricular, merece señalarse que muchas veces la existencia de diferentes cátedras, comisiones y profesores, no da cuenta de los ricos e intensos debates académicos que se producen en torno de las distintas disciplinas, o de la profundidad de aquellos, resultando ausentes o marginales dentro de la Facultad, determinadas perspectivas de las instituciones jurídicas, que generalmente son las más críticas. Así se tiende a converger en una suerte de "pensamiento único", que vacía de contenido el principio de libertad de cátedra, en la medida que todas ellas suelen compartir una misma visión, siguiendo iguales autores -muchas veces "sacralizados"- y abrevando en

idénticas escuelas. (Todo ello sin contar que de cualquier modo, debido al régimen de cursadas vigente, sobre el que más adelante haremos una referencia, en general lxs estudiantes acaban asistiendo no a las clases de lxs profesorxs que eligen, sino a las que el sistema de sorteo les permite).

Por otra parte, en coincidencia con lo que viene expresándose desde distintos ámbitos, compartimos la necesidad de introducir nuevas materias al elenco de asignaturas obligatorias de la carrera, cuestión que debe ser objeto de un debate en el que como miembros de la Facultad pretendemos participar. Sin perjuicio de lo expuesto, desde ya nos pronunciamos a favor de la inclusión de tres de ellas, largamente reclamadas por la comunidad académica, por las razones y con las salvedades que se formularán a continuación.

En primer lugar, hablamos de la incorporación como materia autónoma de "**Derechos Humanos**", pero destacamos que no puede agotarse en ello la introducción de contenidos vinculados con una cuestión de tanta importancia jurídica a nivel nacional e internacional, que incide directamente en todos los órdenes de la vida de nuestro pueblo, sino que además, resulta precisa la **revisión de los contenidos de todas las materias de la carrera, desde una perspectiva de derechos humanos**, ya que ésta comprende de modo integral las cuestiones estudiadas de modo particular en cada una de ellas. Así lo corrobora el hecho de que nuestro país haya suscripto numerosas convenciones internacionales en la materia, muchas de las cuales forman parte de nuestra Constitución Nacional, ostentando su misma jerarquía, motivo por el cual, dada además su enorme riqueza, sin dudas debe considerársela como un eje transversal en nuestra formación. Sólo por citar algunos ejemplos, recordamos que son derechos humanos, reconocidos como tales en los instrumentos respectivos, el derecho a la vivienda, cuya garantía debe procurarse cuando se enfrenta un desalojo en virtud de normas civiles y procesales; los derechos de la mujer, con la consiguiente condena a todas las formas de discriminación contra ella, lo que debe tenerse en cuenta para abordar la violencia de género en -por ejemplo- materia penal; el derecho a un trabajo digno, que actualmente se enfrenta a la problemática de la precarización laboral y que como tal, debe formar parte del estudio del derecho social; entre otros. En muchos de estas materias radican obligaciones internacionales concretas asumidas por el Estado, pero en general, las cuestiones planteadas no se encuentran incluidas en los programas actuales de las respectivas materias, en forma adecuada.

En segundo término, entendemos que resulta fundamental incluir en nuestro programa de estudios la materia "**Derecho Ambiental**" o "**Derecho del Ambiente**", con una perspectiva crítica, que sirva para cuestionar el modelo de producción capitalista, extractivo y contaminante, a partir de la tutela de los bienes colectivos, lo que implica una forma de concebir el derecho alejada de la tradicional.

Por último, pero no menos importante, consideramos que en la reforma del plan de estudios en discusión, no puede dejar de incorporarse la materia "**Derecho Social II**", ya que es por todos conocido que en un solo cuatrimestre, lxs profesorxs de "Derecho Social" no pueden abordar las múltiples cuestiones derivadas del derecho laboral individual y colectivo, sustancial y procesal, así como de la seguridad social. La importancia de esta inclusión radica también en que es muy común que lxs egresadxs deban asesorar o litigar en la materia, por la alta demanda que existe en razón de tratarse de cuestiones que afectan directamente a la población trabajadora, resultando llamativo el restringido lugar que ocupa actualmente en el plan de estudios.

En nuestra opinión, entonces, se impone considerar las cuestiones apuntadas en el actual proceso de reforma del plan de estudios, motivo por el cual más adelante puntualizaremos algunas propuestas atinentes.

(4) <u>FORMACIÓN PRÁCTICA.</u>

En este punto, consideramos imprescindible que se refuerce la formación práctica de lxs estudiantes, a través de experiencias que en efecto permitan ir tomando contacto con los distintos aspectos de la realidad profesional, lo que en modo alguno puede ser suplido por "clases teóricas sobre la práctica", aún con docentes experimentados.

Por otra parte, no creemos conveniente que, como sucede en el esquema actual, las prácticas se limiten al rol del profesional liberal litigante, menos aún cuando hasta éste se muestra restringido, ya que sólo se plantea en relación al derecho procesal civil y al derecho procesal penal, descartando otras ramas jurídicas por las cuales lxs estudiantes pueden inclinarse.

Antes al contrario, parece apropiado que se ofrezcan al estudiante diferentes alternativas vinculadas con sus preferencias de cara al desarrollo de la profesión, en los distintos ámbitos en que ésta puede darse, aunque sin admitir la utilización de lxs estudiantes como mano de obra barata, ni que la tarea desarrollada carezca de relación con la carrera, o no derive en un aprendizaje por falta de acompañamiento, ni que termine sirviendo a intereses públicos o privados contrarios al proyecto que la Universidad como institución comprometida con el desarrollo pleno de la sociedad, debe perseguir.

Atento a lo señalado, sobre el final formularemos algunas propuestas.

(5) <u>RÉGIMEN DE CURSADAS.</u>

Por último, quisiéramos señalar que en la medida que todxs lxs estudiantes no tengan la posibilidad de cursar todxs las materias de la carrera, estaremos lejos de lograr una Facultad mejor, como la que se persigue a través de la reforma en curso. Ello así, por cuanto la falta de cursadas, administrada a través de un sistema de sorteo, afecta los derechos más básicos de aquellxs, al impedirles asistir a clase y ser evaluados por un docente durante un proceso educativo, lo que redunda en que muchas veces, las mesas de exámenes libres operen en nuestra Facultad como la regla, en lugar de como la excepción. Si bien esta es una cuestión que no hace a los contenidos sino a la forma, creemos que ambas resultan fundamentales en el desarrollo de la formación de lxs estudiantes. Por un lado creemos que el hecho de rendir exámenes libres de manera regular, sin que lxs estudiantes puedan evacuar dudas, ni compartir lecturas y debates con lxs docentes y sus compañerxs, refuerza el carácter individualista de nuestras prácticas. Por otro lado, este tipo de examen deja un amplio margen para la arbitrariedad del docente, ya que en general, no se fijan pautas claras para el desarrollo del examen, tanto en lo relativo a los contenidos que se evaluarán como al desempeño esperado.

Sobre el final, explicitaremos nuestras propuestas.

Antes de ello, sin embargo, aclaramos que este documento sólo pretende ser un aporte, que desde ya no agota el alcance de la reforma, y que consideramos fundamental que todxs lxs actores de la Facultad discutamos las cuestiones planteadas a propósito de esta convocatoria, participemos de las instancias de debate y generemos una propuesta de plan de estudios que pueda construir profesionales críticos que ejerzan el derecho como una herramienta que aporte a la resolución de los problemas centrales que nos plantea la realidad actual, poniendo nuestra disciplina al servicio de la transformación social.

<u>PROPUESTAS</u>

En virtud de lo hasta aquí expuesto, proponemos:

- REFORMA MASIVA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS MATERIAS DE LA CARRERA en un plazo a establecerse, para adecuarlos a una visión del derecho que exceda la mera interpretación de las normas, contextualizando a éstas en su realidad, a partir de la incorporación de otros contenidos humanos, sociales y políticos. Asimismo, ante la imposibilidad e inutilidad de agotar en todos los casos el estudio de los plexos normativos involucrados en cada materia, se aconseja que la reforma se concentre en la redefinición de prioridades, según la importancia, vigencia y complejidad de los institutos comprendidos.
- ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO de la reforma propuesta en el punto anterior, que deberá ser guiada por profesionales de las ciencias de la educación, sin perjuicio de la participación de otros pertenecientes a otras ciencias, según corresponda.
- PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS en la reforma propuesta.
- LIBERTAD DE CÁTEDRA REAL, con pluralidad de perspectivas entre lxs profesores, que deberá tenerse en cuenta al momento de los concursos docentes, y nuevas cátedras que permitan a lxs estudiantes elegir libremente la orientación que deseen dar a su formación.
- INCORPORACIÓN DE "DERECHOS HUMANOS", "DERECHO DEL AMBIENTE" Y "DERECHO SOCIAL II" COMO MATERIAS OBLIGATORIAS
- INCORPORACIÓN DE MATERIAS PEDAGÓGICAS Y DE METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN.
- INCORPORACIÓN DE MÁS MATERIAS VINCULADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS.
- DEBATE AMPLIO Y PARTICIPATIVO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS MATERIAS.
- PRÁCTICAS PROFESIONALES REALES, CON ORIENTACIONES DIVERSAS SEGÚN LA ELECCIÓN DEL ESTUDIANTE.
- NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN, CON MANTENIMENTO DE LOS EXISTENTES, QUE SIRVAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.
- GARANTIZAR CURSADAS EN TODOS LOS CASOS.

PROYECTO N° 46: Autor: Maria Florencia FRANCHINI, Directora de Seminarios remite propuesta de enseñanza de nociones elementales de epistemología y metodología de la investigación en ciencias jurídicas y sociales

LA INVESTIGACION COMO ACTIVIDAD CURRICULAR DE GRADO

PROF. MARIA FLORENCIA FRANCHINI

La Plata, octubre de 2011

I) INTRODUCCION:

La investigación es una de las misiones básicas de la Universidad Nacional de La Plata establecidas en su Estatuto que, en su articulado, plantea los fundamentos de la política de investigación científica y tecnológica de la UNLP.

El art. 15 establece que: "La Universidad *reconoce como una de sus funciones primordiales el desarrollo y fomento de la investigación* sobre todas las formas generadoras de conocimiento. Acordará en consecuencia las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de investigación que realicen los miembros de su personal docente, graduados y estudiantes. Acordará becas y/o subsidios y mantendrá intercambios con otras universidades, ámbitos generadores de conocimiento, centros científicos y culturales del país y del extranjero".

En el actual Plan de Estudios uno de los requisitos para la obtención de su título de Abogado es la elaboración de un trabajo de investigación que permite profundizar y hacer aportes originales en una problemática concreta, en un área y tema de interés personal y general, contando para ello con la orientación que le brinda un Profesor de esta Facultad dentro del marco institucional a través de la Dirección de Seminarios.

Como docente de esta Casa he dirigido gran cantidad de seminarios y a esta experiencia se le ha sumado la actividad desarrollada en la Dirección de Seminarios a partir del año 2008.

Es por ello que me permito elevar este aporte, surgido de la observación de los distintos escenarios en los que se despliega la investigación en el ámbito de esta Facultad.

II) PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS.

II.a.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:

La metodología de la investigación es la herramienta que permite desarrollar el conocimiento y de allí su relevancia en el proceso de investigación.

El aporte de rigor científico en todo este proceso es de vital importancia y es en este punto donde se advierten falencias que pueden ser subsanadas en una futura reforma.

II.b.- LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION COMO MATERIA PREVIA Y COMPLEMENTARIA A LA CONFECCION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION.-

Conforme lo señalado, propongo que EL SEMINARIO DE GRADO se desarrolle en etapas complementarias:

1°) SEMINARIOS LIBRES:

a.- Inscripción del alumno en la materia de la currícula que contemple el tema que pretende abordar.

b.- Curso obligatorio (presencial o no presencial, para no afectar a los alumnos que no residen en la ciudad de La Plata y sus cercanías) de la materia de **METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION** (que podría ser bimestral) que concluye con la aprobación de la estructura del futuro trabajo de investigación. La metodología será supervisada por el docente a cargo del dictado de la materia, y el contenido por el director del seminario.

c.- Elaboración del trabajo de investigación en base a la metodología aprobada, supervisada en su contenido por el Director del seminario.

2°) SEMINARIOS CURSADOS:

a.- Inscripción del alumno.

b.- El curso constará de dos partes: en la primera, se dictará **METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION**, y en la segunda, el seminario propiamente dicho, para otorgar los lineamientos y contenido del trabajo final de investigación.
c.- Si el docente a cargo del seminario cursado es un Investigador Formado (Categ. I a III) podrá dictar íntegramente el mismo, de lo contrario, el plantel docente deberá conformarse con un especialista que dicte la primera parte.

En el entendimiento de efectuar un aporte para la reforma del plan de estudios, saludo a HCD con distinguida consideración.

PROYECTO N° 47: Autor: Daniel CIEZA, Profesor Titular interino de "Sociología Jurídica", Cátedra 2, remite reflexiones acerca de la reforma del plan de estudios en la carrera de abogacía.

La cátedra II de Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales considera auspiciosa la propuesta de reformar el plan de estudios de la carrera como así también la metodología escogida.-

En ese sentido nos plegamos a los aportes ya realizados y presentamos modestamente nuestro parecer.-

En primer lugar no es un descuido ni una redundancia de nuestra parte que en el encabezado de la presente como así también a renglón siguiente consignamos "Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", ello responde a nuestro convencimiento que no sólo debe conservarse sino que es necesario profundizar el carácter interdisciplinario de nuestra carrera.-

Dicha postura en absoluto implica el abandono del estudio del derecho en su dimensión normativa, sino que se trata de su complementación e integración con los diferentes aspectos y complejidades que se presentan en nuestras sociedades.-

Por lo tanto entendemos que la presencia de las ciencias sociales (historia, economía, sociología, antropología, psicología, ciencia política, etc.) no puede retroceder en esta nueva etapa.-

Al respecto, cabe recordar, que los fundadores de la Universidad, dejaron plasmado en el nombre de la Facultad y en los contenidos de su primer programa una impronta claramente interdisciplinaria y cosmopolita, que luego sufrió momentos de retroceso. Es el momento de retomar ese mandato.

Y en esa idea estimamos que la disciplina que nos involucra tiene mucho que ofrecer al estudio del derecho; por ejemplo: la relación entre los ordenes normativos y sociales, las funciones sociales del derecho, el derecho como agente de cambio social, la crítica social del derecho, la conformación sociológica del derecho son temáticas que complementan, profundizan y permiten reflexionar sobre el mundo jurídico más allá de las configuraciones normativas, las doctrinas legales y las jurisprudencia.-

En segundo lugar, consideramos que es preciso incorporar temáticas que hoy se encuentran ausentes o bien reacomodar algunas que sí están pero no se las visibiliza claramente dentro de la currícula actual:

La primera de ella es la materia de Derechos Humanos, temática que si bien debe estar presente en todas las materias de la carrera, por su importancia filosófica, política, social y jurídica, como así también por la complejidad de sus contenidos debe consolidarse como asignatura autónoma.-

En el segundo grupo –tópicos actualmente presentes pero visibilizados borrosamente- encontramos metodología de la investigación y la enseñanza jurídica, lógica, teoría de la argumentación y análisis del discurso, criminología.

Estas temáticas se encuentran incorporadas en diversas asignaturas –nuestra cátedra tradicionalmente se ha abocado a temas de sociología jurídico penal y de metodología- pero su presencia se vislumbra como marginal dentro de la jerarquización de contenidos que expresa o implícitamente rige en nuestra Casa de Estudios.-

Ante ello, esta cátedra se propone a sí misma dos estrategias simultáneas:

a) Reelaborar sus propios contenidos agrupándolos en áreas temáticas que serán dictadas por comisiones especiales dentro de la propia cátedra.-

Es decir, que por cuatrimestre se ofrecerán comisiones que se abocaran especialmente a áreas temáticas previamente definidas: sociología jurídico penal, metodología de la investigación, sociología de las organizaciones y profesiones, sociología de la familia, etc.-

Con esto se busca flexibilizar los contenidos y las posibilidades de elección de los estudiantes –como así también la de los docentes que integran la cátedra- sin perder la autonomía de la materia.-

Además, dentro de este esquema se prevé la articulación con las restantes asignaturas que podrán disponer del dictado de temáticas específicas que se encuentren vinculadas.-

b) Profundizar la visión crítica del derecho en general, haciendo hincapié en temas como globalización, multiculturalismo y pluralidad jurídica, problematizar la concepción de violencia en sus más amplios y naturalizados sentidos –laboral, política, patriarcal, económica, simbólica etc., introducir la perspectiva propia y concreta de derechos humanos en clave sociológica, establecer nuevas dimensiones que necesariamente tienen que ser exploradas: derecho a la ciudad, una nueva concepción de la sociedad a través de la cuestión ambiental, reconstrucción de la memoria histórica como garantía de no repetición de prácticas genocidas, etc.

Es decir, revitalizar la critica al derecho tradicional a través de los aportes de las ciencias sociales, partiendo de una concepción de la sociedad en la que predominan sus rasgos conflictivos, heterogéneos, complejos y contradictorios.-

Un claro ejemplo de lo expuesto se encuentra en el estudio crítico de la cuestión criminal dado que a través de los aportes de las ciencias sociales han deslegitimado y puesto en crisis en forma categórica la operatividad propia y caracterológica de nuestros sistemas penales, como así también los postulados básicos de la ciencia jurídico penal tradicional.-

Desde nuestro espacio se ha mantenido una coherencia en el tratamiento de los temas criminológicos como una disciplina crítica del sistema penal y del derecho penal, ello con la intencionalidad política expresa de construir sociedades menos represivas.-

Esa tarea no resulta sencilla porque en nuestra Casa de Estudios ha predominado una visión que considera a la Criminología como una mera disciplina auxiliar del derecho penal.-

Lamentablemente esa postura desconoce o subestima las múltiples y reiteradas elaboraciones realizadas desde la sociología más tradicional –por ejemplo Durkheim- hasta las más modernas sobre la cuestión criminal.-

Pero más allá de las posiciones conservadoras hacia el estudio de la cuestión criminal desde una posición crítica de los sistemas penales, el campo de estudio criminológico avanza y desborda los límites que se le intentan poner: copiosas bibliografías, cursos de posgrados, congresos y conferencias marcan la permanente presencia de una disciplina central respecto de las problemáticas que presentan nuestras sociedades.-

Finalmente, coincidimos en la necesidad de reformar la correlatividad de la carrera para evitar, por ejemplo, que se pueda cursar Derecho Penal si haber aprobado Derecho Constitucional, o bien Procesal II antes que Contratos. En nuestro caso en particular, y más allá de la reagrupación de los contenidos en áreas- estimamos la conveniencia de dictar los cursos una vez que Civil V y Procesal II se encuentren aprobadas.-

Para finalizar reiteramos nuestro agrado por la iniciativa y la forma en que se está llevando adelante y nos ponemos a disposición para debatir, corregir o acompañar este proceso.

Cordialmente, Cátedra II de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.-

Daniel Cieza Titular.-

PROYECTO N° 53: Autor: Francisco VERTIZ, Auxiliar Docente de "Introducción a la Sociología" remite evaluación y análisis de la importancia de los procesos de reforma de un plan de estudios en la carrera de abogacía, su implicancia en la enseñanza y formación de los nuevos abogados. [20]

Este propuesta es producto del trabajo empírico realizado en el marco del proyecto tetra anual de investigación 11/J101 "Las nuevas configuraciones del campo de la formación del abogado en la Argentina: instituciones, planes de estudios y prácticas profesionales", acreditado por el programa de incentivos a la investigación, que se desarrolla en la FCJyS-UNLP (2009-2012) y es dirigido por la Dra. Manuela González. Algunos avances sobre la temática han sido presentados en congresos y revistas académicas (Carrera, Yano, Vértiz y Zudaire, 2009; Cejas, Cristeche y Mattos, 2009; Carrera y Vértiz, 2010).

En esta presentación nos proponemos aportar algunos aspectos relacionados con el intento frustrado de reforma curricular que vivió la FCJyS-UNLP durante el período de normalización universitaria (1984-1986). Nos interesa describir las características que tomó este proceso, quiénes participaron de los debates, qué forma adquirieron y en qué contextos institucionales (formales e informales) se dieron los mismos, entre otras cuestiones. Asimismo intentaremos dar cuenta de cuáles fueron los motivos centrales que impidieron la concreción de la reforma, para que puedan ser considerados y servir como insumos en este nuevo proceso para no repetir errores.

Cabe referir algunas cuestiones relativas a la metodología que utilizamos para conocer el proceso abordado, y que implican una toma de posición en relación a qué es el conocimiento y cómo se construye. Para comprender en su complejidad el intento de reforma del Plan de Estudios de la FCJyS-UNLP desarrollado durante los años 1984 y 1986, y los motivos de su fracaso, nos propusimos utilizar diferentes herramientas metodológicas (análisis de documentos, entrevistas en profundidad) enmarcadas en una perspectiva cualitativa, que dieran cuenta de las distintas dimensiones implicadas en el caso. En este sentido, para aproximarnos a los debates en torno al proyecto curricular institucional de esos años, nos basamos en las actas del Consejo Académico Normalizador Consultivo (CANC), actuante entre marzo de 1984 y abril de 1986; y del Honorable Consejo Académico (HCA) conformado por elecciones el 25 de abril de 1986. Posteriormente realizamos entrevistas a diferentes actores que participaron del proceso de discusión sobre el plan de estudios en el periodo.

Las actas mencionadas surgieron como un documento válido para dar cuenta de la composición de la agenda y las preocupaciones de la época, así como de la dinámica de los debates institucionales. La información que este material nos brindó fue el primer acercamiento, que sirvió para referenciar un contexto dinámico. Las entrevistas nos permitieron desentrañar los acontecimientos de la realidad de ese tiempo que no habíamos podido dilucidar a partir de las actas. A través de diversas fuentes, procuramos conocer con mayor profundidad el momento institucional, los debates que lo atravesaron y las luchas que se desenvolvieron en dicho período.

1. Los intentos de reforma curricular en la FCJyS

El plan de estudios vigente para la carrera de Abogacía de la FCJyS-UNLP fue formulado en 1953 sobre la base del plan que en ese momento regía en la Universidad de Buenos Aires. Desde ese momento y hasta la actualidad se han realizado algunas modificaciones a ese plan, pero sin alterar su estructura básica. Si bien hubo varios intentos de producir reformas de mayor alcance durante sus más de cincuenta años de vigencia, sólo tuvieron éxito aquellas que no conmovieron esa estructura (Cardinaux y González, 2004). Esta circunstancia instaló en nuestro equipo de investigación la pregunta sobre cómo se presenta la cuestión del cambio curricular en la Facultad y cuáles son las dinámicas y procesos articulados a ella.

1.1 Las posibilidades de cambio durante la normalización universitaria.

Tras la recuperación democrática comenzó en los establecimientos de educación superior del país la denominada normalización universitaria, que en la UNLP se desarrolló entre 1983 y 1986. Durante esos años la comunidad académica intentó reorganizarse, revisando distintos asuntos de la vida universitaria implementados en la etapa anterior: las designaciones docentes, los planes de estudio, los cursos de ingreso eliminatorios, entre otros aspectos de relevancia. En este contexto, la discusión respecto de las propuestas curriculares de las carreras de la UNLP, así como la puesta en marcha de procesos de reforma, fueron ejes significativos de la política de normalización[21]. Nos interesa indagar qué formas tomó esta preocupación en la FCJyS.

---

[20] Francisco Vértiz: Becario de Perfeccionamiento de la UNLP, Instituto de Cultura Jurídica; Auxiliar docente de Sociología Jurídica de la FCJyS-UNLP; Maestrando en Ciencias Sociales de la FAHCE-UNLP. Integrante del proyecto acreditado 11/J101. Mail: francisco.vertiz@yahoo.com.ar.
María Cecilia Carrera: Becaria CONICET-IDES. Maestranda en Ciencias Sociales por la FAHCE-UNLP. Auxiliar Docente en FAHCE-UNLP. Integrante del proyecto acreditado 11/J101. Mail: chechu94@yahoo.com.ar

[21] En el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el encargado de llevar a cabo la normalización fue el Dr. Humberto Quiroga Lavié, quien en esos tiempos era profesor adjunto interino de Derecho Constitucional y, apoyado por la agrupación estudiantil Franja Morada, logró ser el Decano Normalizador. En este período se gestionaron los llamados a concursos públicos para docentes, por antecedentes y oposición. Se logró entonces cubrir más del cincuenta por ciento de los cargos titulares, aunque se había concursado la totalidad, en muchos casos, con profesores que venían de los tiempos del gobierno militar.
Pasado el período de un año más la prorroga de 180 días del proceso de normalización, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales estaba en condiciones institucionales de elegir un nuevo Decano, signado por el sistema democrático de la reforma

Durante la última dictadura militar, mientras en la Argentina el oscurantismo cerraba instituciones y perseguía intelectuales, en otros países se multiplicaban organismos de docencia e investigación. Sin duda esta circunstancia cerró posibilidades a transformaciones que, como sostiene Adriana Puiggrós (1993), toman características diferenciales y afectan de manera distinta los campos del saber, las profesiones y la enseñanza. El restablecimiento de la autonomía universitaria en el período analizado resultó un gran avance, conjuntamente con las políticas que apuntaban a la democratización al interior de la universidad.

La institución universitaria se desarrolla de un modo especial al procesar los conflictos que supone el cambio (Krotsch, 2001), frente a lo cual adquieren singularidad, desde nuestra perspectiva, las características que esto asume en la FCJyS de la UNLP. Una de las particularidades de esta institución en el período abordado ha sido la ausencia –en contraste con la mayoría de las carreras y facultades de la UNLP y con los lineamientos de la política de normalización-, de una propuesta de reforma curricular estructural para la enseñanza del derecho, incluyendo un replanteo de sus objetivos y contenidos.

Del análisis de las actas del CANC y de las entrevistas, observamos la tendencia a engrandecer los temas y tareas relacionados con la reforma curricular, lo que llevaría a la postergación de su tratamiento, en función de esa grandeza e importancia. Se usan significantes como "transformación", "cuestión de fondo", "tremenda cuestión pedagógica", "densidad muy grande", "importancia inusitada"; pareciera que el peso que adquieren las tareas justifica que se siga relegando su tratamiento, pues siempre parece que no están dadas las condiciones para abordarlo. Se opta entonces por ajustes pequeños y parciales (modificación de correlatividades, agregado de materias como Introducción a la Sociología, cursos optativos, entre otros), respondiendo más a demandas coyunturales que a un proyecto de mediano o largo plazo. Asimismo, la dinámica de los diálogos en las sesiones del CANC analizadas, en la que generalmente el Decano define los problemas y las prioridades, y tiende en algunos casos a postergar el debate, también funciona en el sentido de desarticular procesos reales de reforma global[22].

En esta línea, reviste interés la pregunta por quiénes son los sujetos y los grupos que debaten, y cuáles son los que motorizan o al contrario se muestran reacios o resistentes a los cambios. Al mismo tiempo, nos preguntamos de qué tipo son los cambios propuestos y discutidos.

Apuntamos que, durante el período de normalización analizado, por lo general son los estudiantes quienes plantean la necesidad de reformas, variando la intensidad con la cual se presentan esos argumentos en distintos momentos. Observamos también que el reclamo comprende no sólo la reforma, sino que ésta se culmine rápidamente, lo que nos sugería la pregunta sobre qué tipo de reforma estaban pensando. Asimismo constatando que los estudiantes son los actores que motorizan con mayor vehemencia el debate y las propuestas de cambio curricular, proponemos como hipótesis que ciertos sentidos y prácticas políticas definidos en términos de amigo/enemigo, atraviesan la forma de vivir la política por parte de los estudiantes. Esto habría dificultado la construcción de un consenso mínimo entre las agrupaciones, para instalar la necesidad de la reforma y aumentar el poder de negociación estudiantil desde su posición dominada[23].

A su vez, esbozamos que el claustro mayoritario en términos representativos (los profesores) suelen expresarse en su mayoría reticentes al debate y puesta en marcha de procesos de reforma que trastoquen el esquema curricular consolidado, demostrando mayor preocupación por la ubicación de las materias en términos de correlatividad, o la duración de las cursadas (cuatrimestrales o semestrales). Esta resistencia se manifiesta, en primera instancia, en los silencios y las estrategias evasivas frente a la posibilidad de discutir propuestas de diversa índole, ya sean proyectos alternativos o modificaciones al plan vigente. En segunda instancia, se traduce en acciones conservadoras que sólo permitieron pequeñas modificaciones, definidas por uno de los entrevistados como "maquillajes".

Entendemos estas prácticas como ajustadas a una posición dominante dentro del campo académico, que busca el mantenimiento de las reglas del juego y de las relaciones de jerarquía establecidas.

2. Conclusiones

Nuestro aporte para este nuevo proceso de modificación del Plan de Estudios que se encuentra abierto en la FCJyS, consiste en brindar algunos elementos que operaron como obstáculos en procesos anteriores y que pueden haber dificultado la concreción de la reforma del Plan de Estudios. Tal como mencionamos anteriormente, la discusión en los ámbitos institucionales en el período 1984-1986, se presentó de manera considerablemente simplificada en términos técnicos, lo que nos permite pensar que los problemas para materializar la reforma no hayan sido de índole técnico-pedagógico sino de índole política. Al hablar de política hacemos referencia a las luchas que se desatan entre grupos académicos por imponer una posición y por hegemonizar las decisiones.

En este sentido, consideramos apropiado que se genere un espacio democrático de debate que incluya a todos los sectores pertenecientes a la comunidad académica –docentes, graduados, estudiantes y no docentes- y se discuta sobre la formación académica y profesional que se ha venido implementando hasta el momento, qué lugar deben tener la docencia, la extensión y la investigación en la formación, entre otras

---

universitaria. En 1986 Quiroga Lavié fue designado Decano institucional, electo por el Consejo Académico de la Facultad. Pero al año siguiente dejó el cargo, para dedicarse a un estudio comparativo sobre la reforma de la Constitución de nuestro país, ya que el ex presidente Raúl Alfonsín había convocado el Consejo para la Consolidación de la Democracia.

[22] Observamos una gran dificultad para llevar adelante una reforma integral del plan de estudios, incluso cuando ésta se coloca como prioridad para la gestión, creándose una comisión ad-hoc denominada "Plan de Estudios" (Actas de las reuniones del CANC y del HCA 1984-1988, en Carrera, Yano, Vértiz y Zudaire, 2009). Al mismo tiempo, la discusión en el seno del Consejo Académico en torno al plan de estudios y su modificación –nos referimos a los debates de los años que van desde el '84 al '88- se presenta de manera considerablemente simplificada en términos técnicos, lo que nos permite pensar que los problemas para materializar la reforma no hayan sido de índole técnico-pedagógica (que en última instancia nunca llegan a discutirse en detalle, por lo menos no en los '80). En este punto, surge la pregunta respecto de a qué otras cuestiones obedece la dificultad de encarar un proceso de reforma curricular. Proponemos a partir de nuestra investigación que los obstáculos residen principalmente en cuestiones políticas antes que técnicas. Al hablar de política hacemos referencia a las luchas que se desatan entre grupos académicos por imponer una posición y por hegemonizar las decisiones.

[23] Un entrevistado que era estudiante en ese momento expresó: "*Yo creo que desde el primer hasta el último año de Rubinstein, esos cuatro años, cada año, parecía que se podía aprobar un plan de estudios. Después, la dinámica de la discusión nos fue mostrando que eso era muy difícil. Primero porque en aquellos tiempos los debates se daban de otro modo, se daban a "todo o nada". No había mediaciones. Yo creo que en aquel momento, si hubiéramos definido aunque sea algunos ejes centrales para ir avanzando sobre eso, se podría haber avanzado un poco más. Pero del modo que estábamos, cada uno tenía un plan integral y lo defendía a muerte y no se bajaba de ahí, entonces el consenso era muy difícil. Y ese cambio, el cambio del plan de estudios –yo estoy convencido-, si no es por un consenso más o menos amplio, no creo que sea posible llevarlo adelante*".

cuestiones, con la intención de elaborar un diagnóstico serio sobre el actual estado de cosas, en términos de fortalezas y debilidades.

Nos parece que esa manera de encarar un proceso de reforma lleva tiempo, pero también creemos que es la única forma para que pueda diseñarse una propuesta que contenga los intereses de los diferentes grupos académicos.

3. Bibliografía

CARDINAUX, N. y GONZÁLEZ, M. (2004) "El derecho que debe enseñarse". En *Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho.* Universidad de Buenos Aires. Editorial Departamento de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires.

_____ (2010) "El plan de estudios: consensos positivos y negativos sobre su reforma". En González y Cardinaux (2010) *Los actores y las prácticas: enseñar y aprender derecho en la UNLP*. Edulp, La Plata.

CARRERA, C., YANO, P., VÉRTIZ, F. y ZUDAIRE, N. (2009) "La formación de abogados en los '80: reformas curriculares y debates institucionales". Presentado en el *X Congreso Nacional de Sociología Jurídica*, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 2009.

CARRERA, M. C. y VÉRTIZ, F. (2010) "Disputas en torno a la reforma curricular. Conservación y cambio en la carrera de abogacía de la UNLP (1984-1989)". En *Revista de Derecho y Ciencias Sociales*. Nº 3, Octubre 2010. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP.

CEJAS, V., CRISTECHE, M. y MATTOS, D. (2009) "La formación de abogados en los '80. Intentos de reforma en la UNLP". Presentado en el *X Congreso Nacional de Sociología Jurídica*, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 2009.

KROTSCH, P. (2001) *Educación superior y reformas comparadas*. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

PUIGGRÓS, A (1993) *Universidad. Proyecto generacional y el imaginario pedagógico.* Paidos, Buenos Aires.

PROYECTO N° 54: Autor: Grupo Abogados "La Cámpora", remite reflexiones y propuestas acerca de la reforma al plan de estudios, accesibilidad a la educación superior y universidades públicas.

> "El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.
> "Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.
> "Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución". *(Constitución de la Nación Argentina (1949) Art. 37 inciso IV apartado 4).*
> "Hay que introducir la Universidad, de una manera viva, en la problemática argentina, porque la Universidad que, a partir de la Reforma del 18, se autoenorgulleció de vincularse al pueblo no fue más que una aspiración". *(Rodolfo Puiggrós).*

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales atraviesa un proceso de reforma del Plan de Estudios muy ansiado y esperado por toda la comunidad educativa, razón por la cual nos vemos en el compromiso ético y social de acompañar como graduados.

Una vez abierto este debate creemos que la importancia y seriedad de la temática merece que se extienda el plazo de discusión a fin de poder aprovechar al máximo esta oportunidad de transformación y cambio para nuestra institución. Ello es así en tanto que la definición del Plan de Estudios es una cuestión trascendente de la vida de la Facultad, ya que determina el modelo de profesional que nos disponemos a formar.

Para lograr este objetivo estamos convencidos de que el debate tiene que tener un grado de compromiso absoluto con las transformaciones político sociales que atravesó la República Argentina en general, y la UNLP en particular desde la década de 1950 hasta el presente (momento en que se realizó la última modificación del Plan de Estudios con alguna trascendencia institucional).

Creemos que la sociedad exige de quienes tuvimos el privilegio de obtener un título en una Universidad Pública un grado de compromiso social que debe traducirse institucionalmente en políticas educativas que acompañen las necesidades del conjunto de la comunidad. Debemos aprovechar este proceso para plantear debates y sostener banderas que la misma sociedad nos esta pidiendo. En este sentido, consideramos que el derecho y su enseñanza son herramientas que deben comprender, acompañar o cuestionar los procesos político-sociales, y no quedar al margen. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no puede pensarse aislada de lo que ocurre en la calle, bajo la máscara de la autonomía universitaria.

Tenemos la certeza de que en este proceso de cambio deben participar todos los actores de la Facultad, a través de un debate plural poniendo especial atención a todas las propuestas presentadas, sin relegar unas en favor de otras.

Entendemos, en esta lógica, que los jóvenes son actores fundamentales de todo proceso de transformación y cambio destinado a perdurar, y por ello desde la Facultad debe promoverse su participación masiva en todos los niveles de discusión. Así como en el ámbito gubernamental se fomenta explícitamente la participación de los jóvenes en el escenario político, el espacio universitario es el ámbito por excelencia donde se debe concretar esta participación activa.

Asimismo las temáticas a abordar no deben tener ningún tipo de restricción ya que en este proceso todo debe ser susceptible de revisión. Esta reforma debe ser integral y no debe detenerse en visiones parciales del fenómeno jurídico y educativo, sino que debe tener una ambición que trascienda las deudas pendientes del pasado y los avances del presente.

En este sentido, es necesario avanzar en una reforma que sea realmente transformadora y acompañe el proceso de cambio e inclusión social emprendido por el Estado Nacional. Creemos que la Universidad Pública debe ocupar un lugar central a la hora de promover el desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales, motorizando propuestas y avances que dinamicen el funcionamiento estatal, y acompañando las políticas públicas en el orden nacional. Debe ser inclusiva y producto de una construcción colectiva, escapando a la lógica individualista que orientó las políticas educativas en el proceso neoliberal.

LA UNIVERSIDAD POPULAR

Como expresión universitaria del proyecto nacional y popular en marcha en la Argentina, queremos hacer nuestra contribución al debate sobre la reforma del plan de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad.

Lo hacemos desde una tradición política y cultural que influyó decisivamente en la conformación del perfil de nuestras universidades, que las colmó de recursos materiales, intelectuales y simbólicos, que las volvió masivas y auténticamente públicas –y no meramente estatales- en un proceso que, a partir de 2003, se ha reiniciado y profundizado.

Fue el primer peronismo el que –a través de la eliminación total de los aranceles en 1949- estableció la gratuidad de la enseñanza superior y transformó en masivas a las universidades que –aun cuando eran cogobernadas desde 1918- conservaban todavía fuertes rasgos elitistas. Fue ese primer período transformador el que convirtió a la educación superior en una formidable herramienta de renovación productiva y tecnológica y de movilidad social ascendente.

Desde 2003 la Argentina retomó y profundizó ese impulso educativo transformador. La repatriación de científicos, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el aumento exponencial del presupuesto educativo son solo una muestra de ello, en un país que –no es una mera coincidencia- lanza satélites al espacio y proyecta prototipos de aviones no tripulados.

Por eso, los principios que motivan nuestra participación y nos inspiran para realizar esta propuesta de Reforma del Plan de Estudios son la defensa y promoción de los derechos humanos, la redistribución del ingreso, la participación activa del Estado en la economía, los intereses nacionales –recursos naturales, servicios públicos, obra pública, administración de justicia, recursos fiscales, fomento de la producción nacional, mercado financiero nacional-, la defensa de los sectores históricamente desprotegidos y relegados –trabajadores, minorías sexuales, discapacitados, usuarios y consumidores, personas privadas de la libertad, pequeños y medianos productores, etc.-, y para sintetizar nuestro pensamiento, los principios de la soberanía política, independencia económica y justicia social.

Creemos que en este proceso de reforma deben discutirse seria y comprometidamente, al menos, cinco ejes**:**

INGRESO A LA CARRERA DE ABOGACÍA

La temática relacionada con el ingreso a la carrera de Abogacía se ha presentado siempre como una cuestión de trascendental importancia por las consecuencias que la misma acarrea, tanto en términos académicos, políticos y sociales.

Desde distintos espacios se ha venido sosteniendo que no es posible establecer un ingreso inclusivo a la Universidad Pública sin menoscabar el nivel académico. En otras palabras: suele sostenerse que la masividad está reñida con la excelencia.

Creemos que esa dicotomía (masividad vs. excelencia) es falsa. Una Facultad amplia e inclusiva, que no opone obstáculos para su ingreso, no es incompatible con una enseñanza superior de alta calidad. La comprobación es sencilla: nuestro país conoció muchas épocas (a partir de que el primer peronismo habilitó el ingreso de los sectores medios y populares) en que la educación superior fue masiva y de excelencia.

Consideramos que la institución debe acompañar el aprendizaje durante todo el proceso educativo y no pretender un nivel excluyente en el primer momento de ingreso, ya que dicha exigencia se encuentra abastecida por la instancia educativa antecedente que es el nivel secundario. Una propuesta contraria implicaría traspolar al ámbito universitario posibles desigualdades que pudieran haberse generado con anterioridad, manteniéndolas irresueltas.

Asimismo estamos convencidos de que las instancias evaluativas que imponen el piso mínimo de nivel académico se deben desarrollar a través de toda la currícula, y que el desafío radica en brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para atravesar dicho proceso.

En términos políticos la trascendencia de la temática se manifiesta en el modelo social que queremos para el país, puesto que una educación pública inclusiva de todos los sectores sociales, lleva a su máxima expresión el imperativo de igualdad de oportunidades afirmado en nuestra constitución.

De esta forma se reivindica a la educación pública como forma de transformación de las realidades sociales de cada uno de los estudiantes y necesariamente del conjunto de la sociedad.

Desde el plano social, la educación en general, y la enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales en particular, es una herramienta imprescindible para fomentar la formación y participación comprometida y consciente de la comunidad. El crecimiento personal, familiar y colectivo debe encontrarse inescindiblemente unido a una política educacional generadora del compromiso social que el país necesita y que felizmente viene manifestándose en diversos ámbitos de la vida de la Nación.

Nuestra tarea fundamental es trasladar esa participación a la vida universitaria, generando los espacios de debate para la toma de decisiones en forma colectiva, y esta finalidad se vería impedida si se restringe el ingreso a la carrera, por ser el mismo la condición de posibilidad para el cumplimiento de ese cometido.

Por ello, proponemos que se realice un curso para los ingresantes a la carrera de abogacía con las siguientes características:

Que aborde pocos textos, dotados de un carácter reflexivo vinculados con el análisis de la realidad política y social nacional y latinoamericana, y que no anticipen contenidos curriculares específicos abordados en las materias de primer año.

Que dichas actividades académicas sean confeccionadas conjuntamente entre los responsables del curso y especialistas en ciencias de la educación.

Que no cuente con una instancia de evaluación eliminatoria.

Que una vez transitado el mismo cualquiera sea el resultado obtenido, el ingresante pueda inscribirse en las materias de primer año.

PERSPECTIVA DEL DERECHO Y DE LA ENSEÑANZA

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales responde, en líneas generales, a una visión tradicional de la enseñanza. El conocimiento es transmitido a los alumnos que son vistos como meros receptores del mismo.

De este modo, no se promueve la reflexión crítica y la construcción colectiva del conocimiento, sino la aprehensión del mismo en el marco del discurso de la pretendida objetividad del derecho.

Esto se sustenta en el abordaje teórico que se realiza preponderantemente desde una visión positivista. Esta perspectiva presenta al derecho descontextualizado como un dato a-histórico y apolítico, sin ponerlo en cuestión, como verdad dada a ser aprehendida, desprovisto de contenidos ideológicos.

Nos parece trascendente poner de resalto el nombre de nuestra institución, llamada desde su fundación "Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", y atendiendo a nuestro compromiso, dotar de contenido su carácter social para que en la práctica sea lo que siempre estuvo llamada a ser.

El nuevo plan de estudios debe involucrarse de lleno en las problemáticas sociales, asumiendo como objeto de estudio los derechos humanos, el empleo, la pobreza, la criminología, la participación del Estado en la economía para el desarrollo sustentable, el medio ambiente, los recursos naturales estratégicos, la integración latinoamericana, los nuevos paradigmas de la ciudadanía social, no sólo desde su correlato jurídico sino en el marco de la trama política. Por otra parte, debe dar cuenta de las desigualdades de clase, de género, generacionales, etc., tanto hacia adentro de la institución educativa como en la sociedad.

En definitiva, el plan de estudios debe abordar las temáticas que hacen a la vida política, social e institucional del país, porque de lo contrario estaremos formando profesionales ajenos a realidad e incapaces de comprenderla para su transformación.

En los últimos años hemos sido testigos de la recuperación de la discusión política con un fuerte impacto en la agenda del derecho (AUH, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estatización del sistema previsional, matrimonio igualitario, derechos de exportación, entre otros). Es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad favorezca la discusión política y social y no se limite a las normas existentes o resultantes.

Para ello, sostenemos que es necesario avanzar en un abordaje crítico del derecho, que supone indagar las relaciones políticas, sociales y económicas, de dominación y resistencia que lo determinan, situándolo como producto histórico y cultural inmerso en los conflictos sociales y los procesos políticos.

Creemos en el derecho como herramienta emancipadora, pero también reconocemos que ha legitimado procesos de desigualdad. Por eso, no es posible entenderlo sin situarlo en el marco de la realidad política y económica que atraviesa el país, dinamizada por la expansión de derechos civiles, políticos y sociales, tal como lo planteara el Dr. Boaventura de Sousa Santos.

En términos del educador brasileño Paulo Freire "todo acto educativo es un acto político", agregando que todo producto jurídico también lo es.

En este sentido, una de las políticas que debe abordar el proceso de reforma del Plan de Estudios, es la articulación de las distintas funciones de la universidad (enseñanza, investigación y extensión). Para ello, proponemos incorporar como obligatorios los seminarios de investigación para los alumnos, y las clínicas y consultorios jurídicos, que hoy se encuentran implementadas de forma paralela y voluntaria a la carrera de abogacía.

Probablemente no pueda forzarse el compromiso social de los estudiantes, pero sí puede promoverse. Así como éstos deben necesariamente atravesar un trayecto académico orientado a la profesión liberal, deben tener un acercamiento a la función social de los abogados con la realización obligatoria de clínicas y consultorios jurídicos.

De lo que se trata, es de promover e incentivar el compromiso social de los estudiantes y esta tarea hay que desarrollarla desde el propio plan de estudios.

Por ello, proponemos que se fomente la participación social de los alumnos, acompañando una práctica profesional que contemple las problemáticas de la sociedad y se disponga a resolverlas, a través de la implementación obligatoria de:

seminarios de investigación
clínicas jurídicas
consultorios jurídicos

PLAN DE ESTUDIOS

"…uno de los medios más eficaces para guiar a los docentes a nuestros objetivos de emancipación nacional y conquista de una sociedad más justa, con una mejor distribución de la riqueza, donde desaparezca la pobreza y se produzcan los grandes cambios sociales y la revolución científico técnica, es a través de la elaboración de nuevos programas de estudio" (Rodolfo Puigrros)

En estrecha relación a la perspectiva de la enseñanza y del derecho que tenemos desde La Cámpora, consideramos que es necesario actualizar la currícula y engarzarla en el contexto socio-político en el que vivimos, poniendo en valor campos del derecho que han sido claves en los procesos de cambio de nuestro país y que asumen un espacio trascendente en la agenda pública.

La Argentina viene desarrollando una política de Estado clara y contundente en materia de derechos humanos, que necesariamente satisface la memoria, verdad y justicia, pero que ha ido mucho más allá en el plano de los derechos humanos sociales, económicos y culturales. Creemos que resulta imperiosa la inclusión de la asignatura Derechos Humanos con carácter obligatorio en la carrera de Abogacía. Ello es, sin dudas, una deuda pendiente de nuestra Facultad desde la recuperación democrática.

Asimismo, resulta imprescindible la inclusión en el plan de estudios la asignatura criminología. Ello responde a la necesidad de revisar las respuestas que la ciencia del derecho le otorga al fenómeno criminal desde una perspectiva humanista y multidisciplinaria.

Por otra parte, el Estado ha impulsado y profundizado los procesos de integración política y económica de la región con nuestros hermanos latinoamericanos, llevando adelante el desafío de la patria grande. Estos programas de política exterior regional suponen una arquitectura normativa que los profesionales del derecho deben conocer y comprender en profundidad para poder participar activamente en las transformaciones políticas, económicas y sociales que los mismos suponen. El Derecho de la Integración Latinoamericana tiene su espacio en algunas materias de la Facultad pero es momento de otorgarle el lugar que le corresponde.

En cuanto a los Derechos Sociales -impulsados fuertemente desde el Estado- entendemos que los mismos deben ser abordados de manera más completa e integral que en el actual Plan de Estudios, considerando que los mismos ya no pueden ser abarcados por una única asignatura sino que deben ser repensados, separando por un lado el Derecho Laboral (individual y colectivo) del Derecho de la Seguridad Social desde una perspectiva de políticas públicas. Ello encuentra sustento en la amplitud de las políticas públicas desarrolladas, tales como la AUH, ampliación de beneficiarios del sistema jubilatorio, políticas sociales concretas y focalizadas, etc. La Seguridad Social y los Derechos Sociales –que otrora estaban

relacionados de un modo íntimo con la problemática del trabajo dependiente- comienzan por fin a avanzar a un modelo pleno de ciudadanía social (la AUH es la expresión más cabal de ese proceso), por lo que ya no se justifica que ambos campos del derecho sean abordados en forma conjunta.

Resulta inexorable introducir la problemática Medio Ambiental y de los Recursos Naturales. Lo primero es una obligación que tenemos para con la sociedad toda del presente y con las generaciones futuras, lo segundo es un imperativo de soberanía política e independencia económica.

En este sentido, el derecho ambiental tanto como el económico, adquiere importancia fundamental en el marco de un proceso de disputa, de apropiación y regulación de los recursos naturales. Advertidos de que atravesamos un periodo en que se ha puesto de manifiesto la escasez y la sustentabilidad de los mismos, el escenario de la puja distributiva de los bienes, materiales y simbólicos no puede ser ajeno a la enseñanza del derecho.

Por ello, consideramos que no pueden entenderse como periféricas materias claves para comprender el modelo económico actual, tales como el Derecho de Minería y Energía, Derecho Agrario y Economía Política. Así, lejos de considerar estos campos del saber jurídico como asignaturas optativas, es necesario jerarquizarlos incorporando los debates actuales a sus planes de estudio (por ejemplo en materia de commodities, renta agraria, extranjerización de la tierra, Plan Estratégico Agroalimentario 2020, etc.)

En definitiva, el Plan de Estudios debe dar cuenta del análisis político-económico y su resolución en el terreno normativo. Debemos preparar abogados que sean parte de la definición del Estado y la sociedad que queremos, creando herramientas y facilitando espacios para su discusión.

Otro aspecto de profunda relevancia y con directa relación con el proceso de aprendizaje del derecho, es el rediseño del régimen de correlatividades del plan de estudios.

En este sentido, el orden analítico de la ciencia jurídica tiene un impacto directo sobre la óptica que el estudiante construirá del derecho. Así, una dinámica académica que vaya desde lo general a lo específico permite afianzar el conocimiento de los aspectos estructurales del derecho y comprender con mayor facilidad cada una de las áreas específicas.

Entendemos que los faros desde el que los estudiantes deben comprender las ciencias jurídicas y sociales son la Constitución Nacional y los Derechos Humanos por ser éstos conjuntos normativos-valorativos desde los que debe interpretarse el fenómeno jurídico en su totalidad.

Conforme sostenemos, creemos que el segundo año de la carrera debería contemplar las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Político, Derechos Humanos, y Criminología para luego sí, ingresar a las materias más densamente codificadas.

MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Creemos que una reforma del plan de estudios debe tomar en consideración que la actualización será total y continuada cuando la actualización de los programas de estudio de las asignaturas sea periódica.

Esta propuesta se encuentra anclada en la necesidad de acoplar la renovación de los contenidos al dinamismo de la transformación del derecho y el conocimiento del esfuerzo institucional que implicaría lograr esas metas mediante procesos globales de reforma y participación en la misma.

Por ello, la instrumentación de un mecanismo de actualización periódico que coordine la participación la Secretaría de Asuntos Académicos, el Consejo Directivo, los Institutos, las Cátedras y el alumnado permitiría sostener la reforma del plan de estudio manteniendo la dirección que proponemos para nuestra carrera.

En este sentido, la modificación del Anexo I de la Resolución N° 356/09 permitiría ampliar la función de análisis del Consejo Directivo a cuestiones materiales, respecto de las cuales emitiría un dictamen que abriría una comunicación con la cátedra de que se trate.

Asimismo, podría instrumentarse el archivo de todos los procesos actualización como forma de generar un registro de estos procesos parciales para aquellos que, como nosotros hoy, emprendan en algún momento una reforma amplia y plural del plan de estudios.

PERFIL PROFESIONAL DE LOS EGRESANTES

El perfil de los egresantes que pretende formar nuestra facultad debe relacionarse con las necesidades, el desarrollo y las relaciones económico-sociales del país y la región. La Universidad pública no debe abstraerse de esas variables, porque debe ser uno de los principales motores del desarrollo nacional y de la justicia social, porque de no hacerlo solo se diferenciaría de las universidades privadas por su administración y por su financiamiento.

La currícula actual tiende a transitar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la exclusiva óptica del abogado litigante y descuida otros aspectos del ejercicio profesional cuya importancia social es mayúscula. Nuestra casa de estudios extiende su área de influencia en la capital de la Provincia más grande e importante del país. En la ciudad de La Plata se encuentra la sede de los tres poderes de gobierno provincial y –consecuentemente- una importantísima cantidad de egresados se desarrollarán profesionalmente en el sector público, que a su vez ha sido uno de los motores de la recuperación del empleo en los últimos años.

Sin embargo, los contenidos que actualmente se imparten continúan privilegiando la formación de profesionales liberales. El derecho administrativo suele ser abordado de modo unilineal, desde la óptica del abogado que litiga contra el Estado. No hay formación para abogados que se desempeñen en el sector público.

Mucho menos, formación para futuros dirigentes que quieran incursionar en el escenario político

La orientación académica hacia un abogado volcado a la actividad política o administrativa debe privilegiarse, sobre todo en una Universidad como la nuestra que se encuentra ubicada en la ciudad que alberga a los principales órganos de gobierno de la provincia, lo que implica una enorme demanda de profesionales del derecho adecuadamente formados para la actividad pública.

En este mismo sentido, hoy se destaca en nuestro país la recuperación de la investigación y la repatriación de gran cantidad de investigadores -otrora expulsados por políticas regresivas.

Esto último permitió la construcción de un relato teórico-científico desde una perspectiva latinoamericana que da cuenta del proceso de expansión de derechos al cual asistimos. Todo ello en el marco de una política presupuestaria favorable a la investigación y la educación pública.

Por ello, creemos que la Facultad debe profundizar el perfil de los abogados investigadores aumentando los recursos que se destinan a esos fines.

CONCLUSIONES

Tomamos como ejemplo a los compañeros Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes condujeron el proceso de expansión de derechos en el cual participamos, entendiendo nuestra disciplina con un sentido

transformador de la realidad social Argentina, y llenándonos de orgullo por su condición de egresados de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, perteneciente a la ya centenaria Universidad Nacional de La Plata.

Como queda expuesto en este documento, creemos fervientemente que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales debe formar abogados que, independientemente de la rama profesional en que continúen, tengan un fuerte compromiso social. Es necesario tomar en serio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que estamos formando actores sociales que, desde su lugar, van a influir en el devenir de nuestra sociedad.

Nuestra casa de estudios debe aprovechar este proceso de discusión y reforma para comprometerse decididamente con las cuestiones sociales, constituyéndose en una herramienta de cambio que contribuya a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Sólo así logrará que sus futuros egresados continúen y profundicen el camino transformador que la Argentina recorre.

"La Universidad tiene que participar activamente en la revolución científico-técnica, no sólo cultural sino también económico y política" (Rodolfo Puiggrós)

ABOGADOS LA CÁMPORA.

PROYECTO N° 57: Autor: Luis NIELSEN, graduado, remite evaluación del proceso de reforma del plan de estudios de la carrera, propuesta de nuevas materias o disciplinas, y propuesta de plan de estudios de la carrera.

Nuestra Facultad a través del Consejo Directivo, aprobó un marco reglamentario general, destinado a promover un espacio institucional para el análisis, discusión, debate y formulación de propuestas para la reforma al plan de estudio para la carrera de Procurador, Abogacía y Escribano.

Para la formalización de esta iniciativa se crearon de seis (6) comisiones temáticas de trabajo.

Ellas son: Materias Iniciales o Propedéuticas, Derecho Público, Derecho Privado, diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho, Ciencias Sociales y áreas del conocimiento complementarias para la formación del Abogado, Comisión de Prácticas Profesionales.

.

Fundamentos favorables a la reforma del plan de estudios:

La carrera de Abogacía, tal como está estructurada en nuestra Facultad, no cubre las expectativas previstas en el momento de sanción del actual plan de estudios, dado que se sustenta en un perfil profesional anacrónico y aislado de las condiciones modernas del Derecho.

El esquema actual de correlatividades no representa un criterio de gradualidad de la enseñanza y exhibe dificultades serias en la formación curricular del abogado.

Si, quiero expresar mi adhesión al actual sistema de formación general del abogado, instituido en nuestra casa de altos estudios, evitando tergiversaciones en lo atinente a especializaciones en diversas ramas del derecho, es menester continuar este esquema de formación a fin de evitar un conocimiento fragmentado del derecho.

Creo necesaria una modificación en el sistema de enseñanza-aprendizaje a fin de abandonar el sistema de enseñanza enciclopedista y de clases magistrales, con el propósito de generar un nuevo mecanismo en el cual se busque y se fomente el interés intelectual y permanente del alumno evitando la mera transmisión de conocimiento.

Es necesario diseñar un plan de estudios que privilegie lo general por sobre lo particular, la capacidad de entender por sobre la de aprender, la de resolver conflictos sobre la de ejercer su profesión pensando que el proceso es un combate y que una sentencia favorable firme, alcanza para satisfacer los máximos anhelos del letrado.

Debemos alejarnos de la idea del tradicional plan de estudios que comenzaba con Introducción al Derecho y finalizaba con Derecho Internacional Privado, ese plan es hijo de la idea de que formar abogados era sinónimo de hacerlos conocer y si es posible memorizar todo el ordenamiento jurídico, que a su vez respondía a un criterio estático del derecho.

Era también hijo de un sistema de aprendizaje que privilegiaba la erudición a la inteligencia

Debemos orientar un plan de estudios que permita al estudiante desarrollar sus capacidades creativas, conciencia crítica, y protagonismo cívico.

Materias que creo deben sumarse: Derechos Humanos, Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, dividir Derecho Constitucional en I y II (Derecho Procesal Constitucional), dividir Derecho del Trabajo y Derecho de la Previsión Social, transformar Civil V en derecho de Famila y Civil VI en Sucesiones, como asimismo modificar el nombre de Navegación por Derecho del Transporte en general, modificar el actual esquema de practicas civiles, penales y seminario de la carrera por un esquema integral de practicas obligatorias dadas en distintos años de la carrera, sumar cursos de Derecho Informático, Ingles Jurídico, Ética Profesional y Mediación. Resta estudiar la carga horaria de cada una de ella y detalles que faltan.

MI PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS:

Primer año:
- -Historia Constitucional
- -Derecho Romano
- -Introducción al Derecho
- -Derecho Político/ Teoría del Estado
- -Derechos Humanos
- -Introducción a la Sociología

SEGUNDO AÑO:
- -Civil I
- -Derecho Constitucional
- -Derecho Publico, Provincial y Municipal
- -Economía Política
- -Penal I
- -Civil II
- -Derecho Constitucional II

TERCER AÑO:
- -Civil III
- -Penal II

-Procesal Penal
-Internacional Publico
-Derecho del Trabajo
-Filosofía y lógica
-Sociología del Derecho

CUARTO AÑO:
-Civil IV
-Civil V
-Procesal Civil
-Derecho de la Previsión Social
-Administrativo I
-Comercial I

QUINTO AÑO:
-Civil VI
-Derecho Agrario
-Mineria y Energia
-Comercial II
-Administrativo II
-Notarial y Registral

SEXTO AÑO:
-Derecho Ambiental
-Derecho Internacional Privado
-Finanzas y Derecho Financiero
-Derecho del Transporte

ESQUEMAS DE CORRELATIVIDADES:

Propongo modificar las siguientes correlatividades:
-Las materias de primer año no tienen materias correlativas
-Suprimir la correlatividad de Civil I a Penal I
-Modificar la correlatividad de Derecho Constitucional a Penal I y no a Procesal Penal como es en la actualidad
-Para poder rendir Procesal Civil se deberán tener aprobadas al menos 3 de los 5 civiles existentes en la actualidad, y no solo uno como hoy se exige
-Derecho Constitucional será correlativa de Derechos Humanos
-Internacional Publico podrá ser rendida cuando se tengan al menos 3 civiles aprobados
-Filosofía y Sociología del Derecho no serán ya correlativas de Procesal Penal
-Notarial y Registral serán correlativas de Civil V, pero ya no de Comercial II
-Agrario y Minería ya no serán correlativas de Administrativo I sino de Procesal Civil

PRACTICAS:

Creo que se debe abandonar el actual sistema de practicas penales, civiles y 1 seminario para trabajar en un esquema de practicas integrador y que se de año por año, por ello propongo:
-En los 3 primeros años trabajos de investigación con rigor científico, con las pautas para publicar en la revista anales sobre los temas vistos en dichos años de la carrera.
-A partir del cuarto año, practicas reales en consultorios jurídicos, clínicas jurídicas, institutos de la Facultad y demas.
-En quinto y sexto año deberá darse un esquema de Práctica Profesional Supervisada, la Práctica Profesional Supervisada es una actividad formativa del alumno que consiste en la asunción supervisada y gradual del rol profesional, a través de su inserción a una realidad o ambiente laboral específico y de esta manera aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica.

Los objetivos de estas actividades tienen que ver con la posibilidad de:

- Contribuir a consolidar los conocimientos y destrezas logradas, así como al desarrollo de actitudes y valores, todo lo cual favorece a la formación integral del alumno.
- Brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica que habilite para el ejercicio de la profesión u oficio.
- Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
- Contribuir a la formación de profesionales con excelencia académica, críticos, creativos y comprometidos con el desarrollo económico y social.
- Permitir que el alumno tome contacto con el ámbito en el que se desenvuelven empresas u organismos y se integre a un equipo de trabajo, contribuyendo de esta forma a la transición entre la etapa educativa y la laboral.
- Formar al alumno en aspectos que le serán de utilidad en su posterior inserción laboral.
- Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.

Pueden desarrollarse en:

1- Poder Judicial, Fuero Penal.
2- Poder Judicial, Fueros Civil, Laboral y Contencioso Administrativo.
3- Práctica Profesional Supervisada (Trabajo Final – Opcional para el alumno):
4- Poder Judicial, Fuero Penal
5- Poder Judicial, Fueros Civil, Laboral o Contencioso Administrativo.
6- Poder Judicial, Fuero Federal
7- Municipalidad: Departamento Ejecutivo y Departamento Legislativo.
8- Estudios Jurídicos.
9- ONG
10- Administración Pública Nacional o Provincial.

Es un aporte al debate, en poco tiempo envío los fundamentos de las modificaciones, saludos a todos, espero sus respuestas.

PROYECTO N° 59: Autor: Damián BRUMER y Colectivo de Abogados Populares "La Ciega", remite reflexiones acerca de la reforma del plan de estudios, el perfil social del abogado, la formación del abogado de hoy, la enseñanza en universidades popular, y propuesta de nuevos contenidos curriculares.

La Plata, 18 de noviembr

Sobre el trabajo realizado

Si bien el debate institucional para la reforma del Plan de Estudios se inició en el Consejo Directivo en el mes de mayo de este año, desde el MIU hemos impulsado este debate en la facultad desde nuestra conformación como agrupación en el año 2002. Del fruto de esas discusiones acerca de la orientación y contenido de nuestra carrera, surgieron un sinnúmero de actividades que hemos desarrollado dentro de nuestra facultad con el fin de abonar de manera profunda al debate sobre nuestro futuro rol profesional, el perfil con el cual se nos forma, el plan de estudios vigente y consecuentemente el cambio y la transformación que creemos necesaria. A partir de la conformación del Colectivo de Abogadxs "La Ciega" en el año 2007, continuamos desarrollando esta línea de pensamiento y producción en conjunto entre estudiantes y graduados, dando un paso más en la experiencia práctica de un perfil de abogadxs críticos comprometidos con las problemáticas populares.

Entre las actividades mencionadas resulta interesante destacar la producción de 12 ediciones de la Revista "Praeter Legem": la primera revista independiente de los estudiantes de derecho donde abordamos diferentes temáticas de actualidad nacional e internacional desde un punto de vista jurídico, entrelazando diversas problemáticas o realidades sociales con abordajes alternativos del derecho inexistentes en la gran mayoría de las cursadas de nuestra facultad. Con la misma tónica organizamos las Jornadas de Derecho Crítico durante 5 años consecutivos, intentando también aportar al vacío que tiene nuestra Unidad Académica en cuanto al abordaje y producción de conocimiento crítico sobre nuestra disciplina, espacios donde impulsamos el debate interdisciplinario, el intercambio de ideas y la producción colectiva del conocimiento en contraposición a la estructura áulica histórica donde el docente es dueño casi absoluto del conocimiento que le imparte a sus "alumnos". Decenas de panelistas (entre docentes de esta y otras Universidades, militantes políticos, académicos, etc.) y cientos de estudiantes y graduados participaron a lo largo de estos años en discusiones de género y derechos de las mujeres, derechos humanos, derecho laboral, problemática carcelaria y derecho penal, problemática de tierra y vivienda, derecho ambiental, comunicación y cultura, entre muchas otras.

La comisión de trabajo barrial, la comisión de trabajo en cárceles, la comisión de género, la comisión de cultura y la comisión de derechos humanos, también han sido espacios de participación sustanciales de debate y producción de derecho crítico en la práctica, desde los barrios con trabajos continuados sobre diversas problemáticas de los sectores populares, realizando talleres sobre prácticas policiales, derecho a la vivienda, derechos de los migrantes, etc. En las cárceles con estudiantes privados de su libertad y con población común; en la facultad trasladando discusiones en torno al género y la diversidad sexual (despenalización del aborto, trata de personas, prostitución, matrimonio igualitario, identidades sexuales, acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia), y por otra parte debates sobre la cultura latinoamericana y la influencia de la globalización y del sistema capitalista, la contracultura y las identidades culturales y derechos de los pueblos originarios. Y por último desde la comisión de derechos humanos generando un nexo entre la facultad y los juicios históricos que se desarrollan en La Plata por crímenes cometidos durante el genocidio llevado adelante durante la última dictadura cívico-militar, un tema casi ausente en nuestro paso por la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. Además de los trabajos prácticos en sus terrenos específicos, desde estas comisiones también se han elaborado producciones de derecho crítico sobre sus temáticas concretas que abonan a los abordajes que pretendemos esenciales para una formación seria e integral.

Asimismo los ciclos de cine, charlas-debate, talleres literarios y demás actividades desarrolladas dentro y fuera de la facultad, entendemos han aportado también a apalear la formación, análisis y debates ausentes en una facultad abocada a repetir los artículos de un código o a escuchar los "logros" que el titular de cátedra tuvo a lo largo de su profesión, salvo contadas excepciones.

Esta reseña sucinta y sintética no sólo pretende plasmar en pocas palabras el trabajo desarrollado durante 9 años, sino también aportar nuestro trabajo y producción a una eventual reforma del plan de estudios.

Con idéntica línea de actuación, intervinimos a través de nuestro Consejero de base por la minoría estudiantil en el Consejo Directivo, en la sesión en la cual se aprobó el proyecto presentado por el Decano y la Secretaria Académica para dar inicio al debate sobre la reforma del Plan de Estudios. En ese marco planteamos una serie de modificaciones y/o aclaraciones al proyecto oficial, logrando 3 cuestiones fundamentales: por un lado que las 6 comisiones temáticas creadas para la discusión incorporen como eje primordial cuál es el perfil profesional al que se quiere apuntar desde la facultad, por otro lado la apertura de las 6 comisiones a toda la comunidad universitaria que quiera participar (estudiantes, docentes, graduados, agrupaciones, cátedras, trabajadores no docentes, institutos, etc.) y que el debate no se circunscriba únicamente a los 16 consejeros, y por último logramos la extensión del plazo para el debate en comisiones y la presentación de propuestas con posibilidad de prorrogarlo, entendiendo que un proceso de semejante importancia requiere de un debate serio, profundo y con tiempo suficiente para alcanzar una reforma verdaderamente integral.

Entendemos que estas 3 líneas directrices debieran guiar el debate sobre la reforma del Plan de Estudios hasta el final, para garantizar una modificación genuina del plan de nuestra carrera.

A partir de que el Consejo Directivo aprobó el proyecto mencionado, nos dimos las tareas que desde nuestras posibilidades pudimos llevar a cabo, participando de un gran número de reuniones de las 6 comisiones temáticas, difundiendo la existencia de las mismas en la facultad para que más docentes y estudiantes participen, escuchando y dialogando con los docentes de las cátedras convocados por las comisiones y analizando las propuestas presentadas. Además impulsamos desde el MIU conjuntamente con "La Ciega" la Comisión Interclautros para la Reforma del Plan de Estudios, un espacio desde el cual elaboramos propuestas, participamos de las 6 comisiones temáticas del Consejo, centralizamos sus discusiones y socializamos los diferentes proyectos presentados.

A su vez, participamos activamente del foro de debate sobre la reforma del Plan de Estudios organizado por el Congreso de Crítica Jurídica desarrollado en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y en el Colegio de Abogados de La Plata los días 13 y 14 de octubre, en el cual participaron las diferentes agrupaciones estudiantiles de la facultad, además de diferentes académicos de esta y otras Universidades de América Latina, y organizamos las 5tas Jornadas de Derecho Crítico –declaradas de interés

académico por la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y por la Facultad de Cs. Sociales de la UBA- tomando como uno de sus ejes principales la reforma del plan de estudios.

Sobre la bese de lo efectivamente realizado a lo largo de estos últimos meses y a lo largo de estos 9 años de trabajo, elaboramos esta propuesta general con algunas de las principales líneas teóricas y prácticas que consideramos esenciales a la hora de pensar una eventual reforma al plan vigente.

Universidad – Derecho Crítico

Partimos de entender que la Universidad es un producto histórico y político. Como institución, está diseñada para cumplir un rol determinado dentro de la sociedad actual. Como la misma es una sociedad dividida en clases, capitalista, la Universidad despliega dos funciones elementales para mantenerla y reforzarla. Por un lado, produciendo mano de obra calificada para afrontar las exigencias del sistema productivo/cultural (conformado por el mercado, las grandes empresas y Estados). Así, se nos forma para adaptarnos a las feroces reglas del mercado y a trabajar para servir a las necesidades de las empresas (la Ley de Educación Superior lo expresa textual: "El conocimiento es un servicio que se vende según la demanda"). Por el otro, refuerza la base ideológica dominante. Es en ese lado donde se ubica la "ciencia jurídica". Esto se observa no solo en los planes de estudio, en las argumentaciones teóricas de las Cátedras y en los autores que tenemos que leer, sino también en las formas educativas dentro del aula. Allí, el conocimiento no se construye entre los actores (docentes y estudiantes), sino que se reproduce en sentido lineal del docente (incuestionable poseedor de saberes) hacia el estudiante (totalmente deslegitimado y vacío de saberes). Esto, naturaliza no solo las relaciones de poder, sino también el individualismo y la apatía por desarrollarnos como futuros profesionales críticos, reflexivos y constructores del conocimiento.

A pesar de eso por medio de diferentes luchas se logra abrir espacios para introducir el pensamiento crítico. Apostamos a que por medio de variadas grietas que se abren, podamos aportar aquí y ahora, a través de practicas político-académicas, a las diferentes luchas por democratizar la universidad logrando la conformación de espacios para introducir un pensamiento critico y un conocimiento diferente. Pues si quedamos posicionados solo desde la denuncia del carácter de clase del derecho, no veríamos en él su potencial como una herramienta para la lucha. Hacemos referencia a la edificación de un modelo académico capaz de construir un conocimiento que no se contradiga con los intereses y necesidades de la clase trabajadora, que son los de todos aquellos que queremos recuperar la voluntad colectiva de un cambio transformador. Así las cosas y dado a nuestro inconformismo y a la convicción de que las cosas no están dadas de una vez y para siempre, nos organizamos como estudiantes para transformar la Universidad que tenemos en la Universidad que queremos. Por eso es que a la par de la lucha por una transformación social de raíz, desplegamos nuestra intervención política especialmente en dos sentidos. Por un lado, aportando al desarrollo de un movimiento estudiantil participativo, unitario, democrático e independiente de las autoridades. Porque solo así, podremos conquistar nuestros derechos e intereses, recuperando el rol histórico de los Centros de Estudiantes, construyendo una Universidad pública, autónoma, científica, gratuita, crítica y de calidad. Por el otro, (y complementándose con lo anterior), debatimos y producimos conocimiento crítico, junto con graduadxs y docentes, en la teoría y en la práctica, disputando las concepciones hegemónicas con que se nos forma, porque "las ideas dominantes de una época, son las de la clase dominante". Utilizamos las herramientas que obtenemos en la facultad, poniéndolas en crisis con la realidad y reorientándolas para servir a la lucha de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Porque rechazamos ser reproductores de la injusta sociedad en que vivimos y creemos en la necesidad de construirnos como profesionales transformadores de la realidad.

Rol del profesional

Desde hace años ponemos en crisis la formación que recibimos a lo largo de la carrera, que nos presenta al Derecho como una ciencia neutral, objetiva, alejada de cuestiones políticas, económicas y sociales. No ingenuamente nuestro plan de estudios se estructura en base al derecho privado, que solo se encarga de la protección de intereses patrimoniales, apuntando así a la formación de profesionales con una visión individualista y comercial. Entendemos que debemos ejercer nuestra profesión defendiendo los intereses del pueblo, aplicar nuestros conocimientos para poder frenar la ofensiva criminalizadora del Estado, pero al mismo tiempo generar la ofensiva jurídica en beneficio del cambio que buscamos. El derecho vigente es sin duda un instrumento del Estado para poder legitimar la condición de opresión y explotación del conjunto del pueblo en provecho de un sector reducido de la sociedad. Sin embargo, entendemos también que el derecho puede ser utilizado en beneficio de la transformación social, aprovechando las contradicciones que el sistema jurídico nos presenta. El uso alternativo del derecho debe consistir en combatir el fetichismo de la ley, propio del jurista formado en la dogmática, impregnado íntegramente por la versión liberal-tecnocrática y positivista de su oficio. En edificar la conciencia del carácter inevitablemente ideológico y político, tanto del derecho como de la profesión. Ningún cambio saldrá de una reforma legislativa o de un antecedente jurisprudencial sin que haya un cambio de raíz en el sistema político y económico, el cual vendrá a través de la organización, la acción colectiva, y la lucha por una sociedad, sin oprimidxs, ni explotadxs.

Una reforma verdaderamente integral

Entendemos que la reforma no debe limitarse sólo a pensar en agregar o sacar dos o tres materias, sino que también es fundamental repensar el método pedagógico de enseñanza y la estructura de la carrera y de la facultad en su conjunto. La inexistencia histórica de cursadas para todos resulta un limitante sustancial que ineludiblemente debe revertirse garantizando a todos los estudiantes el derecho a asistir a espacios áulicos de construcción de conocimiento colectivo entre docentes y estudiantes, en el marco de los cuales el análisis, la reflexión, la crítica, el cuestionamiento y el estudio real de los contenidos curriculares sean prácticas cotidianas y no excepcionales, donde los y las estudiantes contemos con docentes formados en la docencia y no sólo en el derecho, que propongan alternativas de estudio diferentes a las convencionales.

De la mano de lo previamente mencionado y a fin de hacer efectivo el acceso irrestricto a las cursadas por promoción garantizándose la libertad de cátedra, el sistema de números de sorteo para acceder a una materia debe ser abolido. Para esto, la existencia real de las bandas horarias como en tantas otras facultades, sumado a una política seria y transparente de concursos docentes periódicos, debieran ser prioridades a la hora de impulsar una modificación integral de nuestro plan de estudios.

En el mismo orden de ideas, la necesidad de repensar el régimen inquisitivo de mesas de exámenes libres donde repetimos lo que dice un libro sin siquiera cuestionarlo, las clases "magistrales" de algunos docentes que nos cuentan sus logros en el ejercicio de su profesión y nos vamos de la clase sin decir una sola palabra, la duración igualitaria de horas cátedra en distintos tipos de materias, la falta de perspectivas de

derechos humanos de las diversas materias como eje transversal, la necesariedad de una carrera más práctica que nos prepare mejor para ejercer la profesión, son algunas de las tantas cuestiones a debatir para una reforma verdaderamente integral.

Asimismo, debe reverse el curso de ingreso pero siempre partiendo de la base de lo previsto en el Estatuto de la UNLP en canto garantiza el acceso irrestricto a la Universidad. Nuestra facultad debe hacer eco de esta normativa generando todas las alternativas necesarias para una genuina inclusión de todos y todas, dejando atrás cualquier tipo de mecanismo eliminatorio y excluyente: como la necesidad de un puntaje mínimo o la aprobación de exámenes, entre otros. En este sentido, será fundamental reorientar la modalidad y el contenido del ingreso teniendo en consideración la falencia en la formación media de los aspirantes a una carrera de la universidad, producto de la degradación de la educación pública primaria y secundaria.

Una reforma que sea integral, sólo será una reforma que vaya de la mano de una facultad verdaderamente inclusiva, democrática, científica y popular.

Algunas propuestas concretas

Algunos de los debates desarrollados en estos meses, incluyeron el debate sobre la cantidad de horas cátedra con las que deben contar las carreras de grado. En este punto se concluyó que nuestra facultad se encuentra en un termino medio de esta carga, con lo cual a la hora de pensar contenidos curriculares esta en buenas condiciones como para agregar materias en caso de pensar nuevos contenidos, sin la necesidad de quitar otras, por lo cual todas nuestras propuestas van en el sentido de profundizar y complejizar la formación de los futuros y futuras abogad@s.

Yendo al meollo de la cuestión como agrupación estudiantil y colectivo de abogados, proponemos y apoyamos algunas modificaciones concretas que hoy están en debate en este proceso.

-Contenidos transversales: los derechos humanos desde una perspectiva integral:

A nuestro entender, en la sociedad de hoy hay dos ejes que deberían ser abordados de una manera general a lo largo y ancho del plan de estudios. Uno de esos tópicos es la posición frente a los Derechos Humanos. Dentro de lo que son los avances normativos en materia de derecho internacional, la inclusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional y el respeto estatal que casi todos los Estados del mundo propugnan defender, sumado al momento de la historia por el cual atravesamos, incluyendo las luchas sociales que se vienen llevando a cabo a lo largo de las últimas décadas en el mundo y en espacial en América Latina, resulta necesario que todas las materias sean enfocadas desde esta óptica, y que la preeminencia de estos derechos en términos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos, por sobre cualquier otro que se intente interponer, debe ser el modo en que se enseñe el derecho en nuestra facultad, sin perjuicio de la inclusión de una materia autónoma sobre esta categoría de derechos.
De este modo proponemos que en el marco de esta reforma quede como tarea principal modificar los programas de estudio para que en todas las materias se de un enfoque en derechos humanos.

-Otro tópico fundamental, creemos es el de la cuestión de género y la preeminencia hetero-patriarcal que existe en nuestra sociedad y que evidentemente se refleja en el derecho. Este eje creemos debe ser problematizado y abordado desde una perspectiva transversal a todo el contenido enseñado. Si bien han habido avances en términos de derechos civiles, lo han sido muy pocos en términos penales (aborto, femicidio), socio jurídicos, filosóficos, políticos, etc. Con lo cual también proponemos que se incluya la perspectiva de género y se debata y estudie en todas las materias de la carrera.

-Lugar a ocupar por el Derecho Social: en este punto adherimos completamente al dictamen presentado por el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP en especifico los apartados IV y V en tanto reflejan una opinión compartida sobre el lugar que ocupa y debería ocupar la materia, en un plan de estudios que hoy claramente está perfilado a formar abogados de tinte privatista y no social.

También compartimos en el análisis que en dicho dictamen se expresa a una crítica que se podría definir como super generalista y poco estimulador de los contenidos del plan de estudios y de la poca relevancia a la investigación-acción que se promueve. En este punto nos resulta muy interesante un esquema que traemos de la organización curricular de la Universidad Nacional del Comahue, donde en un intento de estimular, el conocimiento y el interés particular de los y las estudiantes, proponen el curso obligatorio de tres seminarios orientados a una especialidad, ya sea penal, civil, laboral, socio jurídica, etc. A los fines de lograr un hibrido que nos permita no modificar la formación integral de los abogados, pero sí permitir adquirir conocimientos específicos, sobre materias que resulten de mayor interés y perspectiva para su futuro ejercicio profesional.

Esto a su vez tiene como ventaja que los formatos de los seminarios sean desarrollados desde una propuesta pedagógica diferente, donde el estímulo por la investigación, las teorías que permiten desarrollarla y la producción de conocimiento de manera creativa, autónoma, critica e independiente permita desarrollar en los estudiantes un nivel de empoderamiento de las temáticas desarrolladas mucho mas profundas que en los esquemas clásicos de enseñanza.

-Por otra parte y siendo una histórica posición de nuestras organizaciones la de estar en contra de cualquier arancelamiento del acceso a la educación, se podría lograr un reconocimiento a la especialización de los estudiantes, que no cuentan con la posibilidad de realizarla en cursos de post grados, siempre costosos y exclusivos para una pequeña elite social. En ese sentido, insistimos en la necesidad de garantizar la gratuidad de los post grados brindados por la UNLP y en espacial aquellos que dependen de nuestra facultad.

Sobre la injerencia de la LES y la CONEAU

Entendemos que la reforma del plan de estudios no debe ni puede ser enmarcada bajo los lineamientos de la Ley de Educación Superior (LES), debiendo dejar de lado a su vez toda participación en el proceso de reforma a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esta comisión, creada por la LES y siendo el organismo ejecutor de la misma, viola sistemáticamente la autonomía universitaria ya que, como organismo externo a la universidad, tiene injerencias en las determinación de planes de estudios, programas de materias, así como también en relación a la distribución presupuestaria.

La Ley de Educación Superior, sancionada en el año 1995 durante la década menemista, posee un claro espíritu mercantilista, entendiendo a la educación superior no como un derecho sino como un servicio, y como tal ligando el proceso educativo a las lógicas del mercado.

Es así, que esta ley ha ido avanzando en las distintas universidades nacionales del país de diferentes formas. Por un lado, cediéndole intervención a sectores privados, no solo desde el punto de vista económico (la

LES reconoce a los sectores privados como medios de financiamiento alternativo o adicionales al aporte educativo del Tesoro Nacional; en relación a este aspecto la LES ha avanzado en nuestra facultad, a través –por ejemplo- de la concesión a particulares de los servicios que brinda la institución a la comunidad académica), sino también direccionando el conocimiento en beneficio de estas empresas y en desmedro de las necesidades de los sectores mas postergados.

Otro aspecto a destacar es la esencia privatista de esta ley, que crea un organismo externo para "evaluar y acreditar" la educación superior, en base a parámetros de "calidad" propios del neoliberalismo y que en la práctica ha dejado en claro los objetivos de la CONEAU para la educación superior: el avance hacia la privatización de la universidad pública. En este sentido, en el marco de reformas de planes de estudios en las cuales la CONEAU ha tenido injerencia, este organismo ha impulsado políticas relacionadas al achicamiento de los contenidos de las carreras de grado y la creación de carreras de posgrado aranceladas, lo cual acarrea dos consecuencias fundamentales: por un lado la desvalorización académica de las carreras de grado, y por otro el avance hacia el arancelamiento de la universidad pública.

Entendemos que la reforma que se lleve a cabo en nuestra facultad no puede de ningún modo estar direccionada a los intereses de la LES ni la CONEAU. Debe ser una reforma discutida entre todos los miembros de esta institución y persiguiendo los intereses de los estudiantes que van a recibir su formación en base al plan que hoy se discute.

Necesidad de un debate serio, amplio y masivo sobre el proyecto a discutirse en el año 2012

Entendiendo la magnitud que implica la reforma de un plan de estudios en una carrera universitaria: instrumento por el cual se puede marcar o indicar una línea de pensamiento y de construcción, tanto respecto del perfil del abogado que egrese de la facultad, como en relación a cuáles serán las materias o áreas que desde la orientación que posea el plan de estudios, se les dará mayor o menor importancia en el mismo, creemos en la imperiosa necesidad de que el proyecto sea debatido de manera plural, masiva y extensiva a todos los integrantes de la comunidad universitaria de nuestra facultad.

Porque como lo indica la historia, luego de una reforma transcurren muchísimos años para que se lleve adelante otra modificación a la estructura de un plan. Por lo cual, el momento de su aprobación, deliberación o planificación, es el punto central de participación masiva y responsable.

En este marco, el plan de estudios muchas veces se transforma en una parte más dentro de la estructura de la universidad, que trata de organizar, jerarquizar y direccionar el conocimiento, tendiendo a la reproducción de relaciones vigentes en un determinado sistema imperante. Por ello, el debate no debe ser desarrollado e implementado de manera unidireccional, desde los docentes hacia los estudiantes, o desde las autoridades hacia el resto de la comunidad universitaria. Sino que se debe acudir a la experiencia enriquecedora de la discusión en todos los planos y propugnar por una horizontalidad que garantice que se escuchen las voces de todos y todas.

Es en la instancia deliberativa donde todos los sujetos pueden y deben expresar sus posiciones y proponer diferentes temas para la discusión colectiva. Siendo ésta, una política que entendemos, debe llevarse a cabo en el desarrollo y toma de las decisiones que hacen a la cotidianeidad de la facultad.

En base a lo antes expuesto, seguiremos trabajando y aportando; encausando nuestras acciones para lograr una mayor pluralidad de opiniones, en un aspecto que en definitiva va a repercutir sobre la vida de todos los integrantes de nuestra Unidad Académica y sobre la sociedad en general.

MIU - Movimiento Independiente Universitario
Colectivo de Abogadxs Populares "La Ciega"

PROYECTO N. 65. Autor: Agrupación Franja Morada**.**

Haciendo un recorrido histórico a través de la evolución del Plan de Estudios a partir del año 1906, surge evidente la orientación generalista del derecho en lo que respecta a la formación del abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata que de las currículas mencionadas se pretendía dar.

Los cambios de la sociedad y del derecho han hallado su correlato en las modificaciones que al plan de estudios de la carrera se han hecho. En ese sentido, cabe destacar a modo de ejemplo la reforma realizada en el año 1929, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen que en el contexto de los contenidos dados en el ámbito de la facultad se ha traducido en la incorporación de nuevas asignaturas acordes con las nuevas necesidades de la sociedad, cual es el caso de las asignaturas Finanzas, Legislación del Trabajo, Derecho de la Minería y Rural, Derecho Marítimo y Legislación Aduanera y Régimen Jurídico de las comunicaciones.

De lo dicho anteriormente se infiere entonces que la reforma del plan de estudios no puede estar apartada de la coyuntura social que la condiciona.

Los cambios sociales surgidos a partir de la última modificación del plan de estudios en 1984 no han sido menores, y por ello es que la reforma que se propicia no puede ser ajena a ellos.

En ese sentido cabe hacer una revisión histórica, referenciando los datos salientes que justifican la modernización de la currícula de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Plata y que desde la FRANJA MORADA propiciamos.

Como dato saliente y determinante del cambio de paradigmas en lo que respecta a las ciencias jurídicas en el marco del derecho argentino, no puede soslayarse el rol primordial que ineludiblemente significa la Reforma Constitucional de 1994. Las modificaciones a la Carta Magna nos demuestran en estos primeros 17 años de vigencia el cambio en la estructura social y su correlato en las relaciones e instituciones jurídicas.

La consagración de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional ha repercutido enormemente en la estructura social. En efecto, la tutela efectiva de los derechos que antes se hallaban implícitos en nuestra Constitución hoy se manifiestan de forma expresa al amparo de un régimen concreto. Tal es así que derechos humanos como a la vida, la salud, la educación, la niñez, la no discriminación, al acceso a una vivienda digna, el derecho al trabajo y tantos otros, hoy se hallan jerarquizados por sobre otros intereses particulares.

La reforma constitucional también ha implicado renovaciones en lo que respecta al ejercicio de los derechos tutelados. Así, los mecanismos ordinarios de acceso a la jurisdicción se ven ampliados por nuevos institutos como las acciones de habeas corpus, habeas data y amparo -este último de existencia pretoriana anterior a la consagración efectiva en el texto legal- así como modificaciones en lo que respecta a la

legitimación para entablar pretensiones. En ese sentido podemos referirnos a la legitimación más amplia en materia de intereses difusos e intereses de incidencia colectiva.

En este último caso cabe estarse al mayor desarrollo que en el último tiempo ha tenido el derecho ambiental. Tal es así, que a través de los nuevos institutos mencionados y de las reformas procesales indicadas, ha ido in crescendo la evolución de la tutela de este derecho colectivo. Corolario de ella es la sanción de numerosas leyes que se acrecientan constantemente en número y en especificidad, dando origen al incipiente surgimiento del derecho ambiental como una rama autónoma. La trascendencia del ambiente para el desarrollo de la vida, las catástrofes naturales cada vez más atroces, la agotabilidad de los recursos naturales, el poco desarrollo de mecanismos de energías alternativas renovables, conllevan a que la tutela del Estado en este sentido deba ser aún mayor, teniendo en consideración también las consecuencias que estos factores traen aparejadas en lo que la vida y la salud de los ciudadanos se refiere. En ese sentido la legislación ha ido avanzando, hasta la consagración de normativa marco a nivel nacional como la ley 25.675 que tutela el derecho ambiental e insta a las provincias a que hagan lo propio considerando que por mandato constitucional se trata de materia no delegada por la provincias al Estado Federal.

El auge de esta disciplina amerita su tratamiento pormenorizado en el plan de estudios actual, por cuanto los noveles abogados de la UNLP deben contar con las herramientas para afrontar estas situaciones jurídicas que se suscitan en torno a la protección de estos intereses colectivos tan complejos y cada vez más autónomos.

Siguiendo la línea de pensamiento en lo que a la reforma constitucional de 1994 se refiere, no es menos significativo el reconocimiento que los derechos humanos han tenido en nuestra legislación. Su consideración como dignos de una tutela especial surge como correlato de las circunstancias histórico-políticas que precedieron a su consagración en un nivel supra constitucional, de allí la evidente vinculación que tales institutos tienen con la búsqueda de afianzar el institucionalismo necesario para el mantenimiento de una república democrática. En ese sentido, tratados como la Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada de Personas, así como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad tienden a afianzar el sentido democrático de la Constitución con miras a los objetivos antes descriptos, a la vez que otros tratados de Derechos Humanos como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer y demás convenciones internacionales tienen un sentido preventivo a la vez que implican una política estatal tutelar activa de los derechos en éstas enunciadas. De allí surgen también mecanismos para hacer efectiva la observancia de sus disposiciones, lo cual indefectiblemente repercute en la estructura clásica del derecho concebido con el límite en la soberanía, por cuanto surgen instituciones de carácter internacional que velan por el cumplimiento efectivo de derechos humanos en otra esfera jurisdiccional, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos institutos provenientes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica.

En otro orden de ideas, cabe destacar que la evolución normativa por vía de la sanción ordinaria de leyes del Congreso ha sido profusa.

En lo que al derecho de familia refiere, las modificaciones desde 1984 a la fecha han sido superlativas, por cuanto el esquema tradicional ha sido modificado a la luz de las demandas sociales que se adelantaron a la recepción legislativa, a la vez que la determinaron.

A partir de 1987, con la sanción de la Ley 23.515 de divorcio vincular, el derecho vino a legislar una circunstancia que de hecho venía sucediendo, siendo una legislación superadora de aquella en virtud de la cual la concepción de divorcio se asimilaba al actual instituto de la separación personal, que no implica disolución del vínculo conyugal con las consecuencias jurídicas que ello implica tanto en materia hereditaria, previsional, etc. A su vez, dicha normativa ha ido en pos de la consagración de la igualdad de género, por cuanto en su parte pertinente reglamenta la patria potestad de los hijos entendiéndola como compartida por ambos progenitores, y no como exclusiva del padre, como fuera entendida en el Código Civil de Velez Sarsfield, de marcada influencia patriarcal.

En el último tiempo la evolución del derecho de familia no ha sido menor, y una vez más puede observarse la influencia del derecho internacional público en esta materia: la Convención Sobre los Derechos del Niño ha influenciado en la reciente modificación del régimen de mayoría de edad, actualmente alcanzado a la edad de 18 años conforme Ley 26.579.

En lo que a reformas trascendentes se refiere en materia de derecho de familia, no menor es la radical reforma en torno al matrimonio civil, que de igual modo que la ley de divorcio vincular, viene a hacerse eco de lo que en la praxis social se venía llevando a cabo y que se refiere a la consagración del matrimonio civil entre personas de igual sexo.

En materia de legislación local, la tendencia es a descomprimir el sistema de justicia que actualmente se encuentra abarrotado, lo cual implica una dilatación en la resolución de conflictos, lo cual se traduce en muchos casos en una desprotección del derecho y en una tutela ineficaz. En pos de subsanar las deficiencias que el ejercicio de la profesión litigante conlleva, se han esbozado numerosos intentos para buscar alternativas a la resolución judicial de conflictos. En ese orden de ideas, se crearon institutos como los amigables componedores, los tribunales arbitrales -ambos de notorio fracaso práctico- y la mediación. Este último instituto tiene una trascendencia superior, por dos factores: por un lado la reciente sanción de la ley provincial de mediación obligatoria previa a la instancia judicial (que tiene excepciones taxativas atendiendo a las particularidades del conflicto de que se trate), y por otro lado, por cuanto implica un cambio de paradigma del abogado litigante, y consagra la figura del abogado asesor, preventor de la instancia judicial, con la consecuente participación mas activa en lo que a la resolución de conflictos respecta.

Es por ello que la reforma del plan de estudios se hace imperiosa. No cabe considerar una currícula que se mantenga al margen de las circunstancias que la condicionan y determinan, máxime cuando en materia de ciencias jurídicas la interrelación derecho-sociedad resulta indivisible. La evolución histórica hace a la necesidad de actualización del plan considerándola como determinante de sus nuevos contenidos y aproximaciones.

PRIMER AÑO - CICLO DE MATERIAS PROPEDÉUTICAS

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades
511	Introducción al Derecho	96 horas	-
512	Derecho Romano	96 horas	-
513	Derechos Humanos	72 horas	-
514	Historia Constitucional	96 horas	-

515	Introducción a la Sociología	72 horas	-
516	Derecho Político	96 horas	-

Para el primer año de la carrera, luego de un exhaustivo análisis de la realidad del Primer Año de nuestro Plan de Estudios y de los de otras Universidades Nacionales, creemos pertinente reformar cuatro puntos. En primer término incluir Derecho Romano en este ciclo inicial de materias propedéuticas, debido a que la realidad de los alumnos que ingresan a esta Casa de Altos Estudios nos muestra que el cursado de esta materia se realiza en el Primer Año, por el simple hecho de no ser necesaria la aprobación de materias correlativas para su cursado.

Como siguiente punto, estamos convencidos de que debe incorporarse a la currícula, la materia Derechos Humanos, que centralice el estudio de aquellas facultades, derechos, instituciones y reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Proponemos por consiguiente, la incorporación al Plan de Estudios de la materia Derechos Humanos con la modalidad de materia trimestral de 6 horas semanales.

En tercer lugar, creemos que la materia Introducción a la Sociología debe modificar su carga horaria, entendiendo que puede realizarse un estudio acabado de su contenido en 72 horas, a razón de un curso tritrimestral de 6 horas semanales.

Como última medida, luego de analizar los Planes de Estudios de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, advertimos que la materia Derecho Político se encuentra contenida al igual que en la actualidad de nuestro Plan de Estudios en el Primer Año de la carrera, pero en estas Universidades, Derecho Político no requiere la aprobación de ningún curso correlativo para cumplir con sus contenidos. Es por esto que planteamos que se quiten sus correlatividades, incluyéndola en el Ciclo de Materias Propedéuticas.

Para finalizar con el análisis del Primer Año, creemos de vital importancia, continuar garantizando el curso de las primeras materias, alcanzando también a las materias Derechos Humanos y Derecho Político. Proponemos esto ya que entendemos que al plantear la materia Derechos Humanos en la modalidad de curso trimestral, podrían dictarse tres cursos al año y que no sería dificultoso garantizar el cursado a los alumnos de primer año; en cuanto a Derecho Político también creemos que no existen obstáculos para garantizar el cursado de dicha materia a los alumnos del primer año debido a que en la actualidad existen 3 cátedras y 14 comisiones, arrojando como resultado una totalidad de 700 vacantes por cuatrimestre.

SEGUNDO AÑO

Código	Materia	Carga horaria	Correlatividades
521	Derecho Civil I - Parte General	144 horas	511 – 512
522	Derecho Constitucional	96 horas	513 - 514 – 516
523	Derecho Penal I - Parte General	144 horas	511 – 512
524	Derecho Público Provincial y Municipal	96 horas	522
525	Derecho Internacional Público	96 horas	522
526	Derecho Penal II - Parte Especial	96 horas	523 - 522

Para el segundo año de carrera proponemos 5 reformas estructurales. En primer término establecer como asignaturas correlativas de Derecho Constitucional las materias Derechos Humanos, Historia Constitucional y Derecho Político, entendiendo que son las tres materias del ciclo propedeutico que ostentan una vinculacion directa con el contenido que engloba Derecho Constitucional.

En segundo término entendemos que es innecesario que sea requisito la aprobación de Derecho Civil - Parte General para abarcar el estudio de Derecho Penal I, así lo advertimos en los planes de estudios de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales De Cuyo, Lomas De Zamora, Nordeste, Sur y Córdoba. Entendiendo que el estudio del Derecho Civil se enmarca dentro del ámbito del Derecho Privado, no encontramos un sentido pedagógico ni metodológico, para mantener esta correlatividad, ya que el derecho penal se sitúa dentro del espectro del derecho público. Al no encontrar fundamentos para la subsistencia de esta correlatividad entendemos que esta solo funciona como un obstáculo que entorpece el curso de la vida académica de los alumnos que pertenecemos a esta Casa de Altos Estudios.

Como tercera medida, estamos convencidos de la necesidad de trasladar la asignatura Derecho Civil II al tercer año del Plan de Estudios, lo cual fundamentaremos y desarrollaremos en el apartado del tercer año de la carrera.

Como cuarta reforma creemos pertinente incorporar dentro del segundo año de la carrera las materias Derecho Público Municipal y Provincial, Derecho Internacional Público y Derecho Penal II, atendiendo a las nuevas correlativas propuestas por el presente proyecto de Reforma del Plan de Estudios.

Continuando con el análisis de la materia Derecho Penal II, como anteriormente mencionamos, si entendemos que el Derecho Penal se enmarca en la órbita del Derecho Público, creemos de vital importancia para un correcto abordaje de la materia contar con los conocimientos del Derecho Constitucional, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, entendemos que es pertinente ubicar a Derecho Constitucional como correlativa anterior a Derecho Penal II – Parte Especial, y no es asi a Derecho Penal – Parte General ya que consideramos que por la manera en que proponemos que se disponga el nuevo regimen de correlatividades dentro del Plan de Estudios, entendemos que los alumnos que se encuentren cursando Derecho Constitucional, se encontraran cursando simultaneamente Derecho Penal I. Realizando un análisis por sobre la estrecha vinculación existente entre el contenido de ambas asignaturas, entendemos que atendiendo a objetivos estrictamente pedágogicos seria beneficioso para los estudiantes de la carrera de grado el hecho de abordar simultáneamente el contenidode ambas materias.

TERCER AÑO

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades
531	Derecho Civil II-Obligaciones	144 Horas	521
532	Filosofía Del Derecho	64 Horas	533
533	Derecho Procesal - Parte General	96 Horas	521 – 526
534	Derecho Civil III- Contratos	96 Horas	531
535	Economía Política	96 Horas	515 – 531

536	Sociología Jurídica	96 Horas	532

Para la disposición del Tercer Año del Plan de Estudios entendemos que aquí debe estar comprendido el estudio de Derecho Civil II, ya que por una cuestión las modificaciones propuestas en el ámbito de las correlatividades, creemos pertinente reubicar materias que estaban contenidas en el Tercer Año, hacia el Segundo, y vicecersa, asimismo entendemos que el hecho de que dentro de un mismo año se encuentren comprendidas 3 materias con una carga horaria de 144 horas, generaría una sobrecarga en el alumnado.

Al analizar la asignatura Economía Política, creemos que para un mejor abordaje de los contenidos de la materia es primordial contar con la aprobación de Derecho Civil II. La disposición actual de esta materia en el Plan de Estudios genera un conflicto pedagógico para afrontar el dictado de las clases por el cuerpo docente, ya que se encuentran habilitados para cursar Economía Política, alumnos que constan sólo con la aprobación de Introducción a la Sociología, así como también estudiantes avanzados en la carrera, que se encuentran próximos a graduarse, por este motivo entendemos que allí radica el "conflicto pedagógico" para el dictado de su contenido: la disparidad de conocimientos entre los alumnos. Luego de un exhaustivo debate, creemos que modificando sus correlativas, habría una mayor paridad de conocimientos entre los alumnos cursantes.

Al abordar la materia Filosofía del Derecho encontramos una incongruencia en cuanto a la manera en que están diagramadas sus correlatividades. Entendemos que el alumno comienza en su primer año de carrera abordando determinadas líneas de pensamiento, filosofías, doctrinas y teoremas; una vez finalizada la estapa inicial, el alumno continúa en el segundo año de carrera realizando un análisis por sobre dinstintos autores, líneas filosóficas, y corrientes de pensamiento; estamos convencidos que para que el alumno continúe abordando el desmembramiento de las distintas corrientes filosóficas de pensamiento sería pertinente y adecuado que inmediatamente despúes de realizar el abordaje de Derecho Penal I se continúe con Filosofía del Derecho para luego desembocar en el estudio de Sociología Juridica.

Al abordar el análisis de Planes de Estudios de diversas Universidades Nacionales encontramos que en su conformación existe la materia Derecho Procesal – Parte General. La teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procésales especiales. Considerando así mismo que la bibliografía utilizada por las cátedras para abordar dichos temas es la misma tanto en Procesal Penal como en Procesal Civil y Comercial. Por lo anteriormente explicado entendemos necesaria la incorporación de la materia Derecho Procesal – Parte General entendiendo que conllevaría mejoras pedagógicas en cuanto a lo referente a la teoría general del proceso.

CUARTO AÑO

Código	Materia	Carga horaria	Correlatividades
541	Derecho Civil IV - Derechos Reales	96 horas	534
542	Derecho Comercial I - Sociedades y Seguros	128 horas	534
543	Derecho Social del Trabajo y la Previsión	96 horas	522 – 534
544	Derecho Procesal Penal	96 Horas	533
545	Derecho Procesal Civil y Comercial	144 horas	533 – 534
546	Adaptación Profesional Procedimientos Penales	96 Horas	526 o 544 (*)
547	Adaptación Profesional Procedimientos Civiles y Comerciales	96 horas	533 o 534 - 545 (*)
548	Administrativo I	96 Horas	541 – 544

Para conformar de una manera idónea nuestro Cuarto Año del Plan de Estudios creemos de vital importancia realizar una reforma fundamental en cuanto a las materias necesarias para el correcto abordaje de Derecho Procesal Civil y Comercial. Al observar detenidamente los contenidos nucleados en esta materia entendemos que es fundamental haber completado la aprobación de Derecho Civil I - Parte General, Derecho Civil II y Derecho Civil III. De esta forma el estudiante contará con las herramientas necesarias para comprender el desarrollo de los Procedimientos Civiles y Comerciales. Asimismo entendemos que la manera en la que están planteadas estas correlativas nos presentan un plano en el cual el alumno que se encuentre cursando Derecho Procesal Civil y Comercial, estará cursando simultáneamente Derecho Civil IV y Derecho Comercial I, y vale aclarar que los contenidos de estas tres materias son conexos y sería adecuado pedagógicamente e idóneo para el estudiante desmembrar los contenidos de estas materias simultáneamente.

Continuando con la observancia de las materias exigidas para el cursado de Derecho Procesal Civil y Comercial, si contemplamos que es propuesta de los Consejeros de la Franja Morada la incorporación de la materia Derecho Procesal – Parte General, entendemos innecesaria la exigencia de Derecho Procesal Penal para estar en condiciones de aprobar Derecho Procesal Civil y Comercial.

(*)En cuanto a las Adaptaciones Profesionales, creemos pertinente realizar una distinción en cuanto al régimen de correlatividades conforme a la condición en que se apruebe dicha materia. Entendemos que la reglamentación vigente que contempla dichas materia es adecuada, exigiendo la correlativa inmediata anterior en el caso del cursado simultáneo de la teoráa y la práctica (ante la reforma propuesta la correlativa exigida seráa Procesal Parte General) y demandando la aprobación de la parte teórica en el caso de pretender cursar únicamente la Adaptación Profesional.

QUINTO AÑO

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades
551	Derecho Civil V - Familia, Minoridad y Niñez	96 horas	541
552	Derecho Comercial II	128 horas	542 - 545
553	Derecho Agrario	64 horas	548

554	Derecho Administrativo II	96 horas	548
555	Derecho de Minería y Energía	64 horas	548
556	Derecho de la Navegación Marítimo Fluvial y Aéreo	64 horas	552

Para Quinto Año de la carrera entendemos fundamental la realización de importantes reformas, para comenzar a concretar la sintesis final del conocimiento.

Como primera medida, consideramos que en Derecho Civil V por cuestiones pedagógicas y metodológicas solo debe abordarse los contenidos de Familia, minoridad y niñez; y entendemos necesaria la consagración de Derecho Civil VI como materia autónoma abordando las temáticas concernientes a "Las Sucesiones". Encontramos fundamento en dicha propuesta ya que el contenido del Derecho de Familia aborda particularmente las relaciones juridicas que giran entorno a una institución del Derecho Civil, la Familia. Por el contrario, el estudio del Derecho de las sucesiones encuentra un contenido principalmente patrimonial, y por este motivo que entendemos que dichas materias deben dictarse en forma independiente y autónoma.

Al analizar las asignaturas Derecho Agrario y Derecho de Minería y Energía entendemos que al incorporar la materia Derecho Ambiental dentro de la currícula es pertinente la quita de contenidos en ambas asignaturas, dejándolas delimitadas en materias cuatrimestrales de cuatro hora semanales, entendiendo que es una carga horaria adecuada para realizar un desarrollo pormenorizado de los contenidos de ambas materias.

SEXTO AÑO

Código	**Materia**	**Carga Horaria**	**Correlatividades**
561	Derecho Civil VI- Sucesiones	96 Horas	551
562	Finanzas y Derecho Financiero	96 Horas	535 - 554
563	Derecho Ambiental y Recursos Naturales	96 Horas	525 - 553 - 555
564	Derecho Internacional Privado	96 Horas	556 – 561
565	Derecho Notarial y Registral	96 Horas	561
566	Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos	96 Horas	545 - 551

En el Sexto año de la carrera creemos que deben englobarse las materias que sintetizan los conocimientos abarcados durante la carrera de grado.

Advertimos que en el plan de estudios de la Universidad Nacional De Cuyo, al igual que en la Universidad Nacional De Lomas De Zamora y la Universidad Nacional Del Litoral, el estudio del Derecho de las Sucesiones se realiza con independencia respecto del Derecho de Familia. Luego del diálogo mantenido por los consejeros de nuestra agrupación con docentes pertenecientes a las actuales cátedras de Derecho Civil V y de nuestra experiencia personal durante el cursado de la mencionada materia entendemos que en cuanto a los métodos pedagógicos empleados para el dictado y el abordaje de estos contenidos es de suma importancia que estos sean llevados a cabo por materias autónomas e independientes. [24]

Como segunda propuesta para el sexto año, creemos de gran importancia incorporar la asignatura Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Planteamos esto debido a que en los últimos años la evolución de la sociedad y por ende del derecho ha llegado a la síntesis de la consagración del Derecho Ambiental como una materia autónoma. Si analizamos el contenido de dicha materia en nuestro actual Plan de Estudios veremos que se encuentra diseminado en distintas materias de la carrera; atentando contra un correcto aprendizaje del Derecho Ambiental. Entendiendo que esta rama del derecho se encuentra en constante crecimiento, creemos que es primordial nuclear los contenidos del Derecho Ambiental y los Recursos Naturales en una materia autónoma. De esta manera podremos generar en los estudiantes un verdadero compromiso y concientización de las problemáticas que hoy nos aquejan como sociedad y, desmembran y generar un espíritu crítico respecto del tratamiento que el Derecho realiza respecto de ellas.

En tercer lugar creemos innecesaria la correlatividad actual de Derecho Comercial II respecto de Derecho Notarial y Registral, por eso proponemos suprimirla, ya que significa solamente un obstáculo al momento de avanzar en la carrera, sin existir una congruencia en lo académico.

Para finalizar, en sintonía con lo que venimos planteando de actualizar el contenido del Plan de Estudio, entendemos que es imperiosa la necesidad de incluir en la currícula de la carrera la asignatura Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos. En la actualidad vemos que han sido promulgadas nuevas leyes en cuanto a los métodos alternativos para la resolución de conflictos y que serán de pronta implementación para los procedimientos civiles, comerciales y laborales. Nuestro actual Plan de Estudios encuentra una falencia importante al no abarcar estos contenidos, y entendemos que nuestra currícula no puede ser ajena a la realidad que se nos presenta y por eso creemos de gran necesidad y de expedita implementación esta materia en nuestra carrera.

SEMINARIOS

Como militantes de Franja Morada entendemos que esta modalidad de aprendizaje es de suma importancia para el desarrollo de la ciencia y que encuentra basamento en un pilar fundamental de la REFORMA UNIVERSITARIA de 1918, LA INVESTIGACIÓN. Por este motivo es que proponemos la ampliación y estabilidad de los seminarios dictados. Creemos que la investigación no sólo hace a la excelencia académica por el estudio pormenorizado que la persona realiza sobre la temática a la que se encuentra avocado sino por el análisis crítico que puede llegar a hacer de la realidad a través del análisis de los hechos. Estamos convencidos de que el seminario debe ser el espacio en el cual los estudiantes podamos realizar una profundización sobre temas especifico de la carrera.

Entendemos que la investagación es el medio por excelencia para comprender los fenónemos sociales, y de esa manera generar el avance de la ciencia del derecho.

MATERIAS OPTATIVAS

[24] Remitimos al apartado correspondiente al 5° año de la carrera donde tambien fue abordado el tema.

Si bien sostenemos que la formación del abogado de la Universidad Nacional de La Plata debe conservar su visión integral y generalista sobre el derecho, estamos convencidos de que nuestro Plan de Estudios debe ofrecerle la posibilidad al estudiante de complementar los contenidos abarcados por este, brindándole la posibilidad de realizar un estudio acabado en ramas o temáticas específicas del derecho. Por este motivo es que propiciamos la implementación de Materias Optativas, tal como es contemplado en los Planes de Estudio de

Desde la Franja Morada, y debido a nuestra impronta reformista, entendemos y concebimos a la Educación como un derecho, y por este motivo creemos que dentro del ámbito del estudio de grado debe encontrarse garantizado el ánimo de formación del estudiante, abarcando el mayor espectro posible de áreas dentro del derecho. Como hacemos referencia justamente a temáticas específicas dentro de la ciencia del derecho, creemos que todos los estudiantes deben tener la libertad de poder optar en que rama del derecho especializarse, esta libertad debe ser garantizada por nuestra Casa de Altos Estudios en el ámbito de la Educación Pública.

En cuanto a la exigencia por sobre las materias optativas creemos que sería adecuado que sea obligatorio para alcanzar el título de grado, la aprobación de al menos dos (2) materias optativas.

Como requerimiento en general, en cuanto a sus correlatividades creemos indispensable la aprobación del 50% del Plan de Estudios; y exigiéndose correlativas específicas para cada asignatura optativa en especial.

Luego del análisis pormenorizado efectuado a los diferentes Planes de Estudio es que ponemos a consideración del Consejo Directivo y la Secretaría Académica la creación de las siguientes materias optativas:

Código	Materia	Correlatividades
5401	Ética de las Profesiones Jurídicas	544 – 545
5402	Criminología	544
5403	Idiomas - Comprendiendo Inglés, Italiano, Francés, Portugués y Chino	533 – 534
5404	Derechos de Género	551
5405	Comprensión y Producción de Discurso	532
5406	Historia del Derecho – Evolución de las Instituciones	533 - 551
5407	Derecho Deportivo	542
5408	Derecho y Tecnología de la Información	542
5409	Derecho de la Integración	525 – 535
5410	Relaciones Internacionales	525
5411	Derechos del Usuario y el Consumidor	542
5412	Taller de Jurisprudencia	533
5413	Derecho Bancario y Bursátil	535 - 552
5414	Historia de las Instituciones Argentinas	521 – 522
5415	Partidos Políticos y Sistemas Electorales	516
5416	Globalización y Desarrollo	525 – 535
5417	Derecho de Daños	531
5418	Derecho Cooperativo y Mutuario	543
5419	Políticas Públicas y Desarrollo Local	524
5420	Derechos Intelectuales e Industriales	542
5421	Responsabilidad Civil Profesional	531 – 533
5422	Instituciones del Common Law	511
5423	Ecología Jurídica	525 - 553 – 525
5424	Análisis Biotecnológico de las Relaciones Jurídicas	545
5425	Estudio Pormenorizado de la Evolución del Derecho con las diferentes Formas de Estado	511 - 522
5426	Derecho Constitucional Bonaerense	524
5427	Régimen Jurídico de las Comunicaciones	542
5428	Medicina Legal	531 – 526
5429	Derecho Aduanero	556
5430	Derecho Constitucional Comparado	522
5431	Derecho de los Pueblos Indígenas – Comprendiendo Propiedad Comunitaria y el respeto a su Etnia y Cultura	522 – 541

PRÁCTICA PROFESIONAL FINAL

Como Agrupación Reformista entendiendo que es de vital importancia a través de la EXTENSIÓN UNIVERSITARIA la integración y profundización del rol social del estudiante, creemos menester afianzar los conocimientos en la órbita de la práctica profesional.

Cuando los consejeros directivos debatimos en las comisiones conformadas para analizar el actual Plan de Estudios, hubo una opinión que fue unánime y especialmente tratada por la Comisión de Prácticas Profesionales: la formación en el ámbito de la práctica profesional arroja falencias y deficiencias en el desempeño laboral de nuestros graduados.

El estudiante de nuestra Facultad forma parte de la Universidad Pública y por consiguiente, su formación no puede ser ajena a la sociedad que lo rodea. Estamos convencidos de que a través de la Práctica Profesional podemos establecer una retroalimentación entre los estudiantes universitarios y la sociedad, en la cual los estudiantes le devolvemos al pueblo la oportunidad que se nos brinda de estudiar en una Universidad Pública, y a través de ésta se nos permite profundizar el aprendizaje practico mediante el contacto con casos reales donde aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.

Como dijo el fundador de nuestra universidad: *"Una universidad moderna que no toma en cuenta el problema social es una universidad exótica, y sus fuerzas se perderán en el vacío si no la dirige a procurar la armonía suprema sobre la que se asienta la humana convivencia"*

Para la implementación de la Práctica Profesional Final (PPF), proponemos que los estudiantes que hayan alcanzado la aprobación de las asignaturas Derecho Procesal Civil y Comercial, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil V y Derecho Social del Trabajo y la Previsión realicen un trabajo articulado con las Clínicas y los

Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad a los fines de alcanzar una mejor formación en el ámbito del desempeño profesional.

Para su implementación proponemos una profunda articulación con la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad, que en los últimos años ha venido trabajando en la generación de nuevos ámbitos de inclusión estudiantil en el marco de Proyectos de Extensión. Todos los programas y proyectos de Extensión impulsados por esta Secretaria han sido pensados desde la gratuidad para sus beneficiarios, teniendo en cuento las dificultades que deben afrontar grandes sectores de la sociedad para acceder a la justicia y a información que te permita conocer la existencia y alcance de sus derechos civiles y políticos.

La función especializada de patrocinio y asistencia jurídica a sido pensada en función de hacer posible la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera de grado. En este sentido asignaturas tales como Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Social y Laboral, Derecho Comercial, y Sociología Jurídica entre otras, resultan de inmediata aplicación en los pasos abordados a los distintos programas y proyectos.

En la actualidad la Secretaria de Extensión cuenta con 17 consultorios jurídicos en 15 barrios de la ciudad de La Plata. En cada consultorio jurídico interviene un equipo de trabajo dirigido por un abogado mentor experimentado en el ejercicio de la profesión. En este ámbito el estudiante encontrara un espacio en el cual desarrollar sus conocimientos entorno a la práctica y ejercicio liberal de la profesión, teniendo un primer contacto con casos reales de aplicación práctica de la Ciencia del Derecho.

En correlación con lo anteriormente expuesto es que proponemos para la implementación de la PPF que no solo se considere la realización de esta en los consultorios jurídicos sino también en los demás programas llevados acabos desde la Secretaria de Extensión, a saber:

- En las clínicas jurídicas a diferencia de los consultorios en los cuales se afrontan los casos a nivel individual realizan un abordaje de la problemática social de manera colectiva. La similitud que presenta con los consultorios jurídicos gratuitos es que los estudiantes se encuentran bajo la tutela de un abogado mentor, que será el responsable de orientar a los alumnos a la búsqueda del saber.
  Las clínicas jurídicas configuran una metodología de enseñanza diferente a la tradicional ligada a lo colectivo y a la paridad entre los integrantes de los equipos de trabajo, que se basan en la confianza y la colaboración. Entre sus objetivos se encuentra el de prestar servicios jurídicos específicos que tiendan a modificar las practicas que obstaculizan la protección de derechos fundamentales, cuando está comprometido el interés público. En la actualidad contamos con 4 clínicas jurídicas que abordan temáticas especificas: Derechos Humanos, Derechos de Consumidor, Derecho Ambiental y Derecho de Acceso a la Información Pública
- A través de la implementación del *programa "Derechos de las personas con padecimientos mentales"*, se promueve la integración de los sujetos con padecimientos mentales en la comunidad identificando las dificultades que tienen para acceder a la justicia y propiciando el respeto de los Derechos Humanos.
- Desde el programa *"Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas"* se tiene como principal objetivo trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de Derechos Humanos en relación a la niñez, desde el encuentro y el trabajo concreto con los niños en situación de calle en la ciudad de La Plata. El mismo cuenta con un consultorio jurídico y un área de investigación y construcción de herramientas de exigibilidad colectiva. Entendemos que la participación en este programa bajo la supervisación de un abogado ayo es un medio propicio para la realización de la PPF.
- Otro de los proyectos de Extensión Universitaria en el cual entendemos que sería propicia la realización de la PPF es el programa *"Centro de Atención Jurídica para Pacientes con HIV"* su principal objetivo es tutelar de manera efectiva el Derecho a la Salud facilitando el acceso a la justicia de las personas con VIH/SIDA mediante de la atención jurídica gratuita.
- Finalmente proponemos la integración dentro de la PPF del *"Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares"* cuya misión comprende la evacuación de consultas y el patrocinio de personas de escasos recursos, estableciendo mecanismo para facilita el acceso a la justicia. A su vez el centro de atención propone un ámbito de asesoramiento legal con el fin último de mejorarla calidad de vida de los productores/trabajadores de la región.

Más allá de la modalidad que sea finalmente utilizada para la implementación de la PPF, creemos indispensable fijar ciertos criterios para la delimitación de ella.

Ésta siempre debe realizarse en miras a los fines altruistas con que fue propuesta: la FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE en el ámbito de la parte práctica de la carrera de grado, y la RETRIBUCIÓN HACIA LA SOCIEDAD.

Es inconcebible que la PPF sea funcional a las necesidades e intereses del mercado. Entendemos que la realización de la PPF ostenta como objetivo inmediato la profundización en el conocimiento de "campo" en el ámbito de la ciencia jurídica, y en consecuencia proponemos que la PPF sea el medio de adquirir el conocimiento práctico de la carrera manteniendo al margen la realización de esta práctica dentro de organismos del estado o de entes privados. Atendiendo esto es que reiteramos que los objetivos de la PPF son la formación del estudiante no solo a nivel académico si no también en la órbita de su espíritu y su rol social .

ANEXO

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SE DEBEN COMPRENDER DENTRO DE CADA ASIGNATURA

Introducción al Derecho

En esta asignatura inicial a la carrera, los contenidos que se abarcan son introductorios al estudio de la ciencia del derecho. En este sentido, se analizan los elementos básicos que acompañarán al estudiante durante toda la carrera (noción de norma, constitución, hecho, acción, valores, ética y moral), a la vez que se realiza una aproximación a las corrientes iusfilosóficas que conciben al derecho de diversas formas.

Derecho Romano

Siendo el Derecho Romano la raíz histórica a la que se remonta nuestro derecho argentino, es imperioso su estudio, por cuanto muchas de las instituciones hoy vigentes encuentran sus orígenes en este derecho histórico, que ha ido evolucionando, dejando sus rastros en el derecho continental europeo, que luego

ha ejercido su influencia sobre nuestro país y nuestro derecho. En esta materia se abarcará el estudio de la evolución histórica de Roma, su derecho e instituciones.

Derechos Humanos

En esta materia deberán dictarse la evolución histórica y el reconocimiento en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sus fundamentos y principios básicos y el tratamiento que la Constitución Nacional realiza sobre ellos.

Historia Constitucional

Esta materia recorre la historia argentina desde la colonización hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853 como corolario de la organización nacional gestada a partir de la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia de 1816, haciendo especial hincapié en los sucesos determinantes de la misma, así como en sus documentos, antecedentes y pactos preexistentes. A la vez recorre los sucesos históricos posteriores que llevaron a modificar la Constitución Nacional en numerosas oportunidades, siendo la última reforma la de 1994.

Introducción a la Sociología

Esta asignatura acerca nociones básicas de todas las ciencias sociales en general, y siendo que la carrera se denomina "Ciencias Jurídicas y Sociales" no es menor la influencia de estos elementos sociológicos en el derecho, por cuanto es la sociedad la determinante de lo que el derecho receptara en sus normas. En ese sentido, es primordial la caracterización de elementos como grupo social, grupos de presión, grupos de influencia, etc.

Derecho Político

El derecho es una ciencia basada fundamentalmente en leyes. Esas leyes son producto de la actividad legislativa de aquellos que fueron electos mediante el voto para representar a la sociedad. Es innegable la vinculación del derecho con la política, por cuanto sin ésta no existiría aquel. En esta asignatura se estudian las distintas teorías políticas históricas, desde Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau analizándolas a la luz de la inflencia que han ejercido en el desarrollo de la política argentina, el surgimiento de los partidos políticos y la consagración de las instituciones en el ámbito del Derecho Político.

Derecho Civil I

En esta asignatura se abordaran los elementos introductorios al derecho civil. El estudio de esta primer materia codificada ejercerá su influencia a lo largo de las demás materias de la currícula, por cuanto abarca el estudio de conceptos esenciales cuales son las nociones de persona, capacidad, domicilio, acto jurídico, hecho jurídico, ineficacia, nulidad, plazos, prescripción, caducidad, entre otros conceptos básicos que hacen a la ciencia del derecho en su conjunto, considerando que el derecho civil es la rama residual donde confluyen las demás ramas del derecho ante la ausencia de normativa específica.

Derecho Constitucional

Esta asignatura aborda el estudio del eje fundamental del derecho argentino, la Constitución Nacional. El análisis que se realiza ya no es desde un punto de vista histórico, sino más bien pragmático, realizando un desarrollo de su contenido, sus disposiciones y, desde 1994, la influencia que los tratados internacionales han venido a traer al adquirir jerarquía constitucional.

La forma representativa y republicana de gobierno, y federal de Estado halla su consagración en esta Constitución, de allí la importancia de su estudio pormenorizado como forma de asegurar su observancia, haciéndose hincapié en el grado de jerarquía que ostenta por sobre las demás normas, las cuales no pueden contradecirla sin tornarse inconstitucionales.

Derecho Penal I

En esta asignatura se abarcan desde un aspecto filosófico dos ejes centrales del derecho penal: la teoría de la pena (que se entiende por pena, los fines de la pena, los tipos de pena) y la teoría del delito (sus elementos distintivos a partir de las distintas escuelas de derecho penal que la condicionan).

Derecho Público Provincial y Municipal

El contenido de esta materia gira en torno al Estado Federal Argentino, la soberanía, autonomía, y autarquía. La descentralización política, burocrática y administrativa, con especial énfasis en la organización de los estados provinciales y municipales, sus competencias, atribuciones y deberes.

Derecho Internacional Público

Esta materia se centra en el abordaje del surgimiento de la sociedad internacional, su relación con el derecho interno, las organizaciones que lo rigen, la resolución de conflictos y el derecho supranacional en el Estado Argentino. Se pone especial énfasis a la manera en que los distintos Estados establecen vínculos económicos y políticos en el ámbito internacional y como el derecho internacional público busca establecer un equilibrio en la correlación de fuerzas entre estados.

Derecho Penal II

En esta asignatura se analiza la existencia de delito a partir de los elementos aprendidos en la asignatura correlativa anterior, mediante la aplicación de ellos a casos concretos, para determinar la existencia o no de delito, sus formas de agravamiento, atenuación y eximición, a partir de la estricta sujeción a la ley conforme lo establecen las pautas del derecho penal, pero con gran influencia doctrinal a la hora de hacer una correcta interpretación de la norma.

Derecho Civil II

Esta asignatura abarca el estudio de las relaciones jurídicas, los sujetos involucrados, sus objetos permitidos, sus modalidades, sus clasificaciones y sus consecuencias prácticas, a la vez que las modalidades de extinción. Abarca, a su vez, el estudio de la responsabilidad civil, con el enorme desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ello implica, entendiéndose que la noción de responsabilidad constituye el eje fundamental del derecho civil, por cuanto dará origen a las acciones de reclamación pertinentes, cuyo ejercicio se desarrollará en asignaturas posteriores.

Filosofía del Derecho

Esta asignatura propone el estudio de corrientes iusfilosóficas que han influenciado a la ciencia del derecho y que han delimitado su existencia actual, a la vez que propicia el estudio de nuevas corrientes que analizan el fenómeno jurídico desde diferentes perspectivas considerando sus mecanismos, sus fines y su realidad concreta, favoreciendo un análisis crítico a la luz de nuevas cosmovisiones del derecho y entendiendo al derecho como fenomeno complejo fruto de una constante evolución filosófica.

Derecho Procesal Parte General

El contenido de esta materia deberá abarcar el proceso judicial junto a las teorías unificadoras del proceso, los principios procesales, jurisdicción, acción, actos procesales, preclusión, cosa juzgada, sentencia y la organización del poder judicial.

Derecho Civil III

Esta asignatura centra su contenido en los contratos civiles, entendidos como los acuerdos de voluntades destinados a regir relaciones jurídicas de contenido patrimonial conforme lo dispone el art. 1137 del Código Civil. Se abordan las modalidades propias de los contratos, sus elementos tipificantes, los elementos residuales ante ausencia de previsión de las partes (autonomía de la voluntad), sus formalidades, requisitos, sujetos y formas de conclusión.

Economía Política

El derecho como consecuencia de los acontecimientos sociales que lo determinan, no puede estar ajeno a la influencia que la economía implica en el marco de una sociedad. Entender las distintas teorías que explican los fenómenos económicos y su participación en el mercado es trascendental a la hora de desarrollar una legislación que ampare y proteja a la sociedad de los factores económicos desfavorables. También resulta indispensable el manejo de terminología propia que se vuelve recurrente en las relaciones jurídicas, tales como la noción de dinero, oferta, demanda.

Sociología Jurídica

En esta asignatura se estudian distintas corrientes sociológicas que han ido influenciando el desarrollo del derecho tal como lo concebimos, a partir de la determinación de sus fines y mecanismos, el rol social del derecho, y su forma de actuación. También se analizan distintas escuelas criminológicas, filosoficas, y economicas que repercuten en la concepción del derecho.

Derecho Civil IV

En esta asignatura se abordan las instituciones del derecho civil relativas a los derechos reales. Por ellos se entiende que se trata de los derechos que vinculan a las personas con las cosas. En ese sentido y atendiendo a la mayor o menor vinculación de la persona con la cosa, es que se aplicarán institutos diversos, todos los cuales se encuentran taxativamente (numerus clausus) descriptos en el Libro III del Código Civil (usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda, entre otros.)

Derecho Comercial I

Deberán estar contenidos en el marco del estudio de esta materia todo lo concerniente al Código de Comercio y las leyes mercantiles, sus fuentes, los actos de comercio, la empresa y la organización del Registro Público; las sociedades comerciales, a saber, los derechos y obligaciones de los socios entre sí, frente a la sociedad y terceros, la regulación en el derecho interno y en las sociedad constituidas en el extranjero que actúan en el territorio del Estado Nacional. Asimismo deberá darse tratamiento al régimen del contrato de seguros, derechos y obligaciones de las partes, y las regulaciones específicas de los seguros.

Derecho Social del Trabajo y la Previsión

Esta asignatura tiene un doble objeto: por un lado abordar el tratamiento de la legislación previsional, a través del estudio de los organismos encargados de administrar y otorgar pensiones y jubilaciones y por otro, el estudio de la legislación laboral, fundamentalmente a partir del estudio de la ley 20.744 de contrato de trabajo, sus disposiciones de orden público indisponibles y su fuero especializado.

Derecho Procesal Penal

En esta asignatura se aborda el acceso a la jurisdicción penal, la instrucción de un proceso a partir de la reforma del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires el 1998, a través de una Instrucción Penal Preparatoria y luego un juicio oral con las notas de celeridad e inmediatez que dicho proceso amerita, considerando los intereses que se hallan en juego.

Derecho Procesal II

El contenido de esta materia abarca la regulación del procedimiento judicial en la Provincia de Buenos Aires en la materia civil y comercial, en materia laboral, en materia contencioso- administrativa e incluso en lo que a la materia recursiva respecta, tanto ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires como ante la Corte de Justicia de la Nación.

Derecho Administrativo I

En esta asignatura se abordan temáticas introductorias al derecho de la administración. A partir de la diferenciación entre atribuciones estadudales legislativas -propias del Congreso-, judiciales -propias del poder judicial- y administrativas -propias del poder ejecutivo-, esta asignatura abarca estas últimas facultades estaduales y realizando una introducción al proceder de la administración entendido como actividad del poder ejecutivo y entes descentralizados bajo su órbita.

Derecho Civil V

Esta asignatura abarca el estudio del derecho civil , pero ya no entendido como derecho privado, sino como derecho de familia, de marcado contenido de orden público que justifica la intervención del Estado sobre ciertas relaciones de los particulares. En ese sentido se abordan cuestiones como las relaciones de familia, régimen del matrimonio, patria potestad, adopción, obligaciones y deberes familiares, acciones de familia, entre otros institutos caracterizantes de esta rama del derecho.

Derecho Comercial II

En esta asignatura el estudio se centra en dos ejes. En primer lugar, la asignatura desarrolla el proceso concursal en su doble faz: preventivo y liquidativo, como instancia consecuente al imcumplimiento obligacional generalizado y permanente (Estado de Cesación de Pagos). Por otro lado, la asignatura aborda la temática de los títulos de crédito, instrumentos de intercambio comercial con sus particularidades y regímenes propios.

Derecho Agrario

Esta asignatura abarca el estudio de los institutos propios del derecho agrario, es decir, aquellos que operan en la actividad agraria entendida como la intervencion del hombre en el ciclo productivo con el objeto de obtener frutos como consecuencia de esa intervencion.

Derecho Administrativo II

En esta asignatura se estudia tanto el procedimiento administrativo como el proceso administrativo en instancia judicial luego de agotada la via administrativa previa. En este sentido, son de aplicacion los conceptos estudiados en Derecho Administrativo I, de modo de entender las etapas de elaboracion de un acto administrativo, las formas de impugnarlo y las formas de someterlo a la jurisdiccion en caso de conflicto. Por otro lado, tambien se estudia la actividad administrativa desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, es decir, los casos en que debe responder por su actuar o su omitir tanto licito como ilicito.

Derecho de la Mineria y Energia

En esta asignatura se debera estudiar el conjuto de normas juridicas que regulan las conseciones exclusivas para explorar o explotar las sustancias generales que son de aprovechamiento de cualquier persona, regulando tanto en su constitucion, naturaleza, ejercicio y extincion asi como los actos, contratos y litigios que se refieran a el.

Derecho de la Navegación Marítimo, Fluvial y Aéreo

En esta materia deben hallarse comprendidos el estudio de la legislación interna y los difrentes tratados y convenciones concernientes a la navegación aeronaútica, fluvial, marítima y espacial. La delimitación de los sujetos y su implicancia en el ámbito del derecho internacional. La regulación legal de sus contratos, delitos y faltas.

Derecho Civil VI – Sucesiones

Deberá completarse el análisis de la posesión y transmisión hereditaria, la competencia y capacidad para suceder los derechos y obligaciones del herederos, la indivisión hereditaria, los métodos de partición de la herencia, los distintos tipos de sucesiones, el principio general del orden sucesorio, la legítima, los testamentos y sus distintas modalidades, la institución y sustitución de herederos, el fidecomiso testamentario, la ineficacia de las disposiciones testamentarias y demás cuestiones referente al derecho de las sucesiones.

Finanzas y Derecho Financiero

Esta asignatura deberá comprender el concepto de finazas públicas, tributo, poder tributario nacional, provincial y municipal, gasto público, crédito público, presupuesto estatal, impuestos, tasas y contribuciones especiales, los efectos económicos y jurídicos de los impuestos, la coparticipación, el empréstito forzoso, así como también los principios constitucionales de la tributación, los límites constitucionales al poder de imposición y la juricidad de la norma tributaria.

Derecho Ambiental y Recursos Naturales

Se abordan temáticas propias del derecho ambiental, a partir del estudio de legislación tutelar del mismo, cual es el caso de las reservas naturales a la vez que las leyes de presupuestos mínimos surgidos al amparo de la manda constitucional del art. 41 y su correlato con el art. 124. Se deberán abarcar la regulación jurídica de los recursos naturales, su enumeración e identifiación. Así mismo deberá comprender la diversidad biológica faunística, recurso natural y cultural; el daño ambiental la responsabilidad civil, la resposabilidad colectiva y la responsabilidad penal; los delitos ecológicos, la evaluación del impacto ambiental y las medidas precautorias.

Derecho Internacional Privado

En esta asignatura se analizan los institutos del derecho privado previamente estudiados a lo largo de la carrera, caracterizados por la intervención de agentes de distinta nacionalidad, o bien de la misma nacionalidad situados en países diferentes, lo cual hace necesaria la intervención de normativa supranacional para venir a regular estas relaciones jurídicas, lo cual en la praxis esta dado por los tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina con países extranjeros.

Derecho Notarial y Registral

Esta materia deberá abarcar todo lo concerniente al formalismo en el derecho, las clases de instrumentos, la fe pública, el valor probatorio del instrumento público, dedicándole un especial tratamiento a la escritura pública, así como también la función notarial, su ejercicio y responsabilidad. En cuanto a lo que el derecho registral respecta deberá explayarse acerca de las características del sistema registral argentino.

Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos

En esta nueva materia deberán comprenderse la teoría general del conflicto, la mediación, la negociación y el arbitraje, la legislación interna concerniente a estas y su tratamiento en el Derecho Internacional.

Salvedad respecto de la implementación del Primer Año de Carrera

En la actualidad los alumnos ingresantes a la carrera se encuentran contenidos dentro del Régimen que garantiza el cursado de las primeras cuatro materias de la carrera (Introducción al Derecho, Historia Constitucional, Introducción a la Sociología y Derecho Romano). Desde la FRANJA MORADA entendemos que es necesaria la aplicación de políticas tendientes a contener a los alumnos de primer año entendemos que este derecho adquirido no solo debe ser garantizado sino que también debe sufrir una adaptación conforme al plan de estudios propuesto por nuestros consejeros.

Atendiendo a lo anteriormente explicado es que proponemos que a los alumnos ingresantes a la carrera se les contemple el beneficio de cursar las seis materias contenidas dentro del primer año del plan de estudios. Así mismo y como propuesta novedosa proponemos que el cursado de estas no esté librado únicamente al azar sino que debe comprenderse estas materias en dos bloques. El primero conteniendo Introducción al Derecho, Derecho Romano y Introducción a la Sociología; y el segundo englobando las materias Historia Constitucional, Derecho Político y Derechos Humanos. Esta determinación cobra significado ya que entendemos que el cursado de las materias comprendidas en los bloques debe ser simultáneo ateniendo a fines pedagógicos. De esta manera el estudiante que curse durante el primer cuatrimestre de su primer año Derecho Romano deberá cursar simultáneamente Introducción al Derecho e Introducción a la Sociología, debiendo soslayar para el segundo cuatrimestre el cursado de las tres materias contenidas en el segundo bloque anunciado anteriormente.

CONSIDERACIONES GREMIALES

Desde la agrupación FRANJA MORADA y como representantes del claustro estudiantil los consejeros demandamos una serie de puntos que creemos ineludibles:

- Que la aplicación del nuevo Plan de Estudios no puede ser bajo ningún punto de vista de aplicación retroactiva, entendiendo que es un derecho adquirido de los estudiantes ya inscriptos en la carrera su apego al Plan de Estudios actualmente vigente aprobado por resolución del Honorable Consejo Académico de fecha 10 de Marzo de 1989. Asimismo exigimos que no se establezcan plazos para el alcance del cumplimiento de la aprobación de la totalidad de las materias requeridas para el titulo de grado.
- Que todos los estudiantes inscriptos con anterioridad a la presente reforma del Plan de Estudios tengan la posibilidad de realizar las materias que se incorporen al nuevo plan.
- Que se respeten los nueve turnos de Mesas de Examen libre y su correspondiente reglamentación vigente.
- Que bajo ningún punto de vista podrán considerar el Honorable Consejo Directivo la quita del curso por promoción debiéndose respetar la reglamentación vigente.
- Que de ninguna manera el nuevo Plan de Estudios puede encontrarse alejado del espíritu Reformista, respetando la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, la periodicidad de los concursos, la extensión universitaria, la investigación, el laicismo y por sobre todas las cosas garantizar el acceso irrestricto a la EDUCACCION PUBLICA y de excelencia académica consagrado en el estatuto de la Universidad Nacional de la Plata.

PROYECTO N. 66. Autor: MONTERO LABAT Edwin (*)Profesor de la asignatutra Derecho Civil II y MONTERO LABAT Evangelina(**), Profesora de Ciencias de la Educación, proponen proyecto integral de reforma al plan de estudios de la carrera de abogacía.

"La extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho"

I.- Introducción

La propuesta tiene como objetivo considerar la incorporación de la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho en el marco del "Programa para análisis, evaluación y propuestas para la Reforma del Plan de Estudios" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Para ello, destacamos en primer término que el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata incorpora a la extensión como pilar de la Educación Superior y la sitúa en pie de igualdad junto a la docencia e investigación.

En segundo lugar, comentaremos brevemente la metodología de la enseñanza que actualmente se implementa en nuestra Casa de Estudios.

Finalmente plantearemos a la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho y para ello tendremos en cuenta las experiencias derivadas de la ejecución de distintos programas y proyectos de extensión universitaria ejecutados por la Secretaria de Extensión Universitaria de esta Unidad Académica durante los años 2007/2010.

En este marco bosquejaremos algunos aspectos a modo de interrogantes que consideramos centrales a la hora de pensar en los procesos de enseñanza del derecho.

Por último, formularemos los enunciados que pretendemos operen como recomendaciones u orientaciones para la revisión y modificación de los componentes disciplinares, pedagógicos y didácticos que conforman la currícula actual.

II.- La Extensión y la Educación Superior Universitaria

El Estatuto de la Universidad contiene innumerables normas mediante las cuales se reconoce a la extensión universitaria como pilar de la educación superior.

Así, entre otras, podemos citar las siguientes:

Preámbulo. …La UNLP reconoce como funciones primordiales el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la extensión.…La tercera, debatida y consensuada con el conjunto de la comunidad, perseguirá contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables por no tener sus derechos esenciales garantizados. La Extensión Universitaria será el principal medio de la Universidad Nacional de La Plata para lograr su función social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural.

…TÍTULO II

…FUNCIONES …CAPÍTULO III: de la Extensión

ARTICULO 17º: La Universidad reconoce como una de sus funciones primordiales la extensión universitaria, entendida como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social. Acordará en consecuencia las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de extensión que realicen los miembros de su personal docente, no docente, graduados y estudiantes que suelen ser originados por la detección de necesidades específicas…

ARTÍCULO 28º: Tienen las siguientes obligaciones docentes: dictar y dirigir la enseñanza teórico-práctica de su asignatura; dictar cursos parciales o completos de su especialidad; realizar al menos alguna de las siguientes actividades: investigación y extensión; participar en seminarios o reuniones cientificas de su cátedra, departamento o instituto.

ARTÍCULO 30º: El Consejo Directivo, por dos tercios de votos de los presentes, podrá eximir al profesor del dictado de la cátedra para que dedique su tiempo a la investigación y/o la extensión, desarrolle cursos de especialización, dirija seminarios o atienda cuestiones de fundamental interés para la Universidad. Esta eximición deberá ser renovada anualmente.

En tanto, cabe resaltar que el anterior Consejo Directivo de esta Casa de Estudio y el actual, han declarado en varias oportunidades de interés académico a diversas jornadas, programas y proyectos implementados desde la Secretaria de Extensión de esta Unidad.

Todo lo dicho, pone de manifiesto la relevancia académica que cobran las actividades extensionistas no sólo en la Universidad en general, sino, en nuestra Facultad en particular.

En esta línea, desde el momento de la fundación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, se habían considerado y desarrollado acciones de extensión.

Las mismas se correspondían con el modelo culturalista, ya que había espacios para actividades teatrales o musicales, y se realizaban conferencias o seminarios donde se invitaban como expositores a grandes eminencias de las ciencias jurídicas del momento, principalmente europeos.

Durante el período que se denominó la segunda generación de las reformas, etapa que se extiende entre los cincuenta y los ochenta, se implementan reformas en toda Latinoamérica, con un fuerte contenido exógeno en relación con los modelos de la universidad que se promueve, las notas características fueron la expansión del número de estudiantes, docentes e instituciones (Krotsch, 2001).

Lamentablemente, no hemos conseguido datos sobre esta segunda etapa en la Facultad de Derecho de la UNLP, por esta razón carecemos de información sobre las posibles actividades de extensión en ese período.

Sin embargo mencionaremos que, a partir de los años sesenta, la universidad fue criticada porque no movilizaba sus conocimientos acumulados a favor de las soluciones de los problemas sociales, surge así una vertiente de orientación social y política que reivindica la "responsabilidad social de la universidad". El movimiento estudiantil fue el portavoz más radical de estas reivindicaciones (de Sousa Santos, 1998).

En los ochenta, se abre una nueva etapa de la política universitaria, denominada "década perdida" social y económicamente, de retorno a la democracia en muchos países, de crisis fiscal, ajuste y privatizaciones

(Krotsch, 2001).

Con lo cual las actividades extensionistas estuvieron prácticamente ausentes en esta unidad académica.

Así, durante el denominado proceso de normalización de la UNLP que se produjo en 1983, no se registran actividades en el área de extensión ya que las prioridades de reorganización o normalización estaban destinadas a las políticas de ingreso, provisión de cargos y concursos docentes.

Sin embargo en las últimas dos décadas se ha detectado una motorización que fomenta la participación de alumnos y recién graduados, en actividades de extensión que se puede constatar mediante las constantes convocatorias de la Secretaría de Extensión.

Una de las modalidades adoptadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, es la participación en los proyectos y programas de extensión que convoca periódicamente la Universidad.

Según surge del Reglamento de Proyectos de Extensión de la UNLP, los Proyectos de Extensión son instrumentos de planificación a través de los cuales se generan procesos de educación no formal, donde las Unidades Académicas a través de los conocimientos acumulados y la capacidad de sus docentes, investigadores, alumnos, no docentes comparten con la comunidad a la cual van dirigidos, los esfuerzos de transformación social y cultural, divulgación científica, desarrollo tecnológico, desarrollo comunitario que permita a la sociedad mejorar su calidad de vida.

Puede contener acciones de transferencia o difusión de conocimientos y además en la interacción universidad–sociedad, procesos de formación de nuevos saberes que complementen los generados en los ámbitos académicos y permitan la efectiva participación de los actores involucrados.

Los proyectos de Extensión comprenden un conjunto de acciones planificadas destinadas a producir y desarrollar cambios de un aspecto, tema o área determinada.

Tomando como base la cantidad de proyectos de extensión universitaria presentados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el período 2007-2010, en las convocatorias anuales formuladas por la UNLP, tenemos los siguientes datos:

Año	Proyectos Presentados	Subsidiado	Unidad ejecutora
2007	10	6	Ciencias jurídicas: 1 Periodismo: 3 Trabajo Social: 1 Humanidades:1 Ciencias agrarias: 1
2008	14	6	Ciencias jurídicas: 2 Periodismo: 3 Trabajo Social: 1
2009	21	9	Ciencias jurídicas: 1 Periodismo: 3 Trabajo Social: 2 Humanidades:2 Ciencias agrarias: 1
2010	36	sin registro de datos	sin registro de datos

En cuanto al número de proyectos presentados es notable un crecimiento progresivo en la cantidad de propuestas de 10 en el 2007 subió a 36 en el 2010, lo que implica una numerosa participación de los actores que conforman la comunidad educativo (estudiantes, alumnos, docentes).

Ahora bien, según el tipo actividades que la UNLP considera como propias de la extensión universitaria se pueden señalar las siguientes:

- **Transferencia**: definidas como actividades sistemáticas que transfieren al entorno extrainstitucional los conocimientos y las experiencias producidos por la investigación mediante su aplicación o adaptación.
- **Formativas:** son las actividades de grado que mediante la capacitación, prevención, orientación, información y difusión o asesoramiento a la comunidad, permitan complementar con la práctica, la formación teórica curricular.
- **Sociales:** definida como una modalidad de la extensión caracterizada por acciones y actividades, que aporten un beneficio a las comunidades de la región y del país, como forma de contribuir a la resolución de necesidades y problemas concretos.
- **Académicas**: comprenden las actividades de tipo académico como los cursos libres de capacitación, la educación continua o de actualización, las actividades de información y difusión científico-tecnológica, que permitan hacer accesible a los diversos sectores que lo requieren, el conocimiento que produce y sistematiza la universidad.
- **Culturales**: las actividades culturales y deportivas.

III.- Las principales actividades de Extensión Universitaria en nuestra Unidad Académica

Como señalamos en el capítulo anterior, luego del proceso de normalización iniciado en 1983, las actividades de extensión en esta facultad no fueron significativas.

Recién se registra un paso importante con el lanzamiento del Programa de Consultorios Jurídicos Gratuitos, en el año 1994.

En efecto, para aquella fecha, se puso en funcionamiento el primer consultorio jurídico en el barrio de Villa Elvira de esta ciudad.

Este programa de atención jurídica fue ideado y dirigido por el Profesor José María De Rosa, sobre bases teóricas muy sólidas y con una prospectiva de integración con la comunidad que resultó por demás fructífera y aleccionadora.

Los dos pilares sobre los que se asienta son: completar la formación profesional de los estudiantes avanzados y recién graduados de la carrera de abogacía, por un lado, y llevar asistencia jurídica gratuita a los barrios más alejados de la ciudad donde los distintos tipos de carencias impiden el acceso a la justicia de las personas que viven allí, por el otro.

La base teórica de estos pilares sostiene que la formación profesional universitaria sólo puede lograrse mediante un adecuado proceso de socialización, donde el joven estudiante o novel profesional incorpore un clima de valores y un conjunto coordinado de ideas y acciones que utilizará al tratar una situación problemática.

Es decir, que incorpore la perspectiva que unirá el rol profesional con la cultura (Elliott, 1975).

Cabe resaltar que desde el año 2007 a la actualidad el número de consultorios ha crecido notablemente, lo que implica una mayor cantidad de intervención de los actores de la comunidad educativa.

En tanto que, en julio de 2008, se lanza el Programa de Clínicas Jurídicas, cuyo objetivo es estrechar los lazos con la comunidad y brindar a los estudiantes y recién graduados la posibilidad de enfrentarse a casos reales y complejos, en cuya resolución podrán participar activamente.

El programa pretende estimular en los estudiantes el desarrollo de diversas capacidades, destrezas y valores a partir de una actitud auto-reflexiva y crítica respecto de los casos de interés público que se presenten.

El mismo comprende tres áreas, Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental y Derechos Humanos, y cada equipo de trabajo se conforma con estudiantes, graduados de la facultad y docentes.

Entre los posibles casos a estudiar se encuentran los que involucran la afectación de los derechos humanos, derechos del consumidor, la libertad de expresión, las garantías procesales, la protección de grupos vulnerables, los damnificados masivos de contratos abusivos, daños ambientales, entre otros.

En otro de los proyectos, se aborda la atención jurídica para pacientes con VIH/SIDA, profundizándose temas como los derechos a la salud, la discriminación, etcétera.

En el mismo periodo, tiene su origen el Proyecto "Derechos de las personas con padecimientos mentales", a través del cual se intenta la integración de las personas con padecimientos mentales a la comunidad.

Junto a todos estos proyectos y programas, se sumó en la misma etapa, la implementación del denominado "Unidad de Atención Juvenil" direccionado a los procesos restaurativos juveniles y destinada a jóvenes infractores a la ley penal.

Así, se incorpora también, en las actividades de extensión, los derechos del niño.

Son estos los datos registrados en la "Memoria de Actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria 2007/2010".

Si bien en la actualidad, se observa una continuidad de las acciones en materia de extensión, carecemos al momento de registros sobre las mismas para poder ilustrar al respecto.

En atención a lo expuesto, damos por cumplido nuestro objetivo descriptivo sobre la base empírica que sustentan los distintos programas y proyectos extensionistas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata.

IV.- Diseño de los contenidos curriculares del plan de estudios vigente

Para obtener el título de abogado, el plan de estudios vigente prevé la aprobación de treinta y un materias y un Ciclo de Adaptación Profesional integrado por la cursada de dos prácticas (Civiles y Penales).

De acuerdo a la conformación de la currícula, y a la experiencia como docentes, podemos afirmar que aproximadamente el noventa por ciento de las materias integran contenidos disciplinares abordados de forma teórica.

Lo dicho, nos lleva a sostener que el abordaje no contempla situaciones en donde esos conocimientos disciplinares adquieran funcionalidad.

En ese aspecto, podemos enfatizar que no sirve la formación por fragmentos, no es lo mismo conocer porciones aisladas que comprender el fenómeno total en su contexto real.

El énfasis se debe situar en el "aprender haciendo", los estudiantes aprenden mediante la experiencia y la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos.

En suma el desarrollo sostenible solo es posible si tenemos personas formadas en contacto constante con la realidad, se trata de educar desde la realidad del entorno, desde las necesidades comunes de las comunidades y de su relación con su medio ambiente (Rosell Puche, 2007).

Concretamente, en la actualidad, la currícula no integra como contenidos en la enseñanza los procedimientos y habilidades que el abogado requiere para desempeñar su profesión.

Esta realidad implica que, la formación carece de estrategias tendientes a que el estudiante se apropie paulatinamente de saberes vinculados con las actitudes, valores y haceres que posibiliten resolver la diversidad de situaciones que se presenten en el contexto profesional.

Todo lo dicho hasta aquí, nos conduce a formular los siguientes interrogantes:

- ¿Cómo pensar los procesos de enseñanza del derecho en el escenario planteado?
- ¿Qué formación debería brindarse al estudiante de derecho para que pueda insertarse de manera crítica y transformadora en la sociedad de la que forma parte?
- ¿Qué características deben tener las prácticas de la enseñanza del derecho para promover el desempeño de la profesión con responsabilidad ética y social?
- ¿De que manera se deberá integrar la currícula para formar un profesional que pueda dar respuesta a las demandas de los diversos contextos de la realidad social?

V.- La extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho

Nos adentramos al análisis de lo que sería el objeto central de nuestra propuesta.

Previo a ello, delimitaremos a la enseñanza como un proceso, como una forma de intervención pedagógica que se desarrolla en el marco de contextos particulares y en el que se establecen múltiples relaciones entre los sujetos intervinientes.

Es asimismo, una práctica social que tiene como propósito promover el aprendizaje de los estudiantes favoreciendo el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico que permita comprender y operar en la realidad social.

En este sentido, la enseñanza de los contenidos del derecho, necesariamente requiere de una propuesta didáctica que incluya los contextos sociales y culturales.

Las actividades de extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho permiten justamente que el estudiante construya durante su trayectoria formativa experiencias en las que se ponen en juego conocimientos teóricos y prácticos.

Se tiene como propósito el de brindar una educación inclusiva y de calidad que posibilite la formación integral de las personas, concibiéndolos como sujetos de derecho.

Se debe iniciar un proceso de transformación curricular que plantee una nueva propuesta pedagógica para la educación de los estudiantes de derecho.

La propuesta debería plantear como propósito central el de brindar una formación que posibilite que el alumno pueda estar en condiciones, no solo de ingresar al mundo laboral, sino también el de brindarle una formación ético social para el ejercicio de la abogacía.

Se plantea, entonces, como desafío principal el de asegurar que en el tránsito por este espacio educativo los alumnos adquieran los saberes, haceres y valores que le permitan insertarse en el ámbito de trabajo y construirse como ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad que integran.

Se entiende al alumno como un sujeto con capacidad de ejercer y construir.

En esta línea, las intervenciones docentes extensionistas, se orientarán a que los alumnos puedan construir miradas críticas sobre los acontecimientos sociales, a que se desarrollen valores como la solidaridad, la libertad, la paz, el respeto por la diversidad, la justicia, el bien común y el la vida de los semejantes.

Se intenta que los futuros abogados hagan uso de sus derechos y cumplan con sus deberes como profesionales de la justicia.

En esta perspectiva, la formación del abogado se deber realiza desde el interior de la facultad considerando los distintos espacios educativos, entre ellos, la extensión universitaria.

VI.- Algunos enunciados para tener presente

- La propuesta implica una nueva concepción pedagógica de los sujetos estudiantes
- La trayectoria educativa del estudiante de derecho se integra por el conjunto de experiencias, saberes, prácticas, etc. que se suscita en su paso por la unidad educativa
- A partir de estas trayectorias el estudiante va construyendo ideas, disposiciones y creencias acerca del significado la profesión por él elegida
- El proceso de enseñanza define una relación pedagógica que se caracteriza por ser asimétrica, intencional y sistemática, cuya finalidad está dirigida a la inserción crítica de los sujetos en la sociedad
- Este proceso se orientará a que los/as alumnos/as al finalizar los estudios sean competentes para ingresar al mundo laboral, a la vez de contribuir a la construcción de un abogado que integre una ciudadanía crítica y responsable, y que se encuentre en condiciones de continuar su proceso formativo en el nivel de posgrado en el supuesto que así lo desee

VII.- Algunos interrogantes que pueden servir de disparadores

Consideremos que algunas pistas que pueden orientar la revisión sobre la necesidad de incorporar a la currícula la extensión universitaria se podrían buscar en la respuesta a los siguientes interrogantes

- ¿Qué tipo de abogado se propone formar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales?
- ¿Cómo lograr la formación del abogado deseado?
- ¿El actual plan de estudios requiere de modificaciones para lograr los objetivos propuestos?
- ¿Cómo generar propuestas alternativas de enseñanza que posibiliten brindar una formación de mayor calidad?
- ¿Cuáles podrían ser las estrategias pedagógicas que posibiliten generar las mejores condiciones para el desarrollo de las trayectorias educativas de los alumnos?
- ¿Cómo deberían pensarse las intervenciones en materia de extensión universitaria para conducirnos a los objetivos propuestos?

VIII.- Reflexiones finales

Seguramente, a este documento, se han sumado diversas iniciativas para la reforma del actual plan de estudios.

Nuestra propuesta, intenta delinear un conjunto de recomendaciones vinculadas con uno de los pilares de la educación superior: la extensión universitaria.

En correspondencia con ello, pretendemos que esta presentación, interpele los modos y formatos de la actual metodología de enseñanza del derecho.

Pensamos que la práctica de la enseñanza a través de las actividades de extensión posibilitarán la integración de los contenidos disciplinares superando así un abordaje fragmentado.

Una dinámica institucional, un contexto áulico que puede darse en tareas de campo extensionista, que habilite el debate, la discusión, el intercambio, la construcción de la grupalidad, en los que la palabra de cada estudiante tenga valor, con experiencias democráticas, aspectos que resultan indispensables para la construcción de un abogado crítico y responsable.

Para concluir, podemos afirmar que el análisis de la reforma del plan de estudios, nos ha conducido a repensar sobre la enseñanza del derecho.

Detenernos en la enseñanza del derecho, nos permitió imaginar y reflexionar sobre qué profesionales debe formar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, entendiendo para ello, que estamos viviendo un cambio de época.

Bibliografía consultada

- Memoria de Actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales durante los años 2007/2009
- Resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
- Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata
- *Grhal, Sandra.* Ejes que promueven la extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Año 2011.
- Coscarelli, Maria R. Formación en el campo de la extensión universitaria. Revista Electronica sobre Extensión Universitaria. Ejemplar nro. 1. Julio 2010.
- Fenstermacher, Gari; Soltis, Jonas. Enfoques de la enseñanza. 1999.
- Perez Gomez, Angel. La función y función del profesor en la enseñanza par la comprensión. Diferentes perspectivas. 1993.
- Picco, Sofia. Extensión y formación docente en los orígenes de la Universidad Nacional de La Plata. 2007. Revista Question.
- Seteiman Jorge. Más didactica en la educación superior. Mayo 2008. Editorial Minio y Davila.
- Seteiman Jorge. ¿Qué debatimos hoy en la didáctica: las prácticas de enseñanza en la ecuación superior. 2004. Editorial Minio y Davila.
- Bracchi, Claudia, Gabba M. Inés i. “Estudiantes secundarios: un análisis de las trayectorias sociales y escolares en relación con las dimensiones de la violencia.” En: Kaplan, Carina (dir.)
- Sitios webs consultados:
http://www.jursoc.unlp.edu.ar
http://www.unlp.edu.ar;

http://www.abc.gov.ar;
http://www.perio.unlp.edu.ar

** Abogado. Docente Autorizado. UNLP. Especialista en Derecho Civil. UNLP. Profesor Adjunto Ordinario (Cátedra I Derecho Civil II). Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. Ex Secretario de Extensión Universitaria. UNLP. Investigador: Categoría IV. Anteproyecto de Tesis presentado en la Carrera de Doctorado "La Extensión Universitaria como metodología de la enseñanza del derecho". Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con funciones de Profesor Adjunto (Derecho Privado II y Derecho Privado III. Cátedra 1). Facultad de de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.*

*** Profesora en Ciencias de la Educación UNLP- FAHCE. Profesora en Educación Física UNLP- FAHCE. Magisterio especializado en Educación Inicial. ISFD Nº 17. Jefe de Trabajos prácticos ordinario con semidedicación en la cátedra Didáctica especial 1 del Profesorado en Educación Física. FAHCE. UNLP. Profesora del nivel superior en ISFD DGCYE. Integrante del Equipo Técnico Regional. Capacitador en el Centro de Investigaciones Educativas de la ciudad de La Plata. DGCYE. DIRECCIÓN DE CAPCITACIÓN. Inspector de enseñanza del Nivel Superior en la Región 1. DGCYE DIPREGEP*

PROPUESTA/CONSIDERACIONES DEL PROFESOR J. DENTE. (Proyecto S/N°).

La propuesta de cambio de nombre de la materia "Introducción al Derecho"

Los profesores titulares de las cátedras II y III de la materia sostuvieron en sus propuestas referentes al posible cambio del plan de estudios -y ante el proyecto presentado por Amós Grajales de implementar un ciclo propedéutico- la necesidad de conservar el nombre "Introducción al Derecho".

Mi opinión difiere y propongo se denomine "Teoría General del Derecho", por las siguientes razones.

El nombre: materia, disciplina y función propedéutica

El nombre actual de la materia que profesamos, "introducción al derecho", no designa nada.
Pretende sí aludir a una actitud propedéutica, es decir, a la función pedagógica que la materia. Pero esa "introducción" puede consistir en cualquier cosa. Por ejemplo, el pretérito programa consistía en poner en pantalla las diversas ramas del derecho… aunque también puede consistir, por ejemplo, en dar derecho romano, etc.

El nombre actual de la materia no designa disciplina alguna y ni siquiera se lo puede asociar con la función propedéutica que ahora tiene.
Dicha función antes respondía a una noción enciclopedista, como si fuera necesario para introducir al derecho mostrar fotografías de lo que vendrá –elementos de las disciplinas que luego se abordarán con profundidad y, podemos agregar, con mayor seriedad en las diversas materias.

Ahora, muy por el contrario, la función propedéutica es concebida como construcción de herramientas conceptuales que servirán para abordar los distintos aspectos del derecho.
Es que la materia hace ya muchos años que interpela una disciplina. Ya no es una materia sin disciplina, como antaño, sino que se abordan temas propios de un saber específico con trayectoria y prestigio académico, y cuya utilidad en el quehacer jurídico sostenemos: Teoría General y Filosofía del derecho. Con ello ha cambiando también la concepción de su función propedéutica; y además ha enriquecido sus funciones que no se agotan en construir herramientas, ya que presenta un campo específico del saber jurídico.

Por ello, el nombre "introducción al derecho" es más lo que oculta que lo que devela. Propongo un nombre que esté a la altura de los tiempos y que refiera a la disciplina que mediante la materia se aborda.
Propongo "teoría general del derecho" por dos cuestiones: una, convencional. Ya tiene su lugar en la denominación que se le da a la materia en diversas facultades. La otra, porque el nombre pone el acento en temáticas de lo que podríamos llamar en términos generales "filosofía del derecho" que tienen más vinculación con su función propedéutica.

El ciclo propedéutico

Apoyo la idea de implementar un ciclo como el propuesto por el Dr. Grajales. Aunque creo que debería estudiarse con detenimiento cuáles serían sus materias y sus contenidos. Para ello propongo dos referencias para indagar: el llamado CBC implementado hace años por la UBA, y los programas del primer ciclo de nivelación dictado en nuestra Facultad en el año 1994. Al menos, lo referente a la materia "Nociones de lógica y de lenguaje" cuyo programa diseñara por la Dra. Cecilia Sicard.

Javier Dente

PROPUESTA/CONSIDERACIONES DEL PROFESOR MEDICI. (Proyecto S/N°).

Propuestas para la reforma del plan de estudios relacionadas con Derecho Político, primer año y Ciclo Propedéutico.

En el presente escrito reitero las propuestas y sugerencias realizadas a las autoridades de la facultad y a los consejeros académicos que integran la comisión sobre reforma al plan de estudios realizadas en la reunión con los docentes de las cátedras de Derecho Político.

Sintéticamente quiero reiterar y volcar por escrito mis propuestas sobre dos temas principales que fueran abordados en dicha ocasión, a pedido de la consejera académica Abogada Liliana Zendri a quien agradezco la oportunidad de expresar sintéticamente estas ideas, y por supuesto por su intermedio a los/las demás integrantes de la Comisión de Reforma del Plan de Estudios y a las autoridades de la facultad por su iniciativa y convocatoria al claustro. Los temas sobre los que quiero reiterar por escrito mis propuestas son:

1) Derecho Político, su función y ubicación en el plan de estudios de la carrera.
2) Sobre el primer año de la carrera y el ciclo propedéutico. Necesidad de una nueva asignatura.

El Derecho Político no es una materia de cultura general complementaria sobre ciencias políticas o teoría del estado a insertar en los contenidos formativos de los/as futuros/as profesionales del derecho sin conexión con los ejes troncales (las distintas ramas del derecho positivo) de la misma.

Por el contrario, la primer y simple justificación de la materia y de su designación "Derecho Político" , de los contenidos que debería tener y de su ubicación más conveniente en el plan de estudios de la carrera es una "verdad de perogrullo": que el derecho es político, que existe una "politicidad" (no en el sentido partidista

por supuesto) del derecho. No obstante, esto que es generalmente admitido no se refleja adecuadamente en las contenidos de formación de los profesionales del derecho, pareciera que conviene más adoptar una actitud teórica de distanciamiento, neutralidad u objetividad que encubre o desplaza la cuestión de la inevitable politicidad del derecho.

Los contenidos del orden jurídico en sus principios, valores positivizados y normas son portadores de políticas del derecho y programas jurídicos a realizar, sujetos a polémica e interpretaciones por parte de los operadores jurídicos (y políticos). Por lo tanto no alcanza con encajar contenidos de ciencia política o teoría del estado desvinculados del resto de los contenidos troncales del plan de estudios como una simple materia complementaria o de cultura general.

Por el contrario, hay que darle a los futuros graduados las herramientas teóricas y prácticas que los orienten en su futura práctica y comprensión del derecho en lo que hace a las opciones de políticas del derecho que se abren en cada una de las distintas instancias el ejercicio de la profesión (estatal, privado, social).

De ahí la conveniencia de que el Derecho Político manteniendo su denominación, sea ubicado en un nivel del plan de estudios más elevado, donde los estudiantes tengan la suficiente madurez y formación para aprovechar los contenidos de esta asignatura como herramientas que le serán sumamente útiles en su actuación profesional futura para comprender las opciones de políticas del derecho en las que tendrá que encuadrar u orientar su intervención desde distintos ámbitos de ejercicio.

Para poner un ejemplo, la identificación y comprensión de los paradigmas jurídicos operantes (en el sentido preciso de Jürgen Habermas, en su texto *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*) y las políticas del derecho y programas jurídicos que les son inherentes, requiere de un grado de avance y madurez de los estudiantes que difícilmente puede esperarse en el primer año de la carrera.

Así, identificar y distinguir políticas del derecho y programas jurídicos de un paradigma neoliberal o de un paradigma social del derecho, por ejemplificar, exige conocer: las normas constitucionales y leyes marco, diferenciar entre las tendencias económicas keynesianas y neoclásicas en el marco de la economía política, para comprender las distintas formas de vinculación funcional entre estado y derecho que ambos paradigmas suponen. Es decir, requiere conocimientos de teoría del derecho, economía política y derecho constitucional positivo para poder comprender los alcances de cada uno de los paradigmas y lo que suponen en términos del modelo del estado constitucional de derecho.

Por eso sintetizo mi propuesta: subir la ubicación de Derecho Político a la altura de cuarto año, en ubicación similar a filosofía y sociología del derecho. En la medida de lo posible ubicando como correlativas previas historia constitucional, introducción al derecho, derecho constitucional, economía política.

A más abundamiento argumental quiero recordar que los grandes maestros del derecho público que supieron enseñar en las aulas de nuestra facultad y prestigiar nuestra casa de estudios, como Carlos Sánchez Viamonte, Segundo V. Linares Quintana, Arturo Sampay, Alfredo L. Palacios, Silvio Frondizi, Alfredo Galleti, Bartolomé Fiorini, Jorge R. Vanossi, Humberto Quiroga Lavié o Juan Carlos Rubinstein entre otros, destacaron y constituyen referencia en sus respectivas áreas porque a su conocimiento del derecho y del derecho público agregaron la comprensión de la politicidad y complejidad de la instancia jurídica de la sociedad. Creo que no los recordaríamos o no tanto al menos y con tanta veneración académica si se hubieran limitado a la enseñanza y repetición del derecho positivo en forma dogmática.

Finalmente quiero destacar que esta propuesta de ubicación de la asignatura en el plan de estudios está avalada por los antecedentes de las facultades de derecho de las Universidades Nacionales de Córdoba y de Rosario.

II-

Otro problema distinto es el del ingreso, primer año y el necesario ciclo propedéutico. Pero surge claramente de mi opinión anterior que considero que esto no tiene que ver con el Derecho Político como lo estoy entendiendo, ya que considero no debería estar ubicado en primer año.

No obstante, el problema del ingreso y primeros pasos en la facultad es central dadas las dificultades y carencias de formación que, coincido en esto con las impresiones vertidas por los colegas docentes tanto en la reunión convocada como en general en todos los intercambios de opiniones formales e informales que al respecto he mantenido, se verifican todos los años en amplia proporción de los estudiantes ingresantes y en el tránsito subsiguiente por primer año con arrastre general a lo largo de los estudios de derecho en nuestra casa de estudios.

Para no abundar demasiado, sintetizo mis propuestas al respecto formuladas en oportunidad de la reunión:

Entiendo que es necesario incluir una materia nueva en el ciclo propedéutico de carácter introductorio a la historia de las ideas políticas y jurídicas que les sirva a los estudiantes como ubicación temporal y conocimiento preliminar de las principales corrientes de pensamiento acerca de la política y el derecho en sus contextos históricos. Esta asignatura podría integrarse en el ciclo propedéutico como correlativa previa a historia constitucional ya que entiendo esta requiere para su mejor comprensión y estudio por estudiantes de primer año el conocimiento histórico de las principales corrientes políticas y jurídicas universales y de nuestra región.

Esta nueva materia tendría como eje temático entonces el estudio de la historia de las ideas políticas y jurídicas universales y en América Latina, a partir de la exposición de los distintos paradigmas y corrientes de pensamiento, destacando especialmente la relación entre los referidos modelos, los acontecimientos históricos y su influencia en las ideas jurídicas.

De esta forma, esta asignatura vendría a llenar un importante requerimiento de formación en la etapa inicial de los estudios jurídicos: el conocimiento de los contextos históricos y culturales de surgimiento de las principales corrientes de pensamiento político y jurídico.

En este caso quiero citar el antecedente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue en la que la asignatura Derecho Político 1 viene a cumplir la función de llenar esta necesidad formativa. Aclaro que en este caso la denominación no es tan importante sino la función que la asignatura propuesta debe desempeñar, de ahí que entiendo sería más preciso denominarla como "Introducción a la historia de las ideas políticas y jurídicas". O bien "Introducción a la historia del derecho y de las ideas políticas". Resulta entonces evidente que esta asignatura no debe confundirse con la función que le cabe al Derecho Político como lo explicamos en el apartado I.

Poniendo en el contexto del primer año y del ciclo propedéutico en general, entiendo esta propuesta va en la dirección de ampliar y reforzar los contenidos de dicho ciclo para facilitar el tránsito hacia las exigencias

de las ramas troncales del plan de estudios y una comprensión integral en su contexto histórico, político y cultural de la complejidad de la instancia jurídica de la sociedad. Se trata de reforzar los cimientos.

Agradeciendo nuevamente esta oportunidad de compartir estas ideas con la comunidad académica de la facultad, saludo cordialmente a los consejeros académicos.

Dr. Alejandro Medici.
Prof. Adjunto Ord. Cat. 3
Derecho Político.

DIAGNOSTICO Y REFLEXIONES APORTADAS POR EL PROFESOR FELIPE FUCITO.

Sumario: El profesor titular de "Introducción a la Sociología" Cátedra 2, formula consideraciones (diagnóstico) sobre el estado de situación de su materia y los alumnos de la asignatura a partir de su experiencia. Le parece positiva la propuesta de incorporar un plan propedéutico pero señala que "debe evaluarse –si se hace correctamente- su costo y su tiempo", relacionando la complejidad de los contenidos y lo que denomina "baja calificación educativa de muchos de los aspirantes".
También reflexiona sobre el aporte de la profesora de letras considerando que resulta necesario incorporar un curso introductorio de redacción.

Se acompañan al presente informe, copia de los correos electrónicos cursados que acreditan la invitación a titulares y adjuntos de todas las materias de primer año: Introducción al Derecho, Historia Constitucional, Derecho Político e Introducción a la Sociología.

II. INFORME DE LA COMISION DE "DERECHO PUBLICO".-

INTRODUCCION: En el marco reglamentario general de la convocatoria del Programa para el análisis, estudio y propuestas para la reforma del plan de estudios de las carreras de abogado, escribano y procurador, aprobado por resolución 198/11 de éste Consejo Directivo, en la organización de sus comisiones temáticas se dispuso (art. 2) la creación de la comisión vinculada al derecho público, la que se ocuparía de los siguientes temas "...**2.2. Comisión de Derecho Público**: en ésta comisión se discutirá la necesidad de revisar los contenidos y la metodología de enseñanza que involucren a las actuales materias: Derecho Constitucional, Derecho Penal I y II, Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Internacional Público, Derecho Social, Derecho Administrativo I y II, Derecho Procesal I y II, Finanzas y Derecho Financiero, Derecho Notarial y Registral y Derecho de Minería y Energía. Ha de contemplar la posibilidad de revisar el régimen de correlatividades, contenidos disciplinares y / o justificación de incorporación de nuevas disciplinas", e integrada por los Consejeros Directivos Abog. Ángel Eduardo GATTI (claustro profesores), Abog. Vicente Santos ATELA (claustro profesores), Sr. Mario BARLOQUI (claustro no docente), Sr. Damián BRUMER (claustro de estudiantes), Sr. Joaquín MUELE SOLER (claustro de estudiantes), y la participación del graduado Abog. Nicolás Meschiany; bajo la coordinación administrativa del Auxiliar Docente Abog. Gonzalo Fuentes.

METODOLOGIA DE TRABAJO: La modalidad adoptada por la comisión para su funcionamiento ha sido de reuniones periódicas realizada los días jueves, con una frecuencia quincenal, siendo la hora de encuentro las 17 o 18 hs según la ocasión.-

De acuerdo a la reglamentación del Consejo Directivo, se cursaron invitaciones *–vía fax y correo electrónico-* a los Profesores Titulares de Cátedra de las Asignaturas que componía el bloque de Derecho Público, indicando que la misma resultaba extensiva para todos los integrantes de la Cátedra, alentando asimismo a la producción de proyectos y propuestas surgidos de la deliberación en el seno de la misma.-

Atento lo expuesto, se dispuso la siguiente agenda de citaciones:

- Día 11 de Agosto de 2011 las Cátedras de la materia "Derecho Público Provincial y Municipal", "Derecho Constitucional" e Instituto de "Derecho Político y Constitucional".
- Día 25 de agosto de 2011 las Cátedras de la materia "Derecho Penal I", "Derecho Penal II", e Instituto de "Derecho Penal".
- Día 8 de Septiembre de 2011 la Cátedras de la materia "Derecho Procesal I", "Derecho Procesal II", e Instituto de "Derecho Procesal".
- Día 15 de Septiembre de 2011 las Cátedras de la materia "Derecho Administrativo I", "Derecho Administrativo II", e Instituto de "Derecho Administrativo"
- Día 6 de Octubre de 2011 las Cátedras de las materia "Derecho de Minería y Energía", "Derecho Social (del trabajo y la seguridad social)", e Instituto de "Derecho Social".
- Día 13 de Octubre de 2011 las Cátedras de la materia "Derecho Notarial y Registral", Instituto de "Derecho Notarial y Registral", y "Finanzas y Derecho Financiero".
- Día 27 de Octubre de 2011 las Cátedras de la materia "Derecho Internacional Público".

LAS ACTAS DE LA REUNIONES: A continuación se transcriben las actas de todas la reuniones celebradas por la Comisión de "Derecho Público".

ACTA N° 1

En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de junio de 2011, siendo las 18 Hs., se reúne la Comisión de Derecho Público del Programa de Reforma del Plan de Estudios de la carrera de Abogacía, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; con la presencia del consejero directivo por el claustro de profesores Abog. Ángel Eduardo Gatti, el consejero directivo por el claustro de profesores Abog. Vicente Santos Atela, el consejero directivo por el claustro de estudiantes Sr. Joaquín Muele Soler, el consejero directivo por el claustro de estudiantes Sr. Damián Brumer, el graduado Abog. Nicolás Meschiany, y el coordinador de la comisión temática Abog. Gonzalo Fuentes.- Siendo que en el día de la fecha y mismo horario de reunión |de comisión se realizará la disertación del Prof. Martin Bohmer, habiendo sido publicitada mediante la web institucional con la siguiente noticia: CONFERENCIA ACADEMICA REFORMA PLAN DE ESTUDIOS. Disertación del Prof. Martin Federico BÖHMER. La Secretaria de Asuntos Académicos junto al Consejero Directivo Prof. Amós Grajales, invitan a los Profesores y comunidad académica en general, en el marco de las actividades programadas para la "discusión, análisis, debate y formulación de propuestas para la Reforma del Plan de Estudios" de la carrera de Abogacia y Escribania, a la disertación del Prof. Dr. Martin Böhmer acerca de "Los Planes de Estudios y la formación universitaria. Los diferentes modelos", la que se realizará el jueves 30 de junio a las 18 Hs. en la Sala del Consejo Directivo (1er. Piso Edificio de la Reforma Universitaria).

El Prof. Böhmer es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Master of Law de la Universidad de Yale, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Director responsable de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, Director del Área de Justicia de CIPPEC, miembro fundador de la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles (ADC), profesor de postgrado en materias de Filosofía Jurídica y Derecho en Universidades de la República Argentina y del Exterior. Los miembros de la comisión resuelven participar de la conferencia a efector de interiorizarse de los temas que sean tratados en la misma.-

Luego de finalizada la conferencia lo miembros deciden dar por concluido el encuentro, siendo las 20 Hs.-

ACTA N° 2

En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de julio de 2011, siendo las 18:10 Hs., se reúnen los señores miembros de la Comisión de "Derecho Público" del programa para el análisis, estudio y formulación de propuestas para la Reforma del Plan de Estudios; con la presencia del Consejero Directivo Vicente Atela (claustro de profesores), el Consejero Directivo Gerardo Campidoglio (claustro de estudiantes), el Consejero Directivo Joaquín Muele Soler (claustro de estudiantes), el graduado Abog. Nicolás Meschiany, bajo la coordinación del Auxiliar Docente Abog. Gonzalo Fuentes.-

Abierta la reunión los asistentes comienzan a evaluar las posibilidad de encuentros, así como la citación de profesores y Cátedras para analizar la situación actual del plan de estudios, desde la perspectiva

de cada materia, así como la recepción de propuestas de reforma.- En tal sentido, y conforme se acordó con la totalidad de las demás comisiones del Programa de Reforma, los encuentros se mantendrán con periodicidad quincenal, los días jueves 18 Hs.-

El Señor Coordinador de comisión propone que se construya una agenda de citaciones de los diferentes profesores y materias que corresponden al eje temático de la comisión, comprometiéndose así realizarlo, haciendo citaciones mediante nota formal a enviarse por fax y la misma será enviada por correo electrónico.- Para ello los presentes acuerdan que la primera citación se realice a todas las Cátedras de la materia "Derecho Constitucional" y "Derecho Público Provincial y Municipal".- Se adjunta a la presente el siguiente modelo de nota de citación e invitación a participar de la reunión de Comisión:

"... La Plata, agosto 1 de 2011.- Señor Profesor Titular de la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales U.N.L.P.- Dr..... S / D.-

De nuestra consideración: En nuestro carácter de miembros de la Comisión de "Derecho Público" del programa de estudio y análisis para la Reforma del Plan de Estudios, lo invitamos a participar de la reunión a realizarse el día xxxxx a las xxxxx horas, en la Sala del Consejo Directivo, en la que se analizará aspectos de su disciplina.- Es de nuestro interés que participe del encuentro, así como formule las propuestas o análisis críticos que vinculan su materia y el plan de estudios de la carrera de abogacía.- En tal sentido, y sin ánimo de limitar el debate que Ud. realice dentro de la Cátedra, le sugerimos que analicen cuestiones como ser: a) Régimen de correlatividades, b) Ubicación de la materia en el plan de estudios, c) Enseñanza teórica y práctica de la disciplina, d) La relación de la materia y el perfil profesional, etc.- La idea es analizar la materia bajo la perspectiva del plan de estudios, y no lo contenidos de actualización del programa de la materia.- Al encuentro podrán participar todos los profesores y auxiliares que integren su Cátedra, siendo recomendable que previamente hayan interactuado y debatido dentro del ámbito de la misma.- En ese mismo encuentro, serán invitados para participar los miembros de la otra Cátedra de su misma disciplina.- Asimismo, rogamos que la propuesta que realice –sin perjuicio de analizarla y discutirla personalmente-, tenga la amabilidad de remitirla electrónicamente a la dirección plandeestudios@jursoc.unlp.edu.ar, a efecto de poder remitirla a todos los consejeros directivos.- Ante cualquier duda o inquietud podrá dirigirse a la dirección electrónica ut supra indicada, o los miembros de la comisión que son publicitados en la página web institucional de la Facultad (noticia "reforma plan de estudios").- Sin más, descontando de la plena participación en el trabajo en comisión, lo saludamos a Ud. muy atentamente.-...".-

Por último el Coordinador de la presente Comisión (Abog. Fuentes) se compromete a realizar las citaciones al cuerpo docente que deberá ser invitado para la próxima reunión.- No habiendo asuntos pendientes para tratar, se da por finalizada la presente reunión.-

ACTA N° 3

En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de agosto de 2011, siendo las 17:05 Hs., se constituye la Comisión de "Derecho Público" del programa de estudios para la reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía; con la presencia del Consejero Directivo por el claustro de profesores Abog. Vicente Atela, los Consejeros Directivos por el claustro de estudiantes Sr. Joaquín Muele Soler y Damián Brumer, por alumnos de algunas agrupaciones estudiantiles, el graduado Abog. Nicolás Meschiany, y el Coordinador de la presente comisión Abog. Gonzalo Fuentes.-

Para la presente reunión fueron invitados para las 17 Hs. los profesores de la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" (nota invitación remitida al Prof. Dr. Pablo Reca y Prof. Abog. Hernán Luna) en las personas de los Profesores Titulares de las Cátedras I y II; para las 18:15 Hs. fueron convocados los profesores de la materia Derecho Constitucional en sus tres Cátedras (nota invitación remitidas al Prof. Dr. Carlos Alberto Mayón, Prof. Dr. Adolfo Gabino Ziulu, y Prof. Dr. Félix Loñ).-

Habiendo comenzado la actividad, se aguardó un tiempo prudencial a los profesores invitados para el primer encuentro, no habiendo participado del mismo.- Sin embargo los presentes comenzaron a deliberar acerca de los contenidos mínimos de la disciplina, así como ubicación en el plan de estudios y régimen de correlatividades, pasando más luego ha analizar la situación de la materia en los planes de estudios de la carrera de abogacía en otras universidades públicas y privadas de la argentina. Dejan expresado los docentes Atela y Fuentes, situación compartida por el graduado presente, que actualmente la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" por su ubicación y régimen de correlatividades permite que el alumno se gradúe con la misma (lo que facilita la profundización de algunos contenidos) o alumnos que apenas tengan 6 materias finales aprobadas.- En éste último caso, observan en los alumnos un déficit importante por cuanto no poseen saberes básicos que requiere la disciplina como ser concepto de persona jurídica, la responsabilidad jurídica de los funcionarios, tipos de actos jurídicos, etc., para lo cuál entienden que la materia está bien mantenerla en el 3er año de la carrera, pero que además de las materias correlativas previas exigidas actualmente, debe poseer como mínimo "Derecho Civil I", "Derecho Penal I", y alguno llega a esbozar que quizás deban tener aprobado previamente "Derecho Administrativo I".- Por último en este aspecto entienden que la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" debe mantenerse como materia obligatoria, ya que además de ser necesaria para la formación generalista del futuro graduado, es una disciplina esencial del sistema federal de Estado que posee la Argentina, por lo que resulta necesario su estudio-enseñanza y análisis en los abogados argentinos. En el orden propuesto, es dable mencionar que se ponderó asimismo la importancia de mantener la obligatoriedad de la asignatura, toda vez que la casi totalidad de los alumnos de esta casa de estudios son provenientes; ya sea de la misma Ciudad de La Plata, o de diversas ciudades de la Provincia de Buenos Aires y en menor medida de otras Provincias Argentinas, circunstancia que potencia la necesidad de un estudio particularizado y comparado de las instituciones del Derecho Público Provincial.-

Por último, fue objeto de consideración la importancia que presenta la asignatura, en lo referente al estudio específico de los elementos constitutivos del municipio como sujeto político en las relaciones federales del estado Argentino.-

Posteriormente a las 18 Hs. se hicieron presente el Profesor Titular de la Cátedra 1 de Derecho Constitucional –Dr. Carlos Mayón-, el Profesor Titular de la Cátedra 2 de Derecho Constitucional encomendó la representación en la Profesora y docente de la misma Cátedra Prof. Abog. Laura Calá, y el Profesor Titular de la Cátedra 3 de Derecho Constitucional –Dr. Adolfo Ziulu-, a los que se le informó de los alcances y objetivos dispuesto por el Consejo Directivo en el programa para el análisis de la reforma del plan de estudios, los que gustosamente intercambiaron diferentes opiniones con los asistentes a la reunión; los que pueden ser sistematizados en las siguientes ideas fuerza: * Consideran que la materia está bien ubicada en el 2do. año de la carrera y con las correlatividades previas, * Siendo que la materia exige permanentemente la interpretación de la Constitución a través de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, observan serias dificultades en los alumnos para la lectura y comprensión de fallos (no saben que es un fallo, no logran discriminar los

hechos del caso y las normas en juego, no pueden extraer cuál es la doctrina o concepto que emerge del caso, etc.), por lo que sugieren que lleguen a Derecho Constitucional al menos formados en la comprensión de que es una sentencia, cómo se lee una sentencia, cómo se interpreta una sentencia, cómo se extrae una doctrina judicial a través de un fallo, cómo se buscan los fallos de la CSJN; * Todos los profesores presentes de Dcho. Constitucional expresan que la materia hoy en día exige de profundizaciones vinculadas al sistema constitucional de derechos humanos, los tratados internacionales de derecho humanos, y otros aspectos que no llegan a ser profundizados en 4 meses.-

El profesor Mayón manifiesta que cuando era titular el Prof. Linares Quintana la materia era anual, y hasta se estudiaba un derecho constitucional comparado.- En tal sentido Mayón expresa que si fuera semestral, quizás podrían abordarse más contenidos que hoy son enunciados en los programas pero no se alcanzan a desarrollar; consideran necesario que se genere un espacio, previo o posterior a derecho constitucional, que se enseñen la teoría general de los derechos humanos, así como los órganos internacionales, instrumentos de reclamo de derecho humanos, la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos, etc.; * Preguntados por los consejeros presentes acerca de si ven necesario generar otros espacios para el estudio y reflexión del derecho constitucional, pero como talleres o seminarios que se ubiquen al final de la carrera, manifestaron que en este momento no estarían en condiciones de describir algún tema en particular, pero quizás se puedan explorar en una etapa de la carrera "Talleres de Jurisprudencia de la CSJN", "Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad: el sistema recursivo extraordinario en Argentina y el sistema de reclamo por derechos humanos en el sistema interamericano", "Derecho Procesal Constitucional", etc.-

El Prof. Ziulu también manifiesta como concepto general, que en el debate del plan de estudios, no debe olvidarse que la formación del abogado debe abrirse más allá de los meramente positivo, que las ciencia del derecho cada vez se torna más transdisciplinar, requiriendo del auxilio y complementación de otras disciplinas sociales como la economía, la sociología, la psicología, etc.- Que ese debe ser el sentido en la formación del nuevo abogado, no una persona que esté encerrada en la regla jurídica o en la norma. Luego el Dr. Mayón en su condición de Director del Instituto de Derecho Político y Constitucional, enunció una situación que observa en la materia "Historia Constitucional", considerando que la misma si se mantiene verdaderamente como historia institucional y constitucional desde la Colonia hasta nuestros días, considera que la materia debería ubicársela en el plan de estudios como posterior a "Derecho Político", por cuanto resulta difícil de explicar sistemas de estado, federalismo y unitarismo, las idea constitucionales, etc. ,sin que hayan tenido una base de derecho político.- Por último se comprometieron en las próximas semanas a remitir electrónicamente el desarrollo de las presentes ideas, así como nueva ideas que surjan del debate entre las Cátedras.-

No siendo para más, se da por concluida la reunión, siendo las 19:30 Hs.-

ACTA N° 4

En la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de agosto de 2011, siendo las 17:10 Hs. se constituye la comisión de "Derecho Público" del programa de análisis, estudio y formulación de propuestas para la reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía, con la presencia del Abog. Ángel Eduardo Gatti (consejero directivo en representación del claustro de profesores), Abog. Vicente Atela (consejero directivo en representación del claustro de profesores), Abog. Gonzalo Fuentes (coordinador de la comisión) Sr. Damián Brumer (Consejero directivo en representación del claustro de estudiantes), el graduado Nicolás Meschiany, y los profesores Abog. Ramiro Pérez Duhalde (Profesor Titular ordinario de Derecho Penal I, Cátedra II), Abog. Ernesto Domenech (Profesor Titular ordinario de Derecho Penal I, Cátedra I y en su condición de Director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales UNLP), Abog. Moretti (Profesor Adjunto ordinario de Derecho Penal I, Cátedra I), y la Profesora Abog. Maria del Carmen Betti (Profesora Adjunta ordinaria de "Derecho de Minería y Energía").- Se deja constancia que para la fecha fueron invitados para participar de la reunión los Profesores Titulares de "Derecho Penal II" –ambas Cátedras-, no habiendo participado del encuentro.-

En el transcurso del encuentro, se intercambiaron opiniones acerca del perfil profesional del abogado en la actualidad, así como reflexionar acerca de cuáles deberían ser los contenidos mínimos que se deben impartir a un alumno universitario, encontrándose de acuerdo los presentes en que resulta necesario que los alumnos antes del estudio del derecho penal o las disciplinas vinculadas al derecho penal, tengan aprobada la materia "Derecho Constitucional", por cuanto resulta indispensable que tengan aprendido los principios de la constitución que luego aplicarán al derecho penal (art. 16, 18, 19, 75 inc. 20 CN), siendo que de ésta manera se produce un aprendizaje más completo, evitando que el profesor de derecho penal vaya y venga en la transmisión de conocimientos propios del derecho constitucional y más luego la enseñanza del derecho penal.- También surgió como reflexión –sin resultar la misma una afirmación categórica o de carácter definitivo que la enseñanza del derecho penal y procesal penal, se enseñara completamente en un módulo anual que contenga las tres materias de manera relacionadas o vinculadas (Derecho Penal I, Derecho Penal II y Derecho Procesal I), modulo que en todo un año de la carrera, todos los alumnos vieran los contenidos de las tres materias.-

En relación a la necesidad de enseñar nuevos contenidos o disciplinas vinculadas al derecho penal, surgió un rico debate entre los presentes por cuanto el Prof. Pérez Duhalde entiende que antes que sobrecargar al alumnos con disciplinas vinculadas al derecho penal, el considera más sensato que el alumno aprenda "bien" derecho penal y código penal, antes que otros conocimientos que no resultan determinantes.- Esta postura la sintetizaba en la siguiente expresión "... prefiero un abogado que sepa bien el código penal, y mas no uno que sepa un poco de código penal, un poco de criminología, un poco de psicología o antropología, etc...".-

En un sentido parcialmente opuesto el Prof. Domenech entiende que debe brindarse al alumno otros conocimientos más allá del Código Penal y su interpretación que hace la doctrina o la jurisprudencia, entendiendo que se hace necesario que el alumno sepa conocimientos mínimos de otras disciplinas que se relacionan con el derecho penal (medicina legal, criminología, etc.), por lo que entiende éste profesor que debe darse al alumnos de grado una visión más amplia o compleja del derecho penal, que vaya más allá del mero conocimiento del código penal.- Preguntado ambos profesores acerca de si se mantuviera el esquema curricular actual de dos materias teóricas (Derecho Penal I y Derecho Penal II), se podría complementar con otros recorridos a través de formato de "seminarios" o "talleres de actualización o complementación", los dos manifestaron que no podían emitir una opinión de carácter definitivo, pero que cualquier disciplina o materia que tendiera a mejorar los conocimientos en materia de derecho penal, lo veían con buenos ojos.- Preguntados nuevamente, qué temáticas o seminarios considerarían valiosos para la formación de un alumno de grado,

volvieron a reiterar que no se animarían en esa instancia a una resolución definitiva, aunque el Prof. Domenech expresó que podrían ser seminarios como los que actualmente él dicta en el marco del postgrado y que se establece un cupo de alumnos avanzados del grado en su modalidad del seminario de grado.- Así quedó como esbozado en voz alta como seminarios temáticos vinculados a la antropología, a la criminología, etc., en tal sentido Atela manifestó que si ello también podría versar sobre "Régimen Penal Adolescente" o "Fuero Penal Juvenil" ya que consideraba –aunque manifestó que no es docente ni especialista en derecho penal- que observaba ciertos déficit formativos en el asunto, lo que fue considerado por los Profesores Domenech-Pérez Duhalde y Moretti como posible propuestas a considerarse.-

La Profesora Betti conforme su formación personal y profesional hizo hincapié en la importancia del estudio, principalmente, del derecho de minería y energía en su contexto actual. Planteó las dificultades que está teniendo nuestro Estado en sus diversas esferas en lo que hace al control de la explotación de los recursos naturales, principalmente por parte de empresas extranjeras. Manifestó como un gran problema a resolver la formación de abogados que contribuyan como profesionales y que se interesen en el tema para que colaboren con la sociedad en la protección de los recursos anteriormente nombrados. A su vez, dejó en claro, que cree absolutamente necesario que desde la facultad se asistan a diversos lugares neurálgicos en lo que hace a la materia como por ejemplo Atucha, YPF, etc. Cree que teniendo contacto directo con la realidad más allá de las aulas se va a logar un verdadero interés de los futuros abogados en el tema.

Preguntados acerca del proyecto experimental de "Derecho Penal I" y "Derecho Penal II", que se dictan ambas materias bajo un régimen de cursada intensiva semestral, se le interroga al profesor Domenech si existe un relevamiento o evaluación de cómo ha funcionado esa experiencia, si la misma ha resultado favorable o ventajosa en el aprendizaje del derecho penal, manifiesta que no existe una evaluación formal o informal, sino lo que se ha recogido en la experiencia como docente.- Que el resultado no ha sido medido, pero que su experiencia le indica que su resultado depende "necesaria e indispensablemente" de la articulación y coordinación que exista entre los docentes que dictan la primera parte (Derecho Penal I) y los que dictan la parte especial de los delitos (Derecho Penal II), por cuanto este proyecto experimental lo que busca es que el alumno aprenda simultáneamente los conceptos relativos a la teoría del delito y en paralelo va aprendiendo los delitos en particular en cuanto a sus figuras, composición, elementos de la conducta típica antijurídica, etc.- Pero entiende el Prof. Domenech que es fundamental la coordinación y articulación de todas las clases, entre los que dictan la teoría general del derecho penal y los que dictan los delitos en particular.-

En lo que respecta a la formación del alumno más allá del aula de clase, ambos docentes titulares manifestaron que no verían con malos ojos el hecho de hacer pasantías en el poder judicial en cualquiera de sus esferas en lo que hace al derecho penal como ser colaborar con fiscales, defensores oficiales, jueces, etc. Al mismo tiempo plantean que no están convencidos del todo si estas "salidas" tienen que ser en el marco de las clases teóricas del derecho penal o en las prácticas de adaptación profesionales. De lo que sí están seguros es que es absolutamente necesario que el alumno se "nutra" del afuera, de la realidad social. Domenech en referencia a este punto planteó que en Israel por ejemplo los aspirantes a médicos antes de iniciar su carrera, en la etapa previa a la misma pasan meses dentro de un hospital. A su vez, el Dr. Domenech planteo que el tribunal en el que él trabaja está siempre abierto a sus alumnos, que constantemente los invita a participar y a formarse en el mismo.

En lo que respecta a las salidas del curso, Meschiany sostuvo que desde su experiencia en lo que hace a las visitas a unidades penitenciarias, él es crítico de ir porque planteó que las cárceles no son zoológicos y que en caso de que los alumnos concurran en el marco de una visita organizada por la Universidad Nacional, más precisamente por la facultad de Derecho, esta tiene que tener alguna finalidad de tipo constructiva. Afirmó que esa visita tiene que dejar algo positivo tanto para los alumnos como para los internos más allá del contacto.

Por último sostuvo Atela, como reflexión personal, que observaba cierto relegamiento o falta de continuidad en la formación penal del alumno, quedando plasmado una preponderancia en la formación civilista por sobre la del derecho penal, siendo que el alumno termina su recorrido vinculado al derecho penal con la aprobación de la materia "Derecho Procesal I" y más luego tiene dos (2) años más de carrera, al menos en lo formal del plan de estudios, sin que vea ninguna materia o disciplina vinculada o complementaria al derecho penal.- Al decir de Atela, es como que el alumno universitario luego de que aprueba la materia "Derecho Procesal I", transcurre su vida académica universitaria al menos por 2 o 3 o 4 años más hasta que se gradúe, sin que estudie o vea alguna disciplina vinculada al derecho penal.- En esta condiciones es difícil o complejo mantener una exigencia de un mejor nivel en la formación del alumno en materia penal, cuando la última materia que estudia dista de varios años desde su aprobación hasta que se gradúa como abogado.- Esta situación –en la opinión de Atela- debería reverse por cuanto el perfil profesional del abogado en nuestros días es muy amplio en cuanto a sus posibilidades o incumbencias del derecho penal (fiscal, juez correccional, juez criminal, juez de casación, abogado particular, asesor legislativo, fiscal de cámara, fiscal de casación penal, defensor oficial, defensor general, defensor de casación penal, relator o instructor judicial, investigador en materia penal, mediador en cuestiones penales que la ley autoriza, etc.).-

Habiéndose evacuado las consultas de los consejeros directivos y presentes en el encuentro, se agradece la participación de los profesores indicados en el encabezamiento, y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión.-

ACTA N° 5

En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de Septiembre de 2011, siendo las 17:00 Hs. se constituye la comisión de "Derecho Público" del programa de análisis, estudio y formulación de propuestas para la reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía, con la presencia del Abog. Vicente Atela (consejero directivo en representación del claustro de profesores y vicedecano de la facultad), la Abog. Rita Gajate (Secretaria académica de la facultad), una alumna en representación de la agrupación estudiantil Franja Morada, otros dos alumnos que representan a la agrupación estudiantil Construyendo Derechos, el Sr. Damián Brumer (Consejero directivo en representación del claustro de estudiantes), el Abog. Gonzalo Fuentes (en su carácter de Coordinador de la Comisión), los graduados Nicolás Meschiany y Jorge Vázquez, la profesora de la materia "Derecho Político" Abog. Verónica Picone y los profesores Abog. Pedro Luis Soria (Profesor Titular de Derecho Procesal I, Cátedra 1), Abog. Emir Caputo Tártara (Profesor Titular de Derecho Procesal I, Cátedra 2), Abog. Valeria Huenchiman (Jefe de Trabajos Prácticos de la materia "Derecho Procesal I"). Se deja constancia que para la fecha fueron invitados a participar de la reunión los Profesores Titulares de "Derecho Procesal II" –las 3 Cátedras-, no habiendo participado ninguna del encuentro, habiendo recibido correo electrónico del Profesor Eduardo Oteiza quien manifiesto imposibilidad de concurrir por encontrarse en

evento académico en el exterior. También fue citado para el día de la fecha el Director del Instituto de Derecho Procesal, sin que hubiere asistido ningún representante.

Luego de diversos saludos coloquiales y amistosos entre los distintos miembros de la comisión, abre la misma la Sra. Secretaria Académica Rita Gajate informando sobre el proyecto de estudio de reforma del plan de estudios. Manifiesta que el plan actual tiene más de 50 años y que a su vez se encuentra desactualizado, que la posibilidad de reforma responde a una necesidad imperiosa en lo que hace al perfeccionamiento en la formación académica de los futuros abogados.

A continuación el Abog. Fuentes y el Abog. Meschiany le manifiestan a los docentes titulares presentes, la modalidad de trabajo que viene llevando a cabo la comisión, la que consiste en escuchar a todos los profesores titulares y las propuestas de sus cátedras en lo que hace a la ubicación de la materia dentro del plan de estudios, si creen que se encuentra bien ubicada o no, si las materias correlativas requeridas son adecuadas, etc.

Una vez hecha esta introducción toma la palabra el Abog. Soria, quien manifiesta tener la idea clara. Plantea que la materia se encuentra estrictamente vinculada con el ejercicio de la profesión de abogado. Que sus contenidos son esenciales para llevar al "campo" los diversos derechos reconocidos en los códigos de fondo. Plantea que al egresar de la facultad, los distintos jóvenes abogados entran en la denominada "Crisis del recién egresado" en la cual se encuentran con una realidad notoriamente distinta en lo que respecta al derecho, de lo aprendido en las aulas. A su vez, manifiesta que el egresado olvidó muchos temas de los aprendidos a lo largo de la carrera.

Siguiendo con este análisis crítico dice Soria que la materia Derecho Procesal I está compuesta de muchísimos elementos lo que la hacen una materia muy rica en cuanto a su contenido. Luego, propone dividir a los dos Derechos Procesales existentes actualmente en el plan de estudios en tres materias distintas, a saber "Derecho Procesal Parte General", "Derecho Procesal Penal" y "Derecho Procesal Civil, Comercial, Laboral y Constitucional". Relacionado con lo mencionado en el párrafo anterior expresa que debería encontrarse la materia más adelante en lo que hace a su ubicación dentro del plan de estudios, ya que es una materia estructural de la carrera y porque al mismo tiempo, cree que desde que el alumno rinde la materia Procesal I hasta que se gradúa olvida muchos conceptos esenciales. A su vez plantea que las prácticas tal como están hoy no sirven para nada y deberían ser un objeto central en la formación de los abogados. Plantea que no cree que sea útil que se enseñen de forma conjunta las materias prácticas y teóricas dado que cree fundamental para primero aprobar los conocimientos de fondo y forma para después si, los prácticos. La supuesta articulación y coordinación que debería existir entre las clases teóricas y la práctica es muy difícil de concretar, en la realidad no existe.

A continuación el Abog. Caputo Tártara en primer término manifiesta coincidir plenamente con Soria en lo que hace a la división de los dos derechos procesales en tres materias distintas ("Teoría General del Proceso", "Derecho Procesal Penal" y "Derecho Procesal Civil y Comercial"). A su vez plantea la dificultad práctica que esto tendría entre otras cosas porque los alumnos nunca han querido incorporar nuevas materias, es un tema que hay que trabajar porque no se trata de reducir la discusión a si es una materia más o una materia menos, sino comprender que eso hace a un mejor aprendizaje. Cree que hace falta un cambio paulatino del plan de estudios, el que debe adecuarse al contexto actual en el cuál vivimos, la realidad del abogado de hoy es muy distinta a la que seguramente se tuvo en cuenta cuando se estructuró el actual plan de estudios. A diferencia de Soria, el Prof. Caputo Tártara considera que la materia Derecho Procesal I debe estar en tercer año de la carrera, luego que el alumno haya aprobado Derecho Constitucional, Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Penal I y II, entre otras.

Caputo Tártara hace mucho énfasis en lo que hace a la futura materia Derecho Procesal Parte General, la que debe centrar su estudio en lo que es la jurisdicción, legitimación procesal, acción, la excepción, la prueba, la sentencia y los recursos todos ellos en forma teórica. A su vez, esta nueva materia deberá contener un estudio profundizado de los Derecho Humanos en su faz procesal, en el sentido de cómo se reclaman en los organismos internacionales. Plantea que debe haber una preparación adecuada e integral de los docentes que vayan a dictar la nueva materia. Esta debe ser estudiada desde un marco amplio y omnicomprensivo del proceso en general, siendo introductoria a lo que luego deben ser las reglas del proceso penal y el proceso civil y comercial.

Continúa Caputo Tártara expresando que el Derecho Procesal Penal debe estar adecuando planteando la necesidad de una reforma del programa de la materia. Cree que necesario abordar el estudio de la materia desde el punto de vista no solo normativo sino también doctrinario. Por eso la idea de "teoría general del proceso" como ya lo tienen algunas facultades de derecho del país. En el mismo sentido que Soria cree que las prácticas procesales deben estudiarse en forma posterior a la parte teórica pero deben estar integradas. Esta integración la plantea desde el punto de vista que el alumno al momento de saber con quién va a cursar Procesal Penal parte teórica debe saber inmediatamente con quién cursará la parte práctica; y en caso de que el alumno de la materia libre la facultad debe implementar un sistema para que de forma obligatoria en el año siguiente a que el alumno rindió la materia teórica curse la práctica.

El Prof. Caputo Tártara -al igual que Soria-, es crítico de cómo se dictan las prácticas en la actualidad. Dice que esta materia no se condice con la realidad fáctica en muchas ocasiones. Luego retoma la palabra el Titular de la Cátedra 1 (Soria) quien plantea que la formación universitaria del abogado debe ser amplia e integral y no sólo para ir a Tribunales (modelo abogado litigante). En relación a este punto plantea que el Derecho sin proceso no sirve, de ahí la importancia del estudio profundizado de la materia en cuestión. Cree Soria que con el nuevo plan de estudios hay que formar abogados con cabeza abierta que entre otras cosas aprendan a soportar la sentencia adversa.

A continuación la Secretaria Académica le consulta a ambos profesores su postura sobre el estudio experimental del Derecho Penal I y II en conjunto a lo que ambos docentes se oponen de forma rotunda, porque entiende que son derechos procedimentales que tienen principios específicos totalmente diferenciados. Luego Caputo Tártara plantea la importancia de las salidas del aula, siendo que estas experiencias hacen que el alumno comprenda o fije conceptos teóricos en su contexto de realidad. Cree que ayuda a los alumnos a conocer, pensar y decidir. Plantea que cuando el alumno sale pero no tiene un conocimiento íntegro de la materia esto no lo ayuda en nada. Debe existir una planificación académica en cuanto al
sentido y objetivos que se plantean con esa experiencia extra aúlica.

Soria manifiesta que es materia pendiente crear el Instituto de Derecho Procesal Penal dentro del ámbito de la facultad. Manifiesta que puede ser un espacio muy enriquecedor tanto para alumnos como para docentes, graduados e investigadores de la disciplina. Obsérvese que en la actualidad existe un Instituto de Derecho Procesal, el que pretende abrazar a todos los conocimientos de todos los derechos procesales específicos. La creación de un Instituto de Derecho Procesal Penal es un viejo anhelo, sostiene Soria, que

nunca pudo concretarse. Cambiando rotundamente de tema y luego de la consulta hecha por la Abog. Gajate sobre la cantidad de horas de la materia, Soria plantea que hacen falta más docentes para que de esta manera puedan haber más comisiones y así el profesor pueda tener contacto directo con el alumno en grupos no mayores a treinta personas. Considera que las clases y comisiones no deben superar los 30 alumnos.

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, Caputo Tártara adhiere a lo expuesto por Soria y, a su vez, manifiesta que es necesario formar nuevos docentes y seguir perfeccionando a quienes ya lo son.

Luego el Consejero Atela les pregunta a ambos profesores Titulares si ellos piensan que la facultad no forma muchos penalistas porque las materias vinculadas se ven temprano en la carrera, y si piensan que una buena solución al tema sería la de dar talleres optativos, seminarios, o temáticas vinculadas al derecho penal en los tramos superiores de la carrera, en razón que como hoy está planteado los alumnos terminan en el 3er. año el "Derecho Procesal Penal" y continúan como mínimo 2 años más de la carrera sin ningún contenido vinculado a la disciplina penal o procesal penal. Ambos docentes titulares responden que una buena solución sería crear el Instituto de Derecho Procesal Penal.

Luego el Consejero Brumer pregunta a ambos docentes si consideran que dentro de la disciplina vinculada a la que ellos dictan, consideran necesario incorporar la materia "Derechos Humanos". Tanto el Prof. Soria como Caputo Tartara indican que sin lugar a dudas, en la actualidad los derechos humanos trasvasan transversalmente a todas las ramas del derecho, máxime cuando a partir de la reforma constitucional de 1994 permite la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos con status constitucional. El Prof. Caputo Tártara comenta una anécdota de su experiencia personal como asesor del congreso de la nación, cuando se proponía dotar ratificación legislativa a lo que luego fue la Ley Nacional 23.077, para continuar expresando que más aún constituciones provinciales han incorporado antes de 1994 como anexos complementarios a sus constituciones la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y otros textos de derechos humanos (Por ej. San Juan, Neuquén, etc.).

Continúa expresando Caputo Tártara que en sus clases hay algunos contenidos vinculados a los derechos humanos y el derecho procesal penal, así como jurisprudencia vinculada al tema, pero que hay cuestiones como ser de derecho procesal de cómo reclamar ante organismos internacionales, nunca alcanza el tiempo, aunque se dan pinceladas generales.

Solicita el uso de la palabra la Prof. Picone quien manifiesta la necesidad de generar un espacio cognitivo y formativo en materia de derechos humanos, aún cuando pueda vinculárselo o enseñárselo al alumno en los contenidos de otras disciplinas como derecho político, derecho constitucional, derecho internacional público, etc.; pero es necesario que exista una disciplina específica. Además plantea que en el debate de la reforma del plan de estudios debe incorporarse una disciplina acerca de la historia y realidad latinoamericana, como existía en épocas pasadas de nuestra facultad, cree que lo hubo en el año 1973 o 1974.

Retomando el tema de evaluar la posibilidad de incorporar una nueva disciplina que tendría los contenidos de materia introductoria al derecho procesal en general ("Teoría General del Proceso"), el Prof. Caputo Tártara manifestó que la propuesta que ha presentado y que envió por correo electrónico, la ha remitido a todos sus pares de Cátedra para que opinen y además se comprometió a hacer una reunión dentro de su misma Cátedra e inter Cátedras para recoger opiniones, siendo que las conclusiones que se arriben nos las enviará más adelante.

Agradeciendo la presencia y participación de todos, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 19:30 Hs.-

ACTA N° 6

En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de septiembre de 2.011, siendo las 17 Hs. se constituye la Comisión de Derecho Público del "Programa para el análisis, evaluación y propuestas para la Reforma del Plan de Estudios" con la presencia del Consejero Vicente Santos Atela (claustro de profesores), el Consejero Joaquin Muele Soler (claustro estudiantil), el Consejero Damián Brumer (claustro estudiantil), el Abog. Gonzalo Fuentes en su condición de Coordinador de la Comisión, el Abog. Nicolás Meschiany en su condición de graduado, la Srta. Barbara Drake (Presidente del Centro de Estudiantes), y los profesores Abog. Miguel Angel Marafuschi (Profesor Titular de la materia "Derecho Administrativo I", Cátedra II), Abog. Carlos Andreucci (Profesor Titular de la materia "Derecho Administrativo I", Cátedra I), el Abog. Carlos Mamberti (Profesor Adjunto de la materia "Derecho Administrativo I", Cátedra II).-

Se deja constancia que para la misma reunión fueron convocados los profesores titulares y adjunto de la materia "Derecho Administrativo II", no asistiendo ninguno.-

Asimismo se deja constancia que el Sr. Secretario del Instituto de Derecho Administrativo, Abog. Marcelo Lamoglia, envió a la dirección electrónica oficial una propuesta y análisis crítico de las materias "Derecho Administrativo I" y "Derecho Administrativo II", elaborado junto a los docentes de ambas materias e integrantes del citado instituto.-

Comenzando la reunión el Consejero Atela dá la bienvenida a los profesores participantes, y les informa los alcances de lo resuelto por el Honorable Consejo Directivo, tendiente a generar un espacio de análisis crítico, evaluación y propuestas del plan de estudios actual de la carrera de procurador, abogado y escribano.-

Comienza haciendo uso de la palabra el Prof. Marafuschi expresando que esto de la reforma del plan de estudios no es nuevo, que su experiencia y paso como Decano de la institución, se intentó actualizar y mejorar el plan de estudios de la carrera.- En lo que hace a la materia a su cargo, expresa que en oportunidad de viajar a universidades españolas pudo observar programas de su materia, así como lo contenidos que desarrollan, concluyendo que el programa que tiene su materia en ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, resulta de primer nivel, no teniendo nada que endilgarle o marcarles déficits, ya que se enseña una muy buena base de lo que es el derecho administrativo.- El Prof, Marafuschi marca en su experiencia como docente que los alumnos de la materia "Derecho Administrativo I" no realizan una comprensión omnicomprensiva y totalizadora de la disciplina, por el contrario, observa que si bien todos los conceptos y unidades temáticas está integradas y concatenadas, existe un déficits en los alumnos que aprobando el primer exámen parcial, cuando van a la segunda parte, pareciera que no vinculan los conceptos, por lo que recomienda en su materia la utilización de un exámen final totalizador o integrador.- Que ese déficits no se observa en los alumnos que no acreditando la calificación mínima en la primera o segunda evaluación, deben concurrir a un coloquio final integrador (ello claro, con aquellos alumnos que van al coloquio final bien estudiados).-

A su turno el Prof. Andreucci confirma esa percepción final del Prof. Marafuschi, por lo que considera que quizás habría que incluir al menos en lo que hace al "Derecho Administrativo I" una mayor carga horaria

o intentar semestralizar a la materia.- Manifiesta que la materia debe mantener su denominación y contenidos, ya que en otras universidades y escuelas de derecho se la ha transformado en "Elementos de Derecho Administrativo", haciendo una especie de introducción al derecho administrativo, cuando no lo es.- Por ello, por tradición e historia en ésta institución de La Plata, se debe mantener la división y denominación en "Derecho Administrativo I" y "Derecho Administrativo II".- Con la materia que él dicta se inicia al alumno en el conocimiento y aprendizaje de esta parte del derecho público, sus principio y su lógica, ya que no es la misma que traen lo alumnos habiendo ya aprendido 3 o 4 materias del derecho civil.- Expresa que sería oportuno que además de las correlatividades actuales existentes a su materia, se debería tener necesariamente "Derecho Público Provincial y Municipal", condición que en la actualidad no se exige, y muchas ocasiones los alumnos cursan la materia sin tener conocimientos básicos de los que es el Estado Provincial, la organización de sus poderes y la burocracia organizacional de la administración pública provincial.-

Retomando intervención el Prof. Marafuschi expresa que no necesariamente hay que semestralizar la materia sino que debe funcionar el Instituto de Derecho Administrativo, ya que no funciona, ni realiza actividades ni talleres, ni convoca a las Cátedras, ni realiza investigación, ni ninguna actividad, siendo que en su época como estudiante existían en la Facultad grandes maestros del derecho administrativo, como el Dr. Bartolomé Fiorini, que se reunía el instituto los días sábados junto a docentes y alumnos interesados, realizando talleres de análisis de doctrina y fallos, actividad extra curricular que hoy no existe.-

Interrumpe el Prof. Atela, interioriza y pregunta a los profesores asistentes que opinan si manteniendo la actual estructura curricular, se agregaran en un último año de la carrera, algún seminario bimestral o trimestral que contenga desarrollos específicos de la disciplina, siendo que los tres profesores presentes (Marafuschi, Andreucci y Mamberti), no expresan una decisión definitiva o afirmativa, sino que manifiestan que toda profundización del conocimiento siempre será buena e importante para el alumno.-

El Prof. Andreucci expresa que hoy se está desarrollando áreas del conocimiento del derecho administrativo, como ser derecho administrativo del turismo o derecho administrativo vinculado a la materia ambiental, que no es visto al menos en la materia "Derecho Administrativo I".-

Que el Prof. Mamberti expresa que la comisión a su cargo se encuentra bajo un "régimen experimental" que consiste en ofertar la comisión a los alumnos con una mayor carga horaria, que consiste en mantener un régimen de clases teóricas idéntico a las demás, con una clase más por semana que se destina a actividad práctica y de procedimiento administrativo.- Que esta experiencia la viene llevando a cabo desde hace más de 5 o 6 años, o más, no recuerda con precisión, y lo que si recuerda es que tiempo (años) atrás se presentaron informes de evaluación y resultados de la experiencia.-

Consultado el profesor por el Consejero Atela, si la experiencia ha servido, manifiesta que si pero que lamentablemente como importa una carga mayor a las otras comisiones, los alumnos lo ven como un sobrepeso y tienden a ocupar la otra oferta académica.-

Retomando la palabra el Prof. Andreucci expresa la importancia que lo alumnos comprendan y aprehendan el sentido público del derecho administrativo, que tiene una lógica y principios diferentes a los que venían viendo hasta ese momento los alumnos, y que la experiencia de la práctica a veces genera un aprendizaje mayor.- Que en el sistema del plan de estudios actual no existe una práctica profesional destinada al procedimiento administrativo, a cómo hacer las presentaciones y reclamos en la sede administrativa, que el actual perfil del plan circunscribe las práctica a las "prácticas civiles y comerciales" y a las "prácticas penales".-

El Consejero Atela le pregunta si ve como necesario hacer una materia práctica más que comprenda las prácticas en derecho administrativo, responde que no lo puede afirmar ni negar, porque sabe que agregar una nueva materia quizás genere fuertes oposiciones o rechazo, pero si lo que puede afirmar es que el conocimiento que se aprende con la práctica otorga resultados mejores.-

En tal sentido completa la idea el Prof. Mamberti diciendo que a él le pasa que una cosa es enseñar el acto administrativo, y los elementos del mismo, y otra cosa es haciéndolo y mostrando a los alumnos una resolución administrativa.- Manifiesta que lo mismo pasa en otra materia en régimen experimental, que el "Derecho Civil III" a cargo de la Prof. Franchini, la que obtiene otros resultados.- Una cosa es hablar del contrato en abstracto y el Código Civil, y otra cosa con alumnos que leen e interpretan un contrato y también se animan a redactarlo.-

Continuando con el debate e intercambio de ideas el Prof. Andreucci y Mamberti consideran que debe mantenerse la división actual del derecho administrativo en las materias "Derecho Administrativo I" y "Derecho Administrativo II", no caer en la desvirtuación de una disciplina de "Elementos de Derecho Administrativo" por cuanto no hay elementos, sino auténtica teoría del derecho administrativo como rama clásica del derecho público, la función administrativa, y la organización administrativa del Estado, etc..- Preguntados por el Abog. Fuentes si consideraban que la materia se encuentra bien ubicada en el actual plan de estudios –4to año, siendo que los tres profesores presentes consideran que está bien ubicada en el año que está, que en relación a ello no tienen observaciones, aunque con la salvedad ya indicada que estiman necesario contar como correlativa la asignatura Derecho Público Provincial y Municipal.-

Siendo que se agotó el debate y las observaciones puestas de manifiesto, los presentes agradecen la invitación y participación en el proceso de análisis de la reforma del plan de estudios, no siendo para más se da por concluida la reunión siendo las 18: 35 Hs.-

ACTA N° 7

En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de octubre de 2.001, siendo las 17:10 Hs. se reúnen los miembros de la Comisión de "Derecho Público", con la presencia del Abog. Vicente Santos Atela (Consejero Directivo del claustro de profesores), Abog. Nicolás Meschiany (graduado), el Prof. Héctor Luján Iacomini (Prof. Titular de Derecho de Minería y Energía, Cátedra I), el Prof. Héctor Tisera (Prof. Adjunto de Derecho de Minería y Energía, Cátedra II), el Prof. Carlos Villulla (Prof. Adjunto de Derecho de Minería y Energía, Cátedra I), la Prof. Maria del Carmen Betti (Prof. Adjunto de Derecho de Minería y Energía, Cátedra I y II), con la coordinación del auxiliar docente Abog. Gonzalo Fuentes.-

Que interiorizados de los alcances de la convocatoria y las consultas que se vienen realizando a las diferentes materias y cátedras acerca de la reforma del plan de estudios, comienza haciendo uso de la palabra el Prof. Iacomini quien manifiesta que la disciplina derecho de minería y energía es una disciplina que no sólo cumple con la enseñanza de un código de fondo, sino que se constituye en una disciplina tradicional en la formación de nuestros abogados.- Ya el propio Joaquín V. González ha sido un impulsor de la disciplina legislación de minas en la Universidad de Buenos Aires.- Consultado el profesor acerca de la ubicación de la materia en el actual plan de estudios como materia del 5to. Año de la carrera, considera que está bien, en

razón que la materia en el último tramo de la carrera, y luego que el alumno haya completado las materias civiles como el derecho administrativo, lo consideran apropiado.-

Esta misma conformidad con la actual ubicación en el plan de estudios es compartida por todos los docentes presentes (Betti, Tisera y Villulla).-

Acto seguido les informamos de la existencia de una propuesta formulada por el Prof. Pastorino para crear la materia "Derecho Ambiental", el Prof. Iacomini manifiesta que no está de acuerdo, si ella significa refundir las materias "Derecho Agrario" y "Derecho de Mineria y Energía", se perderá calidad en la formación de nuestros futuros abogados, que el derecho ambiental no tiene autonomía ni científica ni didáctica, que el derecho ambiental se enseña en el derecho civil cuando se analiza las restricciones al dominio del art. 2618 del C. Civil, en el derecho administrativo, en el derecho agrario, y también en el derecho de minería.- Que en la actualidad ellos –los docentes- dictan derecho ambiental aplicado a la legislación de minería, siendo un tema de actualidad a partir de la intensidad de la explotación minera que se ha generado a través de diversas normas de desregulación y promoción de la minería que se ha generado a partir de los años 90.-

Tomando la palabra la profesora Betti comparte lo dicho por el profesor Iacomini, en el sentido que ella también enseña la cuestión ambiental en su disciplina, acotando que cada vez se le dificulta más dictar todos los contenidos en un régimen de materia cuatrimestral, por lo que no sabe con certeza si debe aumentarse la carga horaria o algún otro tipo de esquema docente.- La profesora Betti reafirma la idea que debe mantenerse la disciplina, sosteniendo que en la actualidad son pocas las facultades que mantienen la disciplina, confundiéndola con otras como ser teoría de los recursos naturales o fusionando el derecho agrario con el derecho minero, siendo cosas bien distintas.- A mayor abundamiento, sostiene la profesora que en la actualidad, en momento que el país atraviesa una crisis energética, que no se vislumbran políticas públicas de largo plazo y definiciones estratégicas en materia energética, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no puede resignar que el derecho de la energía hace a la soberanía de la Nación y al desarrollo industrial y social del país.- Es una disciplina estratégica que no podemos resignar en la enseñanza y formación de nuestros abogados.-

Haciendo uso de la palabra el Prof. Villulla manifiesta no estar de acuerdo con lo expresado por el Prof. Iacomini acerca de la materia "Derecho Ambiental", entendiendo él que es una disciplina que se viene abriendo con fuerza en las carreras de abogacía, y que él estaría en principio de acuerdo, habría que analizar la propuesta, a cuyo efecto solicito tener una copia –el Sr. Coordinador de comisión se comprometió a remitirle electrónicamente una copia del proyecto del Prof. Pastorino- y se comprometió a remitir una opinión fundada a ésta comisión.- En lo demás comparte la opinión de los demás docentes en la necesidad de mantener la disciplina, y comparte con los asistentes su experiencia que desarrolla con todos sus alumnos todos los cuatrimestres a los que lleva a una visita académica a la localidad de Lima (Prov. de Buenos Aires) para que conozcan e interactúen con una vivencia real en la Central Atómica de Atucha, la que califica como positiva para los alumnos.-

Luego solicita hacer uso de la palabra el profesor Tisera quien manifiesta su experiencia en ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y su experiencia como Profesor titular de la materia "Derecho de los Recursos Naturales" en el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), comentando que él entiende que la disciplina que sólo abarca una visión sólo de los recursos naturales y su régimen constitucional y legal, no es lo mismo en cuanto a contenido y resultado a tener por un lado la materia "Derecho Agrario" y "Derecho de Minería y Energía", que intentar dar todo junto en una sola disciplina cuando son totalmente diferentes.- Una cosa es recursos naturales, otra cosa el propiedad agraria o minera, otra cosa es la empresa agraria o empresa minera, y sus respectivos regímenes jurídicos, que hablar sólo de recursos naturales.- En tal sentido, él como docentes de ambas universidades, manifiesta que no está conforme con lo que plantea como docente en la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.-

Retomando la palabra el Prof. Villulla manifiesta que está existiendo una tendencia en los últimos tiempos a simplificar la disciplina o fusionar todo en una disciplina que se ocupe de elementos de los recursos naturales, lo que hace perder no sólo importancia curricular de la disciplina sino en perder de vista por parte de la universidad pública que el derecho de la energía es una política estratégica de la Naciones modernas, así como la minería en el auge que está teniendo en la actualidad en algunas provincias argentinas.- Aunque –manifiestan todos los docentes a la vez- tampoco no resulta un tema menor en la Provincia de Buenos Aires con la importancia de las canteras y cementeras que existen en territorio bonaerense, comentando algunas problemáticas que están existiendo estos últimos semana en la ciudad de Tandil por la aplicación de una ley provincial que pone límites a la explotación de canteras.- Por último manifiestan que la profesora Julia Catalina D Anna no ha asistido a la reunión porque se encuentra con carpeta médica y recuperándose de salud, pero que remitirá algunas reflexiones y aportes por correo electrónico.-

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión, agradeciendo la presencia de los asistentes.-

A continuación, siendo las 18:20 Hs. se hacen presente los profesores invitados de la materia "Derecho Social" (del Trabajo y la Seguridad Social), incorporándose al encuentro el Prof. Angel Eduardo Gatti (Profesor Titular de "Derecho Social", Cátedra I, el Prof. Arturo López Akimenco (Profesor Titular interino de "Derecho Social", Cátedra 3), la Prof. Patricia González (Profesor Adjunto de "Derecho Social", Cátedra 2), la Prof. Maria del Luján Regules (Auxiliar Docente de "Derecho Social", Cátedra 3), la Prof. María Paula Descalzo (Auxiliar Docente de "Derecho Social", Cátedra 2), el Prof. Enrique Catani (Auxiliar Docente de "Derecho Social", Cátedra 1), el Prof. Juan Ignacio Orsini (adjunto Cátedra 1) y el Abog. Pablo Muñoz (graduado).-

El Prof. Gatti manifiesta que el Prof. Titular de la Cátedra 2 de "Derecho Social" Abog. Oscar ZAS no ha podido concurrir al encuentro por inconvenientes de último momento con un familiar.- Dando comienzo al encuentro, el Consejero Atela agradece la asistencia de los profesores y los informa de los alcances del programa de análisis, evaluación y propuestas para la reforma del plan de estudios, comenzando por exponer el Prof. López Akimenco, el que hace entrega de algunas reflexiones que ha escrito acerca de la reforma del plan de estudios, expresando que se han reunido los profesores titulares de las diferentes Cátedras de su materia e intercambiado opiniones.- En tal sentido, comparte en general las ideas que conversó con el Prof. Gatti, pero no está de acuerdo en desdoblar la materia en dos disciplinas como ser "Derecho Individual del Trabajo" y otra "Derecho Colectivo de Trabajo y Previsional".- Considera que la materia debe seguir siendo una sola, pero que debería pasarse a un régimen de materia semestral.- Reconoce las dificultades para poder dictar la materia en 4 meses, y que se dicten todos los conocimientos del derecho individual y colectivo del trabajo, y derecho previsional.- En su experiencia docente, expresa que nunca se da derecho previsional y muy poco de derecho colectivo del trabajo.- A su entender, es muy importante todo, pero que no podemos seguir con un régimen de enseñanza que sólo forme en derecho individual (LCT) y muy poco del derecho

colectivo.- Considera fundamental también enseñar práctica del derecho del trabajo, y que los alumnos conozcan del ejercicio práctico profesional del éste derecho.- Plasmando sus ideas, hace entrega al coordinación de comisión de un ejemplar escrito de su propuesta e ideas.-

A continuación hace uso de la palabra el Prof. Gatti, quien manifiesta que él está de acuerdo con que en la actualidad no llegan a enseñar todos los contenidos de la disciplina, y ni que hablar del derecho colectivo del trabajo que pocas veces se llega a profundizar y muy poco se enseña del derecho previsional.- Que en su idea sería necesario desdoblar las materia en dos áreas disciplinares como ser a) derecho individual del trabajo, y b) derecho colectivo del trabajo y derecho de la seguridad social, ambas disciplinas inter relacionadas y correlativas de sí mismas.-

El Prof. Akimenco no está de acuerdo con desdoblar la materia, ya que a su entender las contingencias de la seguridad social, por ejemplo una enfermedad laboral, ello se debe aprender junto con el derecho individual.-

Continúa el Prof. Gatti argumentando que como está hoy la enseñanza de la disciplina no se cumplen con los objetivos formativos, máxime cuando siquiera se puede alcanzar a enseñar los conceptos de la teoría general como sistemas de protección laboral.- Con ello quiero decir que hoy con los procesos de integración política, cultural y jurídica, debemos preparar profesionales del derecho que conozcan también de ello, porque el Mercosur y otros procesos de integración supranacional con todos su déficit y falencias, pero son realidad. Entiende que además existe un déficit en la enseñanza práctica, siendo fundamental que los alumnos aprendan articular teoría y aplicación práctica del derecho.- También entiende que hay que modificar el régimen de correlatividades previas de la disciplina, ya que no puede enseñarse derecho laboral disociado de "Economía Política" y el "Derecho Comercial".- También manifiesta que si se diera la posibilidad de profundizar contenidos, está de acuerdo con que lo seminarios puedan ser un vehículo para continuar perfeccionando y profundizando el conocimiento disciplinar, que en el caso de su materia se podrían planificar seminarios vinculados a los fenómenos sociales y el derecho del trabajo, análisis de los principios filosóficos e ideológicos del derecho de trabajo, o el derecho del trabajo en la realidad sudamericana, etc.-

A continuación hace uso de la palabra el Prof. Orsini, el que manifiesta que también lo hace como Secretario del Instituto de Derecho Laboral de la unidad académica, compartiendo en líneas generales la situación de la materia, pero entiende que debe apuntalarse a enseñar teoría desde la historia del pensamiento del derecho laboral, así como de las situaciones de la realidad latinoamericana en aspectos vinculados al derecho del trabajo.- El actual plan de estudios se encuentra dirigido preponderantemente hacia el derecho privado, prueba de ellos es que el actual plan de estudios posee 5 materias destinadas al derecho civil, 2 al derecho comercial, 1 al derecho del trabajo, etc.- Y eso define el perfil de lo que formamos según ese modelo.- Esta situación tampoco responde a una realidad profesional ya que si uno observa la cantidad de litigios laborales, o como él mismo puede aportar como experiencia, la cantidad de causas en la Subsecretaria Laboral de la Suprema Corte de Justicia Provincial, se observa que son más las causas laborales que las propias de la Subsecretaria Civil y Comercial.- Es sólo dato estadístico pero que muestra una realidad.- Entiende también que debe propenderse a una mayor enseñanza práctica, que necesariamente debe articularse teoría con práctica.-

A continuación hace uso de la Prof. Patricia González manifestando que ella comparte lo expuesto por el Prof. Akimenco, siendo necesaria que aseguren el dictado de todos los contenidos de la disciplina, siendo muy dificultoso en la actualidad de cumplir con ese objetivo. No comparte la idea del Prof. Gatti en el sentido de enseñar aspectos jurídicos del sistema laboral que se vinculen con Mercosur o realidad latinoamericana, siendo partidaria de ocuparse más del sistema argentino, ya que los proceso de profundización que se pretenden, según su entender son más propios de la formación de Postgrado.- Que en lo demás, su experiencia le demuestra que nunca se llegan a dictar todos los contenidos de la disciplina como se encuentra en la actualidad.- Pide disculpas para retirarse por cuanto debe concurrir a dictar clases, agradeciendo la invitación.- Toma el uso de la palabra el graduado Muñoz quien acompaña la postura del Prof. Orsini, expresando que según su entender el perfil profesional que hoy se forma, se encuentra aislado de la realidad latinoamericana, así como del análisis de los fenómenos sociales que claramente se vinculan con los procesos económicos y con el derecho del trabajo.- Que en la actualidad sólo se forman abogados en el conocimiento de la ley de contrato de trabajo pero que falta también enseñanza práctica del derecho.- La Universidad debe propender a una formación más integral e integradora.- Agradece que lo autoricen a participar del encuentro, como asimismo solicita que le sean enviados todos los proyectos de reforma que fueran presentado, tomando nota el Consejero Atela e indicando que los próximos días les serán remitidos.-

A continuación hace uso de la palabra el Prof. Catani quien comparte la crítica a la duración de la materia, ya que es muy poco tiempo para desarrollar en su totalidad todos los institutos del derecho individual y derecho colectivo del trabajo, y además el derecho previsional.- Que nunca se llegan a dar todos los temas, siendo que esta circunstancia atenta a realidad como ser si no se profundiza o dicta derecho previsional, hoy es una veta profesional importante y que permanecerá en el tiempo ya que la gente seguirá envejeciendo y jubilándose, y nosotros no formamos abogados para ello.- Es más consideramos que el derecho previsional es derecho administrativo, cuando no lo son, y sólo se vinculan o relacionan.- Que en lo demás comparte lo expresado por el Prof. Gatti y el Prof. Orsini, aunque no está seguro que la solución única sea desdoblar la materia, pero si está convencido que debe tener una mayor carga horaria.-

El Consejero Atela pregunta a los presentes si la semestralización de la materia igualmente no atentaría contra la enseñanza de las tres partes disciplinares (derecho individual, derecho colectivo, y derecho previsional) ya que el docente estaría en la tentación de dar con mayor énfasis los contenidos que mayor conocimientos posee?, ¿O todos los profesores están capacitados para dar los tres aspectos centrales indicados?, respondiendo Gatti, Orsini y Catani, que es un riesgo que se corre, porque no todos los que conocen de derecho individual necesariamente conocen en profundidad el derecho colectivo o derecho previsional.- Cada profesor de la impronta que su experiencia personal, profesional y de conocimiento posee.- Akimenco indica que desde que se fue el Prof. Brito Peret no se profundiza en la Facultad el conocimiento por el derecho previsional.- A ello el Prof. Gatti indica que esa disciplina en su caso la aborda con una profesora capacitada en ello y que ejerce su función judicial en esa disciplina.- Por último hace uso de la palabra la Prof. Regules quien manifiesta que su experiencia docente le indica que no puede seguir dictándose la materia en cuatro meses, ya que ello atenta contra el dictado de todos los contenidos de la disciplina, que nunca se llegan a dictar todos los contenidos consignados en el programa.- Asimismo es muy importante que se profundice la enseñanza práctica, ya que en su función judicial, observa como los jóvenes graduados carecen de práctica o práctica profesional, atentando contra la excelencia formativa que debe aspirarse en la universidad.- En lo demás comparte en lo ya expresado por los profesores que la antecedieron en el uso de la palabra.-

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la reunión siendo las 20:35 Hs.-

ACTA N° 8

En la ciudad de La Plata, a los 13 días del mes de octubre de 2.011, siendo las 17:10 Hs., se constituye la comisión de "Derecho Público" del programa de análisis, discusión y propuestas para la reforma del plan de estudios, con la presencia del Consejero Directivo Abog. Vicente ATELA (claustro profesores), la Secretaria de Asuntos Académicos Abog. Rita Marcela Gajate, el graduado Abog. Nicolás Meschiany, la profesora titular interina de "Finanzas y Derecho Financiero", Cátedra 3, Prof. Roxana Gamaleri, el profesor adjunto ordinario de la materia "Finanzas y Derecho Financiero", Cátedra 2, Abog. Luis Menucci, y el coordinador de comisión Abog. Gonzalo Fuentes.-

Explicadas las razones de la convocatoria, informa el Consejero Atela a los presentes, de los alcances del programa impulsado por el Consejo Directivo de la institución y sus objetivos.- Comienza haciendo uso de la palabra la Prof. Gamaleri quien hace una descripción de los contenidos de la disciplina, reconociendo que la misma posee diversos campos: derecho tributario, derecho financiero, y un derecho de las finanzas públicas; que aún cuando se concentra todo en una misma disciplina, y que de hecho así se mantiene por la historia de la disciplina en ésta Facultad de La Plata, en otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Palermo existen como materias separadas.- Preguntada por si ello –dividir la disciplina- es lo que se necesita o resulta lo conveniente, manifiesta que no necesariamente y que tampoco lo puede afirmar, lo que si puede decir de acuerdo a su experiencia docente que algunos temas vinculados a las finanzas públicas y a la planificación fiscal del Estado (presupuesto) no siempre se llega a enseñar con intensidad o profundidad, siempre presuponemos que ello lo aprendieron en derecho constitucional o en economía política –pero no siempre es así.-

La Secretaria Académica –Gajate- indica que ella como profesora de la materia economía política, y particularmente en los contenidos de su programa, se enseña el tema del presupuesto, su importancia, así como temas de financiamiento del sector público, banca pública, banco central de la república argentina, etc., pero que ello depende de qué Cátedra de la misma materia se hable.- Continúa diciendo Gajate de cómo se encuentra formulado actualmente el plan de estudios de la carrera, los alumnos comienzan en sus primeros pasos con la materia economía política, pero esos conocimientos –y sólo algunos de ellos como ser valor de dinero, intereses, inflación, etc.- que los puedan reafirmar en materias como derecho de las obligaciones, derecho de los contratos o en el derecho comercial, esos conceptos recién se vuelven a aplicar en la materia "Finanzas y Derecho Financiero" que dista a 2 o 3 años entre una y otra disciplina.- Es por ello que hay que articular los contenidos, y quizás modificar el lugar de posicionamiento de la materia "Economía Política".- Continúa la profesora Gamaleri indicando que existe en la actualidad un plano del conocimiento que tiene que ver con lo tributario y los aranceles (impuestos) aduaneros, como es los procesos de integración regional de las naciones (Mercosur, etc.), que hoy sólo se dictan conocimientos por demás básicos, no encontrándose comprendidos en la disciplina.- Se pregunta en voz alta si ello ¿se enseñará en el Derecho Internacional Público?.- Preguntados los profesores presentes si se desdoblara la disciplina en dos materias: "Finanzas Públicas" y "Derecho Tributario", los mismos expresan que tendría que ubicarse primero "Finanzas Pública" y recién luego como correlativa posterior a "Derecho Tributario".- Aunque ambos profesores no son convencidos de desdoblar o separar la disciplina.- Lo que si están de acuerdo, es por la cantidad de temas incluidos en la materia debería tener una carga horaria mayor, como si fuera una materia semestral.-

El Abog. Fuentes le pregunta a la profesora Gamaleri en relación a la carga horaria que le otorga la Universidad de Palermo a las disciplina (como dos materias separadas o diferentes), expresa que tiene entendido que son 4 horas semanales y en un régimen cuatrimestral para cada una de las materias.-

Haciendo uso de la palabra el Prof. Menucci, agradece la invitación en nombre de la Cátedra 2 y particularmente del profesor titular Abog. Angel Carballal, quien no ha podido asistir por inconvenientes personales de último momento, pero que ha encomendado en el profesor Menucci la representación. Indica el profesor Menucci que la materia es extensa y compleja, que a los contenidos enunciados por la profesora Gamaleri, podemos también agregar la existencia de un procedimiento administrativo tributario que en el caso de la Provincia de Buenos Aires lo vemos reglamentado en el Código Fiscal Provincial y la Ley Nacional de Procedimiento Tributario. Que en su experiencia docente y en su Cátedra le dan importancia al tema administrativo tributario, tal es así que tienen cargas horarias extras a las horas de cursada normal, que se destina a talleres de jurisprudencia y a la enseñanza práctica.- En ésta Cátedra el régimen para los alumnos importa el agregado de una clase más de 2 horas por semana.- Continúa Menucci expresando que habría que extender las prácticas procesales ya que a su entender está agotado el modelo de sólo prácticas procesales en materia civil y comercial y penal; debiendo hoy diversificarse además en la existencia de prácticas laborales, prácticas de familia y menores, prácticas administrativas, etc.- Lo ideal sería que existiera una práctica procedimental de acuerdo a cada fuero o materia en que existen órganos judiciales.- También se explaya el Prof. Menucci en cuanto a la enseñanza del derecho aduanero, que se enseña no con la profundidad deseada, pero que a su visión es muy importante hoy el derecho aduanero a la luz de los procesos de integración, además de las cercanías de la ciudad de La Plata con su propio puerto, su zona franca, y el puerto de la ciudad de Buenos Aires.- Reafirma Menucci que ello es un plus diferencial en la formación del abogado en la universidad platense, ya que en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y otras del conurbano no existe la enseñanza para abogados del derecho aduanero.- Por último indica que estas ideas fuerza, junto a otras que han construido desde la Cátedra con su titular Abog. Angel Carballal, se encuentran plasmadas en un documento que hará llegar a la comisión por correo electrónico.-

No habiendo más asuntos que tratar, y encontrándose ya presente los profesores de la materia "Derecho Notarial y Registral" que a continuación se reunirán con los miembros de comisión, se da por concluida la reunión, haciéndole saber a la Prof. Gamaleri y al Prof. Menucci, que si tienen algunas otras observaciones o propuestas, no existen inconvenientes en que las hagan llegar, por cuanto el proceso de discusión no está aún cerrado definitivamente.-

A continuación, siendo las 18:15 Hs. se invita a pasar al recinto de deliberaciones a la Profesora titular ordinaria de la materia "Derecho Notarial y Registral", Cátedra 1, Esc. Marcela Tranchini, la Profesora Adjunta ordinaria de la materia "Derecho Notarial y Registral", Cátedra 1, Esc. Ana Scipioni, la Profesora Adjunta ordinaria de la materia "Derecho Notarial y Registral", Cátedra 2, Esc. Sabina Podréz Yañiz, el Esc. Fernando Villagarcia, Auxiliar Docente de "Derecho Notarial y Registral", y se suma a los ya presentes de la anterior reunión, el Sr. Decano Abog. Hernán Rodolfo Gómez.-

Comenzando las deliberaciones el Consejero Atela informa a los presentes de los alcances y objetivos del encuentro, de acuerdo al programa aprobado por el Consejo Directivo para el análisis, debate y discusión para la reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía.- Comienza haciendo uso de la palabra la Esc.

Tranchini la que agradece la invitación a participar del encuentro, haciendo una descripción de los contenidos de la materia y su ubicación en el actual plan de estudios, haciendo una evaluación positiva de la disciplina como una materia especifica dentro de la carrera de grado.- En tal sentido, sostiene que la materia complementa y profundiza en cierto modo algunos aspectos de la instrumentalidad de los actos jurídicos, los instrumentos públicos, desde su confección, elementos, carácter probatorio y hasta su valoración como elemento probatorio, etc.- En su entender la carrera debe seguir teniendo un perfil de abogado generalista, y no caer en lo que a su entender fue un error, la formulación de abogados especializados como ha pretendido la Facultad de Derecho de Buenos Aires, habiéndose quedado a mitad de camino, y con el egreso de graduados que no poseen herramientas básicas del conocimiento jurídico en general.- Entiende que no debe existir superposición de contenidos entre la teoría del derecho notarial y registral, con lo que es las prácticas profesionales notariales para la titulación como escribano.- Son dos cosas distintas: para el abogado los conocimientos teóricos del acto notarial y los regímenes de la registración, pero para los que pretenden titular como escribanos ellos deben ser prácticas de la actividad real de un notario, por lo que deben saber cómo se hace una escritura pública, sus partes y contenidos, como se confeccionar un protocolo, la documentación que se anexan a los protocolos, las cuestiones administrativas e impositivas de los escribanos, la confección de una minuta o un folio real, etc.- Aquí en las prácticas se debe enseñar la práctica del escribano en su escribanía.-

Preguntada por el Consejero Atela acerca del actual régimen de correlatividades de la materia, responde que la considera adecuada como está ahora, que está bien ubicarla en la última etapa del estudiante de abogacía, por cuanto la materia se constituye en integradora de todos los conocimientos previos.-

Preguntados los presentes si debiera dividir la disciplina en dos materias: "Derecho Notarial" y "Derecho Registral", los profesores presentes unánimemente responde que no están de acuerdo, por razones de tradición y además porque no pueden ser desarticulados ambos campos disciplinares.- Uno es inherente al otro.- Aunque expresan que por el régimen de carga horaria (actualmente es una materia cuatrimestral) la misma si se pretende profundizar la cuestión registral, no alcanza el tiempo de la cursada.-

Tranchini indica que ellos dictan lo básico y general del régimen jurídico de la publicidad registral, aunque por su experiencia indica que conoce que profesores de la materia "Derecho Civil IV" como el Prof. Ruiz de Erenchun, les enseña derecho registral inmobiliario a los alumnos, siendo que en el programa de dicha materia existe una unidad temática referenciada con la publicidad registral inmobiliaria (Ley Nacional 17.801).- Es más, en ocasiones se ha llevado a los alumnos a una visita al Registro de la Propiedad Inmueble.-

Haciendo uso de la palabra el Esc. Villagarcia comenta que existe en el proyecto de unificación del código civil y el código de comercio, la idea de modificar el régimen de perfeccionamiento de adquisición de inmuebles, tendiendo a que la publicidad registral sea constitutiva del derecho real, aún con la inscripción de un instrumento privado como sería un boleto de compraventa.-

A ello Tranchini y Podrez Yañiz opinan que conocían de ello, pero que deseaban que no se avanzara por ese sentido, ya que dejarían los escribanos de ser garantes de la legalidad en la constitución de derechos sobre inmuebles, por lo que a su entender, hacer de la publicidad registral inmobiliaria con efectos constitutivos de derechos reales va a generar grandes problemas de seguridad jurídica.-

A continuación la Esc. Podrez Yañiz le pregunta al Vicedecano Atela si la facultad participó o fue invitada para integrar los cuerpos académicos para la unificación de los códigos, siendo que se le informa que la institución no había sido invitada formalmente, sino que teniendo noticias de que se estaba consultando a los académicos y facultades de derecho, se remitió a la dirección electrónica de la comisión redactora de los códigos unificados, una consulta acerca de la posibilidad de enviar propuestas y opiniones desde los Institutos de Investigación y Profesores de ésta Facultad, siendo la respuesta afirmativa.-

Con esa respuesta, indica Atela que encomendó al Sr. Secretario de Investigación Científica, para que invite a todos los Institutos y Docentes a que hagan propuestas para canalizar institucionalmente, y así se hizo, enviándose nota a los Directores de Institutos y dando difusión en la página web institucional.-

El primero en responder fue el Director del Instituto de Derecho Civil –Dr. Leiva Fernández- quien se puso a disposición e informó que integraba una subcomisión de estudios en representación de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, siendo que le sugerimos que más allá de esa representación, convocara a los profesores de ésta Facultad a la realización de propuestas, y así se hizo.-

Continuando con los temas, la profesora Podrez Yañiz indica que han dialogado con su titular –la Esc. Gonzalía- y que no descartarían la posibilidad de desdoblar la materia en "Derecho Notarial" y por el otro "Derecho Registral", en razón que ésta última como consecuencia de la masificación de relaciones jurídicas inter individuos y la instrumentalidad de los mismos, se tiende cada vez más a su registración como ser registrar contratos de locación, poderes generales y especiales, etc.- Que eso pareciera que es lo que se viene.-

La Prof. Tranchini vuelve a manifestar que no está de acuerdo, que eso de registrar todos los documentos jurídicos en propio del sistema español, pero que no hacen a nuestras raíces jurídicas.- Da el ejemplo de la profesión en España de registrador, como responsable de un registro público, pero que en nada se constituye en un funcionario público y menos en un fedatario como es en nuestro sistema jurídico.- Al decir de Tranchini se trata de otra cosa distinta.- Preguntados por la Secretaria de Asuntos Académicos acerca de las prácticas notariales en su situación actual, responde la Prof. Scipioni que ella lo ve bien que sean practica anuales –aunque en rigor no duran 12 ni 10 meses-, y que cada vez tiene más alumnos en los últimos años que quieren obtener el título de escribano, aunque sabemos que después deberán rendir exámen frente ha llamado a concurso para cubrir un registro de escribano.- Observa que son muchos los alumnos del interior del país, particularmente de otras provincias diferentes a Buenos Aires, que quieren el título de escribano por en sus provincias tienen un campo de acción profesional diferente a los bonaerenses.- Preguntada por el contenido de las prácticas, expresa que está conforme, ya que la misma es práctica de actuación profesional de un escribano, ya que no sólo ven una escritura pública, se les enseña a formularla o redactarla, sino que aprenden toda la cuestiones administrativas, tributarias e impositivas que derivan de la actuaciones de un escribano, además de profundizar en el conocimiento de los deberes profesionales del notario como delegado de la función pública fedataria.-

El Consejero Atela le pregunta a los presentes si cambiaría o modificarían en algo el plan de estudios o régimen de materias para obtener el título de escribano, en virtud –al decir de Atela- las materias teóricas para graduarse de abogado son las mismas que para escribano, respondiendo Tranchini, Scipioni y Podrez Yañiz, que el régimen actual lo consideran adecuado.-

No habiendo más asuntos que tratar, agradeciendo la participación de los presentes, se concluye la presente reunión, siendo las 20:25 Hs.-

ACTA N °9

En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de octubre de 2.011, siendo las 18 Hs., se reúne la comisión de "Derecho Público" del programa para el debate, análisis y propuestas para la reforma del plan de estudios, con la presencia del Consejero Directivo Abog. Vicente Atela (claustro de profesores), del graduado Abog. Nicolás Meschiany, del Profesor titular ordinario de la materia "Derecho Internacional Público", Cátedra 1, Dr. Norberto Consani, bajo la coordinación del auxiliar docente Abog. Gonzalo Fuentes.-

Se deja constancia que a la reunión de la fecha fueron invitados los profesores titulares de las otras Cátedras de la misma materia, Profesor Horacio Daniel Piombo (Cátedra 2) y Fabián Salvioli (Cátedra 3).-

Comienza haciendo uso de la palabra el Consejero Atela, quien informa al Profesor Consani de los motivos de la convocatoria, así como de los alcances del programa para el análisis y debates para la reforma del plan de estudios.-

El profesor Consani manifiesta que su materia es una disciplina histórica en la formación del grado, siendo que en diferentes etapas fue eliminada del grado, pasándola al doctorado, que lo mismo se hacía con la materia derecho político.- En otras épocas, y quizás por la dinámica de las relaciones internacionales de las naciones, el derecho internacional público hoy es día es muy trascendente, además de tener un contenido más extenso con motivo de la profundización de los marcos internacionales, las uniones continentales (unión europea) y otros procesos de integración supranacional.-

El Consejero Atela le pregunta si considera que la materia debería contener otras disciplinas correlativas o ubicación de los plan de estudios, el Prof. Consani expresa para su entender la materia debería ubicarse en la última etapa de la carrera, así como se hace con la materia "Derecho Internacional Privado", ya que la misma sería mejor que se enseñe-estudie cuando el alumno ya ha transitado todas las ramas y materias del derecho público.- Que en la actualidad ubicada en el tercer año de la carrera y el régimen de correlatividades la pueden cursar alumnos con sólo con 5 materias o finales aprobados o hasta directamente se pueden recibir de abogados, generándose un abismo en la visión y aprendizaje de los alumnos que poseen pocas materias (5 o 10 finales) que aquellos que están próximos a graduarse.- Según su entender debería ubicarse en el último tramo de la carrera como se lo hace con el Derecho Internacional Privado.- Preguntado por el coordinador Abog. Fuentes acerca del régimen de correlatividades de la disciplina, el Prof. Consani manifiesta que como mínimo los alumnos deberían tener conocimiento de derecho de los contratos, del derecho comercial y económico, por cuanto es muy difícil explicar el derecho internacional de los tratados con alumnos que no saben que es un "acuerdo o contrato" entre las naciones, como tampoco saben nada de economía o de comercio, cuando en la actualidad mucho del derecho internacional público pasa por las relaciones económicas.-

El graduado Meschiany pregunta al Prof. Consani cuál es su opinión acerca de crear como nuevas materias o espacios curriculares a "Derecho Humanos" y "Derecho de la Integración", manifestando que sin lugar a dudas no podemos tener una carrera sin la materia derechos humanos, que este vacío es inconcebible en el estado actual de la carrera de abogacía en el país y el mundo; no así con la disciplina derecho de la integración que no lo considera como indispensable ya que mucho del contenido de la materia "Derecho Internacional Público" está vinculado con los procesos de integración de Sudamérica, Europa, Unasur, y otros marcos de integración que en la actualidad se dictan en la materia.- Insiste que no lo considera como indispensable crear la disciplina derecho de la integración, no así con derechos humanos que lo considera como necesario.-

Preguntado por el Consejero Atela si en virtud de los contenidos de su disciplina, así como formación general alumnos, para que se favorezca la posibilidad del intercambio académico o que eventualmente evalúen como una posibilidad hacer carrera diplomática, que se establezca como materia la enseñanza de algún idioma, respondiendo el Prof. Consani que es fundamental el idioma inglés.- Entiende que el idioma inglés es el que se usa con mayor asiduidad en todo el mundo de las relaciones internacionales.- Preguntado si esa materia de idioma inglés debe ser optativa u obligatoria, responde que entiende que debería ser obligatoria.- Repreguntado por Atela si también debería dictarse algún otro idioma, responde que todo lo que sea aprendizaje es positivo, pero que no lo podría afirmar categóricamente, lo que sí puede decir que el inglés es fundamental.- Si quieren establecerse otros idiomas como portugués, francés, italiano, etc., los evaluaría como materias optativas o directamente como ofertas académicas por fuera del plan de estudios de la carrera de abogacía.- Insiste en que hoy en día el idioma ingles es fundamental para quien desee vincularse con otros países de habla no español, es más todos los libros de idioma no inglés terminan siendo traducidos al inglés, por lo que la accesibilidad a la información y documentos en ese idioma es muy accesible en estos tiempos.-

En cuanto a la posibilidad de otros idiomas, el Prof. Consani expresa que si se quiere profundizar los conocimientos de los alumnos, se podría incorporar el idioma chino ya que en la institución funciona el Instituto Confucio, lo que permitiría la difusión de éste idioma sin ningún costo económico para la institución ya que existen los profesores, existen en la actualidad cursos de idioma chino en el Instituto de Relaciones Internacionales que dirige, además sería nuestra facultad por demás innovadora por cuanto no existe ninguna facultad de derecho en el mundo que se enseñe a sus alumnos el idioma chino.- Sería una situación formativa a explorar.-

El consejero Atela expresa que sería interesante la incorporación de idiomas, pero es partidario de que sea obligatorio el idioma inglés, con un perfil de contenidos para la lectura, comprensión e interpretación de textos jurídicos o fallos, no así con los otros idiomas, para los que entienden que tendrían que ser ofertas académicas pero por fuera de la curricula de un plan de estudios.-

El Prof. Consani comenta que desde su Instituto de Derecho Internacional Público se dicta desde hace 10 años cursos de idioma Japonés y desde hace 4 años cursos de idioma Chino, ambos con una importante concurrencia de alumnos y público en general.-

Por último el Prof. Consani indica que ha reunido con la mayoría de los miembros de su Cátedra en días anteriores a ésta convocatoria, pero que en los próximos días los reunirá a todos para poder elaborar un documentos que plasme la postura de su Cátedra en relación a la disciplina y la reforma al plan de estudios de la carrera, comprometiéndose a remitirlo por correo electrónico.-

No habiendo más asuntos que tratar, agradeciéndose la presencia del Prof. Consani, se da por finalizada la reunión, siendo las 19:45 Hs.-

LOS PROYECTOS PRESENTADOS: En cuanto a la presentación de proyectos, propuestas, ideas críticas y opiniones, se han recibido un gran número que no sólo han surgido del debate de las reuniones de comisión, y del diálogo con los docentes e investigadores convocados, sino también fruto de la amplia difusión que se ha realizado, habiendo permitido la recepción de propuestas al correo institucional plandeestudios@jursoc.unlp.edu.ar.- Entre esas propuestas contamos con las siguientes, las que son

enunciadas por su carátula general y número de proyecto asignado, para a su continuación transcribir íntegramente el contenido de las propuestas:

1) (PROYECTO 1) Algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera, por la Abogada graduada María Guillermina Rafaeli.-

Texto del correo electrónico recibido por la Comisión: "Lamentablemente yo ya estoy recibida y, la verdad, me hubiera gustado mucho poder aprovechar un cambio en el sistema curricular. Si se me permite, creo que hay CUATRO modificaciones que deberían realizarse sin lugar a dudas:
1- DERECHO CONSTITUCIONAL tiene que estar antes de civil I y principalmente antes de derecho penal. Es una verguenza que uno vaya a estudiar derecho de fondo especial sin antes tener el marco constitucional.
2- DERECHO SOCIAL: otra verguenza. Como puede ser que nunca hayan dividido semejante materia en, por lo menos, 3 partes??? Dcho. Individual del Trabajo; Dcho. Colectivo; Seguridad Social y Riesgos del trabajo. Los estudiantes salen de la facultad sin saber nada, sobre todo de la tercera parte, cuando en realidad, una salida laboral importante lo configura la materia previsional.
3- DERECHO PROCESAL CIVIL: me parece absurdo que haya alumnos que lleguen a cursar esta materia sin tener todos los civiles. Se notaba una gran diferencia entre los que ya habían dado todo de los que no tenían ni siquiera civil 2. No saben lo que son las obligaciones, el pago, etc., y cursan el procedimiento???? me parece muy mal.
4- Deberían incorporarse más materias de índole económica. No puede ser que no nos enseñen a practicar una liquidación o que un abogado no sepa lo que es un balance, un libro diario, etc. En la facultad de ciencias económicas ven muchas más materias de derecho que nosotros de economía. Y la realidad laboral nos demuestra que los contadores pueden prescindir de los abogados pero nosotros no de ellos.
Aparte de estas cuatro cosas que considero de extrema relevancia, paso a indicar otros puntos que, como buena alumna que fui, me considero en condiciones de opinar:
- Basta de cuatrimestralizar todas las materias. Procesal I no se puede cuatrimestralizar, pero si Civil V...funcionaba muy bien la cursada acortada.
- Materias como Derecho Ambiental tendrían que darse. Es una rama nueva que puede dar lugar a otro tipo de profesionales.
- Considero que debería haber materias que no sean tan especificas pero que hacen a una formación más completa: antropología es una de ellas.
Bueno espero que puedan tener en cuenta mi opinion y aplaudo la iniciativa de la reforma.
Saludos!"

2) (PROYECTO 2) Algunas Reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera, por el Abogado graduado Juan Pablo Rincón.-

Reforma del Plan de Estudios- Año 2011
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

Propongo las siguientes cuestiones sobre el tema ante el Honorable Consejo Directivo:
- Que las adaptaciones de procedimientos profesionales se desarrollen en el final de la carrera bajo la modalidad obligatoria, es decir, que una vez finalizadas la totalidad de las materias teóricas más, se proceda a la cursada obligatoria de las practicas, sobre todo las civiles y comerciales (que debieran de incluir no solo la presentación de escritos, sino la visita constante a los tribunales, juegos de roles rotativos, pasantías en la legislatura y tribunales de instancia inferior, nociones sobre litigiosidad y medios alternativos de resolución de conflictos). Además de ello, no debieran circunscribirse solo a la parte penal, civil y comercial, sino ampliarse a otras ramas del derecho que tienen autonomía procesal y necesitan que el potencial abogado conozca en profundidad, como el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral.
- En cuanto al régimen de correlatividades puedo decir que hoy en día, y según lo visto hasta la actualidad en mi transcurso en la carrera, ciertas correlatividades no se corresponden con contenidos estructurales que deben de conocerse para continuar el camino de la curricula. Por ello me parece atinente realizar cambios como: A) Que para cursar Derecho de las Obligaciones y Comercial Parte General, se tengan conceptos de Economía Política y que ésta, a su vez, también sea nutrida por Introducción al Derecho e Historia Constitucional además de la Introducción a la Sociología. B) Que para cursar Procesal Civil y Comercial se exijan por lo menos conocimiento de Derecho de las Obligaciones o de los Contratos- hoy en día un alumno que solamente ha aprobado Civil Parte General estaría habilitado para cursarla y /o aprobarla- además de Derecho Comercial Parte General. C) Que para cursar Derecho Internacional Público (que debiera dividirse en Parte General y Derechos Humanos y Conflictos Internacionales) sea necesario no solo tener conocimiento de Derecho Constitucional sino del Procedimiento Penal y Civil y Comercial. D) Que para cursar Derecho Social (que debiera necesariamente estar dividida en dos materias) se necesiten conocimientos del Derecho Procesal Penal y de Economía Política. E) Que para cursar Derecho Procesal Penal se exijan conocimientos del Derecho de las Obligaciones.
- Creo que sería interesante incorporar el sistema de materias optativas, que deberían darle al alumno la posibilidad de decidir entre un amplio número de problemáticas, aquellas entre las cuales quiera incursionar. Por ejemplo: de un listado de 10 materias adicionales deba seleccionar 2 y acreditar su aprobación para la obtención del título. El sistema expuesto evidentemente haría dejar de lado el sistema de los seminarios. Materias que sugiero pueden incorporarse como optativas serian: Derecho de la Integración, Derecho Constitucional Colectivo, Mediación y Conciliación, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Técnica Judicial y Legislativa, Nociones de Contabilidad, Elementos de psicología criminal, entre otras.
- Que se permita que aquellos alumnos a cuales le reste una materia teórica o práctica se le dé la posibilidad de cursar las prácticas notariales, evitando que el futuro escribano deba esperar un año más para conseguir el título esperado.
- Que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones sobre el cambio de carga horaria de las siguientes materias: Derecho Procesal Penal Teórico (4 meses), Derecho Procesal Civil y Comercial Teórico (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho de Familia y Sucesiones (4 meses en calidad de cursada

intensiva), Derecho Administrativo I (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho Comercial I y Derecho Constitucional debieran tener una carga horaria semestral, esta última con la posibilidad de crear cursos intensivos que incluyan al Derecho Público, Provincial y Municipal.
- En la medida de lo posible, y la posibilidad real de que dispongan los docentes de implementar cursos intensivos de un mes de duración durante el Mes de Febrero para aquellos alumnos que vayan a rendir en el turno de Marzo.
- Por último, me parece pertinente poder plantearles dos ideas que para mi criterio también serian de gran utilidad para el estudiantado: la obligación de revisar los programas de las cátedras- contenidos y bibliografía- cada dos años y que se permita a aquellos alumnos que acrediten como nota promedio en sus evaluaciones la cantidad de 7- siete- puntos en los pre evaluativos eximirse de la mesa final.

Cumpliendo con la posibilidad que se nos brindó de participación semidirecta en este proyecto dada por los señores consejeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es que les elevo mi humilde opinión al respecto, saludándolos con mi más grande respeto.-

3) (PROYECTO 3) Antecedentes y aportes realizado en otros procesos de estudio de reforma al plan de estudios, aportados por el Profesor Ernesto Domenech (Director del Instituto de Derecho Penal y Profesor Titular Ordinario de “Derecho Penal I”).-

Tema: Reforma del Plan de estudios
(Primera reunión)

Día y lugar: lunes 26 de agosto, Decanato de la Facultad.
Hora de inicio: 17: 05 hs.
Hora de Finalización: 20: 40 hs.

Participantes:
Profesores
Derecho Notarial y Registral: Dra. Tranchini, Dr. Carrica y Abog. Sablone;
Sociología Jurídica: Dr. De Rosa, Dr. Fucito, Abog. Gonzalez, Dr. Gerlero ;
Derecho Agrario: Dra. De Luca;
Derecho Minero: Abog. D’ Anna, Abog. Iacomini, Abog. Villulla;
Derecho Marítimo y de la Navegación: Abog. Hernández Arrouy, Abog. Miguel
Autoridades: Dr. Berizonce; Abog. López Akimenco, Abog. Martín Carrique; Dr Ernesto Domenech
Colaboradoras: Prof. Volonté; Prof. García Munitis y Lic. Tassano.

. Comentarios y opiniones expresadas:

- El Sr Decano comenzó la jornada teniendo en cuenta el antecedente de lo que llamó "el último debate orgánico y coherente", la reforma del plan de estudios realizada en 1963. En los últimos cuarenta años hubo otras iniciativas como un Congreso, realizado en 1997, pero han sido más bien experiencias aisladas y solitarias, o con bajos niveles de participación. En 1963 ya había inquietudes similares a las actuales, como revisar no sólo los contenidos sino también los métodos de enseñanza, para que se dicten teórico- prácticos; la necesidad de enfatizar en la formación crítica y la duración de la carrera, entre otros. Para describir el estado de la situación vigente, mencionó que el 60 o 70% de los programas están actualizados (que han incorporado jurisprudencia y "contenidos sociales"); se preguntó por el perfil del abogado, estimando que de acuerdo a la diversificación de los requerimientos profesionales, es prioritario favorecer la formación de un buen abogado generalista y no apuntar al "especialismo" en el grado sino a la especialidad en el postgrado.
- Otro desafio es la cómo realizar la articulación entre el grado y el postgrado. En este sentido una posibilidad contemplada son los seminarios alternativos, que ya se han instrumentado con muy buenos resultados("que podrán seguir mejorándose") y como experiencia pedagógica es muy valiosa por la perspectiva interdisciplinaria y por los contenidos abordados.
Entre 1963 y hasta 1981, estuvo vigente y funcionó el régimen de materias optativas, derogado sin debate alguno.
En esta ocasión han sido convocados los profesores para "reabrir" ese debate. Los profesores presentes tienen a su cargo el dictado de aquellas "materias a optativizar"; dejándose expresamente aclarado que Sociología Jurídica fue incluida por error en la nómina correspondiente.
-El Dr. Pastorino envió desde Italia, su opinión por correo electrónico, que desde el decanato fue reenviada a todo el cuerpo docente.
- El Dr. De Rosa marcó la masividad de la Facultad de Derecho y sus repercusiones de ésta en la relación pedagógica. Hubo acuerdo y a continuación se focalizó la discusión en torno específicamente al plan.
- La Dra. D’ Anna se preguntó cómo es posible querer enseñar menos. Se mostró claramente en desacuerdo con la optatividad de su materia. Su argumento se basó en que el ejercicio del derecho en esta área está dando lugar a la intervención de geólogos y arquitectos; que regula también el derecho de propiedad y el de producción; pero fundamentalmente que se reflexiona sobre lo que no debería haber ocurrido en el país (haciendo alusión a la "fusión" de YPF y "la entrega del país").
- El Dr Iacomini puso de relieve que en 1963 Derecho Público, Provincial y Municipal también era una materia optativa y debería discutirse también en esta ocasión. En relación a su materia estuvo de acuerdo con la Dra. D’ Anna y agregó que el Código minero es legislación de fondo; que en el país se deben estudiar materias como ésta, relacionada con los recurso nacionales propios y no otras ajenas a esta realidad. En este sentido similar se pronunció el abog. Villulla.

- Como consecuencia del debate, y con el objetivo de explorar otras alternativas, el Sr. Decano propuso estudiar la posibilidad de reducir los contenidos de las materias de que se trata, a los efectos básicos, para ser dictadas en un bimestre. Al mismo tiempo, invitó a los profesores presentes a elaborar al menos dos seminarios alternativos relativos a cada temática.
- El Dr. Iacomini puso en duda el funcionamiento de los seminarios y el Dr. Domenech le ofreció información concreta, que puso a disposición de los presentes, para evaluarlos más puntualmente; ya que, no comparte la misma apreciación. El Dr. Domenech destacó la valoración de los seminarios en base a datos concretos que demuestran el aporte que significaron para la investigación y la innovación educativa. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que se le envíe información sobre falencias que se hubieran detectado.
- El Sr Decano sugirió que era conveniente para los profesores tener menos alumnos pero con una formación más profunda, ya que elegirían cursar la materia; antes que una multitud desinteresada o poco comprometida.
- La Dra. De Luca también sostuvo su oposición a la optatividad, agregando que aunque su materia no está codificada, se ven contenidos similares a los de otras materias o que bien han pasado desapercibidos. Es el caso del estatuto del trabajador rural; que en Laboral apenas se menciona.
- El Dr. Lopez Akimenco confirmó que sí se ven, pero rescató la validez de estos encuentros en tanto posibilidades de coordinación y evitar que las cátedras terminen funcionando como compartimentos aislados. Se acordó que es necesario coordinar los contenidos para evitar la superposición de estos y enriquecer las cursadas.
- El Sr. Decano, volvió a plantear la consideración de una propuesta alternativa: comprimir la materia para que se dicte un bimestre obligatorio y elaborar algún seminario correlativo optativo.
- El Dr. Iacomini propuso que se compriman todas, incluso los Civiles y Romano.
- El Sr. Decano, los invita para que sigan participando en las próximas reuniones a realizarse con los profesores de las demás materias.
- El Dr. De Rosa agregó "que es importante comprender la esencia de las diferencias". Los profesores de Minería plantean sus argumentos en términos de obligatoriedad de saber; mientras el Decano está planteando "que estudie el que quiera, cuando todos sabemos lo masificados que vienen los chicos hoy".
- La Dra. (Navegación) afirmó que todos deberían coordinar mejor para dar temas de ambiente. Y que "desde un perfil generalista, estos contenidos son básicos y deben estar".
- La Dra. Tranchini estuvo de acuerdo en el perfil generalista y en la necesidad de abolir la distancia entre teoría y práctica. A continuación, y sin ánimos de plantear las dificultades de una ecuación matemática, señaló que los créditos asignados a los módulos teórico- prácticos obligatorios suman 245, incluyendo los 20 asignados a las prácticas penales y civiles. Dado que el total para obtener el título de abogado asciende a 360, restan 115 créditos para materias optativas y seminarios. Si el único requisito es aprobar al menos un seminario (que vale 5 créditos) se requiere cursar 23 seminarios; o bien las cinco materias optativas (de 10 créditos cada una) y 13 seminarios. La intención fue aclarar esta cuestión casi desde el lugar del alumno y tratar de visualizar además, cuál es el porcentaje (la proporción) de materias que se plantea optativizar.
- La observación numérica que asigna los valores en créditos fue aceptada con el compromiso de parte de las autoridades de revisar el planteo. Se aclaró que los créditos fueron asignados en proporción directa al tiempo de cursada.
- La Dra. Tranchini señaló se plantea una relación aproximada de un 30% de módulos optativos y un 70% de obligatorios. No cree que una materia que está relacionada con las demás tenga que valer menos. Está en desacuerdo con la optatividad y estima que la propuesta alternativa es compleja, porque al igual que en Navegación y Aeronáutico, ya se dictan dos materias en una (Notarial y Registral).
- El Dr. Carrica también estuvo en desacuerdo con la optatividad. Se planteó cuál era la necesidad y la importancia de no alargar la carrera, mucho más aún en relación a la próxima evaluación de la CONEAU. Se discutió la carrera de Escribanía, y la cantidad de egresados que sólo desean obtener el Título.

Tercera Reunión
Tema: Reforma del Plan de estudios
Día y lugar: lunes 9 de septiembre, en el Aula Mercader de la Facultad.
Hora de inicio: 17: 10 hs.
Hora de Finalización: 20 hs.
Participantes: 16 profesores de:
Derecho Comercial: Prof. Ferrer, Prof. Castagnet, Zandrino, Pérez Casini, Di Masi
Derecho Procesal I: Prof. Soria,
Derecho Penal: Prof. Pérez Duhalde
Derecho Romano: Gavernet
Economía Política: Tabieres
Der. Internacional Público: Salvioli, Leiva Fernández
- Autoridades: Dr. Berizonce; Dr. López Akimenco; Dr. Carrique y Dr. Domenech.
- Colaboradoras: Lic. Volonté; Lic. García Munitis y Lic. Tassano.

. Comentarios y opiniones expresadas:
- El Sr. Decano presentó el tema y el desarrollo del debate.
- La Dra. Ferrer preguntó si los seminarios deberían abordar las temáticas de las materias que se harían optativas o podrían servir para “descomprimir” todas en general. El Sr. Decano respondió que habría que considerar algunos parámetros más específicos, pero la propuesta no apunta a adelantar los contenidos de los posgrados en el grado, aunque sí tiende a articularlos. Agregó que el programa de seminarios ofrece como ventajas respecto de las cursadas regulares, la perspectiva interdisciplinaria y la actualización constante de los programas, ya que no se trata de una oferta cristalizada.
- Se mencionó la relativa especialización que implicarían estas opciones, y en general hubo acuerdo en el número restrictivo, en contraposición a la formación especialista preponderante en la UBA.
- La Dra. Ferrer estimó positiva la propuesta de los seminarios alternativos, aunque en algún aspecto, insuficiente para un proyecto de reforma del plan de estudios. A continuación, enfatizó la necesidad de revisar y coordinar los contenidos, y darle a los seminarios una función social. En general, consideró que habría que definir los contenidos básicos requeridos para la formación de abogados y luego otros alternativos. A partir de esa base, reestructurar las materias. En este sentido, consideró que las reuniones de debate deberían

proponerse en función de áreas temáticas o "líneas" y no según los años en los que se dicta cada materia actualmente.

- El Dr. Castagnet manifestó que la mayor preocupación es que los alumnos que se gradúan tienen dificultades para afrontar los requerimientos de la vida profesional. Comparativamente, consideró que antes eran más accesibles las "escuelas paralelas", haciendo alusión a los lugares de prácticas. Destacó el hecho de que actualmente se cuenta con cargas horarias fijas que no están relacionadas con el desarrollo de los contenidos; consideró que hay que tratar de enriquecer la currícula y no de empobrecerla, de manera que, a su juicio deberían mantenerse obligatorias todas las materias.
- La Dra. Ferrer destacó que toda la comunidad está "mirando" a la facultad y ha enviado salutaciones de todo tipo con motivo de la reforma. Por ello, consideró vergonzoso no realizar ningún cambio, que indicaría dejar de reconocer que un plan de estudios o la formación profesional afecta a toda la comunidad y no sólo a aquellos vinculados a la profesión en cuestión o al ámbito exclusivamente académico. A modo de ejemplo, que un abogado no sepa leer información contable mínima es empezar con una falla.
- Pérez Casini entendió que deben "removerse" los contenidos con el cuerpo docente en pleno.
- El Sr. Decano recordó que las dos ideas básicas de este proyecto de reforma abarca la propuesta de seminarios pero apunta también a profundizar la enseñanza con trabajos prácticos. Además, señaló que la mayoría de los actuales profesores titulares comenzaron su carrera docente como Jefes de Trabajos Prácticos alrededor del ´78.
- El Dr. Salvioli estuvo muy de acuerdo con la necesidad de realizar una reforma, más aún ante la inminente y pronta evaluación de la CONEAU. En este sentido, consideró valioso el esfuerzo emprendido por esta gestión; pero a su vez invitó a los presentes y a los participantes interesados en general, a profundizar la escucha, sin necesidad de "contestar todo" y no tomar posiciones cerradas en esta instancia. Planteó la urgencia de pensar seriamente los contenidos hacia adentro de las cátedras y también la metodología. Estimó que debe incluirse la revisión del Curso Introductorio, y en particular, expuso la inquietud del Instituto de Derechos Humanos –que a su vez comparte- de que se constituya Derechos Humanos como una materia obligatoria de la carrera. En relación con la optatividad se manifestó dubitativo y agregó que debería considerarse el tema de las correlatividades.
- Hubo acuerdo con la necesidad de generar un debate abierto, se marcó como relevante la discusión en torno al perfil del abogado y a la urgencia de reformar pero no "para enmendar ni tapar" aquellas cuestiones que no funcionan.
- Se ha destacado además, la necesidad de actualización y capacitación docente para encarar un proceso de enseñanza con verdaderos trabajos prácticos, que dista bastante del que generalmente vivieron los profesores como alumnos o de la experiencia docente en general.
- Se planteó esta propuesta de reforma como un paso inicial frente a múltiples problemas de una situación de suma complejidad.
- También se manifestó cierta preocupación por la instrumentación del nuevo plan, en relación con los espacios físicos y ciertas cuestiones operativas como por ejemplo, conocer y controlar el número de personas que deben rendir.
- Otro tema de reflexión ha sido la evaluación, ya que la orientación del sistema actual tiende a favorecer la repetición y la calificación antes que el razonamiento y la formación.
- El Dr. Zandrino sostuvo que prefiere el sistema de especialización antes que la formación generalista; sin embargo, acuerda con este proyecto ya que se ubica en una posición intermedia, y teniendo en cuenta razones presupuestarias considera que es factible de ser implementado. De todas maneras, puso de relieve la necesidad de implementar una reforma estructural para lograr la excelencia académica. Por otro lado, estimó que este objetivo es imposible de alcanzar con profesores mal pagos o que ejercen "de favor", que se debería asumir la docencia como una forma digna de ganarse la vida, pero esto es imposible con las remuneraciones actuales.
- El Porf. Adjunto Di Masi propuso utilizar los espacios de los Institutos para canalizar los prácticos.
- Finalmente, el Dr. Soria enunció la posibilidad de que todos los presentes tuvieran razón en parte. Reconoció que esta propuesta como esbozaron antes algunos "es casi un maquillaje", pero expresó su adhesión porque "quiere mejorar en algo". En su opinión, se debería priorizar el trabajo y plantear etapas con metas a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, la propuesta de seminarios se ubicaría entre las acciones mínimas posibles hoy, pero no se deben excluir del debate los aportes concretos que puedan realizar todos los claustros para el mediano y largo plazo. En relación con esto, el Sr. Decano agregó que sería verdaderamente revolucionario que cada cátedra llegue, ya que hay editoriales dispuestas, a publicar sus propios libros de casos reales, con comentarios y ejercitaciones incluidas.

Cuarta reunión
Tema: Reforma del Plan de estudios
Día y lugar: lunes 16 de septiembre, en el Aula Magna de la Facultad.
Hora de inicio: 17: 00 hs.
Hora de Finalización: 20hs.
Participantes: - 23 profesores de:
Derecho Comercial ll: Prof. Ferrer, Prof. Berstein
Derecho Administrativo l: Prof. Marafuschi, Prof. Andreucci
Derecho Administrativo ll: Prof. Hutchinson, Prof. Bibiloni, Prof. Botassi
Derecho Internacional Público: Prof. Piombo, Prof. Salvioli
Derecho Civil IV: Prof. Franchini
Derecho Internacional Privado: Prof. Sosa, Prof. Rapallini
- Autoridades: Dr. Berizonce; Dr. López Akimenco y Dr. Carrique.
- Colaboradoras: Lic. Volonté; Lic. García Munitis; Abog. Ares y Lic. Tassano.

Comentarios y opiniones expresadas:

- El Sr. Decano comenzó el encuentro haciendo un raconto del desarrollo del debate y los temas e inquietudes que fueron surgiendo en las reuniones anteriores. Mencionó la rectificación respecto de Sociología Jurídica, materia que fue incluida por error entre aquellas a optativizar. Afirmó que era un privilegio poder escuchar a todos los profesores, que en términos generales los de "primer año" hicieron mayor hincapié en la importancia de las materias "no jurídicas"; en cambio, a partir de segundo la relación es inversa. A

continuación, comentó las ventajas del programa de seminarios y la preocupación por optimizar la enseñanza de trabajos prácticos, cuya idea inicial era comenzar por las materias troncales pero no es excluyente de las otras. También invitó a los presentes a concurrir a la Audiencia Pública, que se realizará en el Colegio de Abogados.

- La Dra. Franchini preguntó si la facultad seguiría expidiendo el título de Escribano, a la vez que se propone Derecho Notarial como optativa.
- El Sr. Decano explicó que se propone optativa para los abogados, pero como materia semestral o de siete meses teórica- práctica para la carrera de Escribanía, como postgrado. Pero aclaró que esta iniciativa está puesta a consideración, que ni siquiera los profesores de la cátedra ni el Colegio de Escribanos tenían definida una resolución clara.
- El Dr. Hutchinson consideró que podría ser optativa con mayor pertinencia que Derecho Agrario. La Dra. Ferrer sugirió que al que lo haga se le podría otorgar otro título.
- El Sr. Decano planteó que era necesario establecer una suerte de pacto académico sobre dos o tres líneas generales, para fijar luego metas a corto, mediano y largo plazo, y no continuar el proceso de reforma erráticamente. A modo de ejemplo, armar una carrera docente propia de la facultad sería un objetivo de largo plazo, mientras que la implementación de los seminarios alternativos, uno de corto. Se propuso pensar en estímulos docentes, porque se requieren buenos profesores; y en este caso concreto, formar una Comisión que elabore las conclusiones del proceso de debate y de de continuidad a la reforma, para evitar su nulidad.
- El Dr. Bibiloni adhirió a la opinión del Dr. Hutchinson; y se refirió a las prácticas: sostuvo que no es suficiente el tiempo asignado para los encuentros con los Jefes de Trabajos Prácticos; de manera que, debería organizarse un sistema de pasantías como requisito obligatorio para graduarse. La Dra. Ferrer agregó que este sistema a largo plazo podría ampliarse para los alumnos libres, mientras que la carga horaria destinada para los prácticos incrementa únicamente el trabajo de aquellos alumnos que pertenecen a los cursos de promoción. El Sr. Decano estuvo de acuerdo con esta propuesta pero puso de relieve las enormes dificultades para su inmediata implementación.
- El Dr. Bibiloni realizó algunas preguntas como "¿Por qué les enseñamos a hacer una demanda y no una sentencia?¿Por qué un contrato y no técnica legislativa? Y agregó "si ambiental es un tema afuera, que el plan de estudios dé algunas señales; que entonces, Navegación y Agrario se compriman y esté Ambiental". Enfatizó la necesidad de brindar formación pero también herramientas de trabajo.
- La Dra. Ferrer sostuvo que no cree que ésta sea una reforma, y que le gustaría que la Comisión que se forme no elabore únicamente un dictamen sino que plasme todas las ideas que se estuvieron generando en el transcurso de estas reuniones. Mencionó que estuvo consultando por Internet, los planes de estudios de otras facultades y no encontró uno tan viejo como el de esta facultad. Coincidió con el Dr. Bibiloni en que el mundo ha cambiado y "seguimos con las mismas materias". Agregó que en las encuestas realizadas a los profesores titulares se propusieron una nómina importante de nuevas materias y frente a eso no hubo respuesta. Desestimó la falta de recursos como impedimento para generar cambios. Señaló la necesidad de administrarlos mejor, por ejemplo reacomodando cátedras que en años superiores tienen vacantes para reforzar a las de primer año y mejor desde el inicio la formación. En este sentido, también marcó la necesidad de hacer lo propio con las mayores dedicaciones. Señaló que "encima, es vergonzoso ver, en sala de profesores, que están intimando a esa gente para que cumpla". Por otro lado, consideró que estas deberían otorgarse también a los docentes por ese cargo.
- El Sr. Decano invitó a cada uno a diseñar las prácticas para su materia.
- El Dr. Andreucci reconoció que los regímenes de pasantía están obturados porque no hubo renovación.
- La Dra. Ferrer señaló el hecho de que algunos alumnos cursan dos o tres materias, mientras otros ninguna. El Dr. Carrique mencionó que se informatizó el sistema recientemente, que posibilitó transparentar esta situación y significó un cambio de lectura, también para los estudiantes.
- El Dr. Hutchinson también señaló la necesidad de derogar ciertos privilegios para acceder a las cursadas, que parecen anacrónicos hoy.
- El Dr. Marafuschi acordó con las observaciones elaboradas por el Dr. Fucito, le pareció bueno el sistema de seminarios y señaló la necesidad de tener presente lugares físicos para posibilitar su implementación. Señaló la diferencia que existe entre las cursadas y los libres, y la proximidad de la evaluación externa. Sostuvo que la reforma o la necesidad de reprogramar la facultad es más amplia que la reforma del plan de estudios; que se debe controlar más a los alumnos y contar con personal docente con mayor dedicación. Manifestó su disconformidad con que las materias señaladas se conviertan en optativas, ya que consideró que los alumnos proceden de varios lugares de la provincia.
- En este sentido, el Dr. Piombo afirmó que actualmente el único graduado que sabe redactar un contrato es aquel que cursó Derecha Notarial.
- El Dr. Berstein consideró que las encuestas deberían haberse realizado también a los profesores adjuntos. Y que otra cuestión relevante sería empezar a reflexionar sobre las "bondades" de un examen final. Tal vez, debería condicionarse a otros métodos, entre los que un "múltiple choice" es una posibilidad.
- El Dr. Bibiloni se ofreció para realizar con el aval de la facultad las gestiones para acceder a lugares de práctica del Estado, en general de la provincia, a partir de acuerdos institucionales. Señaló que la sería como si la facultad donara horas de trabajo ad honorem, "y creo que nadie va a desdeñar mano de obra calificada".
- El Dr. Botassi estimó que fue muy útil instalar el debate más allá del destino de esas ideas preliminares. Reconoció que el egresado actual es un "producto" con enormes falencias, razón por la cual es preciso mejorar el sistema educativo. Por ello, habría que lograr que todos los alumnos cursen y se evalúen con exámenes parciales. Consideró que era prioritario encarar la reforma.
- La Dra. Rapallini manifestó su preocupación por la implementación de la enseñanza práctica y sostuvo que debería incorporarse desde primer año. También consideró fundamental brindar pautas sobre el cómo hacerlo y capacitar a los docentes; a la vez, que la Casa fije pautas generales para precisar qué rol debe cumplir cada uno en cada cátedra.

Sexta reunión
Tema: Reforma del Plan de estudios
Día y lugar: lunes 30 de septiembre, Aula Magna de la Facultad.
Hora de inicio: 17: 20 hs.
Hora de finalización:

Participantes: con auxiliares docentes de:
- Autoridades: Dr. Berizonce; Dr. López Akimenco; Dr. Carrique y Dr. Domenech.
- Colaboradoras: Lic. Volonté; Lic. Tassano. y Valentina Ares

Comentarios y opiniones expresadas:

Al llegar a la reunión una de las profesoras comenta que la idea de cambiar el Plan de Estudios es brillante, pero cuestiona con énfasis el modo de comunicación existente en la institución.

Una prof. señala las resistencias de los alumnos frente a los cambios.

Decano explica las características de la reforma, que está pensada "desde abajo", desarrolla la idea que en su experiencia la práctica prepara a los alumnos para la comprensión de lo teórico, es un cambio trascendental.

Claudio Dolce comenta que cuando la enseñanza se transforma, se genera un cambio de conducta, muchos alumnos sostienen, en respuesta, "a eso no estamos acostumbrados".

Martín Carrique: Comenta que trabajar con casos después de vencer la resistencia inicial "es como despertar a las fieras" (haciendo referencia al interés que se moviliza). Por otro lado, es necesario generar vínculos de pertenencia entre los auxiliares y los espacios de comunicación y debate.

López Akimenko: Señala lo importante de tomar los casos en un sentido amplio, cada situación de la vida diaria puede serlo, no sólo los casos judiciales. Comenta, por otro lado, su experiencia como jefe de Trabajos Prácticos, que fue muy buena pero que inicialmente fue rechazado en su cátedra cuando se presentó dentro de la misma en ese rol.

Otra profesora comenta la actitud de los alumnos con respecto a los Trabajos Prácticos. Muchas veces los estudiantes libres llegan a la clase y dicen: "¿Van a dar un práctico?, me voy". Considera que es necesario definir el perfil del abogado ya que no lo está en la reforma; el abogado no es sólo litigante, la mediación es importante ya que el abogado es un agente de prevención. Además propone hacer reformas de los programas, que estén más interrelacionados para que no se produzcan repeticiones temáticas o faltantes.

Ernesto Domenech retoma el tema de cómo se deben analizar los casos. Por otro lado, reitera tomar la reforma del plan como algo común más allá de las diferencias políticas.

C. Dolce: agrega que si el plan no sale, de todos modos, hay que incorporar nuevas y mejores prácticas.

Otro profesor…: Considera más valioso reunirse por áreas para el debate.

E. Domenech: Responde que pondría fuertemente un profesor de economía política al lado de un profesor de derecho comercial.

Otro profesor, pregunta cuándo intervienen los postgrados en la discusión del plan.

El Decano plantea otro modelo de articulación: la UBA, explica cómo el seminario alternativo actúa como articulador (en la reforma proyectada), en grageas presenta algún conocimiento para completar el grado, por ejemplo: contabilidad para abogados.

E. Domenech hace un diagnóstico sintético de la situación actual de la enseñanza en la Facultad de Derecho y lo conecta con la práctica profesional.

El profesor de prácticas procesales, menciona lo importante de otras maneras de resolución no judicial de litigios o conflictos, por ejemplo la Oficina de Atención al Consumidor. Sugiere elaborar proyectos por cátedra sobre este punto.

Otro profesor describe, informando a los otros profesores, la experiencia de prácticas profesionales, se organiza a partir de un archivo de escritos en Internet, los alumnos trabajan en el juzgado al lado del empleado.

Esa tarea la realizan en las 2 comisiones. Van a los Tribunales con los profesores y los ayudantes; en horario de cursada y finalmente van otros días también (por su voluntad). Este profesor pide más ayuda para llevar adelante este trabajo.

En relación con lo mismo, otro profesor pide que la asistencia a Tribunales sea obligatoria, en este momento para lograr la misma, se maneja con la aprobación de la materia.

Otro profesor comenta como otro tema que se planteó la cátedra; el perfeccionamiento del lenguaje escrito, contrataron una profesora de lengua.

Otra profesora coincide con el tema de las dificultades de los alumnos en el lenguaje escrito. Se alegra de la existencia de un gabinete, hay alumnos con problemas de aprendizaje, y ella necesitaría, en esos casos, hablar con alguien especializado. Le parece importante, por otro lado, una tutoría o un seguimiento de los alumnos que faltan.

E. Domenech comenta y da detalles de su experiencia de tutorías con el juzgado.

Otro profesor comenta el sistema de organización de la Facultad de Derecho de la UBA como la deseable. Inmediatamente agrega: "Yo no pido que lo hagan, ya que es una pérdida de poder. Además ya cambiar un plan de estudios genera muchas resistencias".

Otro profesor pregunta si hay alguna idea de mantener ese espacio de comunicación de modo estable.

El Decano responde que van a estar las jornadas, ya previstas, y la posibilidad de seguir reuniéndose desde luego se mantiene.

Claudio Dolce insiste en la necesidad de juntarse, reunirse de modo institucional.

El Decano agrega que tiene la intención de independizar el tema de las prácticas del de la reforma del plan de estudios.

Respondiendo a otro planteo sobre el perfil del abogado, señala que desde su punto de vista, dicho perfil es cada vez más abierto y difuso.

Séptima reunión
Tema: Reforma del Plan de estudios
Día y lugar: lunes 7 de octubre, Aula Magna de la Facultad.
Hora de inicio: 17: 20 hs.
Hora de finalización: 20 , 30hs.
Participantes: - 90 alumnos. - 3 profesores: Prof. Krikorian, Prof. Villula,
- Autoridades: Dr. Berizonce; Dr. López Akimenco; Dr. Carrique y Dr. Domenech.
- Colaboradoras: Lic. Volonté; Lic. García Munitis, Abog. Ares y Lic. Tassano.

Comentarios y opiniones expresadas:

- El Sr. Decano hizo un raconto del desarrollo del debate y describió el estado actual; mencionó que se puede consultar el documento con las ideas preliminares y todos los demás aportes en la página web de la facultad. Señaló como las "bases" del proyecto su viabilidad y factibilidad, y la inquietud de perfeccionar la enseñanza práctica y no circunscribirla a procedimientos penales y comerciales, sino extenderlas hacia otras áreas, ya que se requieren diferentes habilidades para ejercer la profesión tanto de abogado (y varían según los ámbitos) como de escribano o procurador. Se refirió a la necesidad de mantener el perfil generalista en el grado que, en el contexto actual, sigue siendo fundamental para la formación profesional, cuya especialización podrá realizarse a través de una amplia gama de cursos y carreras de posgrado. Destacó como "nuevo ingrediente" que los alumnos puedan elegir ciertos contenidos, aún en el grado, inquietud basada en la idea de diferenciar contenidos y no de "acumularlos". De esta manera, comenzó la explicación "original" sobre las materias optativas y la propuesta surgida en el transcurso del proceso de debate, de optativizar "media" materia. Expuso el funcionamiento del sistema de equivalencias entre las opciones, a las que se suma un gran número de seminarios "alternativos". Estos últimos implican una oferta de contenidos dinámica y no cristalizada como la de las materias regulares, por su variación de acuerdo a temas de actualidad. A su vez, esta propuesta sirve de articulación entre el grado y posgrado, cuestión compleja que en general las reformas de los planes de otras facultades del país no lograron resolver. De todas formas enfatizó la no finalización y cierre de este debate.

- Un alumno preguntó al elegir "media optativa" de aquellas materias que ahora son obligatorias, podría completar con un seminario. El Sr. Decano respondió afirmativamente, "abrió" la temática de los seminarios y vinculó la elección al sistema de créditos. El Dr. Domenech destacó la versatilidad de los programas y la calidad de estas propuestas que cuenta con la participación de un amplio número de profesores titulares de esta y de otras facultades. Además, mencionó el caso de Clínica Jurídica, en el que se trabaja con otros operadores y actores sociales vinculados a la temática; tal es el caso del de Inundaciones en La Plata, en el que participó gente de una asamblea vecinal afectada. Por otro lado, mencionó que este año participaron alrededor de 600 alumnos, que "este programa ha crecido casi sin recursos y desde abajo; porque si hubo un sector que lo apoyó, este ha sido el de los estudiantes".

- Soledad Vallejo preguntó por el sistema de los alumnos libres. Como no se proponen modificaciones, a continuación agregó "¿cómo se articula la propuesta de enseñanza práctica con estos alumnos, que representan la mayoría en esta facultad?". El Sr. Decano respondió que se implementarán modificaciones paulatinamente. El Sr. Vice Decano agregó que los alumnos en esa situación podrían asistir a reuniones con los jefes de trabajos prácticos, porque se empezarían a evaluar casos también en los exámenes libres. El Dr. Domenech advirtió en primer lugar, sobre la posibilidad del trabajo virtual; y en segundo lugar, "en el peor de los casos, esta propuesta no modifica la situación actual de los libres; y algo similar ocurre con las inquietudes sobre el espacio, pero, aunque la facultad no tiene más aulas, los lugares para dictar los seminarios los hemos conseguido". De manera que, habrá que ser cuidadoso porque muchas veces la falta de recursos funciona como una excusa para no hacer ...". Y finalmente, el Dr. Carrique destacó la voluntad de esta gestión de ampliar las posibilidades para que todos puedan cursar.

- Francisco Balbín preguntó "¿cómo piensan influir en la conciencia de los operadores, que en este caso son los profesores, para que la reforma no 'quede en saco roto'? Y priorizó la formación de conciencia crítica y capacidad argumentativa en el ámbito universitario, ya que "la práctica la puedo obtener en cualquier lugar de trabajo pero el hábito de la reflexión crítica, no". El Dr. Domenech estuvo totalmente de acuerdo con esta diferenciación y reconoció respecto de la pregunta, las posibles resistencias de alumnos y profesores. Agregó que se ha diseñado un curso de capacitación docente, y consideró que el camino de transformación es más vasto, pero el punto de inflexión hay que darlo, "por algún lado hay que empezar".

- Analía Carenis preguntó si existía alguna incompatibilidad entre el régimen de los seminarios y las materias, para que sigan siendo obligatorias. El Sr. Decano señaló la necesidad de no agregar contenidos, pero ampliar la oferta de los mismos. El Dr. Domenech, señaló que el hecho de que los alumnos aprendan a preguntarse y a tomar decisiones inteligentes, es un buen ejercicio.

- alumno: ¿no se trata de un eufemismo? Domenech: para nombrar qué? ... Tenemos un fuerte compromiso con el país que sufre; no nos hemos apartado de esto, sino todo lo contrario, hemos incorporado temáticas como violencia familiar ...

- Otro alumno señaló la necesidad de mejorar el sistema de correlatividades, por ejemplo Derecho Constitucional y Procesal ll. Consideró positivamente que cada alumno elija al menos, algo.

- Facundo (alumno) estimó que hubiese sido más democrático organizar el debate de otra manera, y que la difusión de la convocatoria para participar en la reunión no ha sido suficiente o tal vez, no fue la más adecuada. A su juicio hubiese sido más participativo organizar asambleas interclaustros y recibir además, aportes de otras facultades. Para la difusión habría que haber recorrido las cursadas. Por otro lado, señaló que una reforma debe apuntar a la mejora de la enseñanza y la calidad educativa. Estas pretensiones deberían traducirse en buena medida en proporcionar mayores posibilidades de cursar y conseguir recursos para crear cátedras como Derechos Humanos. Finalmente, planteó las dificultades de algunos estudiantes para acceder a Internet, más aún, teniendo en cuenta que muchos del interior se volvieron por falta de recursos.

- Las autoridades invitaron a concurrir a la Audiencia Pública que se realizará en el Colegio de Abogados a las 18 hs. el próximo 10 de octubre. También para participar en la Jornada de Reflexión Interclaustro, programada para el 28 de este mes. En relación con las convocatorias el Dr. Domenech aclaró que aún con algunas deficiencias se utilizaron los medios de comunicación habituales.

- Lisandro (alumno) preguntó cuál fue el criterio para decidir qué materias serían optativas y cuáles no. El Dr. Domenech le informó que existe un Estatuto Universitario que fija ciertos contenidos, y que se vuelve sumamente necesario en un país anómico, respetar las reglas, y no eludirlas. Además, agregó que como se trata de un tema tan relevante, podrá opinar toda la ciudadanía en la audiencia pública, y no sólo la comunidad universitaria. El Sr. Decano invitó a discutir ideas concretas y el Sr. Vice decano reiteró el hecho de que las discusiones giran en torno a la propuesta, que no hay una decisión tomada a priori, ya que el órgano decisorio es el HCA.

- Alumno (militante de la Juventud Peronista y el Frente Amplio) no compartió las críticas de sus pares frente a la optatividad, ya que esta propuesta no excluye la posibilidad de elegir un plan idéntico al vigente actualmente. De todas maneras, mencionó que trabajaron grupalmente sobre el documento y puntualizaron algunas consideraciones a favor y en contra, que harán llegar por escrito.

- Una señora (alumna) destacó la importancia de que el debate se haya instalado en la agenda y rutina institucional, pero señaló que los carteles no los leyó y sostuvo que materias como Marítimo y Navegación, deberían seguir siendo obligatorias, ya que son de suma utilidad para las personas vinculadas a

Astilleros, entre otras. El Dr. Domenech acordó en la relevancia de los contenidos, pero destacó la pertinencia de enriquecer el trabajo sobre estas problemáticas con la perspectiva interdisciplinaria, posibilidad que no se elimina sino que queda, más bien, sujeta al interés y las propuestas docentes. En relación a las observaciones metodológicas, reconoció la importancia de tomar tiempo académico, en las cursadas, para discutir este tema. También se podría otorgar un certificado de asistencia para justificar la inasistencia a aquellos que participen de la reunión. Pero además, señaló que sólo con este tipo de observaciones no se logra ni se propone un cambio.

Cuadro de Situación
Modificación del plan de estudios de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

El documento denominado "Diagnóstico e ideas preliminares para la modificación del Plan de Estudios", elaborado por el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, consta de una exposición acerca del estado en que se encuentra actualmente la organización de la enseñanza de grado, sus aciertos y falencias, y de una descripción de los objetivos que se persiguen con el nuevo plan, una síntesis de la propuesta y un cuadro analítico, si bien incompleto, de la currícula que se propone para la reforma.

En el cuadro de la situación actual se narran los antecedentes del plan vigente, integrado por 31 materias, un seminario y dos cursos prácticos, dispuestos para su cumplimiento en cinco años. Se mencionan las innovaciones introducidas tendientes a mejorar la formación práctica, la renovación temática, la innovación didáctica y la integración interdisciplinaria. Una evaluación de este plan apunta como ventajas la formación de abogados generalistas y un plazo de duración adecuado para lograrlo.

Advierte que frente al crecimiento exponencial del derecho que debe enseñarse y las exigencias de los ejercicios profesionales, uno de los puntos de equilibrio a encarar se encuentra en la relación entre los contenidos de la enseñanza de grado y los que son propios del postgrado. Considera que con la actual disposición de especializaciones y maestrías de dos años, la Facultad logra que en siete años se obtenga un abogado generalista-especializado.

Pero también el documento apunta falencias en el plan vigente. Serían ellas la ausencia de instancias de integración de las diversas disciplinas jurídicas, la rigidez y desactualización de los contenidos curriculares, la escasa participación del alumno en la selección de contenidos, la insuficiencia de la formación práctica (limitada a ciertas formas de ejercicio profesional: la del abogado litigante), la ausencia de contenidos de disciplinas no jurídicas, como asimismo de contenidos metodológicos y de estímulos a la investigación y a la creatividad, la insuficiencia de contenidos éticos y solidarios.

La propuesta

En la descripción de las propuestas se deja sentado el propósito de mantener la estructura del plan vigente, pero introduciendo lo que denomina como tres ejes centrales de modificaciones y que consisten en: l) convertir ciertas materias obligatorias en optativas; 2) ampliar el número de opciones para incluir otros contenidos jurídicos de actualidad, metodológicos, éticos y solidarios, con lo que se revaloriza el rol del alumno. En este eje se incluyen seminarios alternativos como instrumento innovador que permita la incorporación de otros saberes; 3) perfeccionamiento generalizado de la enseñanza práctica.

En suma, el plan estructurado sobre la base de módulos, horas y créditos, tiene una meta de 36 módulos de 96 horas cada uno, lo que importa el cumplimiento de 3456 horas, a las que se suman diez créditos.

En la exposición analítica del plan se advierte que las 3l materias actualmente obligatorias se reducen a 26, que insumen 3168 horas; l5 de ellas se cursan en teóricos-prácticos. Hay dos módulos prácticos obligatorios de procedimientos (civiles y penales) que añaden 192 horas.

La exigencia complementaria se basa en los módulos optativos, que pueden efectuarse con asignaturas jurídicas, asignaturas no jurídicas, seminarios o seminarios alternativos y prácticas alternativas. Quedan de esta suerte excluidas del actual elenco cinco materias obligatorias, ahora desplazadas como módulos optativos, a saber los derechos agrario, de la navegación, de minería y energía, notarial y registral, así como la sociología jurídica.

Se mantienen como títulos los de abogado y escribano, previéndose la creación de títulos intermedios, aunque el único ya incluido expresamente es el de procurador.

Parecer

La continuidad que se persigue con la mera adecuación de los lineamientos del plan vigente y el declarado propósito de mantener la formación de abogados generalistas como objetivo, son puntos de partida prudentes y encomiables del proyecto. La fractura que introduce a la generalidad con el desplazamiento de cinco materias hacia la órbita de las opciones no excede lo tolerable si se coteja con los desbordes en que incurren otros planes vigentes en universidades argentinas, más abiertos a supuestos proyectos profesionales del estudiante que suelen desembocar en incoherencias e insuficiencias formativas motivadas por selecciones frecuentemente prematuras cuando no oportunistas antes que vocacionales.

La duración fijada y el número de horas establecido revelan un compromiso de calidad en el desarrollo lectivo. Con todo, los datos del documento no permiten avanzar más en la apreciación sobre la consistencia de las reformas. La falta de información sobre los contenidos de las materias y seminarios, individualizados por la mera denominación, la módica alusión a los métodos de enseñanza que se distinguen tan solo por la referencia a cursos teóricos-prácticos, en implícita diferenciación con los meramente teóricos o los exclusivamente prácticos, conspiran contra la posibilidad de formular una opinión más fundada y consistente.

Bajo la reserva de lo precedentemente dicho, resulta del caso efectuar algunas consideraciones. La fijación de un plazo sensato y una exigencia horaria adecuada, no puede dejar de lado la necesidad de encarar

el estudio de los factores incidentes en dos realidades reveladoras de la necesidad de introducir correctivos. Consisten ellas en el bajo porcentaje de alumnos que se gradúan y en el mayor tiempo que insume la conclusión de los estudios, según resulta de "Convergencias", la publicación que se ha enviado con el proyecto. De los datos allí expuestos resulta que en los últimos años se ha graduado el 17% de los ingresantes y, por otra parte, que sólo el 1% logra hacerlo en cinco años, mientras el 4% necesita siete años.

Con la misma salvedad hecha en el párrafo anterior, cabe acotar que no se desarrolla en el documento la implementación de los medios para cubrir los objetivos que se encuentran lúcidamente enunciados en la exposición de las falencias del plan actual, como lo son v.gr. los estímulos o la propedéutica de la investigación, la gimnasia en el razonamiento jurídico, la problemática de la interpretación, la aproximación a los temas fundamentales del saber jurídico y de la deontología. Sin duda, contribuirá a mejorar el conocimiento y profundización del saber jurídico, a acentuar el ejercicio del razonamiento jurídico y a dar la adecuada dimensión social al Derecho, la enseñanza de la Sociología del Derecho y de la Historia del Derecho en niveles superiores de la carrera, aunque sea como "asignaturas optativas". Se observa que la primera de ellas se encuentra ya en el proyecto, y se sugiere que se incluya la segunda.

Las circunstancias están marcando una aguda encrucijada en la enseñanza del derecho. A los "nuevos hechos, nuevo derecho" que hace más de cincuenta años dijera Joaquín Garrigues, se une la patología legislativa que introduce la incertidumbre en el derecho, la multiplicación de disciplinas que no pueden ser desconocidas en las escuelas de derecho y que buscan una ubicación en los planes de enseñanza o siquiera un capítulo entre las materias ya incluidas. Una frecuente solución tranquilizadora o superadora de la emergencia las envía al ámbito de las materias optativas o las desplaza hacia el postgrado.

A la problemática descripta, que en buena medida se encuentra presente en el documento, se puede agregar la resultante de la internacionalización de las relaciones con sus nuevos requerimientos que abren crecientes exigencias en el conocimiento de idiomas y del derecho comparado, del derecho de los tratados, de la contratación y de los negocios internacionales, de los principios de Unidroit sobre contratos internacionales, etc. Se suman todavía los surcos abiertos por la tecnología, el derecho de la informática y del Internet, la eficacia atribuible a las comunicaciones por fax y por correo electrónico, la celebración de contratos o de actos jurídicos entre personas que se encuentran a distancia pero comunicadas por medios audiovisuales, la firma digital, etc. datos dotados de una dimensión jurídica que actualmente no puede ser ignorada por el abogado. Téngase en cuenta que estos conocimientos son de aplicación en una amplia gama de derechos. Ante la ausencia de los contenidos de las materias, se ignora los canales de recepción dados a estas exigencias.

El esfuerzo por alcanzar una formación práctica encuentra respuesta en el Proyecto a través del acrecentamiento de las materias que tendrán cursos teóricos-prácticos. Es una buena iniciativa que parece movida por el deseo de subsanar el enfoque hacia la sola formación del abogado litigante que se censura a las universidades. Y no puede desconocerse que la profesión tiende a subdividirse actualmente en abogacía de negocios y abogacía de litigios, no obstante lo cual se ha minimizado la relevancia de tal distinción porque no hay abogado que pueda prescindir de lo que ocurre en los tribunales. Cabe anotar que la bondad de la práctica ceñida a su desarrollo en el curso de una materia aislada suele presentar limitaciones para ejercicios interdisciplinarios, práctica para la que en cambio puede ser ventajoso el método de casos.

No está dada la respuesta sobre la incidencia que el régimen de teóricos-prácticos tendrá en los estudiantes que desean rendir estas materias como libres. De todas maneras deben tenerse en cuenta las estrechas posibilidades que son inherentes a la formación práctica suministrada desde el aula toda vez que, en puridad, recién se alcanza con el ejercicio de la actividad profesional.

Una última observación al documento es relativa al silencio en torno a los nuevos modos de gestión de los conflictos como la mediación y el arbitraje que vienen ganando considerable espacio en nuestras prácticas.

En síntesis, entendemos que la formación teórico-práctica con las exigencias que se han dejado expuestas, debe complementarse con una enseñanza que tienda a munir al futuro egresado de conocimientos mínimos para un enfoque cultural y humanista y lo dote de solidez en el razonamiento jurídico y en los fundamentos del derecho para habilitarlo en el buen desempeño de las actividades abiertas a la abogacía en distintos ámbitos.

Sin conocer los programas de las materias no se puede avanzar en el análisis del tema de los créditos que se requieren para obtener el título y, más aun, si se pretende otorgar algunos de carácter intermedio.

En cuanto al ejercicio de la procuración, cabe tener en cuenta que en la actualidad suele caracterizar el quehacer de los abogados jóvenes y no es corriente que los mayores se limiten al control de las actuaciones judiciales. Esta realidad debe ser sopesada para decidir sobre la conveniencia de habilitar una carrera de procuración.

El proyecto mantiene la especialización en el post-grado, lo que es un acierto ya que el título de abogado que obtiene con el plan que se propone, lo habilita para el ejercicio de la profesión con una amplitud que no conoce limitaciones por la diversidad de las actividades.

Por último, cabe destacar el protagonismo de un cuerpo docente, que sume a la capacidad intelectual una vocación y dedicación inquebrantables, como clave del éxito de todo plan de estudios. En consecuencia, debe darse un especial énfasis a los cursos para formación de los docentes a cargo, preferentemente, de profesores veteranos que puedan sumar su experiencia a su saber.

La reforma de la enseñanza del derecho presenta una complejidad notoria y por ello sus contornos son imprecisos y encuentra respuestas contradictorias. Queda mucho por hacer y hay amplio margen para la creatividad. Los lineamientos que se trazan desde la Universidad de La Plata tienen en claro la problemática y constituyen una base interesante para ulteriores desarrollos.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2002

REFORMA AL PLAN DE ESTUDIOS
El Plan y el Debate

Después de elaborado y discutidas las ideas preliminares sobre la modificación al Plan de Estudios es menester reseñar el Estado actual del debate instalado. Para hacerlo se puntualizarán en primer término coincidencias a las que se ha arribado hasta el momento, después las discrepancias que se han evidenciado, y finalmente se individualizarán cursos de acción posibles. En todos los casos se hará en nota cita de los documentos o debates en los que se fundan las conclusiones.

1. Las coincidencias

Hasta el momento se arribado a significativas coincidencias entre la Comunidad Académica; muchas de ellas se han referido a ideas rectoras del Plan, y a otras a cuestiones no menos importantes.

1,1. Coincidencias en torno a ideas del Plan

La primera de ellas alude al diagnóstico formulado sobre las dificultades del actual Plan, que no ha merecido reparo alguno, y que ha sido elogiado, en los documentos enviados al Decanato de la Facultad.

También el valor de los Seminarios alternativos han sido una importante de coincidencias entre las personas que han participado del debate y lo han hecho en los informes anteriormente mencionados.2 La necesidad de nuevas temáticas –que se dictan en los seminarios alternativos- ha sido destacada también por las encuestas formuladas a los Profesores Titulares, y por el informe de la Academia Nacional de Derecho.

Las encuestas formuladas a los Profesores titulares también contienen datos que apoyan la valoración de nuevas temáticas para la formación de los abogados, entre los que se encuentran:
Y el informe producido por la Academia Nacional de Derecho destaca la necesidad de nuevas temáticas.

Finalmente la necesidad de un incremento de la carga práctica del Plan ha suscitado importantes coincidencias. En este punto todos los docentes han acordado con los documentos presentados.

1,2. Otras coincidencias

Surge en los documentos presentados la necesidad de revisar el régimen de correlatividades, así como de evitar la reiteración de contenidos en los Programas de las Materias.

Han coincidido también en la necesidad del mejoramiento de la comunicación institucional y la necesidad de capacitación de los docentes para la formulación de prácticos.3 También se evidenció una preocupación común por la previsión de prácticos y seminarios para los alumnos libres.

Finalmente tanto los profesores que plantean críticas como quienes acuerdan con esta reforma, reconocieron la importancia del debate y el espacio de comunicación generado en torno a este proyecto.

2. Las discrepancias

Las discrepancias pueden ser clasificadas por sus motivos o razones. Algunas aluden a la oportunidad de la reforma, otras a la metodología empleada para llevarla a cabo y otras a la inconveniencia de la inclusión de ciertas materias como optativas

2,1. La inoportunidad de la reforma.

De este modo se enfatiza que no existe urgencia para la modificación del Plan de Estudios, o que sería necesario repasar primero las metodologías de enseñanza aplicadas.

2,2. La metodología implementada para producirla

Dentro de este tipo de observaciones es posible aun discriminar los argumentos utilizados. Algunos de ellos se refieren a la crisis de representatividad de las instituciones universitarias, y proponen una metodología asambleística. En la reunión con alumnos se han señalado como poco democráticos algunos aspectos de su proceso de decisión: poco suficiente la convocatoria, y se ha propuesto la necesidad de una asamblea interclaustros.

Otros critican la metodología de las encuestas realizadas a los profesores titulares o del plan propuesto.

2,3 La inclusión de ciertas materias como optativas

La inclusión de ciertas materias optativas ha merecido diversos reparos:
. la ausencia de explicitación de un criterio que justifique la inclusión de unas en desmedro de otras.
. la poca consistencia de la propuesta al no haber incluido otras materias que en otros regímenes fueron optativas.
. la necesidad de los contenidos mencionados como optativos en función de la importancia para un Proyecto de desarrollo nacional.
. o de que se traten de Códigos Nacionales como los que estudian otras materias troncales, con base constitucional (minería)
. la necesidad de esos contenidos por los ejercicios profesionales de la abogacía
. la idea que de este modo se restan conocimientos, se “achican” contenidos en vez de sumarlos.5

3. Otras Opciones

La importancia de las coincidencias alcanzadas justifica que es exploren otras posibilidades de reforma que eviten o minimicen las discrepancias que se han evidenciado. Para ello puede trabajarse sobre dos opciones.

La primera es que se modifique la carga horaria de la carrera, la segunda que no se lo haga.

Si se incrementa la carga horaria de la carrera entonces el problema es sencillo porque la carga horaria añadida permite la inclusión de una oferta de opciones. La carrera se extiende y se incorporan las opciones. Pero evaluaciones anteriores no parecen aconsejar la extensión de la carrera.

Si no se incrementa la carga horaria también existen otras posibilidades que permitan la inclusión de los seminarios y la posibilidad de formular opciones:

Diseñar contenidos mínimos para las asignaturas que en el Proyecto se han considerado como optativas –acortando la carga horaria a la mitad- de modo que luego se puedan incluir los seminarios y permitir las opciones, sin excluir la misma materia en su carga horaria máxima.

De este modo las asignaturas que en las ideas preliminares se consideran optativas deberían prever Cursos o segmentos de Cursos con un carga horaria mínima de modo de permitir al alumno optar entre:
1. La carga horaria máxima del Curso.
2. Seminarios alternativos, que incluyan:
. Las temáticas que se señalan como vacantes en el grado académico.
. Nuevas temáticas o actualizaciones de las existentes.
3. Otros contenidos que el alumno ya posea en su formación anterior

Algunas Conclusiones

Sobre la base del debate la Comisión propone
1. Aceptar el diagnóstico formulado en Ideas Preliminares.
2. Aceptar la propuesta relacionada con el incremento de la carga práctica del Plan;
3. Desechar la inclusión de Materias Optativas;
4. Proponer que los contenidos de las asignaturas indicadas como optativas, posean una variante de carga horaria mínima que se curse en dos meses y permita al alumno elegir contenidos alternativos a la misma, y una variante de carga horaria máxima de cuatro que cumpla con los créditos pertinentes; se estima conveniente formular consulta a los docentes involucrados.
5. Aceptar los Seminarios Alternativos como modalidades aptas para que el alumno complete la carga horaria en caso de que haya elegido por las cargas mínimas de dos meses en las asignaturas pertinentes;
6. Aceptar que el alumno pueda completar esas cargas haciendo valer contenidos adquiridos al cursar otras carreras;
7. Reformular la carga horaria de las asignaturas y los créditos que se le asocian.
8. Sugerir que el Decanato y el HCA prevean estrategias destinadas a:
8,1. Repasar los contenidos de los Programas, para evitar reiteraciones y optimizar correlatividades
8,2. Elaborar estrategias destinadas a la realización capacitación práctica y prácticos a distancia, en especial para el alumno libre.
8,3. Elaborar estrategias para realizar Seminarios a distancia.
8,4. Diseñar nuevos Seminarios en las temáticas que los informes producidos con motivo de las Ideas Preliminares y el debate subsiguiente han consignado como de vacancia e importancia profesional, invitando especialmente a que los Docentes de las asignaturas con cargas mínimas lo hagan.
8,5. Prever mecanismos de capacitación para los Jefes de Trabajos Prácticos, Auxiliares Docentes y Ayudantes Alumnos para la formulación de Trabajos Prácticos.

3) (PROYECTO 6) Propone la reforma de los contenidos de la Asignatura Derecho Político para ser denominada Ciencia Política, por el Dr. Sebastián Piana, Profesor Adjunto de Derecho Político.-

La Plata, 29 de junio de 2011

Sr. Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abog. Vicente ATELA
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar como propuesta la creación de una materia específica con contenido interdisciplinar vinculado a la Ciencia Política.

Sabido es que el actual perfil en la formación del abogado en nuestra Facultad se encuentra orientado, preferentemente, al ejercicio liberal de la profesión. Dicha orientación no se condice con las posibilidades laborales que encuentra en nuestra ciudad, sede del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial además de asiento del gobierno municipal y a muy poca distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde tienen sede numerosos organismos públicos internacionales, nacionales y locales.

Si bien algunos contenidos vinculados al Programa propuesto se encuentran tratados en la materia Derecho Político, la propuesta busca profundizar algunos de esos conceptos (y tratar nuevos) de forma sistemática, aportando al futuro abogado conocimientos teóricos y prácticos de diversas temáticas que debe manejar con solvencia si su orientación profesional se vincula al ejercicio profesional en ámbitos gubernamentales.

En efecto, el abogado que se desempeña en esos espacios públicos debe tener competencia y capacidad para elaborar informes técnicos, prestar asesoramiento, dictaminar y decidir cuestiones que no se encuentran estrictamente vinculadas sólo al derecho, sino también, a aspectos políticos – institucionales, de oportunidad y conveniencia que debe poder evaluar con solvencia.

El objetivo de la materia es proporcionar a los alumnos un marco general para la comprensión, descripción y explicación de los fenómenos políticos. La problemática del poder será el eje central para el estudio de conceptos esenciales del análisis político: Estado, nación y democracia; partidos políticos, representación y opinión pública, régimen político, gobierno y administración, clase política y élites, cultura política, movimientos sociales y cambio político en el orden interno e internacional.

El eje referido debería ser abordado buscando sus rasgos esenciales, el «modo de ser» de lo político.

A través de la lectura analítica de textos seleccionados y representativos de estas categorías en la Ciencia Política del siglo XX, se pretende que los alumnos comprendan las distintas perspectivas teóricas con que pueden estudiarse la realidad política.

A fin de una mayor justificación de la relevancia y necesidad de incluir esta materia, se adjunta un Programa con las temáticas a tratar.

Sin otro particular, saludo a usted muy cordialmente.

Dr. Ricardo Sebastián PIANA

PROGRAMA

Unidad 1. LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA.
1. La política como objeto de estudio (ciencia política) y como acción (conducción y liderazgo). Teoría y práctica. El malestar en la política.
2. El trabajo interdisciplinario de la Ciencia Política. Distintas corrientes.
3. La naturaleza humana como presupuesto y base del pensamiento político.
4. Esencia de lo político: relaciones público-privado; amigo-adversario; mando-obediencia en Julien Freund. El particularismo de la política. La Política, lo político.

Bibliografía principal
Freund, Julien, 1964. La esencia de lo político. Introducción. Cap. I. Política y Sociedad. Cap. II. Del origen de lo político. Editora Nacional, Madrid.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1988. Manual de Ciencia Política. Alianza. Cap. 1. Naturaleza y evolución de la disciplina. Alizanza, Madrid.
Sartori, Giovanni, 1991. Elementos de Teoría Política. Cap. 10. Política. Alianza, Madrid.

Bibliografía sugerida
Burnham, James, 1986. "La política y la verdad" en Los Maquiavelistas. Defensores de la Libertad. OLCESE, Buenos Aires.
Dahl, Robert, 1983. Análisis Político Actual. Eudeba, Buenos Aires.
Portinaro, Pier Paolo, 2007 El realismo político. Nueva Visión, Buenos Aires.
Schmitt, Carl, 1991. El concepto de lo político. Alianza, Madrid.
Trigg, Roger, 2001. Concepciones de la naturaleza humana: una introducción histórica. Alanza, Madrid.
Weber, Max, 1981. El político y el científico. Introducción de Raymond Aron. La política como vocación. Alianza Editorial, Madrid (séptima edición).

Bibliografía complementaria
Sartori, Giovanni, 1984. La política. Lógica y método de las ciencias sociales. FCE. México.
Albert Battle (comp.), 1992. Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Barcelona. Ariel.
Bauman, Zygmunt, 2001. En búsqueda de la política. FCE, Buenos Aires.
Bertín Hugo D. y Corbetta, Juan C. , 1997. "La noción de legitimidad en el concepto de lo político de Carl Schmitt" en La noción de legitimidad en el concepto de lo político de Carl Schmitt. Ed. Struhart. Buenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1977. Teorías políticas contemporáneas - Una introducción", Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
Bobbio, Norberto et al., 1986. Diccionario de política. Siglo XXI, México.
Burdeau, Georges, 1976. Método de la Ciencia Política. Desalma, Buenos Aires.
Easton, David, 1973. Esquema para el análisis político. Amorrortu, Buenos Aires
Molina, Jerónimo, 2000. Julien Freund, lo político y la política. Sequitur, Madrid
Tansey, Stephen. D., 2000. Politics: the basics. Second Edition. Routledge. London and New York.
Pereira Menaut, Antonio–Carlos, 2000. Doce tesis sobre la política. UNAM, México.

Unidad 2. EL PODER
1. Tipo de Poderes. El poder político: diferencia con el poder económico, social e ideológico.
2. El tratamiento conceptual e histórico del poder. El fenómeno del crecimiento del poder en el análisis de Bertrand de Jouvenel.
3. Los fundamentos del poder. La legitimidad: tipos de dominación. Concepto y presupuestos de la legitimidad democrática. Legitimidad, legalidad y efectividad. Autoridad y coacción.

Bibliografía principal
Aron, Raymond, 1989. "Match, Power, Potencia, prosa democrática o poesía demoníaca (1964)" en Estudios Políticos. Espasa Calpe. Madrid.
De Jovenel, Bertrand, 1998. Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento. Selección de capítulos. Unión Editorial, Madrid.
Hobbes, Thomas, 1992. Behemoth. “Diálogo I”. Tecnos, Madrid.
Weber, Max, 1992. Economía y Sociedad. Selección de capítulos. FCE. México.
Preterossi, Geminello, 2002. Autoridad. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.

Bibliografía sugerida
Arendt, Hannah, 2005. Sobre la violencia. Alianza Editorial, Madrid.
Ferrero, Guglielmo, 1998. Poder. Los genios invisibles de la ciudad. Tecnos, Madrid.
Gramsci, Antonio, 2004. Antología. Siglo XXI, México.
Mosca, Gaetano, 1984. La clase política. FCE, México.
Peters, S. y Winch, Peter, 1974. "La autoridad" en Quinton, Anthony. Filosofía Política. FCE, México.

Bibliografía complementaria
Kliemt, Hartmut, 1979. Filosofía del Estado y criterios de legitimidad. Alfa, Buenos Aires.
del Águila, Rafael, 1997. Manual de Ciencia Política. Cap. I. La política: El poder y la legitimidad. Ed. Trotta, Madrid
Arendt, Hannah, 1987. Los Orígenes del Totalitarismo. Alianza, Madrid. 3 ts.
Bell, Daniel, 1964. El fin de las ideologías. Tecnos, Madrid.

Unidad 3. ESTADO.

4. El Estado: de la Respublica Christiana al nacimiento del Estado soberano. Elementos constitutivos del Estado.
5. Tipos históricos de Estado. Estado Total, Estado Absoluto, Estado máximo y Estado mínimo.
6. El Estado de Derecho y justicia. ¿El gobierno de las leyes o el gobierno de los jueces?
7. El debate sobre los fines del Estado: el Estado de bienestar y el rol social del Estado: crisis. ¿Reedición del Estado mínimo? Estado postsoberano y organizaciones supranacionales.

Bibliografía principal
Bobbio, Norberto, 1985. Estado, Gobierno y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México.
Portinaro, Pier Paolo, 2003. Estado. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Sicker, Martin, 1991. The Genesis of the State. Praeger. New York, Westport, London.
Vallespín, Fernando (2000). El futuro de la política. Taurus, Madrid.

Bibliografía sugerida
De Jouvenel, Bertrand, 1976. Los orígenes del estado moderno. Historia de las ideas políticas en el siglo XIX. E.M.E., Madrid.
Heller, Hermann, 1968. Teoría del Estado. Cap III. 1. Supuestos Históricos del Estado. FCE. México.
Poggi, Gianfranco, 1997. El desarrollo del Estado moderno. Una introducción sociológica. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Bibliografía complementaria
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, 2000. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Trotta, Madrid.
Cassirer, Ernst, 1968. El mito del Estado. Fondo de Cultura Económica, México.
García-Pelayo, Manuel, 1980. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Alianza Editorial, Madrid.
Passerin D'Entreves, Alessandro, 1970. La Noción de Estado. Euroamérica, Madrid.
Zippelius, Hans, 1985. Teoría del Estado. Ciencia de la política. UNAM, México.

Unidad 4. LA NACIÓN
8. El concepto de nación. Nación cultural, estatal y política.
9. Del Estado absolutista al Estado Nación.
10. Los procesos de formación del Estado. Naciones sin Estado y Estado con naciones.
11. Descolonización. Los nuevos nacionalismos y las minorías. Los movimientos de liberación nacional. Nacionalismo y Populismo.

Bibliografía principal
Breuilly, John, 1990. Nacionalismo y estado. Pomares-Corredor, Barcelona.
Campi, Alessandro, 2005. La Nación. Claves. Buenos Aires.
Chabod, Federico, 1987. La idea de Nación. FCE, México
Renan, Ernest, 2006. ¿Qué es una Nación? Sequitur, Madrid.
Sieyes, Emmanuel, 2003. ¿Qué es el Tercer Estado? Alianza. Madrid.

Bibliografía sugerida
Gellner, Ernest, 1988. Nación y Nacionalismo. Alianza, Madrid.
Habermas, Jürgen, 2000. La constelación posnacional. Paidós, Barcelona.

Bibliografía complementaria
Anderson, Benedict, 1993. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.
Garavaglia, Juan Carlos, 2007. Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata. S. XVIII-XIX. Prometeo, Buenos Aires.
Kaplan, Marcos, 1976. Formación del estado nacional en América Latina. Amorrortu, Caracas.
Segato, Rita Laura, 2007. La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad. Prometeo, Buenos Aires.

Unidad 5. DEMOCRACIA
12. Democracia: Características y presupuestos de los regímenes democráticos. El modelo democrático. Presupuestos sociales, económicos e institucionales. Las reglas del juego democrático.
13. Las nuevas vías de la legitimidad. Percepción sociológica y política de la noción de mayoría. La desacralización de la elección y su reducción a modo de designación de los gobernantes.
14. La democracia en el pensamiento contemporáneo. "La contrademocracia". Disociación de la legitimidad y de la confianza. La democracia de control. La "política negativa". Las nuevas vías de la democracia electoral-representativa.

Bibliografía principal
Dahl, Robert, 1992. "La Poliarquía" en Albert Battle (comp.). Diez textos básicos de ciencia política. Ariel, Barcelona.
Morlino, Leonardo, 1988. "Las democracias" en Pasquino, Gianfranco (dir.). Manual de Ciencia Política. Alizanza, Madrid.
Rosanvallon, Pierre, 2007. La contrademocracia. La Política en la era de la desconfianza. Manantial, Buenos Aires.
Schumpeter, Joseph A., 1996. Capitalismo, socialismo y democracia. Folios, Barcelona.

Bibliografía Sugerida

Zolo, Danilo, 1994. Democracia y complejidad. Un enfoque realista. Nueva Visión, Buenos Aires.
Bobbio, Norberto, 1992. El Futuro de la Democracia. FCE, México.
Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (comp.), 2001. Políticas e instituciones en las nuevas democracias Latinoamericanas. Paidós, Buenos Aires.
Dahl, Robert, 1998. La democracia. Una guía para los ciudadanos. Taurus, Madrid.
Dahrendorf, Ralf, Furet, François y Geremek, Bronislaw, 1993. La democracia en Europa. Alianza Editorial, Madrid.
Friedrich, Carl J. , 1975.Gobierno Constitucional y Democracia. Instituto de Estudios políticos, Madrid.
Kòjeve, Alexandre, 2005. La noción de autoridad. Nueva Visión. Buenos Aires.
Linz, Juan J., 1997. La quiebra de las democracias. Alianza, Madrid.
Sartori, Giovanni, 1989. Teoría de la Democracia. El Debate Contemporáneo, Tomo I y Los Problemas Clásicos, Tomo II. Alianza Universidad, México.

Bibliografía complementaria

Aron, Raymond, 1968. Democracia y totalitarismo. Seix Barral, Barcelona.
Dahl, Robert, 1989. La poliarquía: participación y oposición. Rei, Buenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1986. Los grupos de presión en la democracia. Ed. de Belgrano, Buenos Aires.
Fistetti, Franceso, 2004. Comunidad. Léxico de política. Nueva Visión. Buenos Aires.
Held, David, 1991. Modelos de democracia. Alianza Editorial, Madrid.
Iazzetta, Osvaldo, 2003. “Las asignaturas pendientes de nuestras democracias” en Democracia, desarrollo humano y ciudadanía: reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina. Homo Sapiens, Rosario.
Lijphart, Arend, 2000. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Ariel, Barcelona.
Pasquino, Gianfranco, 1999. La Democracia Exigente. F.C.E., Buenos Aires.
Touraine, Alain, 1995. ¿Qué es la Democracia? FCE, Buenos Aires.

Unidad 6. LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS

15. Los partidos políticos. Origen y evolución de los partidos políticos. Concepto. Funciones. Diferencias con otros grupos de poder. Su incorporación a las constituciones jurídicas.
16. El sistema de partidos: clasificaciones, dimensión ideológica. Sistema de partido único, de partido hegemónico, de partido predominante, bipartidista, de pluralismo limitado, de pluralismo extremo, y de pluralismo atomizado.
17. Los sistemas electorales: fuertes, débiles e intermedios. Consecuencias (incidencias) sobre el sistema de partidos políticos. División territorial o secciones electorales. Sistemas mayoritario (de mayoría "pura y simple"); de representación de las minorías o de representación proporcional (cociente electoral, D´Hont, del cociente progresivamente rectificado y otras variantes). Clases de sufragio. La extensión y profundización: el voto de la mujer y disminución de la edad. El cuerpo electoral.

Bibliografía principal

Alcántara Sáez, Manuel y Flavia Freidenberg, 2003. Partidos políticos de América Latina. Vols. 1 a 3. FCE, México.
Cheresky, Isidoro (comp.), 2007. La Política después de los partidos. Introducción: La Política después de los partidos. Prometeo, Buenos Aires.
Garcia-Pelayo, Manuel , 1986. El Estado de partidos. Alianza, Madrid.
Michels, Robert, 1969. Los partidos politicos. Amorrortu, Buenos Aires.
Oppo, Anna, 1986. "Partidos Políticos", en Bobbio, Norberto et al., 1986. Diccionario de política. Siglo XXI, México.
Panebianco, Angelo, 1990. Modelos de partido: organización y poder en los partidos políticos. Alianza, Madrid.

Bibliografía sugerida

Beyme von, Klaus, 1986. Los partidos políticos en las democracias occidentales. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas, coedición con Siglo XXI de España.
Di Tella, Torcuato S., 1998. Los partidos politicos. Teoría y Análisis Comparativo. A – Z Editora, Buenos Aires.
Duverger, Maurice , 1961. Los partidos políticos. F.C.E. México, 1961. , 2º Ed.
Nohlen, Dieter, 1981. Sistemas electorales del mundo. C.E.C., Madrid.
Nohlen, Dieter, 1995. Elecciones y sistemas electorales. Ed. Nueva Sociedad, Caracas.
Offe, Claus, 1998. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Editorial Sistema, Madrid
Sartori, Giovani, 2000. Partidos y sistemas de partidos. Alianza Universidad, Madrid.
Zampetti, Pier Luigi, 1969. Del Estado liberal al Estado de partidos. La representacion política. Ediar, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Baras, Montserrat y Juan Botella, 1996. El sistema electoral. Tecnos, Madrid.
Beyme, Klaus von, 1995. La clase política en el Estado de partidos. Madrid. Alianza Universidad.
Caboara, Lorenzo, 1967. Los partidos políticos en el Estado moderno. Ediciones Iberoamericanas, Madrid.
Corbetta Juan Carlos y Ricardo Sebastián Piana, 2006. Compendio de normas políticas del Estado Argentino. Quórum, Buenos Aires.
Garcia Cotarelo, Ramón , 1985. Los partidos políticos. Ed. Sistema, Madrid.
Jackish, Carlota, 1994. Los sistemas electorales. Sus características y consecuencias políticas. El caso argentino. Fund. K. Adenauer, Buenos Aires.

Neuman, Sigmund , 1965. Partidos políticos modernos. Tecnos, Madrid.
Schattschneider, E.E., 1964. Régimen de partidos. Tecnos, Madrid.
Zampetti, Pier Luigi, 1970. Democracia y poder de los partidos – El nuevo régimen político. Ed. Iberoamericana, Madrid.

Unidad 7. REPRESENTACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

18. Concepto de representación. ¿Qué se representa? ¿A quién? Representación política y funcional.
19. Representación e identidad. Mayorías y minorías. Crisis de representación.
20. Concepto de opinión pública. Opinión publicada. Relación entre espacio público, opinión pública y representación.
21. Interés y utilidad. Interés del príncipe, interés del Estado y razón de Estado.

Bibliografía principal

Accarino, Bruno, 2003. Representación. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Ornaghi, Lorenzo, Cotellessa, Silvio, 2000. Interés. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Burke, Edmund, 1942. Textos Políticos. FCE. México.

Bibliografía sugerida

Habermas, Jürgen, 1989. Conocimiento e interés. Taurus, Madrid.
Meinecke Firedrich, 1997. La idea de razón de Estado en la Edad Moderna. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
Habermas, Jürgen, 2004. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Sartori, Giovanni, 1998. Homo videns, la sociedad teledirigida. Taurus, Madrid.

Bibliografía complementaria

Hirschman, Albert, 1999. Las pasiones y los intereses: argumentos políticos a favor del capitalismo previos a su triunfo. Península, Barcelona.
Hirschman, Albert, 1986. Interés privado y acción pública. FCE, México.
Quiroga, Hugo, 2006. La arquitectura del poder en un gobierno de la opinión pública, en Cheresky I. (comp.), La política después de los partidos. Prometeo.
Mora y Araujo, Manuel, 2005. El poder de la conversación. Elementos para una teoría de la opinión pública. La Crujía, Buenos Aires.
Pitkin, Hannah, 1985. El concepto de representación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

Unidad 8. RÉGIMEN POLÍTICO.

22. Aspectos normativos, culturales y políticos de la organización estatal.
23. Las tipologías clásicas y las nuevas formas de clasificación.
24. Constitución: constitución jurídica, real y natural. Tipos de constitución: el modelo de constitución inglesa, norteamericana y francesa. El modelo argentino. Presidencialismo, Parlamentarismo y formas intermedias.
25. Formas de Estado: el sistema unitario y el federalismo; descentralización, e integración. El federalismo argentino.
26. Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político argentino.

Bibliografía principal

Alcántara Sáez, Manuel, 1999. Sistemas Políticos de América Latina. vol 1 y 2. Tecnos, Madrid.
Almond, Gabriel y Bingham Powell, 1972. Política comparada. Una concepción evolutiva. Paidós, Buenos Aires.
Badía, Juan Fernando, 1995. Regímenes políticos actuales. Madrid Tecnos. 3º ed.
Easton, David, 1992. "Categorías para el análisis sistémico de la política", en Albert Battle (comp.). Diez textos básicos de ciencia política. Ariel, Barcelona.
Loewenstein, Karl, 1965. Teoría de la constitución. Ariel, Barcelona.
Oszlak Oscar, 2004. La formación del Estado Argentino. Ariel, Buenos Aires.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alizanza. Cap. 8. Los gobiernos, Maurizio Cotta.

Pasquino, Gianfranco (2004). Sistemas políticos comparados. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos". Prometeo Libros, Buenos Aires.
Sartori, Giovanni, 1994. Ingeniería Constitucional Comparada. FCE, México.
O´Donnell Guillermo, 1996. "Otra institucionalización" en La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, Nº 2. pags. 5-28. Paidós Ibérica.

Bibliografía complementaria

Aguilera de Prat, Cesareo y Martínez Rafael, 2000. Sistemas de Gobierno: Partidos y Territorio. Tecnos, Madrid.
Corbetta, Juan Carlos y Ricardo Sebastián Piana, 2005. Constitución Política de la República Argentina. Dimensiones normativas y jurisprudenciales de la realidad política argentina. Capítulo Introductorio. Ed. Scotti, La Plata.
Duverger, Maurice, 1980. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Ariel, Barcelona.
Fioravanti, Mauricio, 2001. Constitución, de la antigüedad a nuestros días. Selección. Trotta, Madrid.
LANZARO, Jorge (Comp.) (2003) "Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina". FLACSO, Buenos Aires.
Mateucci, Nicola, 1998. Organización del Poder y Libertad. Historia del constitucionalismo moderno. Selección. Ed. Trotta, Madrid.
Miller, Jonathan, Gelli, María A., Cayuso, Susana, 1995. Constitución y Poder Político. Astrea, Buenos Aires.

Nohlen, Dieter y Fernández, Mario (ed.), 1998. El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina. Nueva Sociedad, Caracas.

Unidad 9. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
27. Gobierno: concepto. Administración Pública. La reglamentación como límite a la discrecionalidad y como instrumento de poder.
28. Burocracia y tecnocracia. Técnicas de decisión. Modernización/Reforma del Estado: los modelos de Estado.
29. El análisis institucionalista.

Bibliografía principal
Cotta, Maurizio, 1998. Cap. 8. Los gobiernos. Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alianza.
Colombo, Paolo, 2003. Gobierno. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
O´Donnell Guillermo, 1998. "Acountabilitty Horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza" en La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, Nº 4, ISSN 1136-2251, pags. 161-188. Paidós Ibérica.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alianza. Cap. 9. Las burocracias. Panebianco, Angelo.
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Cap. 14. Técnicas de decisión.
Weber, Max, 1992. Economía y Sociedad. Selección de capítulos. FCE. México.

Bibliografía complementaria
Crozier, Michel, 1974. El fenómeno burocrático. Tomos I y II. Amorrortu, Buenos Aires
Dror, Yehezkel, 1990. Enfrentando el futuro. FCE, México.
Fedrich, Carl J., 1968. El hombre y el gobierno – Una teoría empírica de la política. Tecnos, Madrid.
García Pelayo, Manuel, 1974. Burocracia y tecnocracia y otros escritos. Alianza Universidad, Madrid.
March, James y Olsen, Johan, 1993. "El Nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida política" en Zona abierta 63/64, Madrid.
Meynaud, Jean, 1968. La tecnocracia: ¿Mito o realidad?" Tecnos, Madrid.
Olías de Lima, Blanca, 2001. La Nueva Gestión Pública. Alhambra, Madrid.
Oszlak, Omar (Comp), 1984. Teoría de la burocracia estatal. Paidós, Buenos Aires.
Peters, Guy. 2003. El Nuevo Institucionalismo: Teoría Institucional en la Ciencia Política. Gedisa, Barcelona.

Unidad 10. CLASE POLÍTICA Y ÉLITES
30. La teoría general de las elites y las doctrinas de la "clase gobernante".
31. La actualidad de Mosca y Gramsci a propósito de la "clase política". Hegemonía y "fórmula política".
32. Personalidad, carisma y conducción política. La intelligentsia. Liderazgo político.
Bibliografía principal
Bobbio, Noberto, 1997. La duda y la elección. Intelectuales y poder en la sociedad contemporánea. Paidós, Barcelona.
Laurito, Agustina, 2006. Introducción y esquema de la Sociología Política de Robert Michels. Facultad de Ciencias Sociales. Material de la cátedra. USAL.
Mosca, Gaetano, 2004. La clase política. (Selección e introducción de Norberto Bobbio). FCE, México.
Pareto, Vifredo, 1980. Forma y equilibrio sociales. Extracto del Tratado de Sociología, Alianza, Madrid

Bibliografía complementaria
Beyme, Klaus von, 1995. La clase política en el Estado de partidos. Alianza Universidad, Madrid.
Bottomore, Thomas B, 1965 "La elite: concepto e ideología" en Minorías selectas y sociedad. Gredos, Madrid.
Dahl, Robert, 1961. Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press, New Haven.
Cavalli, Luciano, 1999. Carisma. La calidad extraordinaria del líder. Losada, Buenos Aires.
Gramsci, Antonio, 1985. "El príncipe moderno", en La política y el Estado moderno. Planeta-Agostini, Bogotá.
Lipset, 1963. El hombre político, Eudeba, Buenos Aires.
Mills, Wright, 1993. La Elite del Poder. Fondo de Cultura Económica. México.

Unidad 11. CULTURA POLÍTICA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y BIOPOLÍTICA
33. El concepto de cultura política. Tipos: parroquial, súbdito y participante. Tipos de cultura política mixtas. El concepto de subcultura política. La cultura cívica.
34. El desencanto de la política y los nuevos movimientos sociales. Las ONG´s y su participación política.
35. Nuevos temas: El problema del pluralismo y las sociedades multiétnicas. Biopolítica. Nuevas formas de comunicación política: Sociedad de la Información.

Bibliografía principal
del Águila, Rafael. Manual de Ciencia Política. Cap. 10. Cultura política. Torcal.
Foucault, Michel, 2007. Nacimiento de la Biopolítica. Selección. FCE, Buenos Aires.
Offe, Carl, 1998. Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Ed. Sistema. Cap. VII. Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alizanza. Cap. 5. Participación política, grupos y movimientos sociales.

Bibliografía sugerida
Almond, G. y Powell G. B., 1972. Política comparada. Paidós. Buenos Aires. Capítulo 7. La función de comunicación.
Almond, Gabriel y Sidney Verba, 1992. "La Cultura Política" en Albert Battle (comp.). Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Ariel. Barcelona.
Deutsch, Karl, 1971. Los nervios del Gobierno. Paidós. Buenos Aires. Cap. 9. Lewellen, Ted C., 1994. Introducción a la antropología política. Bellaterra, Barcelona.
Modelos de comunicaciones y sistemas de decisión.
Habermas, Jürgen, 2002. El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? Paidós, Barcelona.
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Cap. 13. Sociedad Libre.

Sartori, Giovanni, 2001. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid. Tecnos.

Unidad 12. REBELIÓN Y CAMBIO POLÍTICO
36. El cambio político. Las explicaciones evolucionistas. Reformismo institucional. La tesis socialista y liberal del reformismo. La explicación revolucionaria del cambio político. Teorías de las revoluciones. Consentimiento y rebelión en Hobbes y Locke.
37. La movilización política. Liderazgo, partido revolucionario y movimientos de masas. El problema de la guerra civil y la integración social.
38. Las revoluciones contemporáneas. Ideologías dinámicas, mitos políticos y religiones civiles. Los movimientos totalitarios de inclusión social. La violencia política.

Bibliografía principal
Bobbio, Norberto, 1997. "Cambio Político" en Norberto Bobbio: el filósofo y la política. FCE. México.
Etzioni, Amitai, 1980. La sociedad activa. Una teoría de los procesos sociales y políticos. Aguilar. Madrid. Parte V. "Mas allá del imperialismo" pp. 621-692.
Ricciardi, Mauricio, 2003. Revolución. Léxico de Política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Sorokin, Pitirim, 1962. Dinámica social y cultural. Instituto de Estudios Políticos, Madrid.

Bibliografía complementaria
Arregui Hernández, Juan José, 1963. ¿Qué es el ser nacional? Hachea, Nuenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1994. "Teorías del control político" (pp.88-134) en Teoría Política del siglo XX. De la modernidad a la postmodernidad. Alianza, Madrid.
Fanon, Franz, 1983. Los condenados de la tierra. FCE, México.
Skocpol, Theda, 1984. Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China. FCE, México
Simmel, Georg, 2002. "La lucha" (1908) y "La dominación" (1908) en Sobre la individualidad y las formas sociales. U.N.Q., Buenos Aires.
Taguieff, Pierre A. "Las ciencias políticas frente al populismo: de un espejismo conceptual a un problema real" en: Paul Picone et. al., 2003 Populismo Posmoderno. UNQ. Buenos Aires pp. 29-81
Taylor, Charles, 2006. Imaginarios sociales modernos. Paidós Básica, Barcelona.

Unidad 13. CAMBIO POLÍTICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
39. Dinámica de las relaciones internacionales. La Paz de Westfalia y el Ius publicum europaeum. Soberanía y globalización.
40. Funcionalismo y adaptación. La categoría de equilibrio de poder. El conflicto y la cooperación internacional.
41. La guerra y la paz en su formulación política moderna y contemporánea. La "guerra justa". Anticolonialismo y antiimperialismo.
42. Bloques regionales y proyecciones imperiales. El Imperio como forma política.

Bibliografía principal
Beck, Ulrich, 1998. ¿Qué es la globalización? Piados, Barcelona.
Giddens, Anthony, 2000. Un Mundo Desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid. Taurus.
Schmitt, Carl, 2003, El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del «Ius publicum europaeum». Comares, Granada. Selección de capítulos.
Zolo, Danilo, 2007. "El Imperio y la Guerra" en La justicia de los vencedores. Edhasa, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria
Aron, Raymond, 1985. Paz y guerra entre las naciones. Alianza, Madrid.
Arendt, Hannah, 1967. Sobre la revolución. Revista de Occidente, Madrid.
Habermas, Jürgen, 1997. Más Allá del Estado Nacional. Trotta, Madrid.
Schmitt, Carl, 1995. "El Concepto de Imperio en el Derecho Internacional" en Escritos Políticos. Heracles, Buenos Aires.
Stiglitz, Joseph E., 2002. El Malestar en la Globalización. Buenos Aires. Taurus.

4) (PROYECTO 9) Propone la reforma de la Asignatura de Derecho Procesal I para ser designada como Teoría General del Proceso por el Profesor Titular de Derecho Procesal Dr. Emir Alfredo Caputo Tartara.-

"Teoría General del Derecho Procesal"

Propuesta para una nueva asignatura en la currícula de grado para la Carrera de Abogacía de la FCJS-U.N.L.P.

Temario
I.- Introducción.-
II.- Temática histórico-tradicional: Breves referencias.-
III.- Los nuevos Temas. Criterio amplio.-
IV.- Propuesta para el dictado de la asignatura.-
V.- Ubicación en la currícula del plan de estudios. Correlativas.-
VI.- Programa de "Teoría General del Derecho Procesal"

I.- Introducción.-
Desde mis inicios en la docencia, con la que ya cumplí mis bodas de plata, abracé con gusto y énfasis lo inherente a la tan poco atendida "Parte A" del Programa de estudio y examen de "Derecho Procesal Primero", cátedra única -por entonces- y base del actual programa que rige para la materia. El interés fue aumentando cuando a poco que empecé a profundizar mejor los postulados, observé que allí, existía la posibilidad de enseñar a los alumnos, una auténtica "Teoría General del Derecho Procesal".

En efecto, una asignatura que a través del estudio de sus premisas temáticas, otorgara al estudiante y futuro abogado, herramientas perennes e imprescriptibles con las que estuviera en condiciones de analizar, y con las que se ayudara a resolver, cada embate jurídico que le tocara en suerte afrontar, sea cual fuere la rama del derecho de fondo abordada.

Resulta harto necesario (y de toda justicia) destacar que para la época de concepción del Programa vigente (Procesal I) en la intensión de quienes lo confeccionaron, según corresponde objetivamente interpretar, en modo alguno se les planteó la idea de la enseñanza independiente de una auténtica Teoría General del Derecho Procesal, y ello así, ora porque por entonces no estaba suficientemente difundida la idea en tal sentido, ora porque la intensión para con el "primer Procesal", solo buscaba introducir al alumno en el Derecho Procesal, no abordado -hasta entonces- de acuerdo con la currícula del Plan de Estudio, lo cual parece haber prevalecido en "retoques" posteriores que se hicieron al programa.
Los llamados temas estructurales de la materia, esto es, los pilares en los que -principalmente- se aposentaba en sus inicios la otrora 'joven' Ciencia Procesal eran -prevalentemente- Jurisdicción, y con igual jerarquía, Acción y Proceso. Sin perjuicio de los restantes e importantes tales como: los Sujetos Procesales (que incluye obviamente al relevante: Partes); Medios de Impugnación; algunos Procesos (o procedimientos) Especiales, etc.
Este sucinto enunciado, no hacía sino reflejar el pensamiento doctrinario de los teóricos de la época en las consideradas por entonces obras clásicas. [1]
Desde la mitad del siglo anterior, prevalentemente, comienzan con fuerza a destacarse en este mismo contexto de temática principal de la materia, las instituciones de: Excepción Procesal (no desconocida, claro está, pero más bien tratada al amparo de la acción) [2]; y, por fin, el instituto de la Pretensión Procesal, en mi opinión, de los grandes temas, el más 'nuevo'.
De modo tal que, la Teoría General del Derecho Procesal, cuenta al menos con cinco columnas principales, a saber: Jurisdicción - Acción - Proceso - Excepción procesal y Pretensión procesal, sin perjuicio de la importancia que van cobrando poco a poco otros cada vez más numerosos temas.

Remontándonos al nacimiento mismo del Derecho Procesal, vemos que estuvo signado en sus comienzos, por aquel entonces no resuelto enredo entre el Derecho mismo (el sustancial o de fondo, claro está) y la Acción; espíritu de la antigua polémica Wach-Chiovenda. [3]

Mucho tiempo y no menos discusiones transcurrieron para darle la autonomía que hoy la acción tiene. Y ello así, pues aún separada conceptualmente del derecho, se le atribuyó a 'la gran herramienta de las peticiones', funciones, contenidos, nominaciones, etc. de las que actualmente se ha desentendido.
Otro tanto ocurre para con la Excepción Procesal, habida cuenta que no se discute hoy el alcance de contra-cara de la acción; anverso y reverso de una misma medalla.

Por fin, y en una tercera zarandeada, luego de varias décadas, aparece la distinción, la diferenciación intrínseca, entre acción y pretensión procesal. [4].

Sin perjuicio de detallar en lo sucesivo cada tema que debiera integrar esta materia, y luego con la propuesta de "programa", enunciarlos sistemáticamente, a modo de mero complemento informativo, aduno a los ya grandes temas citados, los obviamente no menos importantes: Principios Procesales; Actos Procesales; Sanciones Procesales; Relación Jurídica Procesal (en su diferenciación con la relación jurídica "de fondo"; Sujetos procesales (Juez, actor demandado, terceros, sujetos eventuales, etc.); Resoluciones Judiciales; Teoría General de la Impugnación (más conocido como ¨Recursos¨) Cosa Juzgada; etc.

Reitero, mero enunciado de algunos de los más difundidos, de todos los cuales -como se comprenderá- se desprende una enorme cantidad de temas y sub temas, que componen o integran estos grandes enunciados temáticos.

II.- Temática histórico-tradicional: Breves referencias.-

Tal como surge del acápite, en el presente apartado, aduno un enunciado un tanto más detallado, sin salir de lo enunciativo-informativo, de los temas estructurales, con la finalidad de explicar mejor el alcance de estos estructurales (todos los ya referidos) lineamientos componentes histórico-tradicionales de la asignatura, pero he aquí que con una salvedad: que los ahora abordados, forman parte de lo que podríamos llamar "temas originarios o tradicionales", considerando que en la actualidad, se presentan otros, impensados por entonces. Precisamente éstos últimos, habrán de tratarse en el próximo apartado, teniendo en cuenta que -como se verá- exceden abiertamente la ortodoxia tradicional que hasta hace no muchos años integraban agrupados bajo lo ya consignado enunciativamente, lo cual siguen reflejando los programas de estudios que pretendemos aggiornar, sin perjuicio -claro está- de mantenerlos, toda vez que siguen siendo la columna vertebral de la materia.

Mucho tiempo y no menos discusiones transcurrieron para darle la autonomía que hoy la acción tiene [5]. Y ello así, pues aún separada conceptualmente del derecho, se le atribuyó a 'la gran herramienta de las peticiones', funciones, contenidos, nominaciones, etc. de las que actualmente se ha desentendido. Así pues resultaba frecuente ver(en diversas obras y ensayos) extensas clasificaciones de la acción, con las consabidas dicotomías y en algunos casos, sus excepciones: civil, penal y mixta; petitorias-posesorias; ordinaria, sumaria y ejecutiva (ó sumarísima); reales, personales y mixtas; públicas-privadas; nominadas-innominadas, etc.; en algunos casos se clasificaban pretensiones, otras procesos, etc., pero en ningún caso, acciones, teniendo en

cuenta el verdadero sentido que debe conferírsele al instituto en una Teoría General. De aclarar los tantos se encargó muy bien Couture [6], cuando de modo contundente e irrefutable afirmó: " Hechas las distinciones entre derecho, pretensión y proceso, la acción, configurada como un derecho a provocar la actividad de la jurisdicción, no tiene ni necesita clasificaciones [7].
Otro tanto ocurre para con la Excepción Procesal, habida cuenta que no se discute hoy el alcance de contra-cara de la acción; anverso y reverso de una misma medalla.

Por fin, y en una tercera zarandeada, luego de varias décadas, aparece la distinción, la diferenciación intrínseca, entre acción y pretensión procesal.

Si (sin pretensión innovativa), por acción procesal (con base constitucional en el Derecho de peticionar a las autoridades, en el caso, a la Judicial-Jurisdiccional del art. 14 de la C.N.) entendemos al poder jurídico, derecho o potestad de todo sujeto de derecho(persona física o de existencia ideal o jurídica, pública o privada) de acudir para ante un órgano predispuesto por el ordenamiento jurídico del Estado en demanda de la satisfacción ó reconocimiento y declaración de un derecho(establecido por la ley: general, abstracta y obligatoria) subjetivo transgredido; mal podremos confundirlo con aquel factum, objeto de nuestro reclamo, que habrá de constituirse en el contenido utilizado para 'llenar' el instrumento o herramienta(acción) con la que nos dota ad hoc el aludido ordenamiento jurídico para ejercer derechos controvertidos (rectius: efectuar reclamos). Obviamente que en el contexto de la última parte de este último discurso, estamos mentando a la pretensión procesal.

No es del caso, a los fines de este trabajo, proporcionar un acabado concepto de pretensión procesal, su estructura y función, sus elementos, y su valor sistemático. Trataré, en cambio, de sobrevolar el tópico -reiterando- cómo, con toda independencia institucional, la pretensión procesal se mueve en el contexto del ejercicio del aludido poder de acción; cómo -así mismo- se relaciona con la demanda (lato sensu), considerada esta última, como acto jurídico-procesal iniciador del proceso.
Siguiendo a Guasp Delgado [8] en su obra que lleva el nombre del recién nombrado instituto, se puede decir que la pretensión procesal: por su 'estructura', es una declaración de voluntad por la cual una persona reclama a otra, ante un tercero supra ordinado a ambas, un 'bien de la vida', formulando en torno al mismo una petición fundada, es decir, acotada, delimitada, según los acaecimientos de hecho que expresamente se señalen.

En buen romance y sin perjuicio de considerar todos y cada uno de los elementos que la componen y coadyuvan a su definición, la pretensión resulta ser el contenido de la acción u objeto (inmediato o de conocimiento) del proceso, verdadera ratio de la reclamación de parte.

En efecto, a esa "estructura instrumental fundamental para el ejercicio de los derechos" que resulta ser la acción, si bien se la puede estudiar, definir y entender como una 'herramienta vacua', se la puede entender y/o explicar mejor cuando -a modo de ejemplo- se le incorpora un contenido, y precisamente, ese 'sustrato' ó factum(que puede provenir de cualquiera de las ramas del llamado 'derecho de fondo') que le da razón de ser e infunde vida jurídica real y empírica a la acción (sin que para nada se mezcle con su esencia) es: la pretensión procesal.

En una prieta síntesis de las tantas definiciones dadas, podrá afirmarse que la excepción procesal, es el poder jurídico, derecho o potestad de todo sujeto de derecho (persona física o de existencia ideal o jurídica, pública o privada) de defenderse -base constitucional: Art. 18 Const. Nac.- ante los embates (peticiones, reclamos, resarcimientos, etc.) que le formula el titular o legitimado de un derecho, en su pretensión procesal inserta en el poder de acción. Me he extendido ex profeso en el concepto para destacar el ya anunciado alcance opuesto o antitético (anverso-reverso) que se confiere a los poderes de acción y excepción. [9]

Quede claro que me aparto en lo puntual de las llamadas "excepciones previas" en la inteligencia y alcance que magistralmente les confiriera Clemente A. Díaz, bajo el seudónimo de Carlo Carli [10]. Apunto con el concepto dado(o pretensa definición) de modo directo, al instituto Excepción Procesal, como tema estructural de la Teoría General del Derecho Procesal.

De los ut supra enunciados como cinco grandes temas, abordo ex profeso en último término, lo inherente a los institutos Proceso y Jurisdicción, porque cada uno según su caso, ha tenido pretensión (no procesal, claro está) de prevalencia por encima del resto. Adelanto que, en mi opinión, estructural y conceptualmente, a los fines de la Teoría General del Derecho Procesal, los cinco institutos que nos ocupan, operan un estricto plano de igualdad. Paridad que nace principalmente de la imposibilidad de presentar el "fenómeno", prescindiendo de uno o más de los "grandes temas" que la componen; cada uno cumple un rol necesario e indispensable en el mecanismo del funcionamiento de este esquema estructural.

El reclamo de predominio del instituto "Proceso", pasa porque la materia, desde su concepción e independización de otras ramas del Derecho, lleva ínsito en la base misma de su enunciado (Derecho Procesal) a ese objeto de estudio o conocimiento que es el proceso. Empero, en mi opinión, tal circunstancia no lo habilita a encumbrarse por encima de los demás institutos. Apunto críticamente a la ya enunciada recíproca inter relación, complementariedad, simultaneidad e imprescindibilidad de cada instituto, a los fines de explicar el fenómeno de la resolución de conflictos con relevancia jurídica (ora pensados en abstracto para darle solución cuando se presenten, ora cuando estos son una realidad a resolver) en el marco del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho.

A mi ver, no hay inconveniente alguno para erigir una "Teoría General" de cada uno de los institutos que aquí vengo enunciando como los más importantes en el contexto de lo que apunta a ser una también Teoría General, pero del Derecho Procesal. Se puede conformar pues claramente una Teoría General de la Acción, de la Excepción, etc. .De hecho, de la amplia gama doctrinaria actual rescatamos de modo enunciativo, una "Teoría General del Proceso" [11], aunque en mi opinión, esta obra resulta perfectamente apta para el estudio de la casi totalidad de los temas con que hoy se conforma la mentada Teoría General del Derecho Procesal, objeto temático de este trabajo.

A tenor de lo que se lleva dicho, tampoco adjudico a la Jurisdicción papel preponderante, sin perjuicio de hacer una diferenciación que, igualmente, no la hará elevarse temáticamente por encima de los demás. Pero por ahora, volvamos al Proceso.

Haciendo una síntesis de diversas definiciones, y comenzando por su acepción común, la idea de Proceso, nos relaciona con: progreso, acción de ir hacia delante, desenvolvimiento, etc. Llevado esto, de modo rápido, a una concepción doctrinario jurídica, habremos de entender por Proceso Judicial-jurisdiccional, a la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver mediante juicio de autoridad, un conflicto con relevancia jurídica sometido a su decisión. En general, cualquier definición o conceptualización de este instituto, conlleva ínsito su alcance teleológico, fin éste entendido en sus dos alcances más difundidos: "inmediato", la resolución del conflicto; y "mediato", la paz social (lato sensu) [12] lo cual evita la justicia por mano propia, generadora del caos social, contrario por definición a la idea del

ordenamiento jurídico [13]. El ya referido Carlo Carli, aunque ahora en otra obra [14], definió al Proceso como el conjunto coordinado de actos actuados por y ante los órganos de la jurisdicción con la finalidad de obtener una sentencia decisoria de un conflicto. Sin apartarnos de la idea teleológica del tópico que nos ocupa, y por último, diremos que, el conjunto de actos jurídico-procesales, concatenados entre sí, vinculados unos con otros(siendo el efecto del anterior la causa del que le sigue) y con la misma y única finalidad (resolución del conflicto) es: El Proceso.

Huelga expresar que se puede formular una definición harto minuciosa del instituto, en la cual se especifiquen todos y cada uno de los componentes que participan, y así hablar de poder de acción, de pretensión ensayada, de legalidad, de partes y otros sujetos procesales, etc. etc. Empero, a los fines aquí perseguidos, con lo dicho es suficiente.

Paso pues a abordar el último de los grandes temas: La Jurisdicción.

La iuris ditio, este "decir el derecho" frente a la controversia con relevancia jurídica entre dos o más sujetos de derecho, está a cargo de los órganos predispuestos por el Estado a tales fines. Debo admitir que con este alcance y por formar (la jurisdicción) parte de la Función Judicial (donde obviamente encontramos a estos órganos judiciales-jurisdiccionales) en el núcleo de los Poderes del Estado (que es a la vez ´uno y trino´: Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que me he sentido tentado a conferir prevalencia al instituto "Jurisdicción" por encima del resto de los ya sucintamente analizados. Empero, francamente, no encuentro razón suficiente para otorgarle predominio, pues el rol que la iuris ditio juega el contexto formal-integral del mecanismo de 'resolución de conflictos jurídicos', es distinto de cuando se lo analiza (v.g. -entre otros- Derecho Constitucional mediante) como 'cabeza' de uno de las poderes o funciones del Estado. [15].

Definió Couture [16] a la Jurisdicción como la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias con relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.

Considero que el maestro uruguayo, con tinte propio, sintetiza la idea conceptual dada por anteriores y posteriores doctrinarios [17], razón por la cual y teniendo en cuenta el alcance de este trabajo, no cito ahora otros autores, remitiéndome a sus obras para una mayor ilustración.

Queda pues claro que es la Jurisdicción, uno de los grandes, imprescindibles e ineludibles temas, conjuntamente con el resto; empero, sin perjuicio de su importancia intrínseca, se ubica en el mismo plano de equivalencia que los ya mentados, cuando se lo analiza a la luz de la pretendida Teoría General del Derecho Procesal.

Líneas arriba adelantamos como complementarios (no por ello menos importantes), otros ítems que integran la nómina temática de la Teoría General, tales como v.g.: Debido Proceso; Juez Natural; Defensa en Juicio y otras garantías constitucionales; Relación Procesal; Principios Procesales; Actos Procesales; Sanciones Procesales; Sujetos Procesales, que incluye obviamente a: Partes, legitimación, asistencia y representación, etc.; La Prueba; Resoluciones Judiciales; Medios de Impugnación(más identificados con la sub especie : Recursos, en sus gamas de ordinarios y extraordinarios); algunas clases de Procesos(o procedimientos) Especiales, Cosa Juzgada; Ejecución de Sentencias; Tutela de los Intereses Difusos; Administración de Justicia; etcétera, sin pretender agotar el enunciado, claro está.

Ahora bien, sabido es que en doctrina algunos aspectos del contenido temático son más bien fronteras móviles; y también, en otros supuestos, se da un reclamo del tema por dos o más áreas del conocimiento jurídico. Otros ameritan un tratamiento desde lo sustancial y por separado, desde lo procesal. Y por fin, algún otro grupo que comenzaron con prevalencia desde lo procesal, ganaron amplio campo en el Derecho de Fondo, tal como ocurrió, por ejemplo, con el Amparo, Habeas Corpus y ahora, recientemente, con el Habeas Data, temas estos que desde "lo procesal" se desplazaron hacia el Derecho Constitucional, para por fin pasar a integrar la nueva rama del ´Derecho Procesal Constitucional´, conjuntamente con todo lo inherente a la máxima casación nacional, como lo es lo relativo al Recurso Extraordinario Federal [18].

En mi opinión los temas que, a modo de ejemplo, se enunciaron en el párrafo anterior, se encuentran (de forma más o menos directa) ínsitos, o resultan ser una derivación de los cinco temas estructurales. Un mero ejercicio mental inductivo o deductivo, da rápida cuenta de este aserto. De ahí pues el especial énfasis puesto en aquellos como genuinos pilares de sustento de la Teoría General del Derecho Procesal.

Sin perjuicio de lo que antecede, hay un punto en el que me quiero detener con algún párrafo. No se trata de aspecto que amerite conferirle el alcance de tema estructural, ni tampoco de los citados como integrativos o complementarios. Es más bien un presupuesto y no procesal, estricto sensu. Se trata del Conflicto con Relevancia Jurídica (o frase equivalente con cualquiera otra de las denominaciones como se lo conoce). Huelga expresar que sin este postulado fáctico jurídico, carecería de razón de ser todo el andamiaje para la operabilidad de los llamados temas estructurales.

Sin pretender abordar filosóficamente el tema, como se comprenderá, está el Conflicto con Relevancia Jurídica emparentado con el funcionamiento del Derecho como ordenador de las conductas ínter subjetivas y el funcionamiento ordenado del entramado social. En efecto, es casi un clásico que las obras (en diferentes ramas del saber jurídico) comiencen por señalar que mientras los pactos se cumplen y nadie infringe las reglas preestablecidas, la aplicación del derecho corrector o sancionatorio carece de sentido, y menos aún, todos los mecanismos que le dan sustento, ora desde lo doctrinario, ora desde lo empírico. Y bien, según parece de algunos miles de años a esta parte, conforme se ha evidenciado, un buen porcentaje de personas están dispuestas por distintas razones,(atendibles y no tanto) a incumplir pactos y reglas o, en su caso, a interpretar las cosas de modo distinto del prójimo con el que se ha relacionado. Y he aquí pues que, cuando esas discrepancias resultan subsumibles al marco de lo jurídico (exceptuando la pléyade restante) el Estado se interesa para que el conflicto no se resuelva "haciendo justicia por mano propia", sino que, a los fines de "mantener la paz social", impone(o dispone) órganos in partiales (pre dispuestos) para dirimir el entuerto.

Es pues el conflicto con relevancia jurídica, el big-ban, el gran eje en torno del cual gira la colosal rueda que pone en movimiento al orbe de la resolución de conflictos jurídicos inter subjetivos. Es éste el reconocimiento que, en mi opinión, corresponde hacer del nervio motor y razón de ser imprescindible de la puesta en marcha de la maquinaria judicial jurisdiccional.

En otro orden. En el contexto de los distintos temas que se atribuyen como "contenido" del Derecho Procesal, hallamos a la 'Organización del Poder Judicial'. Dijimos líneas arriba que a algunos ítems temáticos, se los disputaban más de una de las ramas del saber jurídico. Esto pasa con la mentada ´Organización…´, a la que hallamos en los índices curriculares del Derecho Constitucional (nacional o provincial, según se trate).

En efecto. Si bien en los programas de estudio de la carrera de Derecho (lato sensu) aparece el estudio de la estructura de la Organización del Poder Judicial, repartido entre -como dije- el Derecho Constitucional y el Procesal(con más detenimiento, en éste último), es un aspecto que, estructuralmente, se presenta y

desarrolla con mayor especificidad, en el contexto de la normativa constitucional. Ergo. Es más propio de la temática institucional, que de la grada inferior [19] en la que se sitúa el Derecho Procesal.

En resumen, lo inherente a la "Organización...", en mi opinión, es específico de la órbita constitucional [20]. Cuando el Derecho Procesal lo aborda en detalle, lo hace en el contexto de uno de los grandes temas de la Teoría General: La Jurisdicción. Hay pues, como se advierte, una relación lateral o subsidiaria del esquema organizacional, con Teoría General del Derecho Procesal.

Vuelvo ahora al numen de este trabajo y ya para concluir. Han quedado expuestos, de modo harto sintético, los distintos temas que dan sustento a la idea de la estructura de una ´auténtica´ (según nos pareció conveniente llamarla) Teoría General del Derecho Procesal. Auténtica por específica, autosuficiente, etc., de cualquier rama o expresión del llamado Derecho de fondo, lo cual a esta altura, parecería, no ofrecer duda alguna. Empero, en orden relevante o proporcional, las obras(o emprendimientos, lato sensu) que abordan de modo sistemático una Teoría General del Derecho Procesal son las menos, respecto de una abundante producción de obras que en sus Partes Generales, abordan los temas propios de la Teoría General, para luego desarrollar los específicos del área de que se trate (v.g., derecho procesal civil, contencioso administrativo, constitucional, laboral, penal, etc.).

Así pues, los aludidos grandes temas y sus derivados (o diversos sub temas que los integran y/o complementan) según líneas arriba quedó expuesto, claramente evidencian la existencia de una 'autentica' (conforme señalado alcance) Teoría General del Derecho Procesal, cuyos parámetros (principales y accesorios) resultan ser de total y completa utilización para la puesta en movimiento de todas y cualquiera de las ya tradicionales divisiones de las ramas jurídicas, o en aquellas que con marcado énfasis van desprendiéndose con visos de autonomía, a los fines de la evidencia, manifestación o exteriorización del derecho de fondo de que se trate.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo que se lleva dicho, planteo el siguiente interrogante: el concepto Derecho Procesal, como rama jurídica de la Ciencia del Derecho (conforme se lo conoce a través de numerosas definiciones de importantes y calificadas obras), es el mismo que traduce la idea y / o contenidos de la Teoría General del Derecho Procesal. Me adelanto a pronunciarme por la negativa, y ello así pues, en mi opinión, los contenidos que hoy luce el Derecho Procesal exceden (como ya se lo puso de manifiesto líneas arriba) los de la Teoría General del Derecho Procesal.

Paso de seguido a desarrollar sucintamente la idea.

Atrás quedó la época [21] en que a esta rama del saber jurídico se la identificaba como práctica forense; procedimientos; enjuiciamiento; derecho judicial, jurisdiccional o justicial. A esta altura, está harto consolidada la acepción: Derecho (indicando que se trata de un sector de la realidad social delimitado por la nota de judicialidad) Procesal (sector caracterizado por la actividad jurisdiccional) [22].

En igual sentido y ratificando la idea del nombre de la rama jurídica aquí en tratamiento, expresaba Carnelutti que en la relación entre derecho y proceso, el primero no podía alcanzar su finalidad sin el segundo, no sería el derecho, en una palabra; tampoco la podría alcanzar el proceso sin el derecho. La relación entre los dos términos es circular. Luego remataba diciendo: Por eso se constituye esa rama del derecho que se llama Derecho Procesal. [23]

Con mero alcance informativo, abordo algunos de los conceptos que parte de la doctrina formula de la rama jurídica ´Derecho Procesal´, considerando algunas antiguas y otras, a las que cabría de tildarlas de más modernas en atención que han sido formuladas más próximas en el tiempo.

Veamos.

Derecho procesal es el conjunto de principios justos, derivados de la razón natural, en su exposición positiva, según sus diversas fuentes y explicados por la ciencia, que regulan la actividad pública judicial del juez y de las partes en la labor de realizar o de hacer efectivo el derecho material perturbado o desconocido y en la de fijarlo con carácter vinculante, cuando es preciso la intervención estatal o aun para realizar el mismo derecho procesal. Tal la definición de Prieto Castro en obra de mediados del siglo pasado [24]. Se advierte claramente un fuerte contenido de aspectos propios del ius naturalismo.

Para el ya mentado Hugo Alsina [25], el Derecho Procesal es: El conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso.

Destaco aquí la expresa y ostensible inclusión de lo inherente a la Organización del Poder Judicial; al respecto me remito a lo ut supra expuesto líneas arriba.

Por su parte, Ugo Rocco [26] en concepto más moderno y ortodoxo con la concepción actual, y destacando su objeto mediato, dice que el Derecho Procesal es: La rama del Derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, partes y terceros en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia, que ponga fin al litigio y logre la paz social.

Clemente A. Díaz [27], en definición bastante similar a la primera parte de la antes citada de Rocco, enseña: Es la disciplina jurídica que estudia la función jurisdiccional del Estado, y los límites, extensión y naturaleza de la actividad del órgano jurisdiccional, de las partes y de otros sujetos procesales.

Una de las más completas y elaboradas, es la dada por Claría Olmedo [28], cuya obra como pocas, presenta una versión del derecho procesal, unitariamente concebido. Dice el maestro cordobés: Es la ciencia jurídica que en forma sistemática estudia los principios y normas referidos a la actividad judicial cumplida mediante el proceso por los órganos del Estado y demás intervinientes, para la efectiva realización del derecho sustantivo, organizando la magistratura con determinación de sus funciones para cada una de las categorías de sus integrantes, y especificando los presupuestos, modos y formas a observar en el trámite procesal.

Hasta aquí pues el muestreo de conceptualizaciones, tópico que se ha abordado con la ya adelantada finalidad de demostrar que exceden la idea y/o contenidos de la Teoría General del Derecho Procesal.

Esta última, en nuestra opinión, está contenida en los diversos temas que integran por definición la rama del conocimiento jurídico que hoy conocemos de modo claramente distintivo como: Derecho Procesal.

En efecto, teniendo en cuenta, v.g., la definición de Claría Olmedo (una de las más completas) observamos que la idea de una Teoría General del Derecho Procesal, conforme la concebimos, se encuentra inmersa en la primera parte de su enunciado y no así en el resto. Considerando que con lo dicho hasta aquí no se logra traducir la idea, paso de seguido a ensayar una definición de la Teoría General del Derecho Procesal.

Se trata pues de la suma de los principios generales y de las normas, que sustentan los institutos fundamentales que estructuran a la relación jurídica procesal y al marco institucional que autoriza su realización, para la resolución del conflicto intersubjetivo con relevancia jurídica.

Suma de principios, pues únicamente todos en su conjunción armónica e inter dependiente, estructuran el justo e igualitario equilibrio que de modo imprescindible necesita la puja de intereses en juego.

Siguiendo a Claría Olmedo, cuando mentamos "Principios", nos referimos a los básico y fundamentales de los que derivan las diversas reglas y corolarios de naturaleza jurídica, los cuales constituyen la esencia se las normas reguladoras de un sector se la realidad jurídica vigente, comparativamente analizada en el espacio y en el tiempo [29].

Completo la idea, expresando que son un acercamiento primario, criterios, directivas, orientaciones o guías. En mi opinión, si los analizamos objetivamente, exceden el marco de la legalidad positiva, aunque justo es reconocer que resulta imprescindible para la vigencia de un ordenamiento jurídico con justicia, que dichos principios, se encuentren normativamente vigentes. Huelga expresar que, en general, aparecen plasmados directa o indirectamente, de modo implícito o explícito, en las mandas constitucionales(en nuestro caso, conforme régimen federal, nacionales o provinciales), a la vez que en otras normas situadas en la grada jerárquica superior [30].

En lúcida síntesis expresa Calamandrei: Estos Principios, traducen en el microcosmos del proceso, el macrocosmos del sistema y estructura del Estado en el cual se legisla [31].

Ahora bien, estos Principios, a los que no corresponde enumerar aquí y a los que me remito conforme citas, los traigo a colación con la única finalidad de poner de manifiesto que resultan ser, los que confieren sustento y estructura indispensables a los mentados institutos de: Jurisdicción, Acción, Excepción, Pretensión y Proceso. Sin ellos, estos temas fundamentales carecerían de la apoyatura sustancial, que es justamente, lo que les confiere toda relevancia.

Si bien no me quiero detener demasiado, es del caso aclarar que al mentar suma de (además de Principios) de normas, estamos queriendo aludir al conjunto de disposiciones, asertivas o negatorias, que permiten articular los modos o formas de expresión de los Principios, que dan vida a los reiteradamente aludidos institutos fundamentales. No son pues, como se advierte, necesariamente, normas positivas.

Cuando en la definición se menta a la Relación Jurídica Procesal, se lo hace con el alcance de la harto difundida teoría que desde 1868 despliega Oscar Von Bulow, y que desarrolla primordialmente la doctrina italiana, a fin de explicar la esencia (naturaleza) jurídica del Proceso [32]. Pero he aquí que me aparto de esa télesis específica, utilizando tan elemental pero no por ello menos práctico esquema, que resume la idea de un actor frente a un demandado en exacto plano de igualdad, ante un tercero in partiale supra ordinado a ambas, encargado éste último de dirimir el conflicto o controversia de índole jurídica. Hay en la representación triangular o piramidal del esbozo, una simultanea relación jurídica de fondo(derecho sustancial) y de forma(derecho procesal); huelga expresar que sólo a esta última nos referimos.

Por su parte, el marco institucional está dado por el ordenamiento jurídico de que se trate, a través del que se plasma el magno Principio de Legalidad, rector o guía fundamental del Estado de Derecho, comenzando por las 'mandas' específicas emergentes de la(s) Carta(s) Magna(s), y pasando por las leyes derivadas inferiores que implementan o reglamentan el ejercicio [33].

Por fin, la nota distintiva y propia, está dada por la télesis cardinal del sistema, tal: resolver con fuerza de ley para las partes y erga omnes, el conflicto inter subjetivo, la controversia con alcance o relevancia jurídica que, como dije ut supra, constituye la razón de ser del mecanismo todo, a fin de evitar que la 'justicia por mano propia', produzca en el contexto de la comunidad, una situación anómica, con el consecuente indeseado e inadmisible caos social.

III.- Los nuevos Temas. Criterio amplio.-

La lógica evolución que el Derecho va teniendo con el paso del tiempo, no es ajena -claro está- al Derecho Procesal, seguramente la más dinámica de las ramas de la Ciencia Jurídica. Y a esto puede fácilmente observárselo desde la perspectiva ora inductiva, ora deductiva, lo cual implica la visión particular y general del fenómeno. Obviamente que por razones de objeto perseguido, será la óptica general la que ocupará nuestro mayor interés, sin perjuicio de lo cual, la referencia al tema particular, sea ejemplificando, sea particularizando, será ineludible.

Siendo como de hecho es el Derecho Procesal el vehículo que pone en marcha o movimiento al sustancial, las divisiones y sub divisiones que éste último va teniendo, originan por carácter transitivo, una nueva rama del Derecho Procesal aplicable a la parcela de que se trate. Desde épocas pretéritas, las diversas materias a regular, generaron ramas divisorias en el Derecho. Tal vez la primer gran separación por regular materias con aplicación y principios muy diferentes, lo fue la archi conocida bifurcación entre "civil" y "penal".

Luego, el correr de los años, mostró la necesidad de sub parcelar a las grandes ramas; y así, por ejemplo de la primera, se desprendió -entre otras ramas- el derecho Comercial; el Administrativo (propiamente dicho y el contencioso); el Internacional Privado; el derecho de Familia; el Laboral; Tributario; Aduanero; Minería y Energía; Navegación: marítima, fluvial y aérea; Agrario; Notarial y Registral; etc.

La materia penal, por su parte, dio lugar a la subdivisión, en criminal y correccional; a lo público y lo privado; penal tributario y aduanero; etc.

Pero he aquí que la mayor especialización en cualquiera de las ramas o sub ramas de origen, abre una nueva instancia para la creación de otra especialidad. Y así encontramos al derecho informático; ambiental; bancario; de los seguros; derechos del consumidor; etc., y todo lo inherente a los conocidos como Derechos Humanos, con connotaciones -incluso- internacionales, o Trasnacionales, a raíz de los diversos Pactos que el Estado nacional firma (o adhiere) con otro grupo de Estados, comprometiendo su propia soberanía.

Como es obvio, toda la nueva gama de ramas jurídicas nuevas, trae aparejado la necesidad de un conjunto normativo nuevo, especial, propio, para ponerlo en movimiento, lo cual no sólo genera la creación de un diferente "Código Procesal" para la nueva materia de que se trate, sino -a veces- hasta una distinta estructura judicial-jurisdiccional (órganos con competencia especial en la materia de que se trate) para resolver los conflictos de dicha especialidad.

La dinámica intrínseca de nuestro Derecho Procesal, manteniéndose fiel a sus Principios Generales, e incorporando otros nuevos de igual relevancia, es la llamada a dar solución a esta nueva problemática. De ahí pues la necesidad de incorporar estos más recientes temas para su conocimiento, tratamiento, aprendizaje y dominio por parte de los futuros abogados, todo lo cual genera nuevas expectativas y abre horizontes desconocidos en especializaciones diversas para el profesional del derecho, ampliando la oferta laboral-profesional del mismo, a la sociedad toda, demandante de soluciones para estas nuevas problemáticas inter subjetivas.

Consigné en el acápite de este apartado, la frase "Criterio Amplio", queriendo con ello significar que en modo alguno podremos suponer que la inserción de estos nuevos temas, agotará las exigencias de enseñanza

para la materia. La dinámica del cambio actual nos presenta una progresión geométrica en el cambio. Lo que antes variaba luego de trascurridos siglos, o largas décadas, hoy día nos acota el plazo a cada vez más cortos lapsos, lo cual da sustento al aserto de que aún nuevo un tópico temático, se torna rápidamente obsoleto.

Habrá pues que estar permanentemente atentos, para -una vez medianamente consolidados los cambios- insertarlos con la celeridad del caso, en los programas de enseñanza de nuestra materia.

En síntesis. Si nunca resultó procedente el números clausus en la temática del Derecho Procesal, menos aún en estos acelerados tiempos de constantes cambios.

IV.- Propuesta para el dictado de la asignatura.-

Sin perjuicio que en la actual Reforma del Plan de Estudios está prevista la Comisión de diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho, y amén de tener oportunamente presente sus Conclusiones, desde una perspectiva intrínseca, los contenidos temáticos de la "Teoría General del Derecho Procesal", obligan a formular algunas referencias en los términos del acápite de este parágrafo.

No seré para nada novedoso al expresar que, a los fines del dictado de esta asignatura, deberá formarse un cuadro de docentes, los que, con base en una sólida formación en Derecho Procesal, habrán de resultar obviamente seleccionados del pertinente Concurso ad hoc.

Ahora bien. Sin perjuicio del aserto harto elemental precedente, considero debería estructurarse un mecanismo para que profesores (titulares o adjuntos) de otras asignaturas, tales como (ya mentadas): Civil (según sus divisiones más marcadas), Penal, Administrativo, Comercial, Navegación, Laboral, Internacional Privado, etc., concurran con alguna sistematicidad, a dar temas específicos de sus respectivos saberes en la materia de que se trate, obviamente desde la perspectiva de los Principios Procesales Generales, que en lo específico "ponen en movimiento" los derechos sustanciales enseñados (tratados, analizados, etc.) en cada asignatura desde el plano estrictamente teórico.

Remarco la óptica específica, toda vez que es obvio que los Grandes Lineamientos Procesales, son comunes para todas las ramas del saber jurídico de fondo, empero en lo puntual, hay aspectos procesales propios a la materia de que se trate, que se impone enseñar desde ese punto de vista. Vayan en este sentido, algunos ejemplos harto elementales: Indisponibilidad del derecho de fondo, favor reus, etc.: en el proceso penal; favor operari, en el laboral; ciertos privilegios del Estado (nacional, provincial, municipal), en la relación administración-administrado: procedimiento y/o proceso administrativo; especiales mecanismos procedimentales en, por ejemplo, la Comisión y/o Corte Interamericana: Procesal Constitucional, etc.

Como puede apreciarse, los supuestos meramente ejemplificativos dados, constituyen una gota en el mar de reales posibilidades. De manera tal que, por sus conocimientos específicos, propios de la rama del derecho de fondo de que se trate, el docente (de derecho Penal, Civil, Comercial, Constitucional, Navegación, etc.) producirá "a los fines procesales", un invalorable e indispensable aporte para la formación del alumno-futuro abogado, que pasará a sentar las bases de una valiosísima herramienta, con la que complementará -por anticipado- el fundamental: Cómo, cuándo, dónde, de qué manera, etc., articular, hacer valer o defender, el derecho de fondo aprendido y por aprender, desde la visión -claro está- de los Principios Procesales Fundamentales de su materia específica.

Así pues las cosas, el alumno estaría alertado desde esta materia ("Teoría General del Derecho Procesal") para comenzar a transitar los caminos de la "puesta en marcha" de cada una de dichas fracciones del conocimiento del Derecho Sustancial, desde la perspectiva del conocimiento de los Principios Procesales Generales especiales de cada materia de fondo.

V.- Ubicación en la currícula del plan de estudios. Correlativas.-

Si bien a la fecha -como se dijo- está operando precisamente una reforma al Plan de Estudios para la Carrera de Abogacía, es sobre la base del vigente con el que debo analizar la ubicación sistemática de "la materia" y, obviamente sus correlativas. Empero, se impone también elucubrar -de buena fe, claro está- sobre eventuales hipótesis de cambios.

En el parágrafo antecedente, se dio cuenta enunciativa -por adelantado- de la propuesta en el sentido del acápite del presente.

Teniendo en cuenta el esquema del plan actual, o asimilable, debería situarse a la Teoría General del Derecho Procesal, en el mismo tramo medio (en que se encuentra ahora la asignatura que lo "porta", con déficits y omisiones), es decir Procesal I (en su Parte "A"); tramo identificado como "Tercer Año", debiendo ser correlativa de Procesal I, que en el contexto del esquema que propugno, debería llamarse "Derecho Procesal Penal", lo cual expresa claramente su contenido (el único que abarcaría la materia), toda vez que lo que corresponda de la actual Parte "A", pasa a integrar -selectivamente- el contenido de la "Teoría General".

De igual modo, debería resultar correlativa de Procesal II, atento el contenido temático de esta última asignatura y sin perjuicio de ulteriores actualizaciones que seguramente deberían aplicársele; tal vez la primera, reemplazar el "II", por palabra o frase que identifique su contenido. En este último sentido (contenido), permítaseme opinar que seguramente es ya tiempo de separar (a los fines de la enseñanza procesal) los procesos civiles, de los laborales, contenciosos administrativos, comerciales (quiebra), familia, etc., (con sus respectivas Prácticas...), y comenzar a dictar materias específicas de dichas competencias por razón de la materia, quedando -claro está- el gran enunciado de sus Lineamientos y Principios Generales, para la Teoría General del Derecho Procesal. Esto, así enunciado, puede tal vez hoy parecer un tanto dilatado; empero, así lo demandan las exigencias cada vez mayores de afianzar conocimientos de especialización, y prácticos, que doten al futuro abogado de herramientas idóneas para afrontar una brecha cada vez más estrecha, a los fines del inmediato ejercicio profesional. Vuelvo al cometido del acápite de este parágrafo.

Aludí en el apartado anterior: al "...derecho de fondo ´aprendido´ y ´por aprender´, queriendo con ello significar -claro está- que en razón de una necesaria ubicación curricular, la "Teoría General del Derecho Procesal" debe situársele en el sector medio (Tercer Año) toda vez que el alumno, en los dos primeros períodos, ya ha recibido "información" sobre algunas ramas del derecho de fondo, restándole en lo sucesivo muchas otras.

En esta inteligencia, la "Teoría General del Derecho Procesal" con sus Principios Generales comunes a todas las materias de fondo, y con los Grandes Lineamientos propios de cada uno de ellos, viene a dar sustento a "lo visto" y "por verse" desde la óptica procesal, lo cual implica -insisto- el know how, aplicar, articular, esgrimir, etc. el derecho de fondo de que se trate.

Veamos. En el análisis objetivo, existe una hipótesis de mínima y otra de máxima en lo inherente a la ubicación de una Teoría General del Derecho Procesal de manera independiente en la currícula o Plan de Estudio de la carrera de abogacía. La de mínima -obviamente- consiste en situarla en el Primer Año y la

extrema opuesta en Quinto Año. La ya anunciada inserción en el Tercer Año, tiene ventajas que de seguido paso a explicar brevemente.
En modo alguno se presenta adecuada su ubicación en el primer período. El tenor y alcance de los contenidos de la materia, la tornan totalmente impropia (por inoportuna) para el alumno que comienza a dar sus primeros pasos en la carrera; del mismo modo que resultaría tardío su abordaje en el extremo final, después de haber (correlativas mediante, en cualquier caso) dado prácticamente todas las asignaturas "de fondo". Como suele ocurrir casi siempre en conjeturas de esta naturaleza, en un caso, se peca por defecto y en otro, por exceso.
De ahí que, volviendo sobre lo ya preanunciado, la estratégica ubicación en la mitad de la carrera (aproximadamente) se presenta como lo más indicado.
En efecto. A esa altura, el alumno ya ha tomado razón suficientemente sólida de la estructura jurídica que conforma el Plan de Estudio de la carrera. Por citar algunas posibles, sin perjuicio de la elección y sus correlatividades: Introducción al Derecho; Derecho Constitucional; Civil, por lo menos I y II; Penal I y II; Comercial I; Público Provincial y Municipal, etc. La información (formación) recibida es ya suficiente para poder abordar un contenido temático como el de la Teoría General del Derecho Procesal, materia esta que -reitérase- le permitirá integrar estos conocimientos adquiridos, a la vez que prepararlo para el abordaje de lo por venir. Haber internalizado a dicha altura ese cúmulo de datos, con importantes materias que abordan de manera genérica, o en su caso especifica, el Derecho de Fondo de que se trate, constituye un sólido bagaje que lo prepara adecuadamente para comprender el real funcionamiento de "la puesta en movimiento" según sea la posición relativa de mira (v.g.: reclamante o reclamado) de los derechos en cuestión. Y obviamente, y a fortiori, a medida que avanza y/o culmina con la totalidad de los restantes estudios de los derechos sustanciales.

VI.- Programa de "Teoría General del Derecho Procesal"

Módulo I.-
El Derecho Procesal.
Concepto. Autonomía. Fuentes. Objeto. Contenido. Norma Procesal.
Función Jurisdiccional del Estado. Organización Judicial. Estado Nacional y provinciales. Competencia y funciones de los órganos judiciales y jurisdiccionales.

Módulo II.-
Los Principios Procesales.
Concepto. Función e importancia. Esencia Jurídica. Prelación. Principios: Dispositivo. Inquisitivo. Contradicción. Preclusión. Inmediación. Adquisición. Publicidad. Economía. Probidad y Buena Fe. Otros.

Módulo III.-
Jurisdicción.
Concepto. Función constitucional. Contenido. Fines. Distinción entre lo Judicial y lo Jurisdiccional.
Relatividad histórica y política de la Jurisdicción. Auto tutela; autocomposición, proceso. La Jurisdicción como actividad sustitutiva, complementaria y garantizadora. Realización oficial del orden jurídico.

Módulo IV.-
La Acción Procesal.
Concepto. Esencia jurídica y constitucional de la acción. Contenido. Clasificación según el contenido pretensional. Interés y legitimación. Ejercicio de la Acción Procesal. Individual y colectivo. La tutela de los intereses difusos.

Módulo V.-
La Pretensión Procesal.
Concepto. Caracteres y elementos de la pretensión. Clasificación. Acumulación de pretensiones.
Pretensión Procesal y Objeto del Proceso. Estructura y función de la Pretensión Procesal.
La Pretensión procesal: su relación con la Acción y la Excepción procesal.

Módulo VI.-
La Excepción Procesal.
Concepto. Esencia jurídica y constitucional de la excepción.
Paralelismo e igualdad con la acción. Contenido. Su relación con la Pretensión Procesal. Carácter cívico. La excepción como Derecho de Defensa en Juicio. Contestación. Allanamiento. Reconvención. Transacción. Conciliación. Las llamadas excepciones previas: Impedimentos procesales. Excepciones y Defensas.

Módulo VII.-
El Proceso.
Concepto. Contenido. Objeto. Esencia jurídica. Fines: mediato e inmediato.
Los presupuestos procesales. La Relación Jurídica Procesal. El Proceso como garantía constitucional. Tutela constitucional del Proceso. Proceso en rebeldía. El conflicto con relevancia jurídica.

Módulo VIII.-
Los Sujetos Procesales.
Concepto. Clases. Órganos judiciales y jurisdiccionales: Funciones. Requisitos. Modos de designación. Base constitucional y legal.

Módulo IX.-
Partes.
Concepto. Capacidad. Facultades. Derechos. Deberes. Cargas. Legitimación Procesal. Legitimatio ad causam y Legitimatio ad processum.
Representación Procesal. Clases. Revocación. Unificación de la personería. Costas del proceso. Honorarios de abogados y procuradores. Litisconsorcio. Clases. Terceros. Concepto. Clases.
Amicus Curiae. Intervención. Alcance y carácter de su participación en el proceso.

Módulo X.-
Actos Procesales.
Concepto. Esencia jurídica. Clasificación. Formas. Sanciones: Inexistencia. Nulidad. Anulabilidad. Vistas y Traslados. Oficios y Exhortos. Mandamientos. Notificaciones: Clases.

Módulo XI.-
Teoría General de la Prueba.
Concepto de Prueba. Principios. Clases. Valoración probatoria. Objeto de la Prueba: Prueba de los hechos y del derecho. Carga probatoria. Admisibilidad. Trámite. Medios de Prueba.

Módulo XII.-
Resoluciones Judiciales.
Providencias simples. Interlocutorias: Simples y con fuerza de definitiva.
La Sentencia Definitiva. Concepto. Caracteres. Estructura de la sentencia. Forma y contenido. Aplicación del Principio de Congruencia. Sentencia extranjera. Exequátur.

Módulo XIII.-
Teoría General de la Impugnación.
Medios de impugnación. Concepto. El agravio. Error in Iudicando. Error in Procedendo. Poder de impugnar. Acto impugnativo. Procedimiento de impugnación. Impugnación ordinaria: Clases. Procedencia. Casación: Procedencia. Impugnación extraordinaria provincial: Clases. Procedencia. El Recurso extraordinario por sentencia arbitraria o federal: Previsión del art. 14 de la Ley 48 y sus modificatorias. Causales de Arbitrariedad: Enunciado y concepto, según Doctrina y Jurisprudencia de la C.S.J.N.

Módulo XIV.-
La Cosa Juzgada.
Concepto. Esencia Jurídica. Cosa Juzgada formal y material. Límites subjetivos y objetivos. Recaudos necesarios para la procedencia de la Cosa Juzgada. La triple identidad. Acción de Revisión.

Módulo XV.-
Proceso y procedimiento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Dimensión Transnacional del derecho y la justicia. Efectos de los Tratados internacionales.
El Pacto de San José de Costa Rica. Órganos: Comisión y Corte Interamericana. Acceso. Proceso y procedimiento. Resoluciones.
Derecho Internacional Penal y Derecho Penal Internacional: Concepto y contenidos. La Corte Internacional. Acceso. Sujetos Procesales. Partes. Resoluciones.

Módulo XVI.-
Aspectos procesales y procedimentales del Derecho Ambiental.
Normativa legal. Nación; provincia; municipios. Unidad o diversidad normativa. Jurisdicción. Competencia. Acción y legitimación. Las O.N.G. y otras asociaciones. Organismos administrativos y judiciales especiales. Necesidad de resolución administrativa previa. Política ambiental. Alcance de la Resolución. Indemnizaciones.

Módulo XVII.-
Aspectos procesales y procedimentales del Derecho del Consumidor.
Normativa en nuestro sistema federal. Competencia. Organismos administrativos. O.N.G. y organizaciones especiales. Importancia y legitimación de sus reclamos. Alcance y carácter de la acción en este ámbito. Actuación judicial jurisdiccional. Alcance de la Resolución. Indemnizaciones.

Módulo XVIII.-
La Web y su incidencia en los derechos de los distintos sujetos procesales. Conflictos. Órganos administrativos y judiciales jurisdiccionales. Aplicación de la legalidad local, conforme nuestro régimen federal. Regulación. Dificultades.

NOTAS
[1] Así, v.g. PODETTI, Ramiro J. “Teoría y Técnica del Proceso Civil”, Bs. As., 1963, Ed. Ediar. Págs. 340 y ss.; PRIETO CASTRO, “Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal civil, Madrid, 1950; ALSINA, Hugo “Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da. Edición.; CARNELUTTI, Francesco “Derecho y Proceso”, Bs. As., 1971; ROCCO, Ugo, Derecho Procesal Civil; DÍAZ, Clemente “Instituciones de Derecho Procesal”, Ed. Abeledo Perrot; entre muchos otros..
[2] Digo al amparo, en atención a que la respuesta al actor, se la veía más bien como “contestación de demanda”, a la luz del Derecho de Defensa en Juicio, con base constitucional en el art. 18 C.N. y sus correlativos provinciales, para pasar luego a analizársela, desbrozársela, como correlato lógico del Debido Proceso, en una dialéctica igualitaria entre partes; en síntesis, un auténtico derecho del demandado, a veces y en su caso, de “contra acción”.
[3] Estas transformaciones (escisión entre el derecho de fondo y el de forma, como nacimiento mismo del Derecho Procesal) se observaron en la doctrina durante todo el siglo XIX y luego en el posterior, sobre la base de ´experimentar´ el concepto de la acción (desde SAVIGNY y WETZELE a los trabajos de BINDER, CARNELUTTI, BETTI, etc., en los últimos años, pasando por KIERNLFLY, HASSE, por la célebre polémica entre WACH, DEGENKOLB, MORATA, HELLWIG, CHIOVENDA, WEISMAN, ROCCO, etc.),
[4] A lo que mucho contribuyó, desde una perspectiva sociológica, la obra de Jaime GUASP DELGADO “La Prensión Procesal”. Ed. Civitas, Madrid, 1981.
[5] Si bien archi conocida a la fecha, ver tratamiento que de la misma hace, entre otros: COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, Bs. As. 1978; PALACIO, Lino Enrique Tratado de Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1983, Tomo I Nociones Generales.
[6] COUTURE, Eduardo J. Op. Cit. en nota anterior, págs. 57 y ss.
[7] Op. cit. loc. cit. en n. ant..
[8] GUASP DELGADO, Jaime: “La Pretensión Procesal” Ed. Civitas S.A., Madrid, 1981.
[9] Lo cual ALSINA, Hugo, enuncia con el acápite de “Bilateralidad de la acción”.(Ver op. cit. en Nota 1; t. I, págs. 299 y ss.) considerando a la “excepción” como la contracara de la acción, adjudicándole al demandado:

'el derecho de peticionar al juez, una sentencia declarativa de certeza negativa que rechace la pretensión del actor de sujetarlo al cumplimiento de una obligación'.
[10] CARLO CARLI, "La Demanda Civil" Ed. Lex, Bs. As., 1973.-
[11] BACRE, Aldo "Teoría General del Proceso", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1986.
[12] Anoto que en mi postura, de éste fin mediato, generalmente sólo atribuido al Proceso, participan los grandes temas de la Teoría General del Derecho Procesal.
[13] Así, v.g.: ROSENBERG, Leo "Tratado de Derecho Procesal Civil", t. I, p. 3, Buenos Aires, 1955; CARNELUTTI, Francisco "Sistema, t. I, pág. 352; ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO "Proceso, auto composición y autodefensa", pág. 54 y ss. México, 1974; entre otros.
[14] "Derecho Procesal". Segunda Edición, pág. 199.
[15] Tampoco, cuando al examen se lo pasa por la temática que da cuenta de la integración de los órganos jurisdiccionales, conjuntamente con otros de especies diversas, que conforman la "Organización del Poder Judicial". Tema este también incluido últimamente en el paquete de "contenidos" del Derecho Procesal.
[16] COUTURE, Eduardo J. op. cit. en nota [3], págs. 30 y ss.
[17] Entre otros, CHIOVENDA, José "Instituciones...", t. II, pág. 1; DÍAZ, Clemente A. "Instituciones de Derecho Procesal", t. II -A, pág. 17 y ss.; ROCCO, Ugo, "Derecho Procesal Civil", t. I, pág. 51.
[18] A modo de ejemplo, la magnífica obra de SAGÜÉS, Néstor Pedro "Derecho Procesal Constitucional", Tomos 1 a 4, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989.
[19] Considerando la tradicional pirámide jurídica kelseniana.
[20] Ver tratamiento que se le da al tema, en: BADENI, Gregorio "Tratado de Derecho Constitucional", Editorial 'La Ley', Buenos Aires, 2004, Tomo I, págs. 1281 y ss.; GELLI, María Angélica "Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada", Ed. 'La Ley', Bs. As, 2005, págs. 895 y ss.
[21] Hasta el siglo XVIII, conforme enseñanzas de COUTURE, Eduardo J. Op. cit. en Notas 5, 6 y 7, pág. 4.
[22] En tal sentido, CLARIA OLMEDO, Jorge A. "Derecho Procesal", Editorial Depalma, Buenos Aires, 1982, T. I, págs. 3 y ss.
[23] CARNELUTTI, Francesco "Derecho y Proceso", Buenos Aires, 1971, pág. 38.
[24] PRIETO CASTRO "Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal civil", Madrid, 1950. T. I, pág. 625.
[25] ALSINA, Hugo "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", T. I, pág. 35.
[26] ROCCO, Ugo, op. cit. en Nota 1, pág. 25.
[27] DIAZ, Clemente A. Op. cit. en Nota 1, T. I, pág. 7.
[28] CLARIA OLMEDO, Jorge A., Op. cit en Nota 22, T. I, pág. 11.
[29] Op. cit. en Nota ant., T. I., págs. 7 /8.
[30] Ver Nota 19.
[31] CALAMANDREI, Piero "Instituciones de Derecho Procesal Civil", págs. 20 y ss.
[32] ALSINA, Hugo. Op. cit en Nota 25, T. I, pág. 425; entre muchos otros.
[33] Sin olvidar que muchos postulados son self executing.

Proyecto de nuevo Programa de estudio para la asignatura
Derecho Procesal Penal
en el Plan de Estudio de la carrera de Abogacía
F.C.J.S. – U.N.L.P.

Temario

I.- Introducción. Los nuevos Temas. Enunciado genérico.-
II.- Propuesta para el dictado de la asignatura.-
III.- Ubicación en la currícula del plan de estudios. Correlativas.-
IV.- Programa de "Derecho Procesal Penal"
V.- Bibliografía.-

I.- Introducción. Los nuevos Temas. Enunciado genérico.-

Coherente con la propuesta ensayada en el sentido reformar el Programa de la actual asignatura ***Derecho Procesal I***, a partir de lo cual se propone crear una materia nueva para el Plan de Estudio de la Carrera de nuestra Facultad, la que se denominó *Teoría General del Derecho Procesal* y, apartarla del *Derecho Procesal Penal*, propiamente dicho, vengo ahora a presentar por separado, la propuesta de reformar el programa de esta última.

Como quedó dicho, actualmente, la *Parte "A"* del programa, abarca algunos elementales aspectos de la aludida *Teoría General*, y en la *Parte "B"*, se aborda de lleno al Derecho Procesal Penal. Pero he aquí que se observa la palmaria necesidad de *estructurar* completamente la primera (ver razones y fundamentos en Expte. por separado) y *reformar* la segunda.

A diferencia de lo que presenta la Parte "A" del programa vigente (marcada insuficiencia en sus contenidos) la Parte "B", motivo de esta presentación, denota una total desactualización. Y ello así, pues por las mismas razones apuntadas (época de concepción), regían parámetros muy diversos para el enjuiciamiento penal en la gran mayoría de las provincias argentinas, diferenciándose -relativamente- Córdoba, provincia ésta que, meritoriamente desde 1936, instauró -entre otros aspectos- la oralidad para la materia penal, si bien con esquemas (y principios) diversos de lo hoy vigente, para aquella época, sin duda alguna, todo un logro que plasmaba una visión pre clara de lo que sería el enjuiciamiento penal de las décadas y siglo venideros. Con posterioridad, otras se encolumnaron detrás de este *primer paso.*

Es del caso sucintamente recordar que para la provincia de Buenos Aires, rigió desde 1915 (15 de Junio) el conocido como *Código Jofré*. A éste (para la época) muy útil instrumento, con el correr de los años, sólo se le modificaba (principalmente) lo vinculado con *excarcelación* y *eximición de prisión*, manteniéndose la estructura *medular* de origen, la cual subsistió hasta 1986, año en que se introdujo una importante (para la época) reforma (Ley 10.183, sancionada a fines de 1985, B.O. 03-03-86) que se constituyó en un *nexo* hasta la llegada del *sistema acusatorio* perfilado desde 1996/7 y puesto en vigencia en 1998, (Ley 11.922 y modificatorias).

Huelga expresar que no importa la ley propiamente dicha, sino la relevante modificación que conlleva ínsito un cambio (sustancial) en el *sistema de enjuiciamiento penal*, lo cual -obviamente- implica adscribir doctrinaria, política e ideológicamente, a un esquema diverso sobre tan trascendente aspecto.

Este mismo espíritu de cambio se fue derramando en todas las provincias, las cuales -a su tiempo- fueron pasando de los antiguos esquemas signados como *inquisitivos*, al llamado sistema *acusatorio*. El paso más importante fue dado con la llegada del último período democrático, iniciado formalmente desde aquel mítico 10 de Diciembre de 1983, y muy especialmente para esta materia, con la histórica sanción de la ley nacional 23.054 (allá por Marzo de 1984), que introdujo a nuestra legislación la *Convención Americana sobre Derecho Humanos*, conocida como *Pacto de San José de Costa Rica*, de lo que rápidamente se hicieron eco las primeras constituciones provinciales reformadas en lo inmediato posterior, y, por fin, luego incorporado (entre muchos otros) con jerarquía constitucional, a nuestra Carta Magna Nacional con la estructural reforma que se le introdujo en 1994.

Hay pues vigentes aspectos de una *Teoría General del Derecho Procesal Penal* que han variado sustancialmente y esto debe ser reflejado en la parte introductoria de la materia. Luego, y como se adelantó, en lo inherente al mecanismo de enjuiciamiento, es muy diverso de lo que regía en el siglo pasado. No sólo hay nuevos sujetos procesales, con roles diversos, sino una *filosofía procesal penal* muy diferente: nuevos órganos con competencias distintas, nuevos institutos, diferentes regímenes, diversos mecanismos probatorios, otra manera de resolver ora en interlocutoria, ora en definitiva, otros modos de impugnar y ante otros órganos, etc., por citar sólo algunos aspectos de la nueva forma de resolver el conflicto jurídico penal; lo cual, para nada se ve reflejado en la estructura del actual programa de la materia, que por tales razones es indispensable *aggiornar*.

Procuraremos reflejar todos éstos enunciados genéricos en el detalle de los temas que enlistaremos con pretensión de sistemática y lógica, procurando seguir un esquema deductivo, con la coherencia del caso, y respetando las instancias más elementales de un proceso penal moderno, a la vez que tratando de sintetizar lo vigente en toda la Confederación de Estados nacionales, destacando -en su caso- las particularidades que correspondan.

II.- Propuesta para el dictado de la asignatura.-

Es ya casi una tradición en nuestra Casa de Estudios, que tanto para Procesal I, cuanto para Procesal II, la "práctica" complementaria constituya una asignatura dictada por separado, en la llamada "Adaptación Profesional…".

En el caso que nos ocupa, es obvio que únicamente pudo ser susceptible de un aspecto práctico, la "Parte B" del programa vigente, es decir lo vinculado de manera específica con el Derecho Procesal Penal. En la prohijada hipótesis de separación entre ésta y la Teoría General del Derecho Procesal, lo inherente a la "práctica" -obviamente- sigue teniendo razón de ser en lo vinculado con lo Procesal Penal.

Así pues y con este esquema, el dictado de la materia *Derecho Procesal Penal*, sin perjuicio de las sustanciales reformas que aquí se proponen -conforme se lo viene exponiendo- habrá de tener necesariamente un tinte prevalentemente teórico, toda vez que -por separado- el alumno cursará la "práctica" o *Adaptación Profesional de Procedimientos Penales.*

En tal sentido, antes de continuar con el desarrollo del presente capítulo, adelanto opinión en el sentido de que debería cursarse (o rendirse libre) la parte teórica (Derecho Procesal Penal) y, una vez aprobada la asignatura, recién quedar habilitado para cursar (nunca libre) la "práctica".

Como puede advertirse, no estoy de acuerdo de la *cursada simultánea* de lo "teórico" con lo "práctico". Paso brevemente a exponer las razones.

La larga experiencia que he adquirido en la labor profesional en el fuero Penal, como Secretario de 1ra. Instancia; Defensor Oficial; Juez de 1ra. Instancia con competencia Criminal y Correccional, como Juez de Tribunal Oral en lo Criminal, y simultáneamente con la enseñanza de la asignatura Procesal Primero, (una de cuyas Partes -"B"- alude, como lo vengo diciendo, al Proceso Penal) me han corroborado la principal dificultad que observo con el *cursado simultaneo*. Un abogado con especialidad en lo penal, o cualquier operador de la relación jurídica procesal penal sabe y le consta, que desde la primer presentación y/o asistencia y/o intervención que se lleva a cabo (en cualquiera de los roles) en un proceso penal, se pre figuran diversas y múltiples hipótesis "a considerar" las cuales, muchas veces, implican el establecimiento de una estrategia que se proyecta a lo largo de todo un (generalmente) extendido lapso procesal. Así por ejemplo, en el caso de la intervención de un *defensor* del imputado, desde los prolegómenos del proceso (inicio de la *investigación penal preparatoria*) meritúa, evalúa u observa la necesidad de hacer reserva de la *cuestión federal constitucional* en los términos del art. 14 de la Ley 48, lo cual habrá de ser de singular relevancia para la suerte del proceso (y la de su cliente…); y para esto (y tantísimos otros ejemplos) es necesario "conocer" la totalidad de la principal temática teórica. Es pues el "conocimiento" completo de los diversos institutos a aplicar, es lo que autoriza a hacer un análisis de mérito sobre como mejor encarar el objetivo perseguido. Obviamente que esto facilita al docente de las prácticas que, con el régimen actual, distrae mucho de su tiempo de "enseñanza práctica", explicando "aspectos teóricos" todavía no dados por el profesor de la materia, toda vez que el diagrama de temas es muy heterogéneo.

Considero muy poco eficaz y productiva (a sus efectos) la criticada *simultaneidad* vigente en la actualidad.

A los fines de una eventual instrumentación de la hipótesis que propicio, debería además instrumentarse -para que el alumno no pierda coherencia- que, una vez sorteado -por ejemplo- para cursar Derecho Procesal Penal (teórico) ya *deberá tener* pre-asignada su banca para cursar (inmediatamente después de aprobado el curso teórico), el "práctico", respectivo y *correlativo*. En el caso de quienes rindan libre el teórico, exigirle-asegurarle el curso práctico dentro de un lapso que no supere el año calendario. Obviamente que la *exigencia*, provendrá de la correlatividad y el *aseguramiento*, tendrá que dárselo la facultad con suficientes cursadas *ad hoc*, con comisiones propias y pertenecientes a las de cada cátedra, e *independientes*, como dije en número adecuado, para los alumnos que hayan rendido el teórico libre.

Dicho lo que antecede, se impone ahora referir breve y enunciativamente a los contenidos de la materia. Esta precariedad tiene que ver con su adecuación al acápite del presente capítulo, dejando el detalle de *contenidos* para el apartado IV donde se desarrolla el Programa, propiamente dicho.

Deviene de toda lógica (aunque no lo ha sido de *toda práctica*) que en una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dependiente de una Universidad Nacional, en la asignatura Derecho Procesal Penal se enseñe justamente "esto", y no un código procesal penal *comentado*. Es de perogrullo que en un país federal como el nuestro compuesto por veintitrés estados provinciales, con más la ciudad autónoma capital de la república, y siendo la materia procesal uno de los derechos reservados al tiempo de confederarse, que existan por tanto igual cantidad de "Códigos Procesales Penales", para nuestro caso. Así las cosas, ha sido *de práctica*

que, dependiendo del territorio provincial donde esté situada la Facultad "de derecho" de que se trate, será pues el código procesal penal que "se enseñe". Invariablemente en nuestra casa, situada en la capital de los bonaerenses, bajo el manto de "Derecho Procesal Penal" y con total desparpajo, se ´enseñó´ el código procesal penal de Buenos Aires, por décadas y décadas, el mentado líneas arriba como "Código Jofré" y sus modificaciones, (éstas últimas, principalmente en la década del 80), por supuesto con la *complacencia* del alumnado que estudiaba (con algunas explicaciones de algún apunte) y luego recitaba el código, y con ello aprobaba la materia. Súmese a ello que en las mesas examinadoras libres, se ponían a disposición de los alumnos que se presentaban a rendir, códigos procesales penales de Bs. As. (no comentados...) y alguno de "capital federal", al que prácticamente no se tocaba. Obviamente que para el caso tampoco hubiera correspondido tener a la mano la totalidad de los códigos procesales penales de los estados provinciales, y el de la Nación, toda vez que (amén de generar -seguramente- *desmayos* generalizados en los alumnos, y por qué no de algún docente) hubiera seguido siendo una metodología inapropiada, en atención a la crítica que aquí se formula en el sentido de que no corresponde enseñar ley vigente (menos de una única provincia, la que *mañana* es derogada total o parcialmente) sino "doctrinariamente" derecho procesal penal, sin perjuicio de la referencia a una o más leyes (códigos) vigentes o derogados, locales nacionales o extranjeros.

Aún recuerdo la preocupación de muchos compañeros de distintas provincias cuyas leyes procesales penales eran muy distintos del de Buenos Aires, con lo cual, y sólo aprendiendo el "código Jofré" en nuestra casa, se veían obligados al retornar a sus respectivas provincias, a "aprender" otro distinto...

Insisto. Es necesario enseñar Derecho Procesal Penal, sus Principios, Generales, instituciones, relación constitucional, sujetos, órganos (según clase del proceso de que se trate, modalidades y clases de enjuiciamiento, modos de resoluciones del "conflicto" penal, interlocutorias, definitivas, sus impugnaciones locales y nacionales, cosa juzgada penal y sus implicancias, la ejecución penal, etc. La referencia a la dogmática vigente, será pues ineludible, pero desde una óptica doctrinaria, abarcadora de los distintos regímenes, ora locales, ora de derecho comparado.

Aún recuerdo la importante resistencia a una enseñanza doctrinaria, fuera del código local, cuando -ya hace muchos años- al comenzar a incursionar en la docencia en esta materia, introduje levemente una temática como la que aquí sostengo.

III.- Ubicación en la currícula del plan de estudios. Correlativas.-

A los fines de un esquema curricular como el vigente, al Derecho Procesal Penal teórico, obviamente corresponderá abordárselo luego de Penal I y II. Y también, amén de Derecho Constitucional, es relevante que se haya aprobado además, Derecho Público Provincial y Municipal.

Huelga destacar la importancia del conocimiento de los diversos regímenes constitucionales del los Estados integrantes de nuestra Confederación, además -claro está- de la Carta Magna nacional, atento el tratamiento que las constituciones hacen, de manera directa o *cuasi* tal, de los temas que son objeto del conocimiento del Derecho Procesal Penal. Añádase a lo dicho la incorporación de *tratados* y *concordatos* (como los menciona el art. 75 inc. 22 de la C.N.-1994) en el texto mismo de nuestras leyes fundamentales con "*jerarquía superior a las leyes*", tales como -entre otros- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre prevención y sanción del delito de genocidio; Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Convención sobre Derechos del niño, etc. a los que la mentada norma de la C.N. les confiere *jerarquía constitucional*. Por imperio del art. 5 de la Const. Nacional, cada provincia dicta para sí su propia constitución, de acuerdo con principios, declaraciones y garantías de la C.N., capítulo o Primera parte, donde se insertan los mentados Pactos o Concordatos.

Es del caso volver a recordar que hubieron *constituciones provinciales* (tales como Córdoba, San Luis, Jujuy, etc.) que aún reformadas antes de la nacional, insertaron en su texto, entre otros, la referida *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (Pacto de San José de Costa Rica) que rigió en el país por ley 23.054 apenas iniciado el último período democrático, en Marzo de 1984. Demás está decir la enorme incidencia que la sanción con jerarquía constitucional del mentado *Pacto* trajo aparejado en los distintos regímenes de enjuiciamiento penal existentes en el país.

Ergo. Es pues de singular trascendencia que, a sus efectos, los alumnos que se formen en la materia, conozcan dicha temática, amén de las demás de directa incidencia en aspectos de derecho penal, y su aplicación, a través del Derecho Procesal Penal, con que cuentan las cartas magnas provinciales que componen nuestra confederación.

IV.- Programa de "Derecho Procesal Penal"

Módulo I.-
Doctrina y Dogma.
El Derecho Procesal Penal como rama de la Teoría General del Derecho Procesal.
Orden Jurídico Penal de fondo y forma. Dinámica del Derecho Penal. Realización del Orden Jurídico.
El Derecho Procesal Penal en La Legalidad nacional y supra nacional.
El Proceso Penal como objeto principal del Derecho Procesal Penal.

Módulo II.-
El Derecho Procesal Penal.
Concepto. Contenido. Función. Caracteres.
Principales antecedentes históricos. Derecho germano y grego-romano. La inquisición.
Fuentes: La ley; costumbre; usos forenses; jurisprudencia; ciencia jurídica; otras.
Su relación con otras ramas jurídicas. Principios y Garantías que lo rigen.
La Ley Procesal Penal. Aplicación. Régimen unitario o federal. Interpretación: métodos.
La Organización del Poder Judicial en materia penal en nuestro país. Competencia por razón del grado y territorio.

Módulo III.-
Aspectos Políticos del Derecho Procesal Penal.
Legislación Penal de fondo para el ejercicio del poder estatal en la materia. Oficialidad. Casos de oportunidad.
Legalidad procesal penal como herramienta de control social. Su variación a través del tiempo, según los distintos regímenes de gobierno.
El Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial como Sujeto de la *Relación Jurídica Procesal*, titular de la acción penal pública, y como representante de la sociedad y de la víctima en el Proceso Penal.
Casos en que el Ministerio Público Fiscal representa al Estado. Diferencia con el caso anterior.

Módulo IV.-
Principios Procesales.
Concepto. Principios específicos y aplicables al Derecho Procesal Penal.
Fundamentos Constitucionales. Reafirmación y principios emergentes de la legalidad supranacional. Pactos y demás Convenciones aplicables a nuestro derecho interno.

Módulo V.-
Principios Procesales Penales específicos.
La garantía del juicio previo. *Nulla poena sine iuditio.* Recepción constitucional y legal. Jurisprudencia nacional y supra nacional. El Juez natural.
Principio, estado o presunción de *Inocencia.*
Persecución penal múltiple. *Non bis in idem.* Concepto. Su aplicación en la Doctrina Judicial.
In dubio pro reo. Carga y valoración de la prueba.
Principio de la no reformatio in pejus.
Principio de Congruencia. Reglas y Principios que lo salvaguardan. Doctrina Judicial.
La Regla de exclusión. Receptación en los fallos de la CSN. Variaciones.
Otros Principios.

Módulo VI.-
Debido Proceso Penal
Origen histórico. Derivación del *Debido Proceso Legal.* Evolución. Normas reguladoras. La Legalidad del Debido Proceso Penal. Necesidad de que el *Debido Proceso*, sea legal.
Los valores en juego: Justicia; seguridad; bien común; libertad; previsibilidad.
Debido proceso penal *adjetivo* y *sustantivo.*
El derecho de Defensa en Juicio en el Proceso Penal. Derecho de Las Partes a: ser oído, ofrecer prueba y recurrir el fallo. Jurisprudencia.

Módulo VII.-
El Enjuiciamiento Penal.
Sistemas. Acusatorio. Inquisitivo. Mixto. La inserción de los Derechos Humanos.
Monopolio estatal. Legalidad. Oportunidad.
Búsqueda de la verdad real o material. Averiguación de la verdad. Medios. Prueba. Libertad probatoria. Principios que rigen la prueba en el proceso penal. Métodos de valoración. Principio de adquisición procesal.
La Resolución Judicial. Órgano Judicial Jurisdiccional. Clases. El Jurado popular. Escabinados. Otros.

Módulo VIII.-
El Proceso Penal.
Concepto. Fines. Objetos: Principal y accesorio. Proceso Penal público y privado. Sujetos procesales según su caso.
Los presupuestos procesales. Formas esenciales del procedimiento.
Procedimiento común y especiales.

Módulo IX.-
Jurisdicción Penal
Jurisdicción Penal argentina e internacional.
El órgano Jurisdiccional Penal. Concepto. Clases. Jueces u órganos técnicos: Requisitos y modos de designación. Sanciones y destitución. El jury de enjuiciamiento.
Jurado popular. Tribunales mixtos o escabinados.
Juez de instrucción. Juez de Garantías. Juez y Tribunal en lo Criminal. Juez en lo Correccional. Cámara de apelación. Tribunal de Casación.
Competencia. Concepto. Clases. Cuestiones de competencia. Excusación y recusación.
Jurisdicción y Competencia penal en nuestro régimen federal de gobierno.

Módulo X.-
Las Partes. (1)
El imputado.
Concepto. Capacidad. Derechos y deberes. Su declaración: Derecho al silencio, asistencia. Rebeldía.
Imputado procesado y "no procesado". Diferencias. Efectos procesales.
Garantías constitucionales: Legalidad nacional y supra nacional que amparan al imputado.
La parte *demandada* en el proceso penal: Integración.
El Defensor técnico. Particular y Oficial. Derechos y deberes. Asunción del cargo. Renuncia. Honorarios. El letrado asistente.

Módulo XI.-
Las Partes. (2)
El Ministerio Público Fiscal.
Concepto. Origen histórico. Capacidad. Derechos y deberes.
Organización del Ministerio Público Fiscal en nuestro país.
Cuestión institucional según su pertenencia al Poder Ejecutivo o Judicial. Ejemplos. Diferencia. Representatividad según su caso.
Su intervención en la Etapa sumarial o preparatoria, en el Juicio, y para ante los Tribunales superiores (provinciales o nacional).

Módulo XII.-
Partes y otros Sujetos Procesales necesarios o eventuales en el Proceso Penal. (1)
El querellante en los delitos de acción pública. Concepto. Derechos y deberes. Legitimación. Actuación coadyuvante y/o independiente del Ministerio Público Fiscal.
El Particular Damnificado en el CPP de Buenos Aires.
Concepto. Constitución: oportunidad. Derechos y deberes.

La Víctima en el Proceso Penal público. Actuación en el proceso. Derechos, deberes y facultades. Asistencia pública a la víctima: Alcance. Órganos.

Módulo XIII.-
Partes y otros Sujetos Procesales necesarios o eventuales en el Proceso Penal. (2)
Querellante y querellado en los delitos de acción privada. Concepto. Derechos y deberes. Legitimación. Conciliación y retractación.
Actor civil. Concepto, legitimación, constitución. Desistimiento. Efectos. Legislación aplicable. Requisitos. Influencia de la sentencia penal sobre la acción civil.
Civilmente demandado. Concepto. Casos: imputado; tercero responsable; asegurador citado en garantía.
Otros Sujetos Procesales del Proceso Penal: Auxiliares de los organismos intervinientes. Testigos. Peritos: oficiales y de parte. Intérpretes.

Módulo XIV.-
Actos y resoluciones procesales.
Concepto. Requisitos. Formalidades. Clases: Actas, notificaciones, vistas, exhortos, mandamientos, oficios, otros. Plazos y términos. Perentorios, prorrogables e improrrogables. Efectos.
Resoluciones Interlocutorias del proceso penal. Concepto. Finalidad. Requisitos. Clases: simples y con fuerza de definitiva. Ejemplos. Diferencia con la resolución definitiva.
Rectificación a pedido de parte o de oficio. Concepto. Procedencia. Efectos.

Módulo XV.-
Medidas de coerción en el proceso penal.(1)
Concepto. Presupuestos generales de las medidas cautelares. Requisitos. Clases: Reales y personales.
Arresto. Citación. Aprehensión. Incomunicación. Detención. Prisión preventiva: Concepto. Requisitos. Procedencia. Efectos. Sujetos intervinientes. Resolución. Impugnación. Cesación.
Atenuación de la coerción: Casos. Cesación y caducidad de la atenuación.
Razonabilidad de la duración de la prisión preventiva. Problemática. Tratamiento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pronunciamientos jurisdiccionales e incidencia en la legalidad nacional y provincial local.

Módulo XVI.-
Medidas de coerción en el proceso penal. (2)
Excarcelación y eximición de prisión. Concepto. Distintos supuestos. Excarcelación ordinaria y extraordinaria. Trámite. Cauciones: Clases. Resolución. Impugnación. Sujetos intervinientes según etapa de la tramitación procesal. Revocación: Casos.
Coerción real en el proceso penal. Embargo e inhibición de bienes y cosas. Otros. Procedencia. Requisitos. Oportunidad. Trámite. Legalidad aplicable.

Módulo XVII.-
La Prueba en el proceso penal.
Concepto. Elemento y medio de prueba. Libertad probatoria. Valoración probatoria.
Legal o tasada. Libre convicción razonada. Intima convicción.
La prueba ilícita. Su exclusión. Articulación. Aplicación de la *Regla de Exclusión*: alcance y efectos.
Clases de prueba: Inspección. Registro. Requisa. Reconstrucción. Secuestro. Testigos. Reconocimientos y Careos. Intérpretes. Peritos.
Etapa de recolección probatoria. Ofrecimiento y producción. Oportunidad. Denegatoria. Reserva. Selección probatoria para el Juicio. Modos de producción e incorporación al Debate.

Módulo XVIII.-
Actuaciones penales originarias.
Sumario o Investigación penal preparatoria. Concepto. Distintos modos de inicio.
Denuncia. Ante juez, Fiscal o Policía. Formas y contenido. Actuación policial oficiosa. Casos. Facultades. Deberes.
Organismos y sujetos intervinientes: Juez o Fiscal de instrucción. Juez de Garantías. Imputado. Defensa Oficial y particular. Policía Judicial, administrativa, científica: funciones.

Módulo XIX.-
Clausura de la etapa de investigación o preparatoria.
Trámite. Sujetos intervinientes. La elevación a Juicio. Requisitos. Vista: oposiciones y excepciones. Clases. Resolución. Impugnación y peticiones: Órgano interviniente. Trámite en la alzada.
Libertad por Falta de Mérito: Procedencia. Sobreseimiento: Concepto. Clases. Impugnación. Efectos. Suspensión del proceso a prueba: Procedencia. Requisitos. Consentimiento fiscal.

Módulo XX.-
El Juicio. (1).
Juicios: Ordinario. Criminal. Correccional. Por delitos de acción privada. Abreviado. Flagrancia. Juicio directísimo. Habeas Corpus: Orden; audiencia; resolución; impugnación.
Procedencia. Similitudes y diferencias. Órganos intervinientes.
Preliminares: Radicación de las Actuaciones ante el órgano Jurisdiccional interviniente. Notificación: facultades de las partes. Citación a Juicio: concepto. Audiencia Preliminar: Ofrecimiento de prueba y demás alternativas a tratar en la misma. Complemento suplementario. Resolución. Facultad de las partes.

Módulo XXI.-
El Juicio. (2).
La Audiencia de Debate.
Designación. Celebración: Condiciones. Facultades del Órgano jurisdiccional y las partes. Desarrollo. Producción de la prueba: Modalidades. Distintas incidencias y alternativas de la Audiencia. Modalidades según la clase de Juicio de que se trate. Acta de debate: requisitos.
Ampliación del requerimiento Fiscal: Congruencia.

Clausura del Debate. Alegatos.
Veredicto. Sentencia. Requisitos. Plazos. Deliberación. Tratamiento de las cuestiones, modalidades según su caso.

Módulo XXII.-
La impugnación en el Proceso Penal. (1).
Aspectos y consideraciones generales: Recursos y medios de impugnación. Concepto. Clases: Ordinarios y extraordinarios. Trámite. Órganos intervinientes: *a quo* y *ad quem*. Resoluciones judiciales impugnables. El agravio. Errores *in iudicando* e *in procedendo*. Autorización impugnativa según la parte de que se trate. Efectos del Principio: *Tantum devolutum quantum appellatum*. Aplicación y efectos del Principio de la *No reformatio in pejus*.

Módulo XXIII.-
La impugnación en el Proceso Penal. (2).
De los recursos y medios de impugnación en particular. Impugnación ordinaria. Adhesión.
Reposición y Aclaratoria. Concepto. Procedencia. Trámite. Efectos. Resoluciones recurribles. Procedencia oficiosa. Suspensión del plazo para la interposición de otras impugnaciones.
Recurso de Apelación y Nulidad. Concepto. Procedencia. Formas. Trámite. Efectos. Órganos intervinientes.
Nulidad como articulación procesal. Categorías: Irregularidad, inadmisibilidad, inoponibilidad. Clasificación: Nulidades específicas, genéricas, implícitas, absolutas, relativas. Trámite: oportunidad de su articulación. Resolución.

Módulo XXIV.-
La impugnación en el Proceso Penal. (3).
De los recursos y medios de impugnación en particular. Impugnación extraordinaria.
Recurso de Casación Penal. Concepto. Procedencia. Forma. Trámite. Efectos. Resoluciones recurribles. Casación con y sin reenvío: Casos. Órgano interviniente. Prueba. Audiencia. Sentencia: requisitos.
Recursos Extraordinarios ante el Superior Tribunal Provincial: Materia Penal. Extraordinario de Inconstitucionalidad; Nulidad (con y sin reenvío); Inaplicabilidad de ley. Concepto. Procedencia. Requisitos. Forma de interposición. Trámite. Sentencias recurribles.

Módulo XXV.-
La impugnación en el Proceso Penal. (4).
Impugnación extraordinaria nacional y supra nacional.
Recurso Extraordinario Federal: Art. 14 Ley 48 (T.O.): Concepto. La Arbitrariedad en materia penal. Casos. Procedencia. Requisitos: reserva, depósito, otros. Forma de interposición. Trámite. Sentencias recurribles. Fallos de la C.S.J.N. relevantes en la materia: Su incidencia en la doctrina judicial y legalidad nacional.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Materia Penal. Dimensión transnacional del derecho y la justicia.
Pacto de San José de Costa Rica. Órganos: Comisión y Corte Interamericana. Funciones. Casos y fallos relevantes en la materia. Incidencia en la Legalidad nacional.

Módulo XXVI.-
Cosa juzgada Penal.
Concepto. Fundamento y esencia jurídica. Elementos: La triple identidad. Límites objetivos y subjetivos. Cosa Juzgada formal y material. Incidencia y efectos de la Cosa Juzgada respecto del imputado: diferencias. Seguridad Jurídica o Justicia. Resolución simultanea del Órgano Jurisdiccional penal sobre la cuestión penal y el reclamo civil: diversas hipótesis acerca de la firmeza de los pronunciamientos.
Acción de Revisión en materia penal.
Concepto. Esencia jurídica: Incidencia en nuestro régimen federal conforme reserva de derechos de los Estados parte. Procedencia. Órganos intervinientes. Procedimiento. Efectos. Reparación pecuniaria.

Módulo XXVII.-
La Ejecución en el Proceso Penal.
Ámbito penal. Concepto. Poder Judicial-Poder Ejecutivo: Coexistencia.
Órganos: Juez de ejecución. Servicio Penitenciario. Patronato de Liberados.
Régimen disciplinario. Condenados y procesados. Programas post penitenciarios. La reinserción social como fin.
Normativa internacional sobre la ejecución penal. Receptación en nuestra legalidad.
Libertad Condicional. Concepto. Procedimiento. Intervención del Patronato de Liberados. Revocación.
Ejecución civil en el proceso penal. Competencia. Procedimiento. Costas.

5) (PROYECTO 11) Algunas consideraciones y propuestas acerca de la reforma del plan de estudios por la Agrupación Estudiantil Construyendo Derechos.-

Proyecto de Reforma del Plan de Estudios
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

"Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana"[1]
"No basta con teorizar sobre la Justicia, sino que hay que luchar para realizarla"[2]

CONSIDERACIONES GENERALES
En la actualidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ha comenzado un proceso de reforma de su plan de estudios con el objetivo de actualizar contenidos, modificar correlatividades, enunciar objetivos y propósitos, revisar metodologías y evaluar un mejor desarrollo de prácticas profesionales.

El plan de estudios vigente quedó configurado en el año 1985, siendo modificado por última vez en el año 1988; tras esa reforma quedó estructurado de la siguiente manera: cuenta con 31 materias teóricas, dos prácticas y un trabajo de investigación - seminario.

Teniendo en cuenta que desde la última revisión han pasado casi 23 años y en el marco de un contexto nacional e internacional complejo y dinámico, resulta urgente renovar la actual estructura con el objeto de incorporar las nuevas demandas sociales y de delimitar objetivos acerca del Perfil del Profesional que se debe formar en nuestra facultad y del lugar que se le va a dar a la Enseñanza, la Investigación y la Extensión Universitarias.

Consideramos que los profundos cambios que se vienen sucediendo en la sociedad, en nuestro país y en la región, impactan sobre la Universidad y obligan a repensar su rol y función, se genera la posibilidad de discutir si la Educación Superior debe estar al servicio de los intereses de unos pocos, formando profesionales individualistas, meramente técnicos y reproductores de un saber concebido por otro, produciendo conocimiento para grupos económicos privados, con una universidad absolutamente desconectada de la realidad o, si por el contrario, trabajamos por construir un modelo de universidad en armonía con las necesidades de las mayorías, por recuperar una visión estratégica de un proyecto de educación pública, popular y masiva dentro de un Proyecto Nacional, Popular y Latinoamericano con una concepción humanista y crítica.

Nuestra meta debe ser la edificación de una universidad comprometida socialmente: con fomento de prácticas de extensión y articulación con otros sectores, con la promoción de investigaciones en función de los intereses y problemáticas de las mayorías, con la incorporación de sectores sociales, organizaciones gremiales y sindicales, junto a los actores de la comunidad universitaria, en las instancias de diseño, concepción y planificación.

En el año 2008, tras la lucha y el trabajo de los miembros de todos los claustros, se logró reformar la Carta Magna de la UNLP, a partir de lo cual se incorpora un conjunto de reivindicaciones que se encaminan en la construcción de una Universidad más inclusiva y comprometida socialmente.

Pudimos avanzar en la articulación de la Universidad con la sociedad, jerarquizando la Extensión Universitaria que antes de la reforma era un artículo perdido del Estatuto. Pudimos avanzar en aumentar considerablemente la cantidad de Proyectos de Extensión que hoy brinda la Universidad de La Plata, para que cada vez más estudiantes se involucren con las problemáticas sociales. Pudimos sumar a las organizaciones sociales, gremiales y políticas a la orientación del objeto de estudio de nuestras carreras, creando un Consejo Social donde los sectores populares tengan la posibilidad de expresar qué esperan de ésta Universidad Nacional. Pudimos establecer la condición de derecho adquirido e inalienable de los estudiantes las materias aprobadas, y que bajo ninguna circunstancia o situación puedan ser perdidas o derogadas. Logramos concretar la gratuidad de los doctorados para los docentes e investigadores que se desempeñan en las distintas Facultades de la UNLP. Se logro un profundo y contundente pronunciamiento por el ingreso libre e irrestricto a todos los estudiantes. La educación es un derecho, no es un servicio ni una mercancía. Un derecho de todos, no de unos pocos. Y como Universidad pública-estatal orientada a las necesidades de las mayorías, es inconcebible que hoy haya sectores que nos sigan planteando que hay algunos que pueden estudiar y otros que no. Conseguimos que quede sentado en el Estatuto la prohibición de ocupar cargos a personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y al terrorismo de Estado. Logramos incorporar al Bienestar Universitario como Título del Estatuto, para que la Universidad se comprometa a ejecutar políticas en la materia. Logramos la histórica incorporación de los trabajadores no-docentes, con voz y voto a los órganos de co-gobierno universitario.

En este nuevo momento histórico que estamos atravesando en Latinoamérica y Argentina se nos presentan nuevos desafíos como comunidad educativa para estar a la altura del proceso político que estamos viviendo y cumplir la tarea de nuestra generación: la verdadera independencia económica, política y cultural.

Dentro de este marco sabemos que solo con la organización del pueblo es que vamos a garantizar las condiciones para profundizar este proceso que comenzó en el 2003 de redistribución de riqueza, incorporación de sectores sociales que estaban excluidos de lo económico y de mejoramiento social; esto lo podemos ver en la estatización de Aerolíneas y las AFJP, la AUH, la sanción de la Ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, el avance del movimiento obrero como actor político fundamental, entre otras cosas. Sabemos que hay mucho por profundizar, pero también sabemos que es responsabilidad nuestra defender lo que conseguimos y avanzar por más, como región, como país, como universidad y como facultad.

Haciendo un recorrido histórico de cómo ha evolucionado el programa de estudios de esta unidad académica, se puede observar que el mismo ha sido la cristalización de un determinado momento histórico, de un proyecto de país y de un modelo de educación.[3]

Consecuentemente, la actual reforma debe responder a los designios que marca la actual coyuntura social, política, económica y cultural; los abogados que se gradúen en nuestra facultad deben ser profesionales conscientes de su responsabilidad social; magistrados, patrocinadores y asesores garantes del acceso a la justicia; mediadores en los conflictos y controversias; cuadros estatales con capacidad de diseñar e implementar políticas que respondan a los intereses del pueblo; militantes políticos representantes de sus territorios; profesionales capaces de contribuir a la transformación de su entorno, en la búsqueda de la libertad, la igualdad y la justicia.

Entendemos que la transformación que se haga debe ser la expresión del debate, la discusión y participación de todos los actores de la comunidad universitaria, del trabajo y construcción colectivos, que en el nuevo programa deben estar plasmadas las opiniones, miradas y aportes de las mayorías.

Celebramos la oportunidad que hoy se nos presenta de poder ser actores de este cambio, afirmamos y asumimos nuestra responsabilidad de ser protagonistas y promotores de los procesos de democracia participativa.

PERFIL PROFESIONAL, PERFIL CURRICULAR Y ENSEÑANZA DEL DERECHO

Antes de pasar a considerar cual el es perfil del profesional que debería orientar el diseño del nuevo Plan de Estudios, nos parece necesario analizar cuál es la orientación actual del egresado de nuestra unidad académica.

Como desarrollamos en el apartado anterior, la misión, objetivos, orientación y perfiles que se forman en cada facultad, en cada universidad o institución, responde a un determinado momento histórico, a un determinado proyecto.

Nuestra Educación ha recreado una concepción neoliberal, que se cristalizó a través de la Ley de Educación Superior de los años '90 y que se tradujo en cuál debería ser la función de la universidad, la

extensión y la investigación, cómo debería ser el financiamiento, la autonomía y el gobierno universitarios y de qué forma se debía estructurar la docencia y la enseñanza.

En la Educación del Neoliberalismo se forma un profesional individualista, distanciado de las problemáticas y las necesidades del pueblo; aislado, alejado de la situación socio-política-cultural nacional e internacional; un técnico, reproductor de un saber pensado y elaborado por otro.

Estos rasgos son palpables en el tipo de abogado que se forma en nuestra facultad.

El graduado no tiene conciencia ni visión colectivas, no se estimula la comprensión de la importancia que tiene entendernos como parte de una sociedad, como actores de un sistema, como beneficiarios de una educación pública, financiada gracias al esfuerzo de toda una Nación y, en ese sentido, conscientes de las responsabilidades políticas, jurídicas, sociales y éticas que tenemos como profesionales con los diferentes sectores del pueblo.

El "éxito profesional" está asociado con la acumulación material, con el "triunfo" judicial, con el "engorde" del currículo vitae; se construye una visión competitiva del rol que tenemos, haciendo primar nuestros intereses individuales por sobre las necesidades de un colectivo. La "víctima", el "imputado" que nos toca defender, asesorar, juzgar, acompañar, deja de ser una persona para pasar a ser el "cliente", un "sujeto de derecho", una mercancía; se pierde la humanidad en las relaciones, quedando desoída la necesidad social de formar juristas con capacidad de mediar y conciliar.

Nuestro plan de materias suele orientar al egresado a desempeñarse como "litigantes", sin fomentarse el desarrollo en otras esferas laborales; en términos porcentuales es escaso el número de egresados que deciden dedicarse a la docencia, la extensión y la investigación universitarias, sumado a una fuerte desarticulación entre esas prácticas.[4]

No se estimula una concepción crítica del Derecho; la evaluación del contexto socio-histórico-político y cultural de creación, sanción y ejecución de la ley; un análisis acerca del momento en que nace la norma, su proyección, adecuación y conexión con la situación nacional, regional e internacional actual. De esta forma, la "disposición legal" se dogmatiza; el estudiante, el egresado, no aprende a cuestionarla; no la concibe como la cristalización de una correlación de fuerzas, como la traducción de un proyecto, el fruto de una lucha, sino como una "verdad dada", como un precepto incorruptible.

En relación al perfil curricular y modelo de enseñanza, se observan los siguientes problemas:

- no se implementan estrategias que fomenten una participación activa de los estudiantes, la integración, trabajo e intercambio grupal; nos encontramos con "clases magistrales", puras exposiciones teóricas donde el debate, la pregunta y la repregunta suelen estar ausentes; el docente se relaciona de una forma impersonal con el estudiantado, hecho que se ve reforzado por el no aumento de la planta general de profesores frente al contiguo crecimiento del ingreso que genera alta cantidad de estudiantes por docente, dificultando aún más el proceso de aprendizaje;[5]

-dificultad para la integración de los conocimientos propios del plan de estudios y la necesidad de revisión del sistema de correlatividades vigentes;[6]

-la necesidad de fomentar la formación general del estudiante de derecho y aumentar su vinculación con otras disciplinas y su circulación en otras facultades;

-la dificultad para integrar los contenidos de la teoría con la práctica y la escasez de herramientas para el ejercicio práctico al concluir los estudios de grado;

-la poca centralidad que se le otorga a las prácticas de investigación científica: el programa vigente sólo contempla la realización de un "Seminario" (con la opción de hacerlo bajo la modalidad "libre" o "cursado"), que concluye con un trabajo monográfico;

-la falta de actualización e incorporación de ramas, temas y bloques de conocimiento afines con nuestra disciplina y que urge su contemplación para adecuar nuestra formación a las demandas sociales actuales.

Considerada la situación actual, nos parece apropiado comentar cual entendemos que debe ser el perfil profesional, curricular y de enseñanza del derecho que debe inspirar la reforma.

Como bien surge del documento de "Autoevaluación Académico- Institucional de la FCJS de la UNLP - 2007-2010", la abogacía debe ser comprendida como una profesión que implica obligaciones referidas a la traducción de demandas sociales colectivas e individuales en reclamos jurídicos y la inclusión de sectores excluidos del acceso a la justicia.

Se debe promover la formación de profesionales críticos, conocedores de sus deberes y derechos, con ideales democráticos, con sentido ético, humanista, con visión colectiva y solidaria, capaces no sólo de asimilar conocimientos teóricos, sino de crearlos y de asumir posiciones transformadoras en todos los aspectos, que rescaten nuestra identidad nacional y latinoamericana.

El egresado debe tener la capacidad de resolver problemas profesionales complejos, fomentando un espíritu creativo para imaginar y obtener soluciones jurídicas originales.

Para la mejora de nuestra formación profesional, es necesario apuntalar y consolidar la articulación entre docencia, extensión e investigación; profundizar la formación en tales prácticas con el objeto de que la facultad sea el ámbito de producción de conocimiento, que el mismo se oriente en función de las necesidades y problemas del pueblo; que sea a través de la experiencia acumulada en el terreno de articulación con otros sectores sociales que se redireccionen las prácticas futuras.[7]

El modelo de enseñanza debe estar basado en la resolución de problemas, en hacer del estudiante el centro de la actividad cognoscitiva y en el uso de las estrategias de interacción grupal con el propósito de que los alumnos sean sujetos activos en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. De esta forma el aprendizaje se da mediante el enfrentamiento directo a problemas reales en el contexto de la producción social: económica, política y cultural.

COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

A partir del diagnostico realizado y de los objetivos planteados, proponemos las siguientes reformas al plan de estudios vigente:

-Materias iniciales o propedéuticas

Conforme los datos publicados en la página de nuestra facultad, entre un 25 y un 30% de los aspirantes a nuestra carrera, abandonan sus estudios durante el Curso de Ingreso; a esto hay que sumarle las tasas de deserción a lo largo del primer año. Entre las causales cabe mencionar: la dificultad para adaptarse a un nuevo nivel educativo, culminado el secundario; la falta de contención afectiva (sobre todo para aquellos que dejan su lugar de origen para venir a estudiar a esta ciudad); limitaciones de índole económica; los problemas que se presentan en materia de comprensión, redacción y producción de textos, que

tornan dificultoso la posibilidad de estudiar la cantidad de material que se exige, propio de una carrera de grado.

Entendemos que para que la posibilidad de acceso y permanencia sea real, desde cada unidad académica se deben tomar medidas de contención en cuatro aspectos: Económico (a través de las políticas de Bienestar Estudiantil), Psicológico-afectivo (a través de Gabinetes integrados por equipos interdisciplinarios: Psicólogos, Lic. en ciencias de la Educación, Trabajadores Sociales), Informativa (democratizando y garantizando el real acceso a la información necesaria para poder desempeñarse en el ámbito universitario) y Académica.

En lo concerniente al último punto, entendemos que el actual Curso de Adaptación Universitaria no está siendo una herramienta eficaz a los efectos de trabajar sobre los problemas que implican el pasaje de un nivel educativo a otro, ante todo, por su corta duración. En ese sentido, proponemos la implementación de un "Ciclo Básico", al igual que otras Facultades de Derecho del país, a partir del cual los aspirantes comenzarían a cursar materias propias de la currícula directamente (sin curso de ingreso); para ello habría que revisar las materias propedéuticas vigentes para, a las ya existentes, adicionarle otras.

Este ciclo podría quedar conformado de la siguiente manera:

Primer cuatrimestre
Taller de Producción y Comprensión de Textos [8]
Realidad Nacional y Latinoamericana[9]
Introducción al Derecho
Segundo Cuatrimestre
Derecho Romano
Historia Constitucional
Introducción a la Sociología

-Materias optativas

Se podría agregar al actual plan la posibilidad de realizar dos o tres materias optativas para enriquecer nuestra formación. Para ello, proponemos dos modalidades:

- Interdisciplinariedad - Articulación con otras unidades académicas

En muchas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata, la currícula está conformada no sólo por materias propias de la respectiva carrera sino también por asignaturas optativas tendientes a complementar y enriquecer la formación.

En el ejercicio de nuestra formación nos encontramos ante la necesidad de especializarnos en distintos campos afines con las ciencias jurídicas: sociología, psicología, medicina (forense), geología (minería), historia, economía, inglés (relaciones internacionales), etcétera.

Se podría establecer un sistema de articulación con otras facultades a partir del cual los estudiantes de derecho tengan la posibilidad de optar por una, dos o tres materias, afines con la especialización u orientación a la que pretendan avocarse.

- Incorporación de materias a la currícula

Complementar el actual plan de estudios con otras materias expresivas de nuevas ramas del derecho, que han adquirido notoria relevancia en los últimos tiempos intentando dar respuestas a nuevos problemas, necesidades y avances sociales.

Algunas de esas materias, que hoy se dictan en otras Universidades Nacionales del país son:

-DE NECESARIA INCORPORACIÓN (por su trascendencia conforme el momento histórico que estamos viviendo, los avances de la tecnología y evolución de la sociedad o por su relevancia para trabajar algunos de los problemas que se presentan en el plan actual):

DERECHOS HUMANOS[10]
MEDIACIÓN[11]
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN[12]
TALLER DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA[13]
TALLER DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DISCURSO Y LENGUAJE JUDICIAL[14]

-OPCIONALES:

DERECHO DE LA COMUNICACIÓN[15]
DERECHO INDUSTRIAL[16]
DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES[17]
CRIMINOLOGÍA Y CONTROL SOCIAL[18]
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN[19]
DERECHO DE LA EDUCACIÓN[20]
IDIOMAS[21]
PEDAGOGÍA DEL DERECHO[22]

-Prácticas Profesionales

Una de las mayores dificultades con las cuales nos encontramos al recibirnos es con la falta de preparación para desempeñarnos en el campo laboral; consideramos que debe ser en la carrera de grado donde se nos deben brindar las herramientas necesarias para poder responder a las diferentes demandas con las cuales nos vamos a encontrar en la sociedad.

Para ello, creemos interesante la adición de una tercera materia práctica que consista en una especie de pasantía o residencia a lo largo de un cuatrimestre o durante todo un año. Los estudiantes elegiríamos un campo de intervención de la práctica forense como: Legislaturas, Ministerio Público, Poder Judicial, Colegial (colegios profesionales), Consultorio Jurídico Gratuito, Administrativo (Universidad, Ministerios, Municipio, Secretarías, etc).[23]

Agrupación Estudiantil Construyendo Derechos
MILES (Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil)
Comisión Interclaustro para la Reforma del Plan

6) (PROYECTO 13) Reflexiones realizadas por los miembros del Instituto de Derecho Penal por el Profesor Ernesto Domenech.-

La Plata, agosto de 2011.-

Estimados integrantes
Comisión de Derecho Público
Programa de Estudio y Análisis para la
Reforma del Plan de Estudios

Nos dirigimos a Uds. en respuesta a la invitación formulada, a los fines de acercarles las conclusiones a las que hemos llegado conjuntamente con colaboradores del Instituto de derecho Penal y Profesores de la materia Derecho Penal I de la casa de Estudios:

Hemos tomado en cuenta el diagnóstico de dificultades oportunamente elevado en el que señalaban como relevantes:

- . Incrementar la carga interdisciplinaria.
- . Incluir mecanismos de atravesamiento entre las distintas disciplinas jurídicas.
- . Mejorar los vínculos con las prácticas profesionales.
- . Posibilitar al alumno la elección parcial de contenidos.
- . Mejorar la habilidades para enfrentar otros roles profesionales diversos a los del litigio judicial.

Somos conscientes que el Plan de Estudios, como ocurre con la legalidad y la seguridad en el país, es por si sólo insuficiente para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje jurídicos, con especial referencia a las prácticas, que también deben ser evaluados para proponer mejoras.

Con estas precisiones consideramos que es conveniente incorporar disciplinas que aborden temas estrechamente relacionados con los problemas penales como:

- . Derechos Humanos
- . Criminología (con cátedras de integración interdisciplinaria que incorpore expertos procedentes de la sociología, la antropología cultural, la psicología y la psiquiatría).
- . Criminalística (también con integración pluridisciplinar).

Algunos contenidos penales podrían ser profundizados con disciplinas específicas como

- . La responsabilidad penal juvenil.
- . El derecho de la ejecución penal.
- . Derechos Penales III que aborden segmentos del campo extenso del derecho penal II.

Otros contenidos que deberían ser incluídos por su vinculación con otros roles profesionales son

- . Técnica Legislativa.

Las prácticas se enriquecerían con asignaturas o contenidos relacionados con:

- . El Proyecto Profesional del alumno.
- . Psicología aplicada.
- . La mediación.

En cuanto al régimen de correlatividades sería conveniente:

§ . que el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos fuesen correlativas del Derecho Penal. La importancia de ambas es crucial y sus contenidos indispensables.
§ . que se autorizasen nuevas experiencias destinadas destinadas a cursar en forma simultánea asignaturas estrechamente relacionadas entre sí y con las prácticas como:
§ . Derecho Penal 1, Derecho Penal, 2 Derecho Procesal 1 y Prácticas Penales.

Finalmente, confirmamos la presencia de representantes en la reunión a llevarse a cabo el 25 de agosto del corriente en la Sala del Consejo Directivo.

Instituto de Derecho Penal. Especialización en Derecho Penal.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata.
Dirección: Calle 48 e/ 6 y 7 Piso 3º Aula 114 Edificio de la Reforma Universitaria.
http://idpjursoc.blogspot.com / http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/
0221-421-1915. Horario de atención: lunes a viernes de 14:30 a 18:00 hs.
esppenal@gmail.com / idpjursoc@gmail.com

7) (PROYECTO 16) Eleva algunas reflexiones acerca de la enseñanza del "Derecho Penal" y sugiere la incorporación en la enseñanza de la teoría general del derecho penal, materias como "Criminología", "Investigación Criminal" y "Medicina Legal" por el Graduado Ricardo Dipascual.-

PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS
La Plata, 22 de agosto de 2011

Al Titular del Vicedecanato de
la Facultad de Derecho de la U.N.L.P.
Su Despacho:

Antes de comenzar, me presento como Ricardo Dipascual, titular del D.N.I. nº 27.528.463, abogado egresado de la U.N.L.P., Especialista en Derecho Penal egresado de la Universidad Austral, con curso de Instructor Judicial aprobado por el Ministerio Público Bonaerense y actualmente cursando la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Austral.

I. INTRODUCCIÓN:

La intención del presente mail, es exponer mi opinión solo de forma “general”, en el espacio institucional creado para el análisis, discusión, debate y formulación de propuestas de reforma al plan de estudio para la carrera de Abogacía.

El motivo de las dos propuestas que a continuación mencionaré, es buscar un debate y discusión sobre las mismas, para una posible reforma y actualización en la currícula de formación de los futuros abogados de mi querida U.N.L.P.

Luego de observar la resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP de mayo de 2011, he visto la creación de seis comisiones temáticas de trabajo, las cuales cada una tiene un ámbito de competencia de análisis.

La Comisión de Derecho Público discutirá acerca de la necesidad de revisar los contenidos y la metodología de enseñanza de diferentes materias, entre otras, de Derecho Penal I, sobre la que propondré una reforma. Asimismo, esta Comisión evaluará la posibilidad de revisar la justificación de incorporación de nuevas disciplinas.

Por otra parte, la Comisión de diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho trabajará en la necesidad de incluir nuevas disciplinas, como ser y entre otras, la Criminología.

En relación a la Criminología, propondré una posible incorporación.

II. PROPUESTAS:

Las siguientes propuestas, solo tienen por finalidad señalar posibles lineamientos generales en relación a futuras modificaciones de la carrera de Abogacía. Por ello, este esbozo, es solo una aproximación a los temas y no un análisis pormenorizado de los mismos. Tal profundización, deberá realizarse una vez aceptados éstos lineamientos.

Si dividimos las ramas del Derecho que se abocan al estudio de la acción humana de interés penal, podemos enumerar:

1) Derecho Penal Parte General: explica, entre otras cosas, cómo analizar una conducta dogmáticamente.
2) Derecho Penal Parte Especial: explica los elementos que exige cada tipo penal en particular.
3) Derecho Procesal Penal: explica, entre otras cosas, cómo investigar una conducta pasada, cómo imputársela a su autor y cómo producir contra el mismo el posterior juicio.
4) Investigación Criminal: da las herramientas para acreditar un hecho pasado. En ella se ubican la Criminalística, la Medicina Legal y la Criminología (ésta última estudia la causa de la conducta desviada y los modos de prevenirla). Parte de la Criminología servirá para la Investigación Criminal y parte para la Política Criminal.
5) Política Criminal: Analiza los métodos de prevenir el delito que estudia la criminología y tomas los que más le convenga para aplicarlas a una sociedad determinada.

Luego de la somera división realizada, puede determinarse que el punto 1 esta cubierto por la materia Derecho Penal I; el punto 2 por la materia Derecho Penal II; el punto III por la materia Derecho Procesal I; y los dos puntos siguientes no poseen aún enseñanza en materia alguna. Solo se ve algo de Criminología en Derecho Penal I.

Con esta pequeña introducción, es que haré dos propuestas.

A) REFORMA DE DERECHO PENAL I: Si se observa el programa de estudio existente de Derecho Penal I, sea de la Cátedra I o II, el mismo posee, a grandes rasgos, el siguiente esquema.

Bolilla 1: Criminología.
Bolilla 2: Historia del Derecho Penal
Bolilla 3: Ciencia del Derecho Penal.
Bolilla 4: Fuentes del Derecho Penal
Bolilla 5: Reglas de aplicación del Derecho Penal
Bolilla 6, 7, 8, 9 y 10: Teoría de la Pena y de la Medida de Seguridad
Bolilla 11: Hecho punible
Bolilla 12: Tipicidad
Bolilla 13: Acción
Bolilla 14: Antijuricidad
Bolilla 15: Imputabilidad
Bolilla 16: Culpabilidad
Bolilla 17: Autoría, Participación y Tentativa
Bolilla 18: Concursos

Bolilla 19: Criminología

La primera propuesta es introducir en el programa la corriente penal aplicable en la actualidad. Ella es la corriente Finalista. Si bien en algunas partes del programa se menciona, el mismo tiene un esquema con base en la corriente Causalista con algunos breves comentarios a la corriente Finalista.

La propuesta es que el programa tenga una base Finalista con breves comentarios a la ya abandonada (doctrinaria y jurisprudencialmente) corriente Causalista y con comentarios a posturas que asoman como innovadoras y pasibles de ser adoptadas en un tiempo no muy lejano. Por ejemplo la corriente Funcionalista. Asimismo, la base Finalista deberá estar acompañada por las actuales Teorías de Imputación Objetiva.

Así, los cambios deberán impactar, en su mayoría, en las bolillas 11 a 17, las cuales comprenden el estudio de la Teoría del Delito.

Sólo a manera de ejemplo (pues ya mencioné que el esbozo es solo general, y una vez aceptado el mismo deben analizarse los puntos a incorporar de forma minuciosa) en las siguientes bolillas deberán tratarse:

Bolilla 11: La doctrina Finalista no habla de faz positiva y negativa del hecho punible y se considera a la teoría del delito como bipartita, dado a que se divide en injusto penal y culpabilidad.

Bolilla 12: Debe agregarse aquí el análisis de la tipicidad subjetiva (y no solo de la tipicidad objetiva), donde se ubican el dolo y la culpa. Aquí debe analizarse el error de tipo. Ya no se habla de error de hecho ni de derecho. También debe agregarse la imputación objetiva de comportamiento y es aquí donde debe analizarse la relación de causalidad y la imputación objetiva de resultado (no en la acción como surge del programa).

Bolilla 13: Acción. Hoy se habla de acción final.

Bolilla 14: Antijuricidad. Hoy se habla de conocer los elementos objetivos de de la causa de justificación.

Bolilla 15: Imputabilidad. Esta se considera dentro de la culpabilidad.

Bolilla 16: Culpabilidad. La misma se divide en imputabilidad, posibilidad de conocer la antijuricidad del acto y exigibilidad de otra conducta. Ya no se analiza aquí el dolo y la culpa. Aquí se analiza también el error de prohibición.

Bolilla 17: Autoría, Participación y Tentativa. Si bien se enseña bajo la teoría del dominio del hecho, hoy también se estudia bajo la teoría de las competencias por organización y competencia institucional.

Estos puntos, son solo ejemplos de las cuestiones que deben modificarse si se toma la decisión de adaptar el programa de estudio a la Teoría actualmente dominante en Argentina.

Respecto a las bolillas 1 a 10 y 18 y 19, si bien algunas podrían sufrir modificaciones de menor cuantía, tanto la 1 como la 19 pueden perfectamente ser incorporadas en otra materia, tal como se ve en el punto siguiente.

B) INCORPORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL: Ya sea porque la Comisión de Derecho Público contemple la posibilidad de incorporar el estudio de la Criminología como nueva disciplina o lo haga la Comisión de Diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho, tal como lo estipula la Resolución del Honorable Consejo Directivo, entiendo que el estudio de la criminología, por si sola, no alcanza para dar al alumno las bases mínimas que mañana necesitara en su rol de abogado en la práctica penal, sea estando dentro del Poder Judicial o fuera.

Estas cuestiones, que antes podían ser consideradas de posgrado, hoy necesitan ser inevitablemente consideradas de grado por su habitualidad. O por lo menos, como seminario alternativo.

La Criminología, por si sola, me dirá la causa por la cual una persona realiza una conducta ilícita y el modo de prevenirla. Ello, es lo que se ve en las bolillas 1 y 19 del programa de Derecho Penal I. O por lo menos la evolución de Criminología.

Si bien comparto la necesidad de apartarla del programa de Derecho Penal I, entiendo que la misma no fundamenta una materia aparte. Sí lo sería, si se encontrara inmersa en una materia que podríamos llamar Investigación Criminal, en la cual se podría estudiar la Criminalística, la Medicina Legal y la Criminología de forma conjunta.

La Criminalística, ayudaría al abogado, sea estando dentro del Poder Judicial o fuera del mismo, a saber qué herramientas existen para acreditar un hecho pasado, cómo deben utilizarse tales herramientas, ante qué hechos son viables, etc. Por su parte, y a modo de ejemplo, pueden enumerarse como ramas de la Criminalística: la Balística Forense, Papiloscopía, Análisis de Rastros, Fotografía, Mecánica, Accidentología, Documentología, Química, etc.

La Medicina Legal, enseñará que es la Tanatología Forense, el ADN, Toxicología, Manchas Biológicas, Histopatológicas, Psiquiatría Forense, etc.

La Criminología, nos dirá cuales son las causas por las cuales una persona comete un delito y los medios para combatirlas. A su vez, otro aporte de la Criminología a la Investigación Criminal es describir los posibles perfiles criminales existentes.

Como se observa, generar una materia sólo con la Criminología, en donde en su mayoría se estudian las Escuelas Criminológicas Clásicas, Positivas, Eclécticas, etc. sin otro contenido que ese, es a mi entender, perder la posibilidad de ampliar la currícula para el estudiante de abogacía que no muchas veces se da.

De ésta manera, la UNLP estaría contemplando a nivel de grado casi la totalidad de las ramas del Derecho Penal, dejando solo de lado la Política Criminal, materia que considero netamente de posgrado.

III. RESUMEN: En resumen, es mi opinión que debe modificarse el programa de Derecho Penal I incorporando al mismo la corriente Finalista adoptada actualmente en Argentina y debe incorporarse una nueva materia, que no solo contenga la Criminología, sino también la Criminalística y la Medicina Legal.

Espero que estas líneas sirvan de aporte para enriquecer el programa de estudios de la carrera de Abogacía de mi querida U.N.L.P, la cual ha sabido darme tanto sin pedirme nada a cambio.

Saludo muy atentamente, y a disposición de las autoridades,

Ricardo Dipascual.

8) (PROYECTO 20) Reflexiones y aportes para la reforma del plan de estudios vinculados a la disciplina del Derecho Penal por Ramiro Pérez Duhalde Profesor Titula de Derecho Penal I.-

LA PLATA, 25 de agosto de 2011

Señores Miembros de la Comisión de "Derecho Público"
del Programa de Estudio y Análisis para la Reforma del Plan de Estudios
S/D

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Vds. respondiendo a vuestra cordial invitación a dar mi opinión acerca de eventuales reformas al Plan de Estudios y correlatividades de nuestra carrera de Abogacía.

En primer lugar, suscribo íntegramente la presentación hecha por el Instituto de Derecho Penal dirigido por el Dr. Ernesto E. Domenech, sin perjuicio de lo cual he de formular algunas consideraciones adicionales.

En relación a las correlatividades, parece imprescindible establecerla en forma inmediata con relación a Derecho Constitucional. Es creciente el uso del control de constitucionalidad judicial en nuestra especialidad, a lo que se agrega que los conocimientos básicos que deberían traer los alumnos de sus etapas previas de la educación, son harto insuficientes para abordar las cuestiones que se plantean en el estudio de la asignatura a nuestro cargo.

La ubicación de la materia en el Plan, con la salvedad de la correlatividad, parece adecuada.

La enseñanza práctica sigue siendo una dificultad que no se suple con trabajos prácticos, aunque sin duda estos son esenciales para la cabal comprensión del uso de las herramientas teóricas. Entiendo que ello será posible en forma con la incorporación de pasantes en diversas áreas públicas y privadas. Pero su implementación debería ser objeto de un tratamiento separado del presente por las evidentes dificultades que plantea: que las pasantías no se transformen en una forma ilegal de empleo, que efectivamente sirvan para el acrecentamiento de la formación profesional y que sea accesible a todos. A su turno, si ello se hace parte de las exigencias para la obtención de título habilitante, no solo se alargaría uno o dos años más la carrera, sino que tal poder de habilitación comenzaría a estar -parcialmente- fuera de la Universidad.

En lo tocante a nuevas materias relacionadas con el Derecho Penal, considero apropiada la sugerencia hecha en el informe del Instituto correspondiente: Criminología, Criminalística y Derechos Humanos parecen adecuadas.

Creo que deberían ser optativas para no incrementar una ya importante cantidad de materias que se exigen, y de modo de ir permitiendo la especialización dentro del grado y un mayor márgen de libertad a los alumnos.

Por lo demás, debería contemplarse no solo la formación interdisciplinaria de las cátedras en esas materias, sino la posibilidad -que considero aún mejor- de ser cursadas en otras unidades académicas de nuestra Universidad, particularmente en las Licenciaturas en Sociología o en Psicología para la primera de ellas.

En el caso de Derechos Humanos, de crearse una nueva materia, debe recordarse que todas las asignaturas de la carrera por resolución del H. Consejo Académico del año 1985 deben incorporar contenidos de los mismos en lo que les incumbe. Con lo que alguna eventual superposición sería inevitable (y por cierto, deseable).

Salúdoles con toda consideración.

Abog. Ramiro PEREZ DUHALDE
Prof. Tit. Derecho Penal I Cat.1
FCJS - UNLP

9) (PROYECTO 21) Propuesta acerca de la ubicación de la materia en el plan de estudios; así como la descripción y análisis de los contenidos de la materia en la formación del abogado por Eduardo Fernández Profesor Titular interino de Derecho Procesal II.-

La Plata, 19 de agosto de 2011.-
A los Señores Miembros de la
Comisión de Derecho Público
Su despacho.

En mi carácter de Profesor Titular (Interino) de la Cátedra I de la asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Nacional de La Plata, me dirijo a Uds. con la finalidad de elevar una propuesta –tal se me solicitara mediante nota de fecha 9 de agosto del corriente año-, fundada en una breve explicación de la materia, la contribución de la misma en la formación del abogado, la problemática de la ubicación en el Plan de Estudios y los ejes o núcleos centrales sobre los que gira el desarrollo de su enseñanza, para ser analizada en el marco de la reunión a llevarse a cabo el día 8 de setiembre en la Sala del Consejo Directivo.

A) Fundamentación.
I.- Breve explicación de las características de la materia.
a.- La problemática del estudio del Derecho en general.

Es dable poner de resalto que los alumnos que pretenden ingresar a las facultades de derecho, están –a diferencia de quienes desean entrar en otras casas de altos estudios para abordar disciplinas no jurídicas- en inferiores condiciones, dado que como lo puso de resalto hace muchos años Calamandrei ("La Universidad de mañana", EJEA, pág. 16) nuestra disciplina se enseña muy poco en los ciclos primarios y secundarios, ya que apenas se dictan lecciones elementales de Derecho Constitucional (es decir, Instrucción Cívica o Formación Cívica o Educación Democrática, según las diversas denominaciones que tuvo esta materia); y de Derecho Comercial y Derecho Laboral, en ciertos Liceos especializados.

La Facultad de Ciencias Jurídicas se encuentra pues, frente a sus estudiantes, en condiciones asaz diferentes a otras unidades académicas, por ejemplo de Letras o de Química, donde los educandos llegan con

nociones literarias y científicas debidamente aquilatadas, en la especialidad escogida, por su preparación secundaria.

Empero, los matriculados en Derecho son casi “analfabetos absolutos” –para utilizar la lexicografía del citado autor italiano- ya que ignoran el lenguaje técnico; y esto les produce un efecto tan chocante, como si comenzaran a aprender una lengua extranjera, que según su entender es sólo inteligible para los especialistas.

¿Cuántos estudiantes de primer año se alejan ya hartos, tras oír con aire ausente las primeras clases sin haber comprendido nada de lo escuchado?

De lo antedicho se puede colegir –desde la perspectiva de las Facultades que enseñan las ciencias jurídicas- que éstas utilizan –inconscientemente o no- el método de Berlitz: desde el comienzo el profesor habla en su jerga, como si el auditorio fuera sordo, sordo intelectual diríamos- pues las frases en latín o la lexicografía técnica resultan verdaderos jeroglíficos para los estudiantes, que llegan “ayunos” de conocimiento en tales especialidades, conforme ya se expresó.

Por ello y para evitar tales errores, lo primero que debe buscarse, en cuanto a la metodología de la enseñanza, es que ab initio las lecciones sean aprovechadas por sus destinatarios. Y para lograr esta plataforma previa, no es aconsejable incorporar materias jurídicas al largo catálogo habido en las escuelas de segundo ciclo, ya que el problema debe ser resuelto por la Universidad y para ello hay que dejar a la vera el llamado Método Catedrático.

El aludido sistema torna tediosa la clase y hace que el estudiante vaya lo menos posible a ellas, no porque no le guste la ciencia por él elegida, sino por comprender poco lo que allí se habla, algo así como si a cualquiera de nosotros nos obligaran a oír una conferencia en una lengua que no conocemos ni hablamos. Para evitar estos dislates, es conveniente utilizar, sobre todo en las materias codificadas, un método teórico práctico, donde el educando perciba los fenómenos jurídicos, no sólo desde su perspectiva estática, sino también desde el ángulo dinámico. En otras palabras, hay que conocer paralela e interdisciplinariamente, la “anatomía” y la fisiología” de la asignatura a abordar, cuidando siempre –eso sí- de no pecar de excesivo cientificismo, ni de gran pragmatismo. En suma, proponemos abandonar el método catedrático e imponer la enseñanza de las ciencias jurídicas con un criterio finalista, balanceando debidamente la teoría y la práctica.

b.- Estudio del Derecho Procesal Civil y Comercial.

La asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial –el cual demarca el continente del presente trabajo- tiene como nota sobresaliente la puesta en conocimiento al alumno sobre los distintos conceptos de las innumerables figuras procesales y su interrelación a lo largo de la totalidad del proceso judicial, que se inicia, generalmente, con la demanda y concluye, comúnmente, con la sentencia, sin perjuicio de alertar sobre las distintas y eventuales variantes que se suceden en el pleito, tales como la petición de diligencias previas, del beneficio de litigar sin gastos, de las medidas cautelares, de los modos anormales de terminación de la litis, de la faceta recursoria, etc., acompañado ello con la explicación práctica sobre los matices descriptos.

En definitiva, trata el estudio de una rama autónoma de la ciencia jurídica y de carácter público que versa sobre las normas formales, dictadas por el legislador, enderezadas a enmarcar el cauce mediante el cual debe desarrollarse el proceso civil y comercial, siendo estas pautas rectoras tanto para el órgano decisor (juez) como para los litigantes (partes), contemplando distintas sanciones procesales para el supuesto de incumplimiento a su regulación (vgr. nulidades, multas, etc.).

A más de ello, se aborda el estudio y la problemática de una novedosa temática: el derecho procesal trasnacional y los procedimientos a seguir ante los órganos extranacionales.

Este fenómeno concluyó con la aparición de esta nueva disciplina que enmarca la tramitación internacional y que controla elípticamente el proceso local, de la que como dice Gros Espiell- poco se ha escrito, y que es necesario abordar en forma autónoma, sin dejar de reiterar que ella no se diferencia esencialmente de su rama madre, el derecho procesal, dado que se apontoca en los mismos principios, aunque, por supuesto, con algunas variantes.

Esta rama del derecho adjetivo no recibe una denominación única, ya que algunos autores hablan de "derecho procesal internacional", mientras que otros la denominan "derecho procesal relativo a los derechos humanos”, y no pocos -entre los que nos incluimos- derecho procesal supranacional atinente a los derechos humanos.

Lo cierto es que, como con toda agudeza remarca Alcalá Zamora y Castillo, el hecho de que se hayan puesto en funcionamiento tribunales internacionales no autoriza a pensar que los preceptos que lo regulan tengan una esencia distinta de los que se ocupan del rito local; por ende esta parcela -dice- no debe tener una total autonomía, como tampoco -por ejemplo- la jurisdicción militar. Además los derechos que custodia tal sistema -añade-, son los mismos que abarca cualquier juicio doméstico. En todo caso la autonomía -acota este autor- estaría dada porque opera fuera de las fronteras nacionales.

Con las salvedades apuntadas, hay que reiterar que si bien pertenece a la rama única, el derecho procesal, en el ámbito internacional se notan ciertas particularidades -tal cual lo ha dicho la Corte Interamericana-, por desarrollarse ante un órgano supranacional y por ocuparse de los derechos humanos regulados en los tratados.

Asimismo se ahonda sobre la naturaleza del rito analizado, es decir, si es inquisitivo o dispositivo. Nosotros consideramos que es "dispositivo", pues su puesta en marcha ante la Corte, como el ofrecimiento de las pruebas, dependen de los países y de la Comisión, pese a que el denunciante y la víctima ahora tienen la posibilidad de proponer ciertas probanzas, aunque obviamente el tribunal actúa como "juez director" con amplios poderes-deberes y siempre con una télesis tuitiva del hombre. Como es sabido, los particulares por ahora no tienen legitimación activa para llegar a la Corte, aunque los últimos reglamentos, en especial el que actualmente rige, le ha dado a la víctima una participación muy activa y amplia ante el Tribunal del Pacto de San José.

Dicho cuerpo jurisdiccional ha dejado en claro que tal proceso no es de esencia penal, dado que no tiene por objeto imponer penas a los culpables de las violaciones, sino que tiende a amparar a las víctimas y a disponer la reparación de los daños.

A su vez, esta materia cuenta con un curso obligatorio de prácticas procesales, tanto para los alumnos que cursan la misma como para aquellos que la rinden en condición de libre. En el primer supuesto, en forma paralela con la teoría, y en el segundo, mediante un curso semestral, una vez aprobado el examen final.

II.- Contribución de la materia en la formación del Abogado.

En cuanto a la formación del abogado, esta rama del derecho público se constituye en el eje central del futuro profesional litigante, a quien se lo somete no sólo al estudio del articulado previsto en el ordenamiento adjetivo local, el cual permite conocer el desarrollo del proceso judicial civil y comercial sino, además, a la explicación de otros aspectos que abarcan las incumbencias de la profesión abogadil, tales como la defensa de los derechos humanos a través de normas y tribunales internacionales que regulan la actividad extranacional, como otras.

Tal como lo recuerda el doctor de Lázzari en uno de sus tantos votos al maestro Morello, se enseña –esencialmente- el sistema del debido proceso, materializado en la cooperación que deben desplegar las partes, los mismos profesionales que las asistan o terceros vinculados, lo que ha de garantizar una más auténtica manera de convivencia litigiosa, que asegure no en las formas ni de manera abstracta sino realmente, la satisfacción de las exigencias de la comunidad participante en la controversia. El proceso ha de acomodarse a la realidad social, fundamentalmente para valorar si su régimen es adecuado a los fines que debe alcanzar, configurando los elementos apropiados para un ajuste más perfecto entre norma y realidad social. Todo ello en el marco del irrestricto acceso a la justicia garantizado por el art. 15 de la Constitución de la Provincia, que no constituye simple enunciado sino, antes bien, derecho fundamental que ha de poder ejercerse de manera real cuando así se lo demande (conf. A. 68.436, resol. del 28-V-2008).

Asimismo, se pone especial énfasis en distintas actividades a desarrollar por el futuro abogado: a) patrocinio y representación en actuaciones judiciales y administrativas; b) asesoramiento en asuntos que requieren opinión jurídica con sentido crítico; c) desempeño en la Magistratura y otras funciones judiciales; d) intervención en actividades propias de la administración pública y/o privada; e) manejo de conocimientos de técnica y política legislativas; f) ocupación de cargos de gobierno del Estado; g) capacitación para realizar trabajos de investigación y transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse en cátedras universitarias; h) conocimiento acabado de la problemática jurídica regional e interregional; i) estudio de las incumbencias que le corresponden como egresado de nuestra facultad y j) entrenamientos específicos y apropiados para el desempeño de la profesión. Se prepara, en consecuencia, al abogado litigante, consultor, negociador, magistrado, funcionario e investigador.

De ello se sigue que la tarea docente enriquece al estudiante tanto en el aspecto formal-profesional, enseñanza propiamente dicha del derecho procesal, como en su desempeño personal, cometido que se cumple mediante la instrucción sobre las pautas de comportamiento como colegiado. Este objetivo, se compadece y armoniza con los valores que involucran a la sociedad toda. La persona libre, responsable, que se hace a sí misma y puede crecer como profesional, porque vive en una sociedad que ofrece igualdad de posibilidades a sus miembros, es una creencia hondamente arraigada y trasmitida como tal en los diferentes niveles de enseñanza formal e informal, más allá de que esos valores tengan efectiva vigencia social. Como se advierte, existe en estos objetivos, una ideología de base incuestionable, que constituye, a la vez, un punto de partida dogmático.

Esa pedagogía pone el acento en alcanzar la meta buscada: la excelencia profesional, que puede concluir con el éxito del abogado en su desempeño. Es altamente realista y trata de no perderse en declamaciones. Cabría, desde luego, interrogarse acerca de si el éxito económico, social o profesional es el único o el más importante a lograr; qué ocurre con los que quedan en el camino, o qué respuestas tiene la misma sociedad para los menos capacitados; de qué modo influyen en las personas y en la sociedad, las tensiones individuales que genera una constante y creciente competencia; si, en fin, los objetivos que parecen compartir sociedad y universidad contemplan las otras necesidades personales.

Estas preguntas reñidas muchas veces con lo moral y con respuestas bivalentes en algunos casos, encuentran, también, respuesta docente en nuestra asignatura.

III.- El problema de la ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios.

En el plan educacional vigente, se ubica dentro del cuatro año del estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales, siendo sus correlativas previas: Introducción al Derecho, Derecho Romano, Derecho Político, Derecho Constitucional, Derecho Civil I, Derecho Penal I y II y Derecho Procesal Penal (Procesal I) y las posteriores resultan las restantes asignaturas que completan la carrera.

Se encuentra íntimamente vinculada con la totalidad del ordenamiento jurídico constitucional y fondal, puesto que el procedimiento civil y comercial es la única herramienta mediante la cual los justiciables pueden hacer valer sus derechos constitucionalmente reconocidos, abogados mediante.

De ello resulta que sería ideal el conocimiento previo, por parte del alumno, de todas las asignaturas del derecho, problema que se supera con las explicaciones y aclaraciones necesarias efectuadas por los docentes de esta materia. Circunstancia que, reiteradamente, ha sido puesta de resalto por la cátedra, quien ha solicitado el replanteo y revisión del sistema de correlatividad y de ubicación de nuestra asignatura en el último año de la carrera de derecho.

IV.- Explicación de los ejes o núcleos centrales sobre los que gira el desarrollo de la asignatura.

Como ha quedado expuesto, el derecho procesal civil y comercial gira en derredor del ordenamiento adjetivo previsto por el código respectivo, abordándose mediante el estudio de casos y del conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial la solución de cierta categoría de conflictos jurídicos, suscitados entre dos o más personas, sean estas físicas y/o ideales o cuando se requiere la intervención judicial para que se constituya, integre o acuerde eficacia a determinada relación o situación jurídica.

Además del método de casos (denominado también análisis o estudio de casos jurisprudenciales), como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard, aproximadamente en 1914, con el fin de que los estudiantes de Derecho, en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc., también se aplica el método socrático (o método de Elenchus o debate socrático) está basado en la dialéctica o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. Éste fue aplicado ampliamente para el examen de los conceptos morales claves. Fue descrito por Platón en los diálogos socráticos. Por esto, Sócrates es habitualmente reconocido como el padre de la ética occidental o filosofía moral. Es una forma de búsqueda de verdad filosofal. Es, en síntesis, el planteo de la duda para llegar a la verdad, para examinarse textos legales, doctrina jurídica y conflictos concretos.

Sin perjuicio de lo dicho, es de aconsejar, para evitar inconvenientes en el aprendizaje de las materias codificadas, que debe utilizarse un método teórico-práctico donde el educando perciba los fenómenos jurídicos, no sólo desde su perspectiva estática, sino también desde el ángulo dinámico.

En cuanto a la orientación científica de esta especialidad, aparece la "Escuela Sistemática". Esto es lo que se denomina educación formal. Hay legislación, reglas, normativas y lugares específicos con personal especializado y proyectos para hacer esa transmisión del Conocimiento y la Educación. Que el hombre recibe en la escuela, en base a una currícula, horarios, etapas progresivas con conocimientos seleccionados para cada etapa y personal capacitado para este fin. Creada por Chiovenda, sin perder de vista los modernos métodos comparativos del Prof. Mauro Cappelletti (micro y macro comparación).

No debemos olvidar que la vieja escuela Italiana, creada por Mattirolo Lessona, se caracterizó por la sobredimensión de los "prácticos". Empero Mortara significó la superación de la Escuela Exegética, de origen francés. Esta bandera fue tomada por Chiovenda, quien sobre la base de sus experiencias en Alemania, fundó la todavía vigente "Escuela Sistemática" apontocada en el estudio de la Historia y el Derecho Comparado. Este autor reordenó la ciencia procesal, sobre dos piedras basales a saber: 1) el concepto de acción; y 2) paralelamente el concepto de "relación procesal". Sobre esta estructura apoyó los conceptos dinámicos de "oralidad" y "concentración".

La concepción Chiovendiana de la acción como un derecho potestativo, significó sin dudas un adelanto en esta disciplina, que quedó así definitivamente moldeada. Calamandrei siguió estas pautas, buscando siempre el principio de legalidad como defensa contra los regímenes autoritarios –criterio ratificado por Mauro Cappelletti en los últimos años. En suma, en cuanto a la orientación científica, tal como dijéramos, participo de la "Escuela Sistemática", que fue capitaneada por Chiovenda y seguida por Calamandrei y Redenti, la que fue completada con el comparatismo de Cappelletti.

Nuestra materia incluye dentro de su estudio: a) la jurisdicción y la competencia de los órganos judiciales; b) el régimen jurídico de las partes y de sus representantes tanto en el proceso contencioso como voluntario y c) los requisitos, contenidos y efectos de los actos y trámite del proceso a través de los distintos procedimientos que lo integran.

Se utiliza, como se dijo, el método de casos y clases participativas, con el análisis de material de jurisprudencia con lectura previa a la clase con la suficiente exigencia que requiere el aprendizaje de la materia.

La enseñanza de nuestra asignatura tiene estas directrices programáticas, resulta:

Interactiva: de interactivo, que procede por interacción, entre profesor y alumnos. Con mensaje docente bidireccional, un "Feed-Back", donde todo mensaje tenga retorno que alimente el nuevo mensaje. Requiere disposición, tolerancia y mucha práctica. Se debe ir preparando al alumno con la adquisición por parte de éste de conocimientos predisponentes y multiplicadores de la materia.

Personal: relativo a la persona-alumno, particular de ella. Contrario a impersonal. El educando y sus capacidades. Se aprende en la individualidad donde el grupo representa la ocasión y modalidad de trabajo.

Autónoma-empática: El conocimiento es propio del alumno y producido por el alumno, participando afectiva y emotivamente de situaciones aprendizajes ajenas.

Idiosincrásica: el alumno aprende desde sus lugares y vivencias. Inmerso en su medio cultural. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas en su grupo ... Cómo se vienen resolviendo... Qué factores nuevos influyen?

Crítica: Un aprendizaje pensante, producto del análisis y la reflexión.

Para lograr el cumplimiento de dichas pautas, se programan: actividades teórico-prácticas con asistencia obligatoria; conferencias a cargo del profesor titular y/o expertos invitados por la cátedra; ejercicios individuales y de grupo; discusiones y participación activa durante el semestre.

En conclusión, se le inculca al alumno a través de ello que las normas que regulan el proceso (i) carecen de un fin en sí mismas; (ii) permiten elaborar estrategias a lo largo del proceso; y (iii) constituyen sólo un medio para lograr la realización de los intereses tutelados por las normas sustanciales, tal como lo han puesto de relieve tantas veces la Corte Suprema nacional como la provincial y los diversos autores.

B) Evaluación.

El criterio general de evaluación varía, naturalmente, en el caso de resultar alumno libre sometido a la mesa examinadora (sea sorteo de bolillas o con "tema especial") con aquel que efectúa la cursada semestral.

En el primer supuesto, a tenor del programa mosaico (comprensivo de disímiles tópicos sobre la materia), se atiende al lenguaje técnico-procesal, al razonamiento jurídico-procesal y al dominio que demuestra sobre los temas que desarrolla. En cambio, el estudiante de cursada resulta sometido a exámenes parciales escritos mensuales y pruebas orales diarias.

En uno y otro caso, la aprobación de la asignatura se logra mediante la acreditación del conocimiento básico conceptual de las distintas figuras que componen nuestra amplia materia, la que se cumple mediante el estudio de casos y citas autorales y su interrelación.

Entendemos por evaluación al acto de verificación en el alumno de la capacidad para mantener un diálogo sobre contenidos de la materia como si fuese igual que el maestro iniciado en ella. Necesitamos conocer al alumno en sus comportamientos cognoscitivos, afectivos y motóricos de comprensión en situaciones previstas y no previstas en el aula para los cursantes y en la mesa examinadora para los libres. El resultado que decide su promoción o aprobación constituye una síntesis de desenvolvimiento de operador jurídico.

En lo que atañe a la calificación definitiva, éste es simplemente el último eslabón para llegar a la nota final, proceso que comienza, para los cursantes, con la participación del alumno en clase, y prosigue con el cumplimiento de los trabajos y actividades dados durante el curso. En definitiva, el seguimiento del esfuerzo realizado y de los conocimientos demostrados en las evaluaciones, lo más constante posible -dentro de las dificultades que ofrece el gran número de estudiantes-.

El educando libre debe sentir que no se trata de sortear un escollo más, sino que debe acreditar las nociones incorporadas a través de su estudio independiente y la aptitud de razonar con sustento en ellas. Internalizar esta concepción, lleva a restar -aunque no disipar totalmente- una buena dosis de dramatismo, sensación que se percibe en los estudiantes al disponerse a rendir su evaluación final.

C) Propuesta.

En atención al contenido, extensión, importancia práctica y no menos complejidad que presenta el estudio de la asignatura denominada Derecho Procesal Civil y Comercial, se propicia que:
1.- Se lleve a cabo su enseñanza mediante una relación personalizada, con alto nivel de interacción entre profesor-alumno para atender al pensamiento crítico de este último, acercándolo a la realidad social que enfrentará al ejercer la profesión;
2.- Se desenvuelva a la luz de los métodos sistemático y teórico-práctico, con el agregado de estrategias procesales para ser actuadas en momentos puntuales del proceso, como por ejemplo a la hora de confeccionar una demanda; al contestarla; al proponer los puntos de pericia; al momento de articular algún medio de impugnación; etc.;
3.- Se complemente lo expuesto con las bondades que contiene el método de casos, el cual podrá ser utilizado luego de la adquisición de los conocimientos necesarios y básicos que sirvan para comprender las pautas que el educando fije con la finalidad de brindar soluciones y/o respuestas técnicas a las temáticas que pretendan abordarse; y
4.- Se posicione como última materia en el Plan de Estudios de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, para asegurar -de ese modo- el correcto y completo aprendizaje del estudiante de esta rama esencial y vital, que sirve como herramienta de la realización del derecho sustancial.

Abog. Eduardo Abel Fernández.
Profesor Titular (Int.) de la Cátedra I de Derecho Procesal Civil y Comercial de la U.N.L.P.
Correo: eafernandez@scba.gov.ar

10) (PROYECTO 22) Reflexiones acerca de la ubicación de las materias procesales en el plan de estudios y la enseñanza aprendizaje, como la evaluación por Roberto Berizonce Director del Instituto de Derecho Procesal.-

La Plata, 29 de agosto de 2011

Sres. miembros de la Comisión de “Derecho Público” del programa de
estudio y análisis para la Reforma del Plan de Estudios:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en respuesta a la invitación cursada por nota del 9 del corriente, a afectos de adelantar algunas ideas que, a título personal, me parecen útiles como contribución al debate abierto sobre Reforma del Plan de Estudios de la Facultad.

1. Plan de estudios y perfil de los graduados:

El plan de estudios debe vincularse directamente con el perfil del graduado, lo que significa que primero debe estarse en claro acerca de qué tipo de egresado se busca, para adecuar luego a esa premisa los contenidos del plan de estudios y, en correlato, los métodos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, sus modalidades (cursos de promoción, estudios libres), el régimen de la docencia (capacitación, actualización) y demás aspectos vinculados.

2. Las asignaturas de Derecho Procesal dentro del Plan de Estudios.

La tradicional división entre Derecho Procesal I y II, y sus contenidos, refleja una visión pragmática que adosa el estudio de la teoría general del proceso al primero de los cursos. Se ha cuestionado ese ensamble, proponiéndose –Mercader, Morello- la conformación como una asignatura propedéutica introductoria, de la Teoría general del proceso. Debería analizarse nuevamente esa idea, y especialmente sus contenidos, que bien podría albergar las modernas visiones desde la perspectiva de las tendencias constitucional, social y transnacional, que podrían conformar una teoría general de la jurisdicción, la acción y el proceso actualizada a partir de los fenómenos y tendencias que predominan en, cuanto menos, las dos últimas décadas.

El régimen de correlatividades podría contemplar su inserción escalonada en segundo (Teoría General del Proceso), tercero (Derecho Procesal I) y cuarto año (Derecho Procesal II) del plan de estudios de la carrera de Abogacía.

3. Métodos de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Para las cátedras de Derecho Procesal I y II se adoptó ya a fines de la década de los años ´70, el régimen de enseñanza paralela teórico y práctico -en cursos de promoción por concepto-, que ha demostrado ser el más adecuado y eficiente, más allá de los necesarios ajustes que siempre requiere. En cuanto al régimen de estudios libres, ha evidenciado el inconveniente notorio de la fragmentación de la enseñanza en contenidos y tiempos, con el agregado de los condicionantes y falencias propias de los tradicionales cursos de Adaptación Profesional. Las propuestas a debatir, en este punto, serían la de incrementar los cursos de promoción teórico-prácticos y generar mayores estímulos para los estudiantes, y, al mismo tiempo, perfeccionar el régimen de estudios libres con mayor apoyo en instrumentos de enseñanza virtual, tutores, etc..

Claro que, como condición, se requiere incrementar el plantel docente para el dictado de clases teóricas y prácticas, perfeccionar su capacitación y actualización.

4. Enseñanza práctica, en particular.

Suele caerse en error de atribuir las notorias y recurrentes falencias de formación y adiestramiento de los graduados exclusivamente a la defección de la enseñanza práctica del Derecho Procesal. En verdad, ese es tan solo un aspecto de una cuestión que es mucho más compleja.

Ha de convenirse que la formación práctica debe acompañar inescindiblemente a la capacitación teórica, en todas y cada una de las asignaturas de la carrera (con la sola excepción de algunas de ellas). Precisamente para cumplir esa función se designan los Jefes de Trabajos Prácticos (y aún, los Auxiliares Docentes) para todas las cátedras.

Las prácticas procesales; principalmente las de Derecho Procesal II, pueden mejorarse si los estudiantes llegan a los cursos con conocimientos prácticos que deben brindarse en las asignaturas previas, p.e., de Derecho Civil, Comercial, Laboral, etc.. Los ejemplos son múltiples: ¿cómo enseñar a redactar una demanda de cumplimiento de contrato, si nunca han visto un contrato? O una demanda de desalojo sin conocer un contrato de alquiler? O la iniciación de una sucesión sin estar familiarizados con partidas, títulos de propiedad, certificados dominiales? Y un largo etcétera.

Tales son algunas de las ideas que proponemos para la más amplia discusión, quedando a disposición de Uds..

Les saludo con la mayor estima.

Dr. Roberto Omar Berizonce
Director
Instituto de Derecho Procesal

11) (PROYECTO 26) Análisis crítico acerca de la reforma del plan de estudios por Sebastián Irazusta.-

Entiendo que desde hace tiempo el plan de estudios esta precisando una seria revisión. Hay muchas cosas que creo se deberían cambiar para ayudar a los estudiantes y graduados que quieran volver, o sigan en la facultad, a afrontar los desafíos del duro campo laboral.

Creo que me encuentro en una buena posición para realizar una crítica constructiva no solo por ser un estudiante comprometido a esta hermosa carrera universitaria que es la de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino además por haber trabajado por más de dos años en un estudio jurídico, en el cual pude aprender y resolver asuntos de índole laboral, civil y administrativa.

Ahora bien, con respecto al plan de estudios creo que el primer tema a resolver y que salta a la vista es el de las correlatividades. Creo que bajo ningún punto de vista los alumnos tendrían que empezar a ver materias codificadas sin antes haber pasado por Derecho Constitucional, ya que según entiendo por lo poco que he aprendido en estos años, que siendo la Constitución Nacional la norma jurídica fundamental de nuestro ordenamiento, todas las demás ramas del derecho, directa o indirectamente remiten a ella. Con la currícula actual un alumno bien podría cursar hasta Derecho Civil V, los dos Derechos Penales y Comercial I sin siquiera saber nada acerca del sistema republicano de gobierno, los contralores, la división de poderes y las atribuciones del 75 Inc. 12 del Congreso Nacional que indican el dictado de los códigos de fondo, por nombrar algunas de las faltas mas graves.

Siguiendo con los temas más generales para luego adentrarme en algunas materias en particular entiendo que se deber ser consciente que a la hora de cuatrimestralizar una materia, estamos corriendo el riesgo de dejar de lado temas importantes de las asignaturas. A decir verdad las materias “cuatrimestrales” entre inicio de clases, entrega de notas y feriados suelen durar algo más de tres meses. Ante la falta obvia de tiempo los profesores por clara necesidad optan por quitarle tiempo de estudio o de explicación a temas aprobados en los programas de las diferentes asignaturas. Resulta obvia la necesidad de no intentar ajustar todas las asignaturas a cuatro meses de cursadas, porque hay materias que simplemente no son para ser estudiadas en tan poco tiempo.

Creo también que el estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales, requiere una carrera de grado que le otorgue al profesional una formación integral para poder desenvolverse con soltura en diferentes campos como ser abogados litigantes, defensores, relacionistas internacionales, diplomáticos, etc. Entiendo que de agregarse algunas materias (quizás optativas) a la currícula se pueda lograr una formación más integral. Entonces de agregarse materias como Derecho Ambiental, Contabilidad, Macroeconómica, Arbitraje, Ciencia Política, Practicas Forenses le estaríamos dando al graduado de la UNLP un espectro y por lo tanto una inserción laboral mucho más amplia. Entiendo que el agregar materias y por lo tanto alargar la duración de la carrera podría acarrear el descontento de cierta parte del alumnado, por lo tanto propongo que sean materias optativas, que luego puedan acreditarse en el analítico final de la Universidad, ya que muchos estudiantes, queremos día a día mejorar profesionalmente y poder generar un cambio positivo en la sociedad gracias a nuestra formación.

Además de las materias que hagan a una formación integral, se deberían agregar materias que involucren mayor tiempo de prácticas. Lo más probable es que un graduado de la carrera salga de la misma sin saber hacer una liquidación laboral, sin impugnar una pericia, sin realizar alegatos de bien probado, sin saber lo que es un testimonio en un juicio de divorcio, etc. La necesidad de materias prácticas salta a la vista en el día a día de Tribunales. Son luego los jueces o los auxiliares o secretarios de Tribunales y Juzgados los que deben enseñarle a los graduados como realizar estas tareas, y está claro que el más perjudicado siempre es el cliente.

Ahora entrando a algunas materias en particular, quisiera empezar por Derecho Social, la cual pude cursar y además ejercer en la práctica. Creo que esta materia por lo menos se debería desdoblar en dos. Por lo extenso de la misma los alumnos pasan un cuatrimestre entero leyendo acerca de cuestiones sindicales, la historia del Derecho Laboral en Argentina y otros temas, y sin de ninguna manera desmerecer a estos temas por demás importantes, se dejan de lado cuestiones sumamente fundamentales como el proceso laboral, el que ocupa una bolilla en Derecho Procesal Civil, y por la envergadura y la extensión de esa materia, nunca se llega a dar. Entiendo por lo tanto que se le deberían sacar este y otros temas a Derecho Procesal Civil que resulta una materia troncal de la carrera y por lo tanto su estudio no debe hacerse pormenorizadamente. Y agregar a Derecho Social una segunda materia para estudiar cuestiones de tipo prácticas fundamentales. En el transcurso de este año se dictó por iniciativa del Colegio de Abogados un curso de Practica Laboral para profesionales, dictado justamente por profesores que se encuentran en la Facultad y que bien podrían hacer lo mismo allí. Cabe decir que la asistencia a dicho curso fue masiva, evidenciando una clara falta de formación por parte de la Carrera de Grado.

Creo además que debemos revalorizar la importancia de Filosofía del Derecho en la carrera de grado. Una asignatura que nos enseña acerca de la importancia y el hábito de cultivar los valores, de estudiar la evolución del pensamiento filosófico occidental, y de analizar todos los basamentos filosóficos y morales del ejercicio profesional no se debe pasar por alto de esa manera. Actualmente por una decisión unilateral la cual resulta contraria al Reglamento de la Facultad una Cátedra de Filosofía del Derecho promociona a sus alumnos luego de una cursada de solo DOS horas semanales en un cuatrimestre. Considero que ese tiempo no alcanza para revisar los temas de una materia tan vasta como Filosofía del Derecho, en donde se enseñan cuestiones de Bioética, Fertilización In Vitro, Eutanasia, etc., todos temas por demás actuales. Los alumnos ante la elección de promocionar una materia por medio de la asistencia a clases de dos horas semanales, o la asistencia de 6 horas semanales como cualquier cursada normal que promueve una de las cátedras, desgraciadamente eligen la salida mas fácil pero la más costosa en el plano de formación intelectual.

En cuanto al primer año de la carrera, creo necesario no solo conservar el ciclo introductorio sino hacerlo intensivo. Se observan dificultades insalvables para los alumnos ingresantes a la hora de empezar a cursar las materias de primer año, porque cuestiones que se consideran básicas como comprensión de textos

y redacción son vallas infranqueables para los alumnos menos favorecidos por una educación secundaria seria. Creo además que a riesgo de generar malestar en muchos estudiantes, se deberían tomar exámenes rigurosos no solo al inicio de la carrera sino al final. En el inicio creo que es importante para desalentar a quienes no tengan real convicción de comenzar a cursar la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y le estén con su presencia en la facultad, quitando la posibilidad de cursar materias a alumnos que realmente vayan a estudiar. Me ocurrió en carne propia que en los primeros años de la carrera me vi obligado a rendir gran cantidad de materias libres, por no haber cupo en las cursadas, que habían sido ocupadas por gente que no solo no se presentaba a cursar, sino que al poco tiempo abandonaba la carrera, ocupando un espacio que podría haber sido aprovechado por gente realmente dedicada al estudio de las diferentes asignaturas. Creo además que un examen final comprendedor de las materias más importantes de la curricula antes de la entrega del título, es necesario no solo para medir el nivel de conocimientos con que egresan los estudiantes, sino además para que los mismos estudiantes debamos por obligación refrescar conceptos de materias como Obligaciones, Derecho Constitucional, y diferentes asignaturas de las que sus conceptos se van perdiendo a través de los años.

Entrando ahora un poco en los programas de estudio de todas las materias de la facultad, entiendo que los mismos se deben revisar en plazos no mayores de 5 años. El derecho como me han enseñado a lo largo de la Carrera, cambia, muta y se transforma por cuestiones de tipo sociales, políticas o económicas. Si queremos estar a la altura de ese acontecer creo que debemos hacer un análisis crítico de los programas de las diferentes materias. Encontramos en los pasillos de la facultad y en las aulas Docentes y Profesionales con gran preparación y un gran amor por sus asignaturas, en donde la frase de cabecera siempre resulta ser “Este programa es viejo”, “Lo que pasa es que hay que actualizarlo”, “Este programa hay que tirarlo a la basura” y cuestiones del estilo, que denotan un alto grado de des-actualización de los temas dados. Por lo tanto la conclusión que rescato es la siguiente, si tenemos en nuestra misma facultad docentes comprometidos y apasionados por sus asignaturas, y si estos mismos docentes son quienes critican los programas que ellos mismos exponen, ¿por qué entonces no hacer una revisión más crítica y periódica de los mismos?

Quisiera finalizar estas humildes propuestas remarcando la importancia que hoy día merece la reforma del plan de estudios, y la encomiable tarea de los directivos, estudiantes y agrupaciones de la Facultad que se han lanzado a esta labor.

Muchas Gracias,

Atte.

Sebastian Irazusta Badi.

12) (PROYECTO 29) Reflexiones acerca del régimen de correlatividad vinculado a Derecho Público Provincial y Municipal por el Dr. Vicente Atela.-

Sres. Miembros de la Comisión de “Derecho Público”:

Atento la invitación cursada a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a efectos de realizar propuestas y proyectos para la reforma del actual plan de estudios de la carrera de procurador, abogado y escribano, me permito hacerles llegar algunas reflexiones acerca de la materia “Derecho Público Provincial y Municipal” de la que soy docente –aproximadamente- desde hace 17 años.-

La materia “Derecho Público Provincial y Municipal” como disciplina, se encuentra incorporada en el plan de estudios de la carrera desde su primer plan de estudios en el año 1906 (primero denominada “Derecho Público Provincial”) y que con la reforma del año 1921 se la conoce con el nombre actual.-

Aún cuando en algunas épocas o períodos se le tiende a restar trascendencia a la disciplina, como si fuera una entidad menor y subsidiaria del derecho constitucional, debe dimensionarse que la misma tiene razón de ser por cuanto la Nación Argentina es un Estado Federal, y siendo nuestra Universidad una institución universitaria del interior argentino, tiene el deber no sólo de enseñar el derecho público provincial como el derecho constitucional de las provincias, sino todo lo vinculado al modelo federal de Estado (distribución de competencias, soberanía y autonomía, los Estados Provinciales y los Estados Municipales, etc.), además de formar abogados que abracen el ideario federal de nuestros constituyente fundacionales.-

La materia “Derecho Público Provincial y Municipal” es una materia propia de la Facultades de Derecho de un país federal como el nuestro.- No tendría sentido en un país unitario o centralista.-

Por ello es trascendente que una universidad pública –como lo es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata- posea en su currícula formativa del abogado una materia específica que se ocupe de las relaciones de un sistema federal, del derecho constitucional comparado de las provincias y de la organización municipal.-

Entendemos que el objeto de la disciplina puede ser entendido de la siguiente manera“…Para nosotros -y a partir de la reforma de la constitución nacional de 1994- el Derecho Público Provincial y Municipal es la rama del derecho público que, a partir del reconocimiento de un Estado Federal, se ocupa de la organización constitucional de las provincias, el sistema de distribución de competencias y relaciones del poder entre el estado nación y las provincias, así como de la organización de los gobiernos municipales como un verdadero orden de Estado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe señalar que no es ésta una disciplina con compartimentos estancos o fijos, por el contrario, el federalismo es un sistema dinámico en el que las realidades históricas, políticas, económicas, productivas y culturales van adaptando y moldeando el objeto del derecho público provincial. Así, tenemos un derecho constitucional -en lo referido a la distribución de competencias federales- de características rígidas, en cambio un derecho constitucional provincial de base flexible -todo lo que no fue expresamente delegado al Estado Federal se conserva en los Estados Provinciales- y con aspectos dinámicos que lo hacen más adaptable a las nuevas realidades. Por ejemplo hace 20 años atrás nadie se imaginaba a las Provincias vinculándose con el exterior o promoviendo su regionalización; o a los municipios promoviendo vínculos intra o extraprovinciales o con municipios de otros países.

Ya no se trata del estudio de la Constitución Nacional en lo referido a la organización de las Provincias y las competencias que éstas se hubieren reservado. Como tampoco se trata sólo de las constituciones provinciales. El derecho público provincial y municipal va más allá.

En síntesis, si tuviéramos que definir los contenidos que hacen al objeto de la disciplina en nuestros días, podemos fijarlos en los siguientes:

Las reglas federales emergentes de la Constitución Nacional

Los Estados Provinciales según la Constitución Nacional (arts. 1, 5, 121, 123)

En nuevo régimen constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129)

Las Constituciones Provinciales
Las leyes nacionales que describen el alcance de la autonomía de la C.A.B.A.
El estatuto organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Los acuerdos que suscriban las Provincias entre sí (relaciones horizontales), y entre ellas y el Estado Federal (relaciones verticales)
Las Cartas y Leyes Orgánicas Municipales
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La jurisprudencia de los Superiores Tribunales de Justicia de cada Provincia
Los procesos histórico-políticos y económicos previos a 1.853 y posteriores (debates de las convenciones constituyentes, debates legislativos en la sanción de leyes, etc.)….".-

Del análisis comparativo de los planes de estudios de la carrera de abogacía en otras Universidades Públicas y Privadas de la Argentina, observamos que en su gran mayoría –por sobre todo las instituciones públicas-, receptan la materia dentro de la currícula de grado para la formación del abogado.- Así del relevamiento realizado se observa lo siguiente (la información citada se corresponde con los planes de estudios que las instituciones publican en su sitio web):

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional de Córdoba: Se la denomina "Derecho Público Provincial y Municipal". Se la ubica en el 4to. semestre de la carrera, con correlativa previa "Derecho Constitucional" y posterior para "Derecho del Trabajo y Seguridad Social".

Facultad de Derecho Universidad Nacional de Cuyo. Se la denomina "Derecho Público Provincial y Municipal". Se lo ubica en el ciclo de formación profesional orientado. Se requiere como correlativa previa a "Derecho Político" (aprobada) y "Derecho Constitucional" (regularizada), abriendo como correlativa posterior a ninguna otra.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral. Se la denomina "Derecho Público Provincial y Municipal". Se la ubica en el ciclo superior de la carrera

Se requiere como correlativa previa "Derecho Constitucional" y "Derecho Administrativo", y abriendo como correlativa posterior a ninguna otra.

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se la denomina "Derecho Público Provincial y Municipal". Se la ubica en el marco del área de formación curricular específica, con una carga horaria de 64 hs. (antes estaban desdobladas y cada una con 48 Hs.), la materia es ubicada en el tercer año (5to. cuatrimestre de la carrera). Se requiere como correlativa previa "Derecho Constitucional", y abre como correlativa posterior a la materia "Instituciones de Derecho Administrativo".

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Nordeste. Se la denomina "Derecho Público Provincial". Se la ubica en el tercer año de la carrera (60 Hs.). Se requiere como correlativa previa la materia "Derecho Constitucional", y abre como correlativa posterior a la materia "Derecho Administrativo I" y al seminario del último año de la carrera "Seminario de Derechos Humanos".

Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. No posee la disciplina, siendo incluida dentro de los contenidos de la materia "Derecho Constitucional" como algunas bolillas temáticas.

Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. No posee la disciplina, siendo incluida dentro de los contenidos de la materia "Derecho Constitucional II", acotado al derecho constitucional bonaerense y régimen municipal local.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Del plan de estudios año 2000 que se publica en el sitio web de la institución, no se observa la existencia de la disciplina.

Facultad de Derecho Universidad Nacional de Catamarca. No posee la disciplina. Ubica en el 3er año de la carrera la materia "Derecho Constitucional y Federal".

Departamento de Derecho Universidad Nacional del Centro. Existe la materia "Derecho Público Municipal" como una asignatura electiva, en los últimos años de la carrera. Para poder hacer esa materia optativa tiene que tener Derecho Constitucional (obligatoria).

Departamento de Derecho Universidad Nacional de La Matanza. Se la denomina "Derecho Público Provincial y Municipal. Se requiere como correlativa previa "Derecho Administrativo I" y abre como correlativa posterior a "Derecho Administrativo II".

Facultad de Derecho Universidad Nacional de Río Cuarto. Se la denomina "Derecho Público Provincial y Municipal". Se la ubica en el 4to. año de la carrera, de cursada cuatrimestral en el 2do. Cuatrimestre.

Universidad del Salvador (no existe la disciplina). Tiene "Derecho Constitucional". Universidad Austral (no tiene la disciplina). Tiene "Derecho Constitucional I -organización del Estado-" y "Derecho Constitucional II -derechos y garantías-".

Universidad de Belgrano (no tiene la disciplina). Tiene las materias "Derecho Constitucional" y "Teoría del Estado".

Universidad del Este. Se denomina la materia "Derecho Público Provincial y Municipal". Se la ubica en el segundo año, segundo cuatrimestre.

Universidad Argentina John F. Kennedy (no tiene la disciplina). Tiene "Derecho Constitucional".

Universidad de Palermo (no tiene la disciplina). Tiene "Derecho Constitucional I -organización del poder-" y "Derecho Constitucional II -derechos y garantías-".

Universidad Católica de La Plata. Se la denominada "Derecho Público Provincial y Municipal", ubicándosela en el 2do. año de la carrera, siendo una materia de carácter anual de 2 horas semanales. Posee como correlativa previa la materia "Derecho Constitucional" y abre con posterioridad a otras materias como ciencias políticas y otras propias de la carrera de abogacía, pero no se reciben con la materia

De lo expuesto, se observa que resultan las Universidades Públicas las que han mantenido la existencia e independencia como disciplina y objeto del conocimiento jurídico al "Derecho Público Provincial y Municipal" como autónomo del "Derecho Constitucional", respondiendo a razones no sólo históricas, sino fundamentalmente en reconocer la existencia de un espacio formativo del futuro abogado que comprenda el fenómeno federal desde la perspectiva de las autonomías provinciales y del régimen de los municipios del interior del país.- El derecho constitucional provincial es de una riqueza mayor quizás que la del derecho constitucional nacional, sólo basta tomar alguna de las constituciones de provincias, y se observará que poseen una riqueza mayor de contenido, y desarrollo de instituciones que con el tiempo terminan siendo reconocidos por la constitución nacional (Por ejemplo los derechos sociales, los derechos colectivos, institutos de democracia semidirecta, consejo de la magistratura, etc.).-

Para un análisis particular de la disciplina y su desarrollo histórico en ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, puede consultarse artículo incluido en la Revista Anales n° 40.-

Hasta aquí he querido fundamentar y describir de manera escueta las razones de por qué es importante y trascendente mantener el espacio curricular que conforma la materia "Derecho Público Provincial y Municipal", la que se encuentra en el actual plan de estudios en el 3er. año de la carrera, como correlativa del "Derecho Constitucional" y con posterioridad no abre a ninguna disciplina ya que se puede directamente aprobar como última materia de la carrera de abogacía.-

Y en este punto quisiera realizar una evaluación crítica del régimen de correlatividades previas y posteriores de la materia, la que realizo a partir de la experiencia docente de varios años, observando que en el régimen de cursadas por promoción –y se reitera en los exámenes libres- pueden coexistir alumnos con apenas seis (6) materias aprobadas de la carrera o directamente ser la última.- Estos diferentes grados de formación y conocimiento de los alumnos, inciden de manera decidida en la forma de comprender la disciplina, así como en el aprovechamiento de las potencialidades, ya que lo heterogéneo de los grupos y las diferentes realidades, generan ciertas dificultades en la comprensión de ciertos conocimientos como ser la idea de persona jurídica de derecho público, el concepto de autonomía y autarquía más allá del concepto del derecho constitucional, la responsabilidad civil o penal de los funcionarios, etc.- Estos déficit que permanentemente llevan al docente a explorar conceptos o ideas propias de otras disciplinas, me hacen reflexionar acerca de la necesidad de ajustar el régimen de correlatividades previas, exigiéndose además de tener aprobada la materia "Derecho Constitucional", requerir "Derecho Civil I" y "Derecho Penal I".-

Asimismo, resulto crítico de que la materia no resulte correlativa de ninguna otras materia, existiendo una ausencia de articulación de los conceptos y aprendizajes de la disciplina.- Esa suerte de aislamiento obedece a limitar el campo de la disciplina a la cuestión del derecho constitucional, y particularmente del derecho constitucional de las provincias, siendo que del análisis de los contenidos los mismos de vinculan al menos con: a) Derecho Procesal I (penal): entendiendo que el derecho procesal es un derecho local, así como la organización del poder judicial provincial, lo vinculan directamente con el "Derecho Público Provincial y Municipal"; b) Derecho Administrativo I: entendiendo que el derecho administrativo, el procedimiento administrativo, así como la organización burocrática de la administración pública provincial y municipal, todos son raíz del derecho público local, por lo que también debe necesariamente estar vinculados al "Derecho Público Provincial y Municipal".- Por lo expuesto, se estima que la materia no debe quedar desarticulada o aislada del resto de las materias de la carrera, siendo necesario que se constituya en materia correlativa previa de "Derecho Procesal I" y de "Derecho Administrativo I".-

En síntesis, considero que la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" debe mantenerse como materia obligatoria en la currícula de formación del abogado, ubicada en el 3er. año, con la carga horaria actual de materia cuatrimestral, y modificar el régimen de correlatividades previas y posteriores de acuerdo a lo anteriormente expresado.-

13) (PROYECTO 31) Propuesta y análisis vinculados a las materias derecho administrativo I y II por Marcelo Lamoglia, Secretario del Instituto de Derecho Administrativo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.

Objeto: Análisis de la reforma al plan de estudio de la carrera de abogacía, procurador y escribanía.

De acuerdo a la invitación efectuada por el Consejo Directivo de la Facultad, el Instituto de Derecho Administrativo programó una reunión con los docentes de las cátedras de "Derecho Administrativo I" y "Derecho Administrativo II" a fin de analizar la reforma proyectada por la facultad al "Plan de estudio de la carrera de abogacía, procurador y escribanía". La convocatoria fue realizada por vía electrónica a cada docente de esta Casa de Altos estudios.

Tal actividad se llevó adelante el día 12 del corriente a las 14 hs. , y contó con la presencia importante de profesores titulares, adjuntos y auxiliares docentes.

Resultó provechoso en el encuentro considerar algunos documentos que la facultad ya había producido en el marco de anteriores proyectos de modificación del plan de estudio, como así también fue evaluado positivamente el trabajo llevado adelante por las cátedras que, previo a la reunión, habían proyectado líneas de trabajo al respecto.

Siguiendo los puntos que había diseñado la Comisión de Derecho Público del Consejo Directivo, se exponen a continuación una síntesis de las opiniones que lograron mayor consenso en el seno de la reunión.

1) Régimen de Correlatividades de Derecho Administrativo I y II

- Se estima conveniente mantener aquellas asignaturas que forman parte del sistema de correlativas de la curricula vigente para cada una de las materias que abarcan el derecho administrativo.
- No obstante, se cree conveniente establecer como correlativa de "Derecho Administrativo I" la asignatura "Derecho Público Provincial y Municipal".

El fundamento de tal propuesta obedece a que los contenidos de la asignatura última citada, en particular lo referido al marco constitucional provincial, facilitaría luego aprendizaje de la temática objeto de estudio en la materia "Derecho Administrativo I" ya que el alumno arribará a esta última conociendo adecuadamente la estructura de gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Municipal, los órganos de control a nivel provincial, como así también una aproximación a la organización administrativa municipal y provincial.

- Igualmente se cree razonable que la asignatura "Derecho Constitucional" forme parte del sistema de correlativas de las dos grandes ramas derecho. Se advirtió que en el plan vigente los alumnos rinden distintas materias codificadas sin conocer, por ejemplo, el sistema de derechos y garantías que establece la Constitución Nacional.

En atención a ello, se propone al Consejo Directivo la necesidad de evaluar la posibilidad de que el nuevo plan de estudio establezca como necesario, para rendir o cursar las asignaturas codificadas de las carreras, el conocimiento de elementos básicos del derecho constitucional tales como la "Forma de estado y de gobierno" de nuestro país y los "Derechos y Garantías" que contiene el texto constitucional nacional.

2) Ubicación de la materia en el plan de estudio.

- Se entendió que correspondería mantener la misma ubicación que tienen las asignaturas en el plan de estudio vigente. Esto es "Derecho Administrativo I" en cuarto año de la carrera y "Derecho Administrativo II" al finalizar la misma.
- Igualmente se plantea la necesidad de crear o proyectar una tercera asignatura (Derecho Administrativo III) destinado al estudio de los contenidos vinculado al "procedimiento administrativo y al derecho procesal administrativo".

En las restantes asignaturas que conformarían la temática administrativa (Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II) se desarrollarían aquellos contenidos correspondientes al derecho de fondo, incluyéndose además, entre otros, aquellos temáticas que se vinculan –entre otras- con la regulación económica, normas administrativas de protección del ambiente, derecho administrativo económico.

De prosperar la inquietud, los titulares de las cátedras actuales y sus profesores deberán intervenir en el diagrama de la nueva curricula de las tres (3) asignaturas que conformarían el área de incumbencia del derecho administrativo. Asimismo la reglamentación debería establecer la carga horaria de cada una de las asignaturas – no siendo menos a la que se tiene en la actualidad-.

3) Enseñanza teórico –práctica de la disciplina.

- En forma unánime se concluyó que la disciplina debía enfocarse desde ambos aspectos, esto es mediante la enseñanza teórica de los contenidos que integran su curricula, como así también acercar al alumno, mediante distintas herramientas pedagógicas, a situaciones concretas donde la solución a la problemática provenga de la aplicación de los conceptos adquirido a lo largo de la cursada y también de aquellos que fueron incorporados en el desarrollo de la carrera.
- En este punto se consideró como provechosa la experiencia piloto que desde hace más de 10 años viene llevando adelante en la asignatura "Derecho Administrativo I" (y otras asignaturas de la carrera) a cargo del Dr. Carlos Enrique Mamberti y en la cual los alumnos cuentan con una mayor carga horaria (8 hs semanales) lo cual permite el desarrollo de actividades prácticas vinculadas al análisis de fallos, diagramación de estructuras administrativas, proyectos de resoluciones y/o actos de alcance general, proyectos de defensas frente a situación concretas de los usuarios.
- En atención a la experiencia mencionada y, a los logros que se verifican en la misma, se propone la posibilidad de ampliar la carga horaria de las asignaturas en dos horas semanales, esto es un total de 8 horas.
- Continuando con este punto, se creyó conveniente resaltar que lo atinente al aspecto práctico de la enseñanza no debía circunscribirse a lo netamente procesal (confección de escritos judiciales), dado que - sin dejar de valorar positivamente tal aspecto de la enseñanza- el ámbito de actuación del profesional del derecho en la actualidad excede el litigio tribunalicio, para enfocarse o intervenir en otras situaciones donde no necesariamente existen conflictos de intereses contrapuestos (vrg. Caso judicial), por el contrario el abogado asiste con sus conocimiento a los poderes públicos, interviene en la elaboración de dictámenes jurídicos y de normas generales, forma parte de grupos de trabajos interdisciplinarios; es decir el área de incumbencia excede la cuestión netamente judicial.
- En atención a los cambios propuestos, la última instancia del proceso de aprendizaje, como lo es la evaluación de los contenidos y las destrezas adquiridas en las asignaturas deben sufrir adecuaciones a este nuevo perfil que se intenta dar a la enseñanza del derecho. Así se indica como conveniente, sin perjuicio de los medios de evaluación que lleve adelante el docente a lo largo de la cursada, la realización de un examen o trabajo final integrador donde el alumno deban utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada para resolver una situación fáctica determinada.

Tal práctica pedagógica puede rondar en el análisis de un fallo, la resolución de un caso, el proyecto de una norma, la elaboración de un dictamen, el asesoramiento en un caso puntual. Esta modalidad de evaluación busca enseñar al alumno la necesidad de observar el ordenamiento jurídico en su conjunto y buscar la solución de las problemáticas en tal contexto.

4) La relación de la materia y el perfil profesional.

- Siguiendo la misma línea de análisis del punto anterior, existieron coincidencias en abandonar el marcado perfil del abogado litigantes que mantiene el plan actual a lo cual se suma un marcado sesgo privatista.

Este diseño de la enseñanza del derecho respondió a otras circunstancias que identificaban básicamente como incumbencia profesional preponderante la de asistir al cliente en un proceso judicial. Como se mencionó anteriormente hoy el abogado participa o interviene en distintos ámbitos (públicos o privado) no aparece con el ropaje o rol de apoderado o patrocinante en un proceso judicial.

Esta nueva mirada del ejercicio de la profesión amerita la necesidad de proyectar la enseñanza del derecho desde otra concepción y sin olvidar el papel y finalidad que cumple el abogado en la sociedad actual.

- Sin perjuicio de lo aquí expuesto y, no menos importante, también se señaló que cualquier discusión sobre la modificación del plan de estudio, debía también considerar cuál sería la idea madre o patrón sobre el que se estructuraría la nueva curricula de la carrera. Esto es, si se continuaría bajo la pauta de un plan de carácter "generalista", lo que importa la obligación de aprobar un número relevante de materias troncales, aunque pudieran considerarse algún número reducido de materias optativas.

Por el contrario si la reforma se encuentra inspirada en aquellas experiencias seguidas por otras facultades que desarrollan la enseñanza del derecho bajo un criterio de contenidos básicos comunes (elementos) y luego dejan mayor libertad al alumno para diseñar su trayecto curricular final de acuerdo a una orientación o área del derecho (vrg. Derecho – UBA).

14) (PROYECTO 34) Consideraciones y aportes para la reforma del plan de estudios en las que han sido explicitadas y argumentadas en ocasión de participar en la reunión de comisión, por Carlos Alberto Mayón, Prof. Titular de Historia Constitucional y Derecho Constitucional.

La Plata 28 de septiembre de 2011

Rf/ Reforma del Plan de Estudios

Señor Vicedecano
Prof. Vicente Santos Atela

De conformidad con la amable invitación que me formulara en la reunión con la Comisión de Derecho Público sobre la Reforma del Plan de Estudios, del día 11 de agosto pasado, cumplo en presentar por escrito lo que expuse en esa oportunidad.
Respondo también al igualmente cordial pedido del Dr. Amós Grajales, en su condición de integrante de otra Comisión sobre la Reforma del Plan de Estudios.

Al respecto, hago saber mi opinión:

1. (Tema "c" del cuestionario que recibí) Desde una perspectiva general, creo que el Plan de Estudios debería incluir, como parte esencial de las asignaturas codificadas, un programa de práctica de las mismas, que comprenda la solución de casos que se planteen, y el análisis de los más significativos de la jurisprudencia nacional, provincial e internacional.
2. (Tema "a" del cuestionario que recibí) En lo referido al ciclo de Ciencia Política, sería conveniente que se invirtiera la correlatividad entre las asignaturas Historia Constitucional y Derecho Político.

Al respecto, soy de opinión que Derecho Político debería volver a ser asignatura de Primer Año, y correlativa anterior a Historia Constitucional, tal como fue en el Plan de Estudios tradicional hasta que, en 1966, se la excluyó del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía, pasando al Doctorado, y luego, en 1984, se la incluyó como correlativa posterior a Historia Constitucional

Me fundo en varios motivos:

a. Es necesario que los estudiantes, cuando cursen Historia Constitucional lo hagan conociendo algunos de los conceptos mínimos de Derecho Político: Poder, Estado, Formas de Estado, Gobierno, Formas de Gobierno, Constitución, Formas de Constitución, etc.
Ante la carencia de esos conocimientos, el suscripto se vio obligado, al entrar en vigencia, el actual Plan de Estudios, en 1984, a incluirlos en una nueva Unidad Temática, (la Unidad II), porque esos conceptos son esenciales para comprender la evolución constitucional argentina.
b. Además, es conveniente que cuando los estudiantes cursen Historia Constitucional, lo hagan con algunos conocimientos elementales de la Historia de las Ideas Políticas, que se estudia en Derecho Político. Ello sería invalorable para comprender temas como Revolución de Mayo, Generación de 1837, Evolución Constitucional Bonaerense, Orígenes del Sindicalismo en Argentina, Orígenes y Evolución de los Partidos Políticos Argentinos, etc.

3. (Tema "b" del cuestionario que recibí) También creo que sería muy conveniente que la asignatura Derecho Constitucional pasara a ser semestral.
Aclaro que, en mi opinión, lo ideal sería que fuera anual, pero, ante la realidad de que no existen asignaturas que tengan esa duración, debería ser incluida entre las semestrales.

Algunos motivos:
a. Por una parte, me parece esencial que el futuro abogado incorpore la convicción de que la Constitución es la base fundamental de todo el orden jurídico, y que ello pueda desarrollarse en profundidad.
b. Por otra, la práctica indica que, aún cuando era anual, no podía dictarse en clase en su totalidad, por su extensión. Cito, al respecto, mi experiencia personal: ingresé a la Cátedra de Derecho Constitucional, en la categoría de Profesor Adjunto, en el año 1971, durante la titularidad del Dr. Segundo V. Linares Quintana. He ejercido en la misma, primero como Adjunto y luego como Titular, en forma ininterrumpida hasta la fecha, es decir, durante 40 años. Esa experiencia me permite afirmar que el carácter cuatrimestral de la asignatura obliga a los profesores a seleccionar los temas que se analizan en clase, y quitar profundidad a cuestiones que merecerían un mayor análisis.
c. La extensión del dictado de la asignatura permitiría incluir la parte práctica, mediante el análisis de los casos jurisprudenciales más importantes.
Aclaro que, en la actualidad, desarrollamos en nuestras clases dicho análisis de casos, pero no en la medida que sería conveniente.
Me remito, al respecto, a lo opinado en el punto 1 de este escrito, pues el Derecho Constitucional es una asignatura codificada.

4. (Tema "d" del cuestionario que recibí) También sería muy importante que se incluyera en el nuevo Plan de Estudios una asignatura "Derecho Constitucional Procesal" (o "Derecho Procesal Constitucional", como se denomina en algunas universidades) que comprenda las acciones de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data, y los recursos ante los máximos Tribunales Provinciales, la Corte Suprema Nacional y los Tribunales Internacionales.
Con ello, se unificaría su tratamiento que actualmente se realiza en varias asignaturas, y se les otorgaría la profundidad que la moderna Ciencia Jurídica exige.
Este tema requiere especial atención ante el desarrollo que han tenido durante los últimos tiempos las instancias internacionales en nuestro Derecho en general, y en el Derecho Constitucional en particular.

5. Quedo, como siempre, a disposición de la Comisión de Derecho Público y del H. Consejo Directivo para todas las aclaraciones y ampliaciones que se consideren convenientes.
Saludo a usted con la consideración más distinguida

Carlos Alberto Mayón
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
Profesor en Ciencias Jurídicas
Instituto de Derecho Constitucional y Político
Cátedra I de Historia Constitucional
Cátedra I de Derecho Constitucional

15) (PROYECTO 36) Consideraciones y reflexionas acerca de la disciplina y aportes de las cátedras de la misma materia, por Héctor Lujan Iacomini, Prof. Titular de Dcho. de Minería y Energía

La Plata, de setiembre de 2011.
A los Señores Miembros de la Comisión de Derecho Público
S/D

En mi carácter de Profesor Titular Ordinario de la Cátedra de "Derecho de Minería y de Energía", de esta Casa de Altos Estudios, tengo el agrado de elevar a Uds. Una acotada explicación de los contenidos, gravitación institucional e importancia de la materia en la formación curricular, sumados a breves reflexiones sobre el contexto actual que hace a la formación de los futuros profesionales del Derecho.

I. Características de la materia: El derecho minero recala en un código sustancial (art. 75 inc. 12 C.N.) con la particularidad instrumental que, a su vez, es un código de forma? procedimiento: art. 1 Cód. De Minería-, que lo convierte en el cuerpo legislativo de fondo que conlleva la ventaja que desde el estudio hasta el ejercicio profesional en todo el territorio de nuestro país se cuenta con la certeza que los instrumentos para invocar derechos y obligaciones en esta área del quehacer económico-industrial son unívocas, con mínimas variantes marginales en cada una de las Provincias.

Esta ventaja legislativa histórica (ley 1919, promulgada el 8-XII-1886) que en su momento fue una verdadera innovación, hoy es receptada por innúmeras legislaciones emanados del Congreso Nacional que agilizan tornan más seguras las aplicaciones de las normas estructurales (por ej.: leyes 19550, 24452, 24522, 25065, 25248, 26361, etc.). Y he aquí, que en esta faceta se facilita la enseñanza y comprensión de este espacio del conocimiento legal, resaltando a los alumnos la gravitación práctica que implica el bucear en la interpretación y aplicación normativa, reconociendo que el recorrido instrumental es el valladar básico a acostumbrarse a conocerlo y utilizarlo para, en ese piso de marcha, enarbolar los sustratos sustanciales. Asimismo, en la promulgación del Código de Minería -finales del siglo XIX-, se adopta como primera legislación patria que así lo hizo, el sistema de responsabilidad objetiva, donde por el riesgo propio del quehacer minero, la responsabilidad existe por el solo hecho del daño y perjuicio con relación causal por trabajar de esa índole, superficiales como subterráneos e incluso aunque provengan de accidentes o casos fortuitos, donde el plazo prescriptivo de esta severa regla se acota a seis meses (art. 161 C. Minería).

Precisamente, la codificación que involucra la minería posibilita, con palabras del Codificador Dr. Enrique Rodríguez, pone el acento desde el vértice de la enseñanza en que la actividad abogadil es en primer lugar preventiva, de asesoramiento y surgida la controversia el procurar, primigeniamente, desanudarla con la mayor prontitud posible -en la materia sobrevuela el interés público que conlleva la actividad minera por sobre el interés particular-, trasvasándoles a los alumnos, con sentido práctico, la eficacia del Decálogo del Abogado de Couture. Y he aquí que el alumnado debe recibir y asimilar una faceta legislativa de hondo entronque histórico ?institucional-, piénsese que la conquista americana se motivó, en buena medida por el acceder a los metales y piedras preciosas que, en su gran mayoría, se trasladaron a Europa, donde lo que se regula si bien son relaciones intersubjetivas, lo que prima es exclusivamente con referencia a bienes no renovables, relativamente escasos e irregularmente distribuidos a nivel planetario, esto es, los minerales, insumos básicos para la vida humana (Catalano, Edmundo, "Breve historia de la Minería en la Argentina" Ed. Depalma, pag. 2 y sig.).

De allí, que como acontece en la mayoría de la legislación comparada, se advierte que la actividad minera se encuentra, por una presunción "iure et de iure" gozando de una impronta sustancial de utilidad pública superior a la propiedad común (art. 13 C. Minería) y ello es basal para alentar a los educandos en que el derecho no existen principios o normas absolutas (doct. Art. 33 C. Nac.).

Por cierto, se aborda la particularidad legislativa que exhibe el Código de Minería al atribuir al Estado -Nacional o Provincial-, según donde se encuentren los minerales-, el dominio eminente o titularidad dominial de los yacimientos pero con prohibición de ejercer las facultades ínsitas a esa propiedad (arts. 7 y 9 C. Minería), lo que encierra un tema de innegable trascendencia de política económica, en alguna medida a los ingresos y calidad de vida de los habitantes. Baste mencionar lo sucedido en la década de 1990 respecto al papel del Estado en la relación a actividades sensibles en la estructura macroeconómica del país, privatización mediante. Se suma a ello, la singularidad legislativa que las canteras de las cuales provienen los elementos para la construcción, cuya importancia económica sería ocioso destacar-, permanecen en el dominio del dueño del suelo (arts. 2 inc. 3 y 5 C. Minería) y donde los fiscales -arenas de las playas y/o ríos, arcillas, piedras, granitos, etc.-, permanecen en una precariedad jurídica que abre camino para abusos diversos (art. 201 C. Minería). Recuérdese, que la Provincia de Buenos Aires, es en gran medida, una de las provincias de relevancia en el producto bruto minero, precisamente, por la producción de las canteras.

Como estamos en el ámbito del Derecho Público se induce al alumnado a reparar en el fortísimo incremento de las exportaciones mineras en las últimas décadas -superior a los seis mil millones de dólares estadounidenses-, en correlación con la incidencia que implicó una legislación -ley 24196 t.o.-, que alentó las inversiones mineras, primordialmente por un tema que se imbrica con otras ramas del derecho, o sea, la seguridad jurídica e impositiva, -estabilidad fiscal , incluso cambiaria y arancelaria, por treinta años a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad: art.8-, sin perjuicio de las severas críticas por la liviandad impositiva con que se prohija a empresas multinacionales por ser las que han acometido los conocidos mega emprendimientos mineros del país, citando a modo de ejemplo: ley 23018: reembolso a exportaciones por puertos patagónicos, exención al impuesto al cheque (decreto 613/2001), deducción del impuesto a los combustibles líquidos y contrapartida un menguado 3% de regalías deducidos costos diversos- del mineral extraído a favor de la provincia de donde se extrae el mineral (ley 25161).

También adquiere relieve en el área de la minería la exploración, explotación y como bien deseo, la manufacturación intermedia de las denominadas tierras raras, abarcando en esta denominación a un grupo de diecisiete metales de propiedades semejantes siendo su característica su difícil separación y diferenciación sumado a su escasez a nivel planetario, donde la República Popular China monopoliza la producción con una cuota del 97% del mercado mundial.

Y he aquí, que el centro del desarrollo del mundo digital se vertebra en el uso de esos minerales, razón por la cual la Gran China -incluida Taiwan- es el mayor fabricante y ensamblador mundial de microchips, ordenadores, y equipos de redes, el alma de Internet. Es que el control de esos diecisiete minerales se revelan absolutamente imprescindible para la economía de la información, defensa uso militar y

para las energías verdes o renovables- (por ejemplo desde el lantano, cerio, erbio, europio, neodimio, paladio, samario, e.o.) son imprescindibles en la elaboración de dispositivos electrónicos avanzados: ordenadores portátiles, tablets, pantallas táctiles y LED, vehículos híbridos, aerogeneradores, tecnología furtiva, etc.

La República Argentina posee esa materia prima del futuro, siendo las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta y Santiago del Estero donde se han detectado tierras raras en rocas graníticas de la zona generando un fuerte incremento de solicitudes de exploración. Cabe poner el acento en que se perciba la importancia actual de estos minerales en la era digital y su regulación jurídica.

También se pasa revista, recalando en variados precedentes jurisprudenciales, en la normativa específica en materia de protección ambiental minera (arts. 246 a 268 C. Minería y leyes anexas: entre ellas ley 26639: protección de glaciares y dec. 207/11), sumado a la adecuación al principio de sustentabilidad, seguros, a las normas ISO sobre protección al medio ambiente y responsabilidad social de las empresas.

En la otra área medular de la asignatura "Derecho de Energía", partiendo del principio que la energía es la base de la sociedad industrial donde la relación entre Producto Nacional Bruto y el consumo de energía es por demás indicativa del desarrollo alcanzado por una determinada Nación; es que se procura en este sector de la disciplina concientizar con esquemas propedéuticos sencillos y de fácil asimilación cognitiva, sobre el trascendente papel que desempeña la energía no sólo en la ciencia, en la política, en la industria y en toda la ciencia del bienestar humano. Desde la cuna hasta la tumba, todo el mundo depende de ella y donde si su suministro es abundante y diversificado habrá abundancia, prosperidad y desarrollo. Cuando no, hay miseria (Foley, Gerald, "La cuestión energética" Ed. Del Serbal, Cap. 18: "Recapitulación" pág. 288 y sig.).

De tal modo, se advierte en la medida que se transmite al alumnado el conocimiento certero de la legislación energética la conveniencia de reconocer o percibir sus vasos comunicantes con necesidades, intereses y coyunturas políticas-económicas transnacionales, donde si bien nuestro país cuenta con una vastísima legislación al respecto, es imprescindible verificar lo acaecido en materia de lo que hoy se conoce como la matriz energética del país.

Es que la legislación comprende desde la génesis de los Organismos encargados del diseño, contralor, conservación y autoabastecimiento energético, las empresas nacionales que lo posibilitaron y sus mega emprendimientos (YPF., Agua y Energía Eléctrica, Hidronor SA., Gas del Estado, CNEA., YCF., plantas petroquímicas, oleoductos, gasoductos, centrales eléctricas etc.), improntas constitucionales por medio, hasta el abrupto cambio que generó la modificación del régimen jurídico vigente en los capítulos energéticos sobre carbón, hidrocarburos, energía nuclear, petroquímica y regulación en materia eléctrica, importan instalar al alumnado en la faz crítica que ello conlleva. Se sopesa la legislación vigente en la materia y su proyección futura.

Obvio que se procura que conozcan los educandos y disciernan por sí la incidencia en crecimiento, desaliento o dispersión demográfica que el diseño del contexto jurídico ha tenido y tendrá en Argentina y en el mundo.

Al ser la legislación energética vigente en gran medida- de naturaleza fondal y de forma a su vez, se induce la plena participación de los alumnos en la ejercitación de los carriles rituales en particular en los cotidianos inconvenientes en materia usuaria de gas, combustibles, electricidad; e.o. También se recala en la pléyade de tratados internacionales que se vinculan con la energía y a los que Argentina ha adherido y sus consecuencias como derecho positivo interno.

Se analizan las energías renovables (solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, biocombustibles, etc.) poniendo el acento en su contribución a disminuir el uso de las de origen fósil y por cierto contaminante, aunque formulando el interrogante de su, hasta el presente, notoria insuficiencia para reemplazar a las tradicionales. Se pasa revista a la legislación argentina respectiva (leyes 25019, 26093; 26190, e.o.).

También se propicia el acercamiento cognitivo a los cimientos tecnológicos que posee el país en la formación de los especialistas en materia energética (Universidades, Instituto Balseiro, Escuela de Medicina Nuclear en Mendoza, CNEA., INVAP; e.o.) y se concretan visitas a complejos energéticos (Centrales, Destilerías, etc.).

II) Contribución a la formación de abogados: En la formación de los futuros profesionales en esta rama del derecho público que en su regulación jurígena aprehende los sectores básicos de índole fisicoquímica que hacen factible la vida contemporánea en la sociedad actual, con sectores estratégicos a nivel mundial que han sido teatro para lo noble y ruin del carácter humano, coexistiendo la creatividad, dedicación, ingenio y la innovación técnica con la avaricia, corrupción, ambición política y fomento de luchas mundiales por la primacía política y económica (Yergin, Daniel., "Historia del Petróleo" Ed. Vergara, pag. 1051), es que se prioriza el conocimiento concreto, práctico, documentado de la plasticidad interpretativa que ?sobremanera en energía-, muchas veces de modo intencionado posibilita la técnica legislativa a través de una suerte de "gatopardismo" jurídico donde el cambio de términos no modifica la relación entre el estado y las compañías privadas en detrimento del primero (Silenzi de Stagni, Adolfo, "Claves para una Política Petrolera Nacional", Ed. Theoría SRL. Pag. 91).

Precisamente, es indispensable que los futuros profesionales de modo participativo, personal y apelando al análisis y reflexión en las clases se habitúen -con basamento en las premisas jurisprudenciales de los tribunales superiores-, a encuadrar intelectivamente el tema o caso traído al aula, para luego bregar para que extraigan los efectos, derivaciones y soluciones que involucran cada uno, posibilitando a través de la constatación empírica que verifiquen la existencia de los principios generales del derecho y que a su vez en la aplicación normativa es importantísimo no cegarse con el texto legal "per se" y priorizar lo que a su respecto ha acuñado la jurisprudencia con sentido de vigencia.

Es decir, sin omitir la interacción educacional en el abrevamiento de las legislaciones específicas, resulta primordial en particular en materia ubicada en la etapa postrera de la formación de grado-, que los destinatarios de la tarea docente perciban las particularidades del quehacer profesional al presente, lateralizando teorizaciones y en esta área del derecho público que adviertan los cuantiosos intereses político-económicos muchos de génesis supranacional- en consonancia con el modo en que se los regula jurídicamente, inciden de manera directa en nuestra calidad de vida y por cierto en el futuro del país. Sin minería ni energía, la especie humana se retrotraería a la Edad de Piedra. Mas, lo gravitante desde el vértice del desarrollo económico del país es que los alumnos, por intermedio de modelos prácticos avizoren la prioridad de establecer como política de estado el efectuar la mayor manufacturación posible de esos recursos no renovables (minerales) y obtener sostenidamente el autoabastecimiento pleno en energía. Por ende, se propone a los futuros letrados que asimilen la necesidad de profundizar en su formación jurídica y proponerse la actualización permanente, reposando la premisa que el derecho es uno, aunque por ventajas didácticas o

pedagógicas se lo enseñe a través de diversas materias emergiendo los principios generales que favorecen la comprensión armónica de la ciencia jurídica y alentarlos en el uso de herramientas electrónicas para bucear en lo que dicen los cimeros tribunales del país en el tema abordado.

A su vez se pasa revista a las dificultades en la inserción laboral repasando las áreas del derecho que les resulten atractivas y no suficientemente asistidas profesionalmente, sumado a la importancia existencial que conlleva de por sí el lugar geográfico que se seleccione -si es factible- para radicarse a los efectos profesionales, teniendo presente que la obtención del título de grado es un instrumento, un pasamanos, para proseguir en la edificación vital de cada educando y donde será imprescindible su participación activa en su vida comunitaria, casi como una obligación so pena de caer en la más perjudicial de las actitudes sociales: la anomia.

III) Propuestas: En mérito al contenido, extensión, importancia sustancial en el contexto de la política económica del orbe y su incidencia en el interno del país, es que en el estudio de la asignatura "Derecho de Minería y Energía", se propicia: 1°) Priorizar el vínculo personalizado, en la interacción de doble vía (alumno-profesor), favoreciendo el juicio crítico y consiguiente concientización de la realidad social que les tocará enfrentar. 2°) Procurar la asimilación de la trascendencia que conlleva el contenido de la materia, a través de recursos didácticos atractivos, tratando que los destinatarios comprendan que la legislación que nutre esta asignatura si bien aprehende relaciones intersubjetivas pero lo es vinculados a recursos e insumos vitales por esencia no renovables para la civilización y de allí su medular particularidad. 3°) Insistir en que el derecho se vertebra en alguna medida- superando lo estrictamente normativo en elaboraciones jurisprudenciales que van mutando y de allí la necesidad de familiarizarse con el método de casos y el uso de herramientas electrónicas para ello. 4°) La necesidad de posicionar en la correlatividad de materias que ésta lo sea con posterioridad a las ramas del Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Notarial y Registral y permaneciendo en el último eslabón de la carrera, sobremanera por la necesidad para que los educandos detenten bagaje cognoscitivo propicio para adentrarse en la singular gravitación de esta área del Derecho Público que se entronca con sustratos legales específicos.

Profesor Héctor Luján Iacomini
Correo: hiacomin@yahoo.com.ar

16) (PROYECTO 37) Propuesta y análisis del régimen de correlatividades y contenidos de su disciplina por el Prof. Angel Eduardo Gatti, Prof. de Derecho Social.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Señores Miembros de la Comisión de Derecho Público, para el estudio de la Reforma del Plan de Estudios
ASIGNATURA: "DERECHO SOCIAL" (Cátedra I)
Propuesta del Sr. Profesor Titular Ordinario Abogado Angel Eduardo Gatti

I) Consideraciones generales

Las posibilidad de introducir reformas al plan de estudios de una carrera está condicionada por el principio de integración y cohesión curricular, entre cuyos elementos se correlacionan e interinfluyen tanto los objetivos genéricos que quieran escogerse con relación a la totalidad, como a ciertas necesidades específicas de los aspectos particulares (asignaturas) que reclaman su propia entidad, técnica, científica o teleológica.

Este conjunto de factores trasciende la mera consideración pedagógica, y requiere una perspectiva del entorno social, con una evidente influencia en la selección de valores, en tanto la Universidad constituye el centro por excelencia de formación de las dirigencias. Las élites que se preparan para asumir el poder de control social, derivado del dominio del conocimiento, no están, sin embargo, a resguardo y a distancia de su contexto grupal, y no tienen tampoco el poderío exclusivo y excluyente de imposición de formas de organización, pues la dinámica de las tendencias que se desarrollan en la confrontación de los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, operan también como propulsoras y condicionantes de la configuración de esos paradigmas.

Como corolario, una reforma curricular es, ante todo y sobre todo, una elección valorativa sobre el modelo de sociedad a construir.

Ponderar cuáles son las significaciones actuales de las ramas del saber, con perspectiva problematizada en las necesidades del colectivo social, y advertir los cambios devenidos en el decurso de la evolución histórica, es un imperativo gnoseológico y epistemológico decisivo.

El Derecho es un medio de ordenamiento, de control y de distribuciòn de poder, proyectado a un ámbito de "interferencias intersubjetivas" (COSSIO)-
¿Cuál es hoy la relevancia del "Derecho Social" en el grupo humano?

II) La significación actual del Derecho Social

El tema de nuestro tiempo es el trabajo. Así como en diferentes épocas otras cuestiones centraron la problemática de las sociedades –aunque sin poder prescindir de la subyacencia de la cuestión laboral-, hoy es la ocupación de los inmensos contingentes de hombres y mujeres, la regulación de las relaciones emergentes del vínculo que así se crea y la dignidad de la vida que se une a la condición de trabajador dependiente, el núcleo que pone en crisis la supervivencia de la paz social. Los factores referentes a las nuevas tecnologías y su incidencia en la Humanidad, y, principalmente, la concepción de una vida caracterizada por la exacerbación de expectativas que aumentan la pulsión angustiante de la inalcanzabilidad de cierto estado de bienestar, reviven la "cuestión social", acaso bajo algunas apariencias diferentes, pero con el mismo trasfondo dramático que pervive en el fenómeno crónico de la dominación, como idea y práctica en las relaciones humanas.

Cabe al Derecho Social pensar las formas novedosas que excluyan la alienaciòn y regeneren el tejido social con sentido de justicia.

A pesar de esta evidencia, el programa curricular reduce el estudio de estos complejos conflictos, que constituyen una verdadera encrucijada de cara al porvenir, a una sola asignatura, además, limitada a un único curso cuatrimestral.

Ciertamente, si no fuera por la gravedad de las situaciones que están involucradas, la circunstancia apuntada no sólo demostraría un anacronismo intolerable, sino que llamaría a una advertencia sobre la seriedad de los sistemas de enseñanza universitaria.

III) Proposiciones

1) Desdoblamiento en dos asignaturas – Modificación del régimen de correlatividades

Dadas las limitaciones a que están sometidas estas presentaciones, circunscribiendo en ellas las propuestas de mínima, planteamos la necesidad de las siguientes modificaciones:

a) Desdoblamiento:

La asignatura debe desgajarse en dos: 1) "Derecho Colectivo del Trabajo"; y 2) "Derecho Individual del Trabajo"

Corresponde señalar que esta separación en dos asignaturas es la que ya han dispuesto otras Facultades, y algunas de ellas proponen hasta una tercera y cuarta ("Derecho de la Seguridad Social", "Derecho Procesal del Trabajo"

b) Modificación de correlatividades

Es absolutamente necesario replantear el régimen de correlatividades: Resulta inverosímil encarar la explicación de temas como "grupos de empresas y responsabilidad solidaria", sin haberse introducido, al menos, en el estudio del "Derecho Comercial"; o abordar los intrincados problemas de la negociación colectiva o las funciones de la inspección de la autoridad de aplicación de las leyes laborales, sin conocimiento alguno del "Derecho Administrativo"; o encarar las particularidades del proceso laboral, sus notas particularmente distintivas, sin tener formación alguna en "Derecho Procesal"

Consiguientemente Se estima imprescindible mantener las asignaturas que actualmente forman parte del sistema de correlatividades, pero se considera ineludible establecer como correlativas de "Derecho Social" las asignaturas "Derecho Comercial I", "Derecho Administrativo I" y "Derecho Procesal I".

La exigencia de contar, previo a "Derecho Social", con la aprobación de las asignaturas "Economía Política" e "Introducción a la Sociología", implicaría un marco de condiciones elementales para penetrar con fundamentos en el mundo del trabajo.

2) Ubicación de la materia en el plan de estudio.

Las reformas propuestas en el régimen de correlatividades, hacen necesario variar la ubicación de la materia "Derecho Social" en el plan de estudios vigente, trasladándola en forma efectiva (y no sólo nominalmente como hoy se aprecia en el programa de asignaturas), al cuarto año de la carrera.

3) Enseñanza teórico –práctica de la disciplina.

El Derecho Social no puede comprenderse cabalmente si no existe un contacto directo con la realidad que aspira a regular. De ahì la impostergable satisfacción del objetivo del conocimiento que llamamos propiamente empírico, y que consiste en elaborar prácticas pedagógicas que permitan al estudiante introducirse en el campo vivo de las relaciones del trabajo.

En este sentido, se propone establecer dos segmentos destinados a ese misma finalidad:

a) La realización de seminarios de adquisición de las herramientas elementales de actuación profesional, en la llamada etapa previa a la judicialidad, en la que se ejercite el uso de las principales comunicaciones entre los sujetos vinculados laboralmente, enseñando no sólo los rituales léxicos frecuentes en esa fase, sino la estrategia negocial y las implicancias de las posiciones de abordaje de los conflictos. El medio de ejecución estaría asentado en la realización de seminarios, de preferente enfoque práctico y de análisis técnico – documental

b) La asistencia a audiencias de vista de causa, en casos reales, como la participación, por observación, en las actuaciones administrativas del Ministerio de Trabajo, con aprehensión de la función conciliadora en los conflictos individuales y colectivos, y la técnica de las inspecciones de los centros de trabajo y sus consecuencias

c) La difusión de material audiovisual, de contenido temático pertinente a la materia, según ya lo ha iniciado la Cátedra, con su propuesta del "Ciclo de Cine Social"

4) La relación de la materia y el perfil profesional.

La mera enseñanza técnica, destinada a proveer de habilidades para el ejercicio profesional, contradice la función social de la Universidad. Aunque esta afirmación puede extenderse a la generalidad de las distintas formaciones universitarias, asume particular gravitación en las escuelas de abogacía.

El abogado no es sólo un experto en litigios sino un operador social calificado, sea porque se orienta a la elaboración de reglas generales de conducta, sea porque en el ejercicio profesional mismo, en el ámbito más acotado del caso individual, genera un sentido al sistema normativo; todo lo cual, tiene una relación con las conductas socialmente valiosas o disvaliosas que se instalan en el seno de los vínculos comunitarios.

El Derecho puede ser un sistema de normas, pero su justificación sólo se explica como instrumento de consecución del valor Justicia.

Las sociedades sin justicia, son cuerpos en estado agonal. Sólo la cultura de inspiración solidaria y propulsora de una conciencia nacional, que en su esencia se respeta a sì misma por su tolerancia con el universo de las divergencias, asegura un destino humano donde cada ser es reconocido en su identidad moral.

Desde la enseñanza del Derecho se cultiva esa fraternidad, que iguala y libera. El perfil del abogado, en su relación con el Derecho Social, debe apuntar no sólo a una competencia técnica, que lo prepara para la confrontación litigiosa; antes bien, su profesionalidad debe estar envuelta en una cultura cuya axiología responda a la necesidad de la justicia social, que conlleva el sentimiento de tutela del débil, como pre-requisito de la paz.

Así, la insistencia de la enseñanza en los principios básicos de la asignatura, hoy jerarquizados a la categoría de Derechos Humanos Fundamentales, unida metódica y orgánicamente a la profundización de los institutos jurídicos que estructuran los contenidos de la materia, son objetivos que traspasando la especificidad de ella, se consagran como intervenciones sociales eminentes de carácter ético.

IV) Conclusión

Al inicio de estas propuestas esbozamos las confluencias de los distintos factores que presiden la concepción de un plan de estudios. Decía el ilustre Decano de esta Facultad y Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Alfredo Palacios: "En la crisis actual de la evolución humana que entraña dos aspectos esenciales: el de la unidad de la persona y el de la coordinación de los valores técnicos con sus fines de servicios humano y de eficiencia social, corresponde a la Universidad individualmente la principal responsabilidad en la tarea de abordar soluciones." ("Espíritu y técnica en la Universidad", Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1943, pág.122).

Al concluir con esta aproximación sintética a la propuesta de reformas al Plan de Estudios, con particular referencia al Derecho Social, dejamos constancia de que hemos querido contribuir módicamente a una mejor inteligencia de esta disciplina y ponerla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional de La Plata, siquiera módicamente, a tono con las grandes orientaciones jurídicas contemporáneas.

Abogado ANGEL EDUARDO GATTI
Profesor Titular Ordinario de Derecho Social – Cátedra I

17) (PROYECTO 40) Propuesta y reflexiones acerca de la disciplina Derecho Laboral y Régimen de correlatividades por Arturo López Akimenco.

Señores integrantes de la Comisión de Derecho Público para el estudio de la "Reforma del Plan de Estudios"

MATERIA: Derecho Social: Consideraciones y propuestas del Prof. Arturo J. López Akimenco

1.- Manifestación inicial:

Del actual plan de estudios debemos rescatar que está orientado a la formación de una abogado generalista entendiendo esto como el que trata una o varios cuestiones con una visión general inter relacionada por contraposición al enfoque parcializado del especialista. Pensamos que es ésta configuración la que debemos mantener.

Con el objeto de no recargar a la comisión con la exposición de cuestiones que ya han sido planteadas, y que obran en su poder, queremos expresar nuestra adhesión al contenido de la propuesta del Profesor Angel Gatti en lo referente "consideraciones generales" que formula en el punto 1, a la "significación actual del derecho social", que desarrolla en el punto 2 de su presentación y a sus consideraciones sobre "la relación de la materia y el perfil profesional".

2.- Proposiciones:

Consideramos por nuestra parte necesarias las siguientes modificaciones:

a) Propuestas generales:

a-1: Extensión temporal: consideramos de fundamental importancia reformular el actual sistema de duración de los cursos, en tanto no responde a ningún criterio racional.

En efecto, todas las materias no necesitan todas el mismo transcurso de tiempo para desarrollar sus contenidos, sin embargo todos los cursos tienen la misma carga horaria.

Es imprescindible analizar el contenido de cada materia y determinar el tiempo necesario para su desarrollo.

a-2: Cantidad de alumnos: Para un desarrollo efectivo y eficaz del proceso de enseñanza los cursos no pueden superar el número de 25 alumnos en cada comisión.

No proponemos con esto limitar la posibilidad de cursar de los alumnos, pero la solución no pasa por aumentar la cantidad de cursantes sino que se debe incrementar el número de comisiones.

B) Propuestas específicas para Derecho Social:

a) Desdoblamiento:

Debe separarse, como ya viene proponiendo desde hace más de 25 años (Proyecto "Brito Peret"), de Derecho de la Seguridad Social, fijándole una extensión temporal de dos meses para su dictado, y mantener el término de cuatro meses para la enseñanza de Derecho del Trabajo, que comprendería el aspecto individual, el colectivo y la tutela administrativa y judicial.

b) Modificación del régimen de correlativas:

En esta parte también adherimos a la propuesta del Prof. Gatti con la salvedad e que consideramos que se debe establecer asimismo como correlativa Derecho Procesal II. Esto lo postulamos tanto para la materia Derecho del Trabajo, como para Seguridad Social.

c) Enseñanza Teórico-Práctica:

Ya dijimos alguna vez ("Nuevo plan de estudios: tema de todos" Rev. Convergencia) que un déficit notorio en el actual régimen de enseñanza es el de la insuficiencia de la formación práctica.

Esto pese a que se vienen designando en casi todas las cátedras desde hace más de veinte años Jefes de Trabajos Prácticos, que deberían haberse ocupado de esta labor.

El valor de la enseñanza práctica debe ser destacado como parte fundamental en la formación profesional, pero se debe salir de los límites estrechos de la que está solo orientada al litigante e incorporar todo lo que comprenda la actividad del abogado, y hacer práctica en la enseñanza de cada materia.

Como señala Fucito, además de la enseñanza del derecho basada en libros, leyes, doctrina y jurisprudencia, debemos considerar el derecho como experiencia de interacción social.

Coincidimos entonces con el Prof. Gatti en que el Derecho Social no puede comprenderse cabalmente si no existe un contacto directo con la realidad que aspira a regular. De ahí la impostergable satisfacción del

objetivo del conocimiento que llama propiamente empírico, y que consiste en elaborar prácticas pedagógicas que permitan al estudiante introducirse en el campo vivo de las relaciones del trabajo.

En este sentido debemos señalar que desde hace muchos años forma parte de nuestros cursos la asistencia a vistas e causa, la concurrencia al Ministerio el Trabajo, la visita a la delegación provisional, a fábricas y a sindicatos: en cada uno de estos lugares los alumnos recibían explicaciones dadas por el personal, jueces y directivos.

Lamentablemente el aumento excesivo de la cantidad de alumnos de cada curso hace casi imposible su continuidad, de ahí también nuestra postulación en cuanto al número de alumnos por comisión.

FINAL PARA EMPEZAR
-No patentemos insolidarios-

Por último consideramos que es útil advertir la escasez de contenidos éticos y solidarios que afecta al actual plan e estudios.

Creemos que su incorporación es esencial, sin perjuicio de señalar que mucho más esencial será que nuestro accionar, nuestro comportamiento, sea el ejemplo que eduque e inspire a nuestros alumnos que, como la sociedad toda, están mas necesitados de modelos que de palabras.

En este punto queremos recordar manifestaciones del filósofo español Savater que, inquieto por los resultados de una encuesta internacional sobre los conocimientos de estudiantes de muchos países, expresaba que, con todo, no era esa falta de preparación académica lo que más le preocupaba a los jóvenes actuales, sino que lo que más lo asustaba es que haya cada vez más gente con suficiente competencia profesional y con perfecta incompetencia social, no refiriéndose a la falta de informaciones precisas sobre aspectos concretos de la realidad sino a la ausencia de formación cívica. A estos proponía designaros como "idiotas suficientemente preparados". Si bien Savater tomaba el término "idiota" en la acepción más próxima a su etimología griega: persona carente de interés cívico y de capacidad para desarrollar las atribuciones que corresponden a un ciudadano, nos parece más adecuado, inclusive por razones de estilo, calificar al producto de esta carencia formativa como "indiferentes suficientemente preparados".

Señalaba también el filósofo que lo había impresionado un panel publicitario de una escuela que había visto en Brasil, que mostraba una foto de Bin Laden con la leyenda "Osama Bin Laden, Ingeniero". Abajo decía: "formar profesionales es fácil, lo difícil es formar ciudadanos".

Más allá que, para nuestro gusto sin excluir a Bin Laden, podríamos incluir más rostros de notorios casos de incivilizados, por cierto, lo malo es que la educación se limite a una preparación técnica que no consiga acuñar miembros responsables, solidarios y tolerantes, por críticos que sean, para vivir en sociedades pluralistas.

No patentemos insolidarios, que el problema no es lo que no saben hacer, sino lo que no saben ser: humanos entre humanos.

Prof. Titular Interino Abog. Arturo López Akimenco

18) (PROYECTO 41) Reflexiones acerca del proceso de reforma del plan de estudios tendientes a discutir cuestiones vinculadas a la enseñanza del derecho, vinculación de teoría con realidad y praxis, la articulación de la enseñanza con las otras misiones de la Universidad (investigación y extensión) por Homero Bibiloni Prof. Adjunto Ordinario de la Materia Dcho. Administrativo II.

REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS 2011-2012
Presentado por Homero M. Bibiloni

He considerado para este aporte la experiencia y la referencia más completa compilada que es la "Autoevaluación Académico Institucional 2007-2010".

I.- UNA VISION QUE SE COMPARTE

Remito al Trabajo del Dr. Nieto que se anexa, el cual creo que es sencillamente brillante.

II.- ALGUNOS EJES CENTRALES PARA LA ARTICULACIÓN.

1. PARA LA POLEMICA: AUTISMO O AUTONOMIA

Debemos defender la autonomía universitaria, pero muchas veces esta virtud del sistema lleva al aislamiento o al autismo con las necesidades y prioridades de la sociedad que son sustituidas por las propias del sistema universitario. Esto debe equilibrarse entre lo "interno" y el "afuera" que da sentido a la Universidad.

2. LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE DERECHO /

Podríamos afirmar sin equivocarnos, que en líneas generales, en lo que al suscripto refiere el Plan de Estudios no ha tenido variaciones sustanciales, lo cual denota una falta de ajuste del orden de los 40 años. El mundo es muy diferente desde entonces, como lo es nuestro país y las realidades a las cuales las normas refieren.

3. EL POSITIVISMO SIN CONTEXTO Y LA INEXISTENCIA DE VALORES.

Nos hemos acostumbrado a un mundo construido en el paradigma kelseniano, olvidando no sólo valores y contextos sino que las normas son la concreción regulatoria de las ideologías de turno conforme procesos históricos y pese a que las externalidades han variado, el "adentro" permanece incólume.

4. EL METODO DEL RELATO Y DE LA AJENIDAD.

Gran parte de la enseñanza se basa en el relato, esto es la descripción de realidades sin ningún tipo de visión crítica del funcionamiento de las instituciones y nuevos involucramientos como actores.

4.1. "La ley dice…"

La docencia pregona en consecuencia:

"La artículo tal dice que …" aunque la realidad vaya hacia otro sitio, o nos contradiga, o no se aplique en términos estructurales o institucionales, sin embargo se repite la normatividad ignorando sus desajustes con el presente.

4.2. "El autor opina …"

La enseñanza o la doctrina tienen un importante volumen de repeticiones que si bien pueden demostrar erudición no hacen avanzar el conocimiento, dado que todos son referencias de unos a otros y de "otros a unos" más las polémicas, las posiciones eclécticas, pero sólo del mundo de la doctrina, ajeno al devenir y a las cuestiones tan urgentes como importantes del presente.

4.3. "La jurisprudencia señaló …"

Igualmente el relato alcanza a los fallos, pero estos normalmente versan sobre la idea del uno a uno del derecho y la controversia, con lo cual para lograr otro fallo igual mucha "agua deberá transitar bajo el

puente", creándose una ficción de que una sentencia define una situación, pero es sólo una "muestra gratis" que "no soluciona problemas" a todos aunque satisface a la enseñanza repetitiva. De un árbol hacemos el bosque.

5. EL DERECHO DEBE SER TAMBIEN EFICAZ Y EFICIENTE

Nunca nos hemos puesto a pensar con rigor crítico que tan bien funcionan las instituciones que se han diseñado. Si son realmente eficaces, y algo mucho mejor sería que fuesen además eficientes. Todo transcurre en un marco de idealidad, sin anclaje en los resultados macro que suponen las normativas con lo que es captable por el alumno. Es él quien tiene que entender, interpretar y actuar: v.gr. cuántas empresas se salvan con la normativa de quiebras y concursos, cuántos actos se recurren?? A cuántos recursos se les hace lugar?? No tenemos referencias ni líneas de base para comparar situaciones reguladas con el impacto que la normatividad genera sobre las mismas y en relación al "afuera".

6. EL SISTEMA DE APRENDIZAJE: SUS CARENCIAS

6.1. ENCICLOPEDISMO

En un mundo que gira cada vez más rápido (aunque se pierdan muchas cosas entrañables y valiosos) los programas discurren en porcentajes altísimos de referencias históricas y comparadas con más antecedentes surtidos. Nuevo tributo a una erudición, que ciertamente no parece lo ideal para cubrir los enormes vacios conceptuales y operativos de los alumnos de hoy. Muchas veces me he preguntado como un alumno llegó a quinto año de la facultad, cuando carece de discurso jurídico, no razona, no sabe explicar una situación, y se limita a repetir con suerte diversa. Preguntar el cómo, para qué sirve, dónde vio lo que relata, si tiene alguna opinión sobre lo que dice … durante un examen libre o escrito suele impactarlos como si uno preguntara en un dialecto ignoto. Además los alumnos viven su presente, comprenden y aprenden en forma intermitente, no en largos discursos o compendios.

Amén de ello a más años más volumen a estudiar, con lo cual la experiencia indica que rara vez se llega al presente y si es así menos se podría incidir en el futuro.

6.2. LA FALTA DE EJEMPLOS COTIDIANOS.

La enseñanza carece en general de ejemplos accesibles a las situaciones diarias o de referencia del alumno. Los libros aluden muchas veces a casos que exceden la rápida comprensión por su ajenidad, con lo que es captable por el alumno. Es él quien tiene que entender, interpretar y actuar ante casos visualizables.

6.3. LA FALTA DE CONEXIÓN CON LOS ESCENARIOS DEL EJERCICIO DE LA PROFESION .

De los posibles perfiles que se den tales como:

- abogado del foro
- magistrado
- funcionario
- legislador (los abogados según mi conocimiento son la profesión que ocupa más cargos legislativos).

La facultad enseña solo para el abogado que ejerce libremente, y dentro de este subperfil, prioriza el abogado del CONFLICTO. Ignorando al abogado funcionario, al abogado asesor, consultor, etc.

Pero adicionalmente tampoco se integra a los escenarios profesionales reales. La adaptación profesional versa sobra prácticas de escritos, es decir un intento de ratificación de lo que se supone podrían haber cubierto parcialmente algunos JTP. Y siempre sobre el juicio y el conflicto, no sobre dictámenes, informes, sentencias, leyes, reglamentos o sobre otras esferas del quehacer del abogado.

6.4. LA CARENCIA DE PRÁCTICAS INTERDISCIPLINARIAS.

Para una realidad compleja como maneja el derecho no se aprende ni trabajo de equipo ni articulación transversal con otras disciplinas. Esto se padece gravemente en muchísimas áreas del derecho: en lo ambiental, en los temas de niñez y adolescencia, en temas de violencia, etc.etc.

6.5. LA CARENCIA DE CONTACTOS CON OTROS SERES

No existe un sistema institucional que vincule al alumno a un caso o ante un "cliente, imputado, entidad a regular, sujeto asesorable". Es decir nada de lo que vendrá se ejercita, y que es precisamente la interacción con "PERSONAS" de carne y hueso. No hablamos ni atendemos a Ticio ni a Mevio.

6.6. LA POCA APLICACIÓN DEL METODO DE CASOS.

El método de casos, que será el grueso de la vida profesional (al menos de un amplio espectro de los egresados) es una práctica aislada. Me incluyo como docente en ello.

6.7. BIBLIOGRAFIAS TAN EXTENSAS COMO INACCESIBLES.

Las bibliografías se mantienen al efecto del ego docente y la erudición de quien las formula. Los alumnos a lo sumo leen un manual, fotocopias surtidas, apuntes de terceros, y algo que pueden ver de internet. Es hora de sincerar un mínimo razonable y de libre acceso sin contar el costo de los libros. El resto será para post grado o doctorado. Además hay al menos en nuestra materia –derecho administrativo-, un fuerte impronta de lo nacional, lo cual es utilizado por una minoría, sólo los que ejercen en Capital, aunque el grueso del estudiantado es bonaerense.

7. EL CONOCIMIENTO SE EXPANDE. EL TIEMPO SE ACHICA.

Si el conocimiento se expande y el tiempo es siempre escaso (las cursadas de un cuatrimestre son en realidad de tres meses y medio, a lo que debe restarse, ausencias – propias y del alumno legalmente admisibles-, las impuntualidades de inicio y recreo (no es mi caso), los tiempos de los parciales, con lo cual en rigor son con suerte tres meses. De allí que deba priorizarse lo básico para que exista tiempo de desarrollo, discusión y varias intervenciones de los JTP para consolidar la comprensión y aplicación de conocimientos más alguna carga temporal extra clase.

8. LOS NUEVOS SOPORTES.

Reinando la informática, los cañones y filminas no son de uso corriente, las video conferencias prácticamente no existen, los videos de terceros muy didácticos no forman parte del arsenal del aprendizaje. Ergo hay un grave desfasaje entre el mundo adolescente de facebook, youtube, internet permanente, blogs, etc. con la Facultad que termina siendo un ámbito a veces de sopor y aburrimiento con un monólogo docente.

9. LOS NUEVOS ESCENARIOS.

Existen nuevos escenarios que denotan carencias temáticas en los programas tales como:

DERECHO VINCULADO A LO AMBIENTAL.
DERECHO VINCULADO A LO INFORMATICO.
DERECHO VINCULADO A LA GENETICA.
DERECHO VINCULADO A LAS COMUNICACIONES.
DERECHOS HUMANOS, etc.

Estos temas y algunos más deben ser contenidos curricularmente.

10. EL DATO DE LA COMPLEJIDAD.

Los temas no son tan lineales como se explican. En mi vida profesional pocos casos pude resolverlos tomando el punto tal o la pagina xx de algún autor. Con lo cual hay que intentar explicar la complejidad de lo cotidiano, intentando que puedan simplificarla para operar sobre ella jurídicamente. Pero en esa línea debe cambiarse el soporte conceptual y operativo en el cual se asienta el plan de estudios, cuyas observaciones realizamos en este aporte.

11. QUE RESULTA CENTRAL: ¿REPETIR O ENTENDER Y/O SABER Y/O BUSCAR Y APLICAR CONCEPTOS AL CASO?

El desafío de la enseñanza es aquel que permite que:

- Haya comprensión.
- Haya capacidad interpretativa de la complejidad.
- Haya capacidad reduccionista en un proceso inductivo/deductivo de la norma al caso y del caso a la norma.
- Haya visión crítica de la situación regulada en función del tiempo histórico y las necesidades del país, de la región o del área.

No hace falta entonces repetir como resulta el núcleo actual de avance en la currícula.

12. CONJUGAR LOS PILARES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO: DOCENCIA, INVESTIGACION Y EXTENSION CON PROGRAMAS QUE PIENSEN EN DICHAS LINEAS .

El sistema actual solo tiende a la docencia, muy acartonada, repetitiva, enciclopédica, ahistórica y casi sin rigor critico. De allí que deba generarse algún tipo de estimulación para la investigación y la extensión que puede darse con algunas “muestras” simbólicas de tales temas durante la cursada asignable a equipos de alumnos, en forma interactiva, o bien trabajos prácticos en cursadas que obliguen a los alumnos a instalarse en el campo de la realidad y que vean como sus conocimientos pueden canalizarse para resolver los problemas donde ellos se verifican.

13. CONFORMACION DE CATEDRAS Y EQUIPOS .

1.- Si bien el sistema de concursos es lo mejor, hay que analizar sistemas que permitan bajo una estricta responsabilidad de los designados no como un “menor esfuerzo” de los concursados sino como apertura a la participación de terceros para que pueda haber más cuadros en la universidad. En otras facultades a veces los concursos de cátedra son por equipos. Podría establecerse como experiencia en algunas materias que hay dos cátedras por materia. Asimismo podría servir de elemento de comparación de resultados. V.gr. tenemos carnet de conductor porque alguien nos enseño en infracción a la norma y de menor a mayor, o alguien nos presto un auto para ello.

2.- Adicionalmente hay una fosilización parcial en algunos cargos por renovación . Alguna experiencia indica que a mayor antigüedad menos dedicación porque hay “oficio”, se delega. Pero los alumnos sienten eso. Hay que pensar en un sistema de renovación más rápido de las cátedras. Eso da variedad, pluralismo, innovación y mayor dedicación por el entusiasmo humano de lo nuevo. Las rutinas gastan.

14. LA CLINICA EXTERNA .

Esta práctica es muy interesante especialmente los consultorios jurídicos gratuitos, pero debe estarse muy claro en cuanto la imposibilidad de tomar asuntos a partir de ello. Tienen que ser un sistema excluyente de aprendizaje y en su caso los tutores deberían tener honorarios diferenciales.

15. LAS CARENCIAS FORMATIVAS.

Podemos anotar las siguientes:

15.1.- IDIOMAS.

Es elemental sumar algún idioma: inglés (universal) o portugués (Mercosur) serían los más lógicos. Francés o chino pueden ser útiles. Especialmente este ultimo de gran futuro.

15.2.- LOGICA.

El derecho se sostiene en la lógica pero salvo una pincelada en el inicio de la carrera cuando casi no se la interpreta ni entiende cabalmente hace que luego se la ignore como una herramienta importante para razonar .

15.3.- NEGOCIACION Y SISTEMAS DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Gran parte de los conflictos jurídicos se resuelven negociando, pero nadie nos adiestra, ni enseña, ni explica en este arte. Entre ellos los sistemas alternativos de resolución de conflictos.

15.4.- OTROS ELEMENTOS:

15.4.1.-EL DISCURSO.

Los alumnos no saben construir un discurso jurídico. Una experiencia personal es casi dramática. En la primera clase les digo: redacten una nota con una petición a una autoridad administrativa. Francamente la experiencia es desoladora siendo alumnos de 5º año. Hay que trabajar estimulando la capacidad de redacción utilizando los elementos del derecho aplicados a los casos. Lo mismo advierto en postgrado cuando se discute el índice de un trabajo.

15.4.2.-EL LENGUAJE DEL CUERPO: INTERPRETACION.

Es importante para los abogados conocer el lenguaje del cuerpo, es un complemento del ejercicio profesional. Se utiliza para técnicas de negociación, para juicios, para discusiones, etc.

15.4.3.-ELEMENTOS DE PSICOLOGIA EN EL MARCO DE LOS CONFLICTOS.

Tener algún rudimento de psicología es básico para poder comprender y contener a los clientes. Como así también ponerle limites, y encauzar su conflicto dentro del derecho, e inclusive para quienes abrazan la Magistratura (testigos, imputados, etc.)..

15.4.4.- LA DIFUSION ETICA DE LA PROFESION.

Los abogados tenemos una mala fama, construida sobre apodos de “cuervos” “buitres”, etc. y chistes acerca del gremio nada favorables. Algún baño de ética no es inconducente, máxime cuando los aranceles son de orden público y se prestan a muchos abusos, a veces casi patentes de corso modernas.

16. LOS SISTEMAS DE EVALUACION .

El Plan debe tener un correlato con los sistemas de evaluación. De nada vale un nuevo y buen plan de estudios si la evaluación no sufre una revisión y ajuste.

16.1.- DE LA VERIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE LA MATERIA A UN SISTEMA PARCIALIZADO.

El sistema de fraccionar el conocimiento de a tercios desvinculados en las cursadas, no parece muy consistente. Hay que buscar que los alumnos puedan resolver problemas articulando conocimientos. El resultado no puede ser permanente una facilitación del menor conocimiento para progresar (el recuperatorio). La sociedad luego no funciona de esa manera: no hay recuperatorio si se pierde un derecho de un cliente. La Facultad se parece a una isla de la fantasía en este sentido: siempre hay una oportunidad más. Los sistemas de opciones múltiples tienen también una parte de alea significativa.

Es factible asignar temas para que los alumnos demuestren conocimientos integrados y ser evaluados al final, adicionando sistemas rápidos y cortos de evaluación, a ser corregidos por el equipo docente (ver nuestro punto 13) en función de respuestas tasadas previamente, lo cual facilita la labor.
16.2.- DISTORSIONES.
16.2.1. Exámenes libres
a) Maratónicos.
Algunos exámenes libres, si bien ahora la multiplicidad de cursadas los ha reducido se convierten en ejercicios maratónicos para docentes y alumnos. Esto atenta contra la homogeneidad del propio evaluador que en el inicio puede ser complaciente y no al final, o viceversa, con tal de terminar se conforma con muy poco.
b) Por azar
El tema del bolillero es una introducción del alea para evaluar conocimiento. Puede especularse en aprender 24 bolillas de tres materias y presentarse en tres sabiendo solo 8 de cada una. Pareciera más razonable un examen que permita recorrer el programa con un breve tema especial que demuestre la capacidad de precisión del alumno
c) Reducidos en tiempo.
Cuando hay muchos alumnos objetivamente los tiempos de evaluación se acortan y para alguien que invirtió mucho tiempo tal vez el esfuerzo se volatiliza en los minutos que se le de para una respuesta estereotipada que al no ser la pensada, es condenado.
¿La pregunta a responder es si queremos que interpreten, y comprendan y resuelvan una situación? o salvar la instancia formalmente ignorando el dato sustancial del conocimiento adquirido aplicado.
De la respuesta dependerá también la eficacia de un nuevo plan de estudios y evaluaciones consecuentes.
16.2.2.- Parciales Ilegibles.
Los parciales o exámenes escritos tienen un problema grave que es el alejamiento de los alumnos de la técnica de escritura artesanal por la computación. Mi experiencia indica que es difícil de entender la escritura actual sin contar las faltas gramaticales. Habría que pensar en un sistema de evaluación con disponibilidad de computadoras para hacer entendible los textos. A manera de SALON DE EVALUACION.
16.2.3.- Insuficiencia entre lo Teórico y lo Práctico.
Nuestra carrera tiene a lo largo de su desarrollo la disociación de la teoría con la realidad, en general y de los alumnos en particular, amén de trabajarse sobre temas marginales en cuanto posibilidad de ocurrencia.
17. LA INEXISTENTE DEVOLUCION SOCIAL DE LA INVERSION COMUNITARIA EN EL FUTURO ABOGADO
Es una conquista de inclusión y orgullo nacional que la Universidad sea centralmente pública y gratuita en nuestro país. No obstante, es menester que los estudiantes asuman solidariamente este esfuerzo, que realiza el conjunto de la sociedad en su beneficio. En efecto si la Universidad se sostiene con los impuestos, Argentina tiene una fuerte composición a partir del Impuesto al Valor Agregado que no es el mejor tributo, en tanto afecta desigualmente a los de menores ingresos.
Ello importa que las clases populares en sus consumos mínimos tienen IVA incluido. Y una parte importante de dicho tributo es el que financia la Universidad, no el impuesto a las ganancias.
¿Cómo pensamos que los alumnos devuelvan a la sociedad el esfuerzo que esta hizo en ellos como inversión en conocimiento? Al momento es solo un caso a ser asumida vía ley del ejercicio profesional y considerando una duración de estudios que supera en más del 40% el tiempo ideal (7,5 años).
18. ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA MATERIA DERECHO ADMINISTRATIVO II.
- Variar la perspectiva ideológica de que la administración está contra los particulares, eso es una posición liberal, las experiencias argentinas indican que es el estado quien debe proteger a los particulares de muchos poderosos, lo que no impide evitar eventuales abusos públicos.
- Reducir drásticamente desarrollos con antecedentes teóricos e históricos irrelevantes explicando el funcionamiento de las instituciones, la dinámica de una ley y la lógica de un fallo que atiende a la plenitud del instituto. Ello permitiría en una estimación teórica reducir una cuarta parte del programa, incorporar nuevos temas y habilitar en su contenido que cada bloque temático tenga correlatos prácticos.
19. EJES A CONSIDERAR DE MANERA TOTALIZADORA
Finalmente digamos que estas variables deben concurrir simultáneamente.
19.1.- Plan de estudios.
19.2.- Régimen de Enseñanza.
19.3.- Sistemas de Evaluación.
19.4.- Práctica pre-profesional.
19.5.- Vinculación al ejercicio profesional.
19.6.- Renovación de la docencia.
19.7.- Cuantificaciones permanentes. Nos marcan los resultados concretos.

19) (PROYECTO 42) Algunas consideraciones realizadas desde la cátedra acerca del dictado de la materia, régimen de correlatividades de la materia y perfil del profesional que se forma por Angel Carballal, Prof Titular de Finanzas y Derecho Financiero.

En el marco de las evaluaciones en curso, dentro del proceso de reforma al plan de estudios y a tenor de lo solicitado por la Comisión de Derecho Público, los siguientes son los lineamientos generales que desea exponer quienes integramos la Cátedra II de Finanzas y Derecho Financiero:
a) En cuanto al régimen de correlatividades:
1.- No genera inconveniente alguno la relación del plan actual entre la materia y Derecho Administrativo II.
2.- Respecto a Economía Política, se entiende indispensable quitarla como asignatura del primer año y llevarla a instancias posteriores de la carrera.

Es un hecho comprobado a lo largo de muchos años, que ningún estudiante de esa al-tura de la carrera se encuentra en situación de entender acabadamente su contenido, mucho menos extraer del mismo la información y conocimientos que la enriquecen como asignatura. En igual sentido, cualquier tipo de correlatividad con Finanzas y Derecho Financiero, en la situación actual, deviene carente de fundamentos y efectos.

Consecuentemente, la propuesta sobre el particular es mantener la correlatividad en cuestión, mas transformar a Economía Política en una asignatura de, por lo menos, el tercer o cuarto año de la carrera.
b) Sobre la ubicación de Finanzas en 5° año de la carrera:

Se ratifica la misma. En opinión de la Cátedra II no debería producirse cambio alguno sobre el particular.
c) En cuanto a la enseñanza teórica y práctica de la materia:
1.- La principal problemática se centra en la escasa carga horaria asignada.
El formato cuatrimestral con seis (6) horas semanales de clases, condicionados normalmente por feriados, asuetos y otros imponderables, dificultan seriamente alcanzar una razonable exposición de los temas que integran el programa. Tal es así, que la Cátedra I ha generado un sistema de curso "intensivo" (8 horas semanales) y la nuestra ha agregado 2 horas por semana de curso "voluntario", llevando a 8 también la carga total semanal.
Justamente esta se entiende que debería ser la solución a implementar, esto es, llevar la carga horaria oficial para la asignatura a ocho (8) horas semanales, manteniendo su carácter de cuatrimestral.
2.- Otras soluciones posibles (aunque se tienen serias observaciones sobre las mismas):
2a.-Transformar la cursada en semestral (se entiende que si bien solucionaría la cuestión vinculada al tiempo de clases, impediría satisfacer la demanda de cupos para cursar de los estudiantes, siendo que tratamos sin dudas con una asignatura que requiere casi indispensablemente, del asesoramiento docente para su comprensión y estudio)
2b.- Dividir la materia en dos: Finanzas Públicas (abarcando los fenómenos financieros, las teorías generales del gasto público y los recursos públicos y el derecho Presupuestario) y Derecho Tributario.
La Cátedra II se opone a esta opción, entendiendo que ningún fenómeno tributario, sea cual sea la disciplina desde la que se lo estudie, aún la jurídica, podrá ser cabalmente comprendido, sin el previo análisis de los fenómenos financieros generales.

d) Sobre la relación de la materia con el perfil profesional:

Obviamente se requiere una mayor atención a lo "práctico", justamente por el gran potencial profesional que ha adquirido la asignatura. Sin embargo, en el marco horario actual, lo único que puede adoptarse es un enfoque práctico al momento de darse los temas y su-mando jurisprudencia indispensable para el desarrollo profesional de cualquier futuro asesor tributario.

En caso de aumentarse la carga horaria, podría trabajarse mucho más con el desarrollo de trabajos prácticos.

Amén de esta realidad, ha surgido en el seno de la Cátedra, la propuesta de evaluar la creación de nuevas materias prácticas (Tributario / Laboral / Administrativo), más allá de las dos que se verifican en el plan de estudios vigente (Penales / Civiles y Comerciales). Incluso podría dejarse a decisión del estudiante la opción de dos de estas materias a fin de poder recibirse, u otra forma de permitir seleccionar la especialidad que desee seguir, sin perjuicio de permitir obviamente el curso de todas las opciones.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y a modo de conclusión, no debería exacerbarse esa visión práctica por encima de la formación general del futuro profesional. Más bien debería asegurarse que aquella visión sea un complemento, necesario, pero complemento al fin de esta formación general.

Nuestra materia es, por sus características, necesaria e inescindiblemente política y económica, además de jurídica. Constituye un espacio valiosísimo (como todos, pero tal vez especialmente) para trabajar la formación de profesionales con responsabilidad y compromiso social y cívico, dispuestos y con herramientas teórico-prácticas para contribuir a la transformación de su entorno.

Indudablemente hace falta apuntar al estudio del derecho financiero en exceso del perfil litigante, del detalle técnico y de la práctica en el procedimiento y proceso en particular.

El espacio para ese desarrollo, muy importante sin dudas, podría buscarse como nueva materia práctica (tal como se expusiera) o meramente con una mayor carga horaria (tal como se propusiera).

Pero paralelamente, esas soluciones permitirían dedicar más tiempo y trabajo al análisis de las finanzas públicas pues, de hecho, el derecho tributario es solo un aspecto de ellas.

En este orden, resultaría muy útil a ese fin "acercar" Economía Política para poder conjugar mejor sus contenidos y aprovecharse mutuamente.

Bajo estas premisas, se colaboraría seria y verdaderamente en la formación de un universitario conectado con la realidad, crítico -porque habrá de hacerse de herramientas para ello-, interesado en lo que sucede y que piensa a la universidad más allá de los moldes académicos o como el puente -de simple tránsito- al éxito profesional expresado en términos de acceso fácil y economicista, desligado del estudio, del esfuerzo y del compromiso.

Dr. Angel Carlos Carballal
Titular Ordinario – Cátedra II
Finanzas y Derecho Financiero

20) (PROYECTO 43) Propuesta de modificación del plan de estudios vinculado a la disciplina y su régimen de correlatividades por Julia Catalina D´Anna Prof. Titular Interina de Derecho de Minería y Energía.

A La Comisión Encargada de la
Modificación del Plan de Estudios

Julia Catalina D'Anna, Docente Titular de la materia Derecho Minero y de la Energía cátedra II vengo a expresar mi total adhesión a lo expresado por el Dr. Héctor Iacomini, en escrito elevado en su oportunidad para vuestra consideración y tratamiento.

Acompaño algunas propuestas surgidas de mi experiencia personal en el dictado de la materia:
A) La misma debería tener un tiempo de cursada de por lo menos un semestre. Imposible abarcar lo suficiente con la modalidad actual de cursar 4 materias por cuatrimestre, y régimen de 9 faltas, que hace de ésta carrera una maratón con resultados no del todo ajustados a excelencia. No hay tiempo para la maduración ni la complementación de los conocimientos. Creo incluso que se pierde el amor y el gusto por la sabiduría. Los alumnos deben especular con tiempos escasos para tantas materias

B) Régimen de Correlativas:
Derecho Constitucional
Derecho Provincial y Municipal
Derecho Administrativo y

Derecho Procesal

C) A nivel nacional la carencia actual en los aprendizajes del contenido de nuestra materia se debe precisamente a la adhesión a una corriente muy de moda desde 1980 en adelante que se gestó en distintas Universidades del país donde se pretendió embolsar en el mismo silo, el Derecho Minero, L Energética, Derecho Ambiental, Derecho Agrario y de los Recursos Naturales, y creo que a todas luces no tuvo los resultados que se aproximen a lo optimo. Obvio, es imposible enseñar y que los alumnos entiendan algo…, si en el mismo programa y en igual término de cursada, se juntan. Derecho Minero., Derecho de la Energía, Agrario, Forestal, Derecho de Agua, los alumnos termina no sabiendo nada de nada, o caso contrario, si necesitan las nociones esenciales y muy localizadas las adquieren en cursos de pos grado, en donde se enseñan cuestiones puntualísimas, como por ejemplo Derecho de la Servidumbres Minera, que de acuerdo a mi criterio no amerita créditos, "" situación que hasta el presente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, por méritos y capacidad de sus autoridades se mantuvo al margen"".-
La variedad e importancias de temas actuales, por ejemplo Minería Océanica, Ley de Glaciares, Tratados Internacionales para la explotación de Minerales. Ley de Inversiones Mineras y tantos otros como Fuero Minero, Regalías, Prohibición de explotar el Estado Provincial las Grandes Áreas Mineras que ellos exploran.
Concesiones de Grandes Áreas Petroleras, Marco Regulatorio de la Industria del Gas, tratamiento legal de los Minerales y Elementos Nucleares Procesal Minero, toda ésta enumeración de temas que no se agota en si misma y muchos más son dictados a los cursantes de la materia en ésta Casa de Altos estudios.- Insisto, no sucede lo mismo en la gran mayoría de las Universidades del País.
Hasta el presente, no tenemos compromisos que nos aten para realizar lo contrario.
D) En cuanto al Derecho Ambiental Minero y Energético, solo puede estudiarse y dictarse en forma simultánea con la materia a la cual atañe, toda actividad humana produce Impactos en el Medio Ambiente, pero no es lo mismo contaminar el aire a través de emanaciones producidas por los escapes de automotores, por que la ciencia y la técnica ya tienen la solución para el caso, que producir en centros de alta densidad poblacional cavas profundan, que no solo quitan suelo con posibilidad de utilizarse para la construcción de inmuebles, si no que hacen peligrar la vida de las personas, vean la diferencia entre un problema y otro concerniente a una misma ciudad. .
No es lo mismo que se quemen pastizales sobre el litoral del Paraná, a que se produzca una fuga masiva de gas, por desperfectos en una planta regasificadora colocada a orillas del mismo río, son distintas las legislaciones, las situaciones y las consecuencias…

E) Aclaración: Si en alguna oportunidad en toda la historia de la Actividad Minera pudo aplicarse una ley que pertenecía al ámbito del derecho Agrario fue 1907, en ocasión del descubrimiento Formal de Petróleo en Comodoro Rivadavia, por que a pesar de existir y estar en plena vigencia el Código de Minería, desde fines del siglo anterior, fue solo circunstancialmente, y a los efectos de evitar el acaparamiento del hidrocarburos por parte de empresas extranjeras. Se aplico la ley llamada de Tierras Fiscales y Colonización, pero en forma inmediata se dicta el Decreto de la Gran Reserva. . El Derecho Minero que regula también las fuentes principales de producción de energía, es autónomo, por sus propios contenidos específicos, por su influencia en la economía del mundo, por factor estratégico a nivel nacional e internacional. Por las particularidades de su trabajo, por las especiales características que posee el mismo, dueño de ciertos privilegios como, por ejemplo, tener incorporada la utilidad Pública en el mismo código y para todos los grandes procedimientos que él regula. Sin duda la Minería debe realizarse en zona rural, pero nada parecido encuentro, en el tratamiento de un recurso renovable (ejemplo actividad agraricola -ganadera) y uno no renovable, de trabajos extractivos y destructivos, donde la mayor aspiración puede ser la mitigación.
Si algo pueden tener en común éstas dos materias es que desde la cátedra que presido se advierte a los cursantes que tratemos que el campo con su producción agrícola-ganadera no se convierta en el surtidor del mundo, dada la necesidad de alimentos que existe en el mundo.
F) El Derecho Ambiental minero se encuentra legislado en el título X III del Código en la materia, y en cada provincia por su Legislación Reglamentaria Además del consenso de Bariloche año 1996, donde las provincias mineras firmaron el acuerdo sobre los presupuestos mínimos.
G) Es muy amplio el contenido de la materia y con muchas posibilidades de aplicarlos sea desde la titularidad de un estudio propio, desde una asesoría legal así como desde otros ángulos con salida laboral distinta y redituable se ofrece al alumno.
Así como se trata de dar una explicación de las cuestiones que deberían resolverse en
El Fuero Minero, que algunas provincias han implementado y hace muchos años, ejemplo Salta, Catamarca, en forma exclusiva y otras provincias como las Patagónicas, con Juzgados en lo Civil, Comercial y Minería. De acuerdo a lo que prescribe la Constitución Nacional los Códigos de Fondo los dicta la Nación los de Procedimiento Cada Provincia. Así como también tiene su Régimen Fiscal
H) En el proyecto formativo no solo de un estudiante de derecho, los conocimientos que brinda nuestra materia adquieren significación, el Argentino que no estudió o no tuvo conocimientos de las leyes de hidrocarburos para dar un solo ejemplo la 24.145/94, debe saber que la empresa testigo en materia de hidrocarburos-Y.P.F.- fue desguazada, por mandato legal, que por el mismo mandato lo obtenido por la venta de las acciones clase A de la mencionada empresa (art. 22) tenían como destino obligatorio mejorar el sistema previsional argentino.
Y una de las funciones o misiones de un egresado de la facultad, es compartir sus conocimientos con el resto de los ciudadanos, es decir enseñar lo que le enseñaron, sin duda ejerciendo un deber cívico y solidario, él pudo estudiar, el otro no lo pudo hacer, pero contribuyó con sus impuestos al presupuesto universitaria.
La Plata, octubre de 2011

Julia Catalina D'Anna
Cátedra de Derecho Minero y de la Energía

21) (PROYECTO 44) Reflexiones y análisis crítico de la disciplina, su régimen de correlatividades y ubicación y el régimen de enseñanza por Oscar Zas. Prof. Titular de Derecho Social.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Señores Miembros de la Comisión de Derecho Público, para el estudio de la Reforma del Plan de Estudios

ASIGNATURA: "DERECHO SOCIAL" (Cátedra II)
Propuesta del Sr. Profesor Titular Ordinario Abogado Oscar Zas

Adhiero, en lo substancial, a la propuesta formulada por el Profesor Titular Ordinario de la Cátedra I de Derecho Social, Abogado Angel Eduardo Gatti.
Como única disidencia a la proposición incluida en el ap. III).1).a) de la mencionada presentación, considero que debería mantenerse la unidad de la asignatura, pero con una extensión semestral.

Abogado Oscar Zas
Profesor Titular Ordinario de Derecho Social (Cátedra II)

22) (PROYECTO 45) Aportes y reflexiones en lo referente a la disciplina Derecho Social por Ricardo Cornaglia Director del Instituto de Derecho Social y la Previsión.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de la Plata

La Plata, 18 de octubre de 2011.
Propuesta para la Reforma del Plan de Estudios.

I. Introducción.

Mediante la presente propuesta, el Instituto de Derecho Social responde a la generosa invitación que le fuera formulada a través del señor Vicedecano a los fines de pronunciarse sobre la reforma del plan de estudios que se está debatiendo en el ámbito de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En primer lugar, desde este Instituto celebramos que -finalmente, después de tantos proyectos fallidos- la Facultad se halla abocado de lleno a debatir una reforma de la currícula, la cual, por cierto, presenta algunas marcadas deficiencias que necesariamente deben ser enmendadas en esta oportunidad.

En efecto, existe consenso en todos los claustros respecto a la necesidad de actualizar el plan de estudios. Las profundas transformaciones ocurridas en las ciencias jurídicas en el último medio siglo, hacen imprescindible que así sea. Empero, hasta ahora, las tentativas de modificación han fracasado porque no se han obtenido los acuerdos necesarios en relación a la dirección que debe asumir la transformación. Es dable esperar que ésta constituya la oportunidad histórica para zanjar esas diferencias.

En ese trance, con el objeto de aportar nuestra contribución al debate, dividiremos esta presentación en cuatro apartados destinados a formular algunas aproximaciones generales sobre: (i) la finalidad central que debe perseguir la enseñanza universitaria; (ii) el plan de estudios vigente para la carrera de abogacía; (iii) el rol que dentro del mismo se le ha asignado al Derecho Social; (iv) cómo debería reformularse el plan de estudios en lo que respecta a nuestra disciplina.

II. Breve reflexión sobre la finalidad central de la enseñanza universitaria y las funciones de la Universidad.

Un paso previo insoslayable para poder pronunciarnos sobre la reforma del plan de estudios consiste en detenernos a reflexionar -aunque más no sea brevemente- sobre cuál es la función que deben perseguir las universidades. En efecto, mal podríamos pronunciarnos en abstracto sobre los contenidos que debería incluir el plan de estudios de una carrera sin antes tener claro hacia donde debe dirigirse la enseñanza universitaria en general, pues de la respuesta que brindemos a este interrogante dependerá, en gran medida, la dirección que queramos asignarle a la currícula de nuestra unidad académica. Es que -como bien ha sido señalado en la fundada propuesta del Profesor Angel E. Gatti- una reforma curricular es, ante todo y sobre todo, una elección valorativa sobre el modelo de sociedad a construir.

En ese contexto, resulta insoslayable introducirnos en el debate teórico relativo a si las Facultades de Derecho deben tener como única y exclusiva finalidad formar profesionales para responder a las necesidades o demandas del mercado laboral, en cuyo caso la planificación de las carreras de abogacía debería ser diseñada en virtud de ese tipo de exigencias.

El debate se enmarca, en realidad, en una discusión más amplia, que excede largamente a las Facultades de Derecho y abarca a la educación superior en general y a la universitaria en particular. Se trata, en última instancia, de analizar las funciones y los fines de la universidad y hasta su rol en la construcción de un proyecto de sociedad y de país.

Creemos firmemente que es un debate que hay que dar, pues de lo contrario estaríamos dando por sentado (al menos por omisión), que esa -diseñar profesionales a la medida de las exigencias del mercado de trabajo- debe ser la primordial función de la universidad.

Por lo demás, es un tema candente, que viene ocupando la escena desde algún tiempo y ha adquirido una renovada actualidad con la implantación de la globalización y el neoliberalismo como nuevos modelos de organizar las relaciones socio-económicas dentro del sistema capitalista.

En efecto, como bien lo sostiene el notable sociólogo del derecho Boaventura de Souza Santos, a finales del siglo XX entró definitivamente en crisis la idea de universidad que habíamos conocido hasta entonces.

Por un lado, estalló la crisis de hegemonía de la universidad, pues se produjo una contradicción entre las funciones tradicionales que históricamente se le habían asignado desde la Edad Media europea (producción de alta cultura, conocimientos críticos y humanistas) y aquellas que le fueron atribuidas a lo largo del siglo XX (conocimientos instrumentales, útiles para la formación de la mano de obra calificada que exige el desarrollo capitalista). La incapacidad de la universidad para zanjar esa contradicción hizo surgir instituciones alternativas, por lo que ella dejó de ser la única institución en el ámbito de la educación superior y la investigación. Por el otro, se desató asimismo una crisis institucional, originada en la contradicción entre la autonomía de la universidad en la fijación de sus valores y objetivos y la presión creciente para someterla a criterios de eficiencia y productividad de naturaleza empresarial.

Esas crisis tuvieron mucho que ver con el cambio de las políticas estatales que sobrevino al triunfo del neoliberalismo que -en el campo educativo, como una de las expresiones particulares de su deliberado

desinterés por las políticas sociales en general- se tradujo en el abandono de la concepción que entendía la educación universitaria como un bien público prioritario. En ese contexto, se puso a la universidad al servicio de proyectos modernizantes autoritarios, lo que derivó en la privatización de la educación universitaria y el surgimiento de un emergente mercado universitario, en el cual se obligó a competir al estado en condiciones desleales. Hubo, pues una inducida o provocada pérdida de prioridad del bien público universitario, todo lo cual no fue casual, sino que constituyó una opción política de fondo que tuvo por objeto la descapitalización y desestructuración de la universidad pública a favor del emergente mercado universitario, es decir una mercantilización de la universidad.

Este proyecto de mercantilización se produce básicamente en dos niveles. En primer lugar, por medio de la descapitalización de la universidad pública, a la que se induce a sobreponerse a la crisis financiera generando sus propios ingresos, especialmente a través de alianzas con el capital. De modo tal, que si bien la universidad mantiene en lo formal su autonomía, privatiza parte de sus actividades. Ello no constituye una cuestión menor, pues es evidente que si el gran capital invierte en el financiamiento de la universidad, directa o indirectamente ésta habrá de ir adaptando la estructura de las carreras para formar profesionales del perfil exigido por aquél. En segundo orden, se tiende a eliminar la distinción entre las universidades públicas y privadas, transformando la universidad en una empresa que produce para el mercado.

Este proceso de mercantilización, si bien es un fenómeno de escala global, repercute diferente en los países centrales, semiperiféricos y periféricos, es decir, en los globalizadores y los globalizados.

En los países centrales no triunfó la privatización de universidades, pero las instituciones públicas se vieron obligadas a reformar sus programas ante el surgimiento de institutos no universitarios destinados a formar para el mercado de trabajo. En los países periféricos, este proceso tuvo un efecto devastador, como lo demuestra el caso de algunas naciones africanas, en las cuales los organismos internacionales de crédito (principalmente, el Banco Mundial) recomendó centrarse en la educación media porque, en su criterio, la universitaria no generaba allí suficiente "retorno", fomentando el reemplazo de las universidades por institutos politécnicos antigeneralistas, orientados a la formación profesional.

Como corolario de este proceso de mercantilización de la universidad, se produce una nueva forma de definir la relación entre universidad y sociedad. Y si bien no es deseable el cientificismo abstracto desprovisto de todo contacto con la realidad y con las necesidades del país, este traspaso del límite en la presión productivista, desvirtúa la universidad, vaciando sus objetivos más inmediatos de cualquier preocupación humanista y cultural. La universidad se convierte así en una institución de "educación para el mercado permanente" cuya función eminente es la adaptación a las exigencias de la economía. Se soslaya así por completo la importancia de la universidad en la construcción de un proyecto de país y en la creación de pensamiento crítico y a largo plazo. Además, la inversión educativa pública se vuelve más selectiva en función de las necesidades del mercado y emerge una contradicción entre la rigidez de la formación universitaria y la volatilidad de las calificaciones exigidas por el mercado , que –lógico es suponer- lleva a la esquizofrenia de la necesidad de modificación permanente de contenidos y planes de estudio.

Llegados a este punto es dable desenmascarar algunos preconceptos instalados por la lógica neoliberal aplicada a la educación superior universitaria. Como bien lo puntualiza Gentili, las políticas neoliberales y conservadoras han instalado un discurso hegemónico a través de las cuales estas políticas se instalan en el plano educativo y "triunfan". Dos de sus principales estrategias en tal sentido son el discurso de la calidad y la subordinación del sistema educativo al mundo productivo-laboral. El autor muestra como la idea de calidad que se ha instalado, es una idea mercantilizada. En este marco se desarrolla y extiende la concepción de la educación como un bien que se compra y que se vende, es decir como mercancía.

En definitiva, el neoliberalismo propone sustituir el paradigma institucional de la universidad por un paradigma empresarial, en el cual el mercado educativo debe ser diseñado globalmente para poder maximizar su rentabilidad.

Ha quedado claro, pues, de qué manera el neoliberalismo pretende mercantilizar la educación universitaria, reduciendo a la universidad a la única función de formación de profesionales acordes a las contingentes y volátiles demandas del mercado.

Las preguntas que surgen ahora son las siguientes: ¿Debemos quienes formamos parte de la comunidad universitaria aceptar ese destino como el único posible para la universidad? ¿Es la formación para el sistema productivo la misión principal de la academia?

Frente a los discursos que sostienen que para enfrentar la crisis que sufre la universidad, la educación superior debe encaminarse a promover una diversificación de los estudios que atienda tanto a las expectativas y demandas de la población cuanto a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva, privilegiando un estilo de formación profesional que facilite a los egresados la salida laboral, nos preguntamos con Perla Aronson: ¿Debe encararse la formación de los graduados siguiendo únicamente los dictados del mercado? ¿Deben éstos adiestrarse para una práctica especializada cuyas herramientas y nociones puedan resultar de utilidad para distintas organizaciones y diversos actores sociales, o en su defecto la formación debería encaminarse a profundizar un perfil de productores de conocimiento a los fines de comprender más y mejor la realidad y cuyos frutos contribuirían a una reserva de saber más allá de su exacta compenetración con actividades técnicas concretas aunque sin renunciar a una aplicación específica? La capacitación a impartir desde la universidad ¿debe consistir en un conocimiento concebido en tanto "bien simbólico" o en un "conjunto de destrezas?

Luego de analizar estas cuestiones, la autora citada arriba a la conclusión de que la crisis que atraviesa la universidad, obliga a la institución a "reflexionar acera de los modos posibles de superarla, aprovechando la coyuntura, no para diseñar su formato institucional al compás de los avatares el mercado", sino para examinar cuestiones tales como los contenidos del conocimiento que imparte, los procedimientos para hacerlo, los servicios que presta a la comunidad, atendiendo para ello al perfil de los graduados que forma.

En virtud de ello –concluye- el desafío de la universidad no parece consistir en su mayor o menor adaptación a las necesidades del mercado como si ésta fuera la demanda excluyente y primordial, sino en su posibilidad concreta de conectarse con la sociedad en general de un modo tal de responder a sus exigencias, las cuales exceden con mucho las del mercado laboral o las de la productividad.

Coincidimos con esa corriente de pensamiento, pues el paradigma de las universidades públicas no debe permitir que la eficiencia, calidad y responsabilidad educativas sean definidas en términos de mercado, ni que la universidad se torne vulnerable a las necesidades de los clientes. Es prioritario, pues, como bien lo señala de Souza Santos, definir una política nacional que tome a la educación como un bien público orientado a un proyecto de nación.

Sin embargo, como toda crisis encierra una oportunidad, no podemos quedarnos en la mera crítica del proyecto neoliberal para la universidad, sino que es necesario indagar cuáles han de ser los lineamientos para su reconstrucción.

Con todo, si bien es cierto que la universidad no puede orientarse exclusivamente por los requerimientos del mercado, no lo es menos que tampoco puede desconocer cuáles son las exigencias sociales para definir los perfiles de la formación profesional. Tan irrelevante para un proyecto de nación ha de ser la universidad que se maneja exclusivamente por las pautas mercantiles como aquella que, ubicándose en el otro extremo, adopta un perfil excesivamente cientificista alejado por completo de las necesidades del país y de la comunidad en la que se inserta.

Como lo señala Pérez Lindo, aunque el paradigma de la "razón práctica" se ha ido imponiendo mundialmente en todas las universidades, es erróneo confundir el formidable despliegue de las funciones prácticas del conocimiento con las demandas del mercado o con las ideologías neoliberales , lo que implica que la educación para la práctica no debe estar ausente de los planes de estudio, siempre que no esté dirigida al aprovechamiento instrumental del capital como pretende el neoliberalismo. De lo contrario, volveríamos al típico conocimiento de la universidad que entró en crisis a finales del siglo XIX, en cuyo marco se impuso un conocimiento predominantemente disciplinar descontextualizado del mudo cotidiano de la sociedad.

Se impone, pues, reformular la relación entre la universidad y la sociedad en el marco de un proyecto que tribute a los intereses generales, buscando la forma de que la agenda de la educación universitaria no sea fijada por el mercado.

En ese sentido, coincidimos con de Souza Santos en cuanto postula que debemos marchar desde un conocimiento universitario hacia otro pluriuniversitario, que redefina la relación entre ciencia y sociedad. Asimismo, en cuanto plantea que la lucha contra el funcionalismo mercantil, debe construirse una alternativa contrahegemónica que priorice la utilidad social de la universidad e, incluso, otorgue respuestas a los grupos sociales que no pueden atraerla por la vía del mercado. Debe producirse, pues, una "ecología de saberes", esto es, una reorientación solidaria de la relación universidad-sociedad.

En una misma línea de pensamiento, sostiene Carolina Abdala, que la universidad se enfrenta al desafío de definir o redefinir su misión atendiendo a necesidades sociales prioritarias.

Se impone, entonces, revitalizar las tres funciones centrales de las universidades que han sido devaluadas a favor de la capacitación profesional: las de crítica social, transmisión de cultura y promoción del conocimiento.

La universidad no puede permanecer ajena al debate sobre el valor, la utilidad social y la pertinencia de lo que aprenden los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar caminos sin aceptar de modo acrítico y sumiso las condiciones que impone la lógica del mercado?

Una visión radicalmente diferente de los vínculos entre educación y trabajo, supone una educación no subordinada a la presente organización del empleo y de la producción.

El reto es lograr que la universidad forme ciudadanos libres que se integren en una sociedad democrática, capaces tanto de detectar sus problemas y aportar soluciones, cuanto de producir conocimientos científicos que pertenezcan a la sociedad y que puedan ser distribuidos en el conjunto de la misma. Que esta institución se desarrolle en estrecha vinculación con el sistema social más amplio y su función no se reduzca a la formación de profesionales en condiciones de insertarse en el mercado laboral, preocupada sólo por los designios de éste. La universidad, en tanto institución democrática, debe dar prioridad al desarrollo del conocimiento científico cuya difusión será de utilidad para los diferentes sectores sociales.

El plan de estudios -insistimos- es siempre un proyecto político. Por ello, hay conocimientos que no pueden estar ausentes y debe analizarse la función social de la universidad.

En orden a los campos que estructuran al currículum, deben contemplarse necesariamente los siguientes: el epistemológico teórico, el crítico social, el científico tecnológico, el de incorporación de los elementos centrales de las prácticas profesionales.El currículum de la formación de graduados universitarios admite -o más bien demanda- la inclusión de diferentes tipos de saberes, los cuales rebasan ampliamente los disciplinarios. En este sentido la idea de capacidad crítica se relaciona con la posibilidad de la educación como acción para el cambio y la emancipación, en el camino de construir una sociedad más justa, misión irrenunciable del Derecho.

III. El plan de estudios vigente.

El plan de estudios con que cuenta la Facultad consiste en una mera enumeración de asignaturas, las que están divididas en un cinco años y utilizando como criterio ordenador las relaciones verticales entre ellas.

No contiene una fundamentación explícita, la que sin embargo puede inferirse de los objetivos institucionales.

El plan apunta a una formación generalista, no habiendo ningún tipo de orientaciones ni especializaciones en la carrera de grado.

No resulta sencillo realizar un análisis desde la teoría del currículum de este listado de materias contenido en el plan de estudios.

Justamente cuando la teoría del currículum expone que no bastan meros contenidos sino que es fundamental definir objetivos, resulta -en nuestra opinión- inadecuada la técnica con la que el plan de estudios en cuestión ha sido desarrollado.

Ahora bien, es sabido que en la elaboración de todo plan de estudios no son sólo las cuestiones estrictamente académicas las que determinan su estructura y contenido, sino que dicha confección está teñida de cuestiones políticas y diferentes luchas de poder que lo afectan de manera más o menos directa. Es decir, que puede que no sea casualidad que esa currícula consista solamente en un listado de materias desprovisto de toda fundamentación pedagógica.

A estos fines, y como manera de intentar desentrañar dicha cuestión, es importante analizar el contexto socio-político en el que se dictara el plan de estudios, ya que, como antes comentáramos, el mismo ejerce inexorablemente una influencia determinante sobre la estructura, contenido, objetivos (explicitados o no) del currículum y, consecuentemente, del perfil profesional al que se aspira.

En el caso que nos ocupa el plan data del año 1959, y si bien ha sufrido una reforma en el año 1983, ésta ha sido mínima, manteniendo tanto las materias como la estructura del original.

En aquél entonces el país atravesaba una situación de crisis política institucional al que no fue ajena la vida universitaria. Cercana en el tiempo la aprobación del funcionamiento de las universidades privadas

que motivó el famoso conflicto "laica o libre", la situación ejerció una importante influencia sobre la estructura y los contenidos del plan.

A la luz de la estructura de la currícula, es lógico que no sorprenda la ausencia de definición del perfil profesional. En efecto, no está definido, pero puede llegar a inferirse de las asignaturas incluidas, surgiendo como nota paradigmática un neto predominio del derecho privado -con clara tendencia a la formación de los estudiantes para el ejercicio de la profesión libre como abogados litigantes- y una marcada ausencia de contenidos sociales (tema sobre el que ahondaremos más adelante) y de la casi nula articulación teoría-práctica, en tanto sólo encontramos dos materias prácticas de adaptación profesional.

Se puede resaltar también la ausencia de estrategias pedagógicas en el plan de estudios, lo que lógicamente muestra un predominio del contenido por sobre los objetivos, es decir, del "qué" sobre el "cómo".

En definitiva, con arreglo al plan de estudios vigente, quien egresa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, obtiene el título de abogado, con una formación generalista y una orientación de abogado básicamente litigante para la defensa de derechos e intereses individuales.

En suma, el currículum se encuentra más orientado al litigio y al desempeño de la "profesión libre". Lo vemos por ejemplo porque las pocas materias prácticas que se dictan (las denominadas "Prácticas Civiles y Comerciales" y "Prácticas Penales") están generalmente orientadas para enseñar la práctica del abogado litigante. Se tiende, pues, a formar abogados con aptitud para trabajar para individuos. No existe, por el contrario, una preparación encaminada a moldear abogados que puedan desempeñarse en organizaciones públicas o privadas que gestionen intereses difusos o colectivos.

Por otra parte, la promoción e incentivo de la investigación científica entre los estudiantes es mínima, atento que se limita a la obligatoriedad de realizar el Seminario de la Carrera.

Puede decirse a manera de conclusión que el plan de estudios vigente:

(i) Privilegia la formación de un abogado-generalista.

(ii) No está definido el perfil profesional. Se deduce, el de abogado orientado al ejercicio de la profesión libre en defensa de derechos e intereses individuales.

(iii) La articulación teoría-práctica es escasa.

(iv) Hay un claro, exacerbado e injustificado predominio del derecho privado sobre el derecho público y social.

(v) Hay una escasa promoción de la investigación científica.

IV. El rol asignado al Derecho Social en el plan de estudios vigente.

Como lo mencionábamos en el apartado anterior, se advierte en el plan de estudios vigente un marcado predominio del derecho privado (civil y comercial) por sobre el derecho público y social, preferencia verificable por la cantidad de asignaturas y carga horaria asignada a cada uno de esos campos disciplinares.

Aunque es discutible que el Derecho Social debe ser catalogado como una rama del derecho público (desde su consolidación como disciplina autónoma, muchos autores piensan que es un tertius gens, es decir una tercera categoría no encuadrable ni en el derecho privado ni en el derecho público), es, a la inversa, indiscutible que esa disciplina se encuentra totalmente discriminada e infra-representada en el plan de estudios vigente para la carrera de abogacía. Ello así, porque la relevancia mayúscula que tienen los contenidos abarcados por el Derecho Social en la vida cotidiana de todas las personas, así como en la propia regulación de la sociedad, e -incluso- en la práctica profesional de la abogacía, no encuentran un correlato adecuado en la escasa importancia que le ha sido asignada en la currícula. Paralelamente, es a todas luces evidente que otras ramas de del derecho que -sin dejar de ser necesarias- no tienen ni por asomo la importancia social, teórica y profesional que tiene el Derecho Social, se han visto beneficiadas con una atribución de espacios considerablemente superior en la grilla del plan de estudios.

Si esa discriminación puede explicarse tanto histórica (en tanto el Derecho Social es una disciplina jurídica relativamente nueva en términos históricos, que se desgajó del tronco del derecho privado a principios del siglo XX para regular adecuadamente las nuevas relaciones sociales que en el campo de la producción y el trabajo trajo aparejadas el capitalismo y que no podían ser eficazmente reguladas por aquél), como políticamente (el Derecho Social es, más allá de su ambivalencia fundante, el derecho de los débiles) es inexplicable, en cambio, que esa situación se siga manteniendo en la actualidad, cuando la Historia del siglo XX ha demostrado que no es posible construir una verdadero Estado Social de Derecho sin reconocer y garantizar -como única vía eficaz para asegurar la paz social y la coexistencia democrática- a los derechos sociales como derechos humanos fundamentales que asisten a todas las personas por su sola condición de tales. Para lo cual resulta imprescindible -huelga señalarlo- el estudio, enseñanza, investigación y desarrollo profundizado del Derecho Social en las Facultades de Derecho.

Haciendo una muy somera descripción de los contenidos del Derecho Social, deberíamos señalar que comprenden: a la Teoría General del Derecho del Trabajo (lo que incluye a sus orígenes y fundamentos, principios fundantes, diferencias con el derecho privado, etc.), el Derecho Individual del Trabajo (abarca todo lo concerniente a la relación individual de trabajo entre empleador y trabajador), el Derecho Colectivo del Trabajo (con sus tres grandes sub-ramas: el Derecho Sindical, el Derecho de la Negociación Colectiva y el Derecho de Huelga y de la conflictividad social), el Derecho de la Seguridad Social (que involucra a toda la teoría general de la Seguridad Social, más la regulación jurídica de todos sus subsistemas), el Derecho Procesal del Trabajo (que, por sus particularidades específicas, justifica, por ejemplo, la existencia de leyes procesales y tribunales propios), el Derecho Internacional del Trabajo (en sustancia, instrumentos normativos que emanan de la Organización Internacional del Trabajo) y el Derecho Administrativo del Trabajo (funcionamiento de la inspección o policía del trabajo, con sus reglas y procedimientos).

Con arreglo al plan de estudios vigente, todo ese vasto campo de contenidos -insistimos, determinantes de las condiciones de vida de la gran mayoría de los ciudadanos- debería ser enseñado y aprendido ¡en un curso cuatrimestral! Efectivamente, como bien lo ha puesto de manifiesto en su dictamen el Profesor Gatti, a pesar de la evidencia de que el Derecho Social tiene una importancia central, el programa curricular reduce el estudio de sus complejos conflictos a una sola asignatura, además, limitada a un único curso cuatrimestral, circunstancia que demuestra no sólo un anacronismo intolerable, sino que pone en cuestión la seriedad del sistema de enseñanza universitaria.

Hagamos un breve examen comparativo. De acuerdo al plan de estudios vigentes, tenemos cinco asignaturas de Derecho Civil (Derecho Civil I, II, III, IV y V), tres de las cuales (Derecho Civil I, II y V tienen asignados cursos de duración semestral, es decir, anual). Asimismo, tenemos dos asignaturas de Derecho Comercial (Derecho Comercial I y II), que originariamente también eran ambas semestrales, aunque algunas

ahora se han convertido en cuatrimestrales intensivas (o sea, con mayor carga horaria semanal que las cuatrimestrales "comunes", como el Derecho Social). Además tenemos Derecho Procesal II (eminentemente dirigido al estudio del Proceso Civil y Comercial, desde que en los programas de estudio se le destina menos de una unidad al Proceso Laboral, que por otra parte no suele ser abordada por los docentes) y las vulgarmente denominadas "Prácticas Civiles" que en rigor constituyen una asignatura de práctica procesal Civil y Comercial. Aunque es evidente que los contenidos de todas esas asignaturas no pueden dejar de ser enseñados en ninguna facultad de Derecho (más aún, ningún abogado puede conocer en profundidad el Derecho Social sin comprender adecuadamente el Derecho Civil y Comercial), no lo es menos que en modo alguno puede sostenerse que esas disciplinas revistan tanta mayor importancia que todo el Derecho Social en su conjunto, al punto tal que el plan de estudios le asigna a éste una carga horaria ocho veces menor que al Derecho Civil y cuatro veces menor que al Derecho Comercial.

Más aún, la infra representación del Derecho Social no se verifica exclusivamente en comparación con las ramas del derecho privado, sino también, con las del derecho público. Así, frente a una asignatura cuatrimestral para enseñar Derecho Social, tenemos dos para el Derecho Administrativo (Derechos Administrativo I y II, ambas cuatrimestrales) y tres semestrales (Derecho Penal I, Derecho Procesal I, "Prácticas Penales") más una cuatrimestral (Derecho Penal II) para el Derecho Penal.

A ello cabe aun añadir que a disciplinas eminentemente vinculadas al derecho privado y cuya relevancia no puede ser comparada con la que corresponde al Derecho Social (v.g., Derecho de la Navegación, Derecho Notarial, Derecho Internacional Privado, etc.) se les ha asignado exactamente la misma carga horaria que a nuestra disciplina.

Esa subestimación del Derecho Social no se compadece con la tendencia que podemos observar en universidades europeas de reconocido prestigio. Aun cuando -siguiendo los lineamientos de la política comunitaria que se desprende de la Declaración de Bolonia, de marcado sesgo neoliberal- las recientes reformas de los planes de estudios en las Facultades de Derecho de los países de la Unión Europea han disminuido el carácter generalista de las carreras de grado (lo que no compartimos), siguen incluyendo, como mínimo, dos cursos semestrales obligatorios de Derecho Social dentro del cuadro de formación general. Solo por poner dos ejemplos: (i) La Universidad de Salamanca en el nuevo plan de estudios aprobado en 2009 mantiene como cursos obligatorios a las materias Derecho del Trabajo (prevista para el quinto semestre) y al Derecho Sindical (prevista para el sexto semestre), incluyendo entre las seis materias optativas del séptimo semestre al Derecho de la Seguridad Social.; (ii) La Universidad de Castilla La Mancha, en el plan de estudios publicado en el Boletín Oficial el 12/11/2010, incluye como materias obligatorias al Derecho del Trabajo I en el quinto semestre y al Derecho del Trabajo II en el sexto semestre, ofreciendo también al Derecho de la Seguridad Social como optativa en el séptimo semestre. Si las universidades que -a diferencia de la nuestra- estructuran el plan de estudios en torno a una formación no-generalista, triplican la relevancia asignada por nuestra Facultad al Derecho Social, no parece necesario agregar mucho para que quede evidenciada la escasa seriedad científica de nuestro plan de estudios en lo que respecta a este tópico.

Por lo demás, incluso limitándonos al reducido mundo de la práctica profesional y académica (como vimos en el primer apartado, uno de entre los tantos aspectos que debe contemplar un plan de estudios), la realidad cotidiana demuestra que -a despecho de la entidad que asigna a una y otras el plan de estudios- el Derecho Social tiene una relevancia marcadamente superior que otras ramas del Derecho. Ello puede observarse estadísticamente tanto en el ámbito de la litigiosidad judicial, cuanto en el de la propia Facultad, donde -no por casualidad- las cuestiones vinculadas al Derecho Social atraen a más graduados y docentes que a prácticamente todas las demás asignaturas que se dictan.

Ese gravísimo desfasaje entre la importancia social, académica y profesional del Derecho Social y la relevancia que -a contramano de aquella realidad- le asigna el plan de estudios de la Facultad, no puede ser considerado casual. Antes bien, es producto de una deliberada decisión ideológica de mantener en los márgenes del sistema jurídico a la rama del derecho que nació para proteger a los sectores más débiles de la sociedad, cuestionando las milenarias verdades reveladas del derecho privado clásico que, aplicadas a relaciones sociales entre desiguales, permitían perpetuar las desigualdades sociales.

Por lo tanto -insistimos- si esa grave disfuncionalidad puede explicarse en términos histórico-políticos, los actuales actores de la vida universitaria no podemos perder esta oportunidad de enmendarla, so pena de convertirnos en responsables de perpetuarla, lo que redundaría en grave perjuicio no sólo para los futuros abogados, sino para un modelo inclusivo de sociedad y de país a cuya construcción la Universidad -y, dentro de ella, de manera relevante, nuestra unidad académica, que suele asumir la tarea de formar a las elites dirigentes- debe necesariamente contribuir.

V. Propuesta de reforma del Plan de Estudios.

A partir de las consideraciones expuestas en los apartados precedentes, este Instituto de Derecho Social considera prioritario e imperioso efectuar las siguientes reformas al plan de estudios:

1. Ampliación de la carga horaria y creación de nuevas asignaturas: Para cumplir con los objetivos propuestos, la enseñanza del Derecho Social debe ser divida, en nuestro criterio, en tres asignaturas de duración cuatrimestral:

(i) Derecho Social I: comprensiva de la Teoría General del Derecho del Trabajo, El Derecho Individual del Trabajo, El Derecho Internacional del Trabajo, el Derecho Procesal del Trabajo y el Derecho Administrativo del Trabajo.

(ii) Derecho Social II: compresiva del Derecho Colectivo del Trabajo (Derecho Sindical, Derecho de la Negociación Colectiva, Derecho de Huelga y de la conflictividad social).

(iii) Derecho Social III: comprensiva del Derecho de la Seguridad Social.

Dejamos expresamente aclarado que, más allá de nuestro convencimiento de que la propuesta formulada es perfectamente realizable, para el caso de que no se considere viable dividir la enseñanza del Derecho Social en tres asignaturas, nos plegamos a la propuesta de mínima del Dr. Gatti, es decir, dividirla en dos asignaturas. Empero, en tal hipótesis, pensamos que la asignatura "Derecho Social I" (inclusiva, además de los contenidos mencionados en el párrafo anterior, del Derecho de la Seguridad Social) debería inexorablemente ser de duración semestral, quedando "Derecho Social II" (Derecho Colectivo) de extensión cuatrimestral.

2. Esquema de Correlatividades: Aclarando que las tres asignaturas de Derecho Social que proponemos deberían ser correlativas entre ellas, adherimos a lo que sostiene la propuesta del Dr. Gatti en el Punto III. 2 de su dictamen en torno a la necesidad de que los Derechos Sociales sean correlativas de Derecho Comercial

I, Derecho Administrativo I y Derecho Procesal I, Economía Política e Introducción a la Sociología, a lo que añadimos Derecho Internacional Público.

3. Enseñanza teórico-práctica. Investigación científica: En lo que respecta a la enseñanza teórico práctica, remitimos a lo que señala el Dr. Gatti en el punto III. 3. de su propuesta, por compartirlo plenamente.

Añadimos que podría incluirse (al menos en las materias de duración semestral) la exigencia reglamentaria de que, más allá de las formas tradicionales de evaluación, los alumnos elaboren –individual o colectivamente- un proyecto de investigación durante el desarrollo de cada materia, cuyas pautas serían indicadas por los docentes al inicio del curso para que, seguimiento mediante durante su desarrollo, su resultado fuera entregado al final del mismo. Pensamos que sería una buena manera de introducir a los estudiantes el mundo de la producción de conocimientos jurídicos, labor irrenunciable de la universidad que podría ser incentivada por mecanismos de esa índole.

Dr. Ricardo J. Cornaglia (Director)
Dr. Juan I. Orsini (Secretario)

23) (PROYECTO 54) Reflexiones y propuestas al plan de estudios accesibilidad a la educación superior y universidades públicas por Grupo Abogados “La Cámpora”.

PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ABOGACÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
POR UNA UNIVERSIDAD QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO NACIONAL CON JUSTICIA SOCIAL

“El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.

"Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.

"Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución.”

Constitución de la Nación Argentina (1949) Art. 37 inciso IV apartado 4.

“Hay que introducir la Universidad, de una manera viva, en la problemática argentina, porque la Universidad que, a partir de la Reforma del 18, se autoenorgulleció de vincularse al pueblo no fue más que una aspiración”. (Rodolfo Puiggrós)

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales atraviesa un proceso de reforma del Plan de Estudios muy ansiado y esperado por toda la comunidad educativa, razón por la cual nos vemos en el compromiso ético y social de acompañar como graduados.

Una vez abierto este debate creemos que la importancia y seriedad de la temática merece que se extienda el plazo de discusión a fin de poder aprovechar al máximo esta oportunidad de transformación y cambio para nuestra institución. Ello es así en tanto que la definición del Plan de Estudios es una cuestión trascendente de la vida de la Facultad, ya que determina el modelo de profesional que nos disponemos a formar.

Para lograr este objetivo estamos convencidos de que el debate tiene que tener un grado de compromiso absoluto con las transformaciones político sociales que atravesó la República Argentina en general, y la UNLP en particular desde la década de 1950 hasta el presente (momento en que se realizó la última modificación del Plan de Estudios con alguna trascendencia institucional).

Creemos que la sociedad exige de quienes tuvimos el privilegio de obtener un título en una Universidad Pública un grado de compromiso social que debe traducirse institucionalmente en políticas educativas que acompañen las necesidades del conjunto de la comunidad. Debemos aprovechar este proceso para plantear debates y sostener banderas que la misma sociedad nos esta pidiendo. En este sentido, consideramos que el derecho y su enseñanza son herramientas que deben comprender, acompañar o cuestionar los procesos político-sociales, y no quedar al margen. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no puede pensarse aislada de lo que ocurre en la calle, bajo la máscara de la autonomía universitaria.

Tenemos la certeza de que en este proceso de cambio deben participar todos los actores de la Facultad, a través de un debate plural poniendo especial atención a todas las propuestas presentadas, sin relegar unas en favor de otras.

Entendemos, en esta lógica, que los jóvenes son actores fundamentales de todo proceso de transformación y cambio destinado a perdurar, y por ello desde la Facultad debe promoverse su participación masiva en todos los niveles de discusión. Así como en el ámbito gubernamental se fomenta explícitamente la participación de los jóvenes en el escenario político, el espacio universitario es el ámbito por excelencia donde se debe concretar esta participación activa.

Asimismo las temáticas a abordar no deben tener ningún tipo de restricción ya que en este proceso todo debe ser susceptible de revisión. Esta reforma debe ser integral y no debe detenerse en visiones parciales del fenómeno jurídico y educativo, sino que debe tener una ambición que trascienda las deudas pendientes del pasado y los avances del presente.

En este sentido, es necesario avanzar en una reforma que sea realmente transformadora y acompañe el proceso de cambio e inclusión social emprendido por el Estado Nacional. Creemos que la Universidad Pública debe ocupar un lugar central a la hora de promover el desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales, motorizando propuestas y avances que dinamicen el funcionamiento estatal, y acompañando las políticas públicas en el orden nacional. Debe ser inclusiva y producto de una construcción colectiva, escapando a la lógica individualista que orientó las políticas educativas en el proceso neoliberal.

LA UNIVERSIDAD POPULAR

Como expresión universitaria del proyecto nacional y popular en marcha en la Argentina, queremos hacer nuestra contribución al debate sobre la reforma del plan de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad.

Lo hacemos desde una tradición política y cultural que influyó decisivamente en la conformación del perfil de nuestras universidades, que las colmó de recursos materiales, intelectuales y simbólicos, que las volvió masivas y auténticamente públicas –y no meramente estatales- en un proceso que, a partir de 2003, se ha reiniciado y profundizado.

Fue el primer peronismo el que –a través de la eliminación total de los aranceles en 1949- estableció la gratuidad de la enseñanza superior y transformó en masivas a las universidades que –aun cuando eran cogobernadas desde 1918- conservaban todavía fuertes rasgos elitistas. Fue ese primer período transformador el que convirtió a la educación superior en una formidable herramienta de renovación productiva y tecnológica y de movilidad social ascendente.

Desde 2003 la Argentina retomó y profundizó ese impulso educativo transformador. La repatriación de científicos, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el aumento exponencial del presupuesto educativo son solo una muestra de ello, en un país que –no es una mera coincidencia- lanza satélites al espacio y proyecta prototipos de aviones no tripulados.

Por eso, los principios que motivan nuestra participación y nos inspiran para realizar esta propuesta de Reforma del Plan de Estudios son la defensa y promoción de los derechos humanos, la redistribución del ingreso, la participación activa del Estado en la economía, los intereses nacionales –recursos naturales, servicios públicos, obra pública, administración de justicia, recursos fiscales, fomento de la producción nacional, mercado financiero nacional-, la defensa de los sectores históricamente desprotegidos y relegados –trabajadores, minorías sexuales, discapacitados, usuarios y consumidores, personas privadas de la libertad, pequeños y medianos productores, etc.-, y para sintetizar nuestro pensamiento, los principios de la soberanía política, independencia económica y justicia social.

Creemos que en este proceso de reforma deben discutirse seria y comprometidamente, al menos, cinco ejes:

INGRESO A LA CARRERA DE ABOGACÍA

La temática relacionada con el ingreso a la carrera de Abogacía se ha presentado siempre como una cuestión de trascendental importancia por las consecuencias que la misma acarrea, tanto en términos académicos, políticos y sociales.

Desde distintos espacios se ha venido sosteniendo que no es posible establecer un ingreso inclusivo a la Universidad Pública sin menoscabar el nivel académico. En otras palabras: suele sostenerse que la masividad está reñida con la excelencia.

Creemos que esa dicotomía (masividad vs. excelencia) es falsa. Una Facultad amplia e inclusiva, que no opone obstáculos para su ingreso, no es incompatible con una enseñanza superior de alta calidad. La comprobación es sencilla: nuestro país conoció muchas épocas (a partir de que el primer peronismo habilitó el ingreso de los sectores medios y populares) en que la educación superior fue masiva y de excelencia.

Consideramos que la institución debe acompañar el aprendizaje durante todo el proceso educativo y no pretender un nivel excluyente en el primer momento de ingreso, ya que dicha exigencia se encuentra abastecida por la instancia educativa antecedente que es el nivel secundario. Una propuesta contraria implicaría traspolar al ámbito universitario posibles desigualdades que pudieran haberse generado con anterioridad, manteniéndolas irresueltas.

Asimismo estamos convencidos de que las instancias evaluativas que imponen el piso mínimo de nivel académico se deben desarrollar a través de toda la currícula, y que el desafío radica en brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para atravesar dicho proceso.

En términos políticos la trascendencia de la temática se manifiesta en el modelo social que queremos para el país, puesto que una educación pública inclusiva de todos los sectores sociales, lleva a su máxima expresión el imperativo de igualdad de oportunidades afirmado en nuestra constitución.

De esta forma se reivindica a la educación pública como forma de transformación de las realidades sociales de cada uno de los estudiantes y necesariamente del conjunto de la sociedad.

Desde el plano social, la educación en general, y la enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales en particular, es una herramienta imprescindible para fomentar la formación y participación comprometida y consciente de la comunidad. El crecimiento personal, familiar y colectivo debe encontrarse inescindiblemente unido a una política educacional generadora del compromiso social que el país necesita y que felizmente viene manifestándose en diversos ámbitos de la vida de la Nación.

Nuestra tarea fundamental es trasladar esa participación a la vida universitaria, generando los espacios de debate para la toma de decisiones en forma colectiva, y esta finalidad se vería impedida si se restringe el ingreso a la carrera, por ser el mismo la condición de posibilidad para el cumplimiento de ese cometido.

Por ello, proponemos que se realice un curso para los ingresantes a la carrera de abogacía con las siguientes características:

- Que aborde pocos textos, dotados de un carácter reflexivo vinculados con el análisis de la realidad política y social nacional y latinoamericana, y que no anticipen contenidos curriculares específicos abordados en las materias de primer año.
- Que dichas actividades académicas sean confeccionadas conjuntamente entre los responsables del curso y especialistas en ciencias de la educación.
- Que no cuente con una instancia de evaluación eliminatoria.
- Que una vez transitado el mismo cualquiera sea el resultado obtenido, el ingresante pueda inscribirse en las materias de primer año.

PERSPECTIVA DEL DERECHO Y DE LA ENSEÑANZA

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales responde, en líneas generales, a una visión tradicional de la enseñanza. El conocimiento es transmitido a los alumnos que son vistos como meros receptores del mismo.

De este modo, no se promueve la reflexión crítica y la construcción colectiva del conocimiento, sino la aprehensión del mismo en el marco del discurso de la pretendida objetividad del derecho.

Esto se sustenta en el abordaje teórico que se realiza preponderantemente desde una visión positivista. Esta perspectiva presenta al derecho descontextualizado como un dato a-histórico y apolítico, sin ponerlo en cuestión, como verdad dada a ser aprehendida, desprovisto de contenidos ideológicos.

Nos parece trascendente poner de resalto el nombre de nuestra institución, llamada desde su fundación "Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", y atendiendo a nuestro compromiso, dotar de contenido su carácter social para que en la práctica sea lo que siempre estuvo llamada a ser.

El nuevo plan de estudios debe involucrarse de lleno en las problemáticas sociales, asumiendo como objeto de estudio los derechos humanos, el empleo, la pobreza, la criminología, la participación del Estado en la economía para el desarrollo sustentable, el medio ambiente, los recursos naturales estratégicos, la integración latinoamericana, los nuevos paradigmas de la ciudadanía social, no sólo desde su correlato jurídico sino en el marco de la trama política. Por otra parte, debe dar cuenta de las desigualdades de clase, de género, generacionales, etc., tanto hacia adentro de la institución educativa como en la sociedad.

En definitiva, el plan de estudios debe abordar las temáticas que hacen a la vida política, social e institucional del país, porque de lo contrario estaremos formando profesionales ajenos a realidad e incapaces de comprenderla para su transformación.

En los últimos años hemos sido testigos de la recuperación de la discusión política con un fuerte impacto en la agenda del derecho (AUH, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estatización del sistema previsional, matrimonio igualitario, derechos de exportación, entre otros). Es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad favorezca la discusión política y social y no se limite a las normas existentes o resultantes.

Para ello, sostenemos que es necesario avanzar en un abordaje crítico del derecho, que supone indagar las relaciones políticas, sociales y económicas, de dominación y resistencia que lo determinan, situándolo como producto histórico y cultural inmerso en los conflictos sociales y los procesos políticos.

Creemos en el derecho como herramienta emancipadora, pero también reconocemos que ha legitimado procesos de desigualdad. Por eso, no es posible entenderlo sin situarlo en el marco de la realidad política y económica que atraviesa el país, dinamizada por la expansión de derechos civiles, políticos y sociales, tal como lo planteara el Dr Boaventura de Sousa Santos.

En términos del educador brasileño Paulo Freire "todo acto educativo es un acto político", agregando que todo producto jurídico también lo es.

En este sentido, una de las políticas que debe abordar el proceso de reforma del Plan de Estudios, es la articulación de las distintas funciones de la universidad (enseñanza, investigación y extensión). Para ello, proponemos incorporar como obligatorios los seminarios de investigación para los alumnos, y las clínicas y consultorios jurídicos, que hoy se encuentran implementadas de forma paralela y voluntaria a la carrera de abogacía.

Probablemente no pueda forzarse el compromiso social de los estudiantes, pero sí puede promoverse. Así como éstos deben necesariamente atravesar un trayecto académico orientado a la profesión liberal, deben tener un acercamiento a la función social de los abogados con la realización obligatoria de clínicas y consultorios jurídicos.

De lo que se trata, es de promover e incentivar el compromiso social de los estudiantes y esta tarea hay que desarrollarla desde el propio plan de estudios.

Por ello, proponemos que se fomente la participación social de los alumnos, acompañando una práctica profesional que contemple las problemáticas de la sociedad y se disponga a resolverlas, a través de la implementación obligatoria de:

1) seminarios de investigación
2) clínicas jurídicas
3) consultorios jurídicos

PLAN DE ESTUDIOS

"...uno de los medios más eficaces para guiar a los docentes a nuestros objetivos de emancipación nacional y conquista de una sociedad más justa, con una mejor distribución de la riqueza, donde desaparezca la pobreza y se produzcan los grandes cambios sociales y la revolución científico técnica, es a través de la elaboración de nuevos programas de estudio" (Rodolfo Puigrros)

En estrecha relación a la perspectiva de la enseñanza y del derecho que tenemos desde La Cámpora, consideramos que es necesario actualizar la currícula y engarzarla en el contexto socio-político en el que vivimos, poniendo en valor campos del derecho que han sido claves en los procesos de cambio de nuestro país y que asumen un espacio trascendente en la agenda pública.

La Argentina viene desarrollando una política de Estado clara y contundente en materia de derechos humanos, que necesariamente satisface la memoria, verdad y justicia, pero que ha ido mucho más allá en el plano de los derechos humanos sociales, económicos y culturales. Creemos que resulta imperiosa la inclusión de la asignatura Derechos Humanos con carácter obligatorio en la carrera de Abogacía. Ello es, sin dudas, una deuda pendiente de nuestra Facultad desde la recuperación democrática.

Asimismo, resulta imprescindible la inclusión en el plan de estudios la asignatura criminología. Ello responde a la necesidad de revisar las respuestas que la ciencia del derecho le otorga al fenómeno criminal desde una perspectiva humanista y multidisciplinaria.

Por otra parte, el Estado ha impulsado y profundizado los procesos de integración política y económica de la región con nuestros hermanos latinoamericanos, llevando adelante el desafío de la patria grande. Estos programas de política exterior regional suponen una arquitectura normativa que los profesionales del derecho deben conocer y comprender en profundidad para poder participar activamente en las transformaciones políticas, económicas y sociales que los mismos suponen. El Derecho de la Integración Latinoamericana tiene su espacio en algunas materias de la Facultad pero es momento de otorgarle el lugar que le corresponde.

En cuanto a los Derechos Sociales -impulsados fuertemente desde el Estado- entendemos que los mismos deben ser abordados de manera más completa e integral que en el actual Plan de Estudios, considerando que los mismos ya no pueden ser abarcados por una única asignatura sino que deben ser

repensados, separando por un lado el Derecho Laboral (individual y colectivo) del Derecho de la Seguridad Social desde una perspectiva de políticas públicas. Ello encuentra sustento en la amplitud de las políticas públicas desarrolladas, tales como la AUH, ampliación de beneficiarios del sistema jubilatorio, políticas sociales concretas y focalizadas, etc. La Seguridad Social y los Derechos Sociales –que otrora estaban relacionados de un modo íntimo con la problemática del trabajo dependiente- comienzan por fin a avanzar a un modelo pleno de ciudadanía social (la AUH es la expresión más cabal de ese proceso), por lo que ya no se justifica que ambos campos del derecho sean abordados en forma conjunta.

Resulta inexorable introducir la problemática Medio Ambiental y de los Recursos Naturales. Lo primero es una obligación que tenemos para con la sociedad toda del presente y con las generaciones futuras, lo segundo es un imperativo de soberanía política e independencia económica.

En este sentido, el derecho ambiental tanto como el económico, adquiere importancia fundamental en el marco de un proceso de disputa, de apropiación y regulación de los recursos naturales. Advertidos de que atravesamos un periodo en que se ha puesto de manifiesto la escasez y la sustentabilidad de los mismos, el escenario de la puja distributiva de los bienes, materiales y simbólicos no puede ser ajeno a la enseñanza del derecho.

Por ello, consideramos que no pueden entenderse como periféricas materias claves para comprender el modelo económico actual, tales como el Derecho de Minería y Energía, Derecho Agrario y Economía Política. Así, lejos de considerar estos campos del saber jurídico como asignaturas optativas, es necesario jerarquizarlos incorporando los debates actuales a sus planes de estudio (por ejemplo en materia de commodities, renta agraria, extranjerización de la tierra, Plan Estratégico Agroalimentario 2020, etc.)

En definitiva, el Plan de Estudios debe dar cuenta del análisis político-económico y su resolución en el terreno normativo. Debemos preparar abogados que sean parte de la definición del Estado y la sociedad que queremos, creando herramientas y facilitando espacios para su discusión.

Otro aspecto de profunda relevancia y con directa relación con el proceso de aprendizaje del derecho, es el rediseño del régimen de correlatividades del plan de estudios.

En este sentido, el orden analítico de la ciencia jurídica tiene un impacto directo sobre la óptica que el estudiante construirá del derecho. Así, una dinámica académica que vaya desde lo general a lo específico permite afianzar el conocimiento de los aspectos estructurales del derecho y comprender con mayor facilidad cada una de las áreas específicas.

Entendemos que los faros desde el que los estudiantes deben comprender las ciencias jurídicas y sociales son la Constitución Nacional y los Derechos Humanos por ser éstos conjuntos normativos-valorativos desde los que debe interpretarse el fenómeno jurídico en su totalidad.

Conforme sostenemos, creemos que el segundo año de la carrera debería contemplar las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Político, Derechos Humanos, y Criminología para luego sí, ingresar a las materias más densamente codificadas.

MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Creemos que una reforma del plan de estudios debe tomar en consideración que la actualización será total y continuada cuando la actualización de los programas de estudio de las asignaturas sea periódica.

Esta propuesta se encuentra anclada en la necesidad de acoplar la renovación de los contenidos al dinamismo de la transformación del derecho y el conocimiento del esfuerzo institucional que implicaría lograr esas metas mediante procesos globales de reforma y participación en la misma.

Por ello, la instrumentación de un mecanismo de actualización periódico que coordine la participación la Secretaría de Asuntos Académicos, el Consejo Directivo, los Institutos, las Cátedras y el alumnado permitiría sostener la reforma del plan de estudio manteniendo la dirección que proponemos para nuestra carrera.

En este sentido, la modificación del Anexo I de la Resolución N° 356/09 permitiría ampliar la función de análisis del Consejo Directivo a cuestiones materiales, respecto de las cuales emitiría un dictamen que abriría una comunicación con la cátedra de que se trate.

Asimismo, podría instrumentarse el archivo de todos los procesos actualización como forma de generar un registro de estos procesos parciales para aquellos que, como nosotros hoy, emprendan en algún momento una reforma amplia y plural del plan de estudios.

PERFIL PROFESIONAL DE LOS EGRESANTES

El perfil de los egresantes que pretende formar nuestra facultad debe relacionarse con las necesidades, el desarrollo y las relaciones económico-sociales del país y la región. La Universidad pública no debe abstraerse de esas variables, porque debe ser uno de los principales motores del desarrollo nacional y de la justicia social, porque de no hacerlo solo se diferenciaría de las universidades privadas por su administración y por su financiamiento.

La currícula actual tiende a transitar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la exclusiva óptica del abogado litigante y descuida otros aspectos del ejercicio profesional cuya importancia social es mayúscula.

Nuestra casa de estudios extiende su área de influencia en la capital de la Provincia más grande e importante del país. En la ciudad de La Plata se encuentra la sede de los tres poderes de gobierno provincial y –consecuentemente- una importantísima cantidad de egresados se desarrollarán profesionalmente en el sector público, que a su vez ha sido uno de los motores de la recuperación del empleo en los últimos años.

Sin embargo, los contenidos que actualmente se imparten continúan privilegiando la formación de profesionales liberales. El derecho administrativo suele ser abordado de modo unilineal, desde la óptica del abogado que litiga contra el Estado. No hay formación para abogados que se desempeñen en el sector público. Mucho menos, formación para futuros dirigentes que quieran incursionar en el escenario político

La orientación académica hacia un abogado volcado a la actividad política o administrativa debe privilegiarse, sobre todo en una Universidad como la nuestra que se encuentra ubicada en la ciudad que alberga a los principales órganos de gobierno de la provincia, lo que implica una enorme demanda de profesionales del derecho adecuadamente formados para la actividad pública.

En este mismo sentido, hoy se destaca en nuestro país la recuperación de la investigación y la repatriación de gran cantidad de investigadores -otrora expulsados por políticas regresivas.

Esto último permitió la construcción de un relato teórico-científico desde una perspectiva latinoamericana que da cuenta del proceso de expansión de derechos al cual asistimos. Todo ello en el marco de una política presupuestaria favorable a la investigación y la educación pública.

Por ello, creemos que la Facultad debe profundizar el perfil de los abogados investigadores aumentando los recursos que se destinan a esos fines.

CONCLUSIONES

Tomamos como ejemplo a los compañeros Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes condujeron el proceso de expansión de derechos en el cual participamos, entendiendo nuestra disciplina con un sentido transformador de la realidad social Argentina, y llenándonos de orgullo por su condición de egresados de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, perteneciente a la ya centenaria Universidad Nacional de La Plata.

Como queda expuesto en este documento, creemos fervientemente que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales debe formar abogados que, independientemente de la rama profesional en que continúen, tengan un fuerte compromiso social. Es necesario tomar en serio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que estamos formando actores sociales que, desde su lugar, van a influir en el devenir de nuestra sociedad.

Nuestra casa de estudios debe aprovechar este proceso de discusión y reforma para comprometerse decididamente con las cuestiones sociales, constituyéndose en una herramienta de cambio que contribuya a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Sólo así logrará que sus futuros egresados continúen y profundicen el camino transformador que la Argentina recorre.

"la Universidad tiene que participar activamente en la revolución científico-técnica, no sólo cultural sino también económico y política". (Rodolfo Puiggrós)

ABOGADOS LA CÁMPORA

24) (PROYECTO 55) Reflexiones y consideraciones acerca del régimen de correlatividades de las materias Derecho Constitucional y Derecho Penal por Graciela Collazos, Prof Adjunta de Derecho Político.

Propuesta de cambio de correlatividades respecto al Plan de Estudios actualmente vigente, en el sentido de que Derecho Constitucional sea una materia correlativa previa, necesaria para cursar o rendir Derecho Penal I.

Reflexiones previas:

Desde que transité la facultad como alumna y en todos los momentos posteriores (que no enunciaré para no ser autobiográfica) noté que al menos ciertos contenidos de Derecho Constitucional eran necesarios y útiles para estudiar, luego, Derecho Penal I (y seguir con las materias a que ella habilita).

Desconozco si tal correlatividad existió antes o nunca estuvo establecida pero desde aquel momento y casi siempre que tengo oportunidad de hablar de la misma con otros actores (alumnos de la comisión a mi cargo, libres, alumnos de seminario, docentes o auxiliares de otras materias, etc.) encuentro que casi todos se manifiestan a su favor. Lamentablemente, desconozco también cómo aparecen vinculadas estas 2 asignaturas en otros planes de estudio de carreras de Derecho en Universidades Nacionales, que es una cuestión en la que varios profesores de ésta casa que son docentes en la U.B.A., la U.N. de La Pampa u otras y los profesores investigadores que se han abocado al estudio de las curriculas y el aprendizaje podrían ilustrarnos, sin necesidad de que enfocásemos un trabajo de campo o de recopilación bibliográfica al respecto.

Sin perjuicio de ello, me atrevo a bocetar algunos argumentos que proceden, a mi entender, del sentido común en materia jurídica, de mi experiencia docente y de mi experiencia profesional laboral también, vinculada al campo del Derecho Penal y Procesal Penal en materia federal.

Fundamentos:

Parece obvio referir que, aún en un paradigma que no comulgue con el positivismo jurídico en sus distintas versiones, el estudio de la Constitución Nacional —junto al del bagaje de Tratados Internacionales y Convenciones que ella coloca en igual nivel de prelación en el ordenamiento jurídico— tiene y debe tener un lugar central en el estudio del derecho (y las disciplinas sociales) así como en el de sus prácticas.

Ello no motiva, sin embargo que considere que la materia que comprende su estudio (Derecho Constitucional) deba convertirse en una suerte de embudo a todas las materias codificadas de la currícula.

Sin embargo, estimo que muchos de sus contenidos —entre los que hallo como típicamente emblemático el de las garantías constitucionales— es preciso que sean trabajados de modo previo al ingreso al Derecho Penal y Procesal Penal por el enorme impacto, trascendencia e implicación práctica y social que tienen en tales disciplinas.

Nótese que en la actual estructura del plan de estudios un alumno puede, perfectamente, pasar por ambos derechos penales, avanzar incluso hasta Derecho Civil V sin haber transitado por Derecho Constitucional (por pensar tal avance en términos de materias y contenidos y no en términos de años de la carrera, que resultan bastante aleatorios en la lógica del plan vigente).

Tal situación, por otra parte, lleva a que en los programas de aquellas materias que pueden hoy abordarse sin tener Derecho Constitucional, existan contenidos, ítems y desarrollos que todo el tiempo y en muchos temas traen tal perspectiva; con el natural solapamiento, duplicación de contenidos e impacto sobre la extensión temática que ello conlleva.

Sin afán de exhaustividad, claro, he buscado y leído los programas de Derecho Penal de ambas cátedras (en sus versiones de programas de clases) y hallé directas menciones a la constitución, aspectos constitucionales o tratados en al menos 5 de las 19 unidades temáticas que contiene el programa de la cátedra I (y sospecho que si el programa se hubiese actualizado recientemente, ya que data de 1977, serían más): las bolillas IV, V, VI, VII, VIII y IX (de la segunda parte del programa) y en unidades del programa de la cátedra II.

Reitero, eso por mencionar solo aquellas ocasiones en que lo constitucional aparece directa y literalmente referido y no todas las demás en que resulta preciso conocerlo.

En relación a los programas de Derecho Constitucional (de las 3 cátedras, que también revisé mínimamente) y aparecen mucho más modernos en su estructura y sistemática que los de Derecho Penal, por ser de factura más reciente; pueden verse contenidos que atañen directamente al Derecho Penal en las unidades II, III, y IX, XIV (del programa de la cátedra I); en las unidades temáticas 2, 4, 5, 7, 9 y 14 (del programa de la cátedra II); y II, IV, IX, X, XII, XIII, XVIII y XX (del programa de la cátedra III). Aclaro que, por

razones de tiempo y de la extensión que puede tener la presente no he revisado los objetivos y fundamentos que tales programas contienen.

Esperando que el aporte colabore a abrir el debate sobre ésta cuestión, les saludo cordialmente.

Graciela L. Collazos
Profesor Adjunto Ordinario
de la cátedra II de Derecho Político

25) (PROYECTO 56) Análisis crítico y evaluación de la materia en el actual plan de estudios. Propone su reubicación así como describe el contenido de la disciplina y su vinculación con la formación del abogado, Por Horacio Daniel Piombo, Prof. Titular Ordinario de Derecho Internacional Público.

REF. Acercar opinión de la Cátedra 1 de "Derecho Internacional Público", respecto de la reforma del Plan de Estudios

De mi más distinguida consideración: Luego de una reunión de Cátedra convocada según el reglamento interno cuyo proyecto fuera elevado a la consideración de ese Decanato y del Honorable Consejo Directivo junto con los programas propuestos para la materia, los profesores integrantes de la unidad han llegado a consensuar las siguientes propuestas:
a) Partiendo de la base que el contenido de la asignatura crece exponencialmente a horcajadas del aumento de la cooperación internacional, de la cada vez más vasta interacción de los Estado con los individuos y las entidades privadas, y del formidable acrecimiento de la comunicación directa y en tiempo real entre los miles de millones de habitantes del planeta que acceden a la comunicación digital, cabe tomar nota que las universidades que tienen sobre si la calidad de ser modelo o referencia en el panorama mundial, o conceden a la materia un contenido anual (con más de quinientas horas de crédito como cifra media) o subdividen su contenido en más de una asignatura (vgr: atribuyéndolo a cátedras usualmente denominadas "Instituciones de Derecho Internacional", "Organizaciones Internacionales", y "Derecho Comunitario", ésta última, en ocasiones, nominada con el rótulo "Derecho de la Integración".- Así las cosas, la unidad académica que formamos expresa su deseo de que se contemple, de mantenerse la estructura actual, la semestralización de la asignatura para todas las Cátedras de Derecho Internacional Público.-
b) En función de la complejidad creciente de sus contenidos y de que muchos de sus temas presupone el conocimiento de ciertos contenidos previos -así por ejemplo: en el caso de los tratados internacionales el régimen de contratos, en el supuesto de organismos internacionales el derecho administrativo, en materia de soberanía territorial del Estado el sistema de derechos reales (concretamente: derecho de propiedad, modos de adquirir el dominio, y servidumbres) y en tema de las relaciones entre Derecho Internacional y Derecho interno la Filosofía del Derecho-, urge ubicar nuestra materia en el cuarto año de la carrera, al menos.- Con atingencia cabe recordar que universidades nacionales cercanas como la de Mar del Plata, directamente emplaza a Derecho Internacional Público en el quinto año del programa de abogacía.-
c) Que se autorice que la asignatura vaya acompañada de un conjunto de trabajos prácticos, que deberán realizarse en las promociones sin exámen y cursarse obligatoriamente antes de dar la asignatura en forma libre.- En este orden de ideas, los alumnos deberían preparar, bajo la orientación del docente, por ejemplo, proyectos de convenio sobre una materia determinada y con relación a un país determinado, o bien diseños de los instrumentos que ponen en vigencia o terminan con la existencia de un tratado (instrumentos de ratificación, de formulación de reserva y de denuncia de acuerdo), documentación consular usual, como puede ser el otorgamiento de escrituras públicas con relación a buques, aeronaves o bienes situados en la Argentina.-
d) Autorizar a las Cátedras a realizar actividades de extensión que consideren oportuno o conveniente, condicionándolas negativamente a una objeción del Decanato formulada por escrito dentro de los diez días hábiles de comunicada la intención de realizar tal tarea.-
Solicitando se tengan en cuenta las observaciones formuladas, hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. muy cordialmente.-

Horacio Daniel PIOMBO
Profesor Titular de "Derecho Internacional Público", Cátedra 1

26) (PROYECTO 57) Propuesta de reforma al plan de estudios presentada por el graduado Luis Nielsen.-

Propuestas Para la Reforma del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP:

Nuestra Facultad a través del Consejo Directivo, aprobó un marco reglamentario general, destinado a promover un espacio institucional para el análisis, discusión, debate y formulación de propuestas para la reforma al plan de estudio para la carrera de Procurador, Abogacía y Escribano.

Para la formalización de esta iniciativa se crearon de seis (6) comisiones temáticas de trabajo.

Ellas son: Materias Iniciales o Propedéuticas, Derecho Público, Derecho Privado, diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho, Ciencias Sociales y áreas del conocimiento complementarias para la formación del Abogado, Comisión de Prácticas Profesionales.

Fundamentos favorables a la reforma del plan de estudios:

La carrera de Abogacía, tal como está estructurada en nuestra Facultad, no cubre las expectativas previstas en el momento de sanción del actual plan de estudios, dado que se sustenta en un perfil profesional anacrónico y aislado de las condiciones modernas del Derecho.

El esquema actual de correlatividades no representa un criterio de gradualidad de la enseñanza y exhibe dificultades serias en la formación curricular del abogado.

Si, quiero expresar mi adhesión al actual sistema de formación general del abogado, instituido en nuestra casa de altos estudios, evitando tergiversaciones en lo atinente a especializaciones en diversas ramas del derecho, es menester continuar este esquema de formación a fin de evitar un conocimiento fragmentado del derecho.

Creo necesaria una modificación en el sistema de enseñanza-aprendizaje a fin de abandonar el sistema de enseñanza enciclopedista y de clases magistrales, con el propósito de generar un nuevo

mecanismo en el cual se busque y se fomente el interés intelectual y permanente del alumno evitando la mera transmisión de conocimiento.

Es necesario diseñar un plan de estudios que privilegie lo general por sobre lo particular, la capacidad de entender por sobre la de aprender, la de resolver conflictos sobre la de ejercer su profesión pensando que el proceso es un combate y que una sentencia favorable firme, alcanza para satisfacer los máximos anhelos del letrado.

Debemos alejarnos de la idea del tradicional plan de estudios que comenzaba con Introducción al Derecho y finalizaba con Derecho Internacional Privado, ese plan es hijo de la idea de que formar abogados era sinónimo de hacerlos conocer y si es posible memorizar todo el ordenamiento jurídico, que a su vez respondía a un criterio estático del derecho.

Era también hijo de un sistema de aprendizaje que privilegiaba la erudición a la inteligencia

Debemos orientar un plan de estudios que permita al estudiante desarrollar sus capacidades creativas, conciencia crítica, y protagonismo cívico.

Materias que creo deben sumarse: Derechos Humanos, Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, dividir Derecho Constitucional en I y II (Derecho Procesal Constitucional), dividir Derecho del Trabajo y Derecho de la Previsión Social, transformar Civil V en derecho de Familia y Civil VI en Sucesiones, como asimismo modificar el nombre de Navegación por Derecho del Transporte en general, modificar el actual esquema de prácticas civiles, penales y seminario de la carrera por un esquema integral de prácticas obligatorias dadas en distintos años de la carrera, sumar cursos de Derecho Informático, Ingles Jurídico, Ética Profesional y Mediación. Resta estudiar la carga horaria de cada una de ella y detalles que faltan.

MI PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS:
Primer año:
-Historia Constitucional
-Derecho Romano
-Introducción al Derecho
-Derecho Político/ Teoría del Estado
-Derechos Humanos
-Introducción a la Sociología

Segundo año:
-Civil I
-Derecho Constitucional
-Derecho Público, Provincial y Municipal
-Economía Política
-Penal I
-Civil II
-Derecho Constitucional II

Tercer año:
-Civil III
-Penal II
-Procesal Penal
-Internacional Publico
-Derecho del Trabajo
-Filosofía y lógica
-Sociología del Derecho

Cuarto año:
-Civil IV
-Civil V
-Procesal Civil
-Derecho de la Previsión Social
-Administrativo I
-Comercial I

Quinto año:
-Civil VI
-Derecho Agrario
-Minería y Energía
-Comercial II
-Administrativo II
-Notarial y Registral

Sexto año:
-Derecho Ambiental
-Derecho Internacional Privado
-Finanzas y Derecho Financiero
-Derecho del Transporte

ESQUEMAS DE CORRELATIVIDADES:

Propongo modificar las siguientes correlatividades:
-Las materias de primer año no tienen materias correlativas
-Suprimir la correlatividad de Civil I a Penal I
-Modificar la correlatividad de Derecho Constitucional a Penal I y no a Procesal Penal como es en la actualidad
-Para poder rendir Procesal Civil se deberán tener aprobadas al menos 3 de los 5 civiles existentes en la actualidad, y no solo uno como hoy se exige
-Derecho Constitucional será correlativa de Derechos Humanos
-Internacional Público podrá ser rendida cuando se tengan al menos 3 civiles aprobados
-Filosofía y Sociología del Derecho no serán ya correlativas de Procesal Penal

-Notarial y Registral serán correlativas de Civil V, pero ya no de Comercial II
-Agrario y Minería ya no serán correlativas de Administrativo I sino de Procesal Civil

PRACTICAS:

Creo que se debe abandonar el actual sistema de prácticas penales, civiles y 1 seminario para trabajar en un esquema de prácticas integrador y que se de año por año, por ello propongo:
-En los 3 primeros años trabajos de investigación con rigor científico, con las pautas para publicar en la revista anales sobre los temas vistos en dichos años de la carrera.
-A partir del cuarto año, practicas reales en consultorios jurídicos, clínicas jurídicas, institutos de la Facultad y demás.
-En quinto y sexto año deberá darse un esquema de Práctica Profesional Supervisada, la Práctica Profesional Supervisada es una actividad formativa del alumno que consiste en la asunción supervisada y gradual del rol profesional, a través de su inserción a una realidad o ambiente laboral específico y de esta manera aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica.

Los objetivos de estas actividades tienen que ver con la posibilidad de:

Contribuir a consolidar los conocimientos y destrezas logradas, así como al desarrollo de actitudes y valores, todo lo cual favorece a la formación integral del alumno.

Brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica que habilite para el ejercicio de la profesión u oficio.

Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.

Contribuir a la formación de profesionales con excelencia académica, críticos, creativos y comprometidos con el desarrollo económico y social.

Permitir que el alumno tome contacto con el ámbito en el que se desenvuelven empresas u organismos y se integre a un equipo de trabajo, contribuyendo de esta forma a la transición entre la etapa educativa y la laboral.

Formar al alumno en aspectos que le serán de utilidad en su posterior inserción laboral.

Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.

Pueden desarrollarse en:
1- Poder Judicial, Fuero Penal.
2- Poder Judicial, Fueros Civil, Laboral y Contencioso
Administrativo.
3- Práctica Profesional Supervisada (Trabajo Final – Opcional para el alumno):
4- Poder Judicial, Fuero Penal
5- Poder Judicial, Fueros Civil, Laboral o Contencioso Administrativo.
6- Poder Judicial, Fuero Federal
7- Municipalidad: Departamento Ejecutivo y Departamento Legislativo.
8- Estudios Jurídicos.
9- ONG
10- Administración Pública Nacional o Provincial.

Es un aporte al debate, en poco tiempo envío los fundamentos de las modificaciones, saludos a todos, espero sus respuestas.

27) (PROYECTO 59) Propuesta para la reforma al plan de estudios MIU Movimiento Independiente Universitario Colectivo de Abogados Populares “La Ciega”
La Plata, 18 de noviembre de 2011.-
PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de la Plata
MIU – Movimiento Independiente Universitario
Colectivo de Abogadxs Populares “La Ciega”

Sobre el trabajo realizado

Si bien el debate institucional para la reforma del Plan de Estudios se inició en el Consejo Directivo en el mes de mayo de este año, desde el MIU hemos impulsado este debate en la facultad desde nuestra conformación como agrupación en el año 2002. Del fruto de esas discusiones acerca de la orientación y contenido de nuestra carrera, surgieron un sinnúmero de actividades que hemos desarrollado dentro de nuestra facultad con el fin de abonar de manera profunda al debate sobre nuestro futuro rol profesional, el perfil con el cual se nos forma, el plan de estudios vigente y consecuentemente el cambio y la transformación que creemos necesaria. A partir de la conformación del Colectivo de Abogadxs “La Ciega” en el año 2007, continuamos desarrollando esta línea de pensamiento y producción en conjunto entre estudiantes y graduados, dando un paso más en la experiencia práctica de un perfil de abogadxs críticos comprometidos con las problemáticas populares.

Entre las actividades mencionadas resulta interesante destacar la producción de 12 ediciones de la Revista “Praeter Legem”: la primera revista independiente de los estudiantes de derecho donde abordamos diferentes temáticas de actualidad nacional e internacional desde un punto de vista jurídico, entrelazando diversas problemáticas o realidades sociales con abordajes alternativos del derecho inexistentes en la gran mayoría de las cursadas de nuestra facultad. Con la misma tónica organizamos las Jornadas de Derecho Crítico durante 5 años consecutivos, intentando también aportar al vacío que tiene nuestra Unidad Académica en cuanto al abordaje y producción de conocimiento crítico sobre nuestra disciplina, espacios donde impulsamos el debate interdisciplinario, el intercambio de ideas y la producción colectiva del conocimiento en contraposición a la estructura áulica histórica donde el docente es dueño casi absoluto del conocimiento que le imparte a sus “alumnos”. Decenas de panelistas (entre docentes de esta y otras Universidades, militantes políticos, académicos, etc.) y cientos de estudiantes y graduados participaron a lo largo de estos años en discusiones de género y derechos de las mujeres, derechos humanos, derecho laboral, problemática carcelaria y derecho penal, problemática de tierra y vivienda, derecho ambiental, comunicación y cultura, entre muchas otras.

La comisión de trabajo barrial, la comisión de trabajo en cárceles, la comisión de género, la comisión de cultura y la comisión de derechos humanos, también han sido espacios de participación sustanciales de debate y producción de derecho crítico en la práctica, desde los barrios con trabajos continuados sobre

diversas problemáticas de los sectores populares, realizando talleres sobre prácticas policiales, derecho a la vivienda, derechos de los migrantes, etc. En las cárceles con estudiantes privados de su libertad y con población común; en la facultad trasladando discusiones en torno al género y la diversidad sexual (despenalización del aborto, trata de personas, prostitución, matrimonio igualitario, identidades sexuales, acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia), y por otra parte debates sobre la cultura latinoamericana y la influencia de la globalización y del sistema capitalista, la contracultura y las identidades culturales y derechos de los pueblos originarios. Y por último desde la comisión de derechos humanos generando un nexo entre la facultad y los juicios históricos que se desarrollan en La Plata por crímenes cometidos durante el genocidio llevado adelante durante la última dictadura cívico-militar, un tema casi ausente en nuestro paso por la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. Además de los trabajos prácticos en sus terrenos específicos, desde estas comisiones también se han elaborado producciones de derecho crítico sobre sus temáticas concretas que abonan a los abordajes que pretendemos esenciales para una formación seria e integral.

Asimismo los ciclos de cine, charlas-debate, talleres literarios y demás actividades desarrolladas dentro y fuera de la facultad, entendemos han aportado también a apalear la formación, análisis y debates ausentes en una facultad abocada a repetir los artículos de un código o a escuchar los "logros" que el titular de cátedra tuvo a lo largo de su profesión, salvo contadas excepciones.

Esta reseña sucinta y sintética no sólo pretende plasmar en pocas palabras el trabajo desarrollado durante 9 años, sino también aportar nuestro trabajo y producción a una eventual reforma del plan de estudios.

Con idéntica línea de actuación, intervinimos a través de nuestro Consejero de base por la minoría estudiantil en el Consejo Directivo, en la sesión en la cual se aprobó el proyecto presentado por el Decano y la Secretaria Académica para dar inicio al debate sobre la reforma del Plan de Estudios. En ese marco planteamos una serie de modificaciones y/o aclaraciones al proyecto oficial, logrando 3 cuestiones fundamentales: por un lado que las 6 comisiones temáticas creadas para la discusión incorporen como eje primordial cuál es el perfil profesional al que se quiere apuntar desde la facultad, por otro lado la apertura de las 6 comisiones a toda la comunidad universitaria que quiera participar (estudiantes, docentes, graduados, agrupaciones, cátedras, trabajadores no docentes, institutos, etc.) y que el debate no se circunscriba únicamente a los 16 consejeros, y por último logramos la extensión del plazo para el debate en comisiones y la presentación de propuestas con posibilidad de prorrogarlo, entendiendo que un proceso de semejante importancia requiere de un debate serio, profundo y con tiempo suficiente para alcanzar una reforma verdaderamente integral.

Entendemos que estas 3 líneas directrices debieran guiar el debate sobre la reforma del Plan de Estudios hasta el final, para garantizar una modificación genuina del plan de nuestra carrera.

A partir de que el Consejo Directivo aprobó el proyecto mencionado, nos dimos las tareas que desde nuestras posibilidades pudimos llevar a cabo, participando de un gran número de reuniones de las 6 comisiones temáticas, difundiendo la existencia de las mismas en la facultad para que más docentes y estudiantes participen, escuchando y dialogando con los docentes de las cátedras convocados por las comisiones y analizando las propuestas presentadas. Además impulsamos desde el MIU conjuntamente con "La Ciega" la Comisión Interclautros para la Reforma del Plan de Estudios, un espacio desde el cual elaboramos propuestas, participamos de las 6 comisiones temáticas del Consejo, centralizamos sus discusiones y socializamos los diferentes proyectos presentados.

A su vez, participamos activamente del foro de debate sobre la reforma del Plan de Estudios organizado por el Congreso de Crítica Jurídica desarrollado en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y en el Colegio de Abogados de La Plata los días 13 y 14 de octubre, en el cual participaron las diferentes agrupaciones estudiantiles de la facultad, además de diferentes académicos de esta y otras Universidades de América Latina, y organizamos las 5tas Jornadas de Derecho Crítico –declaradas de interés académico por la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y por la Facultad de Cs. Sociales de la UBA- tomando como uno de sus ejes principales la reforma del plan de estudios.

Sobre la bese de lo efectivamente realizado a lo largo de estos últimos meses y a lo largo de estos 9 años de trabajo, elaboramos esta propuesta general con algunas de las principales líneas teóricas y prácticas que consideramos esenciales a la hora de pensar una eventual reforma al plan vigente.

Universidad – Derecho Crítico

Partimos de entender que la Universidad es un producto histórico y político. Como institución, está diseñada para cumplir un rol determinado dentro de la sociedad actual. Como la misma es una sociedad dividida en clases, capitalista, la Universidad despliega dos funciones elementales para mantenerla y reforzarla. Por un lado, produciendo mano de obra calificada para afrontar las exigencias del sistema productivo/cultural (conformado por el mercado, las grandes empresas y Estados). Así, se nos forma para adaptarnos a las feroces reglas del mercado y a trabajar para servir a las necesidades de las empresas (la Ley de Educación Superior lo expresa textual: "El conocimiento es un servicio que se vende según la demanda"). Por el otro, refuerza la base ideológica dominante. Es en ese lado donde se ubica la "ciencia jurídica". Esto se observa no solo en los planes de estudio, en las argumentaciones teóricas de las Cátedras y en los autores que tenemos que leer, sino también en las formas educativas dentro del aula. Allí, el conocimiento no se construye entre los actores (docentes y estudiantes), sino que se reproduce en sentido lineal del docente (incuestionable poseedor de saberes) hacia el estudiante (totalmente deslegitimado y vacío de saberes). Esto, naturaliza no solo las relaciones de poder, sino también el individualismo y la apatía por desarrollarnos como futuros profesionales críticos, reflexivos y constructores del conocimiento.

A pesar de eso por medio de diferentes luchas se logra abrir espacios para introducir el pensamiento crítico. Apostamos a que por medio de variadas grietas que se abren, podamos aportar aquí y ahora, a través de practicas político-académicas, a las diferentes luchas por democratizar la universidad logrando la conformación de espacios para introducir un pensamiento crítico y un conocimiento diferente. Pues si quedamos posicionados solo desde la denuncia del carácter de clase del derecho, no veríamos en él su potencial como una herramienta para la lucha. Hacemos referencia a la edificación de un modelo académico capaz de construir un conocimiento que no se contradiga con los intereses y necesidades de la clase trabajadora, que son los de todos aquellos que queremos recuperar la voluntad colectiva de un cambio transformador. Así las cosas y dado a nuestro inconformismo y a la convicción de que las cosas no están dadas de una vez y para siempre, nos organizamos como estudiantes para transformar la Universidad que tenemos en la Universidad que queremos. Por eso es que a la par de la lucha por una transformación social de raíz, desplegamos nuestra intervención política especialmente en dos sentidos. Por un lado, aportando al

desarrollo de un movimiento estudiantil participativo, unitario, democrático e independiente de las autoridades. Porque solo así, podremos conquistar nuestros derechos e intereses, recuperando el rol histórico de los Centros de Estudiantes, construyendo una Universidad pública, autónoma, científica, gratuita, crítica y de calidad. Por el otro, (y complementándose con lo anterior), debatimos y producimos conocimiento crítico, junto con graduadxs y docentes, en la teoría y en la práctica, disputando las concepciones hegemónicas con que se nos forma, porque "las ideas dominantes de una época, son las de la clase dominante". Utilizamos las herramientas que obtenemos en la facultad, poniéndolas en crisis con la realidad y reorientándolas para servir a la lucha de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Porque rechazamos ser reproductores de la injusta sociedad en que vivimos y creemos en la necesidad de construirnos como profesionales transformadores de la realidad.

Rol del profesional

Desde hace años ponemos en crisis la formación que recibimos a lo largo de la carrera, que nos presenta al Derecho como una ciencia neutral, objetiva, alejada de cuestiones políticas, económicas y sociales. No ingenuamente nuestro plan de estudios se estructura en base al derecho privado, que solo se encarga de la protección de intereses patrimoniales, apuntando así a la formación de profesionales con una visión individualista y comercial. Entendemos que debemos ejercer nuestra profesión defendiendo los intereses del pueblo, aplicar nuestros conocimientos para poder frenar la ofensiva criminalizadora del Estado, pero al mismo tiempo generar la ofensiva jurídica en beneficio del cambio que buscamos. El derecho vigente es sin duda un instrumento del Estado para poder legitimar la condición de opresión y explotación del conjunto del pueblo en provecho de un sector reducido de la sociedad. Sin embargo, entendemos también que el derecho puede ser utilizado en beneficio de la transformación social, aprovechando las contradicciones que el sistema jurídico nos presenta. El uso alternativo del derecho debe consistir en combatir el fetichismo de la ley, propio del jurista formado en la dogmática, impregnado íntegramente por la versión liberal-tecnocrática y positivista de su oficio. En edificar la conciencia del carácter inevitablemente ideológico y político, tanto del derecho como de la profesión. Ningún cambio saldrá de una reforma legislativa o de un antecedente jurisprudencial sin que haya un cambio de raíz en el sistema político y económico, el cual vendrá a través de la organización, la acción colectiva, y la lucha por una sociedad, sin oprimidxs, ni explotadxs.

Una reforma verdaderamente integral

Entendemos que la reforma no debe limitarse sólo a pensar en agregar o sacar dos o tres materias, sino que también es fundamental repensar el método pedagógico de enseñanza y la estructura de la carrera y de la facultad en su conjunto. La inexistencia histórica de cursadas para todos resulta un limitante sustancial que ineludiblemente debe revertirse garantizando a todos los estudiantes el derecho a asistir a espacios áulicos de construcción de conocimiento colectivo entre docentes y estudiantes, en el marco de los cuales el análisis, la reflexión, la crítica, el cuestionamiento y el estudio real de los contenidos curriculares sean prácticas cotidianas y no excepcionales, donde los y las estudiantes contemos con docentes formados en la docencia y no sólo en el derecho, que propongan alternativas de estudio diferentes a las convencionales.

De la mano de lo previamente mencionado y a fin de hacer efectivo el acceso irrestricto a las cursadas por promoción garantizándose la libertad de cátedra, el sistema de números de sorteo para acceder a una materia debe ser abolido. Para esto, la existencia real de las bandas horarias como en tantas otras facultades, sumado a una política seria y transparente de concursos docentes periódicos, debieran ser prioridades a la hora de impulsar una modificación integral de nuestro plan de estudios.

En el mismo orden de ideas, la necesidad de repensar el régimen inquisitivo de mesas de exámenes libres donde repetimos lo que dice un libro sin siquiera cuestionarlo, las clases "magistrales" de algunos docentes que nos cuentan sus logros en el ejercicio de su profesión y nos vamos de la clase sin decir una sola palabra, la duración igualitaria de horas cátedra en distintos tipos de materias, la falta de perspectivas de derechos humanos de las diversas materias como eje transversal, la necesariedad de una carrera más práctica que nos prepare mejor para ejercer la profesión, son algunas de las tantas cuestiones a debatir para una reforma verdaderamente integral.

Asimismo, debe reverse el curso de ingreso pero siempre partiendo de la base de lo previsto en el Estatuto de la UNLP en canto garantiza el acceso irrestricto a la Universidad. Nuestra facultad debe hacer eco de esta normativa generando todas las alternativas necesarias para una genuina inclusión de todos y todas, dejando atrás cualquier tipo de mecanismo eliminatorio y excluyente: como la necesidad de un puntaje mínimo o la aprobación de exámenes, entre otros. En este sentido, será fundamental reorientar la modalidad y el contenido del ingreso teniendo en consideración la falencia en la formación media de los aspirantes a una carrera de la universidad, producto de la degradación de la educación pública primaria y secundaria.

Una reforma que sea integral, sólo será una reforma que vaya de la mano de una facultad verdaderamente inclusiva, democrática, científica y popular.

Algunas propuestas concretas

Algunos de los debates desarrollados en estos meses, incluyeron el debate sobre la cantidad de horas cátedra con las que deben contar las carreras de grado. En este punto se concluyó que nuestra facultad se encuentra en un término medio de esta carga, con lo cual a la hora de pensar contenidos curriculares está en buenas condiciones como para agregar materias en caso de pensar nuevos contenidos, sin la necesidad de quitar otras, por lo cual todas nuestras propuestas van en el sentido de profundizar y complejizar la formación de los futuros y futuras abogados.

Yendo al meollo de la cuestión como agrupación estudiantil y colectivo de abogados, proponemos y apoyamos algunas modificaciones concretas que hoy están en debate en este proceso.

-Contenidos transversales: los derechos humanos desde una perspectiva integral:

A nuestro entender, en la sociedad de hoy hay dos ejes que deberían ser abordados de una manera general a lo largo y ancho del plan de estudios. Uno de esos tópicos es la posición frente a los Derechos Humanos. Dentro de lo que son los avances normativos en materia de derecho internacional, la inclusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional y el respeto estatal que casi todos los Estados del mundo propugnan defender, sumado al momento de la historia por el cual atravesamos, incluyendo las luchas sociales que se vienen llevando a cabo a lo largo de las últimas décadas en el mundo y en espacial en América Latina, resulta necesario que todas las materias sean enfocadas desde esta óptica, y que la preeminencia de estos derechos en términos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos, por sobre cualquier otro que se intente interponer, debe ser el modo en que se enseñe el derecho en nuestra facultad, sin perjuicio de la inclusión de una materia autónoma sobre esta categoría de derechos.

De este modo proponemos que en el marco de esta reforma quede como tarea principal modificar los programas de estudio para que en todas las materias se de un enfoque en derechos humanos.

-Otro tópico fundamental, creemos es el de la cuestión de género y la preeminencia hetero-patriarcal que existe en nuestra sociedad y que evidentemente se refleja en el derecho. Este eje creemos debe ser problematizado y abordado desde una perspectiva transversal a todo el contenido enseñado. Si bien han habido avances en términos de derechos civiles, lo han sido muy pocos en términos penales (aborto, femicidio), socio jurídicos, filosóficos, políticos, etc. Con lo cual también proponemos que se incluya la perspectiva de género y se debata y estudie en todas las materias de la carrera.

-Lugar a ocupar por el Derecho Social: en este punto adherimos completamente al dictamen presentado por el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP en especifico los apartados IV y V en tanto reflejan una opinión compartida sobre el lugar que ocupa y debería ocupar la materia, en un plan de estudios que hoy claramente está perfilado a formar abogados de tinte privatista y no social.

También compartimos en el análisis que en dicho dictamen se expresa a una crítica que se podría definir como súper generalista y poco estimulador de los contenidos del plan de estudios y de la poca relevancia a la investigación-acción que se promueve. En este punto nos resulta muy interesante un esquema que traemos de la organización curricular de la Universidad Nacional del Comahue, donde en un intento de estimular, el conocimiento y el interés particular de los y las estudiantes, proponen el curso obligatorio de tres seminarios orientados a una especialidad, ya sea penal, civil, laboral, socio jurídica, etc. A los fines de lograr un hibrido que nos permita no modificar la formación integral de los abogados, pero sí permitir adquirir conocimientos específicos, sobre materias que resulten de mayor interés y perspectiva para su futuro ejercicio profesional.

Esto a su vez tiene como ventaja que los formatos de los seminarios sean desarrollados desde una propuesta pedagógica diferente, donde el estímulo por la investigación, las teorías que permiten desarrollarla y la producción de conocimiento de manera creativa, autónoma, critica e independiente permita desarrollar en los estudiantes un nivel de empoderamiento de las temáticas desarrolladas mucho más profundas que en los esquemas clásicos de enseñanza.

-Por otra parte y siendo una histórica posición de nuestras organizaciones la de estar en contra de cualquier arancelamiento del acceso a la educación, se podría lograr un reconocimiento a la especialización de los estudiantes, que no cuentan con la posibilidad de realizarla en cursos de post grados, siempre costosos y exclusivos para una pequeña elite social. En ese sentido, insistimos en la necesidad de garantizar la gratuidad de los post grados brindados por la UNLP y en espacial aquellos que dependen de nuestra facultad.

Sobre la injerencia de la LES y la CONEAU

Entendemos que la reforma del plan de estudios no debe ni puede ser enmarcada bajo los lineamientos de la Ley de Educación Superior (LES), debiendo dejar de lado a su vez toda participación en el proceso de reforma a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esta comisión, creada por la LES y siendo el organismo ejecutor de la misma, viola sistemáticamente la autonomía universitaria ya que, como organismo externo a la universidad, tiene injerencias en las determinación de planes de estudios, programas de materias, así como también en relación a la distribución presupuestaria.

La Ley de Educación Superior, sancionada en el año 1995 durante la década menemista, posee un claro espíritu mercantilista, entendiendo a la educación superior no como un derecho sino como un servicio, y como tal ligando el proceso educativo a las lógicas del mercado.

Es así, que esta ley ha ido avanzando en las distintas universidades nacionales del país de diferentes formas. Por un lado, cediéndole intervención a sectores privados, no solo desde el punto de vista económico (la LES reconoce a los sectores privados como medios de financiamiento alternativo o adicionales al aporte educativo del Tesoro Nacional; en relación a este aspecto la LES ha avanzado en nuestra facultad, a través –por ejemplo- de la concesión a particulares de los servicios que brinda la institución a la comunidad académica), sino también direccionando el conocimiento en beneficio de estas empresas y en desmedro de las necesidades de los sectores mas postergados.

Otro aspecto a destacar es la esencia privatista de esta ley, que crea un organismo externo para "evaluar y acreditar" la educación superior, en base a parámetros de "calidad" propios del neoliberalismo y que en la práctica ha dejado en claro los objetivos de la CONEAU para la educación superior: el avance hacia la privatización de la universidad pública. En este sentido, en el marco de reformas de planes de estudios en las cuales la CONEAU ha tenido injerencia, este organismo ha impulsado políticas relacionadas al achicamiento de los contenidos de las carreras de grado y la creación de carreras de posgrado aranceladas, lo cual acarrea dos consecuencias fundamentales: por un lado la desvalorización académica de las carreras de grado, y por otro el avance hacia el arancelamiento de la universidad pública.

Entendemos que la reforma que se lleve a cabo en nuestra facultad no puede de ningún modo estar direccionada a los intereses de la LES ni la CONEAU. Debe ser una reforma discutida entre todos los miembros de esta institución y persiguiendo los intereses de los estudiantes que van a recibir su formación en base al plan que hoy se discute.

Necesidad de un debate serio, amplio y masivo sobre el proyecto a discutirse en el año 2012

Entendiendo la magnitud que implica la reforma de un plan de estudios en una carrera universitaria: instrumento por el cual se puede marcar o indicar una línea de pensamiento y de construcción, tanto respecto del perfil del abogado que egrese de la facultad, como en relación a cuáles serán las materias o áreas que desde la orientación que posea el plan de estudios, se les dará mayor o menor importancia en el mismo, creemos en la imperiosa necesidad de que el proyecto sea debatido de manera plural, masiva y extensiva a todos los integrantes de la comunidad universitaria de nuestra facultad.

Porque como lo indica la historia, luego de una reforma transcurren muchísimos años para que se lleve adelante otra modificación a la estructura de un plan. Por lo cual, el momento de su aprobación, deliberación o planificación, es el punto central de participación masiva y responsable.

En este marco, el plan de estudios muchas veces se transforma en una parte más dentro de la estructura de la universidad, que trata de organizar, jerarquizar y direccionar el conocimiento, tendiendo a la reproducción de relaciones vigentes en un determinado sistema imperante. Por ello, el debate no debe ser desarrollado e implementado de manera unidireccional, desde los docentes hacia los estudiantes, o desde las autoridades hacia el resto de la comunidad universitaria. Sino que se debe acudir a la experiencia enriquecedora de la discusión en todos los planos y propugnar por una horizontalidad que garantice que se escuchen las voces de todos y todas.

Es en la instancia deliberativa donde todos los sujetos pueden y deben expresar sus posiciones y proponer diferentes temas para la discusión colectiva. Siendo ésta, una política que entendemos, debe llevarse a cabo en el desarrollo y toma de las decisiones que hacen a la cotidianeidad de la facultad.

En base a lo antes expuesto, seguiremos trabajando y aportando; encausando nuestras acciones para lograr una mayor pluralidad de opiniones, en un aspecto que en definitiva va a repercutir sobre la vida de todos los integrantes de nuestra Unidad Académica y sobre la sociedad en general.

MIU - Movimiento Independiente Universitario
Colectivo de Abogados Populares "La Ciega"

28) (PROYECTO 61) Análisis crítico y evaluación de la ubicación de las materias "Derecho Penal I" y "Derecho Penal II", y el régimen de correlatividades por Abog. Marcelo Sena (Profesor Adjunto de "Derecho Penal II") y Abog. María José Cuenca (Auxiliar Docente de "Derecho Penal II)

REFLEXION CRITICA DEL REGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LAS MATERIAS VINCULADAS AL DERECHO PENAL

La propuesta para la reforma del plan de estudios que consideramos es modificar las correlativas existentes hasta el momento, en relación a las materias fondales vinculadas al derecho penal.

En particular, me parece que sería acertado que la materia derecho constitucional sea correlativa de Derecho Penal II.

Es sabido que la modificación de la reforma constitucional de 1994 ha impactado en todo el ordenamiento jurídico y en particular en el derecho penal actual, al incorporar en el artículo 75 inciso 22 diferentes instrumentos internacionales que inciden al momento de enseñar nuestra asignatura.

Consideramos que los alumnos deben de conocer la jerarquía de las normas, pues muchas veces existen tratados internacionales, de aplicación en nuestro ordenamiento, que modifican indirectamente nuestro código penal.

A modo ejemplificativo, se encuentra la Convención Interamericana contra la corrupción y la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que si bien no se encuentran incluidas dentro del catálogo de instrumentos enumerados en el art. 75., inc., 22; son instrumentos internacionales de rango superior al Código Penal y son utilizados en nuestra asignatura para explicar el concepto penal de "funcionario/empleado público".

Otro ejemplo a resaltar es la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; que otorga un concepto de tortura diferente al establecido en nuestro código penal.

La discusión respecto a la operatividad de dichos instrumentos, y de que concepto debemos de aplicar en nuestro sistema represivo sería más rica si el alumno tuviera dichos conocimientos previamente.

El art. 36 de la constitución nacional también se encuentra dentro de los artículos que impactan directamente en nuestro ordenamiento represivo.

Dichas cuestiones, que consideramos que se encuentran directamente relacionadas con la asignatura derecho constitucional, debemos de explicarlas en muchos casos en nuestra materia, ya que muchos de los alumnos no tienen este conocimiento si no han rendido aún dicha asignatura.

Por lo tanto, consideramos, que sería metodológicamente correcto, que el alumno adquiera en principio los conocimientos constitucionales en su totalidad, para que posteriormente pueda incorporar las cuestiones puntuales relativas al derecho penal.

Docentes: María José Cuenca y Marcelo Sena

29) **(PROYECTO N° 65)** Autor: Agrupación Estudiantil Franja Morada, remite proyecto integral de reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía

Haciendo un recorrido histórico a través de la evolución del Plan de Estudios a partir del año 1906, surge evidente la orientación generalista del derecho en lo que respecta a la formación del abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata que de las currículas mencionadas se pretendía dar.

Los cambios de la sociedad y del derecho han hallado su correlato en las modificaciones que al plan de estudios de la carrera se han hecho. En ese sentido, cabe destacar a modo de ejemplo la reforma realizada en el año 1929, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen que en el contexto de los contenidos dados en el ámbito de la facultad se ha traducido en la incorporación de nuevas asignaturas acordes con las nuevas necesidades de la sociedad, cual es el caso de las asignaturas Finanzas, Legislación del Trabajo, Derecho de la Minería y Rural, Derecho Marítimo y Legislación Aduanera y Régimen Jurídico de las comunicaciones.

De lo dicho anteriormente se infiere entonces que la reforma del plan de estudios no puede estar apartada de la coyuntura social que la condiciona.

Los cambios sociales surgidos a partir de la última modificación del plan de estudios en 1984 no han sido menores, y por ello es que la reforma que se propicia no puede ser ajena a ellos.

En ese sentido cabe hacer una revisión histórica, referenciando los datos salientes que justifican la modernización de la currícula de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Plata y que desde la FRANJA MORADA propiciamos.

Como dato saliente y determinante del cambio de paradigmas en lo que respecta a las ciencias jurídicas en el marco del derecho argentino, no puede soslayarse el rol primordial que ineludiblemente significa la Reforma Constitucional de 1994. Las modificaciones a la Carta Magna nos demuestran en estos primeros 17 años de vigencia el cambio en la estructura social y su correlato en las relaciones e instituciones jurídicas.

La consagración de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional ha repercutido enormemente en la estructura social. En efecto, la tutela efectiva de los derechos que antes se hallaban implícitos en nuestra Constitución hoy se manifiestan de forma expresa al amparo de un régimen concreto. Tal es así que derechos humanos como a la vida, la salud, la educación, la niñez, la no discriminación, al acceso a una vivienda digna, el derecho al trabajo y tantos otros, hoy se hallan jerarquizados por sobre otros intereses particulares.

La reforma constitucional también ha implicado renovaciones en lo que respecta al ejercicio de los derechos tutelados. Así, los mecanismos ordinarios de acceso a la jurisdicción se ven ampliados por nuevos institutos como las acciones de habeas corpus, habeas data y amparo -este último de existencia pretoriana anterior a la consagración efectiva en el texto legal- así como modificaciones en lo que respecta a la

legitimación para entablar pretensiones. En ese sentido podemos referirnos a la legitimación más amplia en materia de intereses difusos e intereses de incidencia colectiva.

En este último caso cabe estarse al mayor desarrollo que en el último tiempo ha tenido el derecho ambiental. Tal es así, que a través de los nuevos institutos mencionados y de las reformas procesales indicadas, ha ido in crescendo la evolución de la tutela de este derecho colectivo. Corolario de ella es la sanción de numerosas leyes que se acrecientan constantemente en número y en especificidad, dando origen al incipiente surgimiento del derecho ambiental como una rama autónoma. La trascendencia del ambiente para el desarrollo de la vida, las catástrofes naturales cada vez más atroces, la agotabilidad de los recursos naturales, el poco desarrollo de mecanismos de energías alternativas renovables, conllevan a que la tutela del Estado en este sentido deba ser aún mayor, teniendo en consideración también las consecuencias que estos factores traen aparejadas en lo que la vida y la salud de los ciudadanos se refiere. En ese sentido la legislación ha ido avanzando, hasta la consagración de normativa marco a nivel nacional como la ley 25.675 que tutela el derecho ambiental e insta a las provincias a que hagan lo propio considerando que por mandato constitucional se trata de materia no delegada por la provincias al Estado Federal.

El auge de esta disciplina amerita su tratamiento pormenorizado en el plan de estudios actual, por cuanto los noveles abogados de la UNLP deben contar con las herramientas para afrontar estas situaciones jurídicas que se suscitan en torno a la protección de estos intereses colectivos tan complejos y cada vez más autónomos.

Siguiendo la línea de pensamiento en lo que a la reforma constitucional de 1994 se refiere, no es menos significativo el reconocimiento que los derechos humanos han tenido en nuestra legislación. Su consideración como dignos de una tutela especial surge como correlato de las circunstancias histórico-políticas que precedieron a su consagración en un nivel supra constitucional, de allí la evidente vinculación que tales institutos tienen con la búsqueda de afianzar el institucionalismo necesario para el mantenimiento de una república democrática. En ese sentido, tratados como la Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada de Personas, así como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad tienden a afianzar el sentido democrático de la Constitución con miras a los objetivos antes descriptos, a la vez que otros tratados de Derechos Humanos como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer y demás convenciones internacionales tienen un sentido preventivo a la vez que implican una política estatal tutelar activa de los derechos en éstas enunciadas. De allí surgen también mecanismos para hacer efectiva la observancia de sus disposiciones, lo cual indefectiblemente repercute en la estructura clásica del derecho concebido con el límite en la soberanía, por cuanto surgen instituciones de carácter internacional que velan por el cumplimiento efectivo de derechos humanos en otra esfera jurisdiccional, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos institutos provenientes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica.

En otro orden de ideas, cabe destacar que la evolución normativa por vía de la sanción ordinaria de leyes del Congreso ha sido profusa.

En lo que al derecho de familia refiere, las modificaciones desde 1984 a la fecha han sido superlativas, por cuanto el esquema tradicional ha sido modificado a la luz de las demandas sociales que se adelantaron a la recepción legislativa, a la vez que la determinaron.

A partir de 1987, con la sanción de la Ley 23.515 de divorcio vincular, el derecho vino a legislar una circunstancia que de hecho venía sucediendo, siendo una legislación superadora de aquella en virtud de la cual la concepción de divorcio se asimilaba al actual instituto de la separación personal, que no implica disolución del vínculo conyugal con las consecuencias jurídicas que ello implica tanto en materia hereditaria, previsional, etc. A su vez, dicha normativa ha ido en pos de la consagración de la igualdad de género, por cuanto en su parte pertinente reglamenta la patria potestad de los hijos entendiéndola como compartida por ambos progenitores, y no como exclusiva del padre, como fuera entendida en el Código Civil de Velez Sarsfield, de marcada influencia patriarcal.

En el último tiempo la evolución del derecho de familia no ha sido menor, y una vez más puede observarse la influencia del derecho internacional público en esta materia: la Convención Sobre los Derechos del Niño ha influenciado en la reciente modificación del régimen de mayoría de edad, actualmente alcanzado a la edad de 18 años conforme Ley 26.579.

En lo que a reformas trascendentes se refiere en materia de derecho de familia, no menor es la radical reforma en torno al matrimonio civil, que de igual modo que la ley de divorcio vincular, viene a hacerse eco de lo que en la praxis social se venía llevando a cabo y que se refiere a la consagración del matrimonio civil entre personas de igual sexo.

En materia de legislación local, la tendencia es a descomprimir el sistema de justicia que actualmente se encuentra abarrotado, lo cual implica una dilatación en la resolución de conflictos, lo cual se traduce en muchos casos en una desprotección del derecho y en una tutela ineficaz. En pos de subsanar las deficiencias que el ejercicio de la profesión litigante conlleva, se han esbozado numerosos intentos para buscar alternativas a la resolución judicial de conflictos. En ese orden de ideas, se crearon institutos como los amigables componedores, los tribunales arbitrales -ambos de notorio fracaso práctico- y la mediación. Este último instituto tiene una trascendencia superior, por dos factores: por un lado la reciente sanción de la ley provincial de mediación obligatoria previa a la instancia judicial (que tiene excepciones taxativas atendiendo a las particularidades del conflicto de que se trate), y por otro lado, por cuanto implica un cambio de paradigma del abogado litigante, y consagra la figura del abogado asesor, preventor de la instancia judicial, con la consecuente participación mas activa en lo que a la resolución de conflictos respecta.

Es por ello que la reforma del plan de estudios se hace imperiosa. No cabe considerar una currícula que se mantenga al margen de las circunstancias que la condicionan y determinan, máxime cuando en materia de ciencias jurídicas la interrelación derecho-sociedad resulta indivisible. La evolución histórica hace a la necesidad de actualización del plan considerándola como determinante de sus nuevos contenidos y aproximaciones.

PRIMER AÑO - CICLO DE MATERIAS PROPEDÉUTICAS

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades
511	Introducción al Derecho	96 horas	-
512	Derecho Romano	96 horas	-
513	Derechos Humanos	72 horas	-

514	Historia Constitucional	96 horas	-
515	Introducción a la Sociología	72 horas	-
516	Derecho Político	96 horas	-

Para el primer año de la carrera, luego de un exhaustivo análisis de la realidad del Primer Año de nuestro Plan de Estudios y de los de otras Universidades Nacionales, creemos pertinente reformar cuatro puntos. En primer término incluir Derecho Romano en este ciclo inicial de materias propedéuticas, debido a que la realidad de los alumnos que ingresan a esta Casa de Altos Estudios nos muestra que el cursado de esta materia se realiza en el Primer Año, por el simple hecho de no ser necesaria la aprobación de materias correlativas para su cursado.

Como siguiente punto, estamos convencidos de que debe incorporarse a la currícula, la materia Derechos Humanos, que centralice el estudio de aquellas facultades, derechos, instituciones y reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Proponemos por consiguiente, la incorporación al Plan de Estudios de la materia Derechos Humanos con la modalidad de materia trimestral de 6 horas semanales.

En tercer lugar, creemos que la materia Introducción a la Sociología debe modificar su carga horaria, entendiendo que puede realizarse un estudio acabado de su contenido en 72 horas, a razón de un curso trimestral de 6 horas semanales.

Como última medida, luego de analizar los Planes de Estudios de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, advertimos que la materia Derecho Político se encuentra contenida al igual que en la actualidad de nuestro Plan de Estudios en el Primer Año de la carrera, pero en estas Universidades, Derecho Político no requiere la aprobación de ningún curso correlativo para cumplir con sus contenidos. Es por esto que planteamos que se quiten sus correlatividades, incluyéndola en el Ciclo de Materias Propedéuticas.

Para finalizar con el análisis del Primer Año, creemos de vital importancia, continuar garantizando el curso de las primeras materias, alcanzando también a las materias Derechos Humanos y Derecho Político. Proponemos esto ya que entendemos que al plantear la materia Derechos Humanos en la modalidad de curso trimestral, podrían dictarse tres cursos al año y que no sería dificultoso garantizar el cursado a los alumnos de primer año; en cuanto a Derecho Político también creemos que no existen obstáculos para garantizar el cursado de dicha materia a los alumnos del primer año debido a que en la actualidad existen 3 cátedras y 14 comisiones, arrojando como resultado una totalidad de 700 vacantes por cuatrimestre.

SEGUNDO AÑO

Código	Materia	Carga horaria	Correlatividades
521	Derecho Civil I - Parte General	144 horas	511 – 512
522	Derecho Constitucional	96 horas	513 - 514 – 516
523	Derecho Penal I - Parte General	144 horas	511 – 512
524	Derecho Público Provincial y Municipal	96 horas	522
525	Derecho Internacional Público	96 horas	522
526	Derecho Penal II - Parte Especial	96 horas	523 - 522

Para el segundo año de carrera proponemos 5 reformas estructurales. En primer término establecer como asignaturas correlativas de Derecho Constitucional las materias Derechos Humanos, Historia Constitucional y Derecho Político, entendiendo que son las tres materias del ciclo propedeutico que ostentan una vinculación directa con el contenido que engloba Derecho Constitucional.

En segundo término entendemos que es innecesario que sea requisito la aprobación de Derecho Civil - Parte General para abarcar el estudio de Derecho Penal I, así lo advertimos en los planes de estudios de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales De Cuyo, Lomas De Zamora, Nordeste, Sur y Córdoba. Entendiendo que el estudio del Derecho Civil se enmarca dentro del ámbito del Derecho Privado, no encontramos un sentido pedagógico ni metodológico, para mantener esta correlatividad, ya que el derecho penal se sitúa dentro del espectro del derecho público. Al no encontrar fundamentos para la subsistencia de esta correlatividad entendemos que esta solo funciona como un obstáculo que entorpece el curso de la vida académica de los alumnos que pertenecemos a esta Casa de Altos Estudios.

Como tercera medida, estamos convencidos de la necesidad de trasladar la asignatura Derecho Civil II al tercer año del Plan de Estudios, lo cual fundamentaremos y desarrollaremos en el apartado del tercer año de la carrera.

Como cuarta reforma creemos pertinente incorporar dentro del segundo año de la carrera las materias Derecho Público Municipal y Provincial, Derecho Internacional Público y Derecho Penal II, atendiendo a las nuevas correlativas propuestas por el presente proyecto de Reforma del Plan de Estudios.

Continuando con el análisis de la materia Derecho Penal II, como anteriormente mencionamos, si entendemos que el Derecho Penal se enmarca en la órbita del Derecho Público, creemos de vital importancia para un correcto abordaje de la materia contar con los conocimientos del Derecho Constitucional, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, entendemos que es pertinente ubicar a Derecho Constitucional como correlativa anterior a Derecho Penal II – Parte Especial, y no es asi a Derecho Penal – Parte General ya que consideramos que por la manera en que proponemos que se disponga el nuevo régimen de correlatividades dentro del Plan de Estudios, entendemos que los alumnos que se encuentren cursando Derecho Constitucional, se encontraran cursando simultáneamente Derecho Penal I. Realizando un análisis por sobre la estrecha vinculación existente entre el contenido de ambas asignaturas, entendemos que atendiendo a objetivos estrictamente pedagógicos sería beneficioso para los estudiantes de la carrera de grado el hecho de abordar simultáneamente el contenido de ambas materias.

TERCER AÑO

Código	**Materia**	**Carga Horaria**	**Correlatividades**
531	Derecho Civil II-Obligaciones	144 Horas	521
532	Filosofía Del Derecho	64 Horas	533
533	Derecho Procesal - Parte General	96 Horas	521 – 526

534	Derecho Civil III- Contratos	96 Horas	531
535	Economía Política	96 Horas	515 – 531
536	Sociología Jurídica	96 Horas	532

Para la disposición del Tercer Año del Plan de Estudios entendemos que aquí debe estar comprendido el estudio de Derecho Civil II, ya que por una cuestión las modificaciones propuestas en el ámbito de las correlatividades, creemos pertinente reubicar materias que estaban contenidas en el Tercer Año, hacia el Segundo, y viceversa, asimismo entendemos que el hecho de que dentro de un mismo año se encuentren comprendidas 3 materias con una carga horaria de 144 horas, generaría una sobrecarga en el alumnado.

Al analizar la asignatura Economía Política, creemos que para un mejor abordaje de los contenidos de la materia es primordial contar con la aprobación de Derecho Civil II. La disposición actual de esta materia en el Plan de Estudios genera un conflicto pedagógico para afrontar el dictado de las clases por el cuerpo docente, ya que se encuentran habilitados para cursar Economía Política, alumnos que constan sólo con la aprobación de Introducción a la Sociología, así como también estudiantes avanzados en la carrera, que se encuentran próximos a graduarse, por este motivo entendemos que allí radica el "conflicto pedagógico" para el dictado de su contenido: la disparidad de conocimientos entre los alumnos. Luego de un exhaustivo debate, creemos que modificando sus correlativas, habría una mayor paridad de conocimientos entre los alumnos cursantes.

Al abordar la materia Filosofía del Derecho encontramos una incongruencia en cuanto a la manera en que están diagramadas sus correlatividades. Entendemos que el alumno comienza en su primer año de carrera abordando determinadas líneas de pensamiento, filosofías, doctrinas y teoremas; una vez finalizada la etapa inicial, el alumno continúa en el segundo año de carrera realizando un análisis por sobre distintos autores, líneas filosóficas, y corrientes de pensamiento; estamos convencidos que para que el alumno continúe abordando el desmembramiento de las distintas corrientes filosóficas de pensamiento sería pertinente y adecuado que inmediatamente después de realizar el abordaje de Derecho Penal I se continúe con Filosofía del Derecho para luego desembocar en el estudio de Sociología Jurídica.

Al abordar el análisis de Planes de Estudios de diversas Universidades Nacionales encontramos que en su conformación existe la materia Derecho Procesal – Parte General. La teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procésales especiales. Considerando así mismo que la bibliografía utilizada por las cátedras para abordar dichos temas es la misma tanto en Procesal Penal como en Procesal Civil y Comercial. Por lo anteriormente explicado entendemos necesaria la incorporación de la materia Derecho Procesal – Parte General entendiendo que conllevaría mejoras pedagógicas en cuanto a lo referente a la teoría general del proceso.

CUARTO AÑO

Código	**Materia**	**Carga horaria**	**Correlatividades**
541	Derecho Civil IV - Derechos Reales	96 horas	534
542	Derecho Comercial I - Sociedades y Seguros	128 horas	534
543	Derecho Social del Trabajo y la Previsión	96 horas	522 – 534
544	Derecho Procesal Penal	96 Horas	533
545	Derecho Procesal Civil y Comercial	144 horas	533 – 534
546	Adaptación Profesional Procedimientos Penales	96 Horas	526 o 544 (*)
547	Adaptación Profesional Procedimientos Civiles y Comerciales	96 horas	533 o 534 - 545 (*)
548	Administrativo I	96 Horas	541 – 544

Para conformar de una manera idónea nuestro Cuarto Año del Plan de Estudios creemos de vital importancia realizar una reforma fundamental en cuanto a las materias necesarias para el correcto abordaje de Derecho Procesal Civil y Comercial. Al observar detenidamente los contenidos nucleados en esta materia entendemos que es fundamental haber completado la aprobación de Derecho Civil I - Parte General, Derecho Civil II y Derecho Civil III. De esta forma el estudiante contará con las herramientas necesarias para comprender el desarrollo de los Procedimientos Civiles y Comerciales. Asimismo entendemos que la manera en la que están planteadas estas correlativas nos presentan un plano en el cual el alumno que se encuentre cursando Derecho Procesal Civil y Comercial, estará cursando simultáneamente Derecho Civil IV y Derecho Comercial I, y vale aclarar que los contenidos de estas tres materias son conexos y sería adecuado pedagógicamente e idóneo para el estudiante desmembrar los contenidos de estas materias simultáneamente.

Continuando con la observancia de las materias exigidas para el cursado de Derecho Procesal Civil y Comercial, si contemplamos que es propuesta de los Consejeros de la Franja Morada la incorporación de la materia Derecho Procesal – Parte General, entendemos innecesaria la exigencia de Derecho Procesal Penal para estar en condiciones de aprobar Derecho Procesal Civil y Comercial.

(*)En cuanto a las Adaptaciones Profesionales, creemos pertinente realizar una distinción en cuanto al régimen de correlatividades conforme a la condición en que se apruebe dicha materia. Entendemos que la reglamentación vigente que contempla dichas materia es adecuada, exigiendo la correlativa inmediata anterior en el caso del cursado simultáneo de la teoría y la práctica (ante la reforma propuesta la correlativa exigida seráa Procesal Parte General) y demandando la aprobación de la parte teórica en el caso de pretender cursar únicamente la Adaptación Profesional.

QUINTO AÑO

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades
551	Derecho Civil V - Familia, Minoridad y Niñez	96 horas	541
552	Derecho Comercial II	128 horas	542 - 545
553	Derecho Agrario	64 horas	548
554	Derecho Administrativo II	96 horas	548

555	Derecho de Minería y Energía	64 horas	548
556	Derecho de la Navegación Marítimo Fluvial y Aéreo	64 horas	552

Para Quinto Año de la carrera entendemos fundamental la realización de importantes reformas, para comenzar a concretar la síntesis final del conocimiento.

Como primera medida, consideramos que en Derecho Civil V por cuestiones pedagógicas y metodológicas solo debe abordarse los contenidos de Familia, minoridad y niñez; y entendemos necesaria la consagración de Derecho Civil VI como materia autónoma abordando las temáticas concernientes a "Las Sucesiones". Encontramos fundamento en dicha propuesta ya que el contenido del Derecho de Familia aborda particularmente las relaciones jurídicas que giran entorno a una institución del Derecho Civil, la Familia. Por el contrario, el estudio del Derecho de las sucesiones encuentra un contenido principalmente patrimonial, y por este motivo que entendemos que dichas materias deben dictarse en forma independiente y autónoma.

Al analizar las asignaturas Derecho Agrario y Derecho de Minería y Energía entendemos que al incorporar la materia Derecho Ambiental dentro de la currícula es pertinente la quita de contenidos en ambas asignaturas, dejándolas delimitadas en materias cuatrimestrales de cuatro hora semanales, entendiendo que es una carga horaria adecuada para realizar un desarrollo pormenorizado de los contenidos de ambas materias.

SEXTO AÑO

Código	**Materia**	**Carga Horaria**	**Correlatividades**
561	Derecho Civil VI- Sucesiones	96 Horas	551
562	Finanzas y Derecho Financiero	96 Horas	535 - 554
563	Derecho Ambiental y Recursos Naturales	96 Horas	525 - 553 - 555
564	Derecho Internacional Privado	96 Horas	556 – 561
565	Derecho Notarial y Registral	96 Horas	561
566	Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos	96 Horas	545 - 551

En el Sexto año de la carrera creemos que deben englobarse las materias que sintetizan los conocimientos abarcados durante la carrera de grado.

Advertimos que en el plan de estudios de la Universidad Nacional de Cuyo, al igual que en la Universidad Nacional De Lomas De Zamora y la Universidad Nacional Del Litoral, el estudio del Derecho de las Sucesiones se realiza con independencia respecto del Derecho de Familia. Luego del diálogo mantenido por los consejeros de nuestra agrupación con docentes pertenecientes a las actuales cátedras de Derecho Civil V y de nuestra experiencia personal durante el cursado de la mencionada materia entendemos que en cuanto a los métodos pedagógicos empleados para el dictado y el abordaje de estos contenidos es de suma importancia que estos sean llevados a cabo por materias autónomas e independientes.

Como segunda propuesta para el sexto año, creemos de gran importancia incorporar la asignatura Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Planteamos esto debido a que en los últimos años la evolución de la sociedad y por ende del derecho ha llegado a la síntesis de la consagración del Derecho Ambiental como una materia autónoma. Si analizamos el contenido de dicha materia en nuestro actual Plan de Estudios veremos que se encuentra diseminado en distintas materias de la carrera; atentando contra un correcto aprendizaje del Derecho Ambiental. Entendiendo que esta rama del derecho se encuentra en constante crecimiento, creemos que es primordial nuclear los contenidos del Derecho Ambiental y los Recursos Naturales en una materia autónoma. De esta manera podremos generar en los estudiantes un verdadero compromiso y concientización de las problemáticas que hoy nos aquejan como sociedad y, desmembran y generar un espíritu crítico respecto del tratamiento que el Derecho realiza respecto de ellas.

En tercer lugar creemos innecesaria la correlatividad actual de Derecho Comercial II respecto de Derecho Notarial y Registral, por eso proponemos suprimirla, ya que significa solamente un obstáculo al momento de avanzar en la carrera, sin existir una congruencia en lo académico.

Para finalizar, en sintonía con lo que venimos planteando de actualizar el contenido del Plan de Estudio, entendemos que es imperiosa la necesidad de incluir en la currícula de la carrera la asignatura Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos. En la actualidad vemos que han sido promulgadas nuevas leyes en cuanto a los métodos alternativos para la resolución de conflictos y que serán de pronta implementación para los procedimientos civiles, comerciales y laborales. Nuestro actual Plan de Estudios encuentra una falencia importante al no abarcar estos contenidos, y entendemos que nuestra currícula no puede ser ajena a la realidad que se nos presenta y por eso creemos de gran necesidad y de expedita implementación esta materia en nuestra carrera.

SEMINARIOS

Como militantes de Franja Morada entendemos que esta modalidad de aprendizaje es de suma importancia para el desarrollo de la ciencia y que encuentra basamento en un pilar fundamental de la REFORMA UNIVERSITARIA de 1918, LA INVESTIGACIÓN. Por este motivo es que proponemos la ampliación y estabilidad de los seminarios dictados. Creemos que la investigación no sólo hace a la excelencia académica por el estudio pormenorizado que la persona realiza sobre la temática a la que se encuentra avocado sino por el análisis crítico que puede llegar a hacer de la realidad a través del análisis de los hechos. Estamos convencidos de que el seminario debe ser el espacio en el cual los estudiantes podamos realizar una profundización sobre temas especifico de la carrera.

Entendemos que la investigación es el medio por excelencia para comprender los fenómenos sociales, y de esa manera generar el avance de la ciencia del derecho.

MATERIAS OPTATIVAS

Si bien sostenemos que la formación del abogado de la Universidad Nacional de La Plata debe conservar su visión integral y generalista sobre el derecho, estamos convencidos de que nuestro Plan de Estudios debe ofrecerle la posibilidad al estudiante de complementar los contenidos abarcados por este, brindándole la posibilidad de realizar un estudio acabado en ramas o temáticas específicas del derecho. Por este motivo es que propiciamos la implementación de Materias Optativas, tal como es contemplado en los Planes de Estudio de

Desde la Franja Morada, y debido a nuestra impronta reformista, entendemos y concebimos a la Educación como un derecho, y por este motivo creemos que dentro del ámbito del estudio de grado debe encontrarse garantizado el ánimo de formación del estudiante, abarcando el mayor espectro posible de áreas dentro del derecho. Como hacemos referencia justamente a temáticas específicas dentro de la ciencia del derecho, creemos que todos los estudiantes deben tener la libertad de poder optar en que rama del derecho especializarse, esta libertad debe ser garantizada por nuestra Casa de Altos Estudios en el ámbito de la Educación Pública.

En cuanto a la exigencia por sobre las materias optativas creemos que sería adecuado que sea obligatorio para alcanzar el título de grado, la aprobación de al menos dos (2) materias optativas.

Como requerimiento en general, en cuanto a sus correlatividades creemos indispensable la aprobación del 50% del Plan de Estudios; y exigiéndose correlativas específicas para cada asignatura optativa en especial.

Luego del análisis pormenorizado efectuado a los diferentes Planes de Estudio es que ponemos a consideración del Consejo Directivo y la Secretaría Académica la creación de las siguientes materias optativas:

Código	**Materia**	**Correlatividades**
5401	Ética de las Profesiones Jurídicas	544 – 545
5402	Criminología	544
5403	Idiomas - Comprendiendo Inglés, Italiano, Francés, Portugués y Chino	533 – 534
5404	Derechos de Género	551
5405	Comprensión y Producción de Discurso	532
5406	Historia del Derecho – Evolución de las Instituciones	533 - 551
5407	Derecho Deportivo	542
5408	Derecho y Tecnología de la Información	542
5409	Derecho de la Integración	525 – 535
5410	Relaciones Internacionales	525
5411	Derechos del Usuario y el Consumidor	542
5412	Taller de Jurisprudencia	533
5413	Derecho Bancario y Bursátil	535 - 552
5414	Historia de las Instituciones Argentinas	521 – 522
5415	Partidos Políticos y Sistemas Electorales	516
5416	Globalización y Desarrollo	525 – 535
5417	Derecho de Daños	531
5418	Derecho Cooperativo y Mutuario	543
5419	Políticas Públicas y Desarrollo Local	524
5420	Derechos Intelectuales e Industriales	542
5421	Responsabilidad Civil Profesional	531 – 533
5422	Instituciones del Common Law	511
5423	Ecología Jurídica	525 - 553 – 525
5424	Análisis Biotecnológico de las Relaciones Jurídicas	545
5425	Estudio Pormenorizado de la Evolución del Derecho con las diferentes Formas de Estado	511 - 522
5426	Derecho Constitucional Bonaerense	524
5427	Régimen Jurídico de las Comunicaciones	542
5428	Medicina Legal	531 – 526
5429	Derecho Aduanero	556
5430	Derecho Constitucional Comparado	522
5431	Derecho de los Pueblos Indígenas – Comprendiendo Propiedad Comunitaria y el respeto a su Etnia y Cultura	522 – 541

PRÁCTICA PROFESIONAL FINAL

Como Agrupación Reformista entendiendo que es de vital importancia a través de la EXTENSIÓN UNIVERSITARIA la integración y profundización del rol social del estudiante, creemos menester afianzar los conocimientos en la órbita de la práctica profesional.

Cuando los consejeros directivos debatimos en las comisiones conformadas para analizar el actual Plan de Estudios, hubo una opinión que fue unánime y especialmente tratada por la Comisión de Prácticas Profesionales: la formación en el ámbito de la práctica profesional arroja falencias y deficiencias en el desempeño laboral de nuestros graduados.

El estudiante de nuestra Facultad forma parte de la Universidad Pública y por consiguiente, su formación no puede ser ajena a la sociedad que lo rodea. Estamos convencidos de que a través de la Práctica Profesional podemos establecer una retroalimentación entre los estudiantes universitarios y la sociedad, en la cual los estudiantes le devolvemos al pueblo la oportunidad que se nos brinda de estudiar en una Universidad Pública, y a través de ésta se nos permite profundizar el aprendizaje practico mediante el contacto con casos reales donde aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.

Como dijo el fundador de nuestra universidad: *"Una universidad moderna que no toma en cuenta el problema social es una universidad exótica, y sus fuerzas se perderán en el vacío si no la dirige a procurar la armonía suprema sobre la que se asienta la humana convivencia"*

Para la implementación de la Práctica Profesional Final (PPF), proponemos que los estudiantes que hayan alcanzado la aprobación de las asignaturas Derecho Procesal Civil y Comercial, Derecho Procesal Penal,

Derecho Civil V y Derecho Social del Trabajo y la Previsión realicen un trabajo articulado con las Clínicas y los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad a los fines de alcanzar una mejor formación en el ámbito del desempeño profesional.

Para su implementación proponemos una profunda articulación con la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad, que en los últimos años ha venido trabajando en la generación de nuevos ámbitos de inclusión estudiantil en el marco de Proyectos de Extensión. Todos los programas y proyectos de Extensión impulsados por esta Secretaria han sido pensados desde la gratuidad para sus beneficiarios, teniendo en cuento las dificultades que deben afrontar grandes sectores de la sociedad para acceder a la justicia y a información que te permita conocer la existencia y alcance de sus derechos civiles y políticos.

La función especializada de patrocinio y asistencia jurídica a sido pensada en función de hacer posible la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera de grado. En este sentido asignaturas tales como Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Social y Laboral, Derecho Comercial, y Sociología Jurídica entre otras, resultan de inmediata aplicación en los pasos abordados a los distintos programas y proyectos.

En la actualidad la Secretaria de Extensión cuenta con 17 consultorios jurídicos en 15 barrios de la ciudad de La Plata. En cada consultorio jurídico interviene un equipo de trabajo dirigido por un abogado mentor experimentado en el ejercicio de la profesión. En este ámbito el estudiante encontrara un espacio en el cual desarrollar sus conocimientos entorno a la práctica y ejercicio liberal de la profesión, teniendo un primer contacto con casos reales de aplicación práctica de la Ciencia del Derecho.

En correlación con lo anteriormente expuesto es que proponemos para la implementación de la PPF que no solo se considere la realización de esta en los consultorios jurídicos sino también en los demás programas llevados acabos desde la Secretaria de Extensión, a saber:

- En las clínicas jurídicas a diferencia de los consultorios en los cuales se afrontan los casos a nivel individual realizan un abordaje de la problemática social de manera colectiva. La similitud que presenta con los consultorios jurídicos gratuitos es que los estudiantes se encuentran bajo la tutela de un abogado mentor, que será el responsable de orientar a los alumnos a la búsqueda del saber.

Las clínicas jurídicas configuran una metodología de enseñanza diferente a la tradicional ligada a lo colectivo y a la paridad entre los integrantes de los equipos de trabajo, que se basan en la confianza y la colaboración. Entre sus objetivos se encuentra el de prestar servicios jurídicos específicos que tiendan a modificar las practicas que obstaculizan la protección de derechos fundamentales, cuando está comprometido el interés público. En la actualidad contamos con 4 clínicas jurídicas que abordan temáticas especificas: Derechos Humanos, Derechos de Consumidor, Derecho Ambiental y Derecho de Acceso a la Información Pública

- A través de la implementación del *programa "Derechos de las personas con padecimientos mentales"*, se promueve la integración de los sujetos con padecimientos mentales en la comunidad identificando las dificultades que tienen para acceder a la justicia y propiciando el respeto de los Derechos Humanos.
- Desde el programa *"Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas"* se tiene como principal objetivo trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de Derechos Humanos en relación a la niñez, desde el encuentro y el trabajo concreto con los niños en situación de calle en la ciudad de La Plata. El mismo cuenta con un consultorio jurídico y un área de investigación y construcción de herramientas de exigibilidad colectiva. Entendemos que la participación en este programa bajo la supervisación de un abogado es un medio propicio para la realización de la PPF.
- Otro de los proyectos de Extensión Universitaria en el cual entendemos que sería propicia la realización de la PPF es el programa *"Centro de Atención Jurídica para Pacientes con HIV"* su principal objetivo es tutelar de manera efectiva el Derecho a la Salud facilitando el acceso a la justicia de las personas con VIH/SIDA mediante de la atención jurídica gratuita.
- Finalmente proponemos la integración dentro de la PPF del *"Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares"* cuya misión comprende la evacuación de consultas y el patrocinio de personas de escasos recursos, estableciendo mecanismo para facilita el acceso a la justicia. A su vez el centro de atención propone un ámbito de asesoramiento legal con el fin último de mejorarla calidad de vida de los productores/trabajadores de la región.

Más allá de la modalidad que sea finalmente utilizada para la implementación de la PPF, creemos indispensable fijar ciertos criterios para la delimitación de ella.

Ésta siempre debe realizarse en miras a los fines altruistas con que fue propuesta: la FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE en el ámbito de la parte práctica de la carrera de grado, y la RETRIBUCIÓN HACIA LA SOCIEDAD.

Es inconcebible que la PPF sea funcional a las necesidades e intereses del mercado. Entendemos que la realización de la PPF ostenta como objetivo inmediato la profundización en el conocimiento de "campo" en el ámbito de la ciencia jurídica, y en consecuencia proponemos que la PPF sea el medio de adquirir el conocimiento práctico de la carrera manteniendo al margen la realización de esta práctica dentro de organismos del estado o de entes privados. Atendiendo esto es que reiteramos que los objetivos de la PPF son la formación del estudiante no solo a nivel académico si no también en la órbita de su espíritu y su rol social .

ANEXO
CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SE DEBEN COMPRENDER DENTRO DE CADA ASIGNATURA

Introducción al Derecho

En esta asignatura inicial a la carrera, los contenidos que se abarcan son introductorios al estudio de la ciencia del derecho. En este sentido, se analizan los elementos básicos que acompañarán al estudiante durante toda la carrera (noción de norma, constitución, hecho, acción, valores, ética y moral), a la vez que se realiza una aproximación a las corrientes iusfilosóficas que conciben al derecho de diversas formas.

Derecho Romano

Siendo el Derecho Romano la raíz histórica a la que se remonta nuestro derecho argentino, es imperioso su estudio, por cuanto muchas de las instituciones hoy vigentes encuentran sus orígenes en este derecho histórico, que ha ido evolucionando, dejando sus rastros en el derecho continental europeo, que luego ha ejercido su influencia sobre nuestro país y nuestro derecho. En esta materia se abarcará el estudio de la evolución histórica de Roma, su derecho e instituciones.

Derechos Humanos

En esta materia deberán dictarse la evolución histórica y el reconocimiento en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sus fundamentos y principios básicos y el tratamiento que la Constitución Nacional realiza sobre ellos.

Historia Constitucional

Esta materia recorre la historia argentina desde la colonización hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853 como corolario de la organización nacional gestada a partir de la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia de 1816, haciendo especial hincapié en los sucesos determinantes de la misma, así como en sus documentos, antecedentes y pactos preexistentes. A la vez recorre los sucesos históricos posteriores que llevaron a modificar la Constitución Nacional en numerosas oportunidades, siendo la última reforma la de 1994.

Introducción a la Sociología

Esta asignatura acerca nociones básicas de todas las ciencias sociales en general, y siendo que la carrera se denomina "Ciencias Jurídicas y Sociales" no es menor la influencia de estos elementos sociológicos en el derecho, por cuanto es la sociedad la determinante de lo que el derecho receptara en sus normas. En ese sentido, es primordial la caracterización de elementos como grupo social, grupos de presión, grupos de influencia, etc.

Derecho Político

El derecho es una ciencia basada fundamentalmente en leyes. Esas leyes son producto de la actividad legislativa de aquellos que fueron electos mediante el voto para representar a la sociedad. Es innegable la vinculación del derecho con la política, por cuanto sin ésta no existiría aquel. En esta asignatura se estudian las distintas teorías políticas históricas, desde Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau analizándolas a la luz de la inflencia que han ejercido en el desarrollo de la política argentina, el surgimiento de los partidos políticos y la consagración de las instituciones en el ámbito del Derecho Político.

Derecho Civil I

En esta asignatura se abordaran los elementos introductorios al derecho civil. El estudio de esta primer materia codificada ejercerá su influencia a lo largo de las demás materias de la currícula, por cuanto abarca el estudio de conceptos esenciales cuales son las nociones de persona, capacidad, domicilio, acto jurídico, hecho jurídico, ineficacia, nulidad, plazos, prescripción, caducidad, entre otros conceptos básicos que hacen a la ciencia del derecho en su conjunto, considerando que el derecho civil es la rama residual donde confluyen las demás ramas del derecho ante la ausencia de normativa específica.

Derecho Constitucional

Esta asignatura aborda el estudio del eje fundamental del derecho argentino, la Constitución Nacional. El análisis que se realiza ya no es desde un punto de vista histórico, sino más bien pragmático, realizando un desarrollo de su contenido, sus disposiciones y, desde 1994, la influencia que los tratados internacionales han venido a traer al adquirir jerarquía constitucional.

La forma representativa y republicana de gobierno, y federal de Estado halla su consagración en esta Constitución, de allí la importancia de su estudio pormenorizado como forma de asegurar su observancia, haciéndose hincapié en el grado de jerarquía que ostenta por sobre las demás normas, las cuales no pueden contradecirla sin tornarse inconstitucionales.

Derecho Penal I

En esta asignatura se abarcan desde un aspecto filosófico dos ejes centrales del derecho penal: la teoría de la pena (que se entiende por pena, los fines de la pena, los tipos de pena) y la teoría del delito (sus elementos distintivos a partir de las distintas escuelas de derecho penal que la condicionan).

Derecho Público Provincial y Municipal

El contenido de esta materia gira en torno al Estado Federal Argentino, la soberanía, autonomía, y autarquía. La descentralización política, burocrática y administrativa, con especial énfasis en la organización de los estados provinciales y municipales, sus competencias, atribuciones y deberes.

Derecho Internacional Público

Esta materia se centra en el abordaje del surgimiento de la sociedad internacional, su relación con el derecho interno, las organizaciones que lo rigen, la resolución de conflictos y el derecho supranacional en el Estado Argentino. Se pone especial énfasis a la manera en que los distintos Estados establecen vínculos económicos y políticos en el ámbito internacional y como el derecho internacional público busca establecer un equilibrio en la correlación de fuerzas entre estados.

Derecho Penal II

En esta asignatura se analiza la existencia de delito a partir de los elementos aprendidos en la asignatura correlativa anterior, mediante la aplicación de ellos a casos concretos, para determinar la existencia o no de delito, sus formas de agravamiento, atenuación y eximición, a partir de la estricta sujeción a la ley conforme lo establecen las pautas del derecho penal, pero con gran influencia doctrinal a la hora de hacer una correcta interpretación de la norma.

Derecho Civil II

Esta asignatura abarca el estudio de las relaciones jurídicas, los sujetos involucrados, sus objetos permitidos, sus modalidades, sus clasificaciones y sus consecuencias prácticas, a la vez que las modalidades de extinción. Abarca, a su vez, el estudio de la responsabilidad civil, con el enorme desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ello implica, entendiéndose que la noción de responsabilidad constituye el eje fundamental del derecho civil, por cuanto dará origen a las acciones de reclamación pertinentes, cuyo ejercicio se desarrollará en asignaturas posteriores.

Filosofía del Derecho

Esta asignatura propone el estudio de corrientes iusfilosóficas que han influenciado a la ciencia del derecho y que han delimitado su existencia actual, a la vez que propicia el estudio de nuevas corrientes que analizan el fenómeno jurídico desde diferentes perspectivas considerando sus mecanismos, sus fines y su realidad concreta, favoreciendo un análisis crítico a la luz de nuevas cosmovisiones del derecho y entendiendo al derecho como fenómeno complejo fruto de una constante evolución filosófica.

Derecho Procesal Parte General

El contenido de esta materia deberá abarcar el proceso judicial junto a las teorías unificadoras del proceso, los principios procesales, jurisdicción, acción, actos procesales, preclusión, cosa juzgada, sentencia y la organización del poder judicial.

Derecho Civil III

Esta asignatura centra su contenido en los contratos civiles, entendidos como los acuerdos de voluntades destinados a regir relaciones jurídicas de contenido patrimonial conforme lo dispone el art. 1137 del Código Civil. Se abordan las modalidades propias de los contratos, sus elementos tipificantes, los elementos

residuales ante ausencia de previsión de las partes (autonomía de la voluntad), sus formalidades, requisitos, sujetos y formas de conclusión.

Economía Política

El derecho como consecuencia de los acontecimientos sociales que lo determinan, no puede estar ajeno a la influencia que la economía implica en el marco de una sociedad. Entender las distintas teorías que explican los fenómenos económicos y su participación en el mercado es trascendental a la hora de desarrollar una legislación que ampare y proteja a la sociedad de los factores económicos desfavorables. También resulta indispensable el manejo de terminología propia que se vuelve recurrente en las relaciones jurídicas, tales como la noción de dinero, oferta, demanda.

Sociología Jurídica

En esta asignatura se estudian distintas corrientes sociológicas que han ido influenciando el desarrollo del derecho tal como lo concebimos, a partir de la determinación de sus fines y mecanismos, el rol social del derecho, y su forma de actuación. También se analizan distintas escuelas criminológicas, filosóficas, y económicas que repercuten en la concepción del derecho.

Derecho Civil IV

En esta asignatura se abordan las instituciones del derecho civil relativas a los derechos reales. Por ellos se entiende que se trata de los derechos que vinculan a las personas con las cosas. En ese sentido y atendiendo a la mayor o menor vinculación de la persona con la cosa, es que se aplicarán institutos diversos, todos los cuales se encuentran taxativamente (numerus clausus) descriptos en el Libro III del Código Civil (usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda, entre otros.)

Derecho Comercial I

Deberán estar contenidos en el marco del estudio de esta materia todo lo concerniente al Código de Comercio y las leyes mercantiles, sus fuentes, los actos de comercio, la empresa y la organización del Registro Público; las sociedades comerciales, a saber, los derechos y obligaciones de los socios entre sí, frente a la sociedad y terceros, la regulación en el derecho interno y en las sociedad constituidas en el extranjero que actúan en el territorio del Estado Nacional. Asimismo deberá darse tratamiento al régimen del contrato de seguros, derechos y obligaciones de las partes, y las regulaciones específicas de los seguros.

Derecho Social del Trabajo y la Previsión

Esta asignatura tiene un doble objeto: por un lado abordar el tratamiento de la legislación previsional, a través del estudio de los organismos encargados de administrar y otorgar pensiones y jubilaciones y por otro, el estudio de la legislación laboral, fundamentalmente a partir del estudio de la ley 20.744 de contrato de trabajo, sus disposiciones de orden público indisponibles y su fuero especializado.

Derecho Procesal Penal

En esta asignatura se aborda el acceso a la jurisdicción penal, la instrucción de un proceso a partir de la reforma del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires el 1998, a través de una Instrucción Penal Preparatoria y luego un juicio oral con las notas de celeridad e inmediatez que dicho proceso amerita, considerando los intereses que se hallan en juego.

Derecho Procesal II

El contenido de esta materia abarca la regulación del procedimiento judicial en la Provincia de Buenos Aires en la materia civil y comercial, en materia laboral, en materia contencioso- administrativa e incluso en lo que a la materia recursiva respecta, tanto ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires como ante la Corte de Justicia de la Nación.

Derecho Administrativo I

En esta asignatura se abordan temáticas introductorias al derecho de la administración. A partir de la diferenciación entre atribuciones estaduales legislativas -propias del Congreso-, judiciales -propias del poder judicial- y administrativas -propias del poder ejecutivo-, esta asignatura abarca estas últimas facultades estaduales y realizando una introducción al proceder de la administración entendido como actividad del poder ejecutivo y entes descentralizados bajo su órbita.

Derecho Civil V

Esta asignatura abarca el estudio del derecho civil , pero ya no entendido como derecho privado, sino como derecho de familia, de marcado contenido de orden público que justifica la intervención del Estado sobre ciertas relaciones de los particulares. En ese sentido se abordan cuestiones como las relaciones de familia, régimen del matrimonio, patria potestad, adopción, obligaciones y deberes familiares, acciones de familia, entre otros institutos caracterizantes de esta rama del derecho.

Derecho Comercial II

En esta asignatura el estudio se centra en dos ejes. En primer lugar, la asignatura desarrolla el proceso concursal en su doble faz: preventivo y liquidativo, como instancia consecuente al incumplimiento obligacional generalizado y permanente (Estado de Cesación de Pagos). Por otro lado, la asignatura aborda la temática de los títulos de crédito, instrumentos de intercambio comercial con sus particularidades y regímenes propios.

Derecho Agrario

Esta asignatura abarca el estudio de los institutos propios del derecho agrario, es decir, aquellos que operan en la actividad agraria entendida como la intervención del hombre en el ciclo productivo con el objeto de obtener frutos como consecuencia de esa intervención.

Derecho Administrativo II

En esta asignatura se estudia tanto el procedimiento administrativo como el proceso administrativo en instancia judicial luego de agotada la vía administrativa previa. En este sentido, son de aplicación los conceptos estudiados en Derecho Administrativo I, de modo de entender las etapas de elaboración de un acto administrativo, las formas de impugnarlo y las formas de someterlo a la jurisdicción en caso de conflicto. Por otro lado, también se estudia la actividad administrativa desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, es decir, los casos en que debe responder por su actuar o su omitir tanto licito como ilícito.

Derecho de la Minería y Energía

En esta asignatura se deberá estudiar el conjunto de normas jurídicas que regulan las concesiones exclusivas para explorar o explotar las sustancias generales que son de aprovechamiento de cualquier persona, regulando tanto en su constitución, naturaleza, ejercicio y extinción así como los actos, contratos y litigios que se refieran a el.

Derecho de la Navegación Marítimo, Fluvial y Aéreo

En esta materia deben hallarse comprendidos el estudio de la legislación interna y los diferentes tratados y convenciones concernientes a la navegación aeronáutica, fluvial, marítima y espacial. La delimitación de los

sujetos y su implicancia en el ámbito del derecho internacional. La regulación legal de sus contratos, delitos y faltas.

Derecho Civil VI – Sucesiones

Deberá completarse el análisis de la posesión y transmisión hereditaria, la competencia y capacidad para suceder los derechos y obligaciones del herederos, la indivisión hereditaria, los métodos de partición de la herencia, los distintos tipos de sucesiones, el principio general del orden sucesorio, la legítima, los testamentos y sus distintas modalidades, la institución y sustitución de herederos, el fidecomiso testamentario, la ineficacia de las disposiciones testamentarias y demás cuestiones referente al derecho de las sucesiones.

Finanzas y Derecho Financiero

Esta asignatura deberá comprender el concepto de finanzas públicas, tributo, poder tributario nacional, provincial y municipal, gasto público, crédito público, presupuesto estatal, impuestos, tasas y contribuciones especiales, los efectos económicos y jurídicos de los impuestos, la coparticipación, el empréstito forzoso, así como también los principios constitucionales de la tributación, los límites constitucionales al poder de imposición y la juridicidad de la norma tributaria.

Derecho Ambiental y Recursos Naturales

Se abordan temáticas propias del derecho ambiental, a partir del estudio de legislación tutelar del mismo, cual es el caso de las reservas naturales a la vez que las leyes de presupuestos mínimos surgidos al amparo de la manda constitucional del art. 41 y su correlato con el art. 124. Se deberán abarcar la regulación jurídica de los recursos naturales, su enumeración e identificación. Así mismo deberá comprender la diversidad biológica faunística, recurso natural y cultural; el daño ambiental la responsabilidad civil, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad penal; los delitos ecológicos, la evaluación del impacto ambiental y las medidas precautorias.

Derecho Internacional Privado

En esta asignatura se analizan los institutos del derecho privado previamente estudiados a lo largo de la carrera, caracterizados por la intervención de agentes de distinta nacionalidad, o bien de la misma nacionalidad situados en países diferentes, lo cual hace necesaria la intervención de normativa supranacional para venir a regular estas relaciones jurídicas, lo cual en la praxis esta dado por los tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina con países extranjeros.

Derecho Notarial y Registral

Esta materia deberá abarcar todo lo concerniente al formalismo en el derecho, las clases de instrumentos, la fe pública, el valor probatorio del instrumento público, dedicándole un especial tratamiento a la escritura pública, así como también la función notarial, su ejercicio y responsabilidad. En cuanto a lo que el derecho registral respecta deberá explayarse acerca de las características del sistema registral argentino.

Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos

En esta nueva materia deberán comprenderse la teoría general del conflicto, la mediación, la negociación y el arbitraje, la legislación interna concerniente a estas y su tratamiento en el Derecho Internacional.

Salvedad respecto de la implementación del Primer Año de Carrera

En la actualidad los alumnos ingresantes a la carrera se encuentran contenidos dentro del Régimen que garantiza el cursado de las primeras cuatro materias de la carrera (Introducción al Derecho, Historia Constitucional, Introducción a la Sociología y Derecho Romano). Desde la FRANJA MORADA entendemos que es necesaria la aplicación de políticas tendientes a contener a los alumnos de primer año entendemos que este derecho adquirido no solo debe ser garantizado sino que también debe sufrir una adaptación conforme al plan de estudios propuesto por nuestros consejeros.

Atendiendo a lo anteriormente explicado es que proponemos que a los alumnos ingresantes a la carrera se les contemple el beneficio de cursar las seis materias contenidas dentro del primer año del plan de estudios. Así mismo y como propuesta novedosa proponemos que el cursado de estas no esté librado únicamente al azar sino que debe comprenderse estas materias en dos bloques. El primero conteniendo Introducción al Derecho, Derecho Romano y Introducción a la Sociología; y el segundo englobando las materias Historia Constitucional, Derecho Político y Derechos Humanos. Esta determinación cobra significado ya que entendemos que el cursado de las materias comprendidas en los bloques debe ser simultáneo ateniendo a fines pedagógicos. De esta manera el estudiante que curse durante el primer cuatrimestre de su primer año Derecho Romano deberá cursar simultáneamente Introducción al Derecho e Introducción a la Sociología, debiendo soslayar para el segundo cuatrimestre el cursado de las tres materias contenidas en el segundo bloque anunciado anteriormente.

CONSIDERACIONES GREMIALES

Desde la agrupación FRANJA MORADA y como representantes del claustro estudiantil los consejeros demandamos una serie de puntos que creemos ineludibles:

- Que la aplicación del nuevo Plan de Estudios no puede ser bajo ningún punto de vista de aplicación retroactiva, entendiendo que es un derecho adquirido de los estudiantes ya inscriptos en la carrera su apego al Plan de Estudios actualmente vigente aprobado por resolución del Honorable Consejo Académico de fecha 10 de Marzo de 1989. Asimismo exigimos que no se establezcan plazos para el alcance del cumplimiento de la aprobación de la totalidad de las materias requeridas para el titulo de grado.
- Que todos los estudiantes inscriptos con anterioridad a la presente reforma del Plan de Estudios tengan la posibilidad de realizar las materias que se incorporen al nuevo plan.
- Que se respeten los nueve turnos de Mesas de Examen libre y su correspondiente reglamentación vigente.
- Que bajo ningún punto de vista podrán considerar el Honorable Consejo Directivo la quita del curso por promoción debiéndose respetar la reglamentación vigente.
- Que de ninguna manera el nuevo Plan de Estudios puede encontrarse alejado del espíritu Reformista, respetando la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, la periodicidad de los concursos, la extensión universitaria, la investigación, el laicismo y por sobre todas las cosas garantizar el acceso irrestricto a la EDUCACION PUBLICA y de excelencia académica consagrado en el estatuto de la Universidad Nacional de la Plata.

ANALISIS DE LA COMISION (Síntesis: aquí la comisión hará una resúmen de las propuestas de reforma del plan de estudios, y una sugerencia final respecto a la mismas.- Sin perjuicio de esa valoración que realice la comisión, la misma no debe eliminar o dejar de mencionar a cualquier otra postura que hubiere sido

presentada aunque se le oponga a su opinión.- Aquí no sólo la comisión podrá opinar sobre las propuestas presentadas, sino dejar también sentado sus pareceres de lo que podría hacerse o reformarse).
Aquí los miembros de la Comisión hemos decidido como criterio general, hacer un resumen de las propuestas según la materia que involucro la comisión de "Derecho Público", sin perjuicio que ut supra se ha transcripto íntegramente cada una de las propuestas para que cada uno pueda conocerlas y hacer su propia valoración.-
Sin perjuicio de ello, todos los miembros partícipes de las actividades de la comisión, nos ponemos a disposición del Sr. Decano y Secretaria de Asuntos Académicos para lo que consideren que deba ampliarse o intercambiar alguna opinión acerca de lo vivenciado.-

DERECHO PUBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Sólo concurrieron, y en el doble rol desempeñado de Consejero Directivo y Coordinador de Comisión el Prof. Vicente Atela y el Auxiliar Docente Gonzalo Fuentes.

Los docentes Atela y Fuentes, situación compartida por el graduado presente (Meschiany), expresan que actualmente la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" por su ubicación y régimen de correlatividades permite que el alumno se gradúe con la misma (lo que facilita la profundización de algunos contenidos) o alumnos que apenas tengan 6 materias finales aprobadas.- En éste último caso, observan en los alumnos un déficit importante por cuanto no poseen saberes básicos que requiere la disciplina como ser concepto de persona jurídica, la responsabilidad jurídica de los funcionarios, tipos de actos jurídicos, etc., para lo cuál entienden que la materia está bien mantenerla en el 3er año de la carrera, pero que además de las materias correlativas previas exigidas actualmente, debe poseer como mínimo "Derecho Civil I", "Derecho Penal I", y alguno llega a esbozar que quizás deban tener aprobado previamente "Derecho Administrativo I".-
Por último en este aspecto entienden que la materia "Derecho Público Provincial y Municipal" debe mantenerse como materia obligatoria. En tal sentido expresaron la importancia que presenta la asignatura, en lo referente al estudio especifico de los elementos constitutivos del municipio como sujeto político en las relaciones federales del estado Argentino.-

Ubicación de la materia: Está bien ubicada la materia dentro del tercer año.

Régimen de correlatividades: Como materias previas, a su vez debe tener Civil I y Penal I y debe aproximarse como correlativa de Derecho Administrativo y cercana a Procesal I.

Duración de la materia: La duración actual es correcta.

DERECHO CONSTITUCIONAL

Los profesores presentes (Mayón, Ziulu, Calá) evaluaron que la materia está bien ubicada en el 2do. año de la carrera y con las correlatividades previas, * Siendo que la materia exige permanentemente la interpretación de la Constitución a través de fallos de la Corte Suprema de Justica de la Nación, observándose serias dificultades en los alumnos para la lectura y comprensión de fallos (no saben que es un fallo, no logran discriminar los hechos del caso y las normas en juego, no pueden extraer cuál es la doctrina o concepto que emerge del caso, etc.), por lo que sugieren que lleguen a Derecho Constitucional al menos formados en la comprensión de que es una sentencia, cómo se lee una sentencia, cómo se interpreta una sentencia, cómo se extrae una doctrina judicial a través de un fallo, cómo se buscan los fallos de la CSJN; * Todos los profesores presentes de Dcho. Constitucional expresan que la materia hoy en día exige de profundizaciones vinculadas al sistema constitucional de derechos humanos, los tratados internacionales de derecho humanos, y otros aspectos que no llegan a ser profundizados en 4 meses.

El Profesor Mayón expresa que si la disciplina fuera semestral, quizás podrían abordarse más contenidos que hoy son enunciados en los programas pero no se alcanzan a desarrollar; * Consideran necesario que se genere un espacio, previo o posterior a derecho constitucional, que se enseñen la teoría general de los derechos humanos, así como los órganos internacionales, instrumentos de reclamo de derecho humanos, la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos, etc.

Preguntados por los consejeros presentes acerca de si ven necesario generar otros espacios para el estudio y reflexión del derecho constitucional, pero como talleres o seminarios que se ubiquen al final de la carrera, manifestaron que en este momento no estarían en condiciones de describir algún tema en particular, pero quizás se puedan explorar en una etapa de la carrera "Talleres de Jurisprudencia de la CSJN", "Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad: el sistema recursivo extraordinario en argentina y el sistema de reclamo por derechos humanos en el sistema interamericano", "Derecho Procesal Constitucional", etc.; * El Prof. Ziulu también manifiesta como concepto general, que en el debate del plan de estudios, no debe olvidarse que la formación del abogado debe abrirse más allá de los meramente positivo, que las ciencia del derecho cada vez se torna más transdisciplinar, requiriendo del auxilio y complementación de otras disciplinas sociales como la economía, la sociología, la psicología, etc.

Luego el Dr. Mayón en su condición de Director del Instituto de Derecho Político y Constitucional, enunció una situación que observa en la materia "Historia Constitucional", considerando que la misma si se mantiene verdaderamente como historia institucional y constitucional desde la Colonia hasta nuestros días, considera que la materia debería ubicársela en el plan de estudios como posterior a "Derecho Político", por cuanto resulta difícil de explicar sistemas de estado, federalismo y unitarismo, las idea constitucionales, etc., sin que hayan tenido una base de derecho político.

Ubicación de la materia: Está bien ubicada en el segundo año de la materia, pero debería ser del primer módulo del segundo año de la carrera.

Régimen de correlatividades: Es correcto el régimen actual de correlatividades previas, pero consideran necesario que el Derecho Constitucional sea correlativa previa a Derecho Penal I y Derecho Civil I.

Duración de la materia: Es correcta, pero la profundización de temas que tienen que ver con Jurisprudencia de la CSJN, Derecho Procesal Constitucional, Teoría de los Recursos Extraordinarios, etc. Requieren de una mayor carga horaria a lo que refiere a una materia cuatrimestral.

DERECHO PENAL I

En el ámbito de análisis y debate, existe uniformidad de opiniones en el sentido que previo al aprendizaje del derecho penal, necesariamente los alumnos deben tener aprobado el final de la materia "derecho constitucional", por cuanto resulta indispensable que tengan aprendido los principios de la constitución que luego aplicarán al derecho penal (art. 16, 18, 19, 75 inc. 20 CN, entre otros).

Preguntado ambos profesores presentes en la reunión –Prof. Domenech y Prof. Pérez Duhalde- acerca de si se mantuviera el esquema curricular actual de dos materias teóricas (Derecho Penal I y Derecho Penal II), se podría complementar con otros recorridos a través de formato de "seminarios" o "talleres de actualización o complementación", los dos manifestaron que no podían emitir una opinión de carácter

definitivo, pero que cualquier disciplina o materia que tendiera a mejorar los conocimientos en materia de derecho penal, lo veían con buenos ojos.- En cuanto a las temáticas o seminarios que considerarían valiosos para la formación de un alumno de grado, volvieron a reiterar que no se animarían en esa instancia a una resolución definitiva, aunque el Prof. Domenech expresó que podrían ser seminarios como los que actualmente él dicta en el marco del postgrado y que se establece un cupo de alumnos avanzados del grado en su modalidad del seminario de grado.- Así quedó como esbozado en voz alta como seminarios temáticos vinculados a la antropología, a la criminología, etc.- En tal sentido Atela manifestó que si ello también podría versar sobre "Régimen Penal Adolescente" o "Fuero Penal Juvenil" ya que consideraba –aunque manifestó que no es docente ni especialista en derecho penal- que observaba ciertos déficit formativos en el asunto, lo que fue considerado por los Profesores Domenech-Pérez Duhalde y Moretti como posible propuestas a considerarse.-

Preguntados acerca del proyecto experimental de "Derecho Penal I" y "Derecho Penal II", que se dictan ambas materias bajo un régimen de cursada intensiva semestral, se le interroga al profesor Domenech si existe un relevamiento o evaluación de cómo ha funcionado esa experiencia, si la misma ha resultado favorable o ventajosa en el aprendizaje del derecho penal, manifiesta que no existe una evaluación formal o informal, sino lo que se ha recogido en la experiencia como docente.- Que el resultado no ha sido medido, pero que su experiencia le indica que su resultado depende "necesaria e indispensablemente" de la articulación y coordinación que exista entre los docentes que dictan la primera parte (Derecho Penal I) y los que dictan la parte especial de los delitos (Derecho Penal II), por cuanto este proyecto experimental lo que busca es que el alumno aprenda simultáneamente los conceptos relativos a la teoría del delito y en paralelo va aprendiendo los delitos en particular en cuanto a sus figuras, composición, elementos de la conducta típica antijurídica, etc.- Pero entiende el Prof. Domenech que es fundamental la coordinación y articulación de todas las clases, entre los que dictan la teoría general del derecho penal y los que dictan los delitos en particular.-

Ubicación de la materia: No modificarían la existencia de Penal I en el segundo año de la carrera, lo que si recomiendan es que la misma se encuentre al final del segundo año.

Régimen de correlatividades: Deben tener necesariamente además de las correlativas existentes hoy en día, Derecho Constitucional y Derecho Civil II (Responsabilidad Civil)

Duración de la materia: Penal I debe seguir siendo semestral y Penal II cuatrimestral.

DERECHO PENAL 2 NO ASISTIERON: sin perjuicio de ello, el Instituto de Derecho Penal envío propuesta.

PROCESAL PROCESAL I (Procedimiento Penal)

Del encuentro mantenido con los Profesores de la materia "Derecho Procesal I", uno de los participante –Prof. Caputo Tártara- insistió en que dividir a los dos Derechos Procesales existentes actualmente en el plan de estudios en tres materias distintas, a saber "Derecho Procesal Parte General", "Derecho Procesal Penal" y "Derecho Procesal Civil, Comercial, Laboral y Constitucional".

Asimismo entiende que la materia "Derecho Procesal" debería encontrarse más adelante en lo que hace a su ubicación dentro del plan de estudios, ya que es una materia estructural de la carrera y porque al mismo tiempo, cree que desde que el alumno rinde la materia Procesal I hasta que se gradúa olvida muchos conceptos esenciales.

También quedó planteado por los profesores de "Derecho Procesal I" que las prácticas tal como están hoy no sirven para nada y deberían ser un objeto central en la formación de los abogados. Plantean que no cree que sea útil que se enseñen de forma conjunta las materias prácticas y teóricas dado que cree fundamental para primero aprobar los conocimientos de fondo y forma para después si, los prácticos. La supuesta articulación y coordinación que debería existir entre las clases teóricas y la práctica es muy difícil de concretar, en la realidad no existe, siendo que en ocasiones quien tiene que dar la práctica termina dictando la teoría.

Los profesores asistentes al encuentro de comisión - Abog. Caputo Tártara- en primer término manifiesta coincidir plenamente con el otro profesor presente –Soria- en lo que hace a la división de los dos derechos procesales en tres materias distintas ("Teoría General del Proceso", "Derecho Procesal Penal" y "Derecho Procesal Civil y Comercial").

A diferencia de Prof. Soria, el Prof. Caputo Tártara considera que la materia Derecho Procesal I debe estar en tercer año de la carrera, luego que el alumno haya aprobado Derecho Constitucional, Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Penal I y II, entre otras.

El Prof. Soria cree que las prácticas procesales deben estudiarse en forma posterior a la parte teórica pero deben estar integradas y articuladas. Ambos profesores –Caputo Tártara y Soria- resultan críticos de cómo se dictan las prácticas en la actualidad. Dice que esta materia no se condice con la realidad fáctica en muchas ocasiones.

Luego Caputo Tártara plantea la importancia de las salidas del aula, siendo que éstas experiencias hacen que el alumno comprenda o fije conceptos teóricos en su contexto de realidad. Cree que ayuda a los alumnos a conocer, pensar y decidir. Plantea que cuando el alumno sale pero no tiene un conocimiento íntegro de la materia esto no lo ayuda en nada. Debe existir una planificación académica en cuanto al sentido y objetivos que se plantean con esa experiencia extra áulica.

Ubicación de la materia: El lugar actual es correcto, aunque no verían con malos ojos la posibilidad de ubicarla en años posteriores.

Régimen de correlatividades: Están de acuerdo.

Duración de la materia: Es adecuada, pero son partidarios de proponer una teoría general del proceso para y luego si, los procesales en particular.

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL NO ASISTIERON: Sin embargo remitió propuesta por correo electrónico, el Profesor Titular interino Prof. Eduardo Fernández, y el Director de Instituto de Derecho Procesal Profesor Emérito Dr. Roberto Omar Berizonce.

DERECHO ADMINISTRATIVO I

Los profesores que asistieron a la reunión de Comisión –Andreucci, Marafuschi y Mamberti- coincidieron en que debe mantener la división y denominación en "Derecho Administrativo I" y "Derecho Administrativo II.

Consideran que además de las correlatividades actuales existentes a su materia, se debería tener necesariamente "Derecho Público Provincial y Municipal", condición que en la actualidad no se exige, y muchas ocasiones los alumnos cursan la materia sin tener conocimientos básicos de los que es el Estado

Provincial, la organización de sus poderes y la burocracia organizacional de la administración pública provincial.- El Prof. Marafuschi expresa que no necesariamente hay que semestralizar la materia sino que debe hacer funcionar el Instituto de Derecho Administrativo, ya que no funciona, ni realiza actividades ni talleres, ni convoca a las Cátedras, ni realiza investigación, ni ninguna actividad, siendo que en su época como estudiante existían en la Facultad grandes maestros del derecho administrativo.

El Consejero Atela le pregunta a los profesores (Andreucci, Marafuschi y Mamberti) si ve como necesario hacer una materia práctica más que comprenda las prácticas en derecho administrativo, responde que no lo puede afirmar ni negar, pero si lo que puede afirmar es que el conocimiento que se aprende con la práctica otorga resultados mejores.- En tal sentido completa la idea el Prof. Mamberti diciendo que a él le pasa que una cosa es enseñar el acto administrativo, y los elementos del mismo, y otra cosa es haciéndolo y mostrando a los alumnos una resolución administrativa.- El Prof. Andreucci y Mamberti consideran que debe mantenerse la división actual del derecho administrativo en las materias "Derecho Administrativo I" y "Derecho Administrativo II", no caer en la desvirtuación de una disciplina de "Elementos de Derecho Administrativo" por cuanto no hay elementos, sino auténtica teoría del derecho administrativo como rama clásica del derecho público, la función administrativa, y la organización administrativa del Estado, etc.

Ubicación de la materia: Es correcta.

Régimen de correlatividades: además de las correlatividades actuales existentes a su materia, se debería tener necesariamente "Derecho Público Provincial y Municipal"

Duración de la materia: Dejarla como ahora.

DERECHO ADMINISTRATIVO II: NO ASISTIERON. Sin embargo el Prof. Tomás Hutchinson y el Prof. Marcelo Lamoglia, en su condición de Director y Secretario de Instituto de Derecho Administrativo, han remitido por vía electrónica una propuesta y evaluación de la disciplina.

FINANZAS Y DERECHO FINANCIERO

Se analizó si existe una necesidad de desdoblar la disciplina en dos materias: "Finanzas Públicas" y "Derecho Tributario", los profesores presentes en el debate (Prof. Gamaleri y Prof. Menucci) expresan que tendría que ubicarse primero "Finanzas Públicas" y recién luego como correlativa posterior a "Derecho Tributario".- Aunque ambos profesores no son convencidos de desdoblar o separar la disciplina.- Lo que si están de acuerdo, es por la cantidad de temas incluidos en la materia debería tener una carga horaria mayor, como si fuera una materia semestral.

El Prof. Menucci argumenta que en su experiencia docente y en su Cátedra le dan importancia al tema administrativo tributario, tal es así que tienen cargas horarias extras a las horas de cursada normal, que se destina a talleres de jurisprudencia y a la enseñanza práctica.- En ésta Cátedra el régimen para los alumnos importa el agregado de una clase más de 2 horas por semana.- Expresan que habría que extender las prácticas procesales ya que a su entender está agotado el modelo de sólo prácticas procesales en materia civil y comercial y penal; debiendo hoy diversificarse además en la existencia de prácticas laborales, prácticas de familia y menores, prácticas administrativas, etc.- Lo ideal sería que existiera una práctica procedimental de acuerdo a cada fuero o materia en que existen órganos judiciales.- También se explaya el Prof. Menucci en cuanto a la enseñanza del derecho aduanero, que se enseña no con la profundidad deseada, pero que a su visión es muy importante hoy el derecho aduanero a la luz de los procesos de integración, además de las cercanías de la ciudad de La Plata con su propio puerto, su zona franca, y el puerto de la ciudad de Buenos Aires.-

Ubicación de la materia: Es correcta.

Régimen de correlatividades: primero "Finanzas Públicas" y recién luego como correlativa posterior a "Derecho Tributario

Duración de la materia: Habría que incorporar la parte práctica de forma obligatoria para poder abarcar todos los contenidos.

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL

La Esc. Tranchini indica que a su entender la carrera debe seguir teniendo un perfil de abogado generalista. No debe existir superposición de contenidos entre la teoría del derecho notarial y registral, con lo que es las prácticas profesionales notariales para la titulación como escribano.

Preguntada por el Consejero Atela acerca del actual régimen de correlatividades de la materia, responde que la considera adecuada como está ahora, que está bien ubicarla en la última etapa del estudiante de abogacía, por cuanto la materia se constituye en integradora de todos los conocimientos previos.- Preguntados los presentes si debiera dividir la disciplina en dos materias: "Derecho Notarial" y "Derecho Registral", los profesores presentes unánimemente responde que no están de acuerdo, por razones de tradición y además porque no pueden ser desarticulados ambos campos disciplinares.- Uno es inherente al otro.- Aunque expresan que por el régimen de carga horaria (actualmente es una materia cuatrimestral) la misma si se pretende profundizar la cuestión registral, no alcanza el tiempo de la cursada.-

A contrario la profesora Podrez Yañiz indica que han dialogado con su titular –la Esc. Gonzalía- y que no descartarían la posibilidad de desdoblar la materia en "Derecho Notarial" y por el otro "Derecho Registral", en razón que ésta última como consecuencia de la masificación de relaciones jurídicas inter individuos y la instrumentalidad de los mismos, se tiende cada vez más a su registración como ser registrar contratos de locación, poderes generales y especiales, etc.-

Acerca de las prácticas notariales en su situación actual, la Prof. Scipioni expresa que ella lo ve bien que sean practica anuales –aunque en rigor no duran 12 ni 10 meses-, y que cada vez tiene más alumnos en los últimos años que quieren obtener el título de escribano, aunque sabemos que después deberán rendir exámen frente ha llamado a concurso para cubrir un registro de escribano.

Preguntados si cambiarían o modificarían en algo el plan de estudios o régimen de materias para obtener el título de escribano, en virtud de las materias teóricas para graduarse de abogado son las mismas que para escribano, respondiendo Tranchini, Scipioni y Podrez Yañiz, que el régimen actual lo consideran adecuado.

Ubicación de la materia: En el mismo lugar.

Régimen de correlatividades: En el lugar en el cual está ahora.

Duración de la materia: La misma que en la actualidad.

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

Interrogado el Prof. Consani si considera que la materia debería contener otras disciplinas correlativas o ubicación de los plan de estudios, expresa para su entender la materia debería ubicarse en la última etapa de la carrera, así como se hace con la materia "Derecho Internacional Privado". Que en la actualidad ubicada en el tercer año de la carrera y el régimen de correlatividades la pueden cursar alumnos con sólo con 5 materias o finales aprobados o hasta directamente se pueden recibir de abogados, generándose un abismo en la visión y aprendizaje de los alumnos que poseen pocas materias. Según su entender debería ubicarse en el último tramo de la carrera como se lo hace con el Derecho Internacional Privado.- Como mínimo los alumnos deberían tener conocimiento de derecho de los contratos, del derecho comercial y económico, por cuanto es muy difícil explicar el derecho internacional de los tratados con alumnos que no saben que es un "acuerdo o contrato" entre las naciones, como tampoco saben nada de economía o de comercio, cuando en la actualidad mucho del derecho internacional público pasa por las relaciones económicas.- Preguntado acerca de cuál es su opinión frente a la posibilidad de crear como nuevas materias o espacios curriculares a "Derecho Humanos" y "Derecho de la Integración", manifestando que sin lugar a dudas no podemos tener una carrera sin la materia derechos humanos, que este vacío es inconcebible en el estado actual de la carrera de abogacía en el país y el mundo; no así con la disciplina derecho de la integración que no lo considera como indispensable ya que mucho del contenido de la materia "Derecho Internacional Público" está vinculado con los procesos de integración de Sudamérica, Europa, Unasur, y otros marcos de integración que en la actualidad se dictan en la materia.

El Prof. Consani aporta que es fundamental que los alumnos sean formados en el idioma inglés.- Entiende que el idioma inglés es el que se usa con mayor asiduidad en todo el mundo de las relaciones internacionales.- Preguntado si esa materia de idioma inglés debe ser optativa u obligatoria, responde que entiende que debería ser obligatoria

Ubicación de la materia: Cambiarla para el final de la carrera como Derecho Internacional Privado.

Régimen de correlatividades: Idem anterior. Para el caso en el que la materia no esté al final de la carrera, los alumnos deben tener aprobado si o si Derecho Civil III, Derecho Comercial y Económico.

Duración de la materia: idem que en la actualidad

Es todo cuanto podemos informar al Honorable Consejo Directivo en relación a las actividades cumplidas por la Comisión de "Derecho Público", elevando el presente informe para ser presentado en la sesión especial de 1 de diciembre de 2.011.-

Señores miembros del Honorable Consejo Directivo, lo expuesto es todo cuanto podemos informar en relación a las funciones encomendadas en el marco de la Resolución 198/11, quedando a disposición de Uds. y del Sr. Decano y Sra. Secretaria de Asuntos Académico en lo que consideren necesario profundizar o aclarar.-

III. INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO PRIVADO.-

Formar estudiantes del futuro es un compromiso ante la sociedad, y con tal convicción esta Comisión ha trabajado en la actualización de la estructura del plan de estudios, unos de los pilares, aunque no el único, en el que se asienta la formación de los futuros profesionales egresados de esta Facultad.

La COMISION DE DERECHO PRIVADO analizó los contenidos y metodología de la enseñanza que involucran a las actuales materias Derecho Civil I, Derecho Civil II, Derecho Civil III, Derecho Civil IV, Derecho Civil V, Derecho Comercial I, Derecho Comercial II, Derecho de la Navegación, Derecho Agrario y Derecho Internacional Privado, considerándose la posibilidad de modificar el régimen de correlatividades, contenidos disciplinares e incorporación de nuevas disciplinas.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: La comisión está integrada por los consejeros directivos: alumna BARBARA DRAKE y abogados SERGIO DELUCIS, MARIA FLORECIA FRANCHINI y EDWIN M. MONTERO LABAT.

REUNIONES REALIZADAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
La COMISION se reunió los días 11 y 25 de agosto, 8 y 22 de setiembre y 6 y 27 de octubre de 2011.

1.- *REUNIÓN DEL 11 DE AGOSTO DE 2011*

Reunida la Comisión de Derecho Privado se presentan los docentes de Derecho Civil V, Juan José De Oliveira, y Karina Bigliardi, quienes acercan la propuesta relacionada a dicha asignatura, y que posteriormente integrará el PROYECTO N° 19.

2.- *REUNIÓN DEL 25 DE AGOSTO DE 2011*

Reunida la Comisión de Derecho Privado se procedió a analizar las propuestas de la graduada Guillermina Rafaelli, la del alumno Juan Pablo Rincón y la del Profesor CASTRO MITAROTONDA Profesor de Derecho Civil V quien eleva consideraciones y reflexiones acerca de la enseñanza en la Universidad (PROPUESTAS N° 1, 2 y 18 respectivamente)

Vinculado a la temática que aborda esta Comisión se consideraron aspectos referidos a la necesidad de revisar el régimen de correlatividades de las materias que componen el actual plan de estudios.

3.- REUNIÓN DEL 8 DE SETIEMBRE DE 2011

Reunida la Comisión de Derecho Privado, se hicieron presentes los docentes: Dr. Luis F. P. Leiva Fernández (Profesor Titular de Derecho Civil III Cátedra 2 y Director del Instituto de Derecho Civil de la Facultad), Paulo Martín Labombarda (Derecho Civil I), Luis Alberto Valente (Derecho Civil I). Se intercambiaron opiniones sobre la duración de la carrera, régimen de correlatividades, semestralización de algunas materias de la currícula y sobre experiencias recogidas en el grado que impactan en el ejercicio profesional.

En el marco del encuentro, la Consejera María Florencia Franchini expone su experiencia con respecto al TALLER EXPERIMENTAL que se desarrolla en la comisión a su cargo en la Cátedra 2 de Derecho Civil III desde el año 2006. Explica que la propuesta surgió en el entonces Honorable Consejo Académico desde el claustro de graduados, solicitándose la colaboración para su implementación a un docente de cada año de la carrera.

Dicho emprendimiento se lleva a cabo hasta la actualidad, siendo la única comisión de derecho privado donde se desarrolla, de allí la importancia de su análisis en la Comisión.

La Profesora manifiesta que desde el año 2006, la comisión a su cargo cuenta con una carga horaria mayor que el resto de las materias que componen el derecho privado, incorporándose dos horas semanales más. El TALLER se planteó los siguientes objetivos: conocer las distintas problemáticas que impactan en los efectos de los contratos civiles, analizar casos jurisprudenciales que involucren situaciones contractuales, confrontar los intereses de las partes al tiempo de celebrar un contrato; redactar contratos en general y cláusulas contractuales específicas a partir de situaciones puntuales. El TALLER concluye con la presentación de una carpeta de trabajos prácticos y una evaluación que se promedia con los parciales.

La docente indica que tras la implementación del TALLER, la cantidad de alumnos inscriptos en la comisión no sólo se mantuvo, sino que se incrementó en los últimos años. Señala que alumnos libres optan por ser evaluados sobre el contenido de la materia como preparación al examen final y forman parte del taller, donde también entregan la carpeta de trabajos prácticos y rinden el examen. En el cuatrimestre en curso, los alumnos libres que optaron por transitar esta etapa ascienden a 26. Señala también que a los efectos de la reforma del plan de estudios consultó a los actuales alumnos y a alumnos de cuatrimestres anteriores con los que continúa en comunicación por ser docente además de Derecho Civil IV. Unánimemente le manifestaron que estiman estar más capacitados con respecto a quienes no lo cursaron, se expresaron a favor de su continuación, y efectuaron aportes muy interesantes para optimizar su desarrollo.

4.- REUNIÓN DEL 22 DE SETIEMBRE DE 2011

Reunida la Comisión de Derecho Privado, concurrieron al seno de la misma el abogado Paulo Martín Labombarda, el abogado Homero Picone y el Juan Pablo Rincón. Con respecto a la propuesta presentada por el abogado Paulo Martín Labombarda (PROYECTO N° 32) y dado el contenido de la misma, se sugiera además su remisión a las Comisiones de PERFIL CURRICULAR Y MATERIAS PROPEDEUTICAS.

5.- REUNIÓN DEL 6 DE OCTUBRE DE 2011

Reunida la Comisión de Derecho Privado se hizo presente el abogado Pablo Muñoz, quien se interiorizó de los Proyectos presentados hasta esa fecha, referidos al Derecho Privado. En particular, además, se consideró el PROYECTO N° 12: Autor: Noemí OLIVERA Profesora Adjunta de "Derecho Comercial I" propone la materia "Derecho Informático".

6.- REUNIÓN DEL 27 DE OCTUBRE DE 2011

Reunida la Comisión de Derecho Privado se presentaron las docentes de Derecho Civil V, Elvira Aranda y Florencia Burdeos. Se debatió sobre las distintas propuestas presentadas referidas a la materia, la ubicación de la asignatura dentro de la currícula y el régimen de correlatividades para el abordaje de su aprendizaje.

7.- REUNION DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011

Reunida la Comisión de Derecho Privado, se procedió a analizar el PROYECTO N° 54: Autor: Grupo Abogados "La Campora" y el PROYECTO N° 59: autor Movimiento Independiente Universitario -MIU- juntamente con el Colectivo de Abogados Populares "La Ciega".

Posteriormente, se debatió sobre la confección del informe final, y la incorporación en el mismo de los proyectos cuyos contenidos se vinculan con la temática que debe abordar esta Comisión, que serán analizados a continuación.

RECOPILACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y QUE CORRESPONDEN AL EJE TEMÁTICO DE LA COMISIÓN.
A continuación de efectúa la recopilación de las propuestas presentadas, a las que se las designa de acuerdo al número que se les ha adjudicado institucionalmente al momento de su recepción en plandeestudio@jursoc.unlp.edu.ar

Se presentaron en la comisión y/o fueron remitidas a la misma las siguientes propuestas:

-PROYECTO N° 32: Autor: Paulo LABOMBARDA Profesor Adjunto de "Derecho Civil I", eleva propuesta y reflexiones acerca del régimen de correlatividades de las materias de derecho privado.

PROYECTO N° 53: Autor: Francisco VERTIZ, Auxiliar Docente de "Introducción a la Sociología" remite evaluación y análisis de la importancia de los procesos de reforma de un plan de estudios en la carrera de abogacía, su implicancia en la enseñanza y formación de los nuevos abogados.

PROYECTO N° 54: Autor: Grupo Abogados "La Campora", remite reflexiones y propuestas acerca de la reforma al plan de estudios, accesibilidad a la educación superior y universidades públicas.

PROYECTO N° 49: Autor: Diego DE ROSA, Jefe de Trabajos Prácticos de la materia "Derecho Civil IV", remite consideraciones y evaluación crítica de la enseñanza del derecho privado a partir del análisis de la jurisprudencia.

PROYECTO N° 12: Autor: Noemí OLIVERA Profesora Adjunta de "Derecho Comercial I" propone la materia "Derecho Informático".

PROYECTO N° 1: Autor: Graduada Abog. Maria Guillermina RAFAELLI, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera.

PROYECTO N° 2: Autor: Juan Pablo RINCÓN, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera.

PROYECTO Autor: El Profesor Titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Cátedra …Abogado Eduardo Roveda y los docentes de la Cátedra, Abogadas Florencia Burdeos, Alejandra Massano, Patricia Giavanetti y Natalia Pagotto

PROYECTO N° 19: Autor: Graciela BARCOS (y otros) Profesora Titular interina de "Derecho Civil V" propone la división de la materia en dos áreas: Derecho de Familia y Derecho Sucesorio

PROYECTO N° 57: Autor: Abogado Luis María Nielsen

PROYECTO N° 18: Autor: Fernando CASTRO MITAROTONDA Profesor de "Derecho Civil V" eleva consideraciones y reflexiones acerca de la enseñanza en la Universidad

PROYECTO N° 59: autor Movimiento Independiente Universitario -MIU- juntamente con el Colectivo de Abogados Populares "La Ciega"

PROYECTO N° 51: Autores: Edwin MONTERO LABAT, Profesor Adjunto de "Derecho Civil II" y ex Secretario de Extensión Universitaria de esta Casa de Estudio, y Evangelina MONTERO LABAT, Profesora en Ciencias de la Educación (UNLP), remiten proyecto acerca de la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho.

PROYECTO N° 46: Autor: Maria Florencia FRANCHINI, Directora de Seminarios remite propuesta de enseñanza de nociones elementales de epistemología y metodología de la investigación en ciencias jurídicas y sociales

PROYECTO N° 62: Autores: Jorge Mario Bru, Auxiliar Docente interino de Derecho Civil II, Cátedra I, Facultad de Cs. Jurídicas y Soc. de UNLP, Miembro académico activo del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (La Plata) y Dante D. Rusconi: Abogado y Escribano. Presidente en ejercicio del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (La Plata). DERECHO DEL CONSUMIDOR

PROYECTO N° 8: Autor: Juan José ZANDRINO Profesor Titular de "Derecho Comercial I", propone la reformulación de los contenidos estructurales de las actuales materias "Derecho Comercial I y II". Se consideró en este punto la propuesta elevada en el año 2008 por el Instituto de Derecho Comercial a cargo del Profesor Juan José Zandrino y que diera origen al expediente N° 400-5236/08.

e) Adentrándonos al análisis pormenorizado de las diferentes propuestas y que corresponden al eje temático de esta Comisión, desarrollamos las propuestas que a continuación se detallan:

1.- PROYECTO N° 32: Autor: Paulo LABOMBARDA Profesor Adjunto de "Derecho Civil I", eleva propuesta y reflexiones acerca del régimen de correlatividades de las materias de derecho privado.

En su presentación propone: … "como imprescindible modificar las correlatividades que gravitan en el abordaje adecuado de las materias del derecho privado, en especial, del Derecho Civil … el alumno debe llegar a Parte General habiendo atravesado -además de Introducción al Derecho y Derecho Romano- el estudio del Derecho Constitucional. … en relación al derecho de la Obligaciones alude a la conveniencia de que todo el régimen de la responsabilidad civil pase a formar una materia separada, cuatrimestral. De este modo, se podría superar el inconveniente puesto de manifiesto por varios profesores por la falta de proporción entre la

extensión de la asignatura y el tiempo material de su dictado ... se culminaría con una realidad que" (a su juicio) "es negativa y que está representada por la existencia de algunos cursos pre-evaluativos en los que las unidades temáticas de la responsabilidad civil pasan a ser estudiadas por los alumnos en forma libre y a ello se ciñe luego el examen oral para su aprobación" ... "Otro aspecto que no debería soslayarse es el análisis juridico-económico del derecho de daños, imposible abordarlo hoy integramente porque seria añadir más temas a un programa por demás extenso, todo lo cual, hace aconsejable que el abordaje de la responsabilidad civil sea una asignatura autónoma ... respecto de Contratos se propone que la misma pase a ser semestral ... a la par de lo anterior, debería reflexionarse sobre la posibilidad de analizar los contratos que aun forman parte del Código de Comercio -compraventa, depósito, etc.- en Derecho Civil III ... Por otra parte, la atinada decisión de incluir en la formación de los alumnos una parte llamada "experimental" debería ampliarse a todas las comisiones y cátedras, de manera obligatoria ... Derecho de Familia y Sucesiones: adhiere al esquema y a los fundamentos del proyecto presentado por la doctora Graciela Barcos de que las materias sean separadas ...".

2.- PROYECTO N° 54: Autor: Grupo Abogados "La Campora", remite reflexiones y propuestas acerca de la reforma al plan de estudios, accesibilidad a la educación superior y universidades públicas.

Se propone: "... no pueden entenderse como periféricas materias claves para comprender el modelo económico actual, tales como el Derecho de Minería y Energía, Derecho Agrario y Economía Política ... lejos de considerar estos campos del saber jurídico como asignaturas optativas, es necesario jerarquizarlos incorporando los debates actuales a sus planes de estudio (por ejemplo en materia de commodities, renta agraria, extranjerización de la tierra, Plan Estratégico Agroalimentario 2020, etc.) ... asimismo sostenemos ... que el segundo año de la carrera debería contemplar las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Político, Derechos Humanos, y Criminología para luego sí, ingresar a las materias más densamente codificadas ..."

3.- PROYECTO N° 49: Autor: Diego DE ROSA, Jefe de Trabajos Prácticos de la materia "Derecho Civil IV", remite consideraciones y evaluación crítica de la enseñanza del derecho privado a partir del análisis de la jurisprudencia.

Su propuesta incluye "... institucionalizar el análisis en jurisprudencia en materia de derecho privado, como una actividad cotidiana ... pues entiende que es una ... situación, de hecho, que se realiza permanentemente en la práctica profesional, ya sea que se trabaje como abogado en la profesión libre, dentro de estructuras estatales (Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto nacionales como provinciales), compilador de jurisprudencia en editoriales, etc ... Por ello, propone: ... comenzar a cambiar la concepción de la comprensión del Derecho Privado, ya no como una cuestión estática donde "*El derecho Civil y el Comercial son lo que dicen los Códigos respectivos y sus leyes complementarias";* debería virar hacia una visión más *dinámica* donde un taller de análisis de jurisprudencia haría en gran medida cumplir con estas ideas de renovar el pensamiento crítico, pudiéndose generarse ámbitos donde se fomente este tipo de pensamiento y actualizar aún la crítica actual ... La propuesta concreta consiste, pues, en que junto con el desarrollo de cada materia cursada de Derecho Privado (aunque también podría extenderse a otras materias), paralelamente deba cursarse estos talleres complementarios, con una carga horaria de 10 horas cuatrimestrales y 15 horas semestrales, a cargo de uno o dos docentes (auxiliares docentes y/o jefes de trabajos prácticos, preferentemente), divididos, según el numero de cursantes en dos o más grupos ... Mientras los alumnos participen en estos cursos obtendrán una "nota de control continuo"- que integrará la mitad de la nota final- ,la cual será vinculante junto a la nota del examen final del taller. Esta nota final de taller a su vez deberá ser tenida en cuenta por el profesor titular y/o adjunto, en su caso, a los efectos de poder promocionar la materia. En cuanto a los exámenes finales de los talleres, estos podrán consistir en evaluaciones escritas y /u orales (según propongan los docentes)..."

4.- PROYECTO N° 12: Autor: Noemí OLIVERA Profesora Adjunta de "Derecho Comercial I" propone la materia "Derecho Informático".

En el proyecto propone la creación de la asignatura Derecho Informático, encuentra fundamento: "... el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) ha posibilitado nuevas formas de interacción social, que han dado lugar a la llamada 'Sociedad de la Información'. En ella las tecnologías disponibles no hacen más que incrementar la tendencia a la convergencia, proceso en el que la radio, la televisión, las telefonías fija y móvil e Internet tienden a fusionarse en una sola red digital. En este marco, debido a la internacionalidad connatural de la red, los problemas jurídicos a considerar involucran un enorme espectro que, como se verá, trasciende las competencias de las comisiones de Derecho Público y de Derecho Privado, ya que: Involucran, a un tiempo diferentes tradiciones legales: las del mundo occidental, Derecho Civil y Common Law, pero también, crecientemente, las de los derechos chino y japonés). Comprenden, asimismo, diversas ramas del derecho: Derecho Privado -forma y prueba de los actos jurídicos, contratos, propiedad intelectual-; Derecho Público - regulación de las comunicaciones, cibercrimen- e, incluso, Derechos Humanos - protección de datos, privacidad, libertad de expresión-). En la relación interpersonal, no sólo han aparecido nuevos medios para realizar acciones previstas -documento electrónico, firma digital-, sino también nuevas modalidades de interacción -redes sociales en Internet-, como asi también Nuevas conductas dañosas han impuesto, por su parte, el reconocimiento y tipificación de los llamados delitos informáticos ... las posibilidades derivadas de los medios tecnológicos impactan en el sistema jurídico-político, basado en la legalidad estatal, lo que ha llevado a considerar la cuestión en ámbitos internacionales -Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (ONU)- y regionales -Estrategia para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (CEPAL)-. ... los déficits en la formación de alumnos que, al día de hoy interactúan con las tecnologías informáticas, pero difícilmente imaginan el complejo entramado de relaciones jurídicas que hace posible su uso y menos aún las consecuencias derivables de las mismas en términos, por ejemplo, de responsabilidad civil ... aconseja generalizar a todo el alumnado la formación en este campo ... teniendo en cuenta que la multiplicidad de áreas del derecho involucradas responde a una dinámica derivada de su unicidad conceptual y les son aplicables principios desarrollados al efecto -neutralidad tecnológica; equivalencia funcional; doble click; first come, first served-, resulta conveniente que ellas sean incluidas en el Plan de Estudio reformado bajo la forma de una asignatura ... Incluir cada unidad en los programas de la materia más afín llevaría a presentarlas ante los alumnos de modo desarticulado e impondría a profesores que pueden no estar interesados en la cuestión el estudio no sólo de esos temas, sino de los aspectos tecnológicos involucrados ... la denominación aquí propuesta, 'Derecho Informático' es la que

predomina en Iberoamérica entre quienes analizan los aspectos normativos del uso de la informática en el marco del paradigma vigente. Por otra parte, la disciplina se está perfilando en el carácter de rama autónoma ya que cuenta con objeto y principios propios reconocidos así como avances ciertos en lo referido a un método propio … las cuestiones inherentes a la asignatura propuesta aconsejan que, en el sistema de correlatividades, sea ubicada no antes de haber superado los contratos del Derecho Privado y Derecho Penal. Evidentemente, sería ideal que los alumnos tuvieran alguna formación en Derecho Administrativo… ".

5.- PROYECTO N° 1: Graduada Abog. Maria Guillermina RAFAELLI, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera.

Aborda cuatro puntos que considera trascendentales para la carrera. En lo que respecta a la incumbencia de esta Comisión, en la parte final expresa que la materia Derecho Civil V debería cursarse de manera cuatrimestral sin exponer sus razones o fundamentos. Efectúa una mera expresión de apoyo de tipo subjetivo que no alcanza para justificar un nuevo régimen, y consecuentemente invalidar el existente.

6.- PROYECTO N° 2: Autor: Juan Pablo RINCÓN, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera.

El alumno efectúa su presentación en la que aborda diferentes puntos de la currícula. En lo atinente al estudio de esta Comisión, alude al régimen de correlatividades expresando que "…ciertas correlatividades no se corresponden con contenidos estructurales que deben de conocerse para continuar el camino de la currícula. Por ello, me parece atinente realizar cambios como: A) que para cursar Derecho de las Obligaciones y Comercial parte general, se tengan conceptos de economía política y que ésta, a su vez, también sea nutrida por Introducción al Derecho e Historia Constitucional, además de la Introducción a la Sociología. B) Que para cursar Procesal Civil y Comercial se exijan por lo menos conocimientos de Derecho a las Obligaciones o de los Contratos –hoy en día un alumno que solamente ha aprobado Civil parte general estaría habilitado para cursarla y/o aprobarla- además de Derecho Comercial parte General… E) Para cursar Derecho Procesal Penal se exijan conocimiento del Derecho de las Obligaciones."
Asimismo, expone que "se tengan en cuenta las siguientes consideraciones, sobre el cambio de carga horaria de las siguientes materias: … Derecho de Familia y Sucesiones (cuatro meses en calidad de cursada intensiva), … Derecho Comercial I y Derecho Constitucional debieran tener una carga horaria semestral…"

7.- PROYECTO N° 19: Autor: Graciela BARCOS (y otros) Profesora Titular interna de "Derecho Civil V" propone la división de la materia en dos áreas: Derecho de Familia y Derecho Sucesorio.

Los docentes, exponen como propuesta principal la división de la materia: Derecho de Familia por un lado, y Derecho de las Sucesiones por el otro.

A tal fin alegan como fundamento "que el Derecho de Familia es una materia en constante avance, que necesita de otras ciencias para ser analizada…" Por ello, continúan diciendo "… Derecho de Familia debe darse en extenso un semestre o cuatrimestre intensivo, con los agregados sobre Niñez, Fuero de Familia, Violencia familiar, el Matrimonio y su nueva concepción, Concubinato, Derecho Alimentario, entre otras…" rematando con la consideración de que es imposible exponerla cuando se comparte el espacio temporal con otra materia. En este entendimiento, consideran que de separarse esta materia del Derecho de Sucesiones debería llamarse "Derecho de Familia y de la Niñez".

Consecutivamente, arguyen que el Derecho de Sucesiones difiere de la percepción del Derecho de Familia, mereciendo que se le dedique un cuatrimestre entero, para que los alumnos conozcan en profundidad, el vasto articulado que esta materia posee y toda la temática del proceso sucesorio.

Por otro lado, tratan el tema de la correlatividad. Al respecto, se manifiestan descontentos con la situación de que con sólo seis materias previas se pueda acceder a rendir la materia, no obstante encontrarnos ante una materia de quinto año. Implicando ello la congregación en una misma cursada de alumnos que tienen sólo 6 materias con alumnos que tienen 27, provocando dificultades, ya que resulta notorio que el alumno más avanzado en la carrera tiene mayor comprensión.

Expresan asimismo, que la materia Derecho Constitucional debe ser correlativa de cualquier Derecho Civil.

También se manifiestan a favor de la correlatividad de Derecho Procesal Civil previo a la materia Derecho de Familia.

8.- PROYECTO N° 57: Autor: Abogado Luis María Nielsen Efectúa una presentación donde se abordan distintos puntos sobre la currícula del nuevo plan de estudios. En lo atinente a esta comisión, propone transformar Derecho Civil V, creando como materia independiente Derecho de Sucesiones (Derecho Civil VI). Asimismo, propone modificar la denominación de Derecho de la Navegación por Derecho del Transporte en general.

En cuanto a las correlatividades, propone tener aprobados al menos tres de las cinco asignaturas civiles para acceder a cursar y/o rendir Derecho Procesal. Así también que, la asignatura Derecho Agrario, sea correlativa de la materia Derecho Procesal.

9.- PROYECTO N° 62: Autores: Jorge Mario Bru, Auxiliar Docente interino de la Cátedra Derecho Civil II, Cátedra I, Facultad de Cs. Jurídicas y Soc. de UNLP, Miembro académico activo del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (La Plata) y Dante D. Rusconi: Abogado y Escribano. Presidente en ejercicio del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (La Plata).

El proyecto propone en el marco del "plan de reformas al plan de estudios de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la inclusión en la currícula oficial de la carrera de Abogacía, de una asignatura autónoma sobre "Derecho del Consumidor", que incluya el estudio metodológicamente organizado de su contenido, caracterizado, a su entender, "por sus novedosas aristas de derecho público, privado, procesal y sustancial".
Como fundamento de la reforma propuesta, los autores refieren por un lado la necesidad de abordar el estudio autónomo del Derecho del Consumidor como un moderno sistema de instituciones jurídicas de protección que presentan características propias y definidas, lo que exige, según su criterio, la profundización de su estudio en las aulas de enseñanza del derecho.

Por otro, señalan que el fundamento de la reforma propuesta, se encuentra en el "mandato legal establecido en el art. 60 de la ley 24.240 de defensa del consumidor, que en consonancia con el art. 42 de la Constitución Nacional, establece la obligación del Estado de introducir en las currículas educativas oficiales

de todos los niveles, los preceptos y contenidos de esta materia, tal y como lo han hecho ya, otras universidades de nuestro país, con distintas modalidades en cuanto a su implementación curricular.

En apoyo de lo expuesto se indica que la sociedad moderna muestra en todos sus aspectos, una realidad distinta de la que regulaba el derecho tradicional, y que ello exige el desarrollo de modernos instrumentos de protección del ciudadano contra los nuevos riesgos que generan los productos y servicios en el mercado.

Agregan a ello que en ese proceso de adaptación a las nuevas circunstancias, el derecho del consumidor, ha provocado en el sistema jurídico nacional una verdadera transformación, tiñendo con sus principios preventivos y protectorios muchas instituciones del derecho clásico cuya adecuación a los nuevos tiempos, era una necesidad.

Como ejemplo de las transformaciones provocadas por el Derecho del Consumidor la propuesta señala el específico sistema de protección contractual de consumidores y usuarios, que regula en materia de publicidad abusiva y engañosa, cláusulas abusivas, deber de información, derecho de arrepentimiento y principios interpretativos fijados a favor del consumidor. También la moderna regulación de la responsabilidad civil, integrada por el régimen de garantías de productos y servicios, la responsabilidad objetiva y solidaria no solo por productos, sino también "por servicios" y la inclusión en el derecho argentino de la figura de las sanciones punitivas (Art. 52 bis ley 24240). La propuesta destaca también que la materia trae importantes soluciones adjetivas o procesales, señalando entre ellas las normas sobre procedimientos administrativos, legitimación colectiva, efectos expansivos de la cosa juzgada, procesos abreviados, gratuidad, etc), y asimismo el establecimiento de obligaciones específicas en materia de políticas públicas de protección, vinculadas al control preventivo del mercado y la "educación" para el consumo.

Asimismo, se indica que en el aspecto práctico del Derecho del Consumidor, es de vital importancia el rol del abogado como herramienta para la implementación de sus normas y el acceso a la justicia, por lo que la profundización en el estudio de los contenidos de esta asignatura, representa una necesidad que debe ser canalizada en el ámbito universitario, para ajustar el rol del profesional del derecho al nuevo estado de cosas, colocándolo como el eje de un sistema de protección jurídica de gran importancia social.

Por último, luego de indicar las razones para la inclusión de la asignatura en el nuevo plan de estudios (autonomía del Derecho del Consumidor y mandato legal), elevan como anexo los contenidos aproximados de un programa de estudio que incluye aspectos generales de la protección del consumidor, relaciones de consumo particulares y aspectos administrativos y procesales de la tutela del consumidor.

10.- PROYECTO N° 8: Autor: Juan José ZANDRINO Profesor Titular de "Derecho Comercial I", propone la reformulación de los contenidos estructurales de las actuales materias "Derecho Comercial I y II". Propuesta elevada en el año 2008 por el Instituto de Derecho Comercial a cargo del Profesor Juan José Zandrino y que diera origen al expediente N° 400-5236/08.

Propone que la enseñanza del derecho mercantil se desarrolle en tres materias: COMERCIAL PRIMERA PARTE (con dos ejes principales, el derecho comercial y la empresa), COMERCIAL SEGUNDA PARTE (que abarque el régimen de las obligaciones generadas por los contratos comerciales) y COMERCIAL TERCERA PARTE (cuyo contenido trate los conflictos originados ante las insuficiencias patrimoniales, comprendiendo, básicamente concursos, quiebras, y regímenes especiales instrumentados por bancos y aseguradoras).

11.- La comisión recepcionó el proyecto del Profesor Titular de Derecho de Familia y Sucesiones, Abogado Eduardo Roveda y docentes de la Cátedra: Abogadas Florencia Burdeos, Alejandra Massano, Patricia Giavanetti y Natalia Pagotto.

Proponen que la materia se siga dictando de forma semestral y para ello sostienen que "la misma se compone también de Derecho Sucesorio y que, dentro del Derecho de Familia, además de todos los temas que abarca y que han sufrido reformas actuales de gran entidad, se encuentra incluido el estudio del Régimen de Bienes del Matrimonio, temática que, entre otras facultades, ha dado lugar a una asignatura independiente."

A su turno, exponen que, es necesario resaltar que en los últimos años se han agregado diversos contenidos –con notable trascendencia para nuestra materia- entre los que podemos mencionar: "Violencia Familiar" en el marco del nuevo proceso instaurado por la reciente normativa sancionada; "Responsabilidad de Menores" con el consecuente cambio de régimen y fuero que lo abarca; la reforma que la ley 26.618 que, si bien modifica el Código Civil obliga a enseñar el anterior régimen anterior aún vigente y las vicisitudes creadas con motivo de la sanción de esta ley, es decir, de su implementación según la interpretación doctrinaria y por último, "El Derecho Procesal de Familia"...".

En esa Dirección, los docentes rematan que "semestralmente se logra una enseñanza más integrada y profundizada de estas dos ramas, que, además, en la actualidad, han determinado la ampliación de las posibilidades laborales en torno a ambas".

Seguidamente abordan el tema de la correlatividad a la asignatura de la cual son docentes.

Consideran que "... la asignatura Derecho Procesal II esté incluida dentro de las correlatividades de Derecho Civil V.

Entienden que "hemos advertido que representa una gran dificultad para la enseñanza de la parte procesal que le compete a nuestra materia el hecho de que, al cursar nuestra asignatura, muchos alumnos aún no hayan estudiado Derecho Procesal Civil... . Al respecto, nos parece necesario resaltar que el contenido del Derecho Procesal Civil, es tan extenso y complejo que no se alcanza a profundizar el proceso para las cuestiones de familia, razón por la cual, sería importante que, mínimamente llegaran al curso con una noción, aunque sea, de los conceptos generales del Derecho Procesal, que nos permita abordar en nuestra asignatura los contenidos procesales correspondientes a los distintos procesos propios de la materia (proceso de alimentos, juicio de divorcio, juicio de adopción, acciones de filiación, proceso sucesorio ab-intestato y testamentario, entre muchos otros).

Por último, se refieren a la importancia del método en la enseñanza, expresando que "desde nuestra experiencia de trabajo con el método de casos que siempre hemos utilizado en nuestra cátedra, hemos visto considerables diferencias respecto de la enseñanza por medio del método convencional predominante en nuestra casa de estudio."

12.- Tratamiento en conjunto del PROYECTO N° 51: Autores: Edwin M. MONTERO LABAT, Profesor Adjunto de "Derecho Civil II" y ex Secretario de Extensión Universitaria, y Evangelina J. MONTERO LABAT, Profesora en Ciencias de la Educación (UNLP) remiten proyecto acerca de la metodología de la enseñanza del derecho a través de la extensión universitaria y PROYECTO N° 46: Autor: Maria Florencia FRANCHINI, Directora de

Seminarios remite propuesta de enseñanza de nociones elementales de metodología de la investigación en ciencias jurídicas y sociales.
"El art. 15 del estatuto de la UNLP establece que: "La Universidad *reconoce como una de sus funciones primordiales el desarrollo y fomento de la investigación* sobre todas las formas generadoras de conocimiento. Acordará en consecuencia las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de investigación que realicen los miembros de su personal docente, graduados y estudiantes. Acordará becas y/o subsidios y mantendrá intercambios con otras universidades, ámbitos generadores de conocimiento, centros científicos y culturales del país y del extranjero".
En igual sentido, el Estatuto, contiene innumerables normas mediante las cuales se reconoce a la extensión universitaria como pilar de la educación superior, e incluso su Preámbulo.
Entre otras normas, podemos citar:
Art. 17: "La Universidad reconoce como una de sus funciones primordiales la extensión universitaria, entendida como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social. Acordará en consecuencia las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de extensión que realicen los miembros de su personal docente, no docente, graduados y estudiantes que suelen ser originados por la detección de necesidades específicas…"
ART. 28º: Tienen las siguientes obligaciones docentes: dictar y dirigir la enseñanza teórico-práctica de su asignatura; dictar cursos parciales o completos de su especialidad; realizar al menos alguna de las siguientes actividades: investigación y extensión; participar en seminarios o reuniones científicas de su cátedra, departamento o instituto.

a) PROYECTO N° 51: Autores: Edwin M. MONTERO LABAT, Profesor Adjunto de "Derecho Civil II" y ex Secretario de Extensión Universitaria, y Evangelina J. MONTERO LABAT, Profesora en Ciencias de la Educación (UNLP), remiten proyecto acerca de la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho.
La propuesta se presentó bajo el título: *"La extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho"*.
El objetivo del trabajo es que se considere la incorporación de la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho.
Los docentes destacaron que el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata incorporó la extensión como pilar de la Educación Superior y la situó en pie de igualdad junto a la docencia e investigación.
Hicieron referencia a la metodología de la enseñanza que actualmente se implementa en la Facultad de Derecho.
Platearon a la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho y para ello tuvieron en cuenta las experiencias derivadas de la ejecución de distintos programas y proyectos de extensión universitaria coordinados desde la Secretaria de Extensión Universitaria de esta Unidad Académica (principalmente) durante los años 2007/2010.
En relación a uno de los primeros planteos expresaron que "El Estatuto de la Universidad contiene innumerables normas mediante las cuales se reconoce a la extensión universitaria como pilar de la educación superior."
En ese sentido, citaron varias normas del Estatuto e incluso su Preámbulo.
Por otro lado, hicieron referencia a las distintas acciones de extensión desde la fundación de la Facultad hasta el año 2010.
Resaltaron que "…Recién se registra un paso importante con el lanzamiento del Programa de Consultorios Jurídicos Gratuitos, en el año 1994…".
"La base teórica de estos pilares sostiene que la formación profesional universitaria sólo puede lograrse mediante un adecuado proceso de socialización, donde el joven estudiante o novel profesional incorpore un clima de valores y un conjunto coordinado de ideas y acciones que utilizará al tratar una situación problemática."
Luego, se expresaron en torno a otro de los programas de extensión en ejecución. Así distinguieron sobre el lanzamiento de las Clínicas Jurídicas.
En ese sentido, manifestaron "En tanto que, en julio de 2008, se lanza el Programa de Clínicas Jurídicas, cuyo objetivo es estrechar los lazos con la comunidad y brindar a los estudiantes y recién graduados la posibilidad de enfrentarse a casos reales y complejos, en cuya resolución podrán participar activamente."
"El mismo comprende tres áreas temáticas, Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental y Derechos Humanos, y cada equipo de trabajo se conforma con estudiantes, graduados de la facultad y docentes."
Y así, siguieron enumerando distintos proyectos de extensión actualmente en ejecución y gestados durante los años 2007/2010, tales como el de atención jurídica para pacientes con VIH/SIDA, mediante el cual se profundizó temas como los derechos a la salud, la discriminación, etcétera.
El Proyecto "Derechos de las personas con padecimientos mentales", a través del cual se intenta la integración de las personas con padecimientos mentales a la comunidad.
Mencionan la implementación del denominado "Unidad de Atención Juvenil" direccionado a los procesos restaurativos juveniles y destinada a jóvenes infractores a la ley penal, incorporado así a las actividades de extensión, los derechos del niño.
Luego se expresaron respecto al diseño de los contenidos curriculares del plan vigente, donde destacaron que:
"De acuerdo a la conformación de la currícula, y a la experiencia como docentes, podemos afirmar que aproximadamente el noventa por ciento de las materias integran contenidos disciplinares abordados de forma teórica."
"El énfasis se debe situar en el "aprender haciendo", los estudiantes aprenden mediante la experiencia y la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos."
"Concretamente, en la actualidad, la currícula no integra como contenidos en la enseñanza los procedimientos y habilidades que el abogado requiere para desempeñar su profesión."
"Esta realidad implica que, la formación carece de estrategias tendientes a que el estudiante se apropie paulatinamente de saberes vinculados con las actitudes, valores y haceres que posibiliten resolver la diversidad de situaciones que se presenten en el contexto profesional."
Al abordar de forma directa el objeto central de la propuesta, expresaron que:

La enseñanza, "Es asimismo, una práctica social que tiene como propósito promover el aprendizaje de los estudiantes favoreciendo el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico que permita comprender y operar en la realidad social."
"En este sentido, la enseñanza de los contenidos del derecho, necesariamente requiere de una propuesta didáctica que incluya los contextos sociales y culturales."
"Las actividades de extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho permiten justamente que el estudiante construya durante su trayectoria formativa experiencias en las que se ponen en juego conocimientos teóricos y prácticos."
"Se debe iniciar un proceso de transformación curricular que plantee una nueva propuesta pedagógica para la educación de los estudiantes de derecho."
"La propuesta debería plantear como propósito central el de brindar una formación que posibilite que el alumno pueda estar en condiciones, no solo de ingresar al mundo laboral, sino también el de brindarle una formación ético social para el ejercicio de la abogacia."
"En esta línea, las intervenciones docentes extensionistas, se orientarán a que los alumnos puedan construir miradas críticas sobre los acontecimientos sociales, a que se desarrollen valores como la solidaridad, la libertad, la paz, el respeto por la diversidad, la justicia, el bien común y el la vida de los semejantes."
"Se intenta que los futuros abogados hagan uso de sus derechos y cumplan con sus deberes como profesionales de la justicia."
"En esta perspectiva, la formación del abogado se debe realizar desde el interior de la facultad considerando los distintos espacios educativos, entre ellos, la extensión universitaria."

b) PROYECTO N° 46: Autor: Maria Florencia FRANCHINI, Directora de Seminarios remite propuesta de enseñanza de nociones elementales de metodología de la investigación en ciencias jurídicas y sociales. *LA INVESTIGACION COMO ACTIVIDAD CURRICULAR DE GRADO.*
Señala que la investigación es una de las misiones básicas de la Universidad Nacional de La Plata establecidas en su Estatuto que, en su articulado, plantea los fundamentos de la política de investigación científica y tecnológica de la Universidad.
En el actual Plan de Estudios uno de los requisitos para la obtención del título de Abogado es la elaboración de un trabajo de investigación que permite profundizar y hacer aportes originales en una problemática concreta, en un área y tema de interés personal y general, contando para ello con la orientación que le brinda un Profesor de esta Facultad dentro del marco institucional a través de la Dirección de Seminarios.
Como docente de la Casa ha dirigido gran cantidad de seminarios vinculados al derecho civil. A esa experiencia, se le suma, la actividad desarrollada en la Dirección de Seminarios a partir del año 2008.
En tal sentido, eleva el aporte, surgido de la observación de los distintos escenarios en los que se despliega la investigación en el ámbito de la Facultad, y en particular, en el derecho privado.
El proyecto propone la incorporación a la currícula de la materia METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION como previa y complementaria a la confección del trabajo de investigación conocido como "seminario de grado" y distingue su implementación, según se trate de seminarios bajo la modalidad libre o cursados.

Marco de referencia o comparación de las materias vinculadas al eje temático según resolución del Consejo Directivo, en relación a los planes de estudios actuales de Facultades de Derecho de Universidades Públicas y/o Privadas de la Argentina (según digesto recopilativo entregado por el Vicedecano) u otras que se hubieren consultado.
Se analizaron los planes de estudios de :
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Nordeste.
Departamento de Derecho. Universidad Nacional del Sur.
Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán.
Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad del Salvador.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.
Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional del Litoral.
Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Facultad de Derecho. Universidad Austral.
Escuela de Abogacía. Universidad Argentina John F. Kennedy.
Facultad de Derecho. Universidad de Palermo.

Indicación de documentos académicos libros, publicaciones y artículos utilizados en el trabajo de la comisión.
- Picco, Sofia. Extensión y formación docente en los orígenes de la Universidad Nacional de La Plata. 2007. Revista Question.
- Seteiman Jorge. Más didactica en la educación superior. Mayo 2008. Editorial Minio y Davila.
- Puiggrós Adriana. "El lugar del Saber", Galerna, Buenos Aires, 2003.
- Guillermina Tiramonti, Claudio Suasnábar, Viviana Fernández Seoane. "Políticas de modernización universitaria y cambio Institucional" Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1999.
- Pedro Krotsch, Marcelo Prati. "La universidad cautiva: legados, marcas y horizontes", Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Ediciones Al Margen, 2002.
- Resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
- Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata
- Sitios webs consultados:
http://www.jursoc.unlp.edu.ar
http://www.unlp.edu.ar;
http://www.abc.gov.ar;

Se agregan las notas de invitación y/o correos electrónicos impresos, que acreditan la invitación a a todas cátedras y docentes involucrados.

IV. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERFIL PROFESIONAL, PERFIL CURRICULAR Y ENSEÑANZA DEL DERECHO.-

INTRODUCCION
En el marco del programa para el análisis, debate y formulación de propuestas tendientes a la reforma del actual plan de estudios de la carrera de abogacía, el Consejo Directivo mediante Resolución 198/11 dispuso la conformación de diferentes comisiones temáticas entre la que encontramos la "Comisión de Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho". Particularmente en el art. 2 de la citada normativa dispuso lo siguiente "... 2.4. Comisión de diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho: en ésta comisión se trabajará sobre la definición de estas categorías técnico-pedagógicas que son elementos indispensables en la definición de un Plan de Estudios. Asimismo se considerará la necesidad de incluir nuevas disciplinas, entre las que se sugiere evaluar las siguientes: Derechos Humanos, Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos y Mediación, Ética de las Profesiones Jurídicas, Derecho Bancario y Comercio Electrónico, Derecho de la Integración, Derecho Informático, Derecho Ambiental, Elementos de contabilidad, Criminología; Lecto-comprensión en Idiomas extranjeros -Inglés, Francés, Italiano-; etc. Ha de contemplar la posibilidad de revisar el régimen de correlatividades, contenidos disciplinares y / o justificación de incorporación de nuevas disciplinas.".-
La Comisión quedó constituída e integrada por los Consejeros Abog. Vicente Santos ATELA (claustro de profesores), Abog. Marcelo KRIKORIAN (claustro de profesores), Sr. Matías BALSAMELLO (claustro de estudiantes), y la Sra. Cecilia SAUER (claustro de no docentes), reuniéndose con una periodicidad quincenal, los días martes a las 18 Hs. a efectos de deliberar, analizar las propuestas presentadas, así como la citación de diferentes profesores autores de propuestas vinculadas a la temática de la presente comisión.-

LAS ACTAS DE LAS REUNIONES: A continuación se agregan las actas que testimonian los encuentros que se ha mantenido en el seno de la comisión, con diferentes profesores, graduados y estudiantes, en las que han transmitidos diferentes inquietudes y aportes:

REUNION TEMA IDIOMAS
Comisión de diseño curricular, perfil profesional y enseñanza del derecho Reunión con la Coordinadora de Cursos en idiomas extranjeros de la Facultad, Abog. Silvina Sartelli.
El martes 25 de octubre de 2011 a partir de las 18 hs. tuvo lugar en la sala de Consejo Directivo una reunión entre la Coordinadora de Cursos en idiomas extranjeros y Directora Ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Académicos, Abog. Silvina Sartelli y el integrante de la comisión de diseño curricular, perfil profesional y enseñanza del derecho, consejero directivo Abog. Marcelo Krikorian, en el marco de los encuentros pautados con representantes de diferentes espacios de enseñanza, investigación y extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con vistas a analizar una posible reforma del plan de estudios vigente. Del intercambio de opiniones surgido en la reunión, pueden resaltarse las siguientes: La Facultad viene desarrollando desde 2009 una interesante experiencia de dictado de cursos en idiomas extranjeros para estudiantes, graduados y profesores en inglés, francés e italiano; todos con aplicación jurídica. Los resultados han sido muy positivos y la opinión acerca de contenidos, calidad de las docentes y expectativas cumplidas por parte de quienes se inscribieron y luego realizaron los cursos así lo demuestra, según las encuestas que la Abog. Sartelli exhibió al Consejero Krikorian.
La Abog. Sartelli informó además que se ha elaborado desde la Coordinación a su cargo en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Académicos, un proyecto tendiente a incorporar idiomas extranjeros a la curricula de la carrera de abogacía, entendiendo que los tiempos actuales -caracterizados por el avance de la transnacionalización y la conformación de bloques regionales de integración con sus naturales implicancias jurídicas- tornan indispensable brindar a los futuros graduados una formación sólida en materia de lectura y comprensión de textos en idiomas diferentes al castellano.
Asimismo, señala que el proyecto contempla la inclusión de un idioma extranjero como obligatorio (inglés) y otros como espacios curriculares optativos (portugués, francés, italiano, entre otros). En relación con la carga horaria posible para cada curso, se cree razonable una duración de 48 hs. totales (equivalentes a un bimestre académico). Asimismo, estas nuevas asignaturas debieran preferentemente estar ubicadas en el tercer o cuarto año (alumnos con más de quince materias).
Por último, se enviará antes del 31 de octubre por escrito y a la cuenta de correo institucional plandeestudios@jursoc.unlp.edu.ar la propuesta formal referida a idiomas extranjeros, sin perjuicio de los conceptos vertidos en la reunión y reflejados en este acta.
Siendo las 19.00 hs. se dio por culminado el encuentro.

REUNION TEMA MEDIACION
Comisión de diseño curricular, perfil profesional y enseñanza del derecho Reunión dedicada a Medios para la resolución pacífica de conflictos
El martes 6 de septiembre de 2011 a partir de las 18hs, tuvo lugar en la sala de Consejo Directivo una sesión de la comisión de diseño curricular, perfil profesional y enseñanza del derecho, habiendo sido convocado en esta oportunidad el Instituto de medios de resolución de conflictos de la Facultad, en el marco de los encuentros pautados con cátedras, institutos y demás espacios académicos, de extensión o investigación que estén comprendidos en las diferentes comisiones temáticas formadas para analizar una posible reforma del plan de estudios.
En esta oportunidad concurrió el abogado José María Lezcano, en su carácter de secretario del Instituto. Las abogadas Liliana González y Graciela de la Loza (Directora y Subdirectora del Instituto) comunicaron por correo electrónico su imposibilidad de estar presentes debido a que en el mismo horario de la reunión a la que eran convocadas, se dictaba uno de los cursos de Mediación que tienen a cargo. Por la comisión temática intervino el Consejero Directivo, Prof. Marcelo Krikorian. El Prof. Vicente Atela, quien también integra la comisión, no pudo concurrir por tener que participar en actividades institucionales inherentes a su función de Vicedecano de la Facultad. Se destaca asimismo, la presencia de la Secretaria de Asuntos Académicos Prof. Rita Gajate durante toda la reunión, quien intervino no solo en el rol de funcionaria de la Facultad sino de especialista en la temática de Mediación e impulsora de proyectos como el de la creación del Instituto antes mencionado y del seminario de grado sobre "Mediación, ética y ejercicio de la abogacía".
Del intercambio de opiniones generadas por los participantes de la reunión, surgió un consenso pleno sobre la necesidad de que en el marco del proceso de análisis para una posible reforma del plan, los futuros graduados

que forme la Facultad debieran tener un perfil más orientado a procurar resolver pacíficamente los conflictos y no tan formados para el litigio como se observa el plan vigente. La mediación hoy sigue considerándose una vía "alternativa" de resolución de conflictos, lo que pareciera indicar que la regla es el litigio y alternativamente pueden elegirse otros caminos.
Asimismo, se entiende que la Facultad ha dado un paso muy importante al crear espacios en el grado vinculados a mediación: el Instituto antes mencionado y el seminario cursado "Mediación, ética y ejercicio de la abogacía", sin perjuicio de la muy valiosa experiencia que en el ámbito del postgrado viene desarrollándose hace aproximadamente 15 años con los cursos de Mediación, que colocaron a nuestra Facultad en una posición de vanguardia en actividades de formación para abogados interesados en incursionar en esta temática.
Que asimismo, este renovado impulso dado en los últimos tiempos a las actividades de mediación se vio favorecido por el dictado de la ley provincial 13951, ya existiendo de hace más tiempo la ley nacional 24573.
Por todo ello, unánimemente se considera importante incorporar a la curricula un nuevo contenido disciplinar relacionado con métodos para la resolución pacífica de los conflictos.
Finalmente, se invitó a los participantes de la reunión y por su intermedio a las abogadas González y de la Loza a enviar por escrito ideas o propuestas al correo institucional plandeestudios@jursoc.unlp.edu.ar, sin perjuicio de los conceptos vertidos en la reunión y reflejados en este acta.
Siendo las 19. 30 se dio por culminado el encuentro.

REUNION MATERIA DERECHOS HUMANOS
En la ciudad de La Plata, a los 4 días del mes de octubre de 2.011, siendo las 18 Hs., se constituye la Comisión de Perfil Profesional, Perfil Curricular y Enseñanza del Derecho; con la presencia del Consejero Directivo Abog. Marcelo Krikorian, Consejero Directivo Abog. Vicente Atela, y el Prof. Dr. Fabián Salvioli. Dando comienzo a la reunión el Consejero Atela, informa a los presentes de los alcances del programa de debate y propuestas para la reforma del plan de estudios, así como en el presente discutir y analizar la pertinencia acerca de incorporar a la curricula de la carrera la materia "Derechos Humanos".- El Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurìdicas y Sociales (UNLP) y Profesor titular de "Derecho Internacional Pùblico" (Càtedra 3), Prof. Dr. Fabian Salvioli, entiende que debe tener un espacio curricular propio y ajenos a otras disciplinas que hoy lo realizan como ser el "Derecho Constitucional" y el "Derecho Internacional Pùblico".-
Entiende que la autonomía e independencia de conocimiento es necesaria y además se ajusta a los planes de estudios de la misma carrera en otras universidades pùblicas de la Argentina como es la Universidad de Buenos Aires.-
Preguntado por los Consejeros Krikorian y Atela que carga horaria se imagina para esta nueva materia, considera el Prof. Salvioli que una carga cuatrimestral es prudente, que no sería necesario una mayor extensión, pero tampoco una carga menor.-
Intercambian ideas los presentes respecto al alcance y sentido que debería tener la materia "Derechos Humanos", siendo coincidente la postura que no hay que caer en los planteos que han hecho otras universidades que es inclinarse por la faceta del derecho internacional de los derechos humanos (cuestión que corresponde al derecho internacional público) o a los derechos humanos en la constitución (cuestión que corresponde al derecho constitucional).-
Que la materia debe ser una teoría general de los derechos humanos, que abrace los aspectos introductorios de qué son los derechos humanos, su aparición y desarrollo histórico, la filosofía y desarrollo del pensamiento jurídico en materia de derechos humanos, y la trazabilidad-vinculación de los derechos humanos con el derecho en general: derechos humanos y constitución, derechos humanos y derecho civil, derechos humanos y filosofía, derechos humanos y derecho internacional público, etc.-
Que entendiendo que es una materia inicial al abordaje de los derechos humanos, que inicie al alumno de la carrera en el tema y problemática de los derechos humanos, y que desarrollado ese aprendizaje, luego en el recorrido de la carrera y las otras disciplinas tenga una perspectiva de observación crítica del fenómeno jurídico y de las leyes.-
Entiende el Consejero Atela que en esa perspectiva, la materia tendría que ser ubicada en la etapa inicial de la carrera, pero no como primera o segunda materia, sino luego del bloque de las 4 o 5 primeras materias, quizás luego de la materia "Derecho Político" y antes del "Derecho Constitucional", el "Derecho Civil I", el "Derecho Penal I" y obviamente el "Derecho Internacional Público".- Esta nueva materia estaría como una materia o disciplina de formación general básica e introductoria a las denominadas codificadas o al derecho positivo del sistema jurídico argentino.-
En ese orden de idea, Krikorian y Salvioli comparten la idea de que sea una materia introductoria, pero que no debe ser de las primeras absolutas, que el alumno debe ingresar a la disciplina de los derechos humanos previamente formado en las líneas generales de las materia "Introducción al Derecho", "Historia Constitucional", "Introducción a la Sociología", "Derecho Político" y "Derecho Romano" (aunque esta última podría obviarse).- Esto permitiría que el alumno posee una base inicial, y que luego comprenda a los derechos humanos con perspectivas de régimen de derechos de carácter universal.-
Luego las otras materias deberán profundizar aristas que hagan a la propiedad de la disciplina como por ejemplo será el derecho internacional público y el sistema internacional para el reclamo a las violaciones de derechos humanos.- Esto debe ser vincular ambas materias, articulando y no superponiendo o repitiendo contenidos.-
Salvioli expresa que ubicar a la disciplina en esta etapa inicial formativa, y dando un sentido propio de teoría general de los derechos humanos, resultará una visión novedosa en el campo de las otras Facultades de Derecho de la Argentina, generando un sentido analítico y crítico en perspectiva de derechos humanos, con carácter previo a la materias positivas o codificadas en general.- Reitera que el peor error seria incorporar derechos humanos en perspectiva o identidad de contenidos al del "Derecho Internacional Público" o al "Derecho Constitucional".- Error que han caído muchas facultades de derecho a tal punto que los profesores de la materia derechos humanos son profesores de derecho internacional público o derecho constitucional.-
Salvioli se comprometió a hacer una propuesta por escrito y remitirnos un documento que en líneas esenciales describa el objetivo de los contenidos esenciales curriculares que debe contener esta disciplina de elementos de derechos humanos.-
Siendo las 19:15 Hs. se da por concluido el encuentro, agradeciéndose la participación de todos los presentes.-

REUNION MATERIA DERECHO INFORMATICO

Comisión de diseño curricular, perfil profesional y enseñanza del derecho
Reunión con la profesora Noemí Olivera
El martes 11 de octubre de 2011 a partir de las 18 hs. tuvo lugar en la sala de Consejo Directivo una reunión entre la profesora Noemí Olivera -quien presentó un proyecto de creación de la materia Derecho Informático en la curricula- y los integrantes de la comisión de la comisión diseño curricular, perfil profesional y enseñanza del derecho Consejeros Directivos Prof. Vicente Atela y Marcelo Krikorian, en el marco de los encuentros pautados con representantes de diferentes espacios de enseñanza, investigación y extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con vistas a analizar una posible reforma del plan de estudios vigente.
Del intercambio de opiniones surgido en la reunión, pueden resaltarse las siguientes:
Que la denominación Derecho Informático para la asignatura es la que predomina en los regímenes jurídicos de iberoamérica; que el desarrollo que han experimentado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación conlleva inevitablemente al surgimiento de cuestiones jurídicas que abarcan al derecho privado, al derecho público (básicamente en lo atinente a la regulación de las comunicaciones, por ejemplo), a los derechos humanos (libertad de expresión, derecho a la privacidad), al derecho penal mediante los delitos informáticos, entre otros.
Asimismo, la profesora Olivera señala la experiencia adquirida a través del programa GECSI en relación con los seminarios dictados a partir del año 2008. Es allí donde ha podido observarse el déficit que en materia de formación sobre esta temática exhiben los alumnos.
Al preguntar los profesores Atela y Krikorian sobre la ubicación de la posible materia en el plan de estudios, responde la profesora Olivera que entiende debiera estar no antes de derecho Civil III y/o Derecho Comercial I, requiriéndose además tener aprobada la asignatura Derecho Penal, agregando que sería ideal que también se exija la aprobación previa de Derecho Administrativo I.
En cuanto a la carga horaria, entiende la profesora Olivera que debiera ser la equivalente a un seminario.
Siendo las 19.00 hs. se dio por culminado el encuentro.

LOS PROYECTOS PRESENTADOS
PROYECTO N° 1: Graduada Abog. María Guillermina Rafaelli, algunas reflexiones acerca del actual plan de estudios
"…Lamentablemente yo ya estoy recibida y, la verdad, me hubiera gustado mucho poder aprovechar un cambio en el sistema curricular. Si se me permite, creo que hay CUATRO modificaciones que deberían realizarse sin lugar a dudas:
1- DERECHO CONSTITUCIONAL tiene que estar antes de civil 1 y principalmente antes de derecho penal. Es una verguenza que uno vaya a estudiar derecho de fondo especial sin antes tener el marco constitucional.
2- DERECHO SOCIAL: otra verguenza. Como puede ser que nunca hayan dividido semejante materia en, por lo menos, 3 partes??? Dcho. Individual del Trabajo; Dcho. Colectivo; Seguridad Social y Riesgos del trabajo. Los estudiantes salen de la facultad sin saber nada, sobre todo de la tercera parte, cuando el realidad, una salida laboral importante lo configura la materia previsional.
3- DERECHO PROCESAL CIVIL: me parece absurdo que haya alumnos que lleguen a cursar esta materia sin tener todos los civiles. Se notaba una gran diferencia entre los que ya habían dado todo de los que no tenían ni siquiera civil 2. No saben lo que son las obligaciones, el pago, etc, y cursan el procedimiento???? me parece muy mal.
4- Deberían incorporarse más materias de índole económica. No puede ser que no nos enseñen a practicar una liquidación o que un abogado no sepa lo que es un balance, un libro diario, etc. En la facultad de ciencias económicas ven muchas más materias de derecho que nosotros de economía. Y la realidad laboral nos demuestra que los contadores pueden prescindir de los abogados pero nosotros no de ellos.
Aparte de estas cuatro cosas que considero de extrema relevancia, paso a indicar otros puntos que, como buena alumna que fui, me considero en condiciones de opinar:
- Basta de cuatrimestralizar todas las materias. Procesal I no se puede cuatrimestralizar, pero si Civil V…funcionaba muy bien la cursada acortada.
- Materias como Derecho Ambiental tendrían que darse. Es una rama nueva que puede dar lugar a otro tipo de profesionales.
- Considero que debería haber materias que no sean tan especificas pero que hacen a una formación más completa: antropología es una de ellas.
Bueno espero que puedan tener en cuenta mi opinión y aplaudo la iniciativa de la reforma. Saludos!..."

PROYECTO N° 2: Alumno Juan Pablo Rincón, algunas reflexiones críticas acerca del actual plan de estudios de la carrera
Reforma del Plan de Estudios- Año 2011
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata
Propongo las siguientes cuestiones sobre el tema ante el Honorable Consejo Directivo:
Que las adaptaciones de procedimientos profesionales se desarrollen en el final de la carrera bajo la modalidad obligatoria, es decir, que una vez finalizadas la totalidad de las materias teóricas más, se proceda a la cursada obligatoria de las practicas, sobre todo las civiles y comerciales (que debieran de incluir no solo la presentación de escritos, sino la visita constante a los tribunales, juegos de roles rotativos, pasantías en la legislatura y tribunales de instancia inferior, nociones sobre litigiosidad y medios alternativos de resolución de conflictos). Además de ello, no debieran circunscribirse solo a la parte penal, civil y comercial, sino ampliarse a otras ramas del derecho que tienen autonomía procesal y necesitan que el potencial abogado conozca en profundidad, como el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral.
En cuanto al régimen de correlatividades puedo decir que hoy en día, y según lo visto hasta la actualidad en mi transcurso en la carrera, ciertas correlatividades no se corresponden con contenidos estructurales que deben de conocerse para continuar el camino de la curricula. Por ello me parece atinente realizar cambios como: A) que para cursar Derecho de las Obligaciones y Comercial Parte General, se tengan conceptos de Economía Política y que esta, a su vez, también sea nutrida por Introducción al Derecho e Historia Constitucional además de la Introducción a la Sociología. B) Que para cursar Procesal Civil y Comercial se exijan por lo menos conocimiento de Derecho de las Obligaciones o de los Contratos- hoy en día un alumno que solamente ha aprobado Civil Parte General estaría habilitado para cursarla y /o aprobarla- además de Derecho Comercial Parte General. C) Que para cursar Derecho Internacional Público (que debiera dividirse en

Parte General y Derechos Humanos y Conflictos Internacionales) sea necesario no solo tener conocimiento de Derecho Constitucional sino del Procedimiento Penal y Civil y Comercial. D) Que para cursar Derecho Social (que debiera necesariamente estar dividida en dos materias) se necesiten conocimientos del Derecho Procesal Penal y de Economía Política. E) Que para cursar Derecho Procesal Penal se exijan conocimientos del Derecho de las Obligaciones.
Creo que sería interesante incorporar el sistema de materias optativas, que deberían darle al alumno la posibilidad de decidir entre un amplio número de problemáticas, aquellas entre las cuales quiera incursionar. Por ejemplo: de un listado de 10 materias adicionales deba seleccionar 2 y acreditar su aprobación para la obtención del título. El sistema expuesto evidentemente haría dejar de lado el sistema de los seminarios. Materias que sugiero pueden incorporarse como optativas serian: Derecho de la Integración, Derecho Constitucional Colectivo, Mediación y Conciliación, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Técnica Judicial y Legislativa, Nociones de Contabilidad, Elementos de psicología criminal, entre otras.
Que se permita que aquellos alumnos a cuales le reste una materia teórica o práctica se le dé la posibilidad de cursar las prácticas notariales, evitando que el futuro escribano deba esperar un año más para conseguir el título esperado.
Que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones sobre el cambio de carga horaria de las siguientes materias: Derecho Procesal Penal Teórico (4 meses), Derecho Procesal Civil y Comercial Teórico (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho de Familia y Sucesiones (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho Administrativo I (4 meses en calidad de cursada intensiva), Derecho Comercial I y Derecho Constitucional debieran de tener una carga horaria semestral, esta última con la posibilidad de crear cursos intensivos que incluyan al Derecho Público, Provincial y Municipal.
En la medida de lo posible, y la posibilidad real de que dispongan los docentes de implementar cursos intensivos de un mes de duración durante el Mes de Febrero para aquellos alumnos que vayan a rendir en el turno de Marzo.
Por último, me parece pertinente poder plantearles dos ideas que para mi criterio también serian de gran utilidad para el estudiantado: la obligación de revisar los programas de las cátedras- contenidos y bibliografía- cada dos años y que se permita a aquellos alumnos que acrediten como nota promedio en sus evaluaciones la cantidad de 7- siete- puntos en los preevaluativos eximirse de la mesa final.
Cumpliendo con la posibilidad que se nos brindó de participación semidirecta en este proyecto dada por los señores consejeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es que les elevo mi humilde opinión al respecto, saludándolos con mi más grande respeto.-
Juan Pablo Rincón
Alumno Regular de la Carrera
(Legajo 113155/1)

PROYECTO N° 5: Leonardo Pastorino Profesor Titular de “Derecho Agrario” propone la creación de la materia “Derecho Ambiental”
Estimado Sr. Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Dr. Hernán Gómez y
Miembros de las Comisiones encargadas de la
Revisión del Plan de Estudios
S_____D

De mi mayor consideración.
Dada la convocatoria a participar de esta nueva tentativa de reforma al Plan de Estudios, me siento llamado a acercar por escrito algunas ideas y propuestas, especialmente en lo que respecta a las materias con las que directamente estoy involucrado en la enseñanza y aquellas que en mayor profundidad conozco. En lo posible trataré de aportar algunos datos o comentarios que la experiencia en la docencia me han ido dando, como para fundamentar lo que propongo y también me ofrezco para participar personalmente de cualquier instancia que se crea conveniente realizar a fines de los intercambios necesarios antes de definir cualquier proyecto acabado de Plan.
En primer lugar, voy a puntualizar las dos propuestas más directamente vinculadas con el Programa de Derecho Agrario, Cátedra I, vigente.
1) Creación de la asignatura DERECHO DEL AMBIENTE como materia obligatoria y cuatrimestral.
2) Mantenimiento de DERECHO AGRARIO como materia obligatoria y cuatrimestral.
Expresadas en forma clara ambas propuestas, me quiero referir, brevemente, a algunos fundamentos, para luego esbozar los contenidos mínimos que ambas materias deberían contener. Esto último, considerando que hasta el presente, Derecho Agrario viene haciéndose cargo de algunos contenidos de Derecho del Ambiente que superan los temas agro-ambientales que le podrían competer, por el hecho de tantas décadas de mora en el reconocimiento académico de la autonomía de la segunda. También, teniendo en cuenta la experiencia en las clases, las opiniones de los alumnos que ya cursaron en nuestra Cátedra y las necesidades de una enseñanza que, sin dejar de formar un abogado generalista, preparado para cumplir un rol especial tanto en lo cívico como en lo social, tenga herramientas suficientes para afrontar el ejercicio profesional en ambas materias, las que, hasta ahora, no cuentan con una práctica específica.
La autonomía didáctica
Comenzando con los fundamentos de tipo dogmático, académicos o científicos, remito a los antecedentes históricos vinculados al reconocimiento de la autonomía didáctica del Derecho Agrario que, para agilizar la lectura de estas ideas, incorporo como Anexo I. Sintetizo en este punto, que el camino por la autonomía comenzó en 1900 incorporando contenidos de derecho rural (ante la existencia de los códigos rurales provinciales) a la Legislación de Minas, vinculando ambas temáticas en relación al ámbito espacial y rural. A partir de esta primer autonomía parcial, respecto a los derechos civil, comercial y administrativo, basadas en fundamentaciones teóricas de las que los platenses Rodolfo Carrera, Raúl Ringuelet y Antonino Vivanco fueron de los más renombrados aportantes, se fue consolidando un apartamiento necesario del derecho minero por consolidarse la autonomía en razón de la actividad agraria que nuestro Derecho regula, actividad que se basa en un hecho técnico específico y en la intervención del hombre en un ciclo de vida animal o vegetal, condicionado por el ambiente y clima en el que se desarrolla, donde los recursos naturales renovables son esenciales para esa producción. Sumado a ello las características propias de sus productos (periodicidad, estacionalidad, su carácter perecedero, condicionamiento a factores ambientales, inelasticidad de la demanda,

etc.) resulta una especialidad única regida por reglas y conceptos bien diferentes a las actividades extractivas sobre recursos naturales llamados no renovables, como la minera o energética.
Por su parte, en el Anexo retomo algunas expresiones de encuentros específicos destinados a la enseñanza del Derecho Agrario, donde, con acierto, se manifestó la importancia de no enseñar la materia junto al derecho minero o bajo los conocidos nombres de Legislación o Derecho de los Recursos Naturales y también se abordó la relación con el Derecho Ambiental, proponiéndose que sólo hasta que se reconozca la autonomía didáctica de éste, debería enseñarse en conjunto con el Derecho Agrario o el Derecho Minero.
Respecto a la autonomía del derecho ambiental, me remito a lo sostenido en la introducción a mi tesis doctoral defendida en esta misma Facultad, publicada luego por Lexis Nexis en 2005 bajo el título de Daño al Ambiente. En esa tesis postulé el instituto del daño al ambiente como un instituto fundante de la autonomía de la materia, la que reconocía. Adjunto, asimismo, las palabras del reconocido tratadista de la especialidad, Eduardo Pigretti que al prologar mi libro me contesta y no cree en dicha autonomía. También rescato acá como síntesis la afirmación que en mi introducción formulara: "Luego del verdaderamente breve período de tiempo pasado desde que se comenzara a hablar de derecho ambiental, hoy parece no estar discutida la existencia de este sector del derecho, como tampoco se pone en duda (al menos no mucho) que las complejidades de los fenómenos ambientales obligan a formular nuevos institutos y principios para tratar esta realidad diversa. Sin embargo, no se ha profundizado, como ha ocurrido con la aparición de otras ramas o especialidades jurídicas, un debate sobre la autonomía. En el último tiempo presenciamos una proliferación de normas, que podemos llamar ambientales, emanadas en todos los niveles de organización política: internacional, comunitario, nacional, provincial y municipal. Para muchos, sin embargo, falta sistemática y también eficacia en este extenso universo muchas veces contradictorio. También se enuncian principios jurídicos fundadores de tal especialidad que a poco de ser analizados, o se descubre que no son más que principios generales del derecho aplicados a la materia o se exponen a la crítica por su presunta inaplicabilidad o falta de universalidad. Parece que la toma de conciencia, tal vez demasiado tardía, de las consecuencias negativas que para el ambiente tiene el accionar humano, obliga más a poner manos a la obra en la construcción y explicación de las nuevas normas, desatendiendo la reflexión teórica. La presente tesis pretende hacer una contribución en este segundo campo". Acompaño en Anexo tanto mi introducción como el prólogo de Pigretti.
Contenidos mínimos para el Derecho Ambiental:
Un núcleo primario y, a mi juicio esencial, es el que desde el año 2000 y hasta ahora incluimos en Derecho Agrario para poder cumplir con el objetivo de que nuestros estudiantes se reciban teniendo una mínima información de la materia. Estos contenidos considero conforman el núcleo introductorio y general:
1) Concepto de ambiente y configuración de la problemática ambiental. Interdisciplinariedad de la materia. La Ecología como ciencia holística entre las ciencias naturales y sociales. Conceptos básicos (evolución, regresión, conservación, preservación, protección, daño, impacto, recomposición, restauración, recuperación, remediación, mejoramiento, etc.).
2) Abordaje desde el Derecho de la problemática ambiental. El ambiente como concepto jurídico unitario. El ambiente como patrimonio común, res communes o valor colectivo. Orden público ambiental y derecho objetivo del ambiente. El derecho ambiental entre derechos individuales, públicos y colectivos. Antropocentrismo y ecocentrismo.
3) El ambiente en el Derecho Internacional. Principales documentos y principios jurídicos.
4) El ambiente en la Constitución Nacional. El derecho al ambiente (individual y colectivo), el derecho del ambiente, el concepto de ambiente amplio (natural, cultural, social). Ambiente y desarrollo y desarrollo sostenible.
5) Presupuestos mínimos de protección ambiental y el nuevo deslinde competencial (para lo cual se torna necesario repasar el deslinde competencial entre la Nación y las provincias previo a la introducción de la nueva disposición del art. 41).
6) Ley general del ambiente. Principios ambientales en el orden nacional. Instrumentos de política ambiental: evaluación de impacto ambiental, ordenamiento ambiental territorial, derecho a la información, derecho a la participación, educación ambiental, poder de policía ambiental, seguros ambientales, daño al ambiente o daño ambiental de incidencia colectiva.
7) Acciones ambientales. Cuadro de las distintas acciones judiciales existentes para la tutela ambiental y específicamente el amparo ambiental individual y colectivo y la acción de daño al ambiente o de daño ambiental de incidencia colectiva.
Hasta aquí, es lo que damos en las clases en la Cátedra I y es lo que exigimos en las mesas de exámenes. Generalmente, el estudio lo complementamos con análisis de casos (últimamente, casi obligado, el caso Mendoza y el caso Peralta que, por ser de agroquímicos, nos permite analizar el amparo ambiental en un tema agro-ambiental). También realizamos un ejercicio con los estudiantes que los adiestre en la identificación de las acciones ambientales útiles, tratando de razonar la necesaria relación existente entre derecho sustancial, pretensiones, acción, supuestos de admisibilidad y legitimados.
Esto implica exactamente dos de las bolillas del actual programa de diecinueve bolillas de Derecho Agrario Cátedra I (la 3 y la 9). Si se consagrara la idea de una materia autónoma, obviamente, estos contenidos podrían ser desarrollados en mayor detalle ya que ahora lo hacemos en entre 6 y 10 clases (dependiendo esto de la planificación de todo el cuatrimestre). Seguramente, los temas a profundizar más son la revisión de las distintas acciones ambientales posibles que ofrece el derecho civil, el derecho administrativo y con un poco de mayor detalle desarrollar las acciones ambientales propias que son las que más tratamos de exponer en la actualidad. El otro punto a desarrollar serían los aspectos procesales que de a poco se van formulando.
El programa debería complementarse mínimamente con:
1) Algunos conceptos más de naturaleza interdisciplinaria que ayuden a entender la cuestión ambiental
2) Una discusión de las políticas ambientales públicas
3) Un breve panorama de cada uno de los convenios internacionales ambientales (al menos aquellos surgidos en Río, pudiéndose excluir el de Biodiversidad que se enseña en Derecho Agrario)
4) Una presentación de cada una de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental (debiendo pensarse que en breve se irá acelerando el proceso de sanción de nuevas). Cito:
a) Ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio (debiéndose vincular la misma con la ley de residuos peligrosos, 24.051)
b) Ley 25.670, de gestión y eliminación de PCBs
c) Ley 25.831, de libre acceso a la información pública ambiental
d) Ley 25.916, de gestión de residuos domiciliarios
e) Ley 26.639, de protección de glaciares

Pudiéndose hacer referencias, con la salvedad de que ya se enseñan en derecho agrario por estar directamente vinculadas con la actividad agropecuaria, las leyes 26.331 de bosques nativos, la 25.688, de gestión y preservación de las aguas y la 26.562, de quemas.
5) Importantísimo, por ser todas de mucha aplicación y necesario conocimiento en la práctica –tanto para quienes se vinculan a la protección del ambiente como para el que lo hace con el asesoramiento de empresas- el conocimiento del bloque de leyes ambientales vinculadas con la producción industrial de la Provincia que, hasta el presente, creo que no se enseñan en ninguna materia. Lo mismo que otras leyes ambientales no relacionadas con los recursos naturales y la actividad agraria. Cito:
a) Ley 5965 de protección de las fuentes de provisión de agua y a los cursos y cuerpos receptores y sus decretos reglamentarios para efluentes líquidos y gaseosos
b) ley 11.723, general del ambiente, una ley que afronta un sinnúmero de instrumentos y temáticas
c) ley 11,459, de radicación industrial y su decreto reglamentario, de compleja interpretación y estudio del reparto de competencias con los municipios y necesaria para que cualquier ciudadano conozca la peligrosidad de un establecimiento
d) Ley 11.720, de residuos especiales y su decreto reglamentario
e) Ley 13.592, de residuos sólidos urbanos
f) Ley 12.276, de arbolado público
g) Ley 11.347, de residuos patogénicos
Pudiéndose hacer mención al Código de Aguas que se estudia en Derecho Agrario pero que, por su extensión y amplitud, excede la materia agraria y puede ser visto en ambas materias, especialmente en lo referido a los usos no agrícolas y pecuarios.
6) Ambiente urbano
7) Ambiente y patrimonio cultural
8) Roles especiales del abogado ambientalista: prácticas administrativas, planificación, trabajo interdisciplinario, intervención en conflictos sociales y colectivos, mediación ambiental, etc.
Este enunciado sirve para justificar la necesidad del reconocimiento de la autonomía académica del Derecho del Ambiente. He tratado de hacerlo enunciando un reparto oportuno con Derecho Agrario y he excluido los temas que sé que ya se enseñan en otras materias como la cuestión del daño ambiental y otros aspectos ambientales en la actividad minera, la contaminación por buques, etc.

Contenidos de Derecho Agrario
Como he dicho, la exclusión de los contenidos enunciados de Derecho del Ambiente sólo reducen en dos bolillas al actual Programa de Derecho Agrario Cátedra I. Por ende, siendo que, como citaré más adelante, según alumnos y profesores, el contenido actual es muy extenso para el dictado en un cuatrimestre, este recorte sólo permitirá el desarrollo con tiempos más adecuados del Programa.
Respecto específicamente a contenidos, quiero resaltar que, en virtud de la política agraria vigente en nuestro país, se han sumado nuevas reglamentaciones y es necesario un abordaje más extenso de la relación política agraria y derecho agrario. Por su parte, ya lo tenemos incorporado tibiamente en el programa, y más aún en las clases, pero es necesario desarrollar en tiempo y contenidos el rico aspecto del derecho agro-alimentario. Nuestro país es productor de alimentos y la actividad agraria, que los produce, debe estudiarse modernamente en la perspectiva de cadenas de producción, siendo necesario analizar que sucede desde la producción misma hasta la góndola, en la exportación, en la industria, etc. El Código Alimentario cobra día a día cada vez mayor importancia. Lo mismo las cuestiones vinculadas a la salud por alimentos y los derechos de consumidores. Las nuevas estrategias del mercado agrícola: los productos biológicos, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, los sellos de calidad, las marcas especiales (Alimentos Argentinos o Buenos Aires, la Provincia, por ejemplo). También es importante visualizar la relación de la actividad agraria y su extensión, en el desarrollo local y regional, es decir, ver el concepto de desarrollo rural sostenible como paradigma para equilibrar las relaciones entre campo y la ciudad. En tal sentido, es importante rescatar que el Derecho Agrario es la materia natural para el tratamiento de la tierra pública y el ordenamiento espacial rural, por lo que históricamente se enseña esta temática, así como la cuestión de la tierra colectiva indígena y las áreas naturales protegidas (reservas, parques, paisajes protegidos, etc.).
Es por ello que creo que el contenido del Derecho Agrario, con alguna necesaria modificación del Programa, también amerita el dictado en un cuatrimestre.

El perfil del abogado
Para ambas materias creo que no puede pensarse exclusivamente en el abogado litigante. Aún dentro de ese perfil, no puede pensarse exclusivamente en el abogado tribunalicio. Esta semana, un colega auxiliar de Derecho Comercial I, comentaba en la Especialización que compartimos en Docencia Universitaria, que sucede lo mismo en su materia donde los contenidos, en la práctica, se desarrollan más en la gestión y administración de la empresa. En Agrario y en Derecho del Ambiente, también el rol de consultor de los agentes económicos, políticos (tanto en el Poder Legislativo, Ejecutivo como en las asociaciones representativas), de las asociaciones y de la comunidad, es muy importante.
Pero quiero insistir con que la Facultad no sólo forma abogados, también contribuimos a formar ciudadanos, sujetos pensantes, sujetos comprometidos con la realidad que les toca vivir y con la sociedad que componen y referentes en muchísimas temáticas del quehacer cotidiano desde lo barrial hasta lo nacional. Creo que desde esta perspectiva y por la realidad argentina, tanto el derecho agrario como el derecho del ambiente conforman dos materias esenciales en la formación integral de los profesionales que egresan de nuestra Facultad.
En Agrario, desde hace tres años, implementamos algunos trabajos vinculados a la práctica profesional en el campo de la redacción de contratos (contenido central de la materia que no necesariamente se vincula con los tribunales); de análisis de faltas agrarias y análisis de una acta contravencional y también de resoluciones de casos en materia laboral agraria y contractual. Vinculado con los contenidos y las prácticas, creo que deberíamos incluir el tema del arbitraje en las Bolsas de Cereales donde no sólo pueden llevarse cuestiones sobre la comercialización, sino también sobre la producción.
En Ambiente, es necesario formar abogados para la gestión pública, nacional, provincial y municipal, con preparación para el trabajo interdisciplinario. También, para el asesoramiento de empresas y de la sociedad civil. Para el asesoramiento legislativo y para la mediación.

Cuestiones metodológicas y didácticas
Respecto a lo último dicho, creemos que el sistema de clases debe orientarse fuertemente a un método de enseñanza articulado entre teoría y práctica. Entendiendo la práctica tanto como trabajos activos de los

estudiantes para la comprensión e internalización de contenidos teóricos, como para la preparación profesional en los distintos campos enunciados. Esto implica un fuerte compromiso de los docentes para cambiar del tipo de clase expositiva o magistral. Pero es una falencia a apuntar en la enseñanza general del Derecho.
En el cuatrimestre anterior, al abordar el tema del Amparo Ambiental, un alumno me interrumpió y me pidió si no le podía enseñar a hacer un Amparo. Fundamentó: vemos el Amparo en Derecho Constitucional, en Procesal, en Administrativo, pero nos estamos recibiendo sin saber hacer uno! Creo central escuchar este y otros tantos reclamos que hacen los estudiantes, entendiendo que el rol del docente no es necesariamente enseñar transmitiendo contenidos, sino guiar un proceso de aprendizaje donde el verdadero artífice es el alumno.
En este sentido, quiero permitirme acercar algunos datos obtenidos de un cuestionario que realicé a los estudiantes del último cuatrimestre del 2010. Sobre 55 alumnos cuyos mails tenía para consultarlos terminada la cursada, contestaron 10 (Las respuestas las estoy usando para la tesina final de mi Especialización en Docencia Universitaria sobre el tema de la Enseñanza del Derecho Agrario, pero quedan a disposición de quien las solicite):
1) ¿Qué significación le otorga a la materia Derecho Agrario en su trayecto formativo?
Todas las respuestas fueron contundentes sobre la importancia de la materia en su trayecto formativo, incluso hubo quienes cuestionaron un pre-concepto previo sobre su escasa importancia o la necesidad de que sea optativa. También rescato opiniones que vincularon directamente esta respuesta con la preparación para la práctica profesional (y de quien dijo que, a pesar de ya saber que no se iba a dedicar a este sector, le parecía importante en la formación del abogado (Augusto, lo mismo Agustina). Por otro lado, se individualiza como algo claramente vinculado a la realidad diaria; a su formación como ciudadanos y su compromiso con ciertos temas como la problemática ambiental.

Sobre los contenidos:
2) ¿Cómo considera los contenidos de la materia? (apropiados, interesantes, demasiado abarcativos, muy ambiciosos, irrelevantes para su formación, insuficientes, relevantes, etc.)
Se reitera el calificativo "interesante", en algún caso haciendo notar temas concretos de derecho agrario y en otros remarcando los de derecho ambiental. También "apropiados", "relevantes" e "importantes". Se ha hecho alusión a que el tiempo de la cursada no basta para abarcarlos en su totalidad o con la profundidad deseada (Agustina).
3) ¿Qué conocimientos previos entiende que poseía en forma insuficiente al afrontar la cursada?
Es una de las preguntas con respuestas más divididas. Desde que no carecían de conocimientos previos necesarios (Romina); a que eran todos totalmente nuevos (Gastón) o limitados y provenientes de su situación familiar (Juan Francisco); que no se contaba con los conocimientos apropiados (Agustina) o ninguno (Julieta y Martina). Yésica remarca que al comenzar la materia no sabía qué contenidos la comprendían. Augusto puntualiza la insuficiencia de conocimientos procesales para abordar el tema de acciones ambientales. Violeta señala la novedad de lo agroalimentario; las acciones ambientales y la problemática indígena.
Estrategias y materiales:
4) Indique una dificultad que tuvo para estudiar esta materia
El material de estudio no resulta un problema. El proceso que hacemos de utilizar los conocimientos teóricos a casos concretos sí (Agustina). También la legislación similar (entiendo se refiere a leyes nacionales y provinciales sobre la misma temática) o complementaria (Agustina). Identificar los contenidos propios de lo agrario y una faceta distinta en el abordaje del Derecho (Yésica). La insuficiencia de tiempo para abundante legislación y bibliografía (Martina y Violeta). Cinco alumnos no identifican problemas en el estudio, salvo situaciones de índole personal, el cursar varias materias, la falta de interés para leer antes de abordar algún trabajo.
5) ¿Qué tipos de estructura de clase prefiere? (explicaciones del docente con posibilidades de intercambio y preguntas de los alumnos; investigaciones y exposiciones en clases de los alumnos; trabajos grupales en clase; otras)
En este caso la amplia mayoría convalidó la opción de usar el tiempo de clases para brindar explicaciones de temas que, por experiencia, puedo saber que son dificultosos de comprender con el texto de la ley o el material bibliográfico disponible. En ese estilo de clases, remarco el modo en que fui relacionando temas para llegar a ciertas conclusiones, les enseño mi forma de pensar y también voy vinculando la explicación con cuestiones prácticas, permitiendo las preguntas en cualquier momento de la clase. Aunque Juan Francisco señaló la dificultad de incentivar este tipo de intervención del estudiantado.
Algunos señalaron la posibilidad de articular las distintas modalidades (Romina, Augusto y Agustina). Se rescató el trabajo individual que se responde por mail y los trabajos prácticos de resolución de contratos.
6) Escriba tres cues*tiones que mantendría en la forma de enseñar y tres cuestiones que mejoraría de la misma:*
Reiteradamente se optó por el mantenimiento del modelo de clases expositivas del docente. Se rescataron el trabajo por e-mail con devoluciones del titular, que se consideró inédito para la Facultad (Romina); los trabajos prácticos; la posibilidad de participar de un Seminario que organicé con el grupo de investigación. El sistema expositivo y la interrogación al inicio de clases, sobre las dudas de la clase anterior (Gastón) y el anunciar en cada clase los temas a ver en la siguiente (Violeta). La forma de evaluación, aunque "menos compleja o más relacionada con lo visto en clase" (Agustina). Creo que esta observación se refiere a preguntas hechas en los parciales sobre los textos que se solicitan sean estudiados por los alumnos cuando los mismos son considerados suficientemente claros para evitar tiempo de exposición reiterativa en clases. Puntualidad y contacto permanente del docente con los alumnos (Yésica y Juan Francisco). La participación de un integrante de Cátedra que es Licenciada en Ecología (Juan Francisco y Augusto que habla de pluralidad en la Cátedra).
Entre los aportes para mejorar o cambiar: que el trabajo por e-mail sea grupal (lo que iría en contra de su objetivo principal que es un conocimiento particularizado con cada alumno); que no se roten los docentes (las clases de los adjuntos se integran con participaciones de la Jefe de trabajos prácticos y del ayudante) y los parciales orales (todas respuestas de Gastón). Posibilidad de contar con variada bibliografía (Yésica). Mayor dedicación a lo ambiental y también realización de dos trabajos individuales en la casa agregados al que ya se hace por e-mail (Juan Francisco). La utilización de métodos informáticos y creación de una biblioteca virtual (Augusto), que en realidad existe pero no resulta apropiada la plataforma de la Facultad.
Vinculo con la práctica profesional:
7) ¿Considera que esta materia puede ser relevante en su desempeño profesional futuro? ¿en qué aspecto? ¿cuáles temáticas le parecen más vinculadas con este campo?

Todas las respuestas fueron positivas. Aún los que no creen que lo sean para su caso personal, pero que entienden que sirve en general para otros estudiantes (Julieta y Augusto) Se rescataron los temas agropecuarios para los que piensan volver a su ciudad de origen, los contratos, el trabajo agrario, las acciones ambientales, la aplicación del código de aguas y el derecho forestal. Sergio indicó que "creo que la materia es rica en contenido pero no se encuentra promocionada, me parece que hay un campo laboral amplio al que no estamos acostumbrados a buscar, porque todo se circunscribe a la ciudad. Cada vez me doy más cuenta que el Derecho Agrario y el Ambiental, mueven en nuestro país un sector muy importante de la economía".
Experiencia formativa:
8) En síntesis, valore con dos adjetivos su *experiencia en esta cátedra:*
Acá lo llamativo es que, sin haber una orientación a calificativos como en el caso de la pregunta 2; 7 alumnos eligieron la palabra "interesante"; 2 "intensa" y luego se citaron una vez: exigente, importante, útil, novedosa, abarcativa, desafío, productiva, enriquecedora y buena.
Palabras finales
La Universidad y nuestra Facultad en particular forman profesionales pero también y en forma interrelacionada con esto participan en la generación y desarrollo de la cultura en sentido amplio. Es necesario recordar, refiriéndome sólo a los campos en que trabajo, que nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha contribuido al patrimonio cultural tanto del Derecho Agrario como del Derecho Ambiental (o cómo yo prefiero, Derecho del Ambiente).
En lo agrario, ya he citado varias veces las contribuciones de Vivanco, Carrera y Ringuelet, para recordar a los más recientes profesores citados en todos los países del mundo y estudiados en todas nuestras facultades de derecho. "La Plata" es citada, en Derecho Agrario, como "Pisa" o "Nantes" como centros emanadotes de desarrollos en la materia. Como dije en otras tantas oportunidades, nosotros debemos tutelar esta tradición, potenciarla y beneficiarnos de ella para contribuir con los objetivos que toda Universidad Pública debe tener. No podemos compararnos con otras universidades y planes de estudios para abandonar esta tradición, sino que corresponde hacer de ella un centro de especialización e identidad, máxime teniendo en cuanta el ámbito territorial en que nos desenvolvemos.
Este año, realizamos el Primer Congreso de Derecho Agrario Provincial en Santa Rosa, donde la UNLPam, heredera de nuestro Plan de Estudios vigente, entendió que podía aprovecharse de esta singularidad de enseñar Derecho Agrario para constituir con ello una línea diferenciadora que la expanda hacia el resto de la comunidad universitaria. Allí participaron muchos colegas de más de 15 provincias, en muchas de las cuales no se enseña Derecho Agrario. Con mucho entusiasmo, un profesor de Neuquén que incentivó la presentación de varias ponencias de graduados y alumnos de su región me decía: "Aprovecho la oportunidad para comunicarle que los alumnos de grado, a quienes les transmití sus estimuladoras palabras (que remitiera en el mail de hoy) están sumamente motivados, e incluso sorprendidos, por el escenario que se les esta presentando. Particularmente dos de ellos, me han escrito indicando que lo sienten como un punto de inflexión en sus vidas..... aunque a usted lo pueda parecer gracioso o extravagante, debe considerar que acá estamos en un lugar donde la facultad forma a los abogados para ir a trabajar al juzgado o al estudio (abogados prácticos, digamos) y la posibilidad de que se les abra el camino doctrinario y poder incidir en la formación del discurso jurídico (y no solo en su aplicación) es realmente algo inusual para un alumno de acá con lo cual puede ser realmente cierto que le estemos abriendo un horizonte en sus vidas que de otro modo no hubiesen logrado avizorar".
Respecto al Derecho del Ambiente, dediqué el libro *El daño al ambiente* a la cultura ambiental de nuestra ciudad. Allí decía: "Al escribir me maravillaba la cantidad de aportes de publicaciones y sentencias de tribunales –federales y locales- platenses. Un excelente capital intelectual que la ciudad aporta –con aciertos y desaciertos- a la construcción del derecho ambiental desde diversos ángulos y disciplinas jurídicas. Permítaseme, por ello, que la obra vaya en homenaje a lo que se puede llamar la "Escuela Jurídica de La Plata".

PROYECTO N° 6: Sebastián Piana Profesor Adjunto de "Derecho Político" propone reformular los contenidos de la disciplina "Derecho Político" hacia una formación en "Ciencia Política"
La Plata, 29 de junio de 2011
Sr. Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abog. Vicente ATELA
S/D
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar como propuesta la creación de una materia específica con contenido interdisciplinar vinculado a la Ciencia Política.
Sabido es que el actual perfil en la formación del abogado en nuestra Facultad se encuentra orientado, preferentemente, al ejercicio liberal de la profesión. Dicha orientación no se condice con las posibilidades laborales que encuentra en nuestra ciudad, sede del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial además de asiento del gobierno municipal y a muy poca distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde tienen sede numerosos organismos públicos internacionales, nacionales y locales.
Si bien algunos contenidos vinculados al Programa propuesto se encuentran tratados en la materia Derecho Político, la propuesta busca profundizar algunos de esos conceptos (y tratar nuevos) de forma sistemática, aportando al futuro abogado conocimientos teóricos y prácticos de diversas temáticas que debe manejar con solvencia si su orientación profesional se vincula al ejercicio profesional en ámbitos gubernamentales.
En efecto, el abogado que se desempeña en esos espacios públicos debe tener competencia y capacidad para elaborar informes técnicos, prestar asesoramiento, dictaminar y decidir cuestiones que no se encuentran estrictamente vinculadas sólo al derecho, sino también, a aspectos políticos – institucionales, de oportunidad y conveniencia que debe poder evaluar con solvencia.
El objetivo de la materia es proporcionar a los alumnos un marco general para la comprensión, descripción y explicación de los fenómenos políticos. La problemática del poder será el eje central para el estudio de conceptos esenciales del análisis político: Estado, nación y democracia; partidos políticos, representación y opinión pública, régimen político, gobierno y administración, clase política y élites, cultura política, movimientos sociales y cambio político en el orden interno e internacional.
El eje referido debería ser abordado buscando sus rasgos esenciales, el «modo de ser» de lo político.
A través de la lectura analítica de textos seleccionados y representativos de estas categorías en la Ciencia Política del siglo XX, se pretende que los alumnos comprendan las distintas perspectivas teóricas con que pueden estudiarse la realidad política.

A fin de una mayor justificación de la relevancia y necesidad de incluir esta materia, se adjunta un Programa con las temáticas a tratar.
Sin otro particular, saludo a usted muy cordialmente.
Dr. Ricardo Sebastián PIANA

PROGRAMA
Unidad 1. LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA.
La política como objeto de estudio (ciencia política) y como acción (conducción y liderazgo). Teoría y práctica. El malestar en la política.
El trabajo interdisciplinario de la Ciencia Política. Distintas corrientes.
La naturaleza humana como presupuesto y base del pensamiento político.
Esencia de lo político: relaciones público-privado; amigo-adversario; mando-obediencia en Julien Freund. El particularismo de la política. La Política, lo político.

Bibliografía principal
Freund, Julien, 1964. La esencia de lo político. Introducción. Cap. I. Política y Sociedad. Cap. II. Del origen de lo político. Editora Nacional, Madrid.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1988. Manual de Ciencia Política. Alianza. Cap. 1. Naturaleza y evolución de la disciplina. Alizanza, Madrid.
Sartori, Giovanni, 1991. Elementos de Teoría Política. Cap. 10. Política. Alianza, Madrid.

Bibliografía sugerida
Burnham, James, 1986. "La política y la verdad" en Los Maquiavelistas. Defensores de la Libertad. OLCESE, Buenos Aires.
Dahl, Robert, 1983. Análisis Político Actual. Eudeba, Buenos Aires.
Portinaro, Pier Paolo, 2007 El realismo político. Nueva Visión, Buenos Aires.
Schmitt, Carl, 1991. El concepto de lo político. Alianza, Madrid.
Trigg, Roger, 2001. Concepciones de la naturaleza humana: una introducción histórica. Alanza, Madrid.
Weber, Max, 1981. El político y el científico. Introducción de Raymond Aron. La política como vocación. Alianza Editorial, Madrid (séptima edición).

Bibliografía complementaria
Sartori, Giovanni, 1984. La política. Lógica y método de las ciencias sociales. FCE. México.
Albert Battle (comp.), 1992. Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Barcelona. Ariel.
Bauman, Zygmunt, 2001. En búsqueda de la política. FCE, Buenos Aires.
Bertín Hugo D. y Corbetta, Juan C. , 1997. "La noción de legitimidad en el concepto de lo político de Carl Schmitt" en La noción de legitimidad en el concepto de lo político de Carl Schmitt. Ed. Struhart. Buenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1977. Teorías políticas contemporáneas - Una introducción", Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
Bobbio, Norberto *et al.*, 1986. Diccionario de política. Siglo XXI, México.
Burdeau, Georges, 1976. Método de la Ciencia Política. Desalma, Buenos Aires.
Easton, David, 1973. Esquema para el análisis político. Amorrortu, Buenos Aires
Molina, Jerónimo, 2000. Julien Freund, lo político y la política. Sequitur, Madrid
Tansey, Stephen. D., 2000. Politics: the basics. Second Edition. Routledge. London and New York.
Pereira Menaut, Antonio–Carlos, 2000. Doce tesis sobre la política. UNAM, México.

Unidad 2. EL PODER
Tipo de Poderes. El poder político: diferencia con el poder económico, social e ideológico.
El tratamiento conceptual e histórico del poder. El fenómeno del crecimiento del poder en el análisis de Bertrand de Jouvenel.
Los fundamentos del poder. La legitimidad: tipos de dominación. Concepto y presupuestos de la legitimidad democrática. Legitimidad, legalidad y efectividad. Autoridad y coacción.

Bibliografía principal
Aron, Raymond, 1989. "Match, Power, Potencia, prosa democrática o poesía demoníaca (1964)" en Estudios Políticos. Espasa Calpe. Madrid.
De Jovenel, Bertrand, 1998. Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento. Selección de capítulos. Unión Editorial, Madrid.
Hobbes, Thomas, 1992. Behemoth. “Diálogo I”. Tecnos, Madrid.
Weber, Max, 1992. Economía y Sociedad. Selección de capítulos. FCE. México.
Preterossi, Geminello, 2002. Autoridad. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.

Bibliografía sugerida
Arendt, Hannah, 2005. Sobre la violencia. Alianza Editorial, Madrid.
Ferrero, Guglielmo, 1998. Poder. Los genios invisibles de la ciudad. Tecnos, Madrid.
Gramsci, Antonio, 2004. Antología. Siglo XXI, México.
Mosca, Gaetano, 1984. La clase política. FCE, México.
Peters, S. y Winch, Peter, 1974. "La autoridad" en Quinton, Anthony. Filosofía Política. FCE, México.

Bibliografía complementaria
Kliemt, Hartmut, 1979. Filosofía del Estado y criterios de legitimidad. Alfa, Buenos Aires.
del Águila, Rafael, 1997. Manual de Ciencia Política. Cap. I. La política: El poder y la legitimidad. Ed. Trotta, Madrid
Arendt, Hannah, 1987. Los Orígenes del Totalitarismo. Alianza, Madrid. 3 ts.
Bell, Daniel, 1964. El fin de las ideologías. Tecnos, Madrid.

Unidad 3. ESTADO.
El Estado: de la *Respublica Christiana* al nacimiento del Estado soberano. Elementos constitutivos del Estado.
Tipos históricos de Estado. Estado Total, Estado Absoluto, Estado máximo y Estado mínimo.
El Estado de Derecho y justicia. ¿El gobierno de las leyes o el gobierno de los jueces?

El debate sobre los fines del Estado: el Estado de bienestar y el rol social del Estado: crisis. ¿Reedición del Estado mínimo? Estado postsoberano y organizaciones supranacionales.

Bibliografía principal
Bobbio, Norberto, 1985. Estado, Gobierno y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México.
Portinaro, Pier Paolo, 2003. Estado. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Sicker, Martin, 1991. The Genesis of the State. Praeger. New York, Westport, London.
Vallespín, Fernando (2000). El futuro de la política. Taurus, Madrid.

Bibliografía sugerida
De Jouvenel, Bertrand, 1976. Los orígenes del estado moderno. Historia de las ideas políticas en el siglo XIX. E.M.E., Madrid.
Heller, Hermann, 1968. Teoría del Estado. Cap III. 1. Supuestos Históricos del Estado. FCE. México.
Poggi, Gianfranco, 1997. El desarrollo del Estado moderno. Una introducción sociológica. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Bibliografía complementaria
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, 2000. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Trotta, Madrid.
Cassirer, Ernst, 1968. El mito del Estado. Fondo de Cultura Económica, México.
García-Pelayo, Manuel, 1980. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Alianza Editorial, Madrid.
Passerin D'Entreves, Alessandro, 1970. La Noción de Estado. Euroamérica, Madrid.
Zippelius, Hans, 1985. Teoría del Estado. Ciencia de la política. UNAM, México.

Unidad 4. LA NACIÓN
El concepto de nación. Nación cultural, estatal y política.
Del Estado absolutista al Estado Nación.
Los procesos de formación del Estado. Naciones sin Estado y Estado con naciones.
Descolonización. Los nuevos nacionalismos y las minorías. Los movimientos de liberación nacional. Nacionalismo y Populismo.

Bibliografía principal
Breuilly, John, 1990. Nacionalismo y estado. Pomares-Corredor, Barcelona.
Campi, Alessandro, 2005. La Nación. Claves. Buenos Aires.
Chabod, Federico, 1987. La idea de Nación. FCE, México
Renan, Ernest, 2006. ¿Qué es una Nación? Sequitur, Madrid.
Sieyes, Emmanuel, 2003. ¿Qué es el Tercer Estado? Alianza. Madrid.

Bibliografía sugerida
Gellner, Ernest, 1988. Nación y Nacionalismo. Alianza, Madrid.
Habermas, Jürgen, 2000. La constelación posnacional. Paidós, Barcelona.

Bibliografía complementaria

Anderson, Benedict, 1993. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.
Garavaglia, Juan Carlos, 2007. Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata. S. XVIII-XIX. Prometeo, Buenos Aires.
Kaplan, Marcos, 1976. Formación del estado nacional en América Latina. Amorrortu, Caracas.
Segato, Rita Laura, 2007. La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad. Prometeo, Buenos Aires.

Unidad 5. DEMOCRACIA
Democracia: Características y presupuestos de los regímenes democráticos. El modelo democrático. Presupuestos sociales, económicos e institucionales. Las reglas del juego democrático.
Las nuevas vías de la legitimidad. Percepción sociológica y política de la noción de mayoría. La desacralización de la elección y su reducción a modo de designación de los gobernantes.
La democracia en el pensamiento contemporáneo. "La contrademocracia". Disociación de la legitimidad y de la confianza. La democracia de control. La "política negativa". Las nuevas vías de la democracia electoral-representativa.

Bibliografía principal
Dahl, Robert, 1992. "La Poliarquía" en Albert Battle (comp.). Diez textos básicos de ciencia política. Ariel, Barcelona.
Morlino, Leonardo, 1988. "Las democracias" en Pasquino, Gianfranco (dir.). Manual de Ciencia Política. Alizanza, Madrid.
Rosanvallon, Pierre, 2007. La contrademocracia. La Política en la era de la desconfianza. Manantial, Buenos Aires.
Schumpeter, Joseph A., 1996. Capitalismo, socialismo y democracia. Folios, Barcelona.

Bibliografía Sugerida
Zolo, Danilo, 1994. Democracia y complejidad. Un enfoque realista. Nueva Visión, Buenos Aires.
Bobbio, Norberto, 1992. El Futuro de la Democracia. FCE, México.
Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (comp.), 2001. Políticas e instituciones en las nuevas democracias Latinoamericanas. Paidós, Buenos Aires.
Dahl, Robert, 1998. La democracia. Una guía para los ciudadanos. Taurus, Madrid.
Dahrendorf, Ralf, Furet, François y Geremek, Bronislaw, 1993. La democracia en Europa. Alianza Editorial, Madrid.
Friedrich, Carl J. , 1975.Gobierno Constitucional y Democracia. Instituto de Estudios políticos, Madrid.
Kòjeve, Alexandre, 2005. La noción de autoridad. Nueva Visión. Buenos Aires.
Linz, Juan J., 1997. La quiebra de las democracias. Alianza, Madrid.

Sartori, Giovanni, 1989. Teoría de la Democracia. El Debate Contemporáneo, Tomo I y Los Problemas Clásicos, Tomo II. Alianza Universidad, México.

Bibliografía complementaria

Aron, Raymond, 1968. Democracia y totalitarismo. Seix Barral, Barcelona.
Dahl, Robert, 1989. La poliarquía: participación y oposición. Rei, Buenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1986. Los grupos de presión en la democracia. Ed. de Belgrano, Buenos Aires.
Fistetti, Franceso, 2004. Comunidad. Léxico de política. Nueva Visión. Buenos Aires.
Held, David, 1991. Modelos de democracia. Alianza Editorial, Madrid.
Iazzetta, Osvaldo, 2003. "Las asignaturas pendientes de nuestras democracias" en Democracia, desarrollo humano y ciudadanía: reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina. Homo Sapiens, Rosario.
Lijphart, Arend, 2000. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Ariel, Barcelona.
Pasquino, Gianfranco, 1999. La Democracia Exigente. F.C.E., Buenos Aires.
Touraine, Alain, 1995. ¿Qué es la Democracia? FCE, Buenos Aires.

Unidad 6. LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS

Los partidos políticos. Origen y evolución de los partidos políticos. Concepto. Funciones. Diferencias con otros grupos de poder. Su incorporación a las constituciones jurídicas.
El sistema de partidos: clasificaciones, dimensión ideológica. Sistema de partido único, de partido hegemónico, de partido predominante, bipartidista, de pluralismo limitado, de pluralismo extremo, y de pluralismo atomizado.
Los sistemas electorales: fuertes, débiles e intermedios. Consecuencias (incidencias) sobre el sistema de partidos políticos. División territorial o secciones electorales. Sistemas mayoritario (de mayoría "pura y simple"); de representación de las minorías o de representación proporcional (cociente electoral, D´Hont, del cociente progresivamente rectificado y otras variantes). Clases de sufragio. La extensión y profundización: el voto de la mujer y disminución de la edad. El cuerpo electoral.

Bibliografía principal

Alcántara Sáez, Manuel y Flavia Freidenberg, 2003. Partidos políticos de América Latina. Vols. 1 a 3. FCE, México.
Cheresky, Isidoro (comp.), 2007. La Política después de los partidos. Introducción: La Política después de los partidos. Prometeo, Buenos Aires.
Garcia-Pelayo, Manuel , 1986. El Estado de partidos. Alianza, Madrid.
Michels, Robert, 1969. Los partidos politicos. Amorrortu, Buenos Aires.
Oppo, Anna, 1986. "Partidos Políticos", en Bobbio, Norberto et al., 1986. Diccionario de política. Siglo XXI, México.
Panebianco, Angelo, 1990. Modelos de partido: organización y poder en los partidos políticos. Alianza, Madrid.

Bibliografía sugerida

Beyme von, Klaus, 1986. Los partidos políticos en las democracias occidentales. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas, coedición con Siglo XXI de España.
Di Tella, Torcuato S., 1998. Los partidos politicos. Teoría y Análisis Comparativo. A – Z Editora, Buenos Aires.
Duverger, Maurice , 1961. Los partidos políticos. F.C.E. México, 1961. , 2º Ed.
Nohlen, Dieter, 1981. Sistemas electorales del mundo. C.E.C., Madrid.
Nohlen, Dieter, 1995. Elecciones y sistemas electorales. Ed. Nueva Sociedad, Caracas.
Offe, Claus, 1998. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Editorial Sistema, Madrid
Sartori, Giovani, 2000. Partidos y sistemas de partidos. Alianza Universidad, Madrid.
Zampetti, Pier Luigi, 1969. Del Estado liberal al Estado de partidos. La representacion política. Ediar, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Baras, Montserrat y Juan Botella, 1996. El sistema electoral. Tecnos, Madrid.
Beyme, Klaus von, 1995. La clase política en el Estado de partidos. Madrid. Alianza Universidad.
Caboara, Lorenzo, 1967. Los partidos políticos en el Estado moderno. Ediciones Iberoamericanas, Madrid.
Corbetta Juan Carlos y Ricardo Sebastián Piana, 2006. Compendio de normas políticas del Estado Argentino. Quórum, Buenos Aires.
Garcia Cotarelo, Ramón , 1985. Los partidos políticos. Ed. Sistema, Madrid.
Jackish, Carlota, 1994. Los sistemas electorales. Sus características y consecuencias políticas. El caso argentino. Fund. K. Adenauer, Buenos Aires.
Neuman, Sigmund , 1965. Partidos políticos modernos. Tecnos, Madrid.
Schattschneider, E.E., 1964. Régimen de partidos. Tecnos, Madrid.
Zampetti, Pier Luigi, 1970. Democracia y poder de los partidos – El nuevo régimen político. Ed. Iberoamericana, Madrid.

Unidad 7. REPRESENTACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

Concepto de representación. ¿Qué se representa? ¿A quién? Representación política y funcional.
Representación e identidad. Mayorías y minorías. Crisis de representación.
Concepto de opinión pública. Opinión publicada. Relación entre espacio público, opinión pública y representación.
Interés y utilidad. Interés del príncipe, interés del Estado y razón de Estado.

Bibliografía principal

Accarino, Bruno, 2003. Representación. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Ornaghi, Lorenzo, Cotellessa, Silvio, 2000. Interés. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Burke, Edmund, 1942. Textos Políticos. FCE. México.

Bibliografía sugerida
Habermas, Jürgen, 1989. Conocimiento e interés. Taurus, Madrid.
Meinecke Firedrich, 1997. La idea de razón de Estado en la Edad Moderna. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
Habermas, Jürgen, 2004. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Sartori, Giovanni, 1998. Homo videns, la sociedad teledirigida. Taurus, Madrid.

Bibliografía complementaria
Hirschman, Albert, 1999. Las pasiones y los intereses: argumentos políticos a favor del capitalismo previos a su triunfo. Península, Barcelona.
Hirschman, Albert, 1986. Interés privado y acción pública. FCE, México.
Quiroga, Hugo, 2006. La arquitectura del poder en un gobierno de la opinión publica, en Cheresky I. (comp.), La política después de los partidos. Prometeo.
Mora y Araujo, Manuel, 2005. El poder de la conversación. Elementos para una teoría de la opinión pública. La Crujía, Buenos Aires.
Pitkin, Hannah, 1985. El concepto de representación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

Unidad 8. RÉGIMEN POLÍTICO.
Aspectos normativos, culturales y políticos de la organización estatal.
Las tipologías clásicas y las nuevas formas de clasificación.
Constitución: constitución jurídica, real y natural. Tipos de constitución: el modelo de constitución inglesa, norteamericana y francesa. El modelo argentino. Presidencialismo, Parlamentarismo y formas intermedias.
Formas de Estado: el sistema unitario y el federalismo; descentralización, e integración. El federalismo argentino.
Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político argentino.

Bibliografía principal
Alcántara Sáez, Manuel, 1999. Sistemas Políticos de América Latina. vol 1 y 2. Tecnos, Madrid.
Almond, Gabriel y Bingham Powell, 1972. Política comparada. Una concepción evolutiva. Paidós, Buenos Aires.
Badía, Juan Fernando, 1995. Regímenes políticos actuales. Madrid Tecnos. 3º ed.
Easton, David, 1992. "Categorías para el análisis sistémico de la política", en Albert Battle (comp.). Diez textos básicos de ciencia política. Ariel, Barcelona.
Loewenstein, Karl, 1965. Teoría de la constitución. Ariel, Barcelona.
Oszlak Oscar, 2004. La formación del Estado Argentino. Ariel, Buenos Aires.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alizanza. Cap. 8. Los gobiernos, Maurizio Cotta.

Pasquino, Gianfranco (2004). Sistemas políticos comparados. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos". Prometeo Libros, Buenos Aires.
Sartori, Giovanni, 1994. Ingeniería Constitucional Comparada. FCE, México.
O´Donnell Guillermo, 1996. "Otra institucionalización" en La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, Nº 2. pags. 5-28. Paidós Ibérica.

Bibliografía complementaria
Aguilera de Prat, Cesareo y Martínez Rafael, 2000. Sistemas de Gobierno: Partidos y Territorio. Tecnos, Madrid.
Corbetta, Juan Carlos y Ricardo Sebastián Piana, 2005. Constitución Política de la República Argentina. Dimensiones normativas y jurisprudenciales de la realidad política argentina. Capítulo Introductorio. Ed. Scotti, La Plata.
Duverger, Maurice, 1980. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Ariel, Barcelona.
Fioravanti, Mauricio, 2001. Constitución, de la antigüedad a nuestros días. Selección. Trotta, Madrid.
LANZARO, Jorge (Comp.) (2003) "Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina". FLACSO, Buenos Aires.
Mateucci, Nicola, 1998. Organización del Poder y Libertad. Historia del constitucionalismo moderno. Selección. Ed. Trotta, Madrid.
Miller, Jonathan, Gelli, María A., Cayuso, Susana, 1995. Constitución y Poder Político. Astrea, Buenos Aires.
Nohlen, Dieter y Fernández, Mario (ed.), 1998. El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina. Nueva Sociedad, Caracas.

Unidad 9. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Gobierno: concepto. Administración Pública. La reglamentación como límite a la discrecionalidad y como instrumento de poder.
Burocracia y tecnocracia. Técnicas de decisión. Modernización/Reforma del Estado: los modelos de Estado.
El análisis institucionalista.

Bibliografía principal
Cotta, Maurizio, 1998. Cap. 8. Los gobiernos. Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alianza.
Colombo, Paolo, 2003. Gobierno. Léxico de política. Nueva Visión, Buenos Aires.
O´Donnell Guillermo, 1998. "*Acountabilitty* Horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza" en *La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad*, Nº 4, ISSN 1136-2251, pags. 161-188. Paidós Ibérica.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alianza. Cap. 9. Las burocracias. Panebianco, Angelo.
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Cap. 14. Técnicas de decisión.
Weber, Max, 1992. Economía y Sociedad. Selección de capítulos. FCE. México.

Bibliografía complementaria
Crozier, Michel, 1974. El fenómeno burocrático. Tomos I y II. Amorrortu, Buenos Aires

Dror, Yehezkel, 1990. Enfrentando el futuro. FCE, México.
Fedrich, Carl J., 1968. El hombre y el gobierno – Una teoría empírica de la política. Tecnos, Madrid.
García Pelayo, Manuel, 1974. Burocracia y tecnocracia y otros escritos. Alianza Universidad, Madrid.
March, James y Olsen, Johan, 1993. "El Nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida política" en *Zona abierta* 63/64, Madrid.
Meynaud, Jean, 1968. La tecnocracia: ¿Mito o realidad?" Tecnos, Madrid.
Olías de Lima, Blanca, 2001. La Nueva Gestión Pública. Alhambra, Madrid.
Oszlak, Omar (Comp), 1984. Teoría de la burocracia estatal. Paidós, Buenos Aires.
Peters, Guy. 2003. El Nuevo Institucionalismo: Teoría Institucional en la Ciencia Política. Gedisa, Barcelona.

Unidad 10. CLASE POLÍTICA Y ÉLITES
La teoría general de las elites y las doctrinas de la "clase gobernante".
La actualidad de Mosca y Gramsci a propósito de la "clase política". Hegemonía y "fórmula política".
Personalidad, carisma y conducción política. La intelligentsia. Liderazgo político.

Bibliografía principal
Bobbio, Noberto, 1997. La duda y la elección. Intelectuales y poder en la sociedad contemporánea. Paidós, Barcelona.
Laurito, Agustina, 2006. Introducción y esquema de la Sociología Política de Robert Michels. Facultad de Ciencias Sociales. Material de la cátedra. USAL.
Mosca, Gaetano, 2004. La clase política. (Selección e introducción de Norberto Bobbio). FCE, México.
Pareto, Vifredo, 1980. Forma y equilibrio sociales. Extracto del Tratado de Sociología, Alianza, Madrid

Bibliografía complementaria
Beyme, Klaus von, 1995. La clase política en el Estado de partidos. Alianza Universidad, Madrid.
Bottomore, Thomas B, 1965 "La elite: concepto e ideología" en Minorías selectas y sociedad. Gredos, Madrid.
Dahl, Robert, 1961. Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press, New Haven.
Cavalli, Luciano, 1999. Carisma. La calidad extraordinaria del líder. Losada, Buenos Aires.
Gramsci, Antonio, 1985. "El príncipe moderno", en La política y el Estado moderno. Planeta-Agostini, Bogotá.
Lipset, 1963. El hombre político, Eudeba, Buenos Aires.
Mills, Wright, 1993. La Elite del Poder. Fondo de Cultura Económica. México.

Unidad 11. CULTURA POLÍTICA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y BIOPOLÍTICA
El concepto de cultura política. Tipos: parroquial, súbdito y participante. Tipos de cultura política mixtas. El concepto de subcultura política. La cultura cívica.
El desencanto de la política y los nuevos movimientos sociales. Las ONG´s y su participación política.
Nuevos temas: El problema del pluralismo y las sociedades multiétnicas. Biopolítica. Nuevas formas de comunicación política: Sociedad de la Información.

Bibliografía principal
del Águila, Rafael. Manual de Ciencia Política. Cap. 10. Cultura política. Torcal.
Foucault, Michel, 2007. Nacimiento de la Biopolítica. Selección. FCE, Buenos Aires.
Offe, Carl, 1998. Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Ed. Sistema. Cap. VII. Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional.
Pasquino, Gianfranco (dir.), 1998. Manual de Ciencia Política. Alizanza. Cap. 5. Participación política, grupos y movimientos sociales.

Bibliografía sugerida
Almond, G. y Powell G. B., 1972. Política comparada. Paidós. Buenos Aires. Capítulo 7. La función de comunicación.
Almond, Gabriel y Sidney Verba, 1992. "La Cultura Política" en Albert Battle (comp.). Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Ariel. Barcelona.
Deutsch, Karl, 1971. Los nervios del Gobierno. Paidós. Buenos Aires. Cap. 9. Lewellen, Ted C., 1994. Introducción a la antropología política. Bellaterra, Barcelona.
Modelos de comunicaciones y sistemas de decisión.
Habermas, Jürgen, 2002. El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? Paidós, Barcelona.
Sartori, Giovanni, 1992. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Cap. 13. Sociedad Libre.

Sartori, Giovanni, 2001. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid. Tecnos.

Unidad 12. REBELIÓN Y CAMBIO POLÍTICO
El cambio político. Las explicaciones evolucionistas. Reformismo institucional. La tesis socialista y liberal del reformismo. La explicación revolucionaria del cambio político. Teorías de las revoluciones. Consentimiento y rebelión en Hobbes y Locke.
La movilización política. Liderazgo, partido revolucionario y movimientos de masas. El problema de la guerra civil y la integración social.
Las revoluciones contemporáneas. Ideologías dinámicas, mitos políticos y religiones civiles. Los movimientos totalitarios de inclusión social. La violencia política.

Bibliografía principal
Bobbio, Norberto, 1997. "Cambio Político" en Norberto Bobbio: el filósofo y la política. FCE. México.
Etzioni, Amitai, 1980. La sociedad activa. Una teoría de los procesos sociales y políticos. Aguilar. Madrid. Parte V. "Mas allá del imperialismo" pp. 621-692.
Ricciardi, Mauricio, 2003. Revolución. Léxico de Política. Nueva Visión, Buenos Aires.
Sorokin, Pitirim, 1962. Dinámica social y cultural. Instituto de Estudios Políticos, Madrid.

Bibliografía complementaria

Arregui Hernández, Juan José, 1963. ¿Qué es el ser nacional? Hachea, Nuenos Aires.
Beyme von, Klaus, 1994. "Teorías del control político" (pp.88-134) en Teoría Política del siglo XX. De la modernidad a la postmodernidad. Alianza, Madrid.
Fanon, Franz, 1983. Los condenados de la tierra. FCE, México.
Skocpol, Theda, 1984. Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China. FCE, México
Simmel, Georg, 2002. "La lucha" (1908) y "La dominación" (1908) en Sobre la individualidad y las formas sociales. U.N.Q., Buenos Aires.
Taguieff, Pierre A. "Las ciencias políticas frente al populismo: de un espejismo conceptual a un problema real" en: Paul Picone et. al., 2003 Populismo Posmoderno. UNQ. Buenos Aires pp. 29-81
Taylor, Charles, 2006. Imaginarios sociales modernos. Paidós Básica, Barcelona.

Unidad 13. CAMBIO POLÍTICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
Dinámica de las relaciones internacionales. La Paz de Westfalia y el Ius publicum europaeum. Soberanía y globalización.
Funcionalismo y adaptación. La categoría de equilibrio de poder. El conflicto y la cooperación internacional.
La guerra y la paz en su formulación política moderna y contemporánea. La "guerra justa". Anticolonialismo y antiimperialismo.
Bloques regionales y proyecciones imperiales. El Imperio como forma política.

Bibliografía principal
Beck, Ulrich, 1998. ¿Qué es la globalización? Piados, Barcelona.
Giddens, Anthony, 2000. Un Mundo Desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid. Taurus.
Schmitt, Carl, 2003, El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del «*Ius publicum europaeum*». Comares, Granada. Selección de capítulos.
Zolo, Danilo, 2007. "El Imperio y la Guerra" en La justicia de los vencedores. Edhasa, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria
Aron, Raymond, 1985. Paz y guerra entre las naciones. Alianza, Madrid.
Arendt, Hannah, 1967. Sobre la revolución. Revista de Occidente, Madrid.
Habermas, Jürgen, 1997. Más Allá del Estado Nacional. Trotta, Madrid.
Schmitt, Carl, 1995. "El Concepto de Imperio en el Derecho Internacional" en Escritos Políticos. Heracles, Buenos Aires.
Stiglitz, Joseph E., 2002. El Malestar en la Globalización. Buenos Aires. Taurus.

PROYECTO N° 7: Sebastián Piana, Secretario de Investigación Científica, propone el dictado a los alumnos del grado de algunos contenidos mínimos de epistemología y metodología de la investigación
La Plata, 08 de julio de 2011
Sr. Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abog. Vicente ATELA
S/D
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar como propuesta la creación de tres materias específicas con contenido interdisciplinar vinculadas a la **epistemología**, la **metodología de la investigación** y a la **escritura de documentos científicos**.
Considerando mi propia experiencia formativa como investigador, entiendo que resulta importante ampliar las oportunidades de los futuros abogados en el ámbito de la investigación. A excepción del seminario de **Metodología de la Investigación Científica en Ciencias Jurídicas y Sociales** que se dicta actualmente en nuestra Facultad, los estudiantes sólo pueden recibir esa formación en el postgrado.
A tales fines, se propone la creación de las materias indicadas más arriba que podrían integrar un núcleo de especialización dentro de la carrera orientado a la investigación científica de las ciencias jurídicas.
El objetivo de la materia es proporcionar a los alumnos un marco general para la comprensión, descripción y explicación de los fenómenos epistemológicos, científicos y teórico prácticos en la redacción de documentos que den cuenta de los resultados de la investigación.
A fin de una mayor justificación de la relevancia y necesidad de incluir estas materias, se adjuntan Programas tentativos con las temáticas a tratar.
Sin otro particular, saludo a usted muy cordialmente.
Dr. Ricardo Sebastián Piana

A. EPISTEMOLOGÍA
Corrientes epistemológicas contemporáneas. Unidades de estimación del conocimiento, Criterios e indicadores de avance del conocimiento. Relaciones entre Epistemología, Lógica y Metodología de la Investigación. Distinción entre método y metodología; funciones del método. Fundamentos, teoría básica y matriz epistémica de la tesis.
Pluralidad de las estructuras racionales. Perspectivas de análisis. Marcos de referencia. Teorías presupuestas y esquema conceptual unificado. Marco teórico: función metodológica, delimitación, componentes, criterios de selección y composición.
Nociones, conceptos y categorías. La elucidación. La objetividad como asunto social y como producto de la crítica. La noción metodológica de intersubjetividad. La lógica de las ciencias sociales.
Estructura de la teoría: términos, enunciados y niveles. Concepción enunciativa y funciones de la teoría.
Textos sobre epistemología
KLIMOVSKY, Gregorio, Las desventuras del conocimiento científico, AZ, Buenos Aires, 1994.
KLIMOVSKY, Gregorio. y DE ASÚA, M., Corrientes epistemológicas contemporáneas, Editores de América Latina, Buenos Aires, 1997.
MERRYMAN, John H., La tradición jurídica romano canónica, FCE, México, 1979 (1971).
NAGEL, Ernest, La estructura de la ciencia, Paidós Ibérica, 2006.
NIETO, A. y A. GORDILLO, Las limitaciones del conocimiento jurídico, Trotta, Madrid, 2003.
PIAGET, Jean, Lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos de la epistemología, Proteo, Buenos Aires, 1970.

SCHUSTER, Félix Gustavo, "Los límites de la objetividad en las ciencias sociales", en Gaeta, A. y Robles, N. (comp.), Nociones de epistemología, Eudeba, Buenos Aires, 1985.

B. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Hipótesis: tipos y condiciones. Refutación y corroboración. Asimetría epistémica de la contrastación.
Diseños de investigación: noción y tipos. Investigación teórica. Estudios históricos y crítico-evaluativos. Trabajo de campo. Diseños cuasiexperimentales y factores de invalidación de los resultados en la investigación social.
Teoría de la explicación. Explicación y predicción, tesis de simetría. Explicación y comprensión en ciencias sociales. Explicación de generalizaciones estadísticas. Explicaciones causales, conceptuales, genéticas, por razones, funcionales, por motivos, por capacidades y por intenciones.
Objeto y unidad de análisis. Origen de los problemas investigables en las ciencias sociales. Variables e indicadores. Fuentes y medios de prueba.
Textos sobre metodología de la investigación
BORSOTTI, Carlos A., Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2007.
Buenos Aires, 1994.
CAMPBELL, D. y J. STANLEY, Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
CARNAP, Rudolf, "Sobre la elucidación", en Mario Bunge (dir.), Cuadernos de Epistemología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, s/d (ca. 1962), pp. 1-19.
EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice, Metodología de la investigación. ECAFSA, Thomson Learning, s.l., 2002.
GIANELLA DE SALAMA, Alicia, Introducción a la epistemología y a la metodología de la ciencia, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1995.
HEMPEL, Carl, La explicación científica, Paidós, Buenos Aires, 1979.
HERNÁNDEZ SAMPIERI y otros, Metodología de la Investigación, Editorial Mc Graw Hill. México, 2000.
HOROWITZ, Irving Louis (dir.), Historia y elementos de la sociología del conocimiento, Eudeba, 1974.
SAUTÚ Ruth, El método biográfico, edit. Lumiere, Buenos Aires, 2004.
SAUTÚ, Ruth y Catalina WAINERMAN (comp.): *La trastienda de la investigación.* Editorial Lumiere. Buenos Aires, 2001. Tercera edición.
SCHUSTER, Félix Gustavo, El Método en las Ciencias Sociales, Editores de América Latina, 2004.
SCHUSTER, Félix Gustavo, Explicación y predicción. La validez del conocimiento en ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 1982.
SCRIBANO, Adrián, Teoría social y hermenéutica, Centro Editor de América Latina,
TAYLOR y BOGDAN. Introducción a los métodos cualitativos de investigación edit. Paidos. Buenos Aires, 1998.
TOPOLSKY, Jerzy, Metodología de la Historia, Cátedra, Madrid, 1985.
VÁZQUEZ, Héctor, La investigación sociocultural: crítica de la razón teórica y de la razón instrumental, Biblos, Buenos Aires, 1994.

C. ESCRITURA DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS
Análisis del tema. Elementos temáticos y aspectos de la problemática. Aspectos descriptivos, estructurales, funcionales, genéticos, históricos, evolutivos y dialécticos; tensiones argumentativas.
Anteproyecto de investigación, finalidad y partes componentes. Objetivo general del proyecto de tesis; factibilidad. Articulación entre tema, problemática, enfoque, fuentes y diseño. Lógica interna, organización y ejecución del proyecto.
Plan general del anteproyecto de tesis/investigación. Estructura y aspectos de forma; función de las partes; Ítem complementarios. Utilidad del índice tentativo. Previsión de un sistema de referencias internas.
Análisis documental. Sistemas de información. Terminología de la documentación (UNESCO). Tesauros. Fuentes de catalogación indefinida.
La utilidad de las normas de la ABNT (Brasil).

Textos
ACOSTA HOYOS, Luis. E, Guía práctica para la investigación y redacción de Informes, Paidós, Buenos Aires, 1995.
CARDOSO, Ciro, F., Introducción al trabajo de investigación histórica, Crítica, Barcelona, 1981.
CHOMSKY, N. / FOUCAULT, M. y F. ELDERS, La naturaleza humana: justicia versus poder. Un debate, Katz, Buenos Aires, 2006.
FRANCIA, Álvaro, La investigación científica: guía para confeccionar y redactar trabajos de investigación, Librería Agropecuaria, Buenos Aires, 1995.
HEMPEL, Carl, La explicación científica, Paidós, Buenos Aires, 1979.
Paraninfo, Madrid, 1995.
SABINO, Carlos, *Como escribir una tesis.* Editorial Lumen Humanitas. Buenos Aires, 1998.
SIERRA BRAVO, Restituto, Tesis doctorales y trabajos de Investigación científica,

PROYECTO N° 11: Agrupación Estudiantil "Construyendo Derechos" realiza algunas consideraciones y propuestas acerca de la reforma del plan de estudios de la carrera
La Plata, Agosto de 2011
Proyecto de Reforma del Plan de Estudios
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

"Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana"***[1]***
"No basta con teorizar sobre la Justicia, sino que hay que luchar para realizarla"**[2]**
CONSIDERACIONES GENERALES
En la actualidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ha comenzado un proceso de reforma de su plan de estudios con el objetivo de actualizar contenidos, modificar correlatividades, enunciar objetivos y propósitos, revisar metodologías y evaluar un mejor desarrollo de prácticas profesionales.

El **plan de estudios** vigente quedó configurado en el año 1985, siendo modificado por última vez en el año **1988**; tras esa reforma quedó estructurado de la siguiente manera: cuenta con 31 materias teóricas, dos prácticas y un trabajo de investigación - seminario.
Teniendo en cuenta que desde la última revisión han pasado casi 23 años y en el marco de un contexto nacional e internacional complejo y dinámico, resulta urgente renovar la actual estructura con el objeto de incorporar las nuevas demandas sociales y de delimitar objetivos acerca del Perfil del Profesional que se debe formar en nuestra facultad y del lugar que se le va a dar a la Enseñanza, la Investigación y la Extensión Universitarias.
Consideramos que los profundos **cambios** que se vienen sucediendo en la sociedad, en nuestro país y en la región, **impactan sobre la Universidad y obligan a repensar su rol y función**, se genera la posibilidad de discutir si la Educación Superior debe estar al servicio de los intereses de unos pocos, formando profesionales individualistas, meramente técnicos y reproductores de un saber concebido por otro, produciendo conocimiento para grupos económicos privados, con una universidad absolutamente desconectada de la realidad o, si por el contrario, trabajamos por construir un modelo de universidad en armonía con las necesidades de las mayorías, por recuperar una visión estratégica de un proyecto de educación pública, popular y masiva dentro de un Proyecto Nacional, Popular y Latinoamericano con una concepción humanista y crítica.
Nuestra meta debe ser la edificación de una **universidad comprometida socialmente**: con fomento de prácticas de extensión y articulación con otros sectores, con la promoción de investigaciones en función de los intereses y problemáticas de las mayorías, con la incorporación de sectores sociales, organizaciones gremiales y sindicales, junto a los actores de la comunidad universitaria, en las instancias de diseño, concepción y planificación.
En el año 2008, tras la lucha y el trabajo de los miembros de todos los claustros, se logró **reformar la Carta Magna de la UNLP**, a partir de lo cual se incorpora un conjunto de reivindicaciones que se encaminan en la construcción de una Universidad más inclusiva y comprometida socialmente.
Pudimos avanzar en la articulación de la Universidad con la sociedad, jerarquizando la Extensión Universitaria que antes de la reforma era un artículo perdido del Estatuto. Pudimos avanzar en aumentar considerablemente la cantidad de Proyectos de Extensión que hoy brinda la Universidad de La Plata, para que cada vez más estudiantes se involucren con las problemáticas sociales. Pudimos sumar a las organizaciones sociales, gremiales y políticas a la orientación del objeto de estudio de nuestras carreras, creando un Consejo Social donde los sectores populares tengan la posibilidad de expresar qué esperan de ésta Universidad Nacional. Pudimos establecer la condición de derecho adquirido e inalienable de los estudiantes las materias aprobadas, y que bajo ninguna circunstancia o situación puedan ser perdidas o derogadas. Logramos concretar la gratuidad de los doctorados para los docentes e investigadores que se desempeñan en las distintas Facultades de la UNLP. Se logro un profundo y contundente pronunciamiento por el ingreso libre e irrestricto a todos los estudiantes. La educación es un derecho, no es un servicio ni una mercancía. Un derecho de todos, no de unos pocos. Y como Universidad pública-estatal orientada a las necesidades de las mayorías, es inconcebible que hoy haya sectores que nos sigan planteando que hay algunos que pueden estudiar y otros que no. Conseguimos que quede sentado en el Estatuto la prohibición de ocupar cargos a personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y al terrorismo de Estado. Logramos incorporar al Bienestar Universitario como Título del Estatuto, para que la Universidad se comprometa a ejecutar políticas en la materia. Logramos la histórica incorporación de los trabajadores no-docentes, con voz y voto a los órganos de co-gobierno universitario.
En este nuevo momento histórico que estamos atravesando en Latinoamérica y Argentina se nos presentan nuevos desafíos como comunidad educativa para estar a la altura del proceso político que estamos viviendo y cumplir la tarea de nuestra generación: la verdadera independencia económica, política y cultural.
Dentro de este marco sabemos que solo con la organización del pueblo es que vamos a garantizar las condiciones para profundizar este proceso que comenzó en el 2003 de redistribución de riqueza, incorporación de sectores sociales que estaban excluidos de lo económico y de mejoramiento social; esto lo podemos ver en la estatización de Aerolíneas y las AFJP, la AUH, la sanción de la Ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, el avance del movimiento obrero como actor político fundamental, entre otras cosas. Sabemos que hay mucho por profundizar, pero también sabemos que es responsabilidad nuestra defender lo que conseguimos y avanzar por más, como región, como país, como universidad y como facultad.
Haciendo un **recorrido histórico** de cómo ha evolucionado el programa de estudios de esta unidad académica, se puede observar que el mismo ha sido la cristalización de un determinado momento histórico, de un proyecto de país y de un modelo de educación.[3]
Consecuentemente, la **actual reforma debe responder a los designios que marca la actual coyuntura social, política, económica y cultural**; los abogados que se gradúen en nuestra facultad deben ser profesionales conscientes de su responsabilidad social; magistrados, patrocinadores y asesores garantes del acceso a la justicia; mediadores en los conflictos y controversias; cuadros estatales con capacidad de diseñar e implementar políticas que respondan a los intereses del pueblo; militantes políticos representantes de sus territorios; profesionales capaces de contribuir a la transformación de su entorno, en la búsqueda de la libertad, la igualdad y la justicia.
Entendemos que la transformación que se haga debe ser la expresión del debate, la discusión y participación de todos los actores de la comunidad universitaria, del trabajo y construcción colectivos, que en el nuevo programa deben estar plasmadas las opiniones, miradas y aportes de las mayorías.
Celebramos la oportunidad que hoy se nos presenta de poder ser actores de este cambio, afirmamos y asumimos nuestra responsabilidad de ser protagonistas y promotores de los procesos de democracia participativa.

PERFIL PROFESIONAL, PERFIL CURRICULAR Y ENSEÑANZA DEL DERECHO
Antes de pasar a considerar cual el es perfil del profesional que debería orientar el diseño del nuevo Plan de Estudios, nos parece necesario analizar cual es la orientación actual del egresado de nuestra unidad académica.
Como desarrollamos en el apartado anterior, la misión, objetivos, orientación y perfiles que se forman en cada facultad, en cada universidad o institución, responde a un determinado momento histórico, a un determinado proyecto.
Nuestra Educación ha recreado una concepción neoliberal, que se cristalizó a través de la Ley de Educación Superior de los años '90 y que se tradujo en cuál debería ser la función de la universidad, la extensión y la

investigación, cómo debería ser el financiamiento, la autonomía y el gobierno universitarios y de qué forma se debía estructurar la docencia y la enseñanza.
En la Educación del Neoliberalismo se forma un profesional individualista, distanciado de las problemáticas y las necesidades del pueblo; aislado, alejado de la situación socio-política-cultural nacional e internacional; un técnico, reproductor de un saber pensado y elaborado por otro.
Estos rasgos son palpables en el tipo de abogado que se forma en nuestra facultad.
El graduado no tiene conciencia ni visión colectivas, no se estimula la comprensión de la importancia que tiene entendernos como parte de una sociedad, como actores de un sistema, como beneficiarios de una educación pública, financiada gracias al esfuerzo de toda una Nación y, en ese sentido, conscientes de las responsabilidades políticas, jurídicas, sociales y éticas que tenemos como profesionales con los diferentes sectores del pueblo.
El "éxito profesional" está asociado con la acumulación material, con el "triunfo" judicial, con el "engorde" del currículo vitae; se construye una visión competitiva del rol que tenemos, haciendo primar nuestros intereses individuales por sobre las necesidades de un colectivo. La "víctima", el "imputado" que nos toca defender, asesorar, juzgar, acompañar, deja de ser una persona para pasar a ser el "cliente", un "sujeto de derecho", una mercancía; se pierde la humanidad en las relaciones, quedando desoída la necesidad social de formar juristas con capacidad de mediar y conciliar.
Nuestro plan de materias suele orientar al egresado a desempeñarse como "litigantes", sin fomentarse el desarrollo en otras esferas laborales; en términos porcentuales es escaso el número de egresados que deciden dedicarse a la docencia, la extensión y la investigación universitarias, sumado a una fuerte desarticulación entre esas prácticas.[4]
No se estimula una concepción crítica del Derecho; la evaluación del contexto socio-histórico-político y cultural de creación, sanción y ejecución de la ley; un análisis acerca del momento en que nace la norma, su proyección, adecuación y conexión con la situación nacional, regional e internacional actual. De esta forma, la "disposición legal" se dogmatiza; el estudiante, el egresado, no aprende a cuestionarla; no la concibe como la cristalización de una correlación de fuerzas, como la traducción de un proyecto, el fruto de una lucha, sino como una "verdad dada", como un precepto incorruptible.
En relación al perfil curricular y modelo de enseñanza, se observan los siguientes problemas:
- no se implementan estrategias que fomenten una participación activa de los estudiantes, la integración, trabajo e intercambio grupal; nos encontramos con "clases magistrales", puras exposiciones teóricas donde el debate, la pregunta y la repregunta suelen estar ausentes; el docente se relaciona de una forma impersonal con el estudiantado, hecho que se ve reforzado por el no aumento de la planta general de profesores frente al contiguo crecimiento del ingreso que genera alta cantidad de estudiantes por docente, dificultando aún más el proceso de aprendizaje;[5]
-dificultad para la integración de los conocimientos propios del plan de estudios y la necesidad de revisión del sistema de correlatividades vigentes;[6]
-la necesidad de fomentar la formación general del estudiante de derecho y aumentar su vinculación con otras disciplinas y su circulación en otras facultades;
-la dificultad para integrar los contenidos de la teoría con la práctica y la escasez de herramientas para el ejercicio práctico al concluir los estudios de grado;
-la poca centralidad que se le otorga a las prácticas de investigación científica: el programa vigente sólo contempla la realización de un "Seminario" (con la opción de hacerlo bajo la modalidad "libre" o "cursado"), que concluye con un trabajo monográfico;
-la falta de actualización e incorporación de ramas, temas y bloques de conocimiento afines con nuestra disciplina y que urge su contemplación para adecuar nuestra formación a las demandas sociales actuales.
Considerada la situación actual, nos parece apropiado comentar cual entendemos que debe ser el perfil profesional, curricular y de enseñanza del derecho que debe inspirar la reforma.
Como bien surge del documento de "Autoevaluación Académico- Institucional de la FCJS de la UNLP - 2007-2010", la abogacía debe ser comprendida como una profesión que implica obligaciones referidas a la traducción de demandas sociales colectivas e individuales en reclamos jurídicos y la inclusión de sectores excluidos del acceso a la justicia.
Se debe promover la formación de profesionales críticos, conocedores de sus deberes y derechos, con ideales democráticos, con sentido ético, humanista, con visión colectiva y solidaria, capaces no sólo de asimilar conocimientos teóricos, sino de crearlos y de asumir posiciones transformadoras en todos los aspectos, que rescaten nuestra identidad nacional y latinoamericana.
El egresado debe tener la capacidad de resolver problemas profesionales complejos, fomentando un espíritu creativo para imaginar y obtener soluciones jurídicas originales.
Para la mejora de nuestra formación profesional, es necesario apuntalar y consolidar la articulación entre docencia, extensión e investigación; profundizar la formación en tales prácticas con el objeto de que la facultad sea el ámbito de producción de conocimiento, que el mismo se oriente en función de las necesidades y problemas del pueblo; que sea a través de la experiencia acumulada en el terreno de articulación con otros sectores sociales que se redireccionen las prácticas futuras.[7]
El modelo de enseñanza debe estar basado en la resolución de problemas, en hacer del estudiante el centro de la actividad cognoscitiva y en el uso de las estrategias de interacción grupal con el propósito de que los alumnos sean sujetos activos en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. De esta forma el aprendizaje se da mediante el enfrentamiento directo a problemas reales en el contexto de la producción social: económica, política y cultural.
COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
A partir del diagnostico realizado y de los objetivos planteados, proponemos las siguientes reformas al plan de estudios vigente:
-Materias iniciales o propedéuticas
Conforme los datos publicados en la página de nuestra facultad, entre un 25 y un 30% de los aspirantes a nuestra carrera, abandonan sus estudios durante el Curso de Ingreso; a esto hay que sumarle las tasas de deserción a lo largo del primer año. Entre las causales cabe mencionar: la dificultad para adaptarse a un nuevo nivel educativo, culminado el secundario; la falta de contención afectiva (sobre todo para aquellos que dejan su lugar de origen para venir a estudiar a esta ciudad); limitaciones de índole económica; los problemas que se presentan en materia de comprensión, redacción y producción de textos, que tornan dificultoso la posibilidad de estudiar la cantidad de material que se exige, propio de una carrera de grado.
Entendemos que para que la posibilidad de acceso y permanencia sea real, desde cada unidad académica se deben tomar medidas de contención en cuatro aspectos: Económico (a través de las políticas de Bienestar

Estudiantil), Psicológico-afectivo (a través de Gabinetes integrados por equipos interdisciplinarios: Psicólogos, Lic. en ciencias de la Educación, Trabajadores Sociales), Informativa (democratizando y garantizando el real acceso a la información necesaria para poder desempeñarse en el ámbito universitario) y Académica.
En lo concerniente al último punto, entendemos que el actual Curso de Adaptación Universitaria no está siendo una herramienta eficaz a los efectos de trabajar sobre los problemas que implican el pasaje de un nivel educativo a otro, ante todo, por su corta duración. En ese sentido, proponemos la implementación de un "Ciclo Básico", al igual que otras Facultades de Derecho del país, a partir del cual los aspirantes comenzarían a cursar materias propias de la currícula directamente (sin curso de ingreso); para ello habría que revisar las materias propedéuticas vigentes para, a las ya existentes, adicionarle otras.
Este ciclo podría quedar conformado de la siguiente manera:
Primer cuatrimestre
Taller de Producción y Comprensión de Textos [8]
Realidad Nacional y Latinoamericana[9]
Introducción al Derecho
Segundo Cuatrimestre
Derecho Romano
Historia Constitucional
Introducción a la Sociología
-Materias optativas
Se podría agregar al actual plan la posibilidad de realizar dos o tres materias optativas para enriquecer nuestra formación. Para ello, proponemos dos modalidades:
- Interdisciplinariedad - Articulación con otras unidades académicas
En muchas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata, la currícula esta conformada no sólo por materias propias de la respectiva carrera sino también por asignaturas optativas tendientes a complementar y enriquecer la formación.
En el ejercicio de nuestra formación nos encontramos ante la necesidad de especializarnos en distintos campos afines con las ciencias jurídicas: sociología, psicología, medicina (forense), geología (minería), historia, economía, inglés (relaciones internacionales), etcétera.
Se podría establecer un sistema de articulación con otras facultades a partir del cual los estudiantes de derecho tengan la posibilidad de optar por una, dos o tres materias, afines con la especialización u orientación a la que pretendan avocarse.
- Incorporación de materias a la currícula
Complementar el actual plan de estudios con otras materias expresivas de nuevas ramas del derecho, que han adquirido notoria relevancia en los últimos tiempos intentando dar respuestas a nuevos problemas, necesidades y avances sociales.
Algunas de esas materias, que hoy se dictan en otras Universidades Nacionales del país son:
-DE NECESARIA INCORPORACIÓN (por su trascendencia conforme el momento histórico que estamos viviendo, los avances de la tecnología y evolución de la sociedad o por su relevancia para trabajar algunos de los problemas que se presentan en el plan actual)
DERECHOS HUMANOS[10]
MEDIACIÓN[11]
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN[12]
TALLER DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA[13]
TALLER DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DISCURSO Y LENGUAJE JUDICIAL[14]
-OPCIONALES
DERECHO DE LA COMUNICACIÓN[15]
DERECHO INDUSTRIAL[16]
DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES[17]
CRIMINOLOGÍA Y CONTROL SOCIAL[18]
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN[19]
DERECHO DE LA EDUCACIÓN[20]
IDIOMAS[21]
PEDAGOGÍA DEL DERECHO[22]

-Prácticas Profesionales
Una de las mayores dificultades con las cuales nos encontramos al recibirnos es con la falta de preparación para desempeñarnos en el campo laboral; consideramos que debe ser en la carrera de grado donde se nos deben brindar las herramientas necesarias para poder responder a las diferentes demandas con las cuales nos vamos a encontrar en la sociedad.
Para ello, creemos interesante la adición de una tercera materia práctica que consista en una especie de pasantía o residencia a lo largo de un cuatrimestre o durante todo un año. Los estudiantes elegiríamos un campo de intervención de la práctica forense como: Legislaturas, Ministerio Público, Poder Judicial, Colegial (colegios profesionales), Consultorio Jurídico Gratuito, Administrativo (Universidad, Ministerios, Municipio, Secretarías, etc).[23]
Agrupación Estudiantil ConstruyendoDerechos
MILES (Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil)
Comisión Interclaustro para la Reforma del Plan

ANEXO
Programa de Formación Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires
El nuevo plan de formación docente contempla 4 materias correlativas: Pedagogía Universitaria, Didáctica General, Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza. (Anexo 3)
Los contenidos incluidos en estas asignaturas en buena medida ya se desarrollaban en el plan anterior repartidos en los distintos módulos pedagógicos. Se realizará una adaptación entre los dos planes de modo que quienes estén cursando puedan continuar haciéndolo sin que se incremente el número de materias.
1) "Pedagogía Universitaria"
El proyecto académico de la universidad. Los modelos de universidad a fines del siglo XX y comienzos del XXI. Los sistemas nacionales y el contexto internacional. La legislación universitaria argentina y el Estatuto Universitario de la UBA. Los problemas pedagógicos de la educación superior argentina. La especificidad de las cuestiones académicas y su interdependencia mutua: docencia, investigación,

extensión y transferencia. Disciplinas y profesiones. El curriculum universitario de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA.
El proceso de diseño curricular en el caso de las carreras de la Facultad de Derecho: el formato curricular, la adecuación, la pertinencia, la calidad y la dinámica de la oferta académica. Análisis de las asignaturas en el plan de estudios. Los problemas para la instalación de innovaciones curriculares. El lugar de teoría y de práctica en la formación de profesionales y sus relaciones en virtud del plan de estudios.
2) "Didáctica General"
La programación de la enseñanza: elaboración del programa de un curso. Unidades didácticas. Tipos de unidades. Selección de contenidos. Secuenciación de contenidos y de actividades. Distribución de tiempos.
Enfoques de enseñanza. Fases de la enseñanza: pre-activa, interactiva y posactiva.
Enseñanza y evaluación. Los principios de la evaluación de los aprendizajes. Los principales enfoques teóricos de la evaluación de los aprendizajes. Las modalidades de la evaluación y su relación con los propósitos de la enseñanza y del aprendizaje.
Requisitos básicos de los programas y los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación. Escalas de calificación y regímenes de promoción. Análisis e interpretación de resultados.
3) "Didáctica Especial de la Disciplina"
3.1.) Didáctica del Derecho
Análisis de las asignaturas del plan de estudios de Abogacía: impacto de la formación general en filosofía, historia, sociología y economía para fortalecer la perspectiva del Derecho. La promoción de la integración de contenidos en cada asignatura a partir del conocimiento del diseño curricular de la carrera de Abogacía.
Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza del derecho. La comparación de sistemas jurídicos como criterio para enseñar derecho en perspectiva internacional. El análisis de casos; la utilización de los problemas como criterio para enseñar Derecho. Aprendizaje basado en problemas. Análisis de fallos jurídicos. La simulación como estrategia para enseñar derecho público y derecho privado. La enseñanza de la mediación: criterios y aspectos involucrados.
Laboratorio de casos reales y aplicación en la formación para la práctica profesional.
La argumentación y el lugar de la lógica de la investigación en la enseñanza del derecho. La investigación sobre la propia práctica docente en la enseñanza del Derecho.
La evaluación de los aprendizajes y de la calidad de la docencia: la evaluación según el proyecto curricular de la carrera de Abogacía de la UBA. El diseño de un programa de evaluación acorde con los contenidos de cada área del derecho y de las asignaturas y cursos que las enseñan.
3.2) Didáctica para la carrera de Traductorado Público
Análisis de las asignaturas del plan de estudios de la carrera: impacto de la formación general en lengua materna y su vinculación con la lengua extranjera; impacto de la formación en derecho sobre los propósitos y el perfil del graduado de la carrera. La promoción de la integración de contenidos en cada asignatura a partir del conocimiento del diseño curricular de la carrera.
Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de la traducción pública y de la interpretación. La simulación como estrategia para enseñar traducción pública e interpretación.
Laboratorio de casos reales y aplicación en la formación para la práctica profesional.
La investigación sobre la propia práctica docente en la enseñanza de la carrera.
La evaluación de los aprendizajes y de la calidad de la docencia: la evaluación según el proyecto curricular de la carrera. El diseño de un programa de evaluación acorde con los contenidos de cada orientación y especialidad de la carrera y de los cursos que las enseñan.
4) "Práctica de la Enseñanza"
Los procesos de reflexión sobre la práctica docente aplicados a la enseñanza del Derecho y de las otras carreras de grado de la Facultad. Aproximaciones al análisis de las clases desde diferentes abordajes: el contexto institucional, las conformaciones grupales, la comunicación y la negociación de significados.
El auxiliar docente de derecho como planificador, enseñante y evaluador. Las configuraciones didácticas. La buena enseñanza del derecho.
La observación: registro y notas en el trabajo de campo. Análisis de lo observado. La entrevista anterior y posterior a la observación de clases.
La programación y evaluación de la clase: selección de contenidos, elaboración de propósitos y objetivos, selección de estrategias de enseñanza, elaboración de actividades, criterios de evaluación en virtud de la asignatura en la que se realizará la práctica pedagógica. La docencia en las instancias de formación para la práctica profesional.
Análisis y reflexión acerca de las prácticas de enseñanza. Práctica reflexiva e implicación crítica.

---

[1] Manifiesto Liminar, Reforma Universitaria de 1918
[2] Arturo Sampay, Constitucionalista argentino
[3] A continuación detallamos algunos ejemplos de los cambios que ha sufrido nuestro plan de estudios a lo largo de la historia. Fuente: "Autoevaluación Académico- Institucional de la FCJS de la UNLP - 2007-2010" Publicado en www.jursoc.unlp.edu.ar
"otra modificación operará en el Plan, al eliminarse las materias propias del Derecho Comparado, pasando a ocupar aquellos lugares ramas del derecho privado nacional en el año 1919, y en este mismo año se elimina la carrera de Doctorado de la Facultad", (Año 1919 / Presidencia de la Nación Argentina a cargo de Hipólito Yrigoyen)
"el Plan que se aprobara en el año 1922 será derogado en el año 1929, tras aprobarse un nuevo Plan en el que se reemplazan ciertas asignaturas del anterior y se incorporarán nuevas, conforme al desarrollo del país y a las nuevas necesidades de la sociedad de la época y la formación de profesionales"; "se agregan materias como: Finanzas, Régimen Jurídico de las Comunicaciones"
(Año 1929, Presidencia de la Nación Argentina a cargo de Hipólito Yrigoyen)
"El año 1949 vislumbrará la incorporación de una nueva asignatura en el plan vigente, tras la introducción de lamateria *Legislación Aérea"*
*"*en el año 1953 se modifica la estructura del plan de estudios, al incorporarse un año más a la carrera de derecho y nuevas materias, pasando a conformar el mismo un total de veintinueve asignaturas"; se agregan materias como: Derecho Político, Derecho Internacional Público, Derecho Social (del Trabajo y de la Previsión Social), Derecho Industrial" (Presidencia de la Nación a cargo de Juan Domingo Perón)
"el mismo será modificado en el año 1958 al suprimirse la Asignatura *Derecho Industrial;* en 1960 se desdobla la materia Derecho Administravo en Derecho Administravo I y Derecho Administravo II. En 1963 también se desglosa la asignatura Derecho Agrario y Minería en Derecho Agrario y Derecho de la Minería y la Energía.

Asimismo, en el año 1964 comienza a operar una nueva modalidad para los cursos, al establecerse el sistema de asignaturas *optativas,* y en el año 1967 se suprime la materia *Derecho Político* del Plan aprobado en el año 1953"
(Presidencia de Facto de Pedro Aramburu 1955-58 / Presidencia de Facto de Juan Carlos Onganía)
"En el año 1974 se incorpora al Plan de Estudios una nueva asignatura denominada *Curso de Realidad Nacional* como materia obligatoria para el ingreso a la Carrera, y en el año 1975 se incorpora también para el ingreso, la materia denominada *Tríptico Nacional,* que constaba de la enseñanza y aprendizaje del idioma nacional, historia argentina y geografía argentina. En el año 1975 por Resolución del 18 de agosto, las mismas pasarán a formar parte del Plan de Estudios como materias de primer año y será necesario aprobarlas para poder rendir las de segundo año, también en ese mismo año se reincorpora la asignatura *Derecho Político* en el Segundo año de la carrera, y por Resolución del 28 de agosto se incorpora la asignatura *Derecho Internacional Público* como materia obligatoria de quinto Año"
(Presidencia de la Nación a cargo de Juan Domingo Perón)
[4] Datos extraídos del documento "Autoevaluación" publicado en la página de la facultad (pág. 35 y stes.)
"Como se desprende del total de los encuestados, el 57% ha manifestado que ha cursado alguna Especialización en Docencia Universitaria, en tanto que el 35% negaron rotundamente estudios en esta materia. En relación a aquellos que si han realizado alguna especialización en esta temática, solo el 41% la ha culminado, en tanto que el 18% se ha manifestado por la negativa. Lamentablemente el 41% se abstuvo de responder esta pregunta"
"En relación a las actividades de investigación científica llevadas adelante por el plantel docente de la FCJyS, el 41% ha realizado o realiza actualmente investigaciones, mientras que el 48% no ha realizado ni tampoco las lleva adelante en la actualidad. De aquellos 41% que son investigadores, solo el 28% se ha desempeñado o lo hace actualmente en el ámbito de la UNLP; el 4% las realiza o las ha realizado en el ámbito del CONICET y solo el 1% en el ámbito de la CIC, mientras que el 7% lo han sido o lo son de otras instituciones, tanto públicas -como la propia Facultad- como privadas. Respecto a la categorización, del total encuestado solo el 18% del plantel se encuentra categorizado ante la CONEAU, mientras que el 25% no lo está."
"Tal como se observa del plantel docente de la FCJyS encuestado, solo el 34% realiza o ha realizado actividades de Extensión, mientras que más de la mitad no las ha realizado ni las realiza, representando esta categoría el 52%.
Desde otra perspectiva solo el 3% ha ejercido o ejerce cargos de Gestión Universitaria, en tanto que el 57% no lo ha hecho nunca. Respecto al ejercicio profesional, además de la docencia en la Facultad, el 86% de los profesores realiza otras actividades laborales -tanto en el ámbito público como en el privado-, mientras que solo el 8% de los encuestados solo se dedica a la docencia universitaria.
De lo anteriormente expuesto se desprende que el perfil docente de los profesores que se desempeñan en la Facultad, son abogados de edad media, mayoritariamente hombres que residen en la ciudad de La Plata y que están casados. Asimismo, en relación a la formación profesional la mayoría solo son abogados, y han realizado actividades de postgrado pero no las han concluido, lo mismo sucede con los cursos o especializaciones en Docencia Universitaria. La mayoría de ellos han comenzado sus estudios luego de graduarse a partir del año 2000, y casi no realizan actividades de postgrado en la actualidad."
"En relación a las actividades de Investigación muy pocos las llevan adelante, y los que lo hacen pertenecen mayormente a los programas de la UNLP. Muy pocos de ellos se encuentran categorizados, pero sin embargo han publicado trabajos de su autoría, al menos uno en el período marzo 2009/2010.
El perfil docente que se desprende de la encuesta, muestra que casi no se realizan actividades de extensión universitaria, ni ocupan ni han ocupado cargos de gestión universitaria, pero ejercen la profesión tanto en ámbitos privados como públicos."
[5] Datos extraídos del documento "Autoevaluación" publicado en la página de la facultad (pág. 60)
"De igual modo, es de destacarse que la relación existente entre cantidad de alumnos y planta docente no resulta satisfactoria. Será necesario incrementar la cantidad de cargos de profesores adjuntos y titulares en vistas a las modificaciones previstas respecto del plan de estudios y régimen de enseñanza"
[6] Es reiterado el reclamo de situar a la materia "Derecho Constitucional" como asignatura correlativa de las correspondientes al derecho de fondo (Civil, Penal, etc); la necesidad que las materias que comprenden al derecho de forma o procesal se cursen o evalúen con posterioridad a la incorporación de la legislación de fondo (que aunque sea Derecho Civil II sea materia condicionante para poder cursar o rendir Derecho Procesal II); que por su contenido económico, Derecho Comercial II tenga como correlativa a Economía Política.
Otras cuestiones que habría que rever es la extensión de materias como Derecho Civil V y Derecho Social, cuyo programa resulta prácticamente imposible de abordar en el tiempo de cursada, con lo cual quizás resulte necesario pensar en desdoblarlas.
En asignaturas como Derecho Internacional Público, Derecho Público Provincial y Municipal y Economía Política, es común encontrarse con estudiantes de 2º a 5º año, habría que detenerse a analizar de qué manera se puede solucionar esta circunstancia, para que ni los docentes se vean obligados a nivelar para "abajo" ni que estudiantes que no están avanzados en la carrera deban responder a requerimientos académicos para los cuales no están preparados.
[7] Nos parece relevante destacar la iniciativa que en la materia se adoptó a través de una resolución del año 2009: "A esos fines, se ha aprobado la Res. N°356/09 ref. por Res. N° 306/10 (Expte N° 400-1084/09) que establece las pautas para reformar los Programas de las asignaturas que contiene el actual plan de estudios. A esos efectos, en los nuevos programas que se aprueben a la luz de aquella resolución deberán preverse actividades de investigación y de extensión a realizarse en el marco de las materias de que se traten11. Ello con el objeto de formar a los alumnos, no solo desde el ámbito teórico-practico, sino también acercarlos a la investigación científica y a las actividades de extensión en pos de transferir sus conocimientos en la práctica a la comunidad. Lo anterior, también redobla el esfuerzo del plantel docente en adquirir nuevas habilidades y competencias para cubrir el objetivo de la mentada norma"
(Datos extraídos del documento "Autoevaluación" publicado en la página de la facultad, pág. 30)
[8] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Sur
"Ciclos temáticos: El Lenguaje y sus usos. El discurso argumentativo: superestructuras. La Argumentación: perspectivas de estudio. Argumentación y enunciación. Los implícitos en la Argumentación"
[9] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"Latinoamérica y su complejidad: análisis político, social, económico y cultural. Su devenir histórico como herramienta de análisis. El aporte cultural indígena, colo-nial e independiente en la conformación de la Latinoamérica contemporánea. América Latina y su inserción en el mundo del Siglo XX: los conflictos

políticos. Democracia. Autoritarismo. El derecho en la evolución de las sociedades lati-noamericanas, problemas que enfrenta su vigencia. Latinoamérica y el mundo. Procesos de integración regional."
[10] Ver Programas del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la UBA
"Derechos Humanos: evolución histórica y reconocimiento internacional. Fundamento y principios básicos. Los Derechos Humanos en la Constitucional Nacional Argentina. Los derechos de I, II, III y IV generación. Instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Reconocimiento internacional de los Derechos Humanos. Sistemas de carácter internacional de protección. Mecanismos de control. Reconocimiento regional de los Derechos Humanos.
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la perspectiva del derecho argentino de fuente interna e internacional. Identificación de los criterios de clasificación de los derechos humanos. Análisis crítico de las clasificaciones.
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la perspectiva del derecho argentino de fuente interna e internacional. Estructura de los derechos: sujeto"
[11] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Conflicto. Formas tradicionales e aproximación al conflicto. Métodos alternativos. Negociación. Mediación Pública y privada, La figura del mediador y su reconocimiento legislativo"
[12] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"La investigación científica. El proceso, el diseño y el proyecto de investigación. Introducción a las fases del proceso de investigación. Enunciado de problemas. Conceptos metodológicos básicos en investigación. Principales métodos y técnicas de construcción del dato. Técnicas cuantitativas y cualitativas. El procesamiento de los datos. Análisis e interpretación de la información. Problemas de interpretación de resultados. La investigación jurídica. Aplicación de diferentes estrategias de investigación en el campo especifico del Derecho"
[13] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"A partir de los fallos de los órganos jurisdiccionales de las diferentes ramas del Derecho, los estudiantes:
- analizarán la teoría de la argumentación y de las decisiones.
- interpretarán los diversos repertorios de la doctrina legal"
[14] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"La palabra. El lenguaje. Los signos. El intérprete. El rito judicial: propedéutica. La institución. Lenguaje-Discurso Institucional. La documentación judicial: rito y norma. Lectura gramatical de una sentencia. La construcción del lenguaje. El derecho como sistema comunicativo. Niveles de lenguaje jurídico. El uso del lenguaje judicial."
[15] Ver Programa de la Materia "Derecho de la Comunicación" de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
"**Unidad Temática Nº4**: El derecho de la comunicación y su protección en nuestra Norma Fundamental. Declaraciones. Principios. Derechos y Garantías. La reforma de la Constitución Nacional: sus nuevos derechos y garantías, análisis de sus aspectos más relevantes. El derecho a la comunicación y su protección en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad Temática Nº5: Libertad de expresión. La libertad de pensamiento como presupuesto de la libertad de expresión. Libertad de prensa. Libertad religiosa y de conciencia. La censura. Análisis de: la constitución nacional, las constituciones provinciales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Pacto de
San José de Costa Rica.
Unidad Temática Nº6: El derecho de rectificación o derecho de réplica o respuesta. Análisis de la constitución nacional, las constituciones provinciales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Pacto de San José de Costa Rica.
Unidad Temática Nº7: Delitos cometidos por medio de la prensa. Delito de opinión. Derecho al honor y a la intimidad. Delito de calumnias e injurias. Delitos en que intervengan menores. Régimen del Código Penal y Civil Argentino. Legislación complementaria. Análisis de la jurisprudencia.
Unidad Temática Nº8: Delitos contra la libertad de prensa. Delitos contra el orden público. Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Análisis del Código Penal Argentino.
Unidad Temática Nº9: La real malicia. Concepto. Análisis de la jurisprudencia de derecho comparado. Su recepción en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Unidad Temática Nº10: Propiedad intelectual e información periodística. El contenido ético de la información periodística. El secreto profesional. Plagio. Reproducción no autorizada. Análisis de la Constitución Nacional.
Unidad Temática Nº11: La comunicación y su protección internacional. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Pacto de San José de Costa Rica. Estudio de los derechos protegidos, órganos y competencia. Análisis de la Constitución Nacional.
Unidad Temática Nº12: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Medios masivos de comunicación social. Análisis de su regulación legal. La misión comunicacional del siglo XXI.
Unidad Temática Nº13: La función del comunicador social de emitir opinión. Autocensura. Estatuto del periodista profesional. Análisis de su relación laboral.
Unidad Temática Nº14: El derecho de la comunicación en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Análisis del Tratado de Asunción y los Protocolos de Brasilia, Ouro Preto y Olivos. El MERCOSUR y su proyección ante la Comunidad Económica Europea (CEE). El Informador: su intervención protagónica en esta área regional y su inserción en la comunidad internacional. El comunicador social en el siglo XXI."
[16] Ver Programa de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNLP
Temas sugeridos:
"Capítulo 10:
a) Sistemas de ejecución de obra.
b) Obra pública. Diferencias con obra privada. Sistema federal de gobierno.
c) Obras municipales.
d) Órganos administrativos y jurisdiccionales.
Capítulo 11:
Derecho de aguas.
a) Aguas públicas, privadas y comunes.

b) Normas constitucionales y legales. Código Provincial de aguas.
c) Protección de agua y atmósfera. Efluentes industriales. Tratamiento. Ley provincial 5965 y Decreto nº 2009/60 y modificatorias.
d) Protección del medio ambiente. Norma Constitucional Nacional. Legislación nacional: compuestos químicos; residuos peligrosos. Norma constitucional provincial. Legislación provincial: medio ambiente; residuos especiales; residuos patogénicos. Certificación aptitud ambiental. Clasificación de industrias.
Capítulo 12:
a) Promoción industrial. Ley Provincial nº 10.547 y Decreto nº 1904/90.
b) Seguridad e higiene del trabajo. Ley Nacional nº 19.587 y Decreto nº 351/79.
Capítulo 13:
a) Derechos de propiedad intelectual: patentes de invención; marcas de fábrica; propiedad científica, literaria y artística. Derecho informático.
b) Propiedad Industrial. Transferencia de tecnología"
[17] Ver Programa del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
"Regulación jurídica de los Recursos Naturales. Enumeración e identificación. La diversidad biológica faunística como recurso natural y cultural. El recurso agrario. El recurso forestal. El recurso minero. Contratos Especiales. Régimen Especial para los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Derecho Ambiental: antecedentes. Participación pública. Prevención. Derecho del Desarrollo Sustentable. El daño ambiental. Responsabilidad civil. Responsabilidad colectiva. Responsabilidad penal. Delitos ecológicos. Evaluación de impacto ambiental. Las medidas precautorias"
[18] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Genealogía de la Criminología. La escuela clásica y la revolución positiva. La sociedad de normalización. La teoría social clásica: Marxs, Durkheim, Weber. Criminalidad y desviación como hechos sociales. Primera crisis del paradigma etiológico. Las primeras sociologías de la desviación de la criminalidad. Las bases de un nuevo paradigma. La nueva criminología y la criminología crítica. Los futuros de la criminología."
[19] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"El Derecho de la Integración. La economía internacional y sus proyecciones culturales. La transnacionalización y la globalización. La Unión Europea. El Nafta. Las Etapas en el proceso de integración latinoamericana. El MERCOSUR. La UNASUR."
[20] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Educación y Derecho de la Educación. Relaciones del Derecho de la Educación con las distintas ramas del mundo jurídico. La Educación en la Constitución Nacional. Derecho de la Educación y derechos fundamentales. La educación en los tratados internacionales de Derechos Humanos. La educación superior: la regulación jurídica en la ley 24521. Los antecedentes de las leyes universitarias. El gobierno y la coordinación del sistema. La evaluación y la acreditación. El régimen de títulos. La educación superior. Subsistema de educación superior universitario. Debate en torno de las autonomías y autarquías de las Universidades Nacionales y la gratuidad y equidad de los estudios universitarios. Subsistema de educación superior no universitario: la formación docente para el nivel primario ara el nivel secundario. La formación técnica. Antecedentes normativos de la conformación del subsistema. La configuración actual. El régimen laboral docente en la educación pública y en la educación privada."
[21] En el Plan de Estudios de la Universidad Nacional del Sur los estudiantes deben optar por realizar uno entre los siguientes idiomas: portugués, inglés, italiano, francés, alemán
[22] Ver anexo
[23] Ver Plan de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario
"Residencia en el Instituto de la Minoridad: El Alumno patrocinará a un menor carenciado o en estado de abandono bajo la Supervisión del Instituto de la Minoridad y Familia de la Facultad de Derecho de integración interdisciplinaria.
Residencia en el Consultorio Jurídico: Esta residencia tiene como objetivo fundamental que los estudiantes, próximos a obtener su título, entren en contacto directo con el ejercicio profesional, evacuando consultas jurídicas de toda índole que permitan aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de su carrera. A través de a consulta tienen la posibilidad de entrar en contacto con el cliente, profesionales, contraparte, Tribunales y diversas oficinas de la administración pública, independientemente del estudio del caso en sí. Asimismo se presta un servicio a la comunidad"

PROYECTO N° 12: Noemí OLIVERA Profesora Adjunta de “Derecho Comercial I” propone la materia “Derecho Informático”
La Plata, 15 de agosto de 2011
Señor Vice-Decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abog. Vicente Santos Atela
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de proponer la inclusión de una asignatura denominada Derecho Informático en la nueva estructura curricular. A esos fines, me permito sugerir que esta propuesta sea girada a las comisiones de Derecho Público y de Derecho Privado por las razones que expongo en los párrafos que siguen.
En principio, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) ha posibilitado nuevas formas de interacción social, que han dado lugar a la llamada ‘Sociedad de la Información’. En ella las tecnologías disponibles no hacen más que incrementar la tendencia a la convergencia, proceso en el que la radio, la televisión, las telefonías fija y móvil e Internet tienden a fusionarse en una sola red digital. En este marco, debido a la internacionalidad connatural de la red, los problemas jurídicos a considerar involucran un enorme espectro que, como se verá, trasciende las competencias de las comisiones de Derecho Público y de Derecho Privado, ya que:
- Involucran, a un tiempo diferentes tradiciones legales: las del mundo occidental, Derecho Civil y Common Law, pero también, crecientemente, las de los derechos chino y japonés).
- Comprenden, asimismo, diversas ramas del derecho: Derecho Privado –forma y prueba de los actos jurídicos, contratos, propiedad intelectual-; Derecho Público –regulación de las comunicaciones, cibercrimen- e, incluso, Derechos Humanos -protección de datos, privacidad, libertad de expresión-).

- En la relación interpersonal, no sólo han aparecido nuevos medios para realizar acciones previstas –documento electrónico, firma digital-, sino también nuevas modalidades de interacción –redes sociales en Internet-.
- Nuevas conductas dañosas han impuesto, por su parte, el reconocimiento y tipificación de los llamados delitos informáticos.
- Más aún, las posibilidades derivadas de los medios tecnológicos impactan en el sistema jurídico-político, basado en la legalidad estatal, lo que ha llevado a considerar la cuestión en ámbitos internacionales –Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (ONU)- y regionales -Estrategia para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (CEPAL)-.

Como cabría esperar, el plan de estudios vigente no incluye, entre las materias obligatorias de su estructura curricular, esta temática eminentemente contemporánea y que, como lo muestra la evolución tecnológica de los últimos quince años, incide progresivamente en diversas facetas del quehacer jurídico. Sin embargo, desde el año 2008 los integrantes del GECSI venimos ofreciendo seminarios cursados sobre temas vinculados a la cuestión. La experiencia, ciertamente valiosa, ha mostrado los déficits en la formación de alumnos que, al día de hoy interactúan con las tecnologías informáticas, pero difícilmente imaginan el complejo entramado de relaciones jurídicas que hace posible su uso y menos aún las consecuencias derivables de las mismas en términos, por ejemplo, de responsabilidad civil. Ello aconseja generalizar a todo el alumnado la formación en este campo.

Teniendo en cuenta que la multiplicidad de áreas del derecho involucradas responde a una dinámica derivada de su unicidad conceptual y les son aplicables principios desarrollados al efecto –neutralidad tecnológica; equivalencia funcional; doble click; first come, first served-, resulta conveniente que ellas sean incluidas en el Plan de Estudio reformado bajo la forma de una asignatura. Incluir cada unidad en los programas de la materia más afín llevaría a presentarlas ante los alumnos de modo desarticulado e impondría a profesores que pueden no estar interesados en la cuestión el estudio no sólo de esos temas, sino de los aspectos tecnológicos involucrados.

La denominación aquí propuesta, 'Derecho Informático' es la que predomina en Iberoamérica entre quienes analizan los aspectos normativos del uso de la informática en el marco del paradigma vigente. Por otra parte, la disciplina se está perfilando en el carácter de rama autónoma ya que cuenta con objeto y principios propios reconocidos así como avances ciertos en lo referido a un método propio.

A fin de cumplimentar las exigencias del art.3 de la reglamentación en lo referido a la extensión, transcribo a continuación los objetivos y contenidos de la asignatura propuesta, así como algunos breves lineamientos en relación a la metodología avizorada para su desarrollo teniendo en cuenta las características de la temática y correlatividades previstas.

I.- OBJETIVOS

Objetivo general:

Que los estudiantes se familiaricen con la índole de los problemas resultantes de la vinculación entre el Derecho y la Informática y otras nuevas tecnologías y puedan proponer estrategias tendientes a su superación

Objetivos específicos:

- Brindar una visión sistemática del estado de la cuestión
- Presentar una metodología de análisis de la problemática que permite abordar las distintas cuestiones desde una perspectiva unívoca
- Ofrecer el instrumental mínimo necesario para abordar la profundización del conocimiento en alguna/s de las áreas específicas, sea con propósitos académicos o profesionales.

II.- CONTENIDOS

1.- La Informática

- Desarrollo tecnológico. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
- La informática, lo informático y la Sociedad de la Información
- Relación Informática-Derecho: Informática Jurídica; Derecho Informático; Inteligencia Artificial aplicada al Derecho.
- El sistema jurídico en la Sociedad de la Información: La lex informatica. Lex digitalis. Lex electrónica. La lex retialis.

2.- Internet

- Internet. Estructura tecnológica. Transmisión de información. Protocolos de transmisión de datos.
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Organización. Estructura.
- Asignación de Direcciones IP. Administración de Nombres de Dominio.
- Marco regulatorio de las telecomunicaciones. Los ISP. Régimen jurídico.

3.- El Derecho Informático

- Problemáticas jurídicas en entornos digitales: Propiedad, privacidad, derechos humanos y jurisdicción y competencia en contextos digitales.
- El Derecho Informático como necesidad.
- El Derecho Informático. Autonomía. Concepto y contenido. Objeto; Método; Principios.

4.- Documento electrónico. Firma digital

- El documento papel y la firma hológrafa. El pase al sistema virtual.
- Documento Electrónico y Firma Digital. El principio de la equivalencia funcional
- La firma electrónica y la firma digital.
- La criptografía. Sistemas simétricos y asimétricos. Funcionamiento de los distintos sistemas
- Autoridad certificante. Certificado digital.
- Modelos internacionales y legislación comparada. Ley Modelo de las Naciones Unidas. Directiva Europea
- La ley 25506 de Firma Digital de la República Argentina

5.- Correo electrónico

- Concepto. Caracteres.
- Naturaleza. Evolución jurisprudencial. Valor probatorio.
- Privacidad. Mail personal, institucional, laboral.
- Spam. Concepto. Protección contra el correo basura.

6.- Protección de datos personales

- Los datos personales. De conocimiento público y sensibles.
- Obtención y cesión de datos personales de terceros.
- Los datos personales la banca, el marketing y la salud.

- La ley 25326. Habeas data en Nación y en las Provincias.
7.- Derechos intelectuales. Propiedad intelectual
- La propiedad intelectual en entornos digitales.
- Derechos de autor. Nuevas formas de licenciamiento.
- Derechos del desarrollador de software. Derecho comparado. Patentamiento.
- Contratos informáticos.
- Conflictos entre Nombres de Dominio y Marcas.
8.- Comercio electrónico
- Aspectos generales. Noción. Características. Clasificación.
- Diferencias entre el comercio tradicional y el comercio electrónico.
- Contratos electrónicos internacionales. Contratos celebrados por Internet.
- Derecho aplicable al contrato electrónico internacional.
- Los derechos del consumidor y del usuario en el comercio electrónico.
- Defensa de la competencia y lealtad comercial en ámbitos deslocalizados.
- Los medios de pago en el comercio electrónico. La banca electrónica. El dinero electrónico.
- La solución de controversias en materia de comercio electrónico. Arbitraje.
9.- Teletrabajo
- Concepto. Problemáticas legales y prácticas.
- Principios.
- Modalidades.
- Régimen jurídico.
10.- Redes Sociales
- Concepto. Caracteres. Naturaleza.
- Las redes sociales de Internet. Tipología, clasificación. Su problemática a la luz del derecho.
- Los perfiles. Valor económico. La protección de los datos personales en las redes.
- Usos legítimos e ilícitos de las redes sociales en Internet.
- Twitter.
11.- Responsabilidad civil en entornos digitales
- El daño. La antijuridicidad. El nexo causal. El factor de atribución.
- Los sujetos.
- Responsabilidad por los contenidos.
- Casos específicos de responsabilidad civil en Internet: Responsabilidad de intermediarios; de las certificadoras; en proyectos tecnológicos; responsabilidad civil por ilícitos penales.
12.- Gobierno electrónico
- Concepto de Gobierno Electrónico, Administración Electrónica y Democracia Electrónica.
- Estadíos del e-gov. Relaciones entre los sujetos en el e-gov.
- Portales gubernamentales y plataformas tecnológicas.
- Compras gubernamentales.
- Administración tributaria. La factura electrónica.
- El Defensor del Pueblo Electrónico.
- Voto electrónico y voto digital.
13.- Delitos informáticos
- TICs y delito. La delincuencia no convencional
- La categoría “delitos informáticos”
- Modelos legislativos comparados para el tratamiento de la delincuencia informática.
- Casos problema: a) Ciberocupación (Cybersquatting); b) Spamming; c) Captación ilegal y difusión de datos, imágenes y sonidos (Phishing); d) Posesión simple de material pornográfico infantil; e) Responsabilidad penal de los proveedores; f) Responsabilidad penal de las personas jurídicas; g) Validez espacial de la ley penal; h) Cooperación judicial y policial
- Convenio de Budapest.

14.- Pericias informáticas
- La actividad pericial. La prueba pericial informática. Admisibilidad y relevancia de la prueba. Cadena de custodia.
- Peritajes de informática forense. Evidencia digital. Metodología de informática forense. Buenas prácticas para el secuestro de tecnología informática. Adquisición de evidencia digital. Protocolo de actuación.
- Peritajes informáticos. Casos, puntos de pericia y conocimientos aplicados. Técnicas de investigación forense.

III.- METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta que, más allá de la unicidad de la problemática, las unidades temáticas tienen características distintivas muy marcadas, se considera adecuado que el curso se desarrolle proponiendo, discutiendo y evaluando cada una de ellas. De este modo, cada unidad se considerará a lo largo de una semana, concluyendo con la realización de un trabajo práctico tendiente a poner en práctica los conocimientos adquiridos.
La subsecuente evaluación general será propuesta por quienes asuman, en definitiva, la responsabilidad de la cátedra.

IV.- CORRELATIVIDAD
La apertura temática de las cuestiones inherentes a la asignatura aquí propuesta aconsejan que, en el sistema de correlatividades, sea ubicada no antes de haber superado los contratos del Derecho Privado y Derecho Penal. Evidentemente, sería ideal que los alumnos tuvieran alguna formación en Derecho Administrativo.

Dejo constancia de que en la elaboración de esta propuesta hemos trabajado quien firma y los Abogs. José María Lezcano y Ernesto Liceda, quienes vienen integrando el cuerpo docente del Seminario de Derecho Informático, desde sus inicios, además de ser becarios de investigación de la UNLP en temas de la especialidad, así como de que todos quedamos a disposición de los Consejeros Directivos y miembros de las Comisiones para ofrecer toda la información que aduna la propuesta, y que la brevedad impuesta en la reglamentación impide volcar en este documento.

Por todo lo expuesto, solicito tenga por presentada en tiempo y forma la propuesta de inclusión de la asignatura Derecho Informático en la nueva estructura curricular y oportunamente así se resuelva.
Saludo a usted con distinguida consideración.
Prof. Abog. Noemí L. Olivera

PROYECTO N° 16: Ricardo Dipascual graduado eleva algunas reflexiones acerca de la enseñanza del "Derecho Penal" y sugiere la incorporación en la enseñanza de la teoría general del derecho penal, materias como "Criminología", "Investigación Criminal", y "Medicina Legal"
PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS
La Plata, 22 de agosto de 2011
Al Titular del Vicedecanato de
la Facultad de Derecho de la U.N.L.P.
Su Despacho:

Antes de comenzar, me presento como Ricardo Dipascual, titular del D.N.I. nº 27.528.463, abogado egresado de la U.N.L.P., Especialista en Derecho Penal egresado de la Universidad Austral, con curso de Instructor Judicial aprobado por el Ministerio Público Bonaerense y actualmente cursando la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Austral.
I. INTRODUCCIÓN:
La intención del presente mail, es exponer mi opinión solo de forma "general", en el espacio institucional creado para el análisis, discusión, debate y formulación de propuestas de reforma al plan de estudio para la carrera de Abogacía.
El motivo de las dos propuestas que a continuación mencionaré, es buscar un debate y discusión sobre las mismas, para una posible reforma y actualización en la currícula de formación de los futuros abogados de mi querida U.N.L.P.
Luego de observar la resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP de mayo de 2011, he visto la creación de seis comisiones temáticas de trabajo, las cuales cada una tiene un ámbito de competencia de análisis.
La Comisión de Derecho Público discutirá acerca de la necesidad de revisar los contenidos y la metodología de enseñanza de diferentes materias, entre otras, de Derecho Penal I, sobre la que propondré una reforma. Asimismo, esta Comisión evaluará la posibilidad de revisar la justificación de incorporación de nuevas disciplinas.
Por otra parte, la Comisión de diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho trabajará en la necesidad de incluir nuevas disciplinas, como ser y entre otras, la Criminología.
En relación a la Criminología, propondré una posible incorporación.

II. PROPUESTAS:
Las siguientes propuestas, solo tienen por finalidad señalar posibles lineamientos generales en relación a futuras modificaciones de la carrera de Abogacía. Por ello, este esbozo, es solo una aproximación a los temas y no un análisis pormenorizado de los mismos. Tal profundización, deberá realizarse una vez aceptados éstos lineamientos.
Si dividimos las ramas del Derecho que se abocan al estudio de la acción humana de interés penal, podemos enumerar:
1) Derecho Penal Parte General: explica, entre otras cosas, cómo analizar una conducta dogmáticamente.
2) Derecho Penal Parte Especial: explica los elementos que exige cada tipo penal en particular.
3) Derecho Procesal Penal: explica, entre otras cosas, cómo investigar una conducta pasada, cómo imputársela a su autor y cómo producir contra el mismo el posterior juicio.
4) Investigación Criminal: da las herramientas para acreditar un hecho pasado. En ella se ubican la Criminalística, la Medicina Legal y la Criminología (ésta última estudia la causa de la conducta desviada y los modos de prevenirla). Parte de la Criminología servirá para la Investigación Criminal y parte para la Política Criminal.
5) Política Criminal: Analiza los métodos de prevenir el delito que estudia la criminología y tomas los que más le convenga para aplicarlas a una sociedad determinada.
Luego de la somera división realizada, puede determinarse que el punto 1 esta cubierto por la materia Derecho Penal I; el punto 2 por la materia Derecho Penal II; el punto III por la materia Derecho Procesal I; y los dos puntos siguientes no poseen aún enseñanza en materia alguna. Solo se ve algo de Criminología en Derecho Penal I.
Con esta pequeña introducción, es que haré dos propuestas.

A) REFORMA DE DERECHO PENAL I: Si se observa el programa de estudio existente de Derecho Penal I, sea de la Cátedra I o II, el mismo posee, a grandes rasgos, el siguiente esquema.
Bolilla 1: Criminología.
Bolilla 2: Historia del Derecho Penal
Bolilla 3: Ciencia del Derecho Penal.
Bolilla 4: Fuentes del Derecho Penal
Bolilla 5: Reglas de aplicación del Derecho Penal
Bolilla 6, 7, 8, 9 y 10: Teoría de la Pena y de la Medida de Seguridad
Bolilla 11: Hecho punible
Bolilla 12: Tipicidad
Bolilla 13: Acción
Bolilla 14: Antijuricidad
Bolilla 15: Imputabilidad
Bolilla 16: Culpabilidad
Bolilla 17: Autoría, Participación y Tentativa
Bolilla 18: Concursos
Bolilla 19: Criminología
La primera propuesta es introducir en el programa la corriente penal aplicable en la actualidad. Ella es la corriente Finalista. Si bien en algunas partes del programa se menciona, el mismo tiene un esquema con base en la corriente Causalista con algunos breves comentarios a la corriente Finalista.

La propuesta es que el programa tenga una base Finalista con breves comentarios a la ya abandonada (doctrinaria y jurisprudencialmente) corriente Causalista y con comentarios a posturas que asoman como innovadoras y pasibles de ser adoptadas en un tiempo no muy lejano. Por ejemplo la corriente Funcionalista. Asimismo, la base Finalista deberá estar acompañada por las actuales Teorías de Imputación Objetiva.
Así, los cambios deberán impactar, en su mayoría, en las bolillas 11 a 17, las cuales comprenden el estudio de la Teoría del Delito.
Solo a manera de ejemplo (pues ya mencioné que el esbozo es solo general, y una vez aceptado el mismo deben analizarse los puntos a incorporar de forma minuciosa) en las siguientes bolillas deberán tratarse:
Bolilla 11: La doctrina Finalista no habla de faz positiva y negativa del hecho punible y se considera a la teoría del delito como bipartita, dado a que se divide en injusto penal y culpabilidad.
Bolilla 12: Debe agregarse aquí el análisis de la tipicidad subjetiva (y no solo de la tipicidad objetiva), donde se ubican el dolo y la culpa. Aquí debe analizarse el error de tipo. Ya no se habla de error de hecho ni de derecho. También debe agregarse la imputación objetiva de comportamiento y es aquí donde debe analizarse la relación de causalidad y la imputación objetiva de resultado (no en la acción como surge del programa).
Bolilla 13: Acción. Hoy se habla de acción final.
Bolilla 14: Antijuricidad. Hoy se habla de conocer los elementos objetivos de de la causa de justificación.
Bolilla 15: Imputabilidad. Esta se considera dentro de la culpabilidad.
Bolilla 16: Culpabilidad. La misma se divide en imputabilidad, posibilidad de conocer la antijuricidad del acto y exigibilidad de otra conducta. Ya no se analiza aquí el dolo y la culpa. Aquí se analiza también el error de prohibición.
Bolilla 17: Autoría, Participación y Tentativa. Si bien se enseña bajo la teoría del dominio del hecho, hoy también se estudia bajo la teoría de las competencias por organización y competencia institucional.
Estos puntos, son solo ejemplos de las cuestiones que deben modificarse si se toma la decisión de adaptar el programa de estudio a la Teoría actualmente dominante en Argentina.
Respecto a las bolillas 1 a 10 y 18 y 19, si bien algunas podrían sufrir modificaciones de menor cuantía, tanto la 1 como la 19 pueden perfectamente ser incorporadas en otra materia, tal como se ve en el punto siguiente.
B) INCORPORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL: Ya sea porque la Comisión de Derecho Público contemple la posibilidad de incorporar el estudio de la Criminología como nueva disciplina o lo haga la Comisión de Diseño del perfil profesional, perfil curricular y enseñanza del derecho, tal como lo estipula la Resolución del Honorable Consejo Directivo, entiendo que el estudio de la criminología, por si sola, no alcanza para dar al alumno las bases mínimas que mañana necesitara en su rol de abogado en la práctica penal, sea estando dentro del Poder Judicial o fuera.
Estas cuestiones, que antes podían ser consideradas de posgrado, hoy necesitan ser inevitablemente consideradas de grado por su habitualidad. O por lo menos, como seminario alternativo.
La Criminología, por si sola, me dirá la causa por la cual una persona realiza una conducta ilícita y el modo de prevenirla. Ello, es lo que se ve en las bolillas 1 y 19 del programa de Derecho Penal I. O por lo menos la evolución de Criminología.
Si bien comparto la necesidad de apartarla del programa de Derecho Penal I, entiendo que la misma no fundamenta una materia aparte. Sí lo sería, si se encontrara inmersa en una materia que podríamos llamar Investigación Criminal, en la cual se podría estudiar la Criminalística, la Medicina Legal y la Criminología de forma conjunta.
La Criminalística, ayudaría al abogado, sea estando dentro del Poder Judicial o fuera del mismo, a saber qué herramientas existen para acreditar un hecho pasado, cómo deben utilizarse tales herramientas, ante qué hechos son viables, etc. Por su parte, y a modo de ejemplo, pueden enumerarse como ramas de la Criminalística: la Balística Forense, Papiloscopía, Análisis de Rastros, Fotografía, Mecánica, Accidentología, Documentología, Química, etc.
La Medicina Legal, enseñará que es la Tanatología Forense, el ADN, Toxicología, Manchas Biológicas, Histopatológicas, Psiquiatría Forense, etc.
La Criminología, nos dirá cuales son las causas por las cuales una persona comete un delito y los medios para combatirlas. A su vez, otro aporte de la Criminología a la Investigación Criminal es describir los posibles perfiles criminales existentes.
Como se observa, generar una materia sólo con la Criminología, en donde en su mayoría se estudian las Escuelas Criminológicas Clásicas, Positivas, Eclécticas, etc. sin otro contenido que ese, es a mi entender, perder la posibilidad de ampliar la currícula para el estudiante de abogacía que no muchas veces se da.
De ésta manera, la UNLP estaría contemplando a nivel de grado casi la totalidad de las ramas del Derecho Penal, dejando solo de lado la Política Criminal, materia que considero netamente de posgrado.
III. <u>RESUMEN</u>: En resumen, es mi opinión que debe modificarse el programa de Derecho Penal I incorporando al mismo la corriente Finalista adoptada actualmente en Argentina y debe incorporarse una nueva materia, que no solo contenga la Criminología, sino también la Criminalística y la Medicina Legal.
Espero que estas líneas sirvan de aporte para enriquecer el programa de estudios de la carrera de Abogacía de mi querida U.N.L.P, la cual ha sabido darme tanto sin pedirme nada a cambio.
Saludo muy atentamente, y a disposición de las autoridades, Ricardo Dipascual.

PROYECTO N° 28: Sebastián Justo COSOLA Profesor Adjunto de “Derecho Notarial y Registral” y otros, remite propuesta de creación de la materia “Etica de las Profesiones Jurídicas”
DENOMINACION DE LA MATERIA: “Ética en las Profesiones Jurídicas- Estudios sobre deontología”
La presente propuesta la realizamos como aporte al programa de debate, análisis y discusión del actual plan de estudios en la carrera de “procurador, abogado y escribano”, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y que se basa en la experiencia docente colectada desde el año 2.008 a partir del Seminario de grado “Etica de las Profesiones Jurídicas”.
Por ese entonces, cuando el grupo de trabajo decidió llevar adelante el citado seminario, intentamos dar respuesta a varias preguntas ¿Cuál es la formación ética profesional y humanística que se le brinda al estudiante universitario? ¿Se reflexiona sobre la ética de las profesiones jurídicas en el actual plan de estudios? ¿Es necesario generar espacios curriculares para la formación ética del futuro profesional?, ¿Tiene sentido hacer reflexionar al alumno acerca de la ética profesional?, en fin todos esos interrogantes nos animaron a realizar la propuesta del seminario.
Entendemos que el estudio de la ética o deontología de las profesiones jurídicas viene despertando gran interés, el que se encuentra proyectado tanto en el derecho interno como en el derecho comparado. No puede concebirse una sociedad despreocupada de los valores, ajena a los cambios de perspectivas y lo que es aun

más importante: una sociedad que no presente ni crea en su propia prospectiva, en su tan necesaria proyección.
El abogado tiene una misión esencial como actor social para el desarrollo de la paz, en cualquiera de sus coordenadas: como jueces, como fiscales, como abogados, como escribanos, como procuradores, como mediadores, en el ejercicio de la función pública legislativa y/o ejecutiva, como académicos, o como investigadores, siendo necesario generar espacios de formación y reflexión acerca del deber ontológico del ejercicio profesional según sea el lugar que decida ocupar.
Se trata de generar el conocimiento de la existencia de una ética individual, pero también que cuando alguien deja de ser uno, para conformar parte de un cuerpo colectivo, se pierde el carácter individual de la misma para sí ser una cuestión general, de todos en su conjunto. En este único sentido, la colegiación se alimentará de prestigio, y rumbeará su destino camino a la excelencia.
La propuesta de un espacio curricular en la carrera de abogacía de una Universidad Pública –como es la Universidad Nacional de La Plata- tiende a promover la formación de jóvenes íntegros –no sólo en el conocimiento y habilidades-, pero también lograr que éstos resulten ser moralmente intactos, intachables, incorruptibles. Solo así una Universidad cumple con su misión de formar y educar a los futuros profesionales.
OBJETIVOS GENERALES: Los objetivos generales de la disciplina tiende a promover un conocimiento reflexivo acerca de las consecuencias ética y la responsabilidad social que impone el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión vinculado al mundo jurídico (procurador o escribano). Para ello el alumno debe ser acompañado en el proceso de comprensión de los valores que implica la conciencia de sí, pero también en la conciencia respecto a la libertad de los otros.
La tematización del "ethos", el sentido de la ética aplicada y la deontología profesional, hace a una formación más integral, humanista y con compromiso social, de los futuros profesional, máxime cuando se trata de educar y formar dentro de una sociedad que se encuentra devaluada de los propios valores.
En tal sentido, resulta necesario que el estudiante universitario conozca, reflexiones, y adopte mediante procesos de racionalización-comprensión los valores de las profesiones jurídicas, que permitan proyectarse en el "deber ser" de la conducta del procurador, abogado, escribano y que se reflejará en las condiciones de la función que desempeñe: ejercicio profesional liberal, magistrado, fiscal, funcionario público, etc.
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Se considera que la materia debe ser ubicada en los últimos tramos de la carrera, cuando el alumno ya se encuentra formado en el conocimiento de la ciencia jurídica y además haya transitado materias sociales del nivel avanzado (como ser "Filosofía del Derecho" y "Sociología Jurídica").
Con ese sentido, se consideran materias correlativa previas necesarias tener aprobada las materias: Derecho Procesal II y Filosofía del Derecho, según el actual plan de estudios.
EN QUE OTRAS UNIVERSIDADES SE DICTA LA DISCIPLINA: La asignatura que se propone la podemos encontrar en los planes de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba (ubicada en el 5to. Semestre de la carrera, con correlativa previa "Filosofía del Derecho", con carga de 60 horas), Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ("Seminario de Formación Etica y Profesional", ubicada en el 10mo cuatrimestre, con carga horaria de 32 horas), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán (materia "Práctica Profesional II: Etica profesional aplicada", correlativas previas Derecho Procesal II, Derecho Societario y Cambiario, Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente, y Práctica Profesional I), Universidad de El Salvador (ubicada en el 3er. año de la carrera, con una carga de 4 horas semanales, correlativas previas "Teología" y "Filosofía del Derecho"), Universidad Austral (ubicada en el 1er. cuatrimestre del 5to. Año de la carrera, con una carga de 30 Hs.), Universidad del Este (ubicada en el 2da mitad del 2do. semestre del 4to. Año de la carrera).
CUERPO DOCENTE: A los efectos informativos y de su conocimiento, decimos que el cuerpo docente que ha dictado el seminario de grado "Etica de las Profesiones Jurídicas" está a cargo del Not. Sebastián Cosola, Abog. Maria Florencia Franchini, Abog. Marcelo Krikorian y Abog. Vicente Santos Atela.
A continuación adunamos el programa de estudios del seminario de grado que se dicta en ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el cual hemos adaptado a los fines de la presente propuesta, por cuanto como seminario de grado, en la actualidad, concluye con un trabajo de investigación final.
"ÉTICA DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS"
PROGRAMA DE ESTUDIO
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad Nacional de La Plata
María Florencia Franchini; Vicente Santos Atela; Sebastián Justo Cosola y Marcelo Krikorian

"…El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones; la gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar; los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas; los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos; el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá mas remedio que declararse en quiebra; nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión; la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla ni la policía la maldición de quienes no puedan comprarla; la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda con espalda; La Iglesia dictara un mandamiento que se le había olvidado a Dios: "Amaras la naturaleza de la que formar parte…"[25]

"La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este mundo chambón y j…., cada noche será vivida como si fuera la ultima y cada día como si fuera el primero"[26]
1) Introducción.
La Universidad cumple acabadamente con su cometido, si a través de la doble formación metodológica que ofrece –humana (ética) y profesional (académica)- logra insertar en el núcleo social a los noveles profesionales que sin dubitar puedan acompañar la ciencia haciendo culto a la ética, al honor, y a la verdad.
Hacia allí entonces, se teledirigen nuestros esfuerzos.

---

[25] Vide GALEANO, Eduardo, "Patas arriba-La escuela del mundo al Revés", Catálogos, Buenos Aires, primera edición, p. 341 y ss, 1.998. El ensayo se titula "Derecho al Delirio". Permítanme sugerir, muy humildemente, este otro: "Derecho a la Esperanza".
[26] Ibidem, p. 344.

2) Los objetivos generales y sus fundamentos
La materia en referencia tiene diversos objetivos que el cuerpo docente esta dispuesto a lograr. El principal de ellos, tiene estrictamente que ver con la formación de quienes a través de la vocación, y la educación de quienes a través de la oportunidad aspiran a la graduación y así, a ejercer profesiones jurídicas. Adviértase no sin la debida importancia que merece, que los futuros egresados aspirarán a ejercer las funciones de magistrado, de abogado o de escribano, tres funciones que guardan estricta relación con los principios de seguridad jurídica, libertad, paz, defensa, confianza, esperanza, cooperación, solidaridad, orden, todos pilares fundamentales del Estado de derecho.

En los últimos años, una pleyade de autores dedicados específicamente a este tema, han receptado inquietudes proponiendo soluciones para todos los juristas del país, fomentando de manera constante la educación de la ética aplicada como modo habitual y permanente de ejercer las ya mencionadas profesiones. Los colegios profesionales en general, tienen que buscar la excelencia profesional, y eso se logra a través del mejoramiento científico y técnico, de la mano de un comportamiento ético en mismo grado de crecimiento.
Uno de los objetivos generales que se persiguen es alcanzar, entre los actores de la Universidad, la debida conciencia de la importancia que reviste entre nosotros, la educación en valores éticos el consecuente compromiso de su aplicación posterior. Sin dudar, afirmamos que no habrá forma de lograr este objetivo sin la aplicación de las siguientes metodologías prácticas:
Convocar en reuniones permanentes a los actores universitarios (alumnos, docentes y no docentes o personal administrativo) para poder plantear la cuestión y así, oír atentamente las realidades con las cuales se enfrentan cada uno de ellos. Seguramente, aunque todos "convivan" en un lugar o espacio común, las visiones y perspectivas de futuro serán totalmente diferentes.
Alentar la realización de jornadas, encuentros, y otros eventos académicos, que permitan la participación de los miembros universitarios. Esto se puede llevar a cabo a través de la debida atención de los problemas habituales enfocando cada jornada en uno de los actores sociales, para que los otros puedan colaborar estudiando minuciosamente el caso particular.
Comprender que en una comunidad académica, no hay nadie mas importante que nadie, y que todos, directa o indirectamente, son indispensables para lograr una unidad académica de excelencia.
Programar un sistema de premios, al mejor alumno, al mejor profesor, al mejor desempeño administrativo, a la mejor autoridad. En un mundo en donde la noticia la lleva el astuto, debemos nuevamente creer en quien honradamente, cumple su tarea diaria, sin desviar sus objetivos propios, que como propios e individuales, tienen un fin determinado y programado.
Apostar a la debida publicidad en los medios, de cualquier naturaleza que estos sean. El mundo necesita de buenas noticias, y las que surjan de una comunidad académica que cumple con su rol, serán siempre buenas noticias. Adviértase que hablamos de publicidad, y no de propaganda. Una Universidad no debe convencer por la oferta educativa, sino simplemente por su contenido. Educar es construir de la mano, no competir en solitario.
Presentar un programa de becas, para que nunca se pierda de vista la formación académica, esencial en las Universidades. Que los mejores alumnos, bajo la tutoría de los mejores profesores, tengan la oportunidad de presentar proyectos de ética y desarrollo sustentable, sin tener que pensar que los apremian las necesidades básicas del día a día.
Propiciar el arribo de los mejores académicos, nacionales o extranjeros, que sean un ejemplo como investigadores, pero fundamentalmente como personas de bien. Que puedan coadyuvar a lograr la excelencia en los temas en estudio.
Lograr acuerdos con los entes nacionales, estaduales o municipales y con las empresas de carácter público o privado que persigan fundamentalmente, el bien común. Y que estos encuentros no sean solo para otorgar subsidios, sino para que se comprenda que solo entre todos podemos lograr un mundo mejor. De esta manera, se cumple con la función social universitaria.
A partir de estos considerandos, si es posible creer en una Universidad de prestigio. De esta manera, la sociedad que la contenga en su seno, acompañará fielmente los objetivos generales, creyendo que vale la pena tener esperanza.
3) El objetivo especifico.
La creación, dentro de la iniciativa de la Responsabilidad Social Universitaria de la Escuela de Derecho, de la conformación de un programa modelo de estudio que sirva de guía y oriente a todos los interpretes que conforman la Universidad hacia un modelo común de visión pedagógica.
Su realización y aprobación implicarán además la presentación pública, explicación de motivos, fundamentos, perspectivas y prospectivas a todos los actores que conforman la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
4) Aspecto Académico.
4.a) Mediante un enfoque dinámico y participativo el programa intentará introducir al alumno en el estudio de las nociones de ética, de sostenibilidad, de desarrollo sustentable, de capital social, para finalmente desde ese conocimiento general poder llegar a estudiar la ética aplicada o profesional. Para ello es indispensable que el programa en estudio contenga una parte general, que contendrá conceptos, nociones básicas, métodos, alcances y el desarrollo de una teoría ética general; y consecuentemente, una parte especial, donde se examinaran los deberes éticos fundamentales aplicados a la profesión del jurista, fundamentados desde la triple visión de la ética de primera, segunda y tercer categoría.
4.b)Ejes temáticos del programa de estudios
Fines de la Universidad.
Ética.
Derecho.
Ética y Derecho, semejanzas y diferencias.
Globalización.
Integración.
Capital Social.
Medio Ambiente –específicamente la Carta de Helsinki, 1.975-
Introducción a los conceptos morales.
Noción de desarrollo y de desarrollo sustentable.
Influencia de la economía en el derecho.
Técnicas de la responsabilidad social empresaria y los modos de evitar las falacias.
Deontología jurídica y sus partes fundamentales.

Los principios esenciales.
Codificación de la ética.
Deberes éticos fundamentales.
Etica de los intereses difusos o colectivos.
La constitución nacional.
La responsabilidad social y los métodos para hacerse cargo.
El sentido de la actividad PROFESIONAL
La Elección Moral
La norma injusta. La aplicación injusta de una norma justa.
Fidelidad al cliente y lealtad con los colegas
Normas deontológicas, procesales, civiles y penales aplicables
El cobro de honorarios y el acceso universal a la justicia.
El asesoramiento jurídico y el patrocinio letrado de empresas. Etica empresaria.
Los códigos de ética.
Deberes éticos del abogado
para con sus colegas
para con la administración de justicia
para con el colegio profesional y con el derecho
para con la sociedad
El abogado en relación de dependencia
Ética Pública.
Etica: principio de progresividad y no regresividad en el ejercicio de la función pública
Etica y administración pública
Etica y empleo público
Ética de la función judicial
Ética de la función notarial
5) Aspecto Profesional: El alumno deberá:
Integrar las nociones de ética, capital social, desarrollo, medio ambiente y sustentabilidad para poder luego aplicar realmente la teoría general de la ética aplicada o profesional.
Posicionar su responsabilidad en la categoría de ética de la tercera generación.
Interpretar los distintos fallos jurisprudenciales, el alcance de los mismos y la opinión judicial general en torno a los temas objeto de estudio.
Advertir de la necesidad o no de sistemas de control ético.
Conocer cuál es la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales en general, esto es, cual es el fundamento de la colegiación.
Comprender la labor de los Órganos consultivos de ética: razón de su reciente creación; fundamentos; labor y funciones.
6) Aspecto Socio-afectivo:
El alumno deberá comprometerse a:
Comprender y estudiar los desarrollos temáticos y luego, cumplir con los postulados esenciales asumiendo su rol activo en la sociedad.
7) INCIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:
Se busca asegurar la formación integral y humanística, a la vez que la profesional, introduciendo la noción del comportamiento como requisito ligado a la conciencia que determine la responsabilidad social de cada miembro en particular.
8) APRECIACIONES FINALES
De acuerdo a Lo que aquí se presenta, puede concluirse que si tuvieramos que resumir los aspectos más importantes de la Responsabilidad Social Universitaria, podríamos llegar a afirmar sin hesitar que no hay que dejar de tener en cuenta los siguientes puntos:
El impacto (los hay negativos, los hay positivos; por ello la necesidad de plantear de manera vertical los temas y no de manera horizontal)
La responsabilidad social –no hay mas ética sistémica y holística sino de compromiso y dialogo)
Los principales objetivos universitarios: la formación humana y profesional del alumno y la construcción del nuevo conocimiento a través de la investigación científica y ética.
El fin de la Universidad: no es la ayuda social sino la formación de los nuevos profesionales que se insertarán vaya a saber en que marco en la comunidad.
Es por ello que al presentar este programa de ética general, en vísperas a que la experiencia en el impacto ambiental nos permita crear un propio programa analítico, y por ello nos sentimos plenamente satisfechos. Se reconoce entonces una visión abierta, que remite a un esquema de la noción kantiana de responsabilidad. La medida de ello quizás será la construcción e integración de la noción de ética de tercera generación. Es que la noción de desarrollo no puede ir unida a la noción de éxito económico; las empresas que apuestan al desarrollo sustentable paradójicamente, son las que mayores daños causan al medio ambiente.
Hay mucho por hacer, y felizmente, hay tiempo de sobra para arremangarse las mangas. Quizás los métodos de enseñanza sean hoy arcaicos, porque al menos en las facultades de derecho sigue aplicándose –aunque en menor medida que antaño- el método de la clase magistral.
Acerca de la vida organizacional: advierto una des- unión total entre los administrativos, los docentes y las autoridades. Los alumnos son los que mejor se integran con las tres partes, pero siempre individualmente.
Acerca de la autor representación: la Universidad Nacional del Noroeste apunta a ser regional, esto es a formar profesionales que se dediquen a tareas típicas de la zona. Hasta hoy su proyección publicitaria es netamente científica y técnica.
La noción de ética de la tercera generación es nueva, o al menos así se me presenta. No he podido encontrar en libros antiguos esta visión integradora de conceptos tales como integración, globalización, desarrollo, PBI, tasas de desempleo, mortalidad, natalidad, canasta básica familiar, en fin. Evidentemente, el avance económico arrasa con las teorías tradicionales, como dice por allí el texto del curso “Aristóteles nunca hubiera tenido una noción de la ética de la tercer generación”.
Si así es, es bueno aplicar estos nuevos conocimientos para poder presentar a los futuros actores sociales un panorama real de los acontecimientos en la actualidad.

PROYECTO N° 35: José Orler Auxiliar Docente de “Introducción a la Sociología”, remite análisis y evaluación acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de abogacía

INVESTIGACION y PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN EL CAMPO DEL DERECHO.
Aportes para un diagnóstico y reflexión sobre sus perspectivas.
Autor: José Orler[27]

I.- Introducción
El presupuesto básico de que la producción de conocimiento debe constituir eje esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también integrar la batería de recursos formativos con que deben contar los docentes, se constituye hoy en eje de las preocupaciones centrales de las más avanzadas instituciones académicas del mundo.
La integración de la investigación a la enseñanza en las instituciones académicas, y particularmente en las Facultades de Derecho, aparece como elemento clave en la formación de los futuros operadores del derecho, especialmente a partir de enfoques constructivistas del proceso de enseñanza-aprendizaje que parten de conceptualizar novedosamente al mismo, entendiéndolo básicamente como una tarea de indagación.
En consonancia con ello, el objetivo de articular la *docencia* y la *investigación* en un proceso simbiótico que se retroalimente y vaya configurando un nuevo modo de entender los estudios superiores, se constituye en medular y su operacionalización en un desafío que debe asumirse.
La tradición académica que caracterizó el modelo de enseñanza del derecho en los claustros universitarios de nuestro país a lo largo de su historia, en que la producción de conocimiento no fue un eje jerarquizado, viene derivando en los últmos 20 años hacia una consolidación de la idea referida, en el sentido de entender a la investigación como actividad indispensable e inherente a las instituciones de educación superior, que tienen como misión fundamental "*…la promoción de la investigación científica….*"
Esta importancia de la articulación entre docencia e investigación incluso excede el campo de acción de las universidades para transformarse en una política estatal generalizada. La Ley de Educación Superior 24.521, formula como objetivos de la Educación Superior a) Formar científicos, Profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte; b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; c) Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación.
Por su parte, la Ley de Educación Nacional, fija como uno de los objetivos de la política educativa nacional "promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea". Y entre los objetivos de la política nacional de formación docente, establece el de "incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares."
El Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas, por su parte, así lo ha entendido. En su documento "Estándares para la autoevaluación de la gestión institucional y las funciones de la enseñanza-docencia, de investigación científica y de extensión universitaria de las Facultades de Derecho de las Universidades Publicas" afirma de manera terminante que las universidades que "*…reducen su actividad a la enseñanza y no producen conocimiento…*" no son tales: "*…utilizan esta denominación de manera ilegitima…*".
En el acápite "Estándares para la autoevaluación de la Investigación Científica" especifica: "La Facultad o Unidad Académica promueve y ejecuta las actividades de investigación como uno de los aspectos privilegiados de sus políticas institucionales" (Pto. 2); y que: "Las políticas institucionales de investigación que desarrolla la Unidad Académica están articuladas estrechamente con la formación y actualización de los docentes, con el perfeccionamiento de los graduados, y promueven la elevación de la calidad académica de las actividades de enseñanza de grado y posgrado…" (Pto. 4).
Esta jerarquización de las actividades de Investigación Científica constituye un modo de institucionalización del debate que desde hace algunas décadas se viene dando en torno a esta cuestión y de los estudios al respecto.

II.- Incorporación de la Investigación al proceso de enseñanza-aprendizaje?
La pregunta acerca de cómo implementar el deseado paradigma, deviene medular, pero se bifurca en otras múltiples: Qué experiencias/prácticas pueden revisarse al respecto?, qué evaluación critica puede hacerse de ellas?, cuáles son sus limitaciones y sus fortalezas?, qué modelos de enseñanza-aprendizaje ponen en juego?, qué relación docente-alumno importan?, qué presupuestos pedagógicos y didácticos conllevan?, qué formas de evaluación?. Por otra parte, qué relaciones con el contexto social e institucional y qué relaciones ciencia-técnica-sociedad suponen?, qué relación con las tradiciones cognitivas de la disciplina despliegan?, qué perfil de graduado contribuyen a formar?.
El problema de cómo se enseña a investigar atraviesa a todas las instituciones académicas y proyectos pedagógicos de enseñanza superior en Ciencias Sociales en nuestro país y Latinoamérica (Nino C., Zanoni E., Spolansky N., Cueto Rua J., Floria C., 1984; Bhomer Martin 2003; Ciuro Caldani Miguel Angel 2003; Stenhouse L. 1987; Eichelbaum de Babini A., 1991; Schuster F., Giarraca N., Aparicio S., Chiaramonte J., Sarlo B., 1995; Gibbons M. 1997; Kluger Viviana 2004; Wainerman C., Sautu R., 1998; Rojas Soriano R., 2000; Ruiz G. 2002; Cardinaux N., Clerico L., Molinari A., Ruiz G., Bianco C., Alvarez G., Starowlansky V., 2005; Cardinaux N., Gonzalez M, 2003; Santos, Boaventura de Sousa 2005; entre otros).
Las estrategias de abordaje conocidas, que históricamente se han seguido, transitan por "*…dos caminos que pueden ser compatibilizados…*"[28]: el primero es insertar al alumno en proyectos de investigación en carácter de becarios, aprendices o pasantes. El segundo, más específico, es crear un espacio curricular propio. En la tensión entre ambas alternativas se ubican las experiencias empíricas y los debates teóricos respecto de la cuestión, en la actualidad (Orler y Varela, 2008).
La primera vía de las enunciadas quizás abreve en aquella iniciática sentencia comtiana que corrió como un legado hasta nuestros días: "*…El método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las*

[27] Abogado. Docente e Investigador UNLP- UBA. Especialista en Educación Superior; Maestría en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales; Doctorando en Derecho.
[28] Nancy Cardinaux "La articulación docencia e investigación en el derecho", en "Metodología de la Investigación Científica en el Campo del Derecho", José Orler y Sebastián Varela, Edit. UNLP, 2008.

investigaciones en que se lo emplea ..." (Comte, 1926). En nuestro país, particularmente, desde las primeras experiencias llevadas adelante por Gino Germani al crear la carrera de Sociología en la UBA, ese ha sido el "modelo" implementado. La formación de investigadores se hace en la "*pedagogía del silencio*", como la denomina Bourdieu: "*....una parte muy importante del oficio intelectual se adquiere a través de modos totalmente prácticos; el espacio de la pedagogía del silencio, que da un lugar débil a la explicitación, a los temas transmitidos, es sin duda, cada vez más grande en una ciencia en la que los contenidos, los saberes, los modos de pensar y de actuar son menos explícitos, menos codificados...*" (Bourdieu y Wacquant, 1992).
Esa tradición parece imponerse en nuestras Facultades de Derecho. Concentra alrededor de un proyecto de investigación determinado a alumnos y docentes, siendo los cursos y seminarios de metodología de carácter complementario. Es el viejo aserto que sostiene que a investigar sólo se aprende investigando y contradice las potencialidades de cursos de metodología o seminarios de investigación que impostan esas actividades.
Sin embargo, las transformaciones que viene evidenciando la Universidad Argentina desde fines del siglo pasado, parecen obligar a una revisión de tal estrategia. Efectivamente, la masividad que ha adquirido la enseñanza universitaria, fundamentalmente a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983, pone en evidencia la escasez de grupos de investigación y de presupuesto para dar lugar a esas instancias de formación de investigadores. Los proyectos de investigación, pocos y escasos en recursos y financiamiento, no son suficientes para que los alumnos que nuestras Facultades de Derecho reciben cada año puedan integrarse efectivamente a los equipos de investigación.
La segunda vía, es lo que ha sucedido en algunas carreras y en particular en los estudios de postrado de derecho. El formato más empleado ha sido el de los seminarios de investigación o de metodología de la investigación.
El sistema tiene un mayor nivel de implementación. Comenzó con la oferta académica de posgrado, de la mano del requerimiento de producción de tesis y tesinas para aprobar Especializaciones, Maestrías y Doctorados, normado por CONEAU, y actualmente forma parte de la currícula de grado en algunas facultades, como la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires[29].
Pero esta alternativa, reconoce una dificultad operativa no menor en la conformación de los cuerpos docentes de las facultades de derecho. Éstos, mayoritariamente, no tienen experiencia alguna en investigación y tampoco una dedicación exclusiva a la tarea docente. Tales carencias, tornan al menos muy dificultosa, la enseñanza de contenidos y destrezas que no son propias de sus ejercicios profesionales y a las que tampoco podrían dedicar tiempo para capacitarse por cuanto su ocupación principal no es la docencia sino el ejercicio profesional.
Asimismo, muchas y diversas son las dificultades que no deben desconocerse y que pueden enumerarse al momento de la implementación. El diagnóstico efectuado por Fernández Lamarra (2008) en relación a las universidades en nuestro país cabe perfectamente para caracterizar la realidad de la investigación en las Facultades de Derecho. Enuncia la cuestión referida a la "*falta de articulación entre docencia e investigación*", enumerando además: problemas para definir políticas institucionales de investigación; fuertes limitaciones en la disponibilidad de recursos académicos (falta de dedicaciones) y de apoyo (falta de recursos materiales y financieros, etc.); insuficiente articulación entre diferentes unidades y proyectos de investigación; falta de consolidación de los grupos de investigación existentes e insuficiente acompañamiento para la formación de nuevos grupos; insuficiente formación en investigación de muchos docentes-investigadores; entre otros.
No obstante ello, actualmente parece ir imponiéndose una tendencia a la creación de estos espacios curriculares en los estudios de grado, en las distintas Facultades y Carreras de las Facultades de Derecho de nuestro país y del exterior. Los mismos, con diversas características, jerarquías y requerimientos, asumen la tarea de formación en la producción de conocimiento.

III.- A modo de conclusión.
De lo expuesto surgen algunos interrogantes que no queremos dejar de compartir: Es posible el desarrollo de una disciplina o área del conocimiento que prescinda de la producción de conocimiento validado científicamente?, asimismo, podemos seguir llevando adelante proyectos exclusivamente teóricos?, resulta adecuado articular toda una serie de recursos humanos, económicos, institucionales, etc. en el hábito de una producción sin sustento en la investigación científica?, hay todavía, a esta altura de las circunstancias y del desarrollo del conocimiento en las sociedades contemporáneas, margen para aproximarse a "lo jurídico" de un modo meramente teórico, ensayístico y especulativo?, podemos seguir transitando por los caminos del Derecho y su producción académica, solo desde la cómoda, elegante y autista doctrina?.
Las definiciones institucionales y la propia tradición histórica de nuestra Universidad de La Plata desde su fundación, centran la razón de su existencia en la producción de conocimiento, y entendemos que debe asumirse esta esencia en el renovado emprendimiento de modificar el Plan de Estudios de nuestra facultad.
Ello a partir del presupuesto teórico de que la respuesta a la pregunta por el Derecho necesariamente habrá de ser polifónica y plural, porque pensamos en una construcción teórica de nuestro objeto de estudio que debe necesariamente incorporar la multiplicidad y la diferencia a su acervo.
El rescate de los "puntos de vista" habrá de ir situando explícitamente a la ciencia de "lo jurídico" en el ámbito de las luchas, intereses y contradicciones que configuran su campo, y que, al decir de Bordieu[30], dinamizan las estrategias de "sucesión" y "subversión" que en su seno se despliegan, y van socavando indeseables "acuerdos forzados".
Las prácticas académicas en el campo del Derecho —la docencia y la investigación— sus modos de articulación y sus tradiciones institucionales, requieren de discusión crítica, configurando tópicos que deben ser identificados, expuestos y revisados, sin dejar de advertir el constitutivo carácter que asume el campo disciplinar del Derecho, con su conformación multiparadigmática, su difusa y reñida delimitación ontológica, sus divergencias teóricas y epistemológicas, y sus particulares prácticas académicas y profesionales.
Un proyecto curricular de enseñanza del derecho no puede ser ajeno a todas estas definiciones. Se deben tomar decisiones que excedan la determinación de los contenidos informativos, las habilidades y las estrategias docentes y de enseñanza, debiendo promover, además, sólidos vínculos entre las funciones de

---

[29] La asignatura "*Metodología de la Investigación*" forma parte del Ciclo Profesional Orientado en el actual Plan de Estudios de la carrera de Abogacía. También se incluyó la asignatura "*Epistemología y Metodología de la Investigación*" en el Plan de Estudio del Profesorado en Ciencias Jurídicas de esa Facultad de la UBA creado en 2005.

[30] Pierre Bourdieu, "*Los usos sociales de la ciencias*", Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 2003.

docencia e investigación, consolidando formatos del proceso de enseñanza-aprendizaje con sentido crítico, en los que la producción de conocimiento aporte un perfil caracterizador.

_____

La Plata, primavera 2011.-

PROYECTO N° 39: Cecilia López Puertas remite propuesta de reforma del plan de estudios considerando la necesidad de incorporar nuevos espacios curriculares, actualización de todos los programas de las materias actuales, régimen de enseñanza y prácticas profesionales

La Plata, Septiembre de 2011.
APORTES PARA PENSAR LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ABOGACIA DE LA UNLP.
Como graduados y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, celebramos que esta comunidad académica se encuentre discutiendo la reforma al plan de estudios vigente. Consideramos que ello resulta sumamente necesario dado que la estructura de nuestra currícula actual data de 1953 (con algunas modificaciones insustanciales posteriores), habiendo sido pensada para un contexto socio histórico sumamente distinto del presente, sobre la base de ideas y prácticas que se impone revisar desde una perspectiva crítica, no para desechar todo el conocimiento y la experiencia ganados a lo largo de nuestra historia, sino por el contrario, para enriquecer esa trayectoria con el aporte de nuevas miradas que tiendan a la generación de profesionales del derecho fuertemente comprometidos con las necesidades populares.
Entendemos que este es el sentido que debe darse al proceso de reforma, que bajo ningún modo debe supeditarse a exigencias extrañas a nuestra casa de estudios y por ende contrarias a la autonomía universitaria, como las vinculadas con el proceso de acreditación de la carrera ante la CONEAU que intentará abrirse.
En el sentido indicado, entendemos que el actual proceso de reforma debe aspirar a una modificación profunda del plan vigente, asentándose principalmente en los siguientes ejes:
CONCEPCIÓN DEL DERECHO:
En forma claramente predominante, la formación impartida en las aulas de nuestra Facultad asume un punto de vista dogmático-positivista, centrado en el estudio de la norma legal de manera aislada y descontextualizada, que tiende al aprendizaje memorístico y acrítico, desvinculando al derecho de su contenido ético, social y político. Se enseña a aplicar las normas de manera mecánica, de forma de ajustar los hechos a la norma, en lugar de buscar que el derecho sirva para dar soluciones justas a las distintas realidades.
Esta visión atraviesa toda la estructura de nuestro plan de estudios, hasta el punto de que las pocas materias que ofrecen perspectivas diferentes, en general son percibidas como ajenas a nuestra disciplina y "desubicadas" en la currícula. Más aún, el marcado influjo de esta escuela lleva a que los programas de gran cantidad de asignaturas, se construyan siguiendo casi al pie de la letra el método expositivo de las leyes, con la pretensión de abarcar la totalidad del plexo normativo involucrado, a despecho de cualquier consideración sobre la pertinencia de tal enfoque, la efectiva vigencia de muchos de los institutos estudiados y la utilidad de semejante intención, en un contexto normativo cada vez más complejo, que por otra parte el enorme desarrollo de las tecnologías de la información, permite consultar en forma casi permanente. Así, hasta la jurisprudencia, es decir, el derecho según la propia práctica tribunalicia, resulta relegada en las clases, en los programas y en el estudio del derecho que se realiza en nuestra Facultad.
Ante ello, se impone avanzar en una reforma integral, que sin desconocer la fundamental importancia de las normas en una disciplina como la nuestra, ofrezca las herramientas necesarias para contextualizarlas en la realidad humana, social, económica y política en que se insertan, incorporando también a la enseñanza del derecho, todas las prácticas jurídicas que innegablemente marcan sus contornos. A los efectos de contribuir con ese camino, sobre el final formulamos algunas propuestas.
PERFIL PROFESIONAL:
Probablemente como resultado del peso de tradiciones muy arraigadas en nuestra comunidad académica y profesional, el plan de estudios vigente, tal como es implementado en las aulas, se orienta de manera casi exclusiva a la formación de abogados litigantes, a pesar de que ello constituye sólo una de las alternativas de inserción laboral de los egresados.
De este modo, la Facultad no provee herramientas adecuadas para quienes deban o prefieran desempeñarse en otras funciones, que revisten una gran importancia para la sociedad, tales como las de asesores, consultores de agentes económicos y políticos (ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en asociaciones representativas, etc.), integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público, docentes o investigadores, entre otras. En este último sentido, la falta en la currícula de materias pedagógicas o de metodología de la investigación, representa una grave omisión que nos diferencia negativamente de otras carreras sociales.
Mientras tanto, el marcado sesgo hacia un tipo de profesional liberal habituado a plantear los conflictos individuales de sus clientes en los tribunales, conspira contra la posibilidad de dar una respuesta satisfactoria a las problemáticas de carácter colectivo en las que cada vez más se requiere la intervención de operadores jurídicos, pero con un abordaje distinto que muchas veces debe partir de una relación diferente con los sectores representados, que contemple la existencia de intereses heterogéneos y la articulación con políticas públicas, en el marco del llamado litigio estratégico.
Ante ello, deviene necesario que la reforma en curso amplíe el abanico de posibilidades ofrecidas a los estudiantes, desarrollando habilidades profesionales que actualmente no son tenidas en cuenta, a cuyos efectos, sobre el final, formulamos algunas propuestas.
CONTENIDOS CURRICULARES:
Estrechamente vinculada con las cuestiones antes señaladas, se observa la necesidad de introducir cambios profundos en los contenidos curriculares actuales, de modo tal que ellos reflejen la concepción del derecho postulada, a partir de un fuerte compromiso con las problemáticas de la sociedad y los intereses populares.
En efecto, en la actualidad prima en nuestro plan de estudios, un carácter esencialmente iusprivatista, caracterizado por un importante predominio de las materias de derecho privado por sobre las de derecho público, en el que se destaca asimismo la escasa cantidad de contenidos vinculados a las ciencias sociales y políticas, que permitan a los estudiantes contextualizar y tener herramientas para pensar los fenómenos sociales en los que la actividad del abogado se enmarca.
Además, en relación con las asignaturas que actualmente forman parte del diseño curricular, merece señalarse que muchas veces la existencia de diferentes cátedras, comisiones y profesores, no da cuenta de los ricos e intensos debates académicos que se producen en torno de las distintas disciplinas, o de la profundidad

de aquellos, resultando ausentes o marginales dentro de la Facultad, determinadas perspectivas de las instituciones jurídicas, que generalmente son las más críticas. Así se tiende a converger en una suerte de "pensamiento único", que vacía de contenido el principio de libertad de cátedra, en la medida que todas ellas suelen compartir una misma visión, siguiendo iguales autores -muchas veces "sacralizados"- y abrevando en idénticas escuelas. (Todo ello sin contar que de cualquier modo, debido al régimen de cursadas vigente, sobre el que más adelante haremos una referencia, en general los estudiantes acaban asistiendo no a las clases de los profesores que eligen, sino a las que el sistema de sorteo les permite).

Por otra parte, en coincidencia con lo que viene expresándose desde distintos ámbitos, compartimos la necesidad de introducir nuevas materias al elenco de asignaturas obligatorias de la carrera, cuestión que debe ser objeto de un debate en el que como miembros de la Facultad pretendemos participar. Sin perjuicio de lo expuesto, desde ya nos pronunciamos a favor de la inclusión de tres de ellas, largamente reclamadas por la comunidad académica, por las razones y con las salvedades que se formularán a continuación.

En primer lugar, hablamos de la incorporación como materia autónoma de "**Derechos Humanos**", pero destacamos que no puede agotarse en ello la introducción de contenidos vinculados con una cuestión de tanta importancia jurídica a nivel nacional e internacional, que incide directamente en todos los órdenes de la vida de nuestro pueblo, sino que además, resulta precisa la **revisión de los contenidos de todas las materias de la carrera, desde una perspectiva de derechos humanos**, ya que ésta comprende de modo integral las cuestiones estudiadas de modo particular en cada una de ellas. Así lo corrobora el hecho de que nuestro país haya suscripto numerosas convenciones internacionales en la materia, muchas de las cuales forman parte de nuestra Constitución Nacional, ostentando su misma jerarquía, motivo por el cual, dada además su enorme riqueza, sin dudas debe considerársela como un eje transversal en nuestra formación. Sólo por citar algunos ejemplos, recordamos que son derechos humanos, reconocidos como tales en los instrumentos respectivos, el derecho a la vivienda, cuya garantía debe procurarse cuando se enfrenta un desalojo en virtud de normas civiles y procesales; los derechos de la mujer, con la consiguiente condena a todas las formas de discriminación contra ella, lo que debe tenerse en cuenta para abordar la violencia de género en -por ejemplo- materia penal; el derecho a un trabajo digno, que actualmente se enfrenta a la problemática de la precarización laboral y que como tal, debe formar parte del estudio del derecho social; entre otros. En muchos de estas materias radican obligaciones internacionales concretas asumidas por el Estado, pero en general, las cuestiones planteadas no se encuentran incluidas en los programas actuales de las respectivas materias, en forma adecuada.

En segundo término, entendemos que resulta fundamental incluir en nuestro programa de estudios la materia "**Derecho Ambiental**" o "**Derecho del Ambiente**", con una perspectiva crítica, que sirva para cuestionar el modelo de producción capitalista, extractivo y contaminante, a partir de la tutela de los bienes colectivos, lo que implica una forma de concebir el derecho alejada de la tradicional.

Por último, pero no menos importante, consideramos que en la reforma del plan de estudios en discusión, no puede dejar de incorporarse la materia "**Derecho Social II**", ya que es por todos conocido que en un solo cuatrimestre, los profesores de "Derecho Social" no pueden abordar las múltiples cuestiones derivadas del derecho laboral individual y colectivo, sustancial y procesal, así como de la seguridad social. La importancia de esta inclusión radica también en que es muy común que los egresados deban asesorar o litigar en la materia, por la alta demanda que existe en razón de tratarse de cuestiones que afectan directamente a la población trabajadora, resultando llamativo el restringido lugar que ocupa actualmente en el plan de estudios.

En nuestra opinión, entonces, se impone considerar las cuestiones apuntadas en el actual proceso de reforma del plan de estudios, motivo por el cual más adelante puntualizaremos algunas propuestas atinentes.

FORMACIÓN PRÁCTICA.

En este punto, consideramos imprescindible que se refuerce la formación práctica de los estudiantes, a través de experiencias que en efecto permitan ir tomando contacto con los distintos aspectos de la realidad profesional, lo que en modo alguno puede ser suplido por "clases teóricas sobre la práctica", aún con docentes experimentados.

Por otra parte, no creemos conveniente que, como sucede en el esquema actual, las prácticas se limiten al rol del profesional liberal litigante, menos aún cuando hasta éste se muestra restringido, ya que sólo se plantea en relación al derecho procesal civil y al derecho procesal penal, descartando otras ramas jurídicas por las cuales los estudiantes pueden inclinarse.

Antes al contrario, parece apropiado que se ofrezcan al estudiante diferentes alternativas vinculadas con sus preferencias de cara al desarrollo de la profesión, en los distintos ámbitos en que ésta puede darse, aunque sin admitir la utilización de los estudiantes como mano de obra barata, ni que la tarea desarrollada carezca de relación con la carrera, o no derive en un aprendizaje por falta de acompañamiento, ni que termine sirviendo a intereses públicos o privados contrarios al proyecto que la Universidad como institución comprometida con el desarrollo pleno de la sociedad, debe perseguir.

Atento a lo señalado, sobre el final formularemos algunas propuestas.

RÉGIMEN DE CURSADAS.

Por último, quisiéramos señalar que en la medida que todos los estudiantes no tengan la posibilidad de cursar todos las materias de la carrera, estaremos lejos de lograr una Facultad mejor, como la que se persigue a través de la reforma en curso. Ello así, por cuanto la falta de cursadas, administrada a través de un sistema de sorteo, afecta los derechos más básicos de aquellos, al impedirles asistir a clase y ser evaluados por un docente durante un proceso educativo, lo que redunda en que muchas veces, las mesas de exámenes libres operen en nuestra Facultad como la regla, en lugar de como la excepción. Si bien esta es una cuestión que no hace a los contenidos sino a la forma, creemos que ambas resultan fundamentales en el desarrollo de la formación de los estudiantes. Por un lado creemos que el hecho de rendir exámenes libres de manera regular, sin que los estudiantes puedan evacuar dudas, ni compartir lecturas y debates con los docentes y sus compañeros, refuerza el carácter individualista de nuestras prácticas. Por otro lado, este tipo de examen deja un amplio margen para la arbitrariedad del docente, ya que en general, no se fijan pautas claras para el desarrollo del examen, tanto en lo relativo a los contenidos que se evaluarán como al desempeño esperado.

Sobre el final, explicitaremos nuestras propuestas.

Antes de ello, sin embargo, aclaramos que este documento sólo pretende ser un aporte, que desde ya no agota el alcance de la reforma, y que consideramos fundamental que todos los actores de la Facultad discutamos las cuestiones planteadas a propósito de esta convocatoria, participemos de las instancias de debate y generemos una propuesta de plan de estudios que pueda construir profesionales críticos que ejerzan el derecho como una herramienta que aporte a la resolución de los problemas centrales que nos plantea la realidad actual, poniendo nuestra disciplina al servicio de la transformación social.

PROPUESTAS
En virtud de lo hasta aquí expuesto, proponemos:
REFORMA MASIVA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS MATERIAS DE LA CARRERA en un plazo a establecerse, para adecuarlos a una visión del derecho que exceda la mera interpretación de las normas, contextualizando a éstas en su realidad, a partir de la incorporación de otros contenidos humanos, sociales y políticos. Asimismo, ante la imposibilidad e inutilidad de agotar en todos los casos el estudio de los plexos normativos involucrados en cada materia, se aconseja que la reforma se concentre en la redefinición de prioridades, según la importancia, vigencia y complejidad de los institutos comprendidos.
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO de la reforma propuesta en el punto anterior, que deberá ser guiada por profesionales de las ciencias de la educación, sin perjuicio de la participación de otros pertenecientes a otras ciencias, según corresponda.
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS en la reforma propuesta.
LIBERTAD DE CÁTEDRA REAL, con pluralidad de perspectivas entre los profesores, que deberá tenerse en cuenta al momento de los concursos docentes, y nuevas cátedras que permitan a los estudiantes elegir libremente la orientación que deseen dar a su formación.
INCORPORACIÓN DE "DERECHOS HUMANOS", "DERECHO DEL AMBIENTE" Y "DERECHO SOCIAL II" COMO MATERIAS OBLIGATORIAS
INCORPORACIÓN DE MATERIAS PEDAGÓGICAS Y DE METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN.
INCORPORACIÓN DE MÁS MATERIAS VINCULADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS.
DEBATE AMPLIO Y PARTICIPATIVO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS MATERIAS.
PRÁCTICAS PROFESIONALES REALES, CON ORIENTACIONES DIVERSAS SEGÚN LA ELECCIÓN DEL ESTUDIANTE.
NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN, CON MANTENIMENTO DE LOS EXISTENTES, QUE SIRVAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.
GARANTIZAR CURSADAS EN TODOS LOS CASOS.

PROYECTO N° 41: Homero Bibiloni Profesor Adjunto de la materia "Derecho Administrativo II", remite reflexiones acerca del proceso de reforma del plan de estudios, tendientes a discutir cuestiones vinculadas a la enseñanza del derecho, vinculación de la teoría con la realidad y praxis, la articulación de la enseñanza con las otras misiones de la Universidad (investigación y extensión)
REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS 2011-2012
Presentado por Homero M. Bibiloni[31]
He considerado para este aporte la experiencia y la referencia más completa compilada que es la "Autoevaluación Académico Institucional2007-2010".
I.- UNA VISION QUE SE COMPARTE[32]
Remito al Trabajo del Dr. Nieto que se anexa, el cual creo que es sencillamente brillante.
II.- ALGUNOS EJES CENTRALES PARA LA ARTICULACIÓN.
PARA LA POLEMICA: AUTISMO O AUTONOMIA[33]
Debemos defender la autonomía universitaria, pero muchas veces esta virtud del sistema lleva al aislamiento o al autismo con las necesidades y prioridades de la sociedad que son sustituidas por las propias del sistema universitario. Esto debe equilibrarse entre lo "**interno"** y el "**afuera"** que da sentido a la Universidad.

LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE DERECHO[34]/[35]
Podríamos afirmar sin equivocarnos, que en líneas generales, en lo que al suscripto refiere el Plan de Estudios no ha tenido variaciones sustanciales, lo cual denota una falta de ajuste del orden de los 40 años[36]. El mundo es muy diferente desde entonces, como lo es nuestro país y las realidades a las cuales las normas refieren.

EL POSITIVISMO SIN CONTEXTO Y LA INEXISTENCIA DE VALORES.
Nos hemos acostumbrado a un mundo construido en el paradigma kelseniano, olvidando no sólo valores y contextos sino que las normas son la concreción regulatoria de las ideologías de turno conforme procesos históricos y pese a que las externalidades han variado, el "adentro" permanece incólume.

---

[31] Docente en Derecho Administrativo (título)
Docente de Administrativo II Cat. 1. Adjunto Ordinario (por concurso revalidado)
Titular Interino Derecho Administrativo II Cat. l.
Docente en Postgrado de Derecho Administrativo y Ambiental.
Director de la Especialización en Derecho Ambiental.
Ex Secretario del Instituto Fiorini.
Ex Evaluador de Extensión de la Facultad.
Ex Consejero Académico por la mayoría del Claustro.
Los datos consignados son al sólo efecto de fundar desde donde se vierten las opiniones de la propuesta, sumado a prácticas de gestión nacional, provincial y municipal y en organismos ejecutores internacionales, como así también ejercicio profesional y como Conjuez.
[32]Nieto Alejandro: "La enseñanza Académica del Derecho". Lex Nova, julio/septiembre 2005.-
[33] Leyendo la Autoevaluación Punto 1.2. -pag. 28- se demuestra que lo allí planteado, que se comparte, no parece lograrse en la realidad.
[34] Deben mirarse los contenidos de los programas con la pertenencia del docente, esto es si es de Capital, Provincia o Interior, Esto predefine contenidos más allá de las necesidades de contexto. Ver Gráfico 1 y 2- pág. 35 y 36- de la Autoevaluación.
[35] Debe correlacionarse la relación de titulares con antigüedad en el cargo y con su territorialidad docente, porque el programa lo hace el titular, en términos generales, y lo condiciona a sus mayores conocimientos. En mi materia derecho administrativo nacional.
[36] Los cuadros 5 y 6 de la Autoevaluación denotan sólo la inclusión de materias político sociales y algún cambio en optativas.

EL METODO DEL RELATO Y DE LA AJENIDAD.
Gran parte de la enseñanza se basa en el relato, esto es la descripción de realidades sin ningún tipo de visión crítica del funcionamiento de las instituciones y nuevos involucramientos como actores.. "La ley dice…"
La docencia pregona en consecuencia: *"La artículo tal dice que …"* aunque la realidad vaya hacia otro sitio, o nos contradiga, o no se aplique en términos estructurales o institucionales, sin embargo se repite la normatividad ignorando sus desajustes con el presente.
"El autor opina …" La enseñanza o la doctrina tienen un importante volumen de repeticiones que si bien pueden demostrar erudición no hacen avanzar el conocimiento, dado que todos son referencias de unos a otros y de "otros a unos" más las polémicas, las posiciones eclécticas, pero sólo del mundo de la doctrina, ajeno al devenir y a las cuestiones tan urgentes como importantes del presente.
"La jurisprudencia señaló …" Igualmente el relato alcanza a los fallos, pero estos normalmente versan sobre la idea del uno a uno del derecho y la controversia, con lo cual para lograr otro fallo igual mucha "agua deberá transitar bajo el puente", creándose una ficción de que una sentencia define una situación, pero es sólo una "muestra gratis" que "no soluciona problemas" a todos aunque satisface a la enseñanza repetitiva. De un árbol hacemos el bosque.

EL DERECHO DEBE SER TAMBIEN EFICAZ Y EFICIENTE
Nunca nos hemos puesto a pensar con rigor crítico que tan bien funcionan las instituciones que se han diseñado. Si son realmente eficaces, y algo mucho mejor sería que fuesen además eficientes. Todo transcurre en un marco de idealidad, sin anclaje en los resultados macro que suponen las normativas con lo que es captable por el alumno. Es él quien tiene que entender, interpretar y actuar: v.gr. cuántas empresas se salvan con la normativa de quiebras y concursos, cuántos actos se recurren?? A cuántos recursos se les hace lugar?? No tenemos referencias ni líneas de base para comparar situaciones reguladas con el impacto que la normatividad genera sobre las mismas y en relación al **"afuera"**.

EL SISTEMA DE APRENDIZAJE: SUS CARENCIAS[37]
ENCICLOPEDISMO
En un mundo que gira cada vez más rápido (aunque se pierdan muchas cosas entrañables y valiosos) los programas discurren en porcentajes altísimos de referencias históricas y comparadas con más antecedentes surtidos. Nuevo tributo a una erudición, que ciertamente no parece lo ideal para cubrir los enormes vacios conceptuales y operativos de los alumnos de hoy. Muchas veces me he preguntado como un alumno llegó a quinto año de la facultad, cuando carece de discurso jurídico, no razona, no sabe explicar una situación, y se limita a repetir con suerte diversa. Preguntar el **cómo, para qué sirve, dónde vio lo que relata, si tiene alguna opinión sobre lo que dice** … durante un examen libre o escrito suele impactarlos como si uno preguntara en un dialecto ignoto. Además los alumnos viven su presente, comprenden y aprenden en forma intermitente, no en largos discursos o compendios.
Amén de ello a más años más volumen a estudiar, con lo cual la experiencia indica que rara vez se llega al presente y si es así menos se podría incidir en el futuro.
LA FALTA DE EJEMPLOS COTIDIANOS.
La enseñanza carece en general de ejemplos accesibles a las situaciones diarias o de referencia del alumno. Los libros aluden muchas veces a casos que exceden la rápida comprensión por su ajenidad, con lo que es captable por el alumno[38]. Es él quien tiene que entender, interpretar y actuar ante casos visualizables..
LA FALTA DE CONEXIÓN CON LOS ESCENARIOS DEL EJERCICIO DE LA PROFESION[39].
De los posibles perfiles que se den tales como:
abogado del foro
magistrado
funcionario
legislador (los abogados según mi conocimiento son la profesión que ocupa más cargos legislativos).
La facultad enseña solo para el abogado que ejerce libremente, y dentro de este subperfil, prioriza el abogado del CONFLICTO. Ignorando al abogado funcionario, al abogado asesor, consultor, etc.
Pero adicionalmente tampoco se integra a los escenarios profesionales reales. La adaptación profesional versa sobra prácticas de escritos, es decir un intento de ratificación de lo que se supone podrían haber cubierto parcialmente algunos JTP. Y siempre sobre el juicio y el conflicto, no sobre dictámenes, informes, sentencias, leyes, reglamentos o sobre otras esferas del quehacer del abogado.
LA CARENCIA DE PRÁCTICAS INTERDISCIPLINARIAS.
Para una realidad compleja como maneja el derecho no se aprende ni trabajo de equipo ni articulación transversal con otras disciplinas. Esto se padece gravemente en muchísimas áreas del derecho: en lo ambiental, en los temas de niñez y adolescencia, en temas de violencia, etc.etc.

LA CARENCIA DE CONTACTOS CON OTROS SERES
No existe un sistema institucional que vincule al alumno a un caso o ante un "cliente, imputado, entidad a regular, sujeto asesorable". Es decir nada de lo que vendrá se ejercita, y que es precisamente la interacción con "PERSONAS" de carne y hueso. No hablamos ni atendemos a Ticio ni a Mevio.

LA POCA APLICACIÓN DEL METODO DE CASOS.
El método de casos, que será el grueso de la vida profesional (al menos de un amplio espectro de los egresados) es una práctica aislada. Me incluyo como docente en ello.

BIBLIOGRAFIAS TAN EXTENSAS COMO INACCESIBLES.
Las bibliografías se mantienen al efecto del ego docente y la erudición de quien las formula. Los alumnos a lo sumo leen un manual, fotocopias surtidas, apuntes de terceros, y algo que pueden ver de internet. Es hora de

---

[37] La tasa de graduación denota que más allá de lo socio económico que rodea la facultad hay cuestiones intrínsecas que ayudan a no contener y expulsar que hay que profundizar para ser incluidas en la reforma. (Punto 15 pág. 59).
[38] Ticio le entrega a Mevio…
[39] El informe de Autoevaluación es lapidario en ese sentido y demuestra que la totalidad de los perfiles no son atendidos en concreto.

sincerar un mínimo razonable y de libre acceso sin contar el costo de los libros[40]. El resto será para post grado o doctorado. Además hay al menos en nuestra materia –derecho administrativo-, un fuerte impronta de lo nacional, lo cual es utilizado por una minoría, sólo los que ejercen en Capital, aunque el grueso del estudiantado es bonaerense.

EL CONOCIMIENTO SE EXPANDE. EL TIEMPO SE ACHICA.
Si el conocimiento se expande y el tiempo es siempre escaso (las cursadas de un cuatrimestre son en realidad de tres meses y medio, a lo que debe restarse, ausencias – propias y del alumno legalmente admisibles-, las impuntualidades de inicio y recreo (no es mi caso), los tiempos de los parciales, con lo cual en rigor son con suerte tres meses. De allí que deba priorizarse lo básico para que exista tiempo de desarrollo, discusión y varias intervenciones de los JTP para consolidar la comprensión y aplicación de conocimientos más alguna carga temporal extra clase.

LOS NUEVOS SOPORTES.
Reinando la informática, los cañones y filminas no son de uso corriente, las video conferencias prácticamente no existen, los videos de terceros muy didácticos no forman parte del arsenal del aprendizaje. Ergo hay un grave desfasaje entre el mundo adolescente de facebook, you-tube, internet permanente, blogs, etc. con la Facultad que termina siendo un ámbito a veces de sopor y aburrimiento con un monólogo docente.

LOS NUEVOS ESCENARIOS.
Existen nuevos escenarios que denotan carencias temáticas en los programas tales como:
DERECHO VINCULADO A LO AMBIENTAL.
DERECHO VINCULADO A LO INFORMATICO.
DERECHO VINCULADO A LA GENETICA.
DERECHO VINCULADO A LAS COMUNICACIONES.
DERECHOS HUMANOS, etc.
Estos temas y algunos más deben ser contenidos curricularmente.

EL DATO DE LA COMPLEJIDAD.
Los temas no son tan lineales como se explican. En mi vida profesional pocos casos pude resolverlos tomando el punto tal o la pagina xx de algún autor. Con lo cual hay que intentar explicar la complejidad de lo cotidiano, intentando que puedan simplificarla para operar sobre ella jurídicamente. Pero en esa línea debe cambiarse el soporte conceptual y operativo en el cual se asienta el plan de estudios, cuyas observaciones realizamos en este aporte.
QUE RESULTA CENTRAL: ¿REPETIR O ENTENDER Y/O SABER Y/O BUSCAR Y APLICAR CONCEPTOS AL CASO?
El desafío de la enseñanza es aquel que permite que:
Haya comprensión.
Haya capacidad interpretativa de la complejidad.
Haya capacidad reduccionista en un proceso inductivo/deductivo de la norma al caso y del caso a la norma.
Haya visión crítica de la situación regulada en función del tiempo histórico y las necesidades del país, de la región o del área.
No hace falta entonces repetir como resulta el núcleo actual de avance en la currícula.
CONJUGAR LOS PILARES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO: DOCENCIA, INVESTIGACION Y EXTENSION CON PROGRAMAS QUE PIENSEN EN DICHAS LINEAS[41].
El sistema actual solo tiende a la docencia, muy acartonada, repetitiva, enciclopédica, ahistórica y casi sin rigor critico. De allí que deba generarse algún tipo de estimulación para la investigación y la extensión que puede darse con algunas “muestras” simbólicas de tales temas durante la cursada asignable a equipos de alumnos, en forma interactiva, o bien trabajos prácticos en cursadas que obliguen a los alumnos a instalarse en el campo de la realidad y que vean como sus conocimientos pueden canalizarse para resolver los problemas donde ellos se verifican.
CONFORMACION DE CATEDRAS Y EQUIPOS[42] [43].
1.- Si bien el sistema de concursos es lo mejor, hay que analizar sistemas que permitan bajo una estricta responsabilidad de los designados no como un “menor esfuerzo” de los concursados sino como apertura a la participación de terceros para que pueda haber más cuadros en la universidad. En otras facultades a veces los concursos de cátedra son por equipos. Podría establecerse como experiencia en algunas materias que hay dos cátedras por materia. Asimismo podría servir de elemento de comparación de resultados. V.gr. tenemos carnet de conductor porque alguien nos enseño en infracción a la norma y de menor a mayor, o alguien nos presto un auto para ello.
2.- Adicionalmente hay una fosilización parcial en algunos cargos por renovación[44]. Alguna experiencia indica que a mayor antigüedad menos dedicación porque hay “oficio”, se delega. Pero los alumnos sienten eso. Hay

[40] La iniciativa de los Libros de Cátedra es muy positiva en ese sentido: acerca información y abarata costos al alumno. Ayuda a mantenerlos en el sistema (relación ingreso/egreso).
[41] Los datos de perfil de las dedicaciones docentes –pág. 40 gráfico 4- denotan que sobre el total real es muy bajo el nivel de investigadores y más bajo aún el sistema de extensión, con lo cual hay un quiebre entre las propuestas institucionales, los docentes, los contenidos y los resultados.
[42] El cuadro 7 de página 29/30 de la Autoevaluación no alude a la cantidad de docentes que participan del total, considerando que la plantilla docente es ciertamente numerosa.
[43] La encuesta mencionada en la Autoevaluación es valiosísima pero demuestra la ajenidad docente con el rumbo institucional. Entiendo que la próxima debe ser obligatoria porque constituye una carga colectiva. Esto refuerza la primacía del concepto liberal –en su acepción más amplia- del docente que es propio de la profesión de Abogado.
[44] Sería interesante conocer el promedio de cada titular en el cargo. Y mucho más que las Secretarias Académicas verificaran si los titulares a través de sus prolongadas estadías van innovando en sus programas. Eso no es interferir en la libertad de cátedra sino interactuar como conducción institucional con mandato del HCD.

que pensar en un sistema de renovación más rápido de las cátedras. Eso da variedad, pluralismo, innovación y mayor dedicación por el entusiasmo humano de lo nuevo. Las rutinas gastan.
LA CLINICA EXTERNA[45].
Esta práctica es muy interesante especialmente los consultorios jurídicos gratuitos, pero debe estarse muy claro en cuanto la imposibilidad de tomar asuntos a partir de ello. Tienen que ser un sistema excluyente de aprendizaje y en su caso los tutores deberían tener honorarios diferenciales.[46]

LAS CARENCIAS FORMATIVAS.
Podemos anotar las siguientes:
15.1.- IDIOMAS.
Es elemental sumar algún idioma: inglés (universal) o portugués (Mercosur) serían los más lógicos. Francés o chino pueden ser útiles. Especialmente este ultimo de gran futuro.
15.2.- LOGICA.
El derecho se sostiene en la lógica pero salvo una pincelada en el inicio de la carrera cuando casi no se la interpreta ni entiende cabalmente hace que luego se la ignore como una herramienta importante para razonar[47].
15.3.- NEGOCIACION Y SISTEMAS DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Gran parte de los conflictos jurídicos se resuelven negociando, pero nadie nos adiestra, ni enseña, ni explica en este arte. Entre ellos los sistemas alternativos de resolución de conflictos.
15.4.- OTROS ELEMENTOS:
15.4.1.-EL DISCURSO.
Los alumnos no saben construir un discurso jurídico. Una experiencia personal es casi dramática. En la primera clase les digo: redacten una nota con una petición a una autoridad administrativa. Francamente la experiencia es desoladora siendo alumnos de 5º año. Hay que trabajar estimulando la capacidad de redacción utilizando los elementos del derecho aplicados a los casos. Lo mismo advierto en postgrado cuando se discute el índice de un trabajo.
15.4.2.-EL LENGUAJE DEL CUERPO: INTERPRETACION.
Es importante para los abogados conocer el lenguaje del cuerpo, es un complemento del ejercicio profesional. Se utiliza para técnicas de negociación, para juicios, para discusiones, etc.[48]
15.4.3.-ELEMENTOS DE PSICOLOGIA EN EL MARCO DE LOS CONFLICTOS.
Tener algún rudimento de psicología es básico para poder comprender y contener a los clientes. Como así también ponerle limites, y encauzar su conflicto dentro del derecho, e inclusive para quienes abrazan la Magistratura (testigos, imputados, etc.)..
15.4.4.- LA DIFUSION ETICA DE LA PROFESION.
Los abogados tenemos una mala fama, construida sobre apodos de “cuervos” “buitres”, etc. y chistes acerca del gremio nada favorables. Algún baño de ética no es inconducente, máxime cuando los aranceles son de orden público y se prestan a muchos abusos, a veces casi patentes de corso modernas.
LOS SISTEMAS DE EVALUACION[49].
El Plan debe tener un correlato con los sistemas de evaluación. De nada vale un nuevo y buen plan de estudios si la evaluación no sufre una revisión y ajuste.
16.1.- DE LA VERIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE LA MATERIA A UN SISTEMA PARCIALIZADO.
El sistema de fraccionar el conocimiento de a tercios desvinculados en las cursadas, no parece muy consistente. Hay que buscar que los alumnos puedan resolver problemas articulando conocimientos. El resultado no puede ser permanente una facilitación del menor conocimiento para progresar (el recuperatorio). La sociedad luego no funciona de esa manera: no hay recuperatorio si se pierde un derecho de un cliente. La Facultad se parece a una isla de la fantasía en este sentido: siempre hay una oportunidad más. Los sistemas de opciones múltiples tienen también una parte de alea significativa.
Es factible asignar temas para que los alumnos demuestren conocimientos integrados y ser evaluados al final, adicionando sistemas rápidos y cortos de evaluación, a ser corregidos por el equipo docente (ver nuestro punto 13) en función de respuestas tasadas previamente, lo cual facilita la labor.[50]
16.2.- DISTORSIONES.
16.2.1. Exámenes libres
a) Maratónicos.
Algunos exámenes libres, si bien ahora la multiplicidad de cursadas los ha reducido se convierten en ejercicios maratónicos para docentes y alumnos. Esto atenta contra la homogeneidad del propio evaluador que en el inicio puede ser complaciente y no al final, o viceversa, con tal de terminar se conforma con muy poco.
b) Por azar
El tema del bolillero es una introducción del alea para evaluar conocimiento. Puede especularse en aprender 24 bolillas de tres materias y presentarse en tres sabiendo solo 8 de cada una. Pareciera más razonable un

---

[45] El informe en página 34 alude a valiosas experiencias, pero no pueden ser voluntarias, el hecho de ser voluntaria atenta contra la formación e interacción con la práctica real y el contacto humano con el otro imprescindible. Ver Punto 6.5. de la Propuesta.
[46] Un reciente caso de nuestra facultad del que he tenido referencias no parece el mejor camino. Entiendo que el mismo tiene esta caratula o semejante: Autos “Asociación para la protección ambiental y Educación Ecológica 18 de Octubre c/Aguas Bonaerenses SA”.
[47] He verificado que quienes han estudiado filosofía o juegan al ajedrez poseen ventajas comparativas con quienes no lo hemos hecho.
[48] Lie to me: Una reciente serie hizo popular la cuestión (Miénteme su traducción en castellano).

[49] Según el informe es una de las Facultades de mayor nivel de ingreso, matrícula permanente más alta y altísimo nivel de alumnos anuales por sus aulas. Esto obliga a pensar en calidad evaluativa enfrentando la cantidad de alumnos a evaluar.
[50] Así tomaba nuestra cátedra los parciales.

examen que permita recorrer el programa con un breve tema especial que demuestre la capacidad de precisión del alumno
c) Reducidos en tiempo.
Cuando hay muchos alumnos objetivamente los tiempos de evaluación se acortan y para alguien que invirtió mucho tiempo tal vez el esfuerzo se volatiliza en los minutos que se le de para una respuesta estereotipada que al no ser la pensada, es condenado.
¿La pregunta a responder es si queremos que interpreten, y comprendan y resuelvan una situación? o salvar la instancia formalmente ignorando el dato sustancial del conocimiento adquirido aplicado.
De la respuesta dependerá también la eficacia de un nuevo plan de estudios y evaluaciones consecuentes.
16.2.2.- Parciales Ilegibles.
Los parciales o exámenes escritos tienen un problema grave que es el alejamiento de los alumnos de la técnica de escritura artesanal por la computación. Mi experiencia indica que es difícil de entender la escritura actual sin contar las faltas gramaticales. Habría que pensar en un sistema de evaluación con disponibilidad de computadoras para hacer entendible los textos. A manera de SALON DE EVALUACION.
16.2.3.- Insuficiencia entre lo Teórico y lo Práctico.
Nuestra carrera tiene a lo largo de su desarrollo la disociación de la teoría con la realidad, en general y de los alumnos en particular, amén de trabajarse sobre temas marginales en cuanto posibilidad de ocurrencia.
LA INEXISTENTE DEVOLUCION SOCIAL DE LA INVERSION COMUNITARIA EN EL FUTURO ABOGADO[51]
Es una conquista de inclusión y orgullo nacional que la Universidad sea centralmente pública y gratuita en nuestro país. No obstante, es menester que los estudiantes asuman solidariamente este esfuerzo, que realiza el conjunto de la sociedad en su beneficio. En efecto si la Universidad se sostiene con los impuestos, Argentina tiene una fuerte composición a partir del Impuesto al Valor Agregado que no es el mejor tributo, en tanto afecta desigualmente a los de menores ingresos.
Ello importa que las clases populares en sus consumos mínimos tienen IVA incluido. Y una parte importante de dicho tributo es el que financia la Universidad, no el impuesto a las ganancias.
¿Cómo pensamos que los alumnos devuelvan a la sociedad el esfuerzo que esta hizo en ellos como inversión en conocimiento? Al momento es solo un caso a ser asumida vía ley del ejercicio profesional y considerando una duración de estudios que supera en más del 40% el tiempo ideal (7,5 años).
ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA MATERIA DERECHO ADMINISTRATIVO II.
- Variar la perspectiva ideológica de que la administración está contra los particulares, eso es una posición liberal, las experiencias argentinas indican que es el estado quien debe proteger a los particulares de muchos poderosos, lo que no impide evitar eventuales abusos públicos.
- Reducir drásticamente desarrollos con antecedentes teóricos e históricos irrelevantes explicando el funcionamiento de las instituciones, la dinámica de una ley y la lógica de un fallo que atiende a la plenitud del instituto. Ello permitiría en una estimación teórica reducir una cuarta parte del programa, incorporar nuevos temas y habilitar en su contenido que cada bloque temático tenga correlatos prácticos.
EJES A CONSIDERAR DE MANERA TOTALIZADORA
Finalmente digamos que estas variables deben concurrir simultáneamente.
19.1.- Plan de estudios.
19.2.- Régimen de Enseñanza.
19.3.- Sistemas de Evaluación.
19.4.- Práctica pre-profesional.
19.5.- Vinculación al ejercicio profesional.
19.6.- Renovación de la docencia.
19.7.- Cuantificaciones permanentes. Nos marcan los resultados concretos.

PROYECTO N° 49: Diego De Rosa Jefe de Trabajos Prácticos de la materia “Derecho Civil IV”, remite consideraciones y evaluación crítica de la enseñanza del derecho privado a partir del análisis de la jurisprudencia
Reforma al plan de Estudios.
Propuestas para la Comisión de Derecho Privado:

*Propuesta realizada por **Diego De Rosa** –Jefe de Trabajos prácticos con func. de profesor adjunto interino de la Cátedra II de Derechos Reales-.*

Trabajos prácticos dirigidos en análisis de jurisprudencia.
Motivación
Estimo que un sistema de derecho privado codificado, como resulta el nuestro, sumado a ello la hiperinflación legislativa que permanentemente modifica, deroga o directamente suple legislación o concepciones tradicionales vigentes, debe ir acompañada en la formación de los alumnos y también profesores, de un seguimiento constante en torno a la jurisprudencia.
Ello es, tratar de institucionalizar el análisis en jurisprudencia en materia de derecho privado, como una actividad cotidiana.
Esta situación, de hecho, se realiza permanentemente en la práctica profesional, ya sea que se trabaje como abogado en la profesión libre, dentro de estructuras estatales (Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto nacionales como provinciales), compilador de jurisprudencia en editoriales, etc.
Datos de la realidad incorporados como alumno y docente en la Facultad
En los años que llevo en mi actividad académica, tanto en mi carácter de alumno de la Facultad -de grado y postgrado- como docente universitario también, lo cual me retrotrae a casi 20 años de vivencia en esta Institución, me llevan a la convicción que el poder entender la estructura de una resolución judicial (sea cual fuere la instancia de donde emane) resulta una actividad intelectual compleja –dada su alto nivel de abstracción-, que si bien uno la va incorporando a través de la madurez en la formación, creo que debe ser

[51] Existe un importante esfuerzo de vincular al alumno con el afuera partiendo de la base que el vulnerable necesita del derecho y no el poderoso, que se vale del derecho y muchas veces también de la justicia, razón por la cual es necesario introducir el dato de la extensión, la externalidad y la práctica jurídica excediendo las tareas de becas y pasantías que enhorabuena suceden tal como se relata en el Cap. 5 de la Autoevaluación.

acompañada desde las etapas iniciales de la misma, dado que en muchos casos el no poder comprender su estructura, desalienta esta importantísima herramienta de trabajo[52].
Es que analizar, desbrozar y entender, un fallo, resulta de una complejidad tal, reitero –dado su nivel de abstracción- de suma importancia formativa y que debe incorporarse como una actividad formadora desde el grado, dado que también resulta un buen método para abordar y motivar el estudio de aspectos teóricos (retroalimentación entre teoría y práctica).
Realizar esta actividad desde los cursos de grado no dudo que sea una actividad que algunos docentes realizan y a menudo ponen empeño, pero ante esta propuesta de reforma de plan de estudios, estimo que debe ser institucionalizada y no depender de voluntarismos e iniciativas aisladas.
Siguiendo con la idea inicial, la posibilidad de poder aprehender fallos, no sólo entendido estos como un modo de poner solución a conflictos de intereses individuales y/o colectivos; merecen ser entendidos, también, desde su faz axiológica, dikelógica y sociológica (Trilogía de W. Goldshmidt). Permitiendo esta actividad entrever concepciones tradicionales de pensamiento jurídico e ideas renovadoras en pugna, que muchas veces quedan tan sólo como cuestiones encumbradas.
Por ello, poder comenzar a cambiar la concepción de la comprensión del Derecho Privado, ya no como una cuestión estática -a modo de ejemplo puede citarse a modo de crítica el siguiente enunciado : ***" El derecho Civil y el Comercial son lo que dicen los Códigos respectivos y sus leyes complementarias";*** debería virar hacia una visión más ***dinámica*** donde un taller de análisis de jurisprudencia haría en gran medida cumplir con estas ideas de renovar el pensamiento crítico, pudiéndose generarse ámbitos donde se fomente este tipo de pensamiento y actualizar aún la crítica actual.
Propuesta[53]
Esta propuesta importaría *ab initio*, una introducción en los cursos de ingreso de una orientación en estructuras judiciales y división del poder judicial, y nociones sobre competencia. Actualmente en la asignatura en la que intervengo detecto grandes dificultades en la comprensión de estas situaciones[54]. Justamente, esto contribuiría a delinear desde un inicio el perfil del abogado deseado, ello es un futuro profesional con facilidad en el análisis de jurisprudencia.
La propuesta concreta consiste, pues, en que junto con el desarrollo de cada materia cursada de Derecho Privado (aunque también podría extenderse a otras materias), paralelamente deba cursarse estos talleres complementarios, con una carga horaria de 10 horas cuatrimestrales y 15 horas semestrales, a cargo de uno o dos docentes (auxiliares docentes y/o jefes de trabajos prácticos, preferentemente), divididos, según el numero de cursantes en dos o más grupos.
La idea se basaría en encuentros presenciales de no más de una hora y media por semana[55], con material suministrado que se desea abordar, con una antelación de al menos de una semana. Estos materiales jurisprudenciales, con el apoyo y guía del docente, será profundizado por los alumnos, quienes trabajando individual o grupalmente, integrarán ese material junto al análisis emanado de opiniones de otros fallos, comentarios a los mismos, artículos de doctrina, los cuales serán objeto de cotejo y contraste.
Esto fomenta, en parte la práctica en investigación sobre documentos, realizada en bibliotecas y buscadores virtuales de jurisprudencia, etc...
De esta manera se tiende a que los alumnos participen en forma más activa y a través de exposiciones en clase, no sólo hacia los docentes sino también hacia sus propios compañeros, abriendo instancias de debate en clase y compartiendo los conocimientos aprehendidos.
Mientras los alumnos participen en estos cursos obtendrán una "nota de control continuo"- que integrará la mitad de la nota final-, la cual será vinculante junto a la nota del examen final del taller. Esta nota final de taller a su vez deberá ser tenida en cuenta por el profesor titular y/o adjunto, en su caso, a los efectos de poder promocionar la materia. En cuanto a los exámenes finales de los talleres, estos podrán consistir en evaluaciones escritas y /u orales (según propongan los docentes).
Estos talleres se acreditarán con nota (6) seis. En caso de no obtener este resultado, se tendrá una única posibilidad de recuperatorio.
En parte, esto contribuiría a abrir una nueva posibilidad para que paralelamente a la nota de los cursos por promoción, los alumnos puedan contar con una nota más, la cual podría ser de utilidad para que estos puedan acceder a becas de investigación (tratar de dar otra nota que permita aumentar su promedio general, a tales efectos).
Recursos indispensables: Factor tiempo y factor humano.
Este tipo de actividad, de ser implementada, obviamente llevará a tener en cuenta otros tantos factores que no tengo dudas deberán ser consensuados entre toda la comunidad educativa. No obstante ello, es seguro que importará mayor tiempo abocado a la carga horaria habitual, lo que conllevaría a concientizar a los alumnos una mayor profundización en el abordaje de la materia.
A su vez, estos talleres importarían una actividad alternativa que válidamente podría confiárseles a ayudantes de la docencia (auxiliares y JTP), estando estos a cargo de su coordinación, y aún pudiendo fomentar en éstos proyectos de investigación en determinadas temáticas, y cabiendo, aún, la posibilidad de servir esta actividad como un requisito alternativo al régimen de adscripción a la docencia.
Para ello, a su vez, será necesario capacitar en sede local de esta Unidad académica, a los encargados de estos talleres para guiar, unificar criterios y generar espacios de intercambio de experiencias, así poder para optimizar su funcionamiento.

---

[52] La experiencia que llevo como docente, también me llevan a resaltar el entusiasmo puesto por los alumnos al abordar puntos del currículo de la materia, a través del análisis de jurisprudencia. Y en aquellos cursos en los que he intervenido y no se he tenido tiempo suficiente para analizar fallos; en las autoevaluaciones de la clase -llegadas las postrimerías del curso-, fue objeto de reclamo por parte del alumnado. Ello denota –en mi opinión – una demanda que debe ser satisfecha hacia ellos.
[53] Idea tomada en gran parte de los denominados *"Travaux dirigés"* implementados para L1, L2 y L3 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Poitiers –Francia-
[54] Esto obviamente lleva a repensar –en parte- el régimen de correlativas, pero ello ya consiste en otra propuesta mucho más integral
[55] Los cuales podrían ser complementados con encuentros virtuales, via e-mail, foro – por citar los más sencillos, accesibles y fácilmente comprensibles-, u otras propuestas enmarcadas en plataformas virtuales.

PROYECTO N° 50: Noemí Mellado Profesora Titular de "Economía Política", remite evaluación crítica del actual plan de estudios de la carrera e incorporación de las materias "Derechos Humanos", "Derecho Ambiental", "Derecho de la Integración" y "Nociones de Metodología de la Investigación"

Algunas reflexiones y propuestas sobre la Reforma del Plan de Estudios de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
Mellado Noemí B.

Pensar en la reforma del "Plan de Estudios" se convierte en una idea compleja llena de inconvenientes y obstáculos, pese a que la mayoría de los claustros reclaman como una necesidad imprescindible del mundo actual. Sin embargo, son también muchos los que fundamentan este cambio en la crítica a los aspectos formales de la enseñanza, sin cambiar los contenidos y su propia estructura. Asimismo pese a que los contenidos de la enseñanza han sido calificados muchas veces de arcaicos, se elude su cuestionamiento esencial y se asume una posición modernizadora que ataca sólo aspectos relacionados con el afán crematístico del ejercicio profesional.
De allí es que no se pueda superar el defasaje que tenemos respecto al progreso operado en el mundo, por el carácter eminentemente informativo que se le ha dado a la carrera. Se toman parcialmente los conocimientos de las transformaciones internacionales sin incorporar los pensamientos científicos y pedagógicos para convertir a los graduados en futuros agentes del cambio y cumplir con la misión esencial de la universidad como generadora de pensamiento y difusora de la ciencia que impulse las transformaciones políticas, económicas y sociales que requiere el país.
Es necesaria la formación integral del alumno y no la limitación de pensamiento, producto de una enseñanza aislada y de especialización restringida que le impide comprender los efectos concretos de la aplicación normativa en la sociedad. Nuestra función no se limita a formar profesionales, sino enseñar a investigar y formar los futuros dirigentes que reclama la sociedad. Es necesario abordar los nuevos y complejos problemas que genera el mundo actual. Para ello se debe proporcionar al alumno las herramientas necesarias para la mejor comprensión y explicación de los sucesos, hechos y fenómenos que aparecen en el contexto social, político, jurídico y económico.
Una Facultad donde predomina el espíritu profesionalizante y se abandona la investigación, trabaja sobre materiales de estudios desactualizados y perpetua el continuismo sin vocación de cambio y la Universidad debe ir adelante de los cambios propiciándolos. Se debe superar el falso dilema entre docencia e investigación, ambas actividades son complementarias. Si bien la investigación en ciencias sociales ha recobrado valor ella sigue relegada a un segundo plano por la responsabilidad de sus actores. La investigación constituye la retroalimentación de la docencia y esencia de la Universidad, de allí que debe fomentarse la misma estimulando la participación de los jóvenes en los canales institucionales reconocidos para iniciarse en su formación en investigación.

1. Propuesta de incorporar al Programa de Estudio "Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales".
Sobre la base de la fundamentación anterior se propone como materia obligatoria "Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales" que permita a los alumnos adquirir un conjunto de referencias teóricas e instrumentales que les posibilite profundizar sobre las lógicas propias de la ciencia. La investigación científica procura la obtención de conocimiento con certeza, validez y confiabilidad. Somos concientes que el propósito no es sencillo y es necesario vencer la resistencia al cambio.
Su puesta en valor implica estar comprometido con la relevancia del conocimiento científico y reconocer a la metodología de la investigación como un instrumento esencial para la preparación de estudios y/o diagnósticos que resulten de interés, generando en los alumnos la preocupación por la investigación y la actitud investigativa.
Investigar posibilita deslindar las instancias meramente discursivas, en las que es frecuente caer, para ir hacia respuestas más precisas a través de los hallazgos que otorgue. Investigar es reconocer a la teoría y buscar en la realidad respuestas para que aquella sea explicada y mejor comprendida. Por tanto se pretende estimular el interés por el aprendizaje de la investigación como herramienta capaz de contribuir a la obtención del conocimiento fundado el que es central en su formación y punto de partida para el diseño e instrumentación de políticas públicas.
La ubicación curricular de esta materia debería ser en cuarto año, a los fines de poder aprovechar el potencial humano que pueda incorporarse a los equipos de investigación existentes para comenzar sus primeras prácticas y luego de recibido al sistema institucional para seguir su carrera científica. El tiempo de duración como mínimo debe ser de un cuatrimestre y debe articularse con el seminario de grado.
Respecto a la correlatividad sería necesario tener aprobada Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica y Derecho Político.

2. Propuesta de incorporar al Programa de Estudio a "Derecho de la Integración"[56]
El avance de los procesos de integración que fueron consolidándose en los últimos decenios genera un derecho propio que expresa el modo de relacionamiento que los Estados que conforman el bloque convienen y desarrollan en concreción de de los objetivos trazados para dicho proceso. La organización jurídico-institucional y la producción normativa exceden a los propios estados interviniendo directamente la realidad jurídica de los ciudadanos de los bloques. Este nuevo tipo de derecho es aceptado por la comunidad académica y científica como un nuevo saber disciplinar. Se encuentra en pleno proceso de configuración científica. Su caracterización surge de la profunda reflexión producida por científicos, académicos y especialistas con fundamento en sus aspectos originales.

En el lenguaje académico suele referirse a este fenómeno jurídico como "Derecho de la Integración". Sin embargo suele asimilárselo al Derecho Comunitario, aunque, éste es originario de la experiencia europea en su complejo proceso de integración. En cambio desde la perspectiva latinoamericana se lo ha denominado como "Derecho de la integración" – Zelada Castedo A; Vacchino J. M.; Delgado Rojas J.; Olivar Jiménez M; Mellado N.; Gajate R.-

[56] En lo referente a esta propuesta particularizada la misma es elevada de forma conjunta con la Prof. Rita Gajate.

El perfil jurídico, en relación al desarrollo de los procesos de integración, adquiere relevancia. Debe acompañar e instrumentar los objetivos definidos en la integración, asegurar su puesta en marcha y propender al afianzamiento de los compromisos asumidos. Es que la institucionalidad de un sistema expresa la adopción del modelo que lo conforma. Manifiesta el modo que se espera en el funcionamiento y evolución del esquema.

Introducir a los futuros abogados en la mecánica del nuevo derecho surgido implica concientizar acerca de nuevas incumbencias y problemáticas.

Algunas Facultades de Derecho en nuestro país han incorporado a sus currículas "Derecho de la Integración". Los contenidos de los programas observados profundizan sobre el desarrollo del Derecho de la Integración en base a los aspectos configurantes de los procesos de Integración latinoamericanos con especial referencia al MERCOSUR. Este orden jurídico goza de autonomía con relación a los ordenamientos nacionales y los principios que lo rigen, diferenciándose del Derecho Internacional sea Público o Privado y de la normativa interna de los Estados. Nuestro posicionamiento, a favor de su autonomía, se funda en que entendemos que las estructuraciones jurídico-institucionales configuran la originalidad de un "nuevo derecho" distinto del Derecho Internacional Público, que responde a objetivos diversos de aquel y que ha generado alcances y perspectivas autónomas que deben estudiarse y someterse al análisis científico.
La actualidad, vigencia y desarrollo de los procesos de integración marcan la necesidad de abordar este universo.
Así los han entendido numerosas Facultades de nuestro país que han incorporado la asignatura. En el cuadro que sigue puede verificarse lo expresado.

Derecho de la Integración en los planes de estudio de las Facultades de nuestro país

Universidad - Facultad	Materia	Características
UNL – FCJyS- Litoral	Derecho de la Integración	Optativa
UBA- Derecho- Bs.As	Derecho de la Integración	Obligatoria
UNR-Derecho-Rosario	Derecho de la Integración	Electiva disciplinar
UNT-FDy CS- Tucumán	Normativa Legal del MERCOSUR en el Comercio Interregional	Obligatoria
	Procesos de integración	Obligatoria
Universidad Austral - Derecho	Derecho de la Integración	Obligatoria
Universidad de Belgrano	Integración Económica	Obligatoria
	Derecho de la Integración	Obligatoria

Además en la mayoría de las universidades latinoamericanas y europeas su incorporación en las carreras de derecho es corriente y normal del mismo modo que el Derecho Privado o Público.
En cuanto a su correlatividad ella deberá ser luego de Derecho Constitucional, Internacional Público y Economía Política.
En lo referente al tiempo asignado a la materia si no adopta la modalidad de intensivo deberá ser cuatrimestral, ya que no sólo será necesario analizar la normativa e instituciones sino la parte procedimental que la misma importa.

3. Propuesta de incorporar al Programa de Estudio a Derecho Ambiental
América Latina y El Caribe en general y particularmente nuestro país tiene una biodiversidad como una dotación de recursos naturales y de fuentes de energía que se constituyen en factores estratégicos para el desarrollo y en el eje de atracción de los países desarrollados, dado que la crisis internacional tiene además de una dimensión económica-financiera una energética, ambiental y alimentaria.
Precisamente son esas potencialidades las que motorizan a la inversión por parte de las empresas trasnacionales y extranjeras. En las condiciones actuales del desarrollo científico y tecnológico la biodiversidad pasa a ser un recurso estratégico por ser esencial para el desarrollo de ramas como la farmacéutica, biotecnología, agroquímica y cosmética. La biodiversidad aparece no sólo como una multiplicidad de formas de vida, sino como zonas de reserva, territorios y hábitat de la diversidad biológica, valorizados por su riqueza genética, sus recursos ecoturísticos y su función como colectores de carbono.
Todos estos factores ameritan un conocimiento especializado en la materia en cuanto a las normativas nacional, regional, latinoamericana e internacional y los conflictos que se suscitan y ponen en riesgo estas potencialidades.
Respecto a su inclusión el curricular, ella deberá ser luego de Derecho Agrario y de Minería.

4. Propuesta de incorporar al Programa de Estudio a Derechos Humanos
La incorporación de esta materia debe ser teniendo en consideración una concepción amplia de los mismos.
Respecto a la ubicación de la materia en la currícula ella debería ser luego de Derecho Constitucional e Internacional Público -en la que el alumno adquiere los conocimientos sobre la institucionalidad internacional y la normativa derivada de ellas-.
Mi práctica como evaluadora de la CONEAU en materia de equivalencias de universidades latinoamericanas y europeas me permite afirmar que se tiende a la extensión material (contenidos) de los programas de estudios a partir de una perspectiva más amplia del conocimiento.
PROYECTO N° 54: Grupo de Abogados "La Cámpora" remite reflexiones y propuestas acerca de la reforma al plan de estudios, accesibilidad a la educación superior y universidades públicas

PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ABOGACÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
POR UNA UNIVERSIDAD QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO NACIONAL CON JUSTICIA SOCIAL
"El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.

Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.
Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución."
Constitución de la Nación Argentina (1949) Art. 37 inciso IV apartado 4.

"hay que introducir la Universidad, de una manera viva, en la problemática argentina, porque la Universidad que, a partir de la Reforma del 18, se autoenorgulleció de vincularse al pueblo no fue más que una aspiración" **(Rodolfo Puiggrós)**

INTRODUCCIÓN
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales atraviesa un proceso de reforma del Plan de Estudios muy ansiado y esperado por toda la comunidad educativa, razón por la cual nos vemos en el compromiso ético y social de acompañar como graduados.
Una vez abierto este debate creemos que la importancia y seriedad de la temática merece que se extienda el plazo de discusión a fin de poder aprovechar al máximo esta oportunidad de transformación y cambio para nuestra institución. Ello es así en tanto que la definición del Plan de Estudios es una cuestión trascendente de la vida de la Facultad, ya que determina el modelo de profesional que nos disponemos a formar.
Para lograr este objetivo estamos convencidos de que el debate tiene que tener un grado de compromiso absoluto con las transformaciones político sociales que atravesó la República Argentina en general, y la UNLP en particular desde la década de 1950 hasta el presente (momento en que se realizó la última modificación del Plan de Estudios con alguna trascendencia institucional).
Creemos que la sociedad exige de quienes tuvimos el privilegio de obtener un título en una Universidad Pública un grado de compromiso social que debe traducirse institucionalmente en políticas educativas que acompañen las necesidades del conjunto de la comunidad. Debemos aprovechar este proceso para plantear debates y sostener banderas que la misma sociedad nos esta pidiendo. En este sentido, consideramos que el derecho y su enseñanza son herramientas que deben comprender, acompañar o cuestionar los procesos político-sociales, y no quedar al margen. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no puede pensarse aislada de lo que ocurre en la calle, bajo la máscara de la autonomía universitaria.
Tenemos la certeza de que en este proceso de cambio deben participar todos los actores de la Facultad, a través de un debate plural poniendo especial atención a todas las propuestas presentadas, sin relegar unas en favor de otras.
Entendemos, en esta lógica, que los jóvenes son actores fundamentales de todo proceso de transformación y cambio destinado a perdurar, y por ello desde la Facultad debe promoverse su participación masiva en todos los niveles de discusión. Así como en el ámbito gubernamental se fomenta explícitamente la participación de los jóvenes en el escenario político, el espacio universitario es el ámbito por excelencia donde se debe concretar esta participación activa.
Asimismo las temáticas a abordar no deben tener ningún tipo de restricción ya que en este proceso todo debe ser susceptible de revisión. Esta reforma debe ser integral y no debe detenerse en visiones parciales del fenómeno jurídico y educativo, sino que debe tener una ambición que trascienda las deudas pendientes del pasado y los avances del presente.
En este sentido, es necesario avanzar en una reforma que sea realmente transformadora y acompañe el proceso de cambio e inclusión social emprendido por el Estado Nacional. Creemos que la Universidad Pública debe ocupar un lugar central a la hora de promover el desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales, motorizando propuestas y avances que dinamicen el funcionamiento estatal, y acompañando las políticas públicas en el orden nacional. Debe ser inclusiva y producto de una construcción colectiva, escapando a la lógica individualista que orientó las políticas educativas en el proceso neoliberal.

LA UNIVERSIDAD POPULAR
Como expresión universitaria del proyecto nacional y popular en marcha en la Argentina, queremos hacer nuestra contribución al debate sobre la reforma del plan de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad.
Lo hacemos desde una tradición política y cultural que influyó decisivamente en la conformación del perfil de nuestras universidades, que las colmó de recursos materiales, intelectuales y simbólicos, que las volvió masivas y auténticamente públicas –y no meramente estatales- en un proceso que, a partir de 2003, se ha reiniciado y profundizado.
Fue el primer peronismo el que –a través de la eliminación total de los aranceles en 1949- estableció la gratuidad de la enseñanza superior y transformó en masivas a las universidades que –aun cuando eran cogobernadas desde 1918- conservaban todavía fuertes rasgos elitistas. Fue ese primer período transformador el que convirtió a la educación superior en una formidable herramienta de renovación productiva y tecnológica y de movilidad social ascendente.
Desde 2003 la Argentina retomó y profundizó ese impulso educativo transformador. La repatriación de científicos, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el aumento exponencial del presupuesto educativo son solo una muestra de ello, en un país que –no es una mera coincidencia- lanza satélites al espacio y proyecta prototipos de aviones no tripulados.
Por eso, los principios que motivan nuestra participación y nos inspiran para realizar esta propuesta de Reforma del Plan de Estudios son la defensa y promoción de los derechos humanos, la redistribución del ingreso, la participación activa del Estado en la economía, los intereses nacionales –recursos naturales, servicios públicos, obra pública, administración de justicia, recursos fiscales, fomento de la producción nacional, mercado financiero nacional-, la defensa de los sectores históricamente desprotegidos y relegados –trabajadores, minorías sexuales, discapacitados, usuarios y consumidores, personas privadas de la libertad, pequeños y medianos productores, etc.-, y para sintetizar nuestro pensamiento, los principios de la soberanía política, independencia económica y justicia social.
Creemos que en este proceso de reforma deben discutirse seria y comprometidamente, al menos, cinco ejes**:**

INGRESO A LA CARRERA DE ABOGACÍA

La temática relacionada con el ingreso a la carrera de Abogacía se ha presentado siempre como una cuestión de trascendental importancia por las consecuencias que la misma acarrea, tanto en términos académicos, políticos y sociales.

Desde distintos espacios se ha venido sosteniendo que no es posible establecer un ingreso inclusivo a la Universidad Pública sin menoscabar el nivel académico. En otras palabras: suele sostenerse que la masividad está reñida con la excelencia.

Creemos que esa dicotomía (masividad vs. excelencia) es falsa. Una Facultad amplia e inclusiva, que no opone obstáculos para su ingreso, no es incompatible con una enseñanza superior de alta calidad. La comprobación es sencilla: nuestro país conoció muchas épocas (a partir de que el primer peronismo habilitó el ingreso de los sectores medios y populares) en que la educación superior fue masiva y de excelencia.

Consideramos que la institución debe acompañar el aprendizaje durante todo el proceso educativo y no pretender un nivel excluyente en el primer momento de ingreso, ya que dicha exigencia se encuentra abastecida por la instancia educativa antecedente que es el nivel secundario. Una propuesta contraria implicaría traspolar al ámbito universitario posibles desigualdades que pudieran haberse generado con anterioridad, manteniéndolas irresueltas.

Asimismo estamos convencidos de que las instancias evaluativas que imponen el piso mínimo de nivel académico se deben desarrollar a través de toda la currícula, y que el desafío radica en brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para atravesar dicho proceso.

En términos políticos la trascendencia de la temática se manifiesta en el modelo social que queremos para el país, puesto que una educación pública inclusiva de todos los sectores sociales, lleva a su máxima expresión el imperativo de igualdad de oportunidades afirmado en nuestra constitución.

De esta forma se reivindica a la educación pública como forma de transformación de las realidades sociales de cada uno de los estudiantes y necesariamente del conjunto de la sociedad.

Desde el plano social, la educación en general, y la enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales en particular, es una herramienta imprescindible para fomentar la formación y participación comprometida y consciente de la comunidad. El crecimiento personal, familiar y colectivo debe encontrarse inescindiblemente unido a una política educacional generadora del compromiso social que el país necesita y que felizmente viene manifestándose en diversos ámbitos de la vida de la Nación.

Nuestra tarea fundamental es trasladar esa participación a la vida universitaria, generando los espacios de debate para la toma de decisiones en forma colectiva, y esta finalidad se vería impedida si se restringe el ingreso a la carrera, por ser el mismo la condición de posibilidad para el cumplimiento de ese cometido.

Por ello, proponemos que se realice un curso para los ingresantes a la carrera de abogacía con las siguientes características:

Que aborde pocos textos, dotados de un carácter reflexivo vinculados con el análisis de la realidad política y social nacional y latinoamericana, y que no anticipen contenidos curriculares específicos abordados en las materias de primer año.

Que dichas actividades académicas sean confeccionadas conjuntamente entre los responsables del curso y especialistas en ciencias de la educación.

Que no cuente con una instancia de evaluación eliminatoria.

Que una vez transitado el mismo cualquiera sea el resultado obtenido, el ingresante pueda inscribirse en las materias de primer año.

PERSPECTIVA DEL DERECHO Y DE LA ENSEÑANZA

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales responde, en líneas generales, a una visión tradicional de la enseñanza. El conocimiento es transmitido a los alumnos que son vistos como meros receptores del mismo.

De este modo, no se promueve la reflexión crítica y la construcción colectiva del conocimiento, sino la aprehensión del mismo en el marco del discurso de la pretendida objetividad del derecho.

Esto se sustenta en el abordaje teórico que se realiza preponderantemente desde una visión positivista. Esta perspectiva presenta al derecho descontextualizado como un dato a-histórico y apolítico, sin ponerlo en cuestión, como verdad dada a ser aprehendida, desprovisto de contenidos ideológicos.

Nos parece trascendente poner de resalto el nombre de nuestra institución, llamada desde su fundación "Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", y atendiendo a nuestro compromiso, dotar de contenido su carácter social para que en la práctica sea lo que siempre estuvo llamada a ser.

El nuevo plan de estudios debe involucrarse de lleno en las problemáticas sociales, asumiendo como objeto de estudio los derechos humanos, el empleo, la pobreza, la criminología, la participación del Estado en la economía para el desarrollo sustentable, el medio ambiente, los recursos naturales estratégicos, la integración latinoamericana, los nuevos paradigmas de la ciudadanía social, no sólo desde su correlato jurídico sino en el marco de la trama política. Por otra parte, debe dar cuenta de las desigualdades de clase, de género, generacionales, etc., tanto hacia adentro de la institución educativa como en la sociedad.

En definitiva, el plan de estudios debe abordar las temáticas que hacen a la vida política, social e institucional del país, porque de lo contrario estaremos formando profesionales ajenos a realidad e incapaces de comprenderla para su transformación.

En los últimos años hemos sido testigos de la recuperación de la discusión política con un fuerte impacto en la agenda del derecho (AUH, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estatización del sistema previsional, matrimonio igualitario, derechos de exportación, entre otros). Es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad favorezca la discusión política y social y no se limite a las normas existentes o resultantes.

Para ello, sostenemos que es necesario avanzar en un abordaje crítico del derecho, que supone indagar las relaciones políticas, sociales y económicas, de dominación y resistencia que lo determinan, situándolo como producto histórico y cultural inmerso en los conflictos sociales y los procesos políticos.

Creemos en el derecho como herramienta emancipadora, pero también reconocemos que ha legitimado procesos de desigualdad. Por eso, no es posible entenderlo sin situarlo en el marco de la realidad política y económica que atraviesa el país, dinamizada por la expansión de derechos civiles, políticos y sociales, tal como lo planteara el Dr. Boaventura de Sousa Santos.

En términos del educador brasileño Paulo Freire "todo acto educativo es un acto político", agregando que todo producto jurídico también lo es.

En este sentido, una de las políticas que debe abordar el proceso de reforma del Plan de Estudios, es la articulación de las distintas funciones de la universidad (enseñanza, investigación y extensión). Para ello,

proponemos incorporar como obligatorios los seminarios de investigación para los alumnos, y las clínicas y consultorios jurídicos, que hoy se encuentran implementadas de forma paralela y voluntaria a la carrera de abogacía.
Probablemente no pueda forzarse el compromiso social de los estudiantes, pero sí puede promoverse. Así como éstos deben necesariamente atravesar un trayecto académico orientado a la profesión liberal, deben tener un acercamiento a la función social de los abogados con la realización obligatoria de clínicas y consultorios jurídicos.
De lo que se trata, es de promover e incentivar el compromiso social de los estudiantes y esta tarea hay que desarrollarla desde el propio plan de estudios.
Por ello, proponemos que se fomente la participación social de los alumnos, acompañando una práctica profesional que contemple las problemáticas de la sociedad y se disponga a resolverlas, a través de la implementación obligatoria de:
seminarios de investigación
clínicas jurídicas
consultorios jurídicos
PLAN DE ESTUDIOS
"...uno de los medios más eficaces para guiar a los docentes a nuestros objetivos de emancipación nacional y conquista de una sociedad más justa, con una mejor distribución de la riqueza, donde desaparezca la pobreza y se produzcan los grandes cambios sociales y la revolución científico técnica, es a través de la elaboración de nuevos programas de estudio" (Rodolfo Puigrros)

En estrecha relación a la perspectiva de la enseñanza y del derecho que tenemos desde La Cámpora, consideramos que es necesario actualizar la currícula y engarzarla en el contexto socio-político en el que vivimos, poniendo en valor campos del derecho que han sido claves en los procesos de cambio de nuestro país y que asumen un espacio trascendente en la agenda pública.
La Argentina viene desarrollando una política de Estado clara y contundente en materia de derechos humanos, que necesariamente satisface la memoria, verdad y justicia, pero que ha ido mucho más allá en el plano de los derechos humanos sociales, económicos y culturales. Creemos que resulta imperiosa la inclusión de la asignatura Derechos Humanos con carácter obligatorio en la carrera de Abogacía. Ello es, sin dudas, una deuda pendiente de nuestra Facultad desde la recuperación democrática.
Asimismo, resulta imprescindible la inclusión en el plan de estudios la asignatura criminología. Ello responde a la necesidad de revisar las respuestas que la ciencia del derecho le otorga al fenómeno criminal desde una perspectiva humanista y multidisciplinaria.
Por otra parte, el Estado ha impulsado y profundizado los procesos de integración política y económica de la región con nuestros hermanos latinoamericanos, llevando adelante el desafío de la patria grande. Estos programas de política exterior regional suponen una arquitectura normativa que los profesionales del derecho deben conocer y comprender en profundidad para poder participar activamente en las transformaciones políticas, económicas y sociales que los mismos suponen. El Derecho de la Integración Latinoamericana tiene su espacio en algunas materias de la Facultad pero es momento de otorgarle el lugar que le corresponde.
En cuanto a los Derechos Sociales -impulsados fuertemente desde el Estado- entendemos que los mismos deben ser abordados de manera más completa e integral que en el actual Plan de Estudios, considerando que los mismos ya no pueden ser abarcados por una única asignatura sino que deben ser repensados, separando por un lado el Derecho Laboral (individual y colectivo) del Derecho de la Seguridad Social desde una perspectiva de políticas públicas. Ello encuentra sustento en la amplitud de las políticas públicas desarrolladas, tales como la AUH, ampliación de beneficiarios del sistema jubilatorio, políticas sociales concretas y focalizadas, etc. La Seguridad Social y los Derechos Sociales –que otrora estaban relacionados de un modo íntimo con la problemática del trabajo dependiente- comienzan por fin a avanzar a un modelo pleno de ciudadanía social (la AUH es la expresión más cabal de ese proceso), por lo que ya no se justifica que ambos campos del derecho sean abordados en forma conjunta.
Resulta inexorable introducir la problemática Medio Ambiental y de los Recursos Naturales. Lo primero es una obligación que tenemos para con la sociedad toda del presente y con las generaciones futuras, lo segundo es un imperativo de soberanía política e independencia económica.
En este sentido, el derecho ambiental tanto como el económico, adquiere importancia fundamental en el marco de un proceso de disputa, de apropiación y regulación de los recursos naturales. Advertidos de que atravesamos un periodo en que se ha puesto de manifiesto la escasez y la sustentabilidad de los mismos, el escenario de la puja distributiva de los bienes, materiales y simbólicos no puede ser ajeno a la enseñanza del derecho.
Por ello, consideramos que no pueden entenderse como periféricas materias claves para comprender el modelo económico actual, tales como el Derecho de Minería y Energía, Derecho Agrario y Economía Política. Así, lejos de considerar estos campos del saber jurídico como asignaturas optativas, es necesario jerarquizarlos incorporando los debates actuales a sus planes de estudio (por ejemplo en materia de commodities, renta agraria, extranjerización de la tierra, Plan Estratégico Agroalimentario 2020, etc.)
En definitiva, el Plan de Estudios debe dar cuenta del análisis político-económico y su resolución en el terreno normativo. Debemos preparar abogados que sean parte de la definición del Estado y la sociedad que queremos, creando herramientas y facilitando espacios para su discusión.
Otro aspecto de profunda relevancia y con directa relación con el proceso de aprendizaje del derecho, es el rediseño del régimen de correlatividades del plan de estudios.
En este sentido, el orden analítico de la ciencia jurídica tiene un impacto directo sobre la óptica que el estudiante construirá del derecho. Así, una dinámica académica que vaya desde lo general a lo específico permite afianzar el conocimiento de los aspectos estructurales del derecho y comprender con mayor facilidad cada una de las áreas específicas.
Entendemos que los faros desde el que los estudiantes deben comprender las ciencias jurídicas y sociales son la Constitución Nacional y los Derechos Humanos por ser éstos conjuntos normativos-valorativos desde los que debe interpretarse el fenómeno jurídico en su totalidad.
Conforme sostenemos, creemos que el segundo año de la carrera debería contemplar las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Político, Derechos Humanos, y Criminología para luego sí, ingresar a las materias más densamente codificadas.

MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Creemos que una reforma del plan de estudios debe tomar en consideración que la actualización será total y continuada cuando la actualización de los programas de estudio de las asignaturas sea periódica.
Esta propuesta se encuentra anclada en la necesidad de acoplar la renovación de los contenidos al dinamismo de la transformación del derecho y el conocimiento del esfuerzo institucional que implicaría lograr esas metas mediante procesos globales de reforma y participación en la misma.
Por ello, la instrumentación de un mecanismo de actualización periódico que coordine la participación la Secretaría de Asuntos Académicos, el Consejo Directivo, los Institutos, las Cátedras y el alumnado permitiría sostener la reforma del plan de estudio manteniendo la dirección que proponemos para nuestra carrera.
En este sentido, la modificación del Anexo I de la Resolución N° 356/09 permitiría ampliar la función de análisis del Consejo Directivo a cuestiones materiales, respecto de las cuales emitiría un dictamen que abriría una comunicación con la cátedra de que se trate.
Asimismo, podría instrumentarse el archivo de todos los procesos actualización como forma de generar un registro de estos procesos parciales para aquellos que, como nosotros hoy, emprendan en algún momento una reforma amplia y plural del plan de estudios.

PERFIL PROFESIONAL DE LOS EGRESANTES
El perfil de los egresantes que pretende formar nuestra facultad debe relacionarse con las necesidades, el desarrollo y las relaciones económico-sociales del país y la región. La Universidad pública no debe abstraerse de esas variables, porque debe ser uno de los principales motores del desarrollo nacional y de la justicia social, porque de no hacerlo solo se diferenciaría de las universidades privadas por su administración y por su financiamiento.
La currícula actual tiende a transitar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la exclusiva óptica del abogado litigante y descuida otros aspectos del ejercicio profesional cuya importancia social es mayúscula.
Nuestra casa de estudios extiende su área de influencia en la capital de la Provincia más grande e importante del país. En la ciudad de La Plata se encuentra la sede de los tres poderes de gobierno provincial y –consecuentemente- una importantísima cantidad de egresados se desarrollarán profesionalmente en el sector público, que a su vez ha sido uno de los motores de la recuperación del empleo en los últimos años.
Sin embargo, los contenidos que actualmente se imparten continúan privilegiando la formación de profesionales liberales. El derecho administrativo suele ser abordado de modo unilineal, desde la óptica del abogado que litiga contra el Estado. No hay formación para abogados que se desempeñen en el sector público. Mucho menos, formación para futuros dirigentes que quieran incursionar en el escenario político
La orientación académica hacia un abogado volcado a la actividad política o administrativa debe privilegiarse, sobre todo en una Universidad como la nuestra que se encuentra ubicada en la ciudad que alberga a los principales órganos de gobierno de la provincia, lo que implica una enorme demanda de profesionales del derecho adecuadamente formados para la actividad pública.
En este mismo sentido, hoy se destaca en nuestro país la recuperación de la investigación y la repatriación de gran cantidad de investigadores -otrora expulsados por políticas regresivas.
Esto último permitió la construcción de un relato teórico-científico desde una perspectiva latinoamericana que da cuenta del proceso de expansión de derechos al cual asistimos. Todo ello en el marco de una política presupuestaria favorable a la investigación y la educación pública.
Por ello, creemos que la Facultad debe profundizar el perfil de los abogados investigadores aumentando los recursos que se destinan a esos fines.

CONCLUSIONES
Tomamos como ejemplo a los compañeros Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes condujeron el proceso de expansión de derechos en el cual participamos, entendiendo nuestra disciplina con un sentido transformador de la realidad social Argentina, y llenándonos de orgullo por su condición de egresados de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, perteneciente a la ya centenaria Universidad Nacional de La Plata.
Como queda expuesto en este documento, creemos fervientemente que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales debe formar abogados que, independientemente de la rama profesional en que continúen, tengan un fuerte compromiso social. Es necesario tomar en serio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que estamos formando actores sociales que, desde su lugar, van a influir en el devenir de nuestra sociedad.
Nuestra casa de estudios debe aprovechar este proceso de discusión y reforma para comprometerse decididamente con las cuestiones sociales, constituyéndose en una herramienta de cambio que contribuya a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Sólo así logrará que sus futuros egresados continúen y profundicen el camino transformador que la Argentina recorre.

“la Universidad tiene que participar activamente en la revolución científico-técnica, no sólo cultural sino también económico y política” (Rodolfo Puiggrós)
ABOGADOS LA CÁMPORA

PROYECTO N° 59 Proyecto del Consejero Estudiantil Damián BRUMER y Colectivo de Abogados Populares “La Ciega”, remite reflexiones acerca de la reforma del plan de estudios, el perfil social del abogado, la formación del abogado de hoy, la enseñanza en universidades popular, y propuesta de nuevos contenidos curriculares
La Plata, 18 de noviembre de 2011.-
Propuesta para la Reforma del Plan de Estudios
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de la Plata

MIU – Movimiento Independiente Universitario
Colectivo de Abogadxs Populares “La Ciega”

Sobre el trabajo realizado
Si bien el debate institucional para la reforma del Plan de Estudios se inició en el Consejo Directivo en el mes de mayo de este año, desde el MIU hemos impulsado este debate en la facultad desde nuestra conformación como agrupación en el año 2002. Del fruto de esas discusiones acerca de la orientación y contenido de nuestra carrera, surgieron un sinnúmero de actividades que hemos desarrollado dentro de nuestra facultad con el fin de abonar de manera profunda al debate sobre nuestro futuro rol profesional, el perfil con el cual se

nos forma, el plan de estudios vigente y consecuentemente el cambio y la transformación que creemos necesaria. A partir de la conformación del Colectivo de Abogadxs "La Ciega" en el año 2007, continuamos desarrollando esta línea de pensamiento y producción en conjunto entre estudiantes y graduados, dando un paso más en la experiencia práctica de un perfil de abogadxs críticos comprometidos con las problemáticas populares.
Entre las actividades mencionadas resulta interesante destacar la producción de 12 ediciones de la Revista "Praeter Legem": la primera revista independiente de los estudiantes de derecho donde abordamos diferentes temáticas de actualidad nacional e internacional desde un punto de vista jurídico, entrelazando diversas problemáticas o realidades sociales con abordajes alternativos del derecho inexistentes en la gran mayoría de las cursadas de nuestra facultad. Con la misma tónica organizamos las Jornadas de Derecho Crítico durante 5 años consecutivos, intentando también aportar al vacío que tiene nuestra Unidad Académica en cuanto al abordaje y producción de conocimiento crítico sobre nuestra disciplina, espacios donde impulsamos el debate interdisciplinario, el intercambio de ideas y la producción colectiva del conocimiento en contraposición a la estructura áulica histórica donde el docente es dueño casi absoluto del conocimiento que le imparte a sus "alumnos". Decenas de panelistas (entre docentes de esta y otras Universidades, militantes políticos, académicos, etc.) y cientos de estudiantes y graduados participaron a lo largo de estos años en discusiones de género y derechos de las mujeres, derechos humanos, derecho laboral, problemática carcelaria y derecho penal, problemática de tierra y vivienda, derecho ambiental, comunicación y cultura, entre muchas otras.
La comisión de trabajo barrial, la comisión de trabajo en cárceles, la comisión de género, la comisión de cultura y la comisión de derechos humanos, también han sido espacios de participación sustanciales de debate y producción de derecho crítico en la práctica, desde los barrios con trabajos continuados sobre diversas problemáticas de los sectores populares, realizando talleres sobre prácticas policiales, derecho a la vivienda, derechos de los migrantes, etc. En las cárceles con estudiantes privados de su libertad y con población común; en la facultad trasladando discusiones en torno al género y la diversidad sexual (despenalización del aborto, trata de personas, prostitución, matrimonio igualitario, identidades sexuales, acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia), y por otra parte debates sobre la cultura latinoamericana y la influencia de la globalización y del sistema capitalista, la contracultura y las identidades culturales y derechos de los pueblos originarios. Y por último desde la comisión de derechos humanos generando un nexo entre la facultad y los juicios históricos que se desarrollan en La Plata por crímenes cometidos durante el genocidio llevado adelante durante la última dictadura cívico-militar, un tema casi ausente en nuestro paso por la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. Además de los trabajos prácticos en sus terrenos específicos, desde estas comisiones también se han elaborado producciones de derecho crítico sobre sus temáticas concretas que abonan a los abordajes que pretendemos esenciales para una formación seria e integral.
Asimismo los ciclos de cine, charlas-debate, talleres literarios y demás actividades desarrolladas dentro y fuera de la facultad, entendemos han aportado también a apalear la formación, análisis y debates ausentes en una facultad abocada a repetir los artículos de un código o a escuchar los "logros" que el titular de cátedra tuvo a lo largo de su profesión, salvo contadas excepciones.
Esta reseña sucinta y sintética no sólo pretende plasmar en pocas palabras el trabajo desarrollado durante 9 años, sino también aportar nuestro trabajo y producción a una eventual reforma del plan de estudios.
Con idéntica línea de actuación, intervinimos a través de nuestro Consejero de base por la minoría estudiantil en el Consejo Directivo, en la sesión en la cual se aprobó el proyecto presentado por el Decano y la Secretaria Académica para dar inicio al debate sobre la reforma del Plan de Estudios. En ese marco planteamos una serie de modificaciones y/o aclaraciones al proyecto oficial, logrando 3 cuestiones fundamentales: por un lado que las 6 comisiones temáticas creadas para la discusión incorporen como eje primordial cuál es el perfil profesional al que se quiere apuntar desde la facultad, por otro lado la apertura de las 6 comisiones a toda la comunidad universitaria que quiera participar (estudiantes, docentes, graduados, agrupaciones, cátedras, trabajadores no docentes, institutos, etc.) y que el debate no se circunscriba únicamente a los 16 consejeros, y por último logramos la extensión del plazo para el debate en comisiones y la presentación de propuestas con posibilidad de prorrogarlo, entendiendo que un proceso de semejante importancia requiere de un debate serio, profundo y con tiempo suficiente para alcanzar una reforma verdaderamente integral.
Entendemos que estas 3 líneas directrices debieran guiar el debate sobre la reforma del Plan de Estudios hasta el final, para garantizar una modificación genuina del plan de nuestra carrera.
A partir de que el Consejo Directivo aprobó el proyecto mencionado, nos dimos las tareas que desde nuestras posibilidades pudimos llevar a cabo, participando de un gran número de reuniones de las 6 comisiones temáticas, difundiendo la existencia de las mismas en la facultad para que más docentes y estudiantes participen, escuchando y dialogando con los docentes de las cátedras convocados por las comisiones y analizando las propuestas presentadas. Además impulsamos desde el MIU conjuntamente con "La Ciega" la Comisión Interclautros para la Reforma del Plan de Estudios, un espacio desde el cual elaboramos propuestas, participamos de las 6 comisiones temáticas del Consejo, centralizamos sus discusiones y socializamos los diferentes proyectos presentados.
A su vez, participamos activamente del foro de debate sobre la reforma del Plan de Estudios organizado por el Congreso de Crítica Jurídica desarrollado en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y en el Colegio de Abogados de La Plata los días 13 y 14 de octubre, en el cual participaron las diferentes agrupaciones estudiantiles de la facultad, además de diferentes académicos de esta y otras Universidades de América Latina, y organizamos las 5tas Jornadas de Derecho Crítico –declaradas de interés académico por la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y por la Facultad de Cs. Sociales de la UBA- tomando como uno de sus ejes principales la reforma del plan de estudios.
Sobre la bese de lo efectivamente realizado a lo largo de estos últimos meses y a lo largo de estos 9 años de trabajo, elaboramos esta propuesta general con algunas de las principales líneas teóricas y prácticas que consideramos esenciales a la hora de pensar una eventual reforma al plan vigente.

Universidad – Derecho Crítico
Partimos de entender que la Universidad es un producto histórico y político. Como institución, está diseñada para cumplir un rol determinado dentro de la sociedad actual. Como la misma es una sociedad dividida en clases, capitalista, la Universidad despliega dos funciones elementales para mantenerla y reforzarla. Por un lado, produciendo mano de obra calificada para afrontar las exigencias del sistema productivo/cultural (conformado por el mercado, las grandes empresas y Estados). Así, se nos forma para adaptarnos a las feroces reglas del mercado y a trabajar para servir a las necesidades de las empresas (la Ley de Educación Superior lo expresa textual: "El conocimiento es un servicio que se vende según la demanda"). Por el otro, refuerza la base

ideológica dominante. Es en ese lado donde se ubica la "ciencia jurídica". Esto se observa no solo en los planes de estudio, en las argumentaciones teóricas de las Cátedras y en los autores que tenemos que leer, sino también en las formas educativas dentro del aula. Allí, el conocimiento no se construye entre los actores (docentes y estudiantes), sino que se reproduce en sentido lineal del docente (incuestionable poseedor de saberes) hacia el estudiante (totalmente deslegitimado y vacío de saberes). Esto, naturaliza no solo las relaciones de poder, sino también el individualismo y la apatía por desarrollarnos como futuros profesionales críticos, reflexivos y constructores del conocimiento.
A pesar de eso por medio de diferentes luchas se logra abrir espacios para introducir el pensamiento crítico. Apostamos a que por medio de variadas grietas que se abren, podamos aportar aquí y ahora, a través de prácticas político-académicas, a las diferentes luchas por democratizar la universidad logrando la conformación de espacios para introducir un pensamiento crítico y un conocimiento diferente. Pues si quedamos posicionados solo desde la denuncia del carácter de clase del derecho, no veríamos en él su potencial como una herramienta para la lucha. Hacemos referencia a la edificación de un modelo académico capaz de construir un conocimiento que no se contradiga con los intereses y necesidades de la clase trabajadora, que son los de todos aquellos que queremos recuperar la voluntad colectiva de un cambio transformador. Así las cosas y dado a nuestro inconformismo y a la convicción de que las cosas no están dadas de una vez y para siempre, nos organizamos como estudiantes para transformar la Universidad que tenemos en la Universidad que queremos. Por eso es que a la par de la lucha por una transformación social de raíz, desplegamos nuestra intervención política especialmente en dos sentidos. Por un lado, aportando al desarrollo de un movimiento estudiantil participativo, unitario, democrático e independiente de las autoridades. Porque solo así, podremos conquistar nuestros derechos e intereses, recuperando el rol histórico de los Centros de Estudiantes, construyendo una Universidad pública, autónoma, científica, gratuita, crítica y de calidad. Por el otro, (y complementándose con lo anterior), debatimos y producimos conocimiento crítico, junto con graduados y docentes, en la teoría y en la práctica, disputando las concepciones hegemónicas con que se nos forma, porque "las ideas dominantes de una época, son las de la clase dominante". Utilizamos las herramientas que obtenemos en la facultad, poniéndolas en crisis con la realidad y reorientándolas para servir a la lucha de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Porque rechazamos ser reproductores de la injusta sociedad en que vivimos y creemos en la necesidad de construirnos como profesionales transformadores de la realidad.
Rol del profesional
Desde hace años ponemos en crisis la formación que recibimos a lo largo de la carrera, que nos presenta al Derecho como una ciencia neutral, objetiva, alejada de cuestiones políticas, económicas y sociales. No ingenuamente nuestro plan de estudios se estructura en base al derecho privado, que solo se encarga de la protección de intereses patrimoniales, apuntando así a la formación de profesionales con una visión individualista y comercial. Entendemos que debemos ejercer nuestra profesión defendiendo los intereses del pueblo, aplicar nuestros conocimientos para poder frenar la ofensiva criminalizadora del Estado, pero al mismo tiempo generar la ofensiva jurídica en beneficio del cambio que buscamos. El derecho vigente es sin duda un instrumento del Estado para poder legitimar la condición de opresión y explotación del conjunto del pueblo en provecho de un sector reducido de la sociedad. Sin embargo, entendemos también que el derecho puede ser utilizado en beneficio de la transformación social, aprovechando las contradicciones que el sistema jurídico nos presenta. El uso alternativo del derecho debe consistir en combatir el fetichismo de la ley, propio del jurista formado en la dogmática, impregnado íntegramente por la versión liberal-tecnocrática y positivista de su oficio. En edificar la conciencia del carácter inevitablemente ideológico y político, tanto del derecho como de la profesión. Ningún cambio saldrá de una reforma legislativa o de un antecedente jurisprudencial sin que haya un cambio de raíz en el sistema político y económico, el cual vendrá a través de la organización, la acción colectiva, y la lucha por una sociedad, sin oprimidos, ni explotados.
Una reforma verdaderamente integral
Entendemos que la reforma no debe limitarse sólo a pensar en agregar o sacar dos o tres materias, sino que también es fundamental repensar el método pedagógico de enseñanza y la estructura de la carrera y de la facultad en su conjunto. La inexistencia histórica de cursadas para todos resulta un limitante sustancial que ineludiblemente debe revertirse garantizando a todos los estudiantes el derecho a asistir a espacios áulicos de construcción de conocimiento colectivo entre docentes y estudiantes, en el marco de los cuales el análisis, la reflexión, la crítica, el cuestionamiento y el estudio real de los contenidos curriculares sean prácticas cotidianas y no excepcionales, donde los y las estudiantes contemos con docentes formados en la docencia y no sólo en el derecho, que propongan alternativas de estudio diferentes a las convencionales.
De la mano de lo previamente mencionado y a fin de hacer efectivo el acceso irrestricto a las cursadas por promoción garantizándose la libertad de cátedra, el sistema de números de sorteo para acceder a una materia debe ser abolido. Para esto, la existencia real de las bandas horarias como en tantas otras facultades, sumado a una política seria y transparente de concursos docentes periódicos, debieran ser prioridades a la hora de impulsar una modificación integral de nuestro plan de estudios.
En el mismo orden de ideas, la necesidad de repensar el régimen inquisitivo de mesas de exámenes libres donde repetimos lo que dice un libro sin siquiera cuestionarlo, las clases "magistrales" de algunos docentes que nos cuentan sus logros en el ejercicio de su profesión y nos vamos de la clase sin decir una sola palabra, la duración igualitaria de horas cátedra en distintos tipos de materias, la falta de perspectivas de derechos humanos de las diversas materias como eje transversal, la necesariedad de una carrera más práctica que nos prepare mejor para ejercer la profesión, son algunas de las tantas cuestiones a debatir para una reforma verdaderamente integral.
Asimismo, debe reverse el curso de ingreso pero siempre partiendo de la base de lo previsto en el Estatuto de la UNLP en canto garantiza el acceso irrestricto a la Universidad. Nuestra facultad debe hacer eco de esta normativa generando todas las alternativas necesarias para una genuina inclusión de todos y todas, dejando atrás cualquier tipo de mecanismo eliminatorio y excluyente: como la necesidad de un puntaje mínimo o la aprobación de exámenes, entre otros. En este sentido, será fundamental reorientar la modalidad y el contenido del ingreso teniendo en consideración la falencia en la formación media de los aspirantes a una carrera de la universidad, producto de la degradación de la educación pública primaria y secundaria.
Una reforma que sea integral, sólo será una reforma que vaya de la mano de una facultad verdaderamente inclusiva, democrática, científica y popular.

Algunas propuestas concretas
Algunos de los debates desarrollados en estos meses, incluyeron el debate sobre la cantidad de horas cátedra con las que deben contar las carreras de grado. En este punto se concluyó que nuestra facultad se encuentra

en un termino medio de esta carga, con lo cual a la hora de pensar contenidos curriculares esta en buenas condiciones como para agregar materias en caso de pensar nuevos contenidos, sin la necesidad de quitar otras, por lo cual todas nuestras propuestas van en el sentido de profundizar y complejizar la formación de los futuros y futuras abogad@s.
Yendo al meollo de la cuestión como agrupación estudiantil y colectivo de abogados, proponemos y apoyamos algunas modificaciones concretas que hoy están en debate en este proceso.
-Contenidos transversales: los derechos humanos desde una perspectiva integral:
A nuestro entender, en la sociedad de hoy hay dos ejes que deberían ser abordados de una manera general a lo largo y ancho del plan de estudios. Uno de esos tópicos es la posición frente a los Derechos Humanos. Dentro de lo que son los avances normativos en materia de derecho internacional, la inclusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional y el respeto estatal que casi todos los Estados del mundo propugnan defender, sumado al momento de la historia por el cual atravesamos, incluyendo las luchas sociales que se vienen llevando a cabo a lo largo de las últimas décadas en el mundo y en espacial en América Latina, resulta necesario que todas las materias sean enfocadas desde esta óptica, y que la preeminencia de estos derechos en términos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos, por sobre cualquier otro que se intente interponer, debe ser el modo en que se enseñe el derecho en nuestra facultad, sin perjuicio de la inclusión de una materia autónoma sobre esta categoría de derechos.
De este modo proponemos que en el marco de esta reforma quede como tarea principal modificar los programas de estudio para que en todas las materias se de un enfoque en derechos humanos.
-Otro tópico fundamental, creemos es el de la cuestión de género y la preeminencia hetero-patriarcal que existe en nuestra sociedad y que evidentemente se refleja en el derecho. Este eje creemos debe ser problematizado y abordado desde una perspectiva transversal a todo el contenido enseñado. Si bien han habido avances en términos de derechos civiles, lo han sido muy pocos en términos penales (aborto, femicidio), socio jurídicos, filosóficos, políticos, etc. Con lo cual también proponemos que se incluya la perspectiva de género y se debata y estudie en todas las materias de la carrera.
-Lugar a ocupar por el Derecho Social: en este punto adherimos completamente al dictamen presentado por el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP en especifico los apartados IV y V en tanto reflejan una opinión compartida sobre el lugar que ocupa y debería ocupar la materia, en un plan de estudios que hoy claramente está perfilado a formar abogados de tinte privatista y no social.
También compartimos en el análisis que en dicho dictamen se expresa a una crítica que se podría definir como súper generalista y poco estimulador de los contenidos del plan de estudios y de la poca relevancia a la investigación-acción que se promueve. En este punto nos resulta muy interesante un esquema que traemos de la organización curricular de la Universidad Nacional del Comahue, donde en un intento de estimular, el conocimiento y el interés particular de los y las estudiantes, proponen el curso obligatorio de tres seminarios orientados a una especialidad, ya sea penal, civil, laboral, socio jurídica, etc. A los fines de lograr un hibrido que nos permita no modificar la formación integral de los abogados, pero sí permitir adquirir conocimientos específicos, sobre materias que resulten de mayor interés y perspectiva para su futuro ejercicio profesional.
Esto a su vez tiene como ventaja que los formatos de los seminarios sean desarrollados desde una propuesta pedagógica diferente, donde el estímulo por la investigación, las teorías que permiten desarrollarla y la producción de conocimiento de manera creativa, autónoma, critica e independiente permita desarrollar en los estudiantes un nivel de empoderamiento de las temáticas desarrolladas mucho mas profundas que en los esquemas clásicos de enseñanza.
-Por otra parte y siendo una histórica posición de nuestras organizaciones la de estar en contra de cualquier arancelamiento del acceso a la educación, se podría lograr un reconocimiento a la especialización de los estudiantes, que no cuentan con la posibilidad de realizarla en cursos de post grados, siempre costosos y exclusivos para una pequeña elite social. En ese sentido, insistimos en la necesidad de garantizar la gratuidad de los post grados brindados por la UNLP y en espacial aquellos que dependen de nuestra facultad.

Sobre la injerencia de la LES y la CONEAU
Entendemos que la reforma del plan de estudios no debe ni puede ser enmarcada bajo los lineamientos de la Ley de Educación Superior (LES), debiendo dejar de lado a su vez toda participación en el proceso de reforma a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esta comisión, creada por la LES y siendo el organismo ejecutor de la misma, viola sistemáticamente la autonomía universitaria ya que, como organismo externo a la universidad, tiene injerencias en las determinación de planes de estudios, programas de materias, así como también en relación a la distribución presupuestaria.
La Ley de Educación Superior, sancionada en el año 1995 durante la década menemista, posee un claro espíritu mercantilista, entendiendo a la educación superior no como un derecho sino como un servicio, y como tal ligando el proceso educativo a las lógicas del mercado.
Es así, que esta ley ha ido avanzando en las distintas universidades nacionales del país de diferentes formas. Por un lado, cediéndole intervención a sectores privados, no solo desde el punto de vista económico (la LES reconoce a los sectores privados como medios de financiamiento alternativo o adicionales al aporte educativo del Tesoro Nacional; en relación a este aspecto la LES ha avanzado en nuestra facultad, a través –por ejemplo- de la concesión a particulares de los servicios que brinda la institución a la comunidad académica), sino también direccionando el conocimiento en beneficio de estas empresas y en desmedro de las necesidades de los sectores mas postergados.
Otro aspecto a destacar es la esencia privatista de esta ley, que crea un organismo externo para “evaluar y acreditar” la educación superior, en base a parámetros de “calidad” propios del neoliberalismo y que en la práctica ha dejado en claro los objetivos de la CONEAU para la educación superior: el avance hacia la privatización de la universidad pública. En este sentido, en el marco de reformas de planes de estudios en las cuales la CONEAU ha tenido injerencia, este organismo ha impulsado políticas relacionadas al achicamiento de los contenidos de las carreras de grado y la creación de carreras de posgrado aranceladas, lo cual acarrea dos consecuencias fundamentales: por un lado la desvalorización académica de las carreras de grado, y por otro el avance hacia el arancelamiento de la universidad pública.
Entendemos que la reforma que se lleve a cabo en nuestra facultad no puede de ningún modo estar direccionada a los intereses de la LES ni la CONEAU. Debe ser una reforma discutida entre todos los miembros de esta institución y persiguiendo los intereses de los estudiantes que van a recibir su formación en base al plan que hoy se discute.

Necesidad de un debate serio, amplio y masivo sobre el proyecto a discutirse en el año 2012

Entendiendo la magnitud que implica la reforma de un plan de estudios en una carrera universitaria: instrumento por el cual se puede marcar o indicar una línea de pensamiento y de construcción, tanto respecto del perfil del abogado que egrese de la facultad, como en relación a cuáles serán las materias o áreas que desde la orientación que posea el plan de estudios, se les dará mayor o menor importancia en el mismo, creemos en la imperiosa necesidad de que el proyecto sea debatido de manera plural, masiva y extensiva a todos los integrantes de la comunidad universitaria de nuestra facultad.
Porque como lo indica la historia, luego de una reforma transcurren muchísimos años para que se lleve adelante otra modificación a la estructura de un plan. Por lo cual, el momento de su aprobación, deliberación o planificación, es el punto central de participación masiva y responsable.
En este marco, el plan de estudios muchas veces se transforma en una parte más dentro de la estructura de la universidad, que trata de organizar, jerarquizar y direccionar el conocimiento, tendiendo a la reproducción de relaciones vigentes en un determinado sistema imperante. Por ello, el debate no debe ser desarrollado e implementado de manera unidireccional, desde los docentes hacia los estudiantes, o desde las autoridades hacia el resto de la comunidad universitaria. Sino que se debe acudir a la experiencia enriquecedora de la discusión en todos los planos y propugnar por una horizontalidad que garantice que se escuchen las voces de todos y todas.
Es en la instancia deliberativa donde todos los sujetos pueden y deben expresar sus posiciones y proponer diferentes temas para la discusión colectiva. Siendo ésta, una política que entendemos, debe llevarse a cabo en el desarrollo y toma de las decisiones que hacen a la cotidianeidad de la facultad.
En base a lo antes expuesto, seguiremos trabajando y aportando; encausando nuestras acciones para lograr una mayor pluralidad de opiniones, en un aspecto que en definitiva va a repercutir sobre la vida de todos los integrantes de nuestra Unidad Académica y sobre la sociedad en general.
MIU - Movimiento Independiente Universitario
Colectivo de Abogadxs Populares "La Ciega"

PROYECTO N° 58 Proyecto del Prof. Abog. Sergio Palacio, Profesor Adjunto de "Filosofía del Derecho", remite reflexiones acerca de la importancia del plan de estudios, su vinculación con el perfil profesional y enseñanza del derecho, evaluación crítica del proceso de reforma y propuesta de ejes esenciales que debe contener el proceso reformista

Esquema de Propuestas para la Reforma del Plan de Estudios
La presente contiene algunas líneas esquemáticas de propuestas pasibles de tener en cuenta en la Reforma del Plan de Estudios
Líneas Generales
1) Es importante ***no restringir la Reforma al Currículum formal***. Básicamente al Plan de Estudios como tal, dado que las investigaciones educativas permiten inferir que los procesos que transcurren en el desarrollo del currículum material, impactan fuertemente en el resultado de los aprendizajes y de la calidad educativa, dado que es ese currículum, asumido como una integralidad, el que "llega al aula" de manera concreta. Mucho más que los aspectos formales que se consignan en los Planes de Estudio Tradicionales.
En este sentido, resulta aconsejable incluir líneas de acción programática, que no generen cambios traumáticos, pero que sí permitan paulatinamente contextos o tendencias a la mejora sustancial del currículum material.
Sobre ello se explicitarán algunas líneas o esquemas.
2) Tendiente a ***articular de mejor manera el Plan de estudios con el mundo profesional del trabajo***, y siguiendo tendencias internacionales, resulta aconsejable formular el diseño general en términos de formación por competencias profesionales, y explicitar que los Programas de estudios se reconviertan en esos términos.
No solamente los acuerdos internacionales para la Educación Superior asumen esa orientación, sino que algunos acuerdos internacionales para formaciones específicas de los Abogados como pueden ser la formación judicial, también asumen esa postura.
Augusto PÉREZ LINDO en un reciente Informe sobre la Educación Superior ("Prospectiva de la Educación Superior Argentina 2020", pág. 6 Paper elaborado para la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Plan Estratégico Nacional de CTI "Bicentenario" (2006-2010)) señala la preocupación por la falta de articulación de los Planes de Estudio de Abogacía con el mundo del trabajo.
3) En el mismo Informe PEREZ LINDO señala que "las facultades de derecho, deberían incluir en los planes de estudio los temas esenciales de la gestión pública." Ello resumiendo un déficit de formación en ese sentido y advirtiendo que de otro modo, esa formación queda circunscripta exclusivamente al pos grado, cuando las estadísticas indican que 1 de cada 3 Abogados se desempeñará en el Estado, sea Ejecutivo, legislativo o judicial (Se puede ver al respecto el Informe de FACA "Abogados, percepción pública y Justicia")
4) De manera transversal o específica, debería incluirse formación en investigación pues ello resulta fundamental en la enseñanza superior.

Líneas específicas
En los aspectos específicos podrían tenerse en cuenta varias orientaciones que vayan planteando un escenario de mejora paulatina.
1) ***Formulación de los programas***: los mismos deberían reformularse en términos de competencias profesionales y con estructura homogéneas en los aspectos del currículum material.
Cómo mínimo deberían explicitar:
Ítems del perfil general que desarrollarán;
Objetivos Generales y específicos;
Objetivos por unidad;
Contenidos desarrollados en base a núcleos problemáticos y a la indagación de tópicos y temas;
Metodología de enseñanza;
Criterios y múltiples modalidades de Evaluación y cómo ellas deben estar al servicio del proceso de aprendizaje;
2) El Plan de Estudios debería ***fijar líneas generales tanto de enseñanza y de Evaluación*** para lograr relativa congruencia.
En este sentido pueden mencionarse:
Las Asignaturas no deben estar claramente aisladas, sino tendiendo a una progresiva integración. Un paso intermedio podría ser fijar ejes socio profesionales y redondear la necesaria integración entre las asignaturas,

no a partir de la metodología tradicional de la correlatividad, sino articulando desde el abordaje basado en la indagación de tópicos y temas que representen aristas diversas, susceptibles de una mirada inter-materias;
Un porcentaje de los temas a dar durante el curso, debería poder ser propuesto como temas de actualidad por los Alumnos;
Debería fijarse claramente la metodología de selección de los temas a abordar cuando la falta de tiempo no permite impartir el programa íntegramente;
Las metodologías de enseñanza deben estar orientadas, haciendo referencia a las que permiten un aprendizaje significativo y participativo. En general los Documentos curriculares de los Planes de Estudio suelen contener detalle sobre las metodologías incentivadas, limitando el uso de aquellas que solamente abonan la enseñanza formal, pasiva y dogmática;
Podría fijarse un plazo de transición para la paulatina formación en competencias docentes de los Profesores. Sea ella mediante la formación que Universidad ha establecido o de otra dispuesta al efecto. Pero resulta inconcebible que no se exija una formación específica. Por caso fijando un plazo de entre 5 a 10 Años en el mediano plazo se contaría con un Plantel Docente completamente formado;
La inquietud a este respecto de los propios Docentes la hemos percibido en los Cursos de Capacitación Docente.
Podrían fijarse algunas líneas de incentivo a la práctica de la expresión escrita y oral, para que sean abordadas de manera sistemática en los Cursos;
La FACA ha aprobado un Curso de Iniciación Profesional que algunos Colegios están aplicando obligatoriamente. Dicho Curso se basa en una propuesta que formulamos. Cuando se realiza la formación de formadores de los Colegas que imparten el Curso suele, en los talleres, surgir la pregunta: ¿Por qué no se enseña esto en la Facultad?
Algunas de las cuestiones pueden ser abordadas, mediante especificaciones en las Prácticas o de manera transversal, pero colaborarían con la formación del nivel profesional y reducirían las críticas a la falta de formación práctica. Por otro lado integran el bloque de tránsito de los países que han separado la titulación de la habilitación profesional por lo que sería una respuesta clara y concreta a estos embates.
La Facultad posee varias iniciativas, pero se trata de fijar líneas metodológicas que tornen a la formación en sistemática.
A los efectos ilustrativos se explicita la formulación del Curso para advertir que varios aspectos pueden ser incluidos.

Cuestiones Ético Profesionales

Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
Conocer los principios y normas Éticas	Diagnosticar en los casos concretos el signo de situaciones éticas concretas	Comprender el valor para la Abogacía y la sociedad de la conducta adecuada a las normas Éticas
Conocer los Derechos y Obligaciones derivados de la colegiación legal obligatoria	Cumplimentar las normas derivadas de la colegiación legal obligatoria	Comprender el sentido de ejercitar un trato respetuoso y leal con los colegas y con la colegiación
Conocer el Régimen Disciplinario	Expresar conductas acordes a las normas Éticas en su relación con el Cliente, con los colegas, con la Justicia y con la sociedad	Valorar el sentido de la Responsabilidad Ético Profesional
Conocer los principios de la seguridad social y previsional colegial	Cumplimentar las normas previsionales	Valorar el sentido solidario de la seguridad social y previsional colegial

Cuestiones Práctico Profesionales

Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
Conocer técnicas básicas de entrevista con distintos protagonistas jurídicos	Aplicar técnicas de entrevista con distintos protagonistas jurídicos	Comprender el valor de relacionarse adecuadamente con los distintos protagonistas jurídicos
Conocer los aspectos necesarios que definen la relación con el cliente	Relacionarse con el cliente adecuadamente, mantener comunicación transparente, dialogo fluido, y trato digno	Valorar al cliente como sujeto de Derecho y como persona
Conocer los modos básicos de organización del estudio	Diseñar un sistema de organización para las actuaciones procesales mas comunes	Aprehender el sentido de la organización del estudio para el mejor cumplimiento de las responsabilidades profesionales
Conocer técnicas de confección de documentos básicos comunes (cartas, escritos, etc.)	Redactar con autonomía documentos básicos comunes (cartas, escritos, etc.)	Valorar la adecuada confección de documentos básicos comunes y su utilidad profesional
Conocer los usos comunes de los tribunales y oficinas publicas del lugar	Realizar la procuración con diligencia y eficacia	Actuar con autonomía y adecuadamente en los tribunales y oficinas publicas del lugar

Conocer las relaciones profesionales entre Abogados, Procuradores, Escribanos y Contadores	Distinguir las funciones e incumbencias que corresponden a Abogados, Procuradores, Escribanos y Contadores	Valorar la conveniencia de la defensa de las incumbencias profesionales
Conocer las condiciones de acceso y ejercicio profesional en Argentina	Distinguir las distintas formas de ejercicio (local, federal)	Valorar las distintas formas de ejercicio (local, federal)
Conocer la organización colegial de la Abogacía argentina	Distinguir las características, estamentos, y funciones de la organización colegial	Valorar el sentido de la organización y la actividad colegial
Conocer el servicio de atención gratuita	Desempeñarse en el servicio de atención gratuita	Comprender la función del servicio de atención gratuita en el marco de garantía del acceso a la Justicia
Conocer las distintas posibilidades de organizar el ejercicio profesional	Distinguir ventajas e inconvenientes de las distintas posibilidades de organizar el ejercicio profesional	Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas posibilidades de organizar el ejercicio profesional
Conocer las normas de honorarios profesionales y los principios que las sustentan	Realizar cálculos de Honorarios	Valorar la adecuada fijación de Honorarios
Conocer la normativa básica aplicable contable y fiscal	Cumplimentar la documentación fiscal y contable requerida	Comprender el sentido del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de un adecuado ordenamiento contable
Conocer las distintas prestaciones de la previsión social de la Abogacía	Gestionar su cobertura en el ejercicio profesional	Valorar la necesidad de cobertura de la jubilación y la asistencia medica
Conocer los distintos documentos notariales y registrables habituales	Distinguir los distintos documentos notariales y registrables habituales y poder seleccionar de acuerdo a cada necesidad	Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar documentos públicos o privados en función del asunto, considerando la conveniencia de utilizar documentos registrables para la preparación del asunto

PROYECTO N° 62: Abog. Sergio BRU y Abog. Dante RUSCONI remiten propuesta de creación de la materia "Derecho del Consumidor"

PROPUESTA PARA LA CREACION DE LA CÁTEDRA DE
"DERECHO DEL CONSUMIDOR"
Por: Jorge Mario Bru (*) y Dante Rusconi (**)
I.. Introducción:
Las siguientes consideraciones, tienen por finalidad, proponer en el marco del proyecto de plan de reformas al plan de estudios de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la inclusión en la currícula oficial de la carrera de Abogacía, de una asignatura autónoma sobre "Derecho del Consumidor", que incluya el estudio metodológicamente organizado de los contenidos de esta moderna rama de la ciencia jurídica, caracterizada por sus novedosas aristas de derecho público, privado, procesal y sustancial.
Asimismo, la propuesta tiende a dar cumplimiento al mandato legal establecido en el art. 60 de la ley 24.240, que en consonancia con el art. 42 de la Constitución Nacional, establece la obligación del Estado de introducir en las currículas educativas oficiales de todos los niveles, los preceptos y contenidos de esta materia, tal y como lo han hecho ya, otras universidades de nuestro país, con distintas modalidades en cuanto a su implementación curricular.
II. El Derecho del Consumidor
Podríamos decir a modo introductorio que el desarrollo de la regulación jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios en el mercado de consumo, ha alcanzado en nuestro sistema positivo un alcance notable en los últimos 20 años. A ello se deben sumar gran cantidad de precedentes jurisprudenciales dictados en aplicación de estas normas de protección, y el desarrollo de una profusa y valiosa doctrina autoral estrictamente destinada a estas cuestiones y que en forma permanente se va renovando al compás de la evolución de esta disciplina.
El derecho del consumidor, a través de sus normas vinculadas especialmente a un derecho preventivo y colectivo, ha traído respuestas jurídicas acordes a los nuevos problemas de la sociedad, que ya no podían ser abarcados con solvencia por las instituciones tradicionales de nuestro derecho positivo.
Las nuevas aristas del mercado, caracterizado modernamente por la producción, la comercialización y el consumo de productos y servicios en masa, además de los complejos procesos de circulación, son las que justifican la existencia del derecho del consumidor, cuya finalidad es diseñar un marco de regulación de este complejo sistema de intercambios económicos masificados, desde la perspectiva de la parte vulnerable.

La sociedad moderna muestra en sus aspectos sociales, culturales y económicos, una realidad distinta de la que regulaba el sistema jurídico del derecho tradicional. La novedosa estructura del consumo, derivada del crecimiento demográfico, las nuevas tecnologías y los avances científicos, reclama el desarrollo de nuevos instrumentos de protección del ciudadano consumidor contra los nuevos riesgos que generan los productos y servicios que permanentemente se renuevan en el circuito económico a través de un proceso anónimo, despersonalizado y burocratizado de producción en serie de bienes de la más variada naturaleza
De tal forma, la necesaria adaptación del derecho a las nuevas circunstancias, exigió la búsqueda de herramientas o instrumentos jurídicos que respondan más adecuadamente a novedosas situaciones de la realidad, En ese camino de readaptación del derecho al nuevo orden, el derecho del consumidor, ha provocado en el sistema jurídico nacional una verdadera transformación, asumiendo como ninguna otra rama de la ciencia jurídica, un papel de relevancia en el proceso de renovación del derecho privado Argentino.
La protección jurídica de los consumidores y usuarios, ha conseguido a través de su relativamente joven desarrollo doctrinario, normativo y jurisprudencial, teñir con sus principios preventivos y protectorios muchas instituciones del derecho clásico cuya adecuación a los nuevos tiempos, era una necesidad que no pudo ser plasmada pese a los valiosos intentos que durante años, especialmente en el campo del derecho civil y comercial, se fueron haciendo.
De la mano de esta rama del derecho, se ha creado un moderno sistema de instituciones jurídicas de protección que presentan características propias y definidas, circunstancia que exige, según nuestro humilde criterio, la profundización de su estudio en las aulas de enseñanza del derecho.
Solo a modo ejemplificativo, vale reseñar que el Derecho del Consumidor ha establecido un específico sistema de protección contractual de consumidores y usuarios, diagramado particularmente a través de la regulación en materia de publicidad abusiva y engañosa, el control de las cláusulas abusivas insertas en los contratos sujetos a condiciones generales (art. 37, 38 ley 24240), el deber de información (Art. 4, 36,), el derecho de arrepentimiento (Art. 34) y el establecimiento de principios interpretativos fijados a favor del consumidor (art. 3º, 37 etc.).
A ello se suma también, un particular sistema de regulación de la responsabilidad civil en este campo, caracterizado por el régimen de garantías de productos y servicios, la novedosa regulación de la responsabilidad objetiva y solidaria no solo por productos, sino también "por servicios" (Art. 40 ley 24240), y más recientemente con la reforma de la ley 26.361, la inclusión en el derecho argentino de la figura de las sanciones punitivas (Art. 52 bis), que ha renovado con énfasis el debate doctrinario sobre esta particular institución, encontrándose incluso prevista su inclusión, en el proyecto de reforma general del Código Civil Argentino con trámite parlamentario en el Congreso Nacional.
Finalmente, la materia alcanza un importante desarrollo en materia de soluciones adjetivas o procesales a las modernas cuestiones de consumo (procedimientos administrativos de reclamo, legitimación colectiva, efectos expansivos de la cosa juzgada, procesos abreviados, gratuidad, intervención del Ministerio Público, etc), culminando con el establecimiento de obligaciones específicas en materia de políticas públicas de protección, las que atienden muy especialmente al control preventivo del mercado de consumo y a la "educación" para el consumo.
En definitiva, el derecho del consumidor ha creado un sistema que contiene:
a) Normas de derecho sustancial: referidas a contratos, responsabilidad civil, sistema legal de garantías, daños punitivos, etc.
b) Normas adjetivas, procesales y procedimentales: procesos abreviados en materia de consumo, gratuidad, legitimación colectiva, efectos expansivos de la cosa juzgada, procedimientos administrativos de reclamación, medidas cautelares, etc
c) normas de derecho privado: las vinculadas a la protección contractual del consumidor, publicidad, oferta, garantías, responsabilidad por daños, deber de información, etc
d) normas de derecho público: sistema administrativo de reclamaciones, sanciones administrativas, indemnizaciones en sede administrativa, impugnación judicial de resoluciones administrativas, políticas públicas de información y educación para el consumo, asociaciones de consumidores, etc.
Ese entramado normativo, que se integra con normas de Derecho Público, privado, procesal y sustantivo, con más los sistemas de instrumentación (políticas públicas), exige a nuestro criterio, el estudio armónico y pormenorizado de sus distintas facetas, especialmente en el ámbito de la Facultad de Derecho, por la innegable actualidad de sus contenidos y el enorme aporte que sus normas efectúan a la realidad de los ciudadanos, transparentando el mercado con miras a una sociedad más justa y equitativa.
En ese aspecto práctico del Derecho del Consumidor, que aborda especialmente los problemas cotidianos del hombre común, adquiere vital importancia el rol del abogado como una herramienta eficaz para obtener la efectiva implementación de sus normas, acercándole herramientas que atienden especialmente al acceso a la justicia en el más amplio de sus sentidos.
De allí que entendemos que la profundización en el estudio de los contenidos de esta asignatura, representa una necesidad que debe ser prontamente canalizada en el ámbito universitario, para ajustar el rol del profesional del derecho al nuevo estado de cosas, colocándolo como el eje de un sistema de protección jurídica de gran importancia social.
III. Régimen normativo objeto de estudio.
El sistema de defensa del consumidor en Argentina se ha estructurado especialmente desde la sanción de la ley 24240 en el año 1993, con una variada gama de normas de diversa jerarquía, que encuentran su punto de cohesión en el art. 3º de la norma referida, la que establece que "sus disposiciones se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial...".
En ese marco de desenvolvimiento normativo, la protección jurídica ha alcanzado puntos máximos de tutela, consagrando por un lado la protección constitucional de los derechos de los consumidores en el art. 42 de la Carta Magna y por otro, estableciendo la ley 24.240 que sus disposiciones protectorias, son de "Orden Público" y por ello inderogables por EL Juez o las partes.
IV. Características propias del Derecho del Consumidor que fundan su autonomía científica:
Esta moderna rama del derecho, presenta como hemos señalado, características propias que exigen su estudio particularizado. Seguidamente detallaremos resumidamente y siguiendo la categorización que oportunamente se efectuara en la obra Manual de Derecho del Consumidor, Cap. I, Abeledo Perrot, Bs. As. 2010, las especiales aristas de esta materia, que conforman sus contornos particulares:
1. En el derecho del Consumidor, cohabitan el derecho público y el derecho privado.
Esta es una materia que se caracteriza, quizás como ninguna otra, por la heterogeneidad de sus contenidos y regulaciones.

En ella conviven el derecho público y el derecho privado a cada paso. El derecho del consumidor no se reduce a una estrecha visión meramente contractual o individualista de las relaciones de consumo, sino que abarca una variada gama de regulaciones normativas que atienden por un lado a la esfera del derecho privado (publicidad, contratos, responsabilidad civil, etc), pero a su vez, extiende sus reglamentaciones a las esferas del derecho público, al determinar por ej., cargas específicas en cabeza de los Organismos del estado en materia de control del mercado, sanción de las infracciones, educación y formación del consumidor, acciones colectivas preventivas, etc.
De allí que el estudio de esta rama del derecho exige desarrollar en la investigación de sus contenidos una perspectiva conceptual integradora de los regímenes jurídicos que regulan las "relaciones de consumo", e incluso una revisión de conceptos clásicos que, al cristal del Derecho Público, adquieren dimensión e interés social.
La trascendencia social de las problemáticas surgidas en torno a las relaciones de consumo, hacen que el Derecho del Consumidor, cuya génesis y desarrollo primario se circunscribió a los "contratos de consumo", hoy sea una disciplina de enormes resonancias, en la cual, cada vez más, se encuentra involucrado el interés público.
De ello surge la necesidad de contar con un Estado activo, que traduzca de manera efectiva la tutela pública obligatoria ante las afectaciones y amenazas que diariamente el mercado renueva como desafío para el goce pacífico de los derechos contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Los problemas de consumo se evidencian cada vez más trascendiendo la mera confrontación de intereses individuales que, en visión tradicional, se producían dentro del marco del vínculo contractual. El afectado individual, ha generado, merced a la comercialización en masa de productos y servicios y la afectación de miles por el mismo hecho, el *afectado social,* quebrándose la "intimidad" de esa relación bipolar de modo de hacerla trascender hacia el interés común, que reclama acciones concretas del Estado para la eliminación de esas conductas abusivas.
2. El Derecho del Consumidor no es un derecho neutro.
El Derecho del Consumidor asume como premisa y razón de su existencia la presunción de la existencia de subordinación estructural de los destinatarios de la tutela legal. Como correlato de ese escenario, recepta diferentes principios e institutos equilibrantes enfilados a llevar Justicia a la relación de consumo. No es un cuerpo normativo aséptico de la realidad en la que interviene. Sino que se compromete con ella, la aprehende apriorísticamente y diseña sus contenidos para revertirla o morigerarla.
Posee también un fuerte contenido ideológico en los preceptos que lo conforman. Sus contenidos, la extensión de la tutela, la amplitud del ámbito de aplicación de las normas, los campos que abarca, etcétera, dan una pauta de la sinceridad del compromiso asumido por el legislador.
El Derecho del Consumidor, para responder fielmente a sus cometidos y consignas, requiere de ideas que reflejen con fidelidad el fin protectivo que le sirve de basamento axiomático. Amén de lo evidentemente contrario a estas ideas, reflejado arriba, la duda o los grises irremediablemente darán paso a situaciones que menguarán la eficacia y fortaleza que necesita un sistema que persiga la protección del grupo de los consumidores.
3. Es un derecho de incidencia colectiva
Derivado de su génesis vinculada a la producción y comercialización masiva de productos y servicios, los problemas de consumo trasladan sus efectos a la sociedad en su conjunto. La contratación por adhesión, el comercio electrónico, las ventas no tradicionales, la publicidad, los servicios públicos y privados prestados en condiciones monopólicas u oligopólicas, etcétera; multiplican la circulación de bienes de consumo, las patologías del mercado y, en su caso, las afectaciones.
La condición de "consumidor" es un rol tan cotidiano que hay quienes, con acierto, afirman que hoy en día son menos los actos que se realizan como "persona" que los que se llevan a cabo como "consumidor" o "usuario"[57] . Entonces, la dimensión cotidiana, social y colectiva de los problemas que le dan su contenido al Derecho del Consumidor, colocan a la materia en un lugar preponderante dentro de las ciencias humanísticas.
Esta dimensión social del derecho del consumidor ha llevado a que sea caracterizado como uno de los típicos *derechos de incidencia colectiva* y de esta forma ha sido contemplado por el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional[58].
La connotación plural de la cuestión también incide en la concepción que el Estado, como responsable de la satisfacción del interés general, debe tener en la temática. Sobre él recae la misión primaria e indelegable de diseñar e implementar políticas y leyes tendientes a brindar tutela eficiente a la colectividad de consumidores, entre las cuales se encuentra sin dudas, la educación o divulgación de estos contenidos conforme lo establece la ley (art. 60 ley 24.240)
4. Es un derecho de tipo preventivo.
La característica de "incidencia colectiva" de las afectaciones que se producen en el mercado de consumo hace que la faz preventiva de la disciplina cobre una importancia preponderante.
La atomización de los perjuicios generados por el tráfico comercial de masas y la prestación de servicios a gran escala, implica un efecto multiplicador difícil de revertir desde la perspectiva tradicional de la reparación del daño causado individualmente. Ante el acaecimiento del perjuicio a muchos, será dificultoso, y hasta imposible en algunos casos, restituir las cosas al estado anterior.
Y las herramientas tradicionales del derecho se han mostrado impotentes para resolver esas cuestiones, pues las dificultades surgen ante la generación de perjuicios a una colectividad de consumidores, supuestos en los cuales la atención recae sobre las herramientas procesales, las que deben contener instrumentos capaces de vehiculizar eficientemente demandas de naturaleza plural. Frente a ello, el derecho del consumidor ha establecido los procedimientos abreviados y gratuitos, las legitimaciones activas amplias, las medidas cautelares preventivas, el efecto expansivo de las sentencias y los dispositivos que permitan encausar la reparación del daño multisubjetivo, y otros instrumentos de justicia ante la afectación plural.

---

[57] SAUX, Edgardo I., "Reflexiones sobre la condición posmoderna y sus proyecciones jurídicas", JA 1995 II 953, Lexis Nº 0003/001938.

[58] Artículo 43 CN – "(…) Podrán interponer esta acción (de amparo) contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización…."

Por otro lado, cobra gran importancia la regulación de la actividad de control del Estado en su función administrativa de vigilancia del mercado y de las actividades de los proveedores, de modo de desalentar con su intervención la proliferación de prácticas comerciales nocivas para los consumidores y la comercialización de productos o servicios potencialmente dañosos.
El fomento de las asociaciones que representen los derechos de los consumidores también contribuye con esta faceta, propiciando que la sociedad se organice a través de entidades que coadyuven con las funciones de control del mercado y la representación de los intereses y derechos afectados.
5. No es un derecho de "menor cuantía". Es una herramienta de efectivo acceso a la justicia.
Muchas veces se cae en la confusión de pensar que el Derecho del Consumidor es un "derecho de menor cuantía". Sin embargo, este preconcepto parte de bases erradas, considerando solo un argumento estrictamente económico para analizar la sustancia de la disciplina cuando, en verdad, la problemática del consumidor tiene su raíz en un cúmulo de circunstancias de diversa naturaleza, de las cuales las económicas son sólo una parte.
La escasa cuantía económica de la afectación se ha identificado desde hace mucho tiempo como un factor que obstaculiza el acceso a la Justicia, al confrontar los costos que implica el asesoramiento y el inicio de una acción judicial, con la entidad del perjuicio. Es en realidad un problema de índole procesal para el que también, amén de otras soluciones, el Derecho del Consumidor ha desarrollado una serie de mecanismos para paliar las dificultades que representa.
Es una dificultad cierta e importante, pero no es la razón de la existencia de las normas que tutelan los derechos de los consumidores, las que regulan muchas otras cuestiones tanto o más importantes que los temas procesales. Como quedó dicho, el factor genético del Derecho del Consumidor radica en la situación de debilidad estructural o hiposuficiencia, que es consecuencia de un cúmulo muy heterogéneo de situaciones, de las cuales, la cuantía económica del perjuicio es sólo una de ellas.
Esta acotada visión materialista y centrada en el conflicto, tampoco tiene en cuenta otros tópicos, de mayor entidad, que son parte de los contenidos del Derecho del Consumidor y hacen a la complejidad de su estructura. Los problemas referentes al acceso al consumo y la comercialización no discriminatoria de productos y servicios; el consumo sustentable y la elaboración y venta de productos "amigables" con el medio ambiente; la educación como base de un consumo responsable y racional; el consumo responsable como instrumento de cambio social; la eficiencia, calidad y accesibilidad de los servicios públicos esenciales; etcétera. Todos son temas inconmensurables en su valor económico y se relacionan con la dimensión social que posee la materia; exceden el estrecho marco de la cuantía económica del conflicto o del perjuicio, e incluso exceden la hipótesis misma de la existencia de un conflicto tradicional en tanto representan problemas sistémicos.
6. Es un instrumento de equidad y paz social.
Como disciplina jurídica "humanizante" e instrumento de corrección en la relación dispar entre consumidores y proveedores, el Derecho del Consumidor consagra una serie de valores morales, reflejados en expresos institutos jurídicos, que constituyen verdaderos factores de control y cambio social.
La evitación, la punición o la responsabilización de las conductas empresarias contrarias a los valores que deben imperar en un *mercado sano*, posible gracias a los preceptos consagrados por la normativa "consumerista", instituye un nuevo instrumento de paz social e *intervención* en el tráfico comercial sobre la base de parámetros de rango superior que trascienden el análisis estrictamente económico. Lo que mercantilmente puede ser válido – por ejemplo, que obtenga mayor rédito el proveedor que mejor conozca las debilidades de sus clientes –, a la luz de los principios del Derecho del Consumidor aparecerá como abusivo o engañoso, y por lo tanto susceptible de reproche legal.
La posibilidad de que la población pueda hacer respetar sus derechos como consumidores o usuarios, respaldados por una actitud firme y enérgica de las autoridades, representa un factor de optimización de los recursos de la masa de consumidores. Ello implica muchas veces un ahorro imperceptible en términos macroeconómicos, pero un inconmensurable patrimonio de justicia y equidad social.
7. No es un derecho contrario a las empresas y al desarrollo económico.
Sin perjuicio de lo anterior, entendemos también que debe ser desterrada la idea de que la protección del consumidor lleva ínsita una lucha contra las empresas o contra el sistema de mercado capitalista. Aunque estos polos se presentan naturalmente enfrentados o contrapuestos por el rol que cada uno de ellos ocupa, esta circunstancia no implica que deban desarrollar su relación de manera "confrontada".
El saneamiento del tráfico comercial y el imperio de las buenas prácticas empresariales que persigue dentro de sus objetivos el Derecho del Consumidor, debe promover necesariamente la proliferación de empresarios con sensibilidad social, que contemplen como un valor agregado de sus productos el buen trato para con los derechos de sus clientes.
Indicativos positivos de la madurez del mercado de consumo será el grado de respeto *espontáneo* que los proveedores le deparen a la normativa que protege los derechos de los destinatarios de los bienes que comercializan. Pero es cierto que esa espontaneidad generalmente no es tal y cuanto más flexibles sean los mecanismos de control o el marco normativo de aplicación a las relaciones de consumo, probablemente mayor será la desconsideración que las empresas tengan para con aquellas premisas. Por ende la divulgación y aplicación de esta normativa, en un sentido bidireccional (hacia los consumidores y hacia los empresarios) tendrá un efecto disuasorio directo en relación con las eventuales prácticas abusivas que se fueran diseñando en desmedro de los ciudadanos.
V. Las razones para la inclusión de la asignatura en el nuevo plan de estudios:
a) La autonomía del Derecho del Consumidor
En lo que nos interesa, y resulta objeto de propuesta en el presente, entendemos que el notable desarrollo del sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios en Argentina, ha derivado en la sistematización del derecho del consumidor como una disciplina de características definidas y con autonomía conceptual, que exige por la relevancia de sus contenidos un tratamiento más profundizado en el ámbito de la carrera de Abogacía.
Si bien algunos de sus contenidos, son actualmente abordados en forma transversal dentro de los programas de estudio de algunas de las asignaturas de la carrera del plan de estudios vigentes (por ej. en Derecho Civil II o Civil III, o en el marco de estudio de algunas cuestiones atinentes a la legitimación colectiva en materia procesal), lo cierto es que gran parte de los principios, normas, instituciones e instrumentos de implementación, especialmente diseñados por este sistema tutelar y que tienen tanta relevancia social, se encuentran fuera del marco de investigación en la carrera de abogacía de esta Facultad, o son en el mejor de los casos, tangencial o superficialmente abordados en el estudio de otras disciplinas de la carrera.

El Derecho del Consumidor, por ser un importante sistema coherente y autónomo de protección jurídica de los ciudadanos, integrado por normas de diversa jerarquía y naturaleza, requiere a nuestro criterio de un estudio más pormenorizado, efectuado con una hermenéutica integradora de sus diversas instituciones, a la luz de los principios generales que gobiernan la materia, y que indican que se trata de un derecho de protección especial, de carácter colectivo, preventivo y de orden público, que reclama un mayor desenvolvimiento en el marco universitario.

El Derecho del Consumidor desde sus primeras insinuaciones hasta su evolución actual, ha ganado un lugar insoslayable como materia de interés social, cuyos contenidos son motivo de inquietudes constantes en los distintos ámbitos en los que refleja sus contenidos.

Esta moderna rama de la ciencia jurídica ha generado en el derecho positivo una importante cantidad de cambios trascendentales. Al principio se la vio como un simple apéndice del Derecho Civil, casi innecesario, ya que se ocupaba de cuestiones e institutos que en su mayoría habían sido abordadas por la doctrina general iusprivatista. Sin embargo, en una evolución que sorprendió a propios y extraños, esta disciplina ha extendido sus implicancias a límites impensados. Incluso ha desbordado los contenidos propios del derecho privado para incidir y nutrirse en buena medida también del derecho público, y sus principios han influenciado tanto al derecho sustancial como al derecho formal.

Muchos de sus principios propios, se han transformado en la actualidad en "principios generales del derecho", y su inclusión expresa en el marco general del derecho privado es un desafío que ha sido ya abordado por la comisión reformadora del Código Civil, que promueve la inclusión del estatuto del consumidor como un sistema de protección general en la órbita del derecho civil.

La fuerza incontenible de la realidad ha ido forjando una materia de contenidos eminentemente pragmáticos, que se ha valido de los institutos jurídicos clásicos, modernizando y readecuando sus contenidos de modo de dotarlos de una renovada utilidad para la vida cotidiana del hombre moderno.

Este empirismo fundante del Derecho del Consumidor le ha servido, a la vez, de núcleo y motor de expansión. El amplísimo horizonte de incumbencias de la materia es prueba irrefutable de ello y tiende a seguir extendiéndose. Rebatiendo una visión inicial mezquina, se ha generado una oxigenada corriente en la doctrina autoral y jurisprudencial consumerista que se viene consolidando gracias a una notable uniformidad en torno a la interpretación amplia de sus axiomas. El principio *in dubio pro consumidor*; el valor del *derecho/deber de información*; el *orden público* inherente a la materia; la amplitud del concepto de *relación de consumo*; la *objetivación de la responsabilidad por* daños; los *nuevos remedios* procesales; entre otros, sirven de eje a una teoría coherente y uniforme y en constante "crecimiento útil". Esa visión coyuntural no implica que sus preceptos sean transitorios, sino todo lo contrario. Los principios del Derecho del Consumidor han adquirido la suficiente madurez como para conservarse como tales, es decir, como valores perennes en derredor de los cuales se encuentran soluciones a una realidad que por naturaleza es mutable y compleja.

El Derecho del Consumidor ha nacido en una época privilegiada, en la cual el debate en torno a la naturaleza, conceptos, clasificación, ubicación, principios y teorías de las principales instituciones jurídicas, que tanto esfuerzo demandó a nuestros maestros, se encuentra prácticamente agotado. La "paz conceptual" que reina en la Ciencia Jurídica sirve de apoyo firme para la elaboración de esta disciplina que se vale en gran medida de aquellos esfuerzos, adaptándolos a la coyuntura y confiriéndoles un remozado sentido de eficacia. Empero, es bueno dejar sentado que el Derecho del Consumidor es mucho más que una simple relectura o reinterpretación de los institutos jurídicos clásicos, al punto tal que la aplicación de los valores y principios que le son exclusivos traen, en muchos casos, soluciones originales e inconcebibles a la luz de los cánones tradicionales.

Señala el maestro Antonio BENJAMIN que existen diversos factores que conspiran contra una tesis que propicie la autonomía del Derecho del Consumidor, entre ellos, la novedad de su contenidos; la "multidiscipinariedad" de su temática; su desorden sistemático, al no existir un cuerpo legal codificado; la supraindividualidad del interés tutelado, que lo hace un derecho de todos y de ninguno al mismo tiempo; el anterior tratamiento de sus temas por otras ramas del Derecho, circunstancia que alienta a sus detractores a sostener la falta de originalidad en sus contenidos; entre otros.

Sin embargo coincidimos con el profesor brasilero en que "el Derecho del Consumidor presenta todos los presupuestos de autonomía: la amplitud de la materia, a punto de merecer un estudio particularizado; la especialidad de principios, conceptos, teorías e instrumentos (...) y un método propio, esto es, el empleo de procesos especiales de interpretación de su formulación y problemática[59].

Creemos que existen sobrados argumentos para sostener la autonomía – científica y legal – del Derecho del Consumidor, cuestión que debe generar una necesaria adecuación de los diferentes ámbitos del quehacer social para darle cabida institucional. La circunstancia más elocuente sobre la cual descansa su autonomía, desde el punto de vista conceptual, es que se trata de un derecho que, dado su complejidad y diversidad de fuentes, ha traspasado las líneas divisorias entre "lo público" y "lo privado". Se ha convertido en una disciplina inasible para el Derecho Privado, al integrarse con instituciones provenientes del derecho público, como es todo lo relacionado con los cometidos del Estado y el ejercicio de funciones administrativas, preventivas y sancionatorias. Y viceversa, el Derecho Público también resulta insuficiente para aprehender y estudiar una materia cuya raíz privada – como dijimos – es incuestionable. Se trata de asuntos en los que convive el interés privado con el interés *metaindividual* de la colectividad. Esta mixtura de contenidos, conceptos y normas, alumbra una materia con tenores especiales, principios propios y un grado de independencia notable.

Por ello, es incomprensible la ostensible falta de programas de estudios, en los distintos niveles, que contemplen integralmente sus contenidos. En el ámbito universitario, muy pocas facultades en el país cuentan con cátedras en sus currículas de grado destinadas a abordar integral y sistemáticamente la materia[60]. Otras pocas, la han incorporado bajo la modalidad de cursos de posgrado o seminarios de especialización.

---

[59] BENJAMÍN, Antonio H. V, "El derecho del consumidor", JA 1993 II 913, Lexis Nº 0003/011877

[60] Una de ellas es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán que incorporó en su plan de estudios reformado en el año 2000 la cátedra "Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia". Siguieron sus pasos también la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario de la Pontífica Universidad Católica Argentina y la misma universidad en la Provincia de San Juan entre otras, las que poseen en su programa pedagógico de grado la asignatura "Derecho del Consumidor. También la Universidad de Buenos Aires ha incluido entre sus contenidos pedagógicos los principios de Derecho del Consumidor.

Con ello, estimamos que la eventual reforma del plan de estudios de esta facultad de Derecho, debería incluir la materia "derecho del Consumidor" como una asignatura autónoma que permita abordar con mayor profundidad sus contenidos multinormativos.

b) el mandato legal

A las razones expuestas, sumamos el mandato legal contenido en el art. 60 de la ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, que dispone, en el marco de la Educación para el consumo, ***la Obligación de los Estados Nacionales, provinciales y municipales, de arbitrar las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación universitaria (entre otros niveles) los preceptos y alcances de la ley.",***

De allí, que la inclusión de la materia "Derecho del Consumidor", no solamente sea una necesidad impuesta por el desarrollo de la moderna ciencia jurídica, que se asoma al estudio de una cambiante y compleja realidad social, sino que además, configura una obligación del Estado que debe ser abordada muy especialmente en el ámbito de la Universidad Pública y en la carrera de Abogacía, por estar claramente alcanzada por el ámbito de sus incumbencias.

El nuevo contexto nos obliga a revisar los modelos epistemológicos de vinculación del derecho y las ciencias sociales, los contenidos de las materias y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con la modificación de la tradicional estructura del plan de estudios de esta Facultad de Derecho, incluyendo en la currícula asignaturas que abarquen la investigación de las modernas realidades sociales, nos estaremos colocando a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, derivando ello en la formación de profesionales del derecho que, como importantes operadores sociales, cuenten con herramientas que resulten transformadoras de la realidad.

Esa es la justificación misma de la existencia de la Universidad Pública Estatal, como una fuente de progreso y justicia social, pues la misma no puede orientar su enseñanza a la formación de profesionales del derecho que sean meros exégetas del derecho positivo, sino que debe cumplir con la función mayor de enseñar el derecho para una moderna sociedad pluralista.

En ese camino, resulta de vital importancia que los alumnos de la carrera de abogacía aborden prioritariamente con un sentido práctico, las modernas problemáticas de la sociedad y en nuestro caso, del mercado de consumo, contando para ello con los instrumentos intelectuales, conceptuales, precisos y rigurosos que en el ámbito universitario se deben desarrollar.

Es esta una oportunidad valiosa para cargar estos contenidos trascendentales, de defensa del ciudadano, en la mochila de conocimientos de nuestros estudiantes, la gran apuesta del derecho y de la justicia para el futuro.

VI. Corolario:

Para concluir, señalamos que la presente propuesta tiene por objetivo principal el desarrollo universitario de esta nueva rama de la ciencia jurídica, entendida como una herramienta moderna, útil y de relevancia para garantizar el efectivo acceso a la justicia de los ciudadanos, y especialmente de aquellos sectores que presentan un mayor grado de vulnerabilidad.

Ello a la par de colaborar con la formación de profesionales del derecho que atiendan con mayor eficiencia los reclamos de una nueva sociedad, que por su complejidad, exige una particularizada formación académica en las áreas más sensibles del derecho, de modo tal que sus operadores, sean una verdadera garantía de equidad y justicia. [61]

ANEXO : CONTENIDOS APROXIMADOS DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE "DERECHO DEL CONSUMIDOR"

Solo a modo indicativo, efectuamos a continuación, un esquema de los posibles contenidos pedagógicos específicos, que la materia "Derecho del Consumidor", a nuestro criterio debería contener.

DERECHO DEL CONSUMIDOR
PROGRAMA

Primera Parte

---

[61] (*) Jorge Mario Bru: Abogado. Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP. Auxiliar Docente interino de la Cátedra Derecho Civil II, Cátedra I, Facultad de Cs. Jurídicas y Soc. de UNLP, Miembro académico activo del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (La Plata), Miembro académico del Ateneo Jurídico para el desarrollo académico y doctrinario de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P. (año 2004), ex Profesor Adjunto de la Cátedra de "Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán" (2004-2007), Miembro de la Internacional Asociation of Consumer Law (Bélgica), Docente del Curso de derecho del consumidor de la Universidad Notarial Argentina (1996), ex Director Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de La Plata (2002-2005), Subdirector de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A. – 2000 -2002); Miembro del Consejo Consultivo Honorario del Programa de Políticas Activas de Defensa de los Consumidores y Usuarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creado por Disp. N° 003-DGDyPC-2000. -13-11-2000- Miembro del Consejo Consultivo Honorario en materia de protección de Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de San Isidro. Director Instituto de Derecho de Seguros del CALP (desde 2011)

(**) Dante D. Rusconi: Abogado y Escribano Universidad Nacional de La Plata. Presidente en ejercicio del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (La Plata), Miembro académico del Ateneo Jurídico para el desarrollo académico y doctrinario de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P. (año 2004), ex Profesor Adjunto de la Cátedra de "Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán" (2004-2007), coordinador de la Obra "Manual de Derecho del Consumidor". A. Perrot – 2009. Autor del libro "Acciones judiciales de los consumidores". Ed. Juris. Rosario 2004. Profesor de la Maestría de Derecho Empresarial, de la Universidad Católica de Cuyo. Director del ciclo de conferencias de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Salta – 2011. Profesor de la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad Austral Argentina.

Aspectos generales de la protección del Consumidor

UNIDAD 1. Introducción al derecho del consumidor
El Derecho del Consumidor: Evolución histórica: de la protección del propietario a la tutela del consumidor y del usuario. Los cambios ideológicos, económicos y filosóficos. Fundamentos de la defensa del consumidor: el principio protectorio. Vulnerabilidad del consumidor. El orden público protectorio.
Estado actual de la defensa del consumidor en Argentina y el Derecho comparado. El Derecho del Consumidor en el Mercosur.
Sistema normativo de protección del consumidor. Fuentes normativas del Derecho del Consumidor en la Argentina: Constitución Nacional, Ley 24.240, normas generales y especiales. Jerarquía de normas. Integración y relación de la ley 24240 con otras disciplinas y normas. Interrelación con normas relativas a la defensa de la Competencia y Lealtad Comercial. Art. 3 de la Ley 24.240. Bienes jurídicos protegidos. Jurisprudencia.
Interpretación La revalorización de los principios generales, con especial referencia a la buena fe y a la protección de la confianza. El principio "in dubio pro consumidor". La equidad.

UNIDAD 2. Derechos del consumidor
Los derechos de los consumidores. Régimen legal: Constitución Nacional y Provincial. Directrices de las Naciones Unidas. Ley 24.240. Clasificación de los derechos de los consumidores. Jurisprudencia.
Derecho a la información. Régimen legal: alcance, contenido y características del deber de informar.
Protección de la salud y seguridad del consumidor.
El trato digno. Prácticas abusivas.
La protección de los intereses económicos.
La faz colectiva de los derechos de los consumidores. Jurisprudencia. Asociaciones de consumidores: régimen y funcionamiento.
Políticas de defensa del consumidor. La función del Estado. Educación del consumidor. Consumo sustentable

UNIDAD 3: Ámbito de aplicación del Derecho del Consumidor
Ámbito de aplicación del Derecho del Consumidor. La relación de consumo: concepto. Criterios de calificación. Evolución. Extensión de la noción: Constitución Nacional y Ley 24.240.
Elemento personal de la relación de consumo: sujetos. Sujeto activo: el Consumidor. Concepto y definición legal de consumidor. Sujetos incluidos en la noción. Consumidor individual y colectivo. Consumidor contratante y no contratante. Tercero expuesto a prácticas de consumo. Consumidor afectado por una relación de consumo. Usuario no contratante. Subconsumidores. Equiparación. Exclusiones. Supuestos dudosos. El empresario consumidor. Las PyMEs. Sujeto pasivo: el proveedor. Noción de proveedor. Extensión de la noción. Profesionalidad. Profesionales liberales.
Elemento material de la relación de consumo. Productos, cosas, bienes. Servicios.
Causa fin: destino final de consumo. Causa fuente: contratos, actos y hechos jurídicos.
Incidencia de la reforma de la Ley 24.240 en la relación de consumo. Jurisprudencia.

UNIDAD 4. Régimen precontractual
El derecho a la información. Su consagración en la Constitución Nacional y en la ley 24.240. Sus vinculaciones con los deberes de advertencia y de consejo. La proyección del deber de información en las diferentes etapas contractuales.
Tratos previos. Prácticas comerciales y marketing. La buena fe en el período precontractual. La oferta como apariencia y la aceptación basada en la confianza
La formación del consentimiento. Oferta y publicidad. Código Civil y Código de Comercio. Condiciones. Efectos. Revocación
Publicidad. Régimen legal. Publicidad e Información. Publicidad y Propaganda. Publicidad ilícita: engañosa, desleal, subliminal, comparativa. Los mecanismos de tutela. Principales precedentes jurisprudenciales.
Ofertas fuera de los locales comerciales. Regulación legal. Derecho de arrepentimiento.

UNIDAD 5. Régimen contractual
El Derecho Contractual a la luz de los principios del Derecho del consumidor. Las proyecciones de la tutela del consumidor con relación a los pilares básicos de la teoría general del contrato: el consensualismo, la autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria de lo convenido y el efecto relativo de los contratos. El fenómeno de la contratación en masa.
Contratos de consumo, contratos paritarios, contratos con cláusulas predispuestas, contratos celebrados por adhesión. Las condiciones generales de contratación.
Interpretación del contrato de consumo. Reglas específicas.
Cláusulas abusivas. Concepto legal. Enunciación. La tipificación de cláusulas abusivas en la ley 24.240 y otras normas. Los estándares de apreciación. Efectos. Control judicial: el control de inclusión y el control de contenido. La necesidad de integración del contrato. Cláusulas abusivas en los distintos contratos de consumo.
Control administrativo de los contratos de adhesión.
Los diferentes sistemas de control ensayados en el derecho comparado.
El reconocimiento de la conexidad contractual como modo de tutela del usuario o consumidor.

UNIDAD 6. Régimen de garantías y responsabilidad (1era. parte)
El incumplimiento de los contratos de consumo: diversos mecanismos de protección del crédito del usuario o consumidor.
La garantía legal por buen funcionamiento en el ámbito de las cosas muebles no consumibles: finalidad y plazo de vigencia. Constancia de reparación. Reparación no satisfactoria.
Régimen especial de vicios redhibitorios. Diferencia con la garantía legal por buen funcionamiento. Garantía voluntaria
La garantía por el servicio posventa y la provisión de partes y repuestos.

UNIDAD 7.Régimen de garantías y responsabilidad (2da. parte)

Responsabilidad por daños. Emplazamiento de la Responsabilidad por daños al consumidor en el sistema general de Responsabilidad Civil. El aporte del Derecho del Consumidor al sistema. Las dificultades para responsabilizar al elaborador aplicando las reglas clásicas. Teorías. Evolución.
Régimen legal a partir de la incorporación del artículo 40. Ámbitos de responsabilidad en el Derecho argentino. Acción del artículo 40. Presupuestos de la responsabilidad. Sujetos pasivos: solidaridad. Eximentes de responsabilidad.
Daños masivos y colectivos. La prevención de los daños. Los riesgos del desarrollo. La precaución.
Los daños punitivos. Concepto. Características. Evolución histórica. Antecedentes. Régimen legal. Jurisprudencia.
La cuantificación del daño.
El daño directo. Concepto. Críticas. Fundamentos.
Jurisprudencia

Segunda Parte
Relaciones de consumo particulares
UNIDAD 8. Contratos en particular
Compraventa de consumo. Instrumentación y contenido del contrato. Contrato de prestación de servicios. Ejecución. Deficiencias y garantía. Materiales a utilizar en las reparaciones.
La contratación inmobiliaria y la defensa del consumidor: la adquisición de lotes, de inmuebles nuevos y de viviendas prefabricadas. Contrato de Tiempo compartido: orígenes y finalidad de la figura. Concepto y denominaciones. Características. Instrumentación: derechos reales y derechos personales. Marco legal: Ley 26.356. Aplicación de la ley de defensa del consumidor.

UNIDAD 9. Contratos en particular
Contratos bancarios. Marco legal de la actividad bancaria. Operaciones bancarias: clasificación. Encuadramiento de las operaciones activas, pasivas y de servicios en la Ley 24.240. Autoridad de aplicación. Protección del consumidor bancario: la regulación de las cláusulas abusivas.
El contrato de tarjeta de crédito. Su consideración como sistema. Los distintos vínculos jurídicos: entre emisor y usuario (contrato de emisión), entre emisor y proveedor y entre proveedor y usuario (contrato de provisión).
Relación entre las Leyes 25.065 y 24.240. Tutela al usuario de una tarjeta de crédito frente a la entidad emisora y frente al proveedor. Cláusulas abusivas. Intereses abusivos. Jurisprudencia.
La financiación al consumidor: las operaciones de préstamo con fines de consumo. Crédito al Consumo: noción y modalidades. La tutela del consumidor en el derecho comparado. Marco legal en nuestro país: la Ley 24.240, la Ley 21.526, la Ley 25.065 y normas del Banco Central de la República Argentina. El contrato de círculo de ahorro previo como contrato de consumo. Fundamentos. Herramientas de protección del consumidor. Jurisprudencia.
Las garantías constituidas en resguardo de una deuda de consumo: la conexidad contractual.

UNIDAD 10. Contratos en particular
Los contratos de asistencia médica: introducción. Los derechos constitucionales en juego: derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad psico-física, derecho a la calidad de vida. Los sistemas de prestación médica: sistemas públicos y sistemas privados. El seguro de salud. Las empresas de medicina privada. Marco legal. La medicina prepaga como contrato de consumo: fundamentos. Funcionamiento y características del sistema. Modalidades de la prestación: límites temporales y exclusiones de la cobertura, prestaciones especiales, PMO y PMOE. Cláusulas abusivas en el contrato de medicina privada. Jurisprudencia.
Contrato de seguro: aspectos generales. Marco legal. La aplicación de la Ley 24.240 y su interrelación con la Ley 17.418. El consumidor de seguros: supuestos especiales. La protección de los asegurados y el control de la actividad aseguradora. Autoridad de aplicación. La instrumentación del contrato de seguro: la póliza. Cláusulas abusivas. La prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Jurisprudencia.

UNIDAD 11. Contratos en particular
EL contrato de Turismo como relación de consumo. El turista como sub-consumidor. Los viajes combinados y las redes de prestadores. La experiencia europea. El contrato de organización de viaje y el contrato de intermediación de viaje: marco legal. Responsabilidad del organizador y el intermediario. Cláusulas abusivas. Casos jurisprudenciales.
Contratos de servicios en Internet: protección del consumidor en el comercio electrónico. La aplicación de la Ley 24.240 a los contratos de consumo celebrados por medios electrónicos. La falta de información del consumidor. Términos abusivos y cláusulas ineficaces: prórroga de jurisdicción, limitaciones a la responsabilidad por daños y a la revocación de la aceptación.

UNIDAD 12. Servicios públicos
Servicio público: noción y caracteres. Servicios públicos domiciliarios. Tutela de los usuarios de servicios públicos. Régimen de la ley 24240. Derecho a la información. Derecho a la reciprocidad en el trato. Interrupción del servicio. Facturación de consumo excesivo: servicios estacionales y no estacionales. Vías de defensa de los derechos de los usuarios. Rescisión del contrato
Marcos regulatorios de los servicios públicos privatizados
Entes reguladores: creación, finalidad y atribuciones. Procedimiento para reclamos. Participación de los usuarios. Las audiencias públicas.

Tercera Parte
Aspectos administrativos y procesales de la tutela del consumidor

UNIDAD 13. Protección de los derechos de los consumidores
Sistemas de solución de conflictos.
Procedimiento administrativo ante la autoridad de aplicación. Competencia y concurrencia. Facultades. Actuaciones de oficio y a instancia de parte: procedimientos. Acuerdo conciliatorio. Sanciones. Gradualidad de las sanciones. Reincidencia. Recursos
Determinación del daño directo: requisitos para su procedencia. Cuantía.

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El arbitraje de consumo. Tribunales arbitrales. Árbitros de derecho y amigables componedores. Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo: marco legal, procedimiento, efectos de la decisión.
Organismos municipales de defensa del consumidor

UNIDAD 14. Protección de los derechos de los consumidores (2da. parte)
Acceso a la justicia. Problemas y soluciones. Intereses tutelados: clasificación
Protección formal normativa: Constitución Nacional y Constitución Provincial. Código Procesal Civil de la Nación y Código Procesal Constitucional de Tucumán.
Acciones individuales: legitimación, representación. Procedimiento. Acciones colectivas: intereses tutelados. Legitimación. Procedimiento. Cosa juzgada.
Procedimientos aplicables. Competencia. Acción de amparo.
Función del ministerio publico. Intervención del Defensor del Pueblo
Prescripción de las acciones
Asociaciones de Consumidores: Fundamento de su utilidad. Requisitos para su funcionamiento.
Class Action: su recepción en el Derecho Comparado.
Jurisprudencia.

PROYECTO N° 63: Prof. Dr. Fabián Salvioli Profesor Titular de "Derecho Internacional Público" (Cát. 3) y Director del Instituto de Derechos Humanos, propuesta de creación de la materia "Derechos Humanos"

Propuesta de incorporación de la asignatura Derechos Humanos
en el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata
Prof. Dr. Fabián Salvioli[62]
Prof. Federico Di Bernardi[63]

I.- Consideraciones preliminares
En las ciencias jurídicas actuales, la disciplina de los derechos humanos es quizás la que más se destaca por su característica propia y – a la vez – interdisciplinaria. Si los primeros treinta años luego de finalizada la segunda guerra mundial fueron de enriquecimiento de diversas asignaturas (como la filosofía, el derecho procesal, el derecho constitucional y el derecho internacional, o la educación), los últimos veinte profundizaron la creación de una disciplina propia, diferenciada e interrelacionada con las otras.
Hoy, el cumplimiento del respeto y garantía de los derechos humanos constituye ni más ni menos que el fin primordial de un Estado de Derecho. Se consideran inescindibles los conceptos de democracia y derechos humanos, y al fortalecimiento de instancias internacionales de supervisión de las obligaciones internacionales de los Estados en la materia, tanto a nivel de Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos, se observa una creciente (y progresiva) tendencia a la resolución - en perspectiva de derechos humanos – de asuntos judiciales internos y de la política pública en general.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP cuenta hoy con un Instituto de Derechos Humanos que desarrolla actividades y diversas ofertas de grado dirigida a estudiantes de la carrera; especialmente las competencias de derechos humanos y los seminarios curriculares concitan gran interés[64]. Asimismo, a nivel de posgrado, el Instituto de Derechos Humanos desarrolló la Maestría en Derechos Humanos, primera en el país, reconocida a nivel regional e internacional, y única actualmente con apertura todos los años[65]. El posgrado ha debido generar un mecanismo de admisión debido al gran número de postulaciones que cada año recibe. En marzo de 2012 se abrirá la novena promoción consecutiva.
Estas actividades de derechos humanos han colocado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en un espacio de excelencia académica para la promoción y educación en materia de derechos humanos; resulta lógico que en la discusión de la adopción de un nuevo plan de estudios, la Facultad se proponga un grado igual de calidad para su enseñanza de grado.
II. La reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía y la asignatura "Derechos Humanos" en la República Argentina
Hace casi una década, cuando en el seno de nuestra Facultad se intentó la necesaria y hoy impostergable reforma al plan de estudios, nos permitimos formular la propuesta de incorporación de la asignatura "Derechos Humanos" con carácter obligatorio, poniendo a nuestra casa de estudios a la altura no solamente de las circunstancias socio-jurídicas, sino de los perfiles adoptados por las Facultades de Derecho que son vanguardia en Europa, Estados Unidos y América Latina.
La República Argentina muestra diferentes realidades en sus facultades de derecho, aunque actualmente la asignatura "Derechos Humanos" está receptada en los planes de estudio de la Universidad de Cuyo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Católica Argentina, la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Atlántida Argentina, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Mendoza, y la Universidad Nacional del Nordeste.
La tendencia marca que los planes de estudio reformados en los últimos veinte años para las carreras de abogacía en la República Argentina, de manera unánime han incorporado la asignatura "Derechos Humanos" de una u otra manera dentro del *pensum* académico.
III.- La reforma al Plan de Estudios y la asignatura "Derechos Humanos" en la FCJS de la UNLP
Hoy nos permitimos insistir en la necesidad de viabilizar el proyecto presentado hace ocho años; la materia "Derechos Humanos", debe tener un espacio curricular propio y diferente al de otras disciplinas que hoy lo desarrollan como parte de sus contenidos, como "Derecho Constitucional" o "Derecho Internacional Público".
De acuerdo a la experiencia de otras casas de estudio, una carga horaria cuatrimestral para la materia resulta pertinente; darle menos entidad horaria que otras asignaturas implicaría una decisión institucional de no

[62] Director del Instituto y la Maestría en Derechos Humanos de la FCJS de la UNLP.
[63] Secretario del Instituto y la Maestría en Derechos Humanos de la FCJS de la UNLP.
[64] Ver www.derechoshumanos.unlp.edu.ar
[65] Ver http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/es/maestria/

otorgar a la asignatura la importancia que se merece; una carga horaria mayor excedería la traza de un programa confeccionado adecuadamente con las características contemporáneas que hacen a la disciplina.
Asimismo, es importante no seguir modelos de otras universidades que han convertido la asignatura "Derechos Humanos" en "derecho internacional de los derechos humanos", o "derecho constitucional", o "filosofía de los derechos humanos" ya sea en sus currículas manifiestas u ocultas.
La asignatura que se propone es una materia *inicial* al abordaje de los derechos humanos, que inicie a los alumnos y alumnas de la carrera en el tema, y desarrollado ese aprendizaje, dichas personas adquieran una perspectiva de observación crítica desde los derechos humanos en relación con el fenómeno jurídico.
La materia debe ser ubicada en la etapa inicial de la carrera, pero no como primera o segunda asignaturas, sino luego del bloque de las 4 o 5 primeras materias, quizás luego de la materia "Derecho Político" y antes del "Derecho Constitucional", el "Derecho Civil I", el "Derecho Penal I" y obviamente el "Derecho Internacional Público". La asignatura será de formación general básica e introductoria a las denominadas codificadas o al derecho positivo del sistema jurídico argentino.
Los alumnos y alumnas deben ingresar a la disciplina de los derechos humanos previamente formado en las líneas generales de las materias "Introducción al Derecho", "Historia Constitucional", "Introducción a la Sociología", "Derecho Político" y "Derecho Romano" (aunque esta última puede obviarse). Ello les permitirá poseer una rica base inicial, y luego comprender a los derechos humanos con perspectivas integrales de régimen de derechos.
Avanzando en la carrera, las otras materias deberán profundizar aristas que hagan a la disciplina (como por ejemplo será el Derecho Internacional Público y el sistema internacional para el reclamo a las violaciones de derechos humanos, vinculando ambas materias, articulando y no superponiendo o repitiendo contenidos).
Ubicar a la disciplina en esta etapa inicial formativa, y dando un sentido propio de teoría general de los derechos humanos, resultará una visión novedosa en el campo de las otras Facultades de Derecho de la Argentina, generando un sentido analítico y crítico en perspectiva de derechos humanos, con carácter previo a la materias positivas o codificadas en general.

IV.- El contenido curricular (contenidos mínimos)
Tentativamente, un programa de la asignatura "Derechos Humanos" dentro de la estructura general del plan de estudios de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, debería tener al menos los siguientes contenidos mínimos (obviamente que cada uno de los siguientes puntos puede estar dividido en dos o más unidades temáticas):
Teoría general de los derechos humanos: (concepto y fundamento); desarrollo histórico de los derechos humanos.
Contenidos de los derechos humanos: derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales; los derechos al desarrollo, al ambiente y a la paz como derechos humanos.
Sujetos de los derechos humanos: la persona. Los colectivos como sujetos específicos de derechos humanos.
Fuentes de los derechos humanos.
Recepción de los derechos humanos en la Constitución Nacional Argentina.
Características de los derechos humanos.
Los principios de los derechos humanos.
Protección general y específica de los derechos humanos.
Los enfoques particulares: la perspectiva de género; los derechos humanos de las mujeres; la protección de las personas migrantes, derechos de las personas con discapacidad; protección de niños y niñas; protección de pueblos indígenas; etc.
Las obligaciones específicas de los órganos del Estado en materia de derechos humanos; el cumplimiento de funciones públicas de parte de entidades privadas y sus deberes en materia de derechos humanos.
El respeto y la garantía de los derechos humanos en las relaciones entre particulares.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Introducción a la protección internacional de los derechos humanos.
La vinculación e incidencia de los derechos humanos en las otras ramas del derecho (filosofía, derecho civil, derecho penal, derecho laboral y social, derecho procesal, derecho internacional, derecho constitucional, derecho económico y financiero, etc.).
V.- Consideraciones finales
La formación correcta en derechos humanos resulta imprescindible para el ejercicio contemporáneo de la abogacía, y la labor que desarrollan abogados y abogadas en diferentes áreas públicas.
Así, hoy quienes litigan cuentan con herramientas valiosísimas para la defensa de los derechos de las partes que representan en los instrumentos y principios de derechos humanos; igualmente, quienes toman decisiones judiciales (jueces y juezas) han de fallar necesariamente desde criterios y aplicando normas de derechos humanos que vinculan al Estado, ya que de lo contrario se corre el alto riesgo de generar la responsabilidad internacional de éste último en foros cuasi jurisdiccionales o directamente jurisdiccionales; el mal desempeño de sus funciones ya no solamente deviene un acto de injusticia para una de las partes, sino que compromete al propio Estado.
Al centrarse la política pública contemporánea de cualquier Estado democrático de Derecho en la promoción y protección de los derechos humanos, abogados y abogadas que se desarrollen en espacios gubernamentales municipales, provinciales o nacionales necesitan poseer la debida capacitación y educación en la materia.
Finalmente, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha de centrar como su principal objetivo la formación de abogados y abogadas con profunda vocación democrática e inequívoco compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Incorporar esta asignatura bajo los criterios señalados, ubicará a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a la vanguardia de la educación jurídica en derechos humanos para el grado, tal como lo es hoy en el postgrado, respondiendo a los paradigmas contemporáneos en toda dimensión acordes con los lineamientos de la Reforma Universitaria del Siglo XXI.

PROYECTO N° 64: Autor: Instituto de Mediación y Métodos Alternativos para la resolución de conflictos de ésta unidad académica (Abog. Graciela De la Loza, Abog. Liliana González, Abog. Rita Gajate y Abog. José Maria Lezcano), remite proyecto de creación de la materia "Mediación y Medios Complementarios para la Resolución de Conflictos"
La Plata, de noviembre de 2011.
Honorables Miembros Coordinadores de la
Comisión de Perfil Profesional, Perfil Curricular y

Enseñanza del Derecho del
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a fin de elevar la siguiente propuesta de creación de la materia ***Mediación y Medios complementarios de Resolución de Conflictos*** tal como se adelantara en la reunión que fuera convocada en el marco de la presente comisión y a la que asistieran miembros de nuestro Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.
La necesidad de su inclusión se funda en múltiples razones. Sin duda que la de mayor "urgencia" radica en la sanción y puesta en vigencia de la ley 13.951 de Mediación Prejudicial Obligatoria en la provincia de Buenos Aires que incorpora a la mediación como una nueva incumbencia en el ejercicio profesional de la abogacía tal como similares leyes lo han hecho en numerosas provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires. A mayor abundamiento, recordamos que ya han sido dictados el Decreto 2530/10 y las Resoluciones Ministeriales 67/10, 2441/10 y 2763/11 que avanzan en la implementación de la manda legal.
En nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la creación de la materia "Mediación" fue solicitada en el expediente Nº: 400-005915/08-000. Reproducimos, a continuación, algunos fundamentos del dictamen allí agregado.
a) Pertinencia y necesidad de la incorporación de la materia "*Mediación*" como materia dentro del actual plan de estudios y b) análisis de la materia propuesta y su vinculación con los perfiles profesionales del abogado.
Se considera de suma pertinencia la incorporación de la asignatura "*Mediación*" en los contenidos formales de la enseñanza en ésta Casa de Estudios. Sin embargo es menester dejar de manifiesto que la incorporación de nuevas asignaturas al plan implicaría una reforma al mismo. La modalidad "*optativa*" devendría extraña a la actual conformación del itinerario pedagógico de la carrera de Abogacía. Actualmente los alumnos cursan por promoción materias cuatrimestrales o semestrales y/o rinden asignaturas en las mesas de exámenes finales, conforme a las reglamentaciones vigentes.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es necesario introducir en los estudios de grado a los alumnos en esta materia que muestra alternativas no adversariales para la resolución de conflictos. Máxime luego de la promulgación de Ley Bonaerense Nº 13.951 "*MEDIACION. Método Alternativo de Resolución de Conflictos Judiciales*.". Dicha ley establece la obligatoriedad de las mediaciones en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con las excepciones que la misma ley prevee. Este cuerpo normativo determina que para revestir el carácter de Mediador judicial se requiere poseer título de Abogado, entre otros requisitos formales.
En ese sentido, es competencia de ésta Facultad formar abogados con éstos nuevos conocimientos y herramientas para desempeñarse profesionalmente. Desde esta perspectiva es necesario que ésta Unidad Académica cuente con un espacio formal de capacitación sobre la temática en cuestión.
A mayor abundamiento debe recordarse que a nivel nacional se cuenta con la ley de Mediación 24.573 (con sus modificatorias 25.287, 26,094 y 26.368) su decreto reglamentario 91/98 y su modificatorio dec. 1465/07, los cuales instituyen con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio excepto en causas penales, acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad (acepta la mediación en las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas), procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación, causas en que el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas sean partes, amparo, habeas hábeas e interdictos, medidas cautelares, diligencias preliminares y prueba anticipada, juicios sucesorios y voluntarios, concursos preventivos y quiebras, causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo; deja como optativo para el demandante la mediación en procesos de ejecución y juicios de desalojo.
c) Régimen de enseñanza que sería aplicable a la misma (materia de la currícula o seminario), carga horaria, contenidos mínimos y generales que deberían contener.
Sobre el particular, debe recordarse que desde mediados del año 1995 viene dictándose cursos de postgrado en ésta Casa de Estudios sobre esta temática, y debido a la importancia y trascendencia que el mismo tiene desde el año 2009 por Resolución Nº 424/08 del Consejo Directivo, fue aprobado como nuevo espacio curricular el **Seminario en "*Mediación, Ética y Ejercicio de la Abogacía*"**, el cual ha sido renovado en los sucesivos cuatrimestres por Resoluciones del H.C.D. Conforme este antecedente se considera que en caso de convertirse en materia curricular, conforme lo considere el Consejo Directivo, deberá tener la modalidad de asignatura cuatrimestral, con una carga horaria de noventa y seis horas conforme al régimen de cursadas por promoción (vigente a partir del 2006).
En ese sentido, los objetivos de la asignatura que se pretende crear deberían ser los siguientes:
Introducir al alumno en el enfoque de los métodos no adversariales de resolución de conflictos.
Proveer a los alumnos de herramientas conceptuales e información que le permitan comprender para luego poder optar respecto de la práctica de los métodos y técnicas de la Mediación. Se pretende que a partir de una toma de conciencia se invite a la consecuente participación activa en estos métodos en el futuro ejercicio de la profesión de abogado.
Crear un espacio de reflexión para los alumnos dedicado al análisis y la comprensión de esta materia que aún no se encuentra incluida en el plan de estudios de la carrera de abogacía.
Valorar la importancia de la experiencia ya transitada por mediadores en la utilización de este método.
Introducir la problemática relacionada a la ética profesional a fin de la toma de conciencia del futuro abogado en la normativa que reglamenta el ejercicio de la profesión.

Para llevar adelante los precitados objetivos, los contenidos mínimos y generales que la asignatura debiera contener, en caso de crearse la materia dentro de la currícula, son los siguientes:
Unidad 1. Resolución de Conflictos.
- Formas sociales de resolución de conflictos.
- Métodos adversariales y no adversariales.
- Diferencias con otros métodos alternativos.
- Breve concepto sobre MEDIACION: hacia un cambio de mentalidad. Beneficio para: las partes, la Justicia, los abogados y la sociedad en general.
- Concepto de justicia.

Unidad 2: El Conflicto.
- Conceptualizaciones posibles.
- Distintas teorías y campo de abordaje.
- Conflictos, como detectarlos. Tipos: real, aparente, manifiesto y subyacente. Sus causas.
- Conflicto de valores. Estructurales. Relacionales. Sobre la información. De intereses.

- Conflicto personal e interpersonal; inter e intrainstitucional. Cómo reaccionamos frente a ellos
- Valor positivo del conflicto. Función del Derecho en la regulación del Conflicto.

Unidad 3: Negociación.
- Concepto. Tipos de negociación: Diferentes formas. Negociación directa o pura. Por posiciones o intereses.
- Participación de terceros: observador o tercero participante.
- Estilos: negociación competitiva y colaborativa.
- Escuela de Harvard. A.E.I.O.U.

Unidad 4: Mediación.
- Características de la mediación

Cooperación, protagonismo de las partes (autocomposición), confidencialidad, imparcialidad /neutralidad, acento en el futuro, ahorro de tiempo y dinero, informalidad.
- Etapas de la MEDIACION.

Conceptualización y características de cada una de ellas.
El rol del mediador en las distintas etapas.
Recursos procesales (reuniones conjuntas, privadas, final), comunicacionales y conceptuales
- Rol del Abogado patrocinante de una mediación.

La mediación prejudicial. Normativa vigente. Ética del Mediador. Dilemas.

Unidad 5: Ética Profesional.
- La Ética Profesional. Conceptos. Moral. Ética. Buenas costumbres.
- La moral y las costumbres en el derecho civil, penal, comercial, laboral y procesal. Moral y derecho.
- El Rol del abogado en la sociedad. Formación. Ejercicio. El abogado y sus diversos roles: litigante, mediador, docente, político.
- El abogado respecto de sus colegas. Derechos y deberes. El abogado frente a sus colegas.
- El abogado y su cliente. Derechos y deberes.
- La Colegiatura de la profesión. Génesis. Jurisprudencia. Tribunales de disciplina. Normas vigentes. Fallos. Legislación comparada.

d) Indicación de las materias que deberían resultar sus correlativas y en que año de la carrera debería ser ubicada.
Sobre el particular, y conforme a la vinculación que tiene la mediación con la asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial II, la misma debiera ser correlativa de ésta última, como también de la asignatura Sociología Jurídica. Ello conforme a que, la mediación se desplaza transversalmente en ambas, toda vez que en la primera de aquellas está prevista como medio alternativo o como un modo anormal de finalización del proceso judicial. En tanto que con sociología jurídica se vincula con lo atinente a la problemática del acceso a la justicia.
Por lo anteriormente expuesto, la asignatura debiera ubicarse –conforme al actual plan de estudios- en el cuarto o quinto año.
e) Consideraciones de interés.
Por último, es dable destacar que desde la sanción de la ley Provincial de Mediación, esta Facultad conjuntamente con otras Facultades de Derecho Nacionales con asiento en la Provincia de Buenos Aires, han trabajo de manera conjunta con el objeto de organizar cursos de formación de Formadores en mediación, como también para formar abogados en mediación.
En ese sentido, actualmente esta Secretaría de Asuntos Académicos se encuentra elaborando un programa en materia de Mediación que nuclea a las demás Facultades de Derecho, con las cuales ha constituido un Consorcio de Universidades para llevar adelante la formación, la investigación y las actividades de extensión a los alumnos de grado y postgrado, como a la comunidad en general toda vez que ésta nueva ley bonaerense prevé para las mediaciones voluntarias la actuación vecinal.
Sin más, saludamos a Ustedes muy atentamente.
Liliana Haydeé González – Directora
Graciela De la Loza – Subdirectora
José María Lezcano – Secretario
Rita Marcela Gajate

"MEDIACION Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
HACIA EL ESTIMULO DE NUEVAS COMPETENCIA PROFESIONALES"[66]
José María Lezcano[67]
Abstract:

[66] El presente artículo surge del Trabajo Final presentado como Evaluación: "Propuesta de Innovación Curricular" en el Seminario de Postgrado: "La Educación Superior en el Siglo XXI. Factores Claves para la Modernización e Innovación Curricular". Directoras: Dra. Belén Sáenz-Rico de Santiago (UCM) – Dra. Graciela Merino (UNLP). Febrero de 2011, Escuela Latinoamericana de la U. Complutense de Madrid y Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, en el presente se amplían contenidos, propuestas y bibliografía y constituye una de las propuestas del Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP al proceso de reforma del plan de estudios de la carrera de Abogacía.

[67] Docente-investigador. Formador de Mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación y del Programa de Formación de Mediadores en la Provincia de Buenos Aires ley 13.951. Docente del Curso de Posgrado de Mediación de la FCJyS (Doc. Responsables: Dras. Graciela de la Loza y Liliana Gonzalez). Coordinador y Docente del Seminario de Grado: "Mediación, ética y Ejercicio de la Abogacía" (Directoras Dras. Graciela de la Loza, Liliana Gonzales y Rita Gajate). Secretario del Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Maestrando en Sociología Jurídicas.

Resulta una verdad evidente que en la sociedad de hoy, los profesionales del derecho encuentran serias dificultades a la hora de recurrir a los clásicos paradigmas jurídicos para brindar soluciones válidas a las actuales situaciones de conflictividad social. Hoy, la sociedad actual refleja un sinnúmero de situaciones cuyo nivel de complejidad hacen que aquellos criterios y parámetros de solución elaborados bajo formas rígidas y de lógica excluyente, sean insuficientes e ineficaces. Ello impone al derecho, como principal medio de disuasión y resolución de conflictos, así como instrumento necesario para el acceso a la justicia, la necesidad de desarrollar nuevas capacidades heurísticas y competencias pertinentes para dotar a los operadores jurídicos de las aptitudes intelectuales y axiológicas que la sociedad demanda.
Ante la necesaria reflexión a la que invita el proceso de reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se hace necesario elaborar y poner a consideración propuestas y aportes orientados a construir un nuevo perfil profesional en nuestros egresados.
En el presente trabajo se expone una propuesta de innovación curricular en el que se identifican una serie disparadores conceptuales que permitan reflexionar sobre la necesidad de capacitar a los abogados en competencias básicas en las formas de resolución de conflictos auto-compositivas, en particular mediación.

1.- INTRODUCCIÓN:
La carrera de Abogacía en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene una importante tradición académica y profesional. Prestigio que supo ganarse a lo largo de los más de 100 años que se viene dictando en nuestra UNLP. Su plan de estudios ha tenido reformas y ampliaciones en su currícula, sin embargo, en su mayoría se han dirigido a integrar conocimientos jurídicos específicos, ampliando la currícula de la carrera bajo una clara impronta iuspositivista e integral hacia las distintas especializaciones de las ciencias jurídicas, dejando en planos muy lejanos sociales, metodológicos y de lógicas de pensamiento divergentes necesarios en el contexto social, económico y jurídico actual.
Actualmente la carrera consta de treinta y dos materias más un seminario[68]. Dentro del total de materias, solo dos resultan materias de práctica profesional procesal[69], dos materias de corte sociológico[70] y dos ius-filosófico[71]. Con lo que se puede decir que la formación del estudiante de Abogacía es ciertamente integral, como se dijo, pero sólo en lo que se refiere a los puntos de vista de las ramas del Derecho, bajo una marcada lógica de razonamiento lineal y vertical.
En este mismo sentido, puede considerarse que las antiguas modificaciones y ampliaciones de asignaturas en la carrera se han orientado a ampliar el marco teórico sobre disciplinas del quehacer profesional, disciplinas que el desarrollo doctrinario y jurisprudencial ha construido sobre la base del conocimiento de la dogmática jurídica. Se puede mencionar que no ha habido en el último tiempo propuestas de reformas curriculares que innoven sobre los canales de participación ni se inclinen a modificar el statu quo [Gonzalez, Cardinaux, 2010]. En esencia, la estructura de nuestro plan de estudios data de 1953.
Recientes investigaciones evidencian, además de problemas concretos de carácter estructural[72], que el perfil del estudiante que egresa de nuestra facultad posee un marcado perfil litigante a la hora de buscar la resolución de conflictos[73].
Por otro lado la Sociedad Civil, el Mercado -con sus circuitos y dinámicas económicas- y las propias políticas públicas del Estado nacional y provincial, se encuentran cada vez más encaminadas a buscar alternativas en la resolución de conflictos jurídicos, que representen formas más flexibles, dinámicas, ágiles y económicas y brinden respuestas más inmediatas, concretas y centradas en las partes y sus intereses. Sin soslayar, bajo ningún punto de vista la justicia y equidad como base de todo complejo axiológico-jurídico.
Las modernas tendencias hacia la resolución de conflictos se orientan estimular formas que se alejen de consignas de "ganar-perder", para centrarse en el "ganar-ganar" en la resolución disputas, dejando de lado al proceso judicial como única vía válida. Así, recientes marcos normativos[74] (y no tanto) buscan alentar y desarrollar métodos de resolución de conflictos más ágiles, económicos, bajo dinámicas de trabajo colaborativas y ciertamente restaurativos. Un ejemplo concreto de ello ha sido la mediación.

2.- PROBLEMA
Ante esta perspectiva, encuentro una contraposición evidente entre la formación orientada casi exclusivamente a hacia competencias de abogados litigantes de los egresados de nuestra facultad, y las competencias necesarias para desarrollar estas nuevas formas de resolución de conflictos.

3.- PROPUESTA:
En orden a lo expuesto, propongo una modificación del plan de estudio de la carrera de derecho, en la que se incorpore como materia necesaria de la currícula "Mediación y Resolución de Conflictos", que permita capacitar a los estudiantes de derecho en las "nuevas formas" de resolver conflictos de carácter jurídico.

4.- OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA:

---

68 Elegido de una amplia oferta de opciones que profundizan sobre determinado aspecto puntual de la carrera o tema de interés. Persigue, sin lograrlo, desarrollar aspectos metodológicos de investigación, en los que la mayoría de los docentes no se encuentran formados, y se aprueba con un trabajo final de tipo monográfico.
69 Prácticas Penales y Prácticas Civiles y Comerciales
70 "Introducción a la Sociología" en el primer año de la carrera y "Sociología Jurídica" en el quinto año.
71 "Introducción al Derecho" en el primer año de la carrera y "Filosofía Jurídica" en el quinto año.
72 V. G. distintas modalidades de exámenes (libres y de promoción), exiguo plantel de docentes y auxiliares con dedicación de tiempo completo a la investigación, el aislamiento disciplinario, reforzado por el formalismo jurídico, entre otros.
73 González, M – Cardinaux, N.: "Los actores y las prácticas. Enseñar y aprender Derecho en la UNLP". Ed. Edulp, La Plata, 2010.
74 En este orden se pueden nombrar a modo de ejemplo la ley de Mediación Nacional, leyes provinciales, ley de Defensa del Consumidor, Ley del Defensor del Pueblo nacional y provincial, así como también espacios dentro del mismo proceso judicial que instan la conciliación (audiencias conciliatorias en procesos Laborales y de Familia)

- Proponer la incorporación de la asignatura "Mediación" o "Mediación y Resolución de conflictos" como materia obligatoria dentro del Plan de Estudios de la carrera de Abogacía en la UNLP.

Objetivos Específicos de la propuesta:

Diseñar una propuesta pedagógica sobre la materia "Mediación" o "Mediación y Resolución de Conflictos" que estimule el trabajo colaborativo como técnica de trabajo didáctica en el aula.

Introducir en la formación y socialización del estudiante de abogacía, un ámbito de estudio en el que se induzca el pensamiento divergente, principalmente para la búsqueda de resolución de conflictos.

Detectar en los contenidos de las materias cursadas por los estudiantes, conocimientos jurídicos y sociales, que resulten apropiados para generar conocimiento significativo y crítico.

5.- DIAGRAMA:

5.1.- Ubicación dentro de la currícula

Se propone que la materia "Mediación" o "Mediación y Resolución de Conflictos", sea ubicada dentro del plan de estudio como correlativa de "Derecho Procesal II" y sus respectivas "Prácticas Procesales", "Derecho Civil V" (Familia y Sucesiones) y "Derecho Social y Laboral". Así, necesariamente se ubica dentro del último año de la currícula de la carrera de Abogacía.

De esta manera, el alumno que llega a esta materia lo hace con conocimientos adquiridos sobre el Proceso Judicial, tanto en teoría como en su práctica, así como también se asegura (desde lo formal) que posea los suficientes saberes del Derecho Civil, y de derecho del trabajo. El fundamento de estos últimos radica en que además de constituir conocimientos elementales, poseen una lógica de pensamiento lineal con un rígido anclaje en la ley, subordinando casi hasta la desconsideración en el análisis aspectos humanos y sociales.

5.2.- Carácter específico:

Si bien se plantea como una materia que aporta conocimientos específicos sobre un procedimientos particular -currículum formal-, bajo su didáctica se plantean a modo de currículum oculto la integración transversal de saberes de la carrera (dada la variabilidad de casos de conflictos que permitan ser analizados didácticamente) y una aproximación conceptual directa sobre métodos de resolución de conflictos tanto hétero como auto-compositivos, mostrando alternativas diferentes y válidas para encontrar soluciones.

5.3.- Modalidad de cursadas y plan de clases:

a.- Trabajo en el aula:

La modalidad general de derecho es de 6 horas semanales, distribuidas 4 horas con el profesor adjunto y 2 con el profesor titular. No existe ninguna distinción entre teoría y práctica, integrándose esta última cuando el docente lo considera didácticamente oportuno. Asimismo, pueden ser cuatrimestrales o semestrales.

La materia "Mediación" o "Mediación y Resolución de Conflictos" que se propone debería tener la misma cantidad de horas semanales, pero con la integración por curricula de 2 horas de práctica dentro de ellas. Con lo que, semanalmente el alumno tendría 4 horas de teoría (2 del titular y 2 del adjunto) y 2 horas de práctica semanales, buscando abordar vivencialmente los conocimientos que se plantean desde la teoría y el discurso.

b.- Modalidad virtual:

Asimismo, se plantea un canal de trabajo a través de las cátedras virtuales de la facultad, que permita complementar el trabajo de clase.

Las principales herramientas que se proponen para el uso didáctico (además del mail que resulta básico) son los foros y las wikis.

- Los foros se proyectan para la interacción, discusión y trabajo con los grupos, donde cada uno tendrá un foro de trabajo.
- Las wikis serán el instrumento adecuado para el trabajo colaborativo del grupo.

5.4.- Material y recursos didáctico

Además de la bibliografía básica de la materia, la cual brinda el marco teórico de trabajo, tanto en las clases teóricas como prácticas se utilizara material audio-visual.

Este será principalmente fragmentos de películas y vídeos, en las que se encuentren reflejadas escenas de diferentes situaciones de conflicto para su análisis, de manera que puedan ser utilizados como tópicos generativos para la comprensión de los temas de trabajo.

En la compilación de este material se tendrá especialmente en cuenta aquellos archivos y material del tipo de sketch o sátiras humorísticas que permitan trabajar estas situaciones recurriendo al humor y el absurdo.

Por su parte, en las clases prácticas, se trabajará principalmente con técnicas de "juego de roles" y "torbellino de ideas", entre otras técnicas que estimulen la reflexión y creatividad.

5.5. Evaluación

Para abordar esta cuestión se plantea una evaluación permanente del grado de avance de los estudiantes a lo largo de todo el período de clases. Esta se instrumentara bajo un portfolio individual y grupal, en los que se reconozcan las metas de comprensión. Estas metas se complementarán mediante una serie de autoevaluaciones a través de una serie de check-list, voluntarios y estratégicamente ubicados de acuerdo a los contenidos, bajo las cuales se pretende que los alumnos reconozcan si han alcanzado tales expectativas cognitivas.

Asimismo, y de acuerdo a lo que establece la reglamentación de las cátedras de derecho, dos evaluaciones parciales, que integrarán la nota final de la materia.

6.- INDICADORES DE EVALUACIÓN

El indicador que se tomará será la incorporación de la perspectiva transdisciplinaria en el análisis de los temas y búsqueda de alternativas de solución de los conflictos planteados.

Otro indicador lo constituirá el desarrollo de alternativas creativas en las etapas de negociación y generación de opciones dentro de la mediación.

7.- CONTENIDOS Y COMPETENCIAS:

Modulo I

Contenidos Mínimos del Módulo 1:

El Conflicto:

Distintas teorías sociológicas y antropológicas del conflicto social y campo de abordaje.

Conceptualizaciones posibles. La Teoría del Conflicto de R. Entelman. Análisis estático y dinámico del Conflicto.

Tipos: conflicto personal e interpersonal; inter e intrainstitucional. Real, aparente, manifiesto y subyacente. Sus causas y formas de detectarlos. Clasificación de Conflictos de C. Moore: Conflicto de valores.

Estructurales. Relacionales. Sobre la información. De intereses. Relacionales. Cómo reaccionamos frente a ellos.
Valoraciones del conflicto. Fas positiva y negativa. Conflictos funcionales y disfuncionales.
Función del Derecho en la regulación del Conflicto.
Competencias genéricas:
- Identificar relaciones sociales de conflicto en la interacción de dos o más sujetos, reconociendo los actores, sus objetivos y relaciones de poder. Reconocer dimensiones y características generales.
Competencias Específicas:
- Diseñar técnicas de observación de situaciones conflictivas tanto desde una perspectiva estática del fenómeno como su reconocimiento en tanto proceso que se desarrolla en un tiempo y espacio.
- Clasificar los conflictos de acuerdo a las categorías determinadas.
- Reconocer los aspectos negativos y positivos en situaciones de conflicto.
Actividades propuestas mínimas:
1. Identificar situaciones jurídicas en las que se plantean colisión de intereses, ambos reconocidos jurídicamente válidos (conflicto permitido versus permitido).
2. Realizar un recorrido real o posible de la/s linea/s de hechos o acontecimientos que han llevado a una situación de conflicto actual y concreta.
Dimensiones de trabajo:
Social: reconocer las acciones irracionales conflictivas para derivarla y proponer acción racional conflictiva.
Epistemológica: abordar desde lo jurídico los conflictos inter-personales. Reconocer los límites con las perspectivas psicológicas.
Axiológica: estimular los análisis que permitan trabajar sobre la pacificación.

Bibliografía propuesta:
Entelman, Remo. (2005) "Teoría del Conflicto. Hacia un nuevo Paradigma" Ed. Gedisa.;
Moore, Christopher. (2008) "El Proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos" Trad. Anibal Leal. Ed. Granica.
Folberg Jay y Taylor, Alison (1997). "Mediación. Resolución de conflictos sin litigio". Trad. Mendoza Ed. Limusa S.A.. Grupo Noriega Editores.
Coser, Lewis. (1967) "Nuevos aportes a la teoría del conflicto social" (Cáp. I Revisión de las funciones del conflicto social). Amorrortu Editores.
Robbins, Stephen P. (6ta. Edición, 1993) "Comportamiento Organizacional. Conceptos, controversias y Aplicaciones" (Cap. XIII Conflicto, Negociación y Comportamiento Intergrupal). Trad. Mascaró Sacristán Pilar. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.

Modulo II.
Contenidos Mínimos del Módulo 2
Primera parte Módulo 2
Formas sociales de resolución de conflictos. Análisis histórico y perspectiva actual. Nuevas necesidades y paradigmas.
Métodos adversariales y no adversariales. Comparación y diferencias. El proceso Judicial como método adversarial de resolución de conflictos.
La administración de justicia como deber y función de la organización jurídica del Estado.
El proceso judicial como método de resolución. Las formas "alternativas" y/o "adecuadas" de resolución de conflictos. Discusiones y planteos.
La justicia en la resolución de conflictos.
Segunda parte Modulo 2
Diferencias entre los distintos métodos de resolución I: Adversariales: Arbitraje. Concepto, características. Tipos. Usos y aplicaciones. Los Tribunales arbitrales.
El proceso del sumario administrativo como métodos adversarial de resolución. Estructura general y su instrumentación en la organización administrativa. Características.
Diferencias entre los distintos métodos de resolución II: Conciliación. Conceptos. Características y tipos de conciliación. Su aplicación en el proceso laboral y de familia.
La Facilitación. Concepto. Tipos y usos. El Ombudsman y las Defensorías. Su función como operador de conflictos. Tipos y casos. Su inserción en la estructura jurídica.
La Negociación. Conceptos. Características y tipos.
Breve concepto sobre MEDIACION: hacia un cambio de mentalidad. Beneficio para: las partes, la Justicia, los abogados y la sociedad en general.
Los sistemas de resolución de conflictos en línea. Los Online Disputes Resolution y las formas de resolución de conflictos con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Los medios de resolución de conflictos y su función del tejido social. Su valor social y la búsqueda de reducción de la violencia.
Competencias genericas:
- Desarrollar capacidades cognitivas que permitan distinguir distintos sistemas de resolución de conflictos.
- Desarrollar actitudes de valoración de los distintos sistemas, en contextos sociales y culturales diversos.
Competencias específicas:
- Planificar estrategias de abordaje de disputas desde perspectivas complejas diferentes.
- Organizar procedimientos y dinámicas de actuación en sistemas de resolución hetero y auto-compositivos.
- Desarrollar habilidades, estrategias y criterios de evaluación de oportunidades para el mejor aprovechamiento las instancias que permiten las diferentes sistemas.
Actividades propuestas mínimas:
- Dividir la clase en grupos en los que se evalue, argumente y justifique las ventajas y desventajas de los métodos analizados, de acuerdo al contexto socio-culturales de los diferentes actores que se plantearan en la relación conflictiva propuesta.
Parte de esta actividad se inicia en el aula y continúa de manera virtual (Foros), siendo el docente quien modere y estimule la actividad en los mismos.
Dimensiones de Trabajo:
Social: reconocer contextos socio-culturales diferentes y la incidencia de estos en la determinación de método elegido para la resolución.

Epistemológica: reconocer los diferentes paradigmas que representan los métodos adversariales y no-adversariales.
Axiológica: reconocer la diversidad, así como la trascendencia los valores de orden y cooperación, como fundamentos del plexo axiológico jurídico (Cossio)

Bibliografía Propuesta:
- Folberg Jay y Taylor, Alison. (1997) "Mediación. Resolución de conflictos sin litigio". Trad. Mendoza Ed. Limusa S.A.. Grupo Noriega Editores.
- Gozaíni, Osvaldo Alfredo (1995) "Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos" Ed. Depalma, Buenos Aires.
- Caram, Maria Elena, y otros. (2006) "Mediación. Diseño de una práctica" Ed. Historica de Emilio J. Perrot. Buenos Aires
- Kelsen, Hans. "Que es la Justicia" Trad. Calvera, L. Ed. Leviatan. Buenos Aires.
- Cossio, Carlos. (1964) "Teoría Egológica del Derecho y el concepto de libertad". Ed. Abeledo-Perrot,. Bs. As.
- López B., Manuel y otros: (2006) "Justicia Cumunitaria y Jueces de Paz. Las técnicas de la Paciencia" (pags. 11-62 y 166-180) Ed. Corporación Región, Red de Justicia Comunitaria, Instituto Popular de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular. Medellin, Colombia.

Modulo III
Contenidos Mínimos del Módulo 3.
Negociación. Concepto.
Desde las Teorias de la Comunicación hasta la Negociación.
Tipos de negociación: Diferentes formas. Negociación directa o pura. Por posiciones o intereses. Tipos y estilos de negociación.
Participación de terceros: observador o tercero participante.
Formas de negociación competitiva y colaborativa. Conceptos. Ventajas e debilidades. Complementación y convergencia.
Escuela de Harvard. Negociación basada en intereses. Estrategia de penetración ante posiciones obstinadas.

Competencias Genéricas:
- Conocer y aplicar las estrategias y técnicas de negociación en sus diferentes variantes.
Competencias Específicas:
- Organizar la exposición de ideas, comunicación e interpretación de propuestas en el marco de una negociación.
- Identificar las posiciones, intereses y necesidades de las partes.
- Aplicar las técnicas de separación de las personas del problema y de la norma (ley), técnicas de detección de intereses, evaluación de criterios objetivos y opciones de mutuo beneficio.
- Manipular actitudes de negociación en situaciones hipotéticas diversas.
Actividades propuestas mínimas:
- Desarrollar juegos de roles en los que se establezcan consignas de diferentes actitudes y aptitudes de negociación.
- Proponer torbellino de ideas en la búsqueda de caminos de concreción de acuerdos.
Dimensiones de Trabajo:
Social: Desarrollar estrategias de negociación adecuadas a la búsqueda de satisfacción de intereses bajo criterios de beneficio mutuo (ganar-ganar).
Epistemológica: Trabajar sobre conceptos epistémicos comunes ante diferentes escenarios y estilos de negociación.
Axiológico: propender al reconocimiento de la cooperación y solidaridad como elementos de un tejido social pacífico.

Bibliografía Propuesta:
- Fisher, Roger, y otros (1985) "Si... ¡de acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder". Trad. Vasco Montoya, E. y de Hassan, A. Grupo Editorial Norma,. Colombia.
- URY, W. (1998) "Supere el NO. Cómo negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas". Norma, Desima Reimpresión.
- Ury. W. y otros (1995). "Cómo resolver disputas – Diseño de sistemas para reducir costos del conflicto". Ed. Rubinzal – Culzoni.
- Mnookin, Robert H. (2003) "Resolver Conflictos y Alcanzar Acuerdos. Cómo plantear la negociación para generar beneficios". Trad. Fidella Escolá, Roc. Ed. Gedisa.
- Raiffa, Howard (1991) "El Arte y la Ciencia de la Negociación". Trad. Cardenas, G. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.
- Sitnisky, Mario (1985) "De la Negociación. Ensayo sobre los modos no violentos de transformación y cambio de la realidad". Ed. Argonauta, Buenos Aires.

Modulo IV
Contenidos Mínimos del Módulo 4
Primera parte Módulo 4
Características de la mediación: Cooperación, protagonismo de las partes (autocomposición), confidencialidad, imparcialidad /neutralidad, acento en el futuro, ahorro de tiempo y dinero, informalidad.
Escuelas de Mediación: La Escuela de Harvard. Sus principios, características y objetivos. Sus autores. La comunicación y el acuerdo. Ventajas y críticas.
Escuela Transformativa. Sus principios, características y objetivos. Sus autores. El empoderarimiento y el reconocimiento del otro. La comunicación y la relación de las partes. Ventajas y críticas.
Escuela Circular-Narrativa. Sus principios, características y objetivos. Sus autores. La interdisciplinariedad. El relato y la narrativa de las partes. Ventajas y críticas.
La Mediación en Latinoamérica. Sus modalidades, características y objetivos. Autores lationamericanos, principios y alcances. La interculturalidad y sus raíces. Los modelos de mediación en la región. Ventajas y críticas.
La Mediación en un sentido amplio y mediación en un sentido estricto.

Segunda parte Modulo 4
La ley nacional de mediación 26.589 y ley provincial 13.951. su normativa e instrumentación. Los resultados, beneficios y críticas.
El Mediador. Capacitación y formación. Su rol y funciones en el proceso. El mediador como agente del cambio. Su relación con las partes. La confidencialidad y la confianza. Debates sobre la imparcialidad y neutralidad. Equidistancia y multiparcialidad.
El mediador como director del proceso. Sus facultades y límites. Sus intervenciones y meta-intervenciones. Su relación con las partes. La excusación.
La mediación en la práctica. La identificación de casos mediables. Su abordaje. Convocatoria a la mediación y organización del espacio de la mediación. Rol del Abogado patrocinante de una mediación

Tercera parte Módulo 4
Etapas de la Mediación. Conceptualización y características de cada una de ellas. El rol del mediador en las distintas etapas.
El discurso inicial. Relato de las partes. Separación de posiciones de intereses. Replanteo. Generación de opciones. Acuerdo. Homologación.
Recursos del proceso de mediación (reuniones conjuntas, privadas, final), comunicacionales y conceptuales. La lectura del lenguaje gestual y corporal. Herramientas: preguntas abiertas y cerradas. Escucha activa. Parafraseo. Agente de la realidad y el abogado del diablo.
Ética del Mediador. Dilemas. Responsabilidad.

Cuarta parte Módulo 4
Diferentes aplicaciones de la Mediación.
Mediación Penal. Leyes de Mediación penal y su instrumentación en el proceso penal. Aspectos de justicia restaurativa.
Mediación Escolar. Mediación entre pares. Su valor y trascendencia. Dinámica y aplicaciones. Ámbitos. Mediación educativa.
Mediación Familiar. Características. Discusiones en torno a aspectos clave: intervención de menores, mediación en casos de violencia familiar, otros.
Mediación Comunitaria. Características y dinámica. Legitimación y liderazgo de los participantes. Modelos de aplicación.
Mediación empresarial. Casos y tipos. La mediación en los negocios y en las etapas de crisis de la empresa. Su instrumentación.
Otras aplicaciones. Mediación ambiental. Mediación en salud.

Competencias Genéricas:
- Realizar la integración de los conocimientos desarrollados a lo largo de la asignatura.
- Aplicar las destrezas de observación, análisis y proposición estimuladas mediante los contenidos propuestos.
- Dominar las técnicas y herramientas de mediación como método alternativo de resolución de conflictos.

Competencias específicas:
- Identificar las capacidades y aptitudes del mediador como director del proceso de mediación.
- Planificar el desarrollo de mediaciones tanto desde el punto de vista del mediador como de abogado participante en la mediación.
- Identificar las funciones del mediador y de los abogados en las distintas etapas de una mediación.
- Diferencias objetivos y funciones de los distintos tipos de reuniones de mediación.
- Diseñar estrategias de preguntas como instrumentos de verificación de hipótesis o conjeturas elaboradas sobre los elementos del conflicto.

Actividades propuestas mínimas:
- Representar teatralmente mediaciones de distintos tipos de conflictos.
- Análisis normativo crítico.
- Observación de mediaciones y reconocimiento de tipos, herramientas, modelos, etc.

Dimensiones de trabajo:
Social: trabajar sobre la mediación como una técnica de pacificación social, que no solo permita descomprimir la actividad judicial, sino que se presente como primera opción lógica en la búsqueda de solución de conflictos, basada en el reconocimiento del otro.
Epistemológica: construir conocimiento integral y pertinente sobre el proceso de mediación en el marco de las ciencias jurídicas.
Axiológica: desplazarse bajo el plexo axiológico jurídico, desde los parámetros de justicia conmutativa y justicia distributiva.

Bibliografía Propuesta:
- Folberg Jay y Taylor, Alison. (1997) “Mediación. Resolución de conflictos sin litigio”. Trad. Mendoza Ed. Limusa S.A.. Grupo Noriega Editores.
- Caram, Maria Elena (2006) “Mediación. Diseño de una práctica” Ed. Historica de Emilio J. Perrot. Buenos Aires.
- Suares, Marines (2004) “Mediación. Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas” Ed. Paidos. Buenos Aires.
- Diez, Francisco y Tapia, Gachy (1999) “Mediación. Herramientas para Trabajar en Mediación”. Ed. Paidos. Bs.As.
- Moore, Christopher. (2008) “El Proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos” Trad. Anibal Leal. Ed. Granica.
- Folger, Joseph, y Baruch Bush, R. A. (2006). “La Promesa de la Mediación. Cómo afrontar conflictos a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros” Trad. Leal, A. Ed. Granica. Buenos Aires.
- Alvarez, Gladys (2003). “La Mediación y el Acceso a la Justicia” Ed. Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires.
- Calcaterra, Rubén (2005). “Mediación Estratégica” Ed. Gedisa. Buenos Aires.

8.- CONCLUSIONES

Desde hace varios años se viene investigando sobre la formación de los estudiantes de derecho y el perfil de los jóvenes abogados[75]. Estos trabajos aportan un inmenso conocimiento y perspectivas de campo y reflexión. En este orden, investigaciones recientes evidencian, además de problemas concretos de carácter estructural[76], que el modelo del estudiante que egresa de nuestra facultad posee un marcado *perfil litigante* a la hora de buscar la resolución de conflictos.

Por otro lado la Sociedad Civil, el Mercado -con sus circuitos y dinámicas económicas- (bajo una mirada macro-social), así como políticas públicas del Estado nacional y provincial[77] se encuentran cada vez más encaminadas a buscar alternativas en la resolución de conflictos jurídicos que no se centren exclusivamente en propuestas de ganar-perder, como es el proceso judicial, o resolución jerárquica (en el ámbito administrativo). En este sentido, estas alternativas requieren además competencia profesionales que se representen en formas más flexibles, dinámicas, ágiles y económicas, brindando respuestas más inmediatas, concretas y centradas en las partes y sus intereses[78].

En este contexto, es en las ciencias jurídicas y el Derecho en particular, donde se deben encontrar los fundamentos teóricos y epistémicos de estas nuevas formas de resolución, y que bajo ningún punto de vista se desvíen de la justicia y equidad como base de todo complejo axiológico-jurídico y social.

En este orden de ideas, en particular desde los años '90 se ha renovado en el país y Latinoamérica un significativo impulso de estos sistemas RAD, los que han sido incorporados en el sistema jurídico desde distintos ramas (VG. Derecho Comercial, Derecho Procesal, Derecho del Consumidor, entre otros), ocupando un espacio de reflexión y trabajo en conceptos tales como el "acceso a la Justicia", "justicia restaurativa", entre otros.

En el proceso de su formación como abogado, el estudiante transita por una socialización, primero académica y luego profesional, que va más allá de los conocimientos de una materia o de un conjunto de materias en particular. En él se constituye el *habitus*, en términos de Bourdieu, con el que va a desenvolver en la sociedad, así como también desarrollar su actividad como operador de conflictos jurídicos. En otras palabras, si ante un problema sólo se plantea el litigio como única instancia, sin considerar otras formas más horizontales y colaborativas, obtenemos un perfil de litigante sin alcanzar el desarrollo de otras necesarias competencias sociales.

Ante estas circunstancias y teniendo en cuenta el proceso de reforma de plan de estudios de nuestra carrera de Abogacía, se realiza este aporte para la discusión y el debate, teniendo en vista qué profesionales brindaremos a nuestra sociedad.

Bibliografía:

Alvarez, Gladys (2003) "La Mediación y el Acceso a la Justicia" Ed. Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires.
Blythe, T. (1999) "La enseñanza para la comprensión... guía para el docente." (compilado del seminario) Ed. Paidós.
Calcaterra, Rubén (2005). "Mediación Estratégica" Ed. Gedisa. Buenos Aires.
Caram, Maria Elena y otros (2006) "Mediación. Diseño de una práctica" Ed. Historica de Emilio J. Perrot. Buenos Aires.
Carlino, P. (2005) "Escribir, leer y aprender en la Universidad" (compilado del seminario) Fondo de la Cultura Económica.
Coser, Lewis. "Nuevos aportes a la teoría del conflicto social" (Cáp. I Revisión de las funciones del conflicto social). Amorrortu Editores.
Cossio, Carlos. (1964) "Teoría Egológica del Derecho y el concepto de libertad". Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As.
Diez, Francisco y Tapia, Gachy. (1999) "Mediación. Herramientas para Trabajar en Mediación". Ed. Paidos. Bs.As.
Entelman, Remo. (2005) "Teoría del Conflicto. Hacia un nuevo Paradigma" Ed. Gedisa.
Fisher, Roger (1985). "Si... ¡de acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder". Trad. Vasco Montoya, E. y de Hassan, A. Grupo Editorial Norma Colombia.
Folberg Jay y Taylor, Alison. (1997) "Mediación. Resolución de conflictos sin litigio". Trad. Mendoza Ed. Limusa S.A.. Grupo Noriega Editores.
Folger, Joseph, y Baruch Bush, R. A. (2006) "La Promesa de la Mediación. Cómo afrontar conflictos a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros" Trad. Leal, A. Ed. Granica. Buenos Aires.
González, M. y Cardinaux, N: (2010) "Los actores y sus prácticas". Ed. Edulp. La Plata.
Gozaíni, Osvaldo Alfredo (1995) "Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos" Ed. Depalma, Buenos Aires.
Kelsen, Hans. "Que es la Justicia" Trad. Calvera, L. Ed. Leviatan. Buenos Aires.

---

[75] Salanueva, O., González, M, Cardinaux, N. y otros "La Profesión Jurídica: Nuevas Realidades" Edulp, La Plata 1999. Brigido, A.M., Lista, C.A,, Begala, S, Tessio Conca, A.: "La Socialización de los estudiantes de abogacía: Cronica de una metamorfosis" Ed. Hispania. Cordoba, 2009. Gonzalez, M y Carninaux, N (compiladoras) "Los actores y la prácticas: Enseñar y aprender Derecho en la UNLP" Ed. Edulp. La Plata, 2010. asi como la investigación dirigida por Dra. O. Salanueva y codirigida por Dra. M. González (período 2005/2008) Programa de Incentivos Ministerio de Educación - UNLP, entre otros.

[76] González, M. y Cardinaux, N. op. Cit.

[77] En este orden se pueden nombrar a modo de ejemplo la ley de Mediación Nacional 26.589, leyes provinciales (en la Prov. de Bs. As. Ley 13.951), ley de Defensa del Consumidor, Ley del Defensor del Pueblo nacional y provincial, así como también espacios dentro del mismo proceso judicial que instan la conciliación (audiencias conciliatorias en procesos Laborales y de Familia)

[78] Vease: "Tercera Reunión de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas" OEA/Ser.K/XXXVI.3 REMJA-III/doc.13/00 rev.2. Costa Rica 2000., - Así como trabajos en World Mediation Forum, Actas de los Congresos Mundiales de Mediación, habiéndose realizado el último en Salta, Argentina, o proyectos llevados a cabo por el BID FOMIN, entre otros.

López B., Manuel y otros. (2006) "Justicia Cumunitaria y Jueces de Paz. Las técnicas de la Paciencia" (pags. 11-62 y 166-180) Ed. Corporación Región, Red de Justicia Comunitaria, Instituto Popular de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular. Medellin, Colombia.
Mnookin, Robert H. (2003) "Resolver Conflictos y Alcanzar Acuerdos. Cómo plantear la negociación para generar beneficios". Trad. Fidella Escolá, Roc. Ed. Gedisa.
Moore, Christopher. (2008) "El Proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos" Trad. Anibal Leal. Ed. Granica.
Moreira, M. A.: "Aprendizagem Significativa crítica" (compilado del Seminario) http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf
Raiffa, Howard (1991) "El Arte y la Ciencia de la Negociación". Trad. Cardenas, G. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.
Robbins, Stephen P. (6ta. Edición, 1993) "Comportamiento Organizacional. Conceptos, controversias y Aplicaciones" (Cap. XIII Conflicto, Negociación y Comportamiento Intergrupal). Trad. Mascaró Sacristán Pilar. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.
Sitnisky, Mario (1985) "De la Negociación. Ensayo sobre los modos no violentos de transformación y cambio de la realidad". Ed. Argonauta, Buenos Aires.
Suares, Marines (2004) "Mediación. Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas" Ed. Paidos. Buenos Aires.
Ury, W. (1998) "Supere el NO. Cómo negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas". Norma, Desima Reimpresión.
Ury. W. y otros, (1995) "Cómo resolver disputas – Diseño de sistemas para reducir costos del conflicto". Ed. Rubinzal – Culzoni..

PROYECTO N° 65: Autor: Agrupación Estudiantil Franja Morada, remite proyecto integral de reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía

Haciendo un recorrido histórico a través de la evolución del Plan de Estudios a partir del año 1906, surge evidente la orientación generalista del derecho en lo que respecta a la formación del abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata que de las currículas mencionadas se pretendía dar.

Los cambios de la sociedad y del derecho han hallado su correlato en las modificaciones que al plan de estudios de la carrera se han hecho. En ese sentido, cabe destacar a modo de ejemplo la reforma realizada en el año 1929, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen que en el contexto de los contenidos dados en el ámbito de la facultad se ha traducido en la incorporación de nuevas asignaturas acordes con las nuevas necesidades de la sociedad, cual es el caso de las asignaturas Finanzas, Legislación del Trabajo, Derecho de la Minería y Rural, Derecho Marítimo y Legislación Aduanera y Régimen Jurídico de las comunicaciones.

De lo dicho anteriormente se infiere entonces que la reforma del plan de estudios no puede estar apartada de la coyuntura social que la condiciona.

Los cambios sociales surgidos a partir de la última modificación del plan de estudios en 1984 no han sido menores, y por ello es que la reforma que se propicia no puede ser ajena a ellos.

En ese sentido cabe hacer una revisión histórica, referenciando los datos salientes que justifican la modernización de la currícula de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Plata y que desde la FRANJA MORADA propiciamos.

Como dato saliente y determinante del cambio de paradigmas en lo que respecta a las ciencias jurídicas en el marco del derecho argentino, no puede soslayarse el rol primordial que ineludiblemente significa la Reforma Constitucional de 1994. Las modificaciones a la Carta Magna nos demuestran en estos primeros 17 años de vigencia el cambio en la estructura social y su correlato en las relaciones e instituciones jurídicas.

La consagración de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional ha repercutido enormemente en la estructura social. En efecto, la tutela efectiva de los derechos que antes se hallaban implícitos en nuestra Constitución hoy se manifiestan de forma expresa al amparo de un régimen concreto. Tal es así que derechos humanos como a la vida, la salud, la educación, la niñez, la no discriminación, al acceso a una vivienda digna, el derecho al trabajo y tantos otros, hoy se hallan jerarquizados por sobre otros intereses particulares.

La reforma constitucional también ha implicado renovaciones en lo que respecta al ejercicio de los derechos tutelados. Así, los mecanismos ordinarios de acceso a la jurisdicción se ven ampliados por nuevos institutos como las acciones de habeas corpus, habeas data y amparo -este último de existencia pretoriana anterior a la consagración efectiva en el texto legal- así como modificaciones en lo que respecta a la legitimación para entablar pretensiones. En ese sentido podemos referirnos a la legitimación más amplia en materia de intereses difusos e intereses de incidencia colectiva.

En este último caso cabe estarse al mayor desarrollo que en el último tiempo ha tenido el derecho ambiental. Tal es así, que a través de los nuevos institutos mencionados y de las reformas procesales indicadas, ha ido in crescendo la evolución de la tutela de este derecho colectivo. Corolario de ella es la sanción de numerosas leyes que se acrecientan constantemente en número y en especificidad, dando origen al incipiente surgimiento del derecho ambiental como una rama autónoma. La trascendencia del ambiente para el desarrollo de la vida, las catástrofes naturales cada vez más atroces, la agotabilidad de los recursos naturales, el poco desarrollo de mecanismos de energías alternativas renovables, conllevan a que la tutela del Estado en este sentido deba ser aún mayor, teniendo en consideración también las consecuencias que estos factores traen aparejadas en lo que la vida y la salud de los ciudadanos se refiere. En ese sentido la legislación ha ido avanzando, hasta la consagración de normativa marco a nivel nacional como la ley 25.675 que tutela el derecho ambiental e insta a las provincias a que hagan lo propio considerando que por mandato constitucional se trata de materia no delegada por la provincias al Estado Federal.

El auge de esta disciplina amerita su tratamiento pormenorizado en el plan de estudios actual, por cuanto los noveles abogados de la UNLP deben contar con las herramientas para afrontar estas situaciones jurídicas que se suscitan en torno a la protección de estos intereses colectivos tan complejos y cada vez más autónomos.

Siguiendo la línea de pensamiento en lo que a la reforma constitucional de 1994 se refiere, no es menos significativo el reconocimiento que los derechos humanos han tenido en nuestra legislación. Su consideración como dignos de una tutela especial surge como correlato de las circunstancias histórico-políticas que precedieron a su consagración en un nivel supra constitucional, de allí la evidente vinculación que tales institutos tienen con la búsqueda de afianzar el institucionalismo necesario para el mantenimiento de una república democrática. En ese sentido, tratados como la Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada de Personas, así como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los

Crímenes de Lesa Humanidad tienden a afianzar el sentido democrático de la Constitución con miras a los objetivos antes descriptos, a la vez que otros tratados de Derechos Humanos como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer y demás convenciones internacionales tienen un sentido preventivo a la vez que implican una política estatal tutelar activa de los derechos en éstas enunciadas. De allí surgen también mecanismos para hacer efectiva la observancia de sus disposiciones, lo cual indefectiblemente repercute en la estructura clásica del derecho concebido con el límite en la soberanía, por cuanto surgen instituciones de carácter internacional que velan por el cumplimiento efectivo de derechos humanos en otra esfera jurisdiccional, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos institutos provenientes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica.
En otro orden de ideas, cabe destacar que la evolución normativa por vía de la sanción ordinaria de leyes del Congreso ha sido profusa.
En lo que al derecho de familia refiere, las modificaciones desde 1984 a la fecha han sido superlativas, por cuanto el esquema tradicional ha sido modificado a la luz de las demandas sociales que se adelantaron a la recepción legislativa, a la vez que la determinaron.
A partir de 1987, con la sanción de la Ley 23.515 de divorcio vincular, el derecho vino a legislar una circunstancia que de hecho venía sucediendo, siendo una legislación superadora de aquella en virtud de la cual la concepción de divorcio se asimilaba al actual instituto de la separación personal, que no implica disolución del vínculo conyugal con las consecuencias jurídicas que ello implica tanto en materia hereditaria, previsional, etc. A su vez, dicha normativa ha ido en pos de la consagración de la igualdad de género, por cuanto en su parte pertinente reglamenta la patria potestad de los hijos entendiéndola como compartida por ambos progenitores, y no como exclusiva del padre, como fuera entendida en el Código Civil de Velez Sarsfield, de marcada influencia patriarcal.
En el último tiempo la evolución del derecho de familia no ha sido menor, y una vez más puede observarse la influencia del derecho internacional público en esta materia: la Convención Sobre los Derechos del Niño ha influenciado en la reciente modificación del régimen de mayoría de edad, actualmente alcanzado a la edad de 18 años conforme Ley 26.579.
En lo que a reformas trascendentes se refiere en materia de derecho de familia, no menor es la radical reforma en torno al matrimonio civil, que de igual modo que la ley de divorcio vincular, viene a hacerse eco de lo que en la praxis social se venía llevando a cabo y que se refiere a la consagración del matrimonio civil entre personas de igual sexo.
En materia de legislación local, la tendencia es a descomprimir el sistema de justicia que actualmente se encuentra abarrotado, lo cual implica una dilatación en la resolución de conflictos, lo cual se traduce en muchos casos en una desprotección del derecho y en una tutela ineficaz. En pos de subsanar las deficiencias que el ejercicio de la profesión litigante conlleva, se han esbozado numerosos intentos para buscar alternativas a la resolución judicial de conflictos. En ese orden de ideas, se crearon institutos como los amigables componedores, los tribunales arbitrales -ambos de notorio fracaso práctico- y la mediación. Este último instituto tiene una trascendencia superior, por dos factores: por un lado la reciente sanción de la ley provincial de mediación obligatoria previa a la instancia judicial (que tiene excepciones taxativas atendiendo a las particularidades del conflicto de que se trate), y por otro lado, por cuanto implica un cambio de paradigma del abogado litigante, y consagra la figura del abogado asesor, preventor de la instancia judicial, con la consecuente participación mas activa en lo que a la resolución de conflictos respecta.
Es por ello que la reforma del plan de estudios se hace imperiosa. No cabe considerar una currícula que se mantenga al margen de las circunstancias que la condicionan y determinan, máxime cuando en materia de ciencias jurídicas la interrelación derecho-sociedad resulta indivisible. La evolución histórica hace a la necesidad de actualización del plan considerándola como determinante de sus nuevos contenidos y aproximaciones.

PRIMER AÑO - CICLO DE MATERIAS PROPEDÉUTICAS

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades
511	Introducción al Derecho	96 horas	-
512	Derecho Romano	96 horas	-
513	Derechos Humanos	72 horas	-
514	Historia Constitucional	96 horas	-
515	Introducción a la Sociología	72 horas	-
516	Derecho Político	96 horas	-

Para el primer año de la carrera, luego de un exhaustivo análisis de la realidad del Primer Año de nuestro Plan de Estudios y de los de otras Universidades Nacionales, creemos pertinente reformar cuatro puntos. En primer término incluir Derecho Romano en este ciclo inicial de materias propedéuticas, debido a que la realidad de los alumnos que ingresan a esta Casa de Altos Estudios nos muestra que el cursado de esta materia se realiza en el Primer Año, por el simple hecho de no ser necesaria la aprobación de materias correlativas para su cursado.
Como siguiente punto, estamos convencidos de que debe incorporarse a la currícula, la materia Derechos Humanos, que centralice el estudio de aquellas facultades, derechos, instituciones y reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Proponemos por consiguiente, la incorporación al Plan de Estudios de la materia Derechos Humanos con la modalidad de materia trimestral de 6 horas semanales.
En tercer lugar, creemos que la materia Introducción a la Sociología debe modificar su carga horaria, entendiendo que puede realizarse un estudio acabado de su contenido en 72 horas, a razón de un curso trimestral de 6 horas semanales.

Como última medida, luego de analizar los Planes de Estudios de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, advertimos que la materia Derecho Político se encuentra contenida al igual que en la actualidad de nuestro Plan de Estudios en el Primer Año de la carrera, pero en estas Universidades, Derecho Político no requiere la aprobación de ningún curso correlativo para cumplir con sus contenidos. Es por esto que planteamos que se quiten sus correlatividades, incluyéndola en el Ciclo de Materias Propedéuticas.
Para finalizar con el análisis del Primer Año, creemos de vital importancia, continuar garantizando el curso de las primeras materias, alcanzando también a las materias Derechos Humanos y Derecho Político. Proponemos esto ya que entendemos que al plantear la materia Derechos Humanos en la modalidad de curso trimestral, podrían dictarse tres cursos al año y que no sería dificultoso garantizar el cursado a los alumnos de primer año; en cuanto a Derecho Político también creemos que no existen obstáculos para garantizar el cursado de dicha materia a los alumnos del primer año debido a que en la actualidad existen 3 cátedras y 14 comisiones, arrojando como resultado una totalidad de 700 vacantes por cuatrimestre.

SEGUNDO AÑO

Código	**Materia**	**Carga** horaria	**Correlatividades**
521	Derecho Civil I - Parte General	144 horas	511 – 512
522	Derecho Constitucional	96 horas	513 - 514 – 516
523	Derecho Penal I - Parte General	144 horas	511 – 512
524	Derecho Público Provincial y Municipal	96 horas	522
525	Derecho Internacional Público	96 horas	522
526	Derecho Penal II - Parte Especial	96 horas	523 - 522

Para el segundo año de carrera proponemos 5 reformas estructurales. En primer término establecer como asignaturas correlativas de Derecho Constitucional las materias Derechos Humanos, Historia Constitucional y Derecho Político, entendiendo que son las tres materias del ciclo propedeutico que ostentan una vinculación directa con el contenido que engloba Derecho Constitucional.
En segundo término entendemos que es innecesario que sea requisito la aprobación de Derecho Civil - Parte General para abarcar el estudio de Derecho Penal I, así lo advertimos en los planes de estudios de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales De Cuyo, Lomas De Zamora, Nordeste, Sur y Córdoba. Entendiendo que el estudio del Derecho Civil se enmarca dentro del ámbito del Derecho Privado, no encontramos un sentido pedagógico ni metodológico, para mantener esta correlatividad, ya que el derecho penal se sitúa dentro del espectro del derecho público. Al no encontrar fundamentos para la subsistencia de esta correlatividad entendemos que esta solo funciona como un obstáculo que entorpece el curso de la vida académica de los alumnos que pertenecemos a esta Casa de Altos Estudios.
Como tercera medida, estamos convencidos de la necesidad de trasladar la asignatura Derecho Civil II al tercer año del Plan de Estudios, lo cual fundamentaremos y desarrollaremos en el apartado del tercer año de la carrera.
Como cuarta reforma creemos pertinente incorporar dentro del segundo año de la carrera las materias Derecho Público Municipal y Provincial, Derecho Internacional Público y Derecho Penal II, atendiendo a las nuevas correlativas propuestas por el presente proyecto de Reforma del Plan de Estudios.
Continuando con el análisis de la materia Derecho Penal II, como anteriormente mencionamos, si entendemos que el Derecho Penal se enmarca en la órbita del Derecho Público, creemos de vital importancia para un correcto abordaje de la materia contar con los conocimientos del Derecho Constitucional, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, entendemos que es pertinente ubicar a Derecho Constitucional como correlativa anterior a Derecho Penal II – Parte Especial, y no es asi a Derecho Penal – Parte General ya que consideramos que por la manera en que proponemos que se disponga el nuevo régimen de correlatividades dentro del Plan de Estudios, entendemos que los alumnos que se encuentren cursando Derecho Constitucional, se encontraran cursando simultáneamente Derecho Penal I. Realizando un análisis por sobre la estrecha vinculación existente entre el contenido de ambas asignaturas, entendemos que atendiendo a objetivos estrictamente pedagógicos sería beneficioso para los estudiantes de la carrera de grado el hecho de abordar simultáneamente el contenido de ambas materias.

TERCER AÑO

Código	**Materia**	**Carga Horaria**	**Correlatividades**
531	Derecho Civil II-Obligaciones	144 Horas	521
532	Filosofía Del Derecho	64 Horas	533
533	Derecho Procesal - Parte General	96 Horas	521 – 526
534	Derecho Civil III- Contratos	96 Horas	531
535	Economía Política	96 Horas	515 – 531
536	Sociología Jurídica	96 Horas	532

Para la disposición del Tercer Año del Plan de Estudios entendemos que aquí debe estar comprendido el estudio de Derecho Civil II, ya que por una cuestión las modificaciones propuestas en el ámbito de las correlatividades, creemos pertinente reubicar materias que estaban contenidas en el Tercer Año, hacia el

Segundo, y viceversa, asimismo entendemos que el hecho de que dentro de un mismo año se encuentren comprendidas 3 materias con una carga horaria de 144 horas, generaría una sobrecarga en el alumnado.
Al analizar la asignatura Economía Política, creemos que para un mejor abordaje de los contenidos de la materia es primordial contar con la aprobación de Derecho Civil II. La disposición actual de esta materia en el Plan de Estudios genera un conflicto pedagógico para afrontar el dictado de las clases por el cuerpo docente, ya que se encuentran habilitados para cursar Economía Política, alumnos que constan sólo con la aprobación de Introducción a la Sociología, así como también estudiantes avanzados en la carrera, que se encuentran próximos a graduarse, por este motivo entendemos que allí radica el "conflicto pedagógico" para el dictado de su contenido: la disparidad de conocimientos entre los alumnos. Luego de un exhaustivo debate, creemos que modificando sus correlativas, habría una mayor paridad de conocimientos entre los alumnos cursantes.
Al abordar la materia Filosofía del Derecho encontramos una incongruencia en cuanto a la manera en que están diagramadas sus correlatividades. Entendemos que el alumno comienza en su primer año de carrera abordando determinadas líneas de pensamiento, filosofías, doctrinas y teoremas; una vez finalizada la etapa inicial, el alumno continúa en el segundo año de carrera realizando un análisis por sobre distintos autores, líneas filosóficas, y corrientes de pensamiento; estamos convencidos que para que el alumno continúe abordando el desmembramiento de las distintas corrientes filosóficas de pensamiento sería pertinente y adecuado que inmediatamente después de realizar el abordaje de Derecho Penal I se continúe con Filosofía del Derecho para luego desembocar en el estudio de Sociología Jurídica.
Al abordar el análisis de Planes de Estudios de diversas Universidades Nacionales encontramos que en su conformación existe la materia Derecho Procesal – Parte General. La teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procésales especiales. Considerando así mismo que la bibliografía utilizada por las cátedras para abordar dichos temas es la misma tanto en Procesal Penal como en Procesal Civil y Comercial. Por lo anteriormente explicado entendemos necesaria la incorporación de la materia Derecho Procesal – Parte General entendiendo que conllevaría mejoras pedagógicas en cuanto a lo referente a la teoría general del proceso.

CUARTO AÑO

Código	**Materia**	**Carga horaria**	**Correlatividades**
541	Derecho Civil IV - Derechos Reales	96 horas	534
542	Derecho Comercial I - Sociedades y Seguros	128 horas	534
543	Derecho Social del Trabajo y la Previsión	96 horas	522 – 534
544	Derecho Procesal Penal	96 Horas	533
545	Derecho Procesal Civil y Comercial	144 horas	533 – 534
546	Adaptación Profesional Procedimientos Penales	96 Horas	526 o 544 (*)
547	Adaptación Profesional Procedimientos Civiles y Comerciales	96 horas	533 o 534 - 545 (*)
548	Administrativo I	96 Horas	541 – 544

Para conformar de una manera idónea nuestro Cuarto Año del Plan de Estudios creemos de vital importancia realizar una reforma fundamental en cuanto a las materias necesarias para el correcto abordaje de Derecho Procesal Civil y Comercial. Al observar detenidamente los contenidos nucleados en esta materia entendemos que es fundamental haber completado la aprobación de Derecho Civil I - Parte General, Derecho Civil II y Derecho Civil III. De esta forma el estudiante contará con las herramientas necesarias para comprender el desarrollo de los Procedimientos Civiles y Comerciales. Asimismo entendemos que la manera en la que están planteadas estas correlativas nos presentan un plano en el cual el alumno que se encuentre cursando Derecho Procesal Civil y Comercial, estará cursando simultáneamente Derecho Civil IV y Derecho Comercial I, y vale aclarar que los contenidos de estas tres materias son conexos y sería adecuado pedagógicamente e idóneo para el estudiante desmembrar los contenidos de estas materias simultáneamente.
Continuando con la observancia de las materias exigidas para el cursado de Derecho Procesal Civil y Comercial, si contemplamos que es propuesta de los Consejeros de la Franja Morada la incorporación de la materia Derecho Procesal – Parte General, entendemos innecesaria la exigencia de Derecho Procesal Penal para estar en condiciones de aprobar Derecho Procesal Civil y Comercial.
(*)En cuanto a las Adaptaciones Profesionales, creemos pertinente realizar una distinción en cuanto al régimen de correlatividades conforme a la condición en que se apruebe dicha materia. Entendemos que la reglamentación vigente que contempla dichas materia es adecuada, exigiendo la correlativa inmediata anterior en el caso del cursado simultáneo de la teoría y la práctica (ante la reforma propuesta la correlativa exigida seráa Procesal Parte General) y demandando la aprobación de la parte teórica en el caso de pretender cursar únicamente la Adaptación Profesional.

QUINTO AÑO

Código	Materia	Carga Horaria	Correlatividades

551	Derecho Civil V - Familia, Minoridad y Niñez	96 horas	541
552	Derecho Comercial II	128 horas	542 - 545
553	Derecho Agrario	64 horas	548
554	Derecho Administrativo II	96 horas	548
555	Derecho de Minería y Energía	64 horas	548
556	Derecho de la Navegación Marítimo Fluvial y Aéreo	64 horas	552

Para Quinto Año de la carrera entendemos fundamental la realización de importantes reformas, para comenzar a concretar la síntesis final del conocimiento.
Como primera medida, consideramos que en Derecho Civil V por cuestiones pedagógicas y metodológicas solo debe abordarse los contenidos de Familia, minoridad y niñez; y entendemos necesaria la consagración de Derecho Civil VI como materia autónoma abordando las temáticas concernientes a "Las Sucesiones". Encontramos fundamento en dicha propuesta ya que el contenido del Derecho de Familia aborda particularmente las relaciones jurídicas que giran entorno a una institución del Derecho Civil, la Familia. Por el contrario, el estudio del Derecho de las sucesiones encuentra un contenido principalmente patrimonial, y por este motivo que entendemos que dichas materias deben dictarse en forma independiente y autónoma.
Al analizar las asignaturas Derecho Agrario y Derecho de Minería y Energía entendemos que al incorporar la materia Derecho Ambiental dentro de la currícula es pertinente la quita de contenidos en ambas asignaturas, dejándolas delimitadas en materias cuatrimestrales de cuatro hora semanales, entendiendo que es una carga horaria adecuada para realizar un desarrollo pormenorizado de los contenidos de ambas materias.

SEXTO AÑO

Código	**Materia**	**Carga Horaria**	**Correlatividades**
561	Derecho Civil VI- Sucesiones	96 Horas	551
562	Finanzas y Derecho Financiero	96 Horas	535 - 554
563	Derecho Ambiental y Recursos Naturales	96 Horas	525 - 553 - 555
564	Derecho Internacional Privado	96 Horas	556 – 561
565	Derecho Notarial y Registral	96 Horas	561
566	Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos	96 Horas	545 - 551

En el Sexto año de la carrera creemos que deben englobarse las materias que sintetizan los conocimientos abarcados durante la carrera de grado.
Advertimos que en el plan de estudios de la Universidad Nacional de Cuyo, al igual que en la Universidad Nacional De Lomas De Zamora y la Universidad Nacional Del Litoral, el estudio del Derecho de las Sucesiones se realiza con independencia respecto del Derecho de Familia. Luego del diálogo mantenido por los consejeros de nuestra agrupación con docentes pertenecientes a las actuales cátedras de Derecho Civil V y de nuestra experiencia personal durante el cursado de la mencionada materia entendemos que en cuanto a los métodos pedagógicos empleados para el dictado y el abordaje de estos contenidos es de suma importancia que estos sean llevados a cabo por materias autónomas e independientes.
Como segunda propuesta para el sexto año, creemos de gran importancia incorporar la asignatura Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Planteamos esto debido a que en los últimos años la evolución de la sociedad y por ende del derecho ha llegado a la síntesis de la consagración del Derecho Ambiental como una materia autónoma. Si analizamos el contenido de dicha materia en nuestro actual Plan de Estudios veremos que se encuentra diseminado en distintas materias de la carrera; atentando contra un correcto aprendizaje del Derecho Ambiental. Entendiendo que esta rama del derecho se encuentra en constante crecimiento, creemos que es primordial nuclear los contenidos del Derecho Ambiental y los Recursos Naturales en una materia autónoma. De esta manera podremos generar en los estudiantes un verdadero compromiso y concientización de las problemáticas que hoy nos aquejan como sociedad y, desmembran y generar un espíritu crítico respecto del tratamiento que el Derecho realiza respecto de ellas.
En tercer lugar creemos innecesaria la correlatividad actual de Derecho Comercial II respecto de Derecho Notarial y Registral, por eso proponemos suprimirla, ya que significa solamente un obstáculo al momento de avanzar en la carrera, sin existir una congruencia en lo académico.
Para finalizar, en sintonía con lo que venimos planteando de actualizar el contenido del Plan de Estudio, entendemos que es imperiosa la necesidad de incluir en la currícula de la carrera la asignatura Mediación y

Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos. En la actualidad vemos que han sido promulgadas nuevas leyes en cuanto a los métodos alternativos para la resolución de conflictos y que serán de pronta implementación para los procedimientos civiles, comerciales y laborales. Nuestro actual Plan de Estudios encuentra una falencia importante al no abarcar estos contenidos, y entendemos que nuestra currícula no puede ser ajena a la realidad que se nos presenta y por eso creemos de gran necesidad y de expedita implementación esta materia en nuestra carrera.

SEMINARIOS

Como militantes de Franja Morada entendemos que esta modalidad de aprendizaje es de suma importancia para el desarrollo de la ciencia y que encuentra basamento en un pilar fundamental de la REFORMA UNIVERSITARIA de 1918, LA INVESTIGACIÓN. Por este motivo es que proponemos la ampliación y estabilidad de los seminarios dictados. Creemos que la investigación no sólo hace a la excelencia académica por el estudio pormenorizado que la persona realiza sobre la temática a la que se encuentra avocado sino por el análisis crítico que puede llegar a hacer de la realidad a través del análisis de los hechos. Estamos convencidos de que el seminario debe ser el espacio en el cual los estudiantes podamos realizar una profundización sobre temas especifico de la carrera.
Entendemos que la investigación es el medio por excelencia para comprender los fenómenos sociales, y de esa manera generar el avance de la ciencia del derecho.

MATERIAS OPTATIVAS

Si bien sostenemos que la formación del abogado de la Universidad Nacional de La Plata debe conservar su visión integral y generalista sobre el derecho, estamos convencidos de que nuestro Plan de Estudios debe ofrecerle la posibilidad al estudiante de complementar los contenidos abarcados por este, brindándole la posibilidad de realizar un estudio acabado en ramas o temáticas específicas del derecho. Por este motivo es que propiciamos la implementación de Materias Optativas, tal como es contemplado en los Planes de Estudio de
Desde la Franja Morada, y debido a nuestra impronta reformista, entendemos y concebimos a la Educación como un derecho, y por este motivo creemos que dentro del ámbito del estudio de grado debe encontrarse garantizado el ánimo de formación del estudiante, abarcando el mayor espectro posible de áreas dentro del derecho. Como hacemos referencia justamente a temáticas específicas dentro de la ciencia del derecho, creemos que todos los estudiantes deben tener la libertad de poder optar en que rama del derecho especializarse, esta libertad debe ser garantizada por nuestra Casa de Altos Estudios en el ámbito de la Educación Pública.
En cuanto a la exigencia por sobre las materias optativas creemos que sería adecuado que sea obligatorio para alcanzar el título de grado, la aprobación de al menos dos (2) materias optativas.
Como requerimiento en general, en cuanto a sus correlatividades creemos indispensable la aprobación del 50% del Plan de Estudios; y exigiéndose correlativas específicas para cada asignatura optativa en especial.
Luego del análisis pormenorizado efectuado a los diferentes Planes de Estudio es que ponemos a consideración del Consejo Directivo y la Secretaría Académica la creación de las siguientes materias optativas:

Código	**Materia**	**Correlatividades**
5401	Ética de las Profesiones Jurídicas	544 – 545
5402	Criminología	544
5403	Idiomas - Comprendiendo Inglés, Italiano, Francés, Portugués y Chino	533 – 534
5404	Derechos de Género	551
5405	Comprensión y Producción de Discurso	532
5406	Historia del Derecho – Evolución de las Instituciones	533 – 551
5407	Derecho Deportivo	542
5408	Derecho y Tecnología de la Información	542
5409	Derecho de la Integración	525 – 535
5410	Relaciones Internacionales	525
5411	Derechos del Usuario y el Consumidor	542
5412	Taller de Jurisprudencia	533
5413	Derecho Bancario y Bursátil	535 – 552
5414	Historia de las Instituciones Argentinas	521 – 522
5415	Partidos Políticos y Sistemas Electorales	516
5416	Globalización y Desarrollo	525 – 535
5417	Derecho de Daños	531
5418	Derecho Cooperativo y Mutuario	543
5419	Políticas Públicas y Desarrollo Local	524
5420	Derechos Intelectuales e Industriales	542
5421	Responsabilidad Civil Profesional	531 – 533
5422	Instituciones del Common Law	511
5423	Ecología Jurídica	525 - 553 – 525
5424	Análisis Biotecnológico de las Relaciones Jurídicas	545
5425	Estudio Pormenorizado de la Evolución del Derecho con las diferentes Formas de Estado	511 - 522
5426	Derecho Constitucional Bonaerense	524
5427	Régimen Jurídico de las Comunicaciones	542
5428	Medicina Legal	531 – 526
5429	Derecho Aduanero	556
5430	Derecho Constitucional Comparado	522
5431	Derecho de los Pueblos Indígenas – Comprendiendo Propiedad Comunitaria y el respeto a su Etnia y Cultura	522 – 541

PRÁCTICA PROFESIONAL FINAL

Como Agrupación Reformista entendiendo que es de vital importancia a través de la EXTENSIÓN UNIVERSITARIA la integración y profundización del rol social del estudiante, creemos menester afianzar los conocimientos en la órbita de la práctica profesional.

Cuando los consejeros directivos debatimos en las comisiones conformadas para analizar el actual Plan de Estudios, hubo una opinión que fue unánime y especialmente tratada por la Comisión de Prácticas Profesionales: la formación en el ámbito de la práctica profesional arroja falencias y deficiencias en el desempeño laboral de nuestros graduados.

El estudiante de nuestra Facultad forma parte de la Universidad Pública y por consiguiente, su formación no puede ser ajena a la sociedad que lo rodea. Estamos convencidos de que a través de la Práctica Profesional podemos establecer una retroalimentación entre los estudiantes universitarios y la sociedad, en la cual los estudiantes le devolvemos al pueblo la oportunidad que se nos brinda de estudiar en una Universidad Pública, y a través de ésta se nos permite profundizar el aprendizaje practico mediante el contacto con casos reales donde aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.

Como dijo el fundador de nuestra universidad: *"Una universidad moderna que no toma en cuenta el problema social es una universidad exótica, y sus fuerzas se perderán en el vacío si no la dirige a procurar la armonía suprema sobre la que se asienta la humana convivencia"*

Para la implementación de la Práctica Profesional Final (PPF), proponemos que los estudiantes que hayan alcanzado la aprobación de las asignaturas Derecho Procesal Civil y Comercial, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil V y Derecho Social del Trabajo y la Previsión realicen un trabajo articulado con las Clínicas y los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad a los fines de alcanzar una mejor formación en el ámbito del desempeño profesional.

Para su implementación proponemos una profunda articulación con la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad, que en los últimos años ha venido trabajando en la generación de nuevos ámbitos de inclusión estudiantil en el marco de Proyectos de Extensión. Todos los programas y proyectos de Extensión impulsados por esta Secretaria han sido pensados desde la gratuidad para sus beneficiarios, teniendo en cuento las dificultades que deben afrontar grandes sectores de la sociedad para acceder a la justicia y a información que te permita conocer la existencia y alcance de sus derechos civiles y políticos.

La función especializada de patrocinio y asistencia jurídica a sido pensada en función de hacer posible la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera de grado. En este sentido asignaturas tales como Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Social y Laboral, Derecho Comercial, y Sociología Jurídica entre otras, resultan de inmediata aplicación en los pasos abordados a los distintos programas y proyectos.

En la actualidad la Secretaria de Extensión cuenta con 17 consultorios jurídicos en 15 barrios de la ciudad de La Plata. En cada consultorio jurídico interviene un equipo de trabajo dirigido por un abogado mentor experimentado en el ejercicio de la profesión. En este ámbito el estudiante encontrara un espacio en el cual desarrollar sus conocimientos entorno a la práctica y ejercicio liberal de la profesión, teniendo un primer contacto con casos reales de aplicación práctica de la Ciencia del Derecho.

En correlación con lo anteriormente expuesto es que proponemos para la implementación de la PPF que no solo se considere la realización de esta en los consultorios jurídicos sino también en los demás programas llevados acabos desde la Secretaria de Extensión, a saber:

En las clínicas jurídicas a diferencia de los consultorios en los cuales se afrontan los casos a nivel individual realizan un abordaje de la problemática social de manera colectiva. La similitud que presenta con los consultorios jurídicos gratuitos es que los estudiantes se encuentran bajo la tutela de un abogado mentor, que será el responsable de orientar a los alumnos a la búsqueda del saber.

Las clínicas jurídicas configuran una metodología de enseñanza diferente a la tradicional ligada a lo colectivo y a la paridad entre los integrantes de los equipos de trabajo, que se basan en la confianza y la colaboración. Entre sus objetivos se encuentra el de prestar servicios jurídicos específicos que tiendan a modificar las practicas que obstaculizan la protección de derechos fundamentales, cuando está comprometido el interés público. En la actualidad contamos con 4 clínicas jurídicas que abordan temáticas especificas: Derechos Humanos, Derechos de Consumidor, Derecho Ambiental y Derecho de Acceso a la Información Pública

A través de la implementación del *programa* "*Derechos de las personas con padecimientos mentales"*, se promueve la integración de los sujetos con padecimientos mentales en la comunidad identificando las dificultades que tienen para acceder a la justicia y propiciando el respeto de los Derechos Humanos.

Desde el programa *"Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas"* se tiene como principal objetivo trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de Derechos Humanos en relación a la niñez, desde el encuentro y el trabajo concreto con los niños en situación de calle en la ciudad de La Plata. El mismo cuenta con un consultorio jurídico y un área de investigación y construcción de herramientas de exigibilidad colectiva. Entendemos que la participación en este programa bajo la supervisación de un abogado es un medio propicio para la realización de la PPF.

Otro de los proyectos de Extensión Universitaria en el cual entendemos que sería propicia la realización de la PPF es el programa *"Centro de Atención Jurídica para Pacientes con HIV"* su principal objetivo es tutelar de manera efectiva el Derecho a la Salud facilitando el acceso a la justicia de las personas con VIH/SIDA mediante de la atención jurídica gratuita.

Finalmente proponemos la integración dentro de la PPF del *"Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares"* cuya misión comprende la evacuación de consultas y el patrocinio de personas de escasos recursos, estableciendo mecanismo para facilita el acceso a la justicia. A su vez el centro de atención propone un ámbito de asesoramiento legal con el fin último de mejorarla calidad de vida de los productores/trabajadores de la región.

Más allá de la modalidad que sea finalmente utilizada para la implementación de la PPF, creemos indispensable fijar ciertos criterios para la delimitación de ella.

Ésta siempre debe realizarse en miras a los fines altruistas con que fue propuesta: la FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE en el ámbito de la parte práctica de la carrera de grado, y la RETRIBUCIÓN HACIA LA SOCIEDAD.

Es inconcebible que la PPF sea funcional a las necesidades e intereses del mercado. Entendemos que la realización de la PPF ostenta como objetivo inmediato la profundización en el conocimiento de "campo" en el ámbito de la ciencia jurídica, y en consecuencia proponemos que la PPF sea el medio de adquirir el conocimiento práctico de la carrera manteniendo al margen la realización de esta práctica dentro de organismos del estado o de entes privados. Atendiendo esto es que reiteramos que los objetivos de la PPF son la formación del estudiante no solo a nivel académico si no también en la órbita de su espíritu y su rol social .

ANEXO

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SE DEBEN COMPRENDER DENTRO DE CADA ASIGNATURA

Introducción al Derecho

En esta asignatura inicial a la carrera, los contenidos que se abarcan son introductorios al estudio de la ciencia del derecho. En este sentido, se analizan los elementos básicos que acompañarán al estudiante durante toda la carrera (noción de norma, constitución, hecho, acción, valores, ética y moral), a la vez que se realiza una aproximación a las corrientes iusfilosóficas que conciben al derecho de diversas formas.

Derecho Romano

Siendo el Derecho Romano la raíz histórica a la que se remonta nuestro derecho argentino, es imperioso su estudio, por cuanto muchas de las instituciones hoy vigentes encuentran sus orígenes en este derecho histórico, que ha ido evolucionando, dejando sus rastros en el derecho continental europeo, que luego ha ejercido su influencia sobre nuestro país y nuestro derecho. En esta materia se abarcará el estudio de la evolución histórica de Roma, su derecho e instituciones.

Derechos Humanos

En esta materia deberán dictarse la evolución histórica y el reconocimiento en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sus fundamentos y principios básicos y el tratamiento que la Constitución Nacional realiza sobre ellos.

Historia Constitucional

Esta materia recorre la historia argentina desde la colonización hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853 como corolario de la organización nacional gestada a partir de la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia de 1816, haciendo especial hincapié en los sucesos determinantes de la misma, así como en sus documentos, antecedentes y pactos preexistentes. A la vez recorre los sucesos históricos posteriores que llevaron a modificar la Constitución Nacional en numerosas oportunidades, siendo la última reforma la de 1994.

Introducción a la Sociología

Esta asignatura acerca nociones básicas de todas las ciencias sociales en general, y siendo que la carrera se denomina "Ciencias Jurídicas y Sociales" no es menor la influencia de estos elementos sociológicos en el derecho, por cuanto es la sociedad la determinante de lo que el derecho receptara en sus normas. En ese sentido, es primordial la caracterización de elementos como grupo social, grupos de presión, grupos de influencia, etc.

Derecho Político

El derecho es una ciencia basada fundamentalmente en leyes. Esas leyes son producto de la actividad legislativa de aquellos que fueron electos mediante el voto para representar a la sociedad. Es innegable la vinculación del derecho con la política, por cuanto sin ésta no existiría aquel. En esta asignatura se estudian las distintas teorías políticas históricas, desde Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau analizándolas a la luz de la inflencia que han ejercido en el desarrollo de la política argentina, el surgimiento de los partidos políticos y la consagración de las instituciones en el ámbito del Derecho Político.

Derecho Civil I

En esta asignatura se abordaran los elementos introductorios al derecho civil. El estudio de esta primer materia codificada ejercerá su influencia a lo largo de las demás materias de la currícula, por cuanto abarca el estudio de conceptos esenciales cuales son las nociones de persona, capacidad, domicilio, acto jurídico, hecho jurídico, ineficacia, nulidad, plazos, prescripción, caducidad, entre otros conceptos básicos que hacen a la ciencia del derecho en su conjunto, considerando que el derecho civil es la rama residual donde confluyen las demás ramas del derecho ante la ausencia de normativa específica.

Derecho Constitucional

Esta asignatura aborda el estudio del eje fundamental del derecho argentino, la Constitución Nacional. El análisis que se realiza ya no es desde un punto de vista histórico, sino más bien pragmático, realizando un desarrollo de su contenido, sus disposiciones y, desde 1994, la influencia que los tratados internacionales han venido a traer al adquirir jerarquía constitucional.

La forma representativa y republicana de gobierno, y federal de Estado halla su consagración en esta Constitución, de allí la importancia de su estudio pormenorizado como forma de asegurar su observancia, haciéndose hincapié en el grado de jerarquía que ostenta por sobre las demás normas, las cuales no pueden contradecirla sin tornarse inconstitucionales.

Derecho Penal I

En esta asignatura se abarcan desde un aspecto filosófico dos ejes centrales del derecho penal: la teoría de la pena (que se entiende por pena, los fines de la pena, los tipos de pena) y la teoría del delito (sus elementos distintivos a partir de las distintas escuelas de derecho penal que la condicionan).

Derecho Público Provincial y Municipal

El contenido de esta materia gira en torno al Estado Federal Argentino, la soberanía, autonomía, y autarquía. La descentralización política, burocrática y administrativa, con especial énfasis en la organización de los estados provinciales y municipales, sus competencias, atribuciones y deberes.

Derecho Internacional Público

Esta materia se centra en el abordaje del surgimiento de la sociedad internacional, su relación con el derecho interno, las organizaciones que lo rigen, la resolución de conflictos y el derecho supranacional en el Estado Argentino. Se pone especial énfasis a la manera en que los distintos Estados establecen vínculos económicos y políticos en el ámbito internacional y como el derecho internacional público busca establecer un equilibrio en la correlación de fuerzas entre estados.

Derecho Penal II

En esta asignatura se analiza la existencia de delito a partir de los elementos aprendidos en la asignatura correlativa anterior, mediante la aplicación de ellos a casos concretos, para determinar la existencia o no de delito, sus formas de agravamiento, atenuación y eximición, a partir de la estricta sujeción a la ley conforme lo establecen las pautas del derecho penal, pero con gran influencia doctrinal a la hora de hacer una correcta interpretación de la norma.

Derecho Civil II

Esta asignatura abarca el estudio de las relaciones jurídicas, los sujetos involucrados, sus objetos permitidos, sus modalidades, sus clasificaciones y sus consecuencias prácticas, a la vez que las modalidades de extinción. Abarca, a su vez, el estudio de la responsabilidad civil, con el enorme desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ello implica, entendiéndose que la noción de responsabilidad constituye el eje fundamental del derecho civil, por cuanto dará origen a las acciones de reclamación pertinentes, cuyo ejercicio se desarrollará en asignaturas posteriores.

Filosofía del Derecho
Esta asignatura propone el estudio de corrientes iusfilosóficas que han influenciado a la ciencia del derecho y que han delimitado su existencia actual, a la vez que propicia el estudio de nuevas corrientes que analizan el fenómeno jurídico desde diferentes perspectivas considerando sus mecanismos, sus fines y su realidad concreta, favoreciendo un análisis crítico a la luz de nuevas cosmovisiones del derecho y entendiendo al derecho como fenómeno complejo fruto de una constante evolución filosófica.

Derecho Procesal Parte General
El contenido de esta materia deberá abarcar el proceso judicial junto a las teorías unificadoras del proceso, los principios procesales, jurisdicción, acción, actos procesales, preclusión, cosa juzgada, sentencia y la organización del poder judicial.

Derecho Civil III
Esta asignatura centra su contenido en los contratos civiles, entendidos como los acuerdos de voluntades destinados a regir relaciones jurídicas de contenido patrimonial conforme lo dispone el art. 1137 del Código Civil. Se abordan las modalidades propias de los contratos, sus elementos tipificantes, los elementos residuales ante ausencia de previsión de las partes (autonomía de la voluntad), sus formalidades, requisitos, sujetos y formas de conclusión.

Economía Política
El derecho como consecuencia de los acontecimientos sociales que lo determinan, no puede estar ajeno a la influencia que la economía implica en el marco de una sociedad. Entender las distintas teorías que explican los fenómenos económicos y su participación en el mercado es trascendental a la hora de desarrollar una legislación que ampare y proteja a la sociedad de los factores económicos desfavorables. También resulta indispensable el manejo de terminología propia que se vuelve recurrente en las relaciones jurídicas, tales como la noción de dinero, oferta, demanda.

Sociología Jurídica
En esta asignatura se estudian distintas corrientes sociológicas que han ido influenciando el desarrollo del derecho tal como lo concebimos, a partir de la determinación de sus fines y mecanismos, el rol social del derecho, y su forma de actuación. También se analizan distintas escuelas criminológicas, filosóficas, y económicas que repercuten en la concepción del derecho.

Derecho Civil IV
En esta asignatura se abordan las instituciones del derecho civil relativas a los derechos reales. Por ellos se entiende que se trata de los derechos que vinculan a las personas con las cosas. En ese sentido y atendiendo a la mayor o menor vinculación de la persona con la cosa, es que se aplicarán institutos diversos, todos los cuales se encuentran taxativamente (numerus clausus) descriptos en el Libro III del Código Civil (usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda, entre otros.)

Derecho Comercial I
Deberán estar contenidos en el marco del estudio de esta materia todo lo concerniente al Código de Comercio y las leyes mercantiles, sus fuentes, los actos de comercio, la empresa y la organización del Registro Público; las sociedades comerciales, a saber, los derechos y obligaciones de los socios entre sí, frente a la sociedad y terceros, la regulación en el derecho interno y en las sociedad constituidas en el extranjero que actúan en el territorio del Estado Nacional. Asimismo deberá darse tratamiento al régimen del contrato de seguros, derechos y obligaciones de las partes, y las regulaciones específicas de los seguros.

Derecho Social del Trabajo y la Previsión
Esta asignatura tiene un doble objeto: por un lado abordar el tratamiento de la legislación previsional, a través del estudio de los organismos encargados de administrar y otorgar pensiones y jubilaciones y por otro, el estudio de la legislación laboral, fundamentalmente a partir del estudio de la ley 20.744 de contrato de trabajo, sus disposiciones de orden público indisponibles y su fuero especializado.

Derecho Procesal Penal
En esta asignatura se aborda el acceso a la jurisdicción penal, la instrucción de un proceso a partir de la reforma del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires el 1998, a través de una Instrucción Penal Preparatoria y luego un juicio oral con las notas de celeridad e inmediatez que dicho proceso amerita, considerando los intereses que se hallan en juego.

Derecho Procesal II
El contenido de esta materia abarca la regulación del procedimiento judicial en la Provincia de Buenos Aires en la materia civil y comercial, en materia laboral, en materia contencioso- administrativa e incluso en lo que a la materia recursiva respecta, tanto ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires como ante la Corte de Justicia de la Nación.

Derecho Administrativo I
En esta asignatura se abordan temáticas introductorias al derecho de la administración. A partir de la diferenciación entre atribuciones estaduales legislativas -propias del Congreso-, judiciales -propias del poder judicial- y administrativas -propias del poder ejecutivo-, esta asignatura abarca estas últimas facultades estaduales y realizando una introducción al proceder de la administración entendido como actividad del poder ejecutivo y entes descentralizados bajo su órbita.

Derecho Civil V
Esta asignatura abarca el estudio del derecho civil , pero ya no entendido como derecho privado, sino como derecho de familia, de marcado contenido de orden público que justifica la intervención del Estado sobre ciertas relaciones de los particulares. En ese sentido se abordan cuestiones como las relaciones de familia, régimen del matrimonio, patria potestad, adopción, obligaciones y deberes familiares, acciones de familia, entre otros institutos caracterizantes de esta rama del derecho.

Derecho Comercial II
En esta asignatura el estudio se centra en dos ejes. En primer lugar, la asignatura desarrolla el proceso concursal en su doble faz: preventivo y liquidativo, como instancia consecuente al incumplimiento obligacional generalizado y permanente (Estado de Cesación de Pagos). Por otro lado, la asignatura aborda la temática de los títulos de crédito, instrumentos de intercambio comercial con sus particularidades y regímenes propios.

Derecho Agrario
Esta asignatura abarca el estudio de los institutos propios del derecho agrario, es decir, aquellos que operan en la actividad agraria entendida como la intervención del hombre en el ciclo productivo con el objeto de obtener frutos como consecuencia de esa intervención.

Derecho Administrativo II

En esta asignatura se estudia tanto el procedimiento administrativo como el proceso administrativo en instancia judicial luego de agotada la vía administrativa previa. En este sentido, son de aplicación los conceptos estudiados en Derecho Administrativo I, de modo de entender las etapas de elaboración de un acto administrativo, las formas de impugnarlo y las formas de someterlo a la jurisdicción en caso de conflicto. Por otro lado, también se estudia la actividad administrativa desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, es decir, los casos en que debe responder por su actuar o su omitir tanto licito como ilícito.

Derecho de la Minería y Energía

En esta asignatura se deberá estudiar el conjunto de normas jurídicas que regulan las concesiones exclusivas para explorar o explotar las sustancias generales que son de aprovechamiento de cualquier persona, regulando tanto en su constitución, naturaleza, ejercicio y extinción así como los actos, contratos y litigios que se refieran a el.

Derecho de la Navegación Marítimo, Fluvial y Aéreo

En esta materia deben hallarse comprendidos el estudio de la legislación interna y los diferentes tratados y convenciones concernientes a la navegación aeronáutica, fluvial, marítima y espacial. La delimitación de los sujetos y su implicancia en el ámbito del derecho internacional. La regulación legal de sus contratos, delitos y faltas.

Derecho Civil VI – Sucesiones

Deberá completarse el análisis de la posesión y transmisión hereditaria, la competencia y capacidad para suceder los derechos y obligaciones del herederos, la indivisión hereditaria, los métodos de partición de la herencia, los distintos tipos de sucesiones, el principio general del orden sucesorio, la legítima, los testamentos y sus distintas modalidades, la institución y sustitución de herederos, el fidecomiso testamentario, la ineficacia de las disposiciones testamentarias y demás cuestiones referente al derecho de las sucesiones.

Finanzas y Derecho Financiero

Esta asignatura deberá comprender el concepto de finanzas públicas, tributo, poder tributario nacional, provincial y municipal, gasto público, crédito público, presupuesto estatal, impuestos, tasas y contribuciones especiales, los efectos económicos y jurídicos de los impuestos, la coparticipación, el empréstito forzoso, así como también los principios constitucionales de la tributación, los límites constitucionales al poder de imposición y la juridicidad de la norma tributaria.

Derecho Ambiental y Recursos Naturales

Se abordan temáticas propias del derecho ambiental, a partir del estudio de legislación tutelar del mismo, cual es el caso de las reservas naturales a la vez que las leyes de presupuestos mínimos surgidos al amparo de la manda constitucional del art. 41 y su correlato con el art. 124. Se deberán abarcar la regulación jurídica de los recursos naturales, su enumeración e identificación. Así mismo deberá comprender la diversidad biológica faunística, recurso natural y cultural; el daño ambiental la responsabilidad civil, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad penal; los delitos ecológicos, la evaluación del impacto ambiental y las medidas precautorias.

Derecho Internacional Privado

En esta asignatura se analizan los institutos del derecho privado previamente estudiados a lo largo de la carrera, caracterizados por la intervención de agentes de distinta nacionalidad, o bien de la misma nacionalidad situados en países diferentes, lo cual hace necesaria la intervención de normativa supranacional para venir a regular estas relaciones jurídicas, lo cual en la praxis esta dado por los tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina con países extranjeros.

Derecho Notarial y Registral

Esta materia deberá abarcar todo lo concerniente al formalismo en el derecho, las clases de instrumentos, la fe pública, el valor probatorio del instrumento público, dedicándole un especial tratamiento a la escritura pública, así como también la función notarial, su ejercicio y responsabilidad. En cuanto a lo que el derecho registral respecta deberá explayarse acerca de las características del sistema registral argentino.

Mediación y Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos

En esta nueva materia deberán comprenderse la teoría general del conflicto, la mediación, la negociación y el arbitraje, la legislación interna concerniente a estas y su tratamiento en el Derecho Internacional.

Salvedad respecto de la implementación del Primer Año de Carrera

En la actualidad los alumnos ingresantes a la carrera se encuentran contenidos dentro del Régimen que garantiza el cursado de las primeras cuatro materias de la carrera (Introducción al Derecho, Historia Constitucional, Introducción a la Sociología y Derecho Romano). Desde la FRANJA MORADA entendemos que es necesaria la aplicación de políticas tendientes a contener a los alumnos de primer año entendemos que este derecho adquirido no solo debe ser garantizado sino que también debe sufrir una adaptación conforme al plan de estudios propuesto por nuestros consejeros.

Atendiendo a lo anteriormente explicado es que proponemos que a los alumnos ingresantes a la carrera se les contemple el beneficio de cursar las seis materias contenidas dentro del primer año del plan de estudios. Así mismo y como propuesta novedosa proponemos que el cursado de estas no esté librado únicamente al azar sino que debe comprenderse estas materias en dos bloques. El primero conteniendo Introducción al Derecho, Derecho Romano y Introducción a la Sociología; y el segundo englobando las materias Historia Constitucional, Derecho Político y Derechos Humanos. Esta determinación cobra significado ya que entendemos que el cursado de las materias comprendidas en los bloques debe ser simultáneo ateniendo a fines pedagógicos. De esta manera el estudiante que curse durante el primer cuatrimestre de su primer año Derecho Romano deberá cursar simultáneamente Introducción al Derecho e Introducción a la Sociología, debiendo soslayar para el segundo cuatrimestre el cursado de las tres materias contenidas en el segundo bloque anunciado anteriormente.

CONSIDERACIONES GREMIALES

Desde la agrupación FRANJA MORADA y como representantes del claustro estudiantil los consejeros demandamos una serie de puntos que creemos ineludibles:

Que la aplicación del nuevo Plan de Estudios no puede ser bajo ningún punto de vista de aplicación retroactiva, entendiendo que es un derecho adquirido de los estudiantes ya inscriptos en la carrera su apego al Plan de Estudios actualmente vigente aprobado por resolución del Honorable Consejo Académico de fecha 10 de Marzo de 1989. Asimismo exigimos que no se establezcan plazos para el alcance del cumplimiento de la aprobación de la totalidad de las materias requeridas para el titulo de grado.

Que todos los estudiantes inscriptos con anterioridad a la presente reforma del Plan de Estudios tengan la posibilidad de realizar las materias que se incorporen al nuevo plan.

Que se respeten los nueve turnos de Mesas de Examen libre y su correspondiente reglamentación vigente.

Que bajo ningún punto de vista podrán considerar el Honorable Consejo Directivo la quita del curso por promoción debiéndose respetar la reglamentación vigente.
Que de ninguna manera el nuevo Plan de Estudios puede encontrarse alejado del espíritu Reformista, respetando la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, la periodicidad de los concursos, la extensión universitaria, la investigación, el laicismo y por sobre todas las cosas garantizar el acceso irrestricto a la EDUCACION PUBLICA y de excelencia académica consagrado en el estatuto de la Universidad Nacional de la Plata.

PROYECTO N° 66: Autor: Prof. *Edwin M. Montero Labat y Lic. Evangelina J. Montero Labat;* ***"La extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho"***
I.- Introducción
La propuesta tiene como objetivo considerar la incorporación de la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho en el marco del "Programa para análisis, evaluación y propuestas para la Reforma del Plan de Estudios" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Para ello, destacamos en primer término que el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata incorpora a la extensión como pilar de la Educación Superior y la sitúa en pie de igualdad junto a la docencia e investigación.
En segundo lugar, comentaremos brevemente la metodología de la enseñanza que actualmente se implementa en nuestra Casa de Estudios.
Finalmente plantearemos a la extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho y para ello tendremos en cuenta las experiencias derivadas de la ejecución de distintos programas y proyectos de extensión universitaria ejecutados por la Secretaria de Extensión Universitaria de esta Unidad Académica durante los años 2007/2010.
En este marco bosquejaremos algunos aspectos a modo de interrogantes que consideramos centrales a la hora de pensar en los procesos de enseñanza del derecho.
Por último, formularemos los enunciados que pretendemos operen como recomendaciones u orientaciones para la revisión y modificación de los componentes disciplinares, pedagógicos y didácticos que conforman la currícula actual.

II.- La Extensión y la Educación Superior Universitaria
El Estatuto de la Universidad contiene innumerables normas mediante las cuales se reconoce a la extensión universitaria como pilar de la educación superior.
Así, entre otras, podemos citar las siguientes:
Preámbulo. …La UNLP reconoce como funciones primordiales el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la extensión.…La tercera, debatida y consensuada con el conjunto de la comunidad, perseguirá contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables por no tener sus derechos esenciales garantizados. La Extensión Universitaria será el principal medio de la Universidad Nacional de La Plata para lograr su función social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural.
…TÍTULO II
…FUNCIONES …CAPÍTULO III: de la Extensión
ARTICULO 17º: La Universidad reconoce como una de sus funciones primordiales la extensión universitaria, entendida como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social. Acordará en consecuencia las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de extensión que realicen los miembros de su personal docente, no docente, graduados y estudiantes que suelen ser originados por la detección de necesidades específicas…
ARTÍCULO 28º: Tienen las siguientes obligaciones docentes: dictar y dirigir la enseñanza teórico-práctica de su asignatura; dictar cursos parciales o completos de su especialidad; realizar al menos alguna de las siguientes actividades: investigación y extensión; participar en seminarios o reuniones científicas de su cátedra, departamento o instituto.
ARTÍCULO 30º: El Consejo Directivo, por dos tercios de votos de los presentes, podrá eximir al profesor del dictado de la cátedra para que dedique su tiempo a la investigación y/o la extensión, desarrolle cursos de especialización, dirija seminarios o atienda cuestiones de fundamental interés para la Universidad. Esta eximición deberá ser renovada anualmente.
En tanto, cabe resaltar que el anterior Consejo Directivo de esta Casa de Estudio y el actual, han declarado en varias oportunidades de interés académico a diversas jornadas, programas y proyectos implementados desde la Secretaria de Extensión de esta Unidad.
Todo lo dicho, pone de manifiesto la relevancia académica que cobran las actividades extensionistas no sólo en la Universidad en general, sino, en nuestra Facultad en particular.
En esta línea, desde el momento de la fundación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, se habían considerado y desarrollado acciones de extensión.
Las mismas se correspondían con el modelo culturalista, ya que había espacios para actividades teatrales o musicales, y se realizaban conferencias o seminarios donde se invitaban como expositores a grandes eminencias de las ciencias jurídicas del momento, principalmente europeos.
Durante el período que se denominó la segunda generación de las reformas, etapa que se extiende entre los cincuenta y los ochenta, se implementan reformas en toda Latinoamérica, con un fuerte contenido exógeno en relación con los modelos de la universidad que se promueve, las notas características fueron la expansión del número de estudiantes, docentes e instituciones (Krotsch, 2001).
Lamentablemente, no hemos conseguido datos sobre esta segunda etapa en la Facultad de Derecho de la UNLP, por esta razón carecemos de información sobre las posibles actividades de extensión en ese período.
Sin embargo mencionaremos que, a partir de los años sesenta, la universidad fue criticada porque no movilizaba sus conocimientos acumulados a favor de las soluciones de los problemas sociales, surge así una vertiente de orientación social y política que reivindica la "responsabilidad social de la universidad". El movimiento estudiantil fue el portavoz más radical de estas reivindicaciones (de Sousa Santos, 1998).

En los ochenta, se abre una nueva etapa de la política universitaria, denominada "década perdida" social y económicamente, de retorno a la democracia en muchos países, de crisis fiscal, ajuste y privatizaciones (Krotsch, 2001).
Con lo cual las actividades extensionistas estuvieron prácticamente ausentes en esta unidad académica.
Así, durante el denominado proceso de normalización de la UNLP que se produjo en 1983, no se registran actividades en el área de extensión ya que las prioridades de reorganización o normalización estaban destinadas a las políticas de ingreso, provisión de cargos y concursos docentes.
Sin embargo en las últimas dos décadas se ha detectado una motorización que fomenta la participación de alumnos y recién graduados, en actividades de extensión que se puede constatar mediante las constantes convocatorias de la Secretaría de Extensión.
Una de las modalidades adoptadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, es la participación en los proyectos y programas de extensión que convoca periódicamente la Universidad.
Según surge del Reglamento de Proyectos de Extensión de la UNLP, los Proyectos de Extensión son instrumentos de planificación a través de los cuales se generan procesos de educación no formal, donde las Unidades Académicas a través de los conocimientos acumulados y la capacidad de sus docentes, investigadores, alumnos, no docentes comparten con la comunidad a la cual van dirigidos, los esfuerzos de transformación social y cultural, divulgación científica, desarrollo tecnológico, desarrollo comunitario que permita a la sociedad mejorar su calidad de vida.
Puede contener acciones de transferencia o difusión de conocimientos y además en la interacción universidad–sociedad, procesos de formación de nuevos saberes que complementen los generados en los ámbitos académicos y permitan la efectiva participación de los actores involucrados.
Los proyectos de Extensión comprenden un conjunto de acciones planificadas destinadas a producir y desarrollar cambios de un aspecto, tema o área determinada.
Tomando como base la cantidad de proyectos de extensión universitaria presentados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el período 2007-2010, en las convocatorias anuales formuladas por la UNLP, tenemos los siguientes datos:

Año	**Proyectos presentados**	**Subsidiado**	**Unidad ejecutora**
2007	10	6	Ciencias jurídicas: 1 Periodismo: 3 Trabajo Social: 1 Humanidades:1 Ciencias agrarias: 1
2008	14	6	Ciencias jurídicas: 2 Periodismo: 3 Trabajo Social: 1
2009	21	9	Ciencias jurídicas: 1 Periodismo: 3 Trabajo Social: 2 Humanidades:2 Ciencias agrarias: 1
2010	36	sin registro de datos	sin registro de datos

En cuanto al número de proyectos presentados es notable un crecimiento progresivo en la cantidad de propuestas de 10 en el 2007 subió a 36 en el 2010, lo que implica una numerosa participación de los actores que conforman la comunidad educativo (estudiantes, alumnos, docentes).
Ahora bien, según el tipo actividades que la UNLP considera como propias de la extensión universitaria se pueden señalar las siguientes:
Transferencia: definidas como actividades sistemáticas que transfieren al entorno extrainstitucional los conocimientos y las experiencias producidos por la investigación mediante su aplicación o adaptación.
Formativas: son las actividades de grado que mediante la capacitación, prevención, orientación, información y difusión o asesoramiento a la comunidad, permitan complementar con la práctica, la formación teórica curricular.
Sociales: definida como una modalidad de la extensión caracterizada por acciones y actividades, que aporten un beneficio a las comunidades de la región y del país, como forma de contribuir a la resolución de necesidades y problemas concretos.
Académicas: comprenden las actividades de tipo académico como los cursos libres de capacitación, la educación continua o de actualización, las actividades de información y difusión científico-tecnológica, que permitan hacer accesible a los diversos sectores que lo requieren, el conocimiento que produce y sistematiza la universidad.
Culturales: las actividades culturales y deportivas.

III.- Las principales actividades de Extensión Universitaria en nuestra Unidad Académica
Como señalamos en el capítulo anterior, luego del proceso de normalización iniciado en 1983, las actividades de extensión en esta facultad no fueron significativas.
Recién se registra un paso importante con el lanzamiento del Programa de Consultorios Jurídicos Gratuitos, en el año 1994.
En efecto, para aquella fecha, se puso en funcionamiento el primer consultorio jurídico en el barrio de Villa Elvira de esta ciudad.
Este programa de atención jurídica fue ideado y dirigido por el Profesor José María De Rosa, sobre bases teóricas muy sólidas y con una prospectiva de integración con la comunidad que resultó por demás fructífera y aleccionadora.
Los dos pilares sobre los que se asienta son: completar la formación profesional de los estudiantes avanzados y recién graduados de la carrera de abogacía, por un lado, y llevar asistencia jurídica gratuita a los barrios más alejados de la ciudad donde los distintos tipos de carencias impiden el acceso a la justicia de las personas que viven allí, por el otro.
La base teórica de estos pilares sostiene que la formación profesional universitaria sólo puede lograrse mediante un adecuado proceso de socialización, donde el joven estudiante o novel profesional incorpore un

clima de valores y un conjunto coordinado de ideas y acciones que utilizará al tratar una situación problemática.
Es decir, que incorpore la perspectiva que unirá el rol profesional con la cultura (Elliott, 1975).
Cabe resaltar que desde el año 2007 a la actualidad el número de consultorios ha crecido notablemente, lo que implica una mayor cantidad de intervención de los actores de la comunidad educativa.
En tanto que, en julio de 2008, se lanza el Programa de Clínicas Jurídicas, cuyo objetivo es estrechar los lazos con la comunidad y brindar a los estudiantes y recién graduados la posibilidad de enfrentarse a casos reales y complejos, en cuya resolución podrán participar activamente.
El programa pretende estimular en los estudiantes el desarrollo de diversas capacidades, destrezas y valores a partir de una actitud auto-reflexiva y crítica respecto de los casos de interés público que se presenten.
El mismo comprende tres áreas, Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental y Derechos Humanos, y cada equipo de trabajo se conforma con estudiantes, graduados de la facultad y docentes.
Entre los posibles casos a estudiar se encuentran los que involucran la afectación de los derechos humanos, derechos del consumidor, la libertad de expresión, las garantías procesales, la protección de grupos vulnerables, los damnificados masivos de contratos abusivos, daños ambientales, entre otros.
En otro de los proyectos, se aborda la atención jurídica para pacientes con VIH/SIDA, profundizándose temas como los derechos a la salud, la discriminación, etcétera.
En el mismo periodo, tiene su origen el Proyecto "Derechos de las personas con padecimientos mentales", a través del cual se intenta la integración de las personas con padecimientos mentales a la comunidad.
Junto a todos estos proyectos y programas, se sumó en la misma etapa, la implementación del denominado "Unidad de Atención Juvenil" direccionado a los procesos restaurativos juveniles y destinada a jóvenes infractores a la ley penal.
Así, se incorpora también, en las actividades de extensión, los derechos del niño.
Son estos los datos registrados en la "Memoria de Actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria 2007/2010".
Si bien en la actualidad, se observa una continuidad de las acciones en materia de extensión, carecemos al momento de registros sobre las mismas para poder ilustrar al respecto.
En atención a lo expuesto, damos por cumplido nuestro objetivo descriptivo sobre la base empírica que sustentan los distintos programas y proyectos extensionistas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata.

IV.- Diseño de los contenidos curriculares del plan de estudios vigente

Para obtener el título de abogado, el plan de estudios vigente prevé la aprobación de treinta y un materias y un Ciclo de Adaptación Profesional integrado por la cursada de dos prácticas (Civiles y Penales).
De acuerdo a la conformación de la currícula, y a la experiencia como docentes, podemos afirmar que aproximadamente el noventa por ciento de las materias integran contenidos disciplinares abordados de forma teórica.
Lo dicho, nos lleva a sostener que el abordaje no contempla situaciones en donde esos conocimientos disciplinares adquieran funcionalidad.
En ese aspecto, podemos enfatizar que no sirve la formación por fragmentos, no es lo mismo conocer porciones aisladas que comprender el fenómeno total en su contexto real.
El énfasis se debe situar en el "aprender haciendo", los estudiantes aprenden mediante la experiencia y la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos.
En suma el desarrollo sostenible solo es posible si tenemos personas formadas en contacto constante con la realidad, se trata de educar desde la realidad del entorno, desde las necesidades comunes de las comunidades y de su relación con su medio ambiente (Rosell Puche, 2007).
Concretamente, en la actualidad, la currícula no integra como contenidos en la enseñanza los procedimientos y habilidades que el abogado requiere para desempeñar su profesión.
Esta realidad implica que, la formación carece de estrategias tendientes a que el estudiante se apropie paulatinamente de saberes vinculados con las actitudes, valores y haceres que posibiliten resolver la diversidad de situaciones que se presenten en el contexto profesional.
Todo lo dicho hasta aquí, nos conduce a formular los siguientes interrogantes:

- ¿Cómo pensar los procesos de enseñanza del derecho en el escenario planteado?
- ¿Qué formación debería brindarse al estudiante de derecho para que pueda insertarse de manera crítica y transformadora en la sociedad de la que forma parte?
- ¿Qué características deben tener las prácticas de la enseñanza del derecho para promover el desempeño de la profesión con responsabilidad ética y social?
- ¿De que manera se deberá integrar la currícula para formar un profesional que pueda dar respuesta a las demandas de los diversos contextos de la realidad social?

V.- La extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho

Nos adentramos al análisis de lo que sería el objeto central de nuestra propuesta.
Previo a ello, delimitaremos a la enseñanza como un proceso, como una forma de intervención pedagógica que se desarrolla en el marco de contextos particulares y en el que se establecen múltiples relaciones entre los sujetos intervinientes.
Es asimismo, una práctica social que tiene como propósito promover el aprendizaje de los estudiantes favoreciendo el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico que permita comprender y operar en la realidad social.
En este sentido, la enseñanza de los contenidos del derecho, necesariamente requiere de una propuesta didáctica que incluya los contextos sociales y culturales.
Las actividades de extensión universitaria como metodología de la enseñanza del derecho permiten justamente que el estudiante construya durante su trayectoria formativa experiencias en las que se ponen en juego conocimientos teóricos y prácticos.
Se tiene como propósito el de brindar una educación inclusiva y de calidad que posibilite la formación integral de las personas, concibiéndolos como sujetos de derecho.
Se debe iniciar un proceso de transformación curricular que plantee una nueva propuesta pedagógica para la educación de los estudiantes de derecho.
La propuesta debería plantear como propósito central el de brindar una formación que posibilite que el alumno pueda estar en condiciones, no solo de ingresar al mundo laboral, sino también el de brindarle una formación ético social para el ejercicio de la abogacía.

Se plantea, entonces, como desafío principal el de asegurar que en el tránsito por este espacio educativo los alumnos adquieran los saberes, haceres y valores que le permitan insertarse en el ámbito de trabajo y construirse como ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad que integran.
Se entiende al alumno como un sujeto con capacidad de ejercer y construir.
En esta línea, las intervenciones docentes extensionistas, se orientarán a que los alumnos puedan construir miradas críticas sobre los acontecimientos sociales, a que se desarrollen valores como la solidaridad, la libertad, la paz, el respeto por la diversidad, la justicia, el bien común y el la vida de los semejantes.
Se intenta que los futuros abogados hagan uso de sus derechos y cumplan con sus deberes como profesionales de la justicia.
En esta perspectiva, la formación del abogado se deber realiza desde el interior de la facultad considerando los distintos espacios educativos, entre ellos, la extensión universitaria.

VI.- Algunos enunciados para tener presente

- La propuesta implica una nueva concepción pedagógica de los sujetos estudiantes
- La trayectoria educativa del estudiante de derecho se integra por el conjunto de experiencias, saberes, prácticas, etc. que se suscita en su paso por la unidad educativa
- A partir de estas trayectorias el estudiante va construyendo ideas, disposiciones y creencias acerca del significado la profesión por él elegida
- El proceso de enseñanza define una relación pedagógica que se caracteriza por ser asimétrica, intencional y sistemática, cuya finalidad está dirigida a la inserción crítica de los sujetos en la sociedad
- Este proceso se orientará a que los/as alumnos/as al finalizar los estudios sean competentes para ingresar al mundo laboral, a la vez de contribuir a la construcción de un abogado que integre una ciudadanía crítica y responsable, y que se encuentre en condiciones de continuar su proceso formativo en el nivel de posgrado en el supuesto que así lo desee

VII.- Algunos interrogantes que pueden servir de disparadores

Consideremos que algunas pistas que pueden orientar la revisión sobre la necesidad de incorporar a la currícula la extensión universitaria se podrían buscar en la respuesta a los siguientes interrogantes

- ¿Qué tipo de abogado se propone formar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales?
- ¿Cómo lograr la formación del abogado deseado?
- ¿El actual plan de estudios requiere de modificaciones para lograr los objetivos propuestos?
- ¿Cómo generar propuestas alternativas de enseñanza que posibiliten brindar una formación de mayor calidad?
- ¿Cuáles podrían ser las estrategias pedagógicas que posibiliten generar las mejores condiciones para el desarrollo de las trayectorias educativas de los alumnos?
- ¿Cómo deberían pensarse las intervenciones en materia de extensión universitaria para conducirnos a los objetivos propuestos?

VIII.- Reflexiones finales

Seguramente, a este documento, se han sumado diversas iniciativas para la reforma del actual plan de estudios.
Nuestra propuesta, intenta delinear un conjunto de recomendaciones vinculadas con uno de los pilares de la educación superior: la extensión universitaria.
En correspondencia con ello, pretendemos que esta presentación, interpele los modos y formatos de la actual metodología de enseñanza del derecho.
Pensamos que la práctica de la enseñanza a través de las actividades de extensión posibilitarán la integración de los contenidos disciplinares superando así un abordaje fragmentado.
Una dinámica institucional, un contexto áulico que puede darse en tareas de campo extensionista, que habilite el debate, la discusión, el intercambio, la construcción de la grupalidad, en los que la palabra de cada estudiante tenga valor, con experiencias democráticas, aspectos que resultan indispensables para la construcción de un abogado crítico y responsable.
Para concluir, podemos afirmar que el análisis de la reforma del plan de estudios, nos ha conducido a repensar sobre la enseñanza del derecho.
Detenernos en la enseñanza del derecho, nos permitió imaginar y reflexionar sobre qué profesionales debe formar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, entendiendo para ello, que estamos viviendo un cambio de época.

Bibliografía consultada

-Memoria de Actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales durante los años 2007/2009
-Resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
-Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata
-*Grhal, Sandra*. Ejes que promueven la extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Año 2011.
-Coscarelli, Maria R. Formación en el campo de la extensión universitaria. Revista Electronica sobre Extensión Universitaria. Ejemplar nro. 1. Julio 2010.
-Fenstermacher, Gari, Soltis, Jonas. Enfoques de la enseñanza. 1999.
-Perez Gomez, Angel. La función y función del profesor en la enseñanza para la comprensión. Diferentes perspectivas. 1993.
-Pico, Sofia. Extensión y formación docente en los orígenes de la Universidad Nacional de La Plata. 2007. Revista Question.
-Seteiman, Jorge. Más didactica en la educación superior. Mayo 2008. Editorial Miño y Davila.
-Seteiman, Jorge. ¿Qué debatimos hoy en la didáctica: las prácticas de enseñanza en la ecuación superior. 2004. Editorial Miño y Davila.
-Bracchi, Claudia, Gabbai M. Inés i. "Estudiantes secundarios: un análisis de las trayectorias sociales y escolares en relación con las dimensiones de la violencia." En: Kaplan, Carina (dir.)
-Sitios webs consultados:
http://www.jursoc.unlp.edu.ar
http://www.unlp.edu.ar;
http://www.abo.gov.ar;
http://www.perio.unlp.edu.ar

* *Edwin Montero Labat, Abogado. Docente Autorizado. UNLP. Especialista en Derecho Civil. UNLP. Profesor Adjunto Ordinario (Cátedra I Derecho Civil II). Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. Ex Secretario de Extensión Universitaria. UNLP. Investigador: Categoría IV. Anteproyecto de Tesis presentado en la Carrera de Doctorado "La Extensión Universitaria como metodología de la enseñanza del derecho". Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con funciones de Profesor Adjunto (Derecho Privado II y Derecho Privado III. Cátedra 1). Facultad de de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.*

*** Evangelina Montero Labat, Profesora en Ciencias de la Educación UNLP- FAHCE. Profesora en Educación Física UNLP- FAHCE. Magisterio especializado en Educación Inicial. ISFD Nº 17. Jefe de Trabajos prácticos ordinario con semidedicación en la cátedra Didáctica especial 1 del Profesorado en Educación Física. FAHCE. UNLP. Profesora del nivel superior en ISFD DGCYE. Integrante del Equipo Técnico Regional. Capacitador en el Centro de Investigaciones Educativas de la ciudad de La Plata. DGCYE. DIRECCIÓN DE CAPCITACIÓN. Inspector de enseñanza del Nivel Superior*

CONCLUSION: De acuerdo a la temática que corresponde abordar a ésta Comisión, hemos recibido diferentes propuestas de incorporar nuevos espacios curriculares al actual plan de estudios de la carrera, los que nos muestran que la realidad social requiere de un abogado del tipo generalista pero al mismo tiempo que se forme en nuevas incumbencias profesionales. La abogacía ha dejado de ser exclusivamente una profesión liberal para la judicialización del conflicto individual, para dar paso a un profesional que asuma nuevos roles profesionales ya sea en la administración pública (asesor de gobierno, ministerio público, magistratura, etc.), consultor privado (asesor de empresas), investigador de la ciencia jurídica, mediador, etc.-
Estos nuevos roles sociales del abogado requieren de una formación que comprenda esta realidad, para los cuál debe ser evaluado críticamente y repensado el plan de estudios de la carrera que permita evaluar medios-fines.- Reflexionar acerca de si estamos formando profesionales idóneos y capaces de comprender esa nueva realidad, nos permitirá evaluarnos acerca de si cumplimos como institución de educación superior con una formación íntegra del abogado que requiere la Nación Argentina de nuestros tiempos.-
Para ello también debe tener cabida las nuevas ramas de la ciencia jurídica, como la vinculación del derecho con la transdisciplina que las relacionan como ser la ciencias sociales: historia, economía, sociología, filosofía, psicología, medicina legal, etc.-
La comisión de sus reuniones deliberativas como de los proyectos remitidos al correo electrónico habilitado al efecto, han surgido numerosas propuestas de incorporaciones a la curricula de formación del abogado, las que deberán ser evaluadas en cuanto a su pertinencia de acuerdo al perfil profesional de se defina, así como los contenidos mínimos de la disciplina que se pretende crear, su carga horaria, así como su ubicación en el plan de estudios con su respectivo régimen de correlatividades.-
Así podemos citar como propuesta de nuevos espacios curriculares (materias) las siguientes:
"Derechos Humanos"
"Derecho del Ambiente" y otros "Derecho del Medio Ambiente y Recursos Naturales"
"Mediación" y otros "Mediación y Métodos Complementarios de Resolución de Conflictos"
"Derecho Informático"
"Derecho de la Integración"
"Etica de las Profesiones Jurídicas"
"Derecho del Consumidor"
"Ciencias Política"
"Realidad Nacional y Latinoamericana
"Taller de Doctrina y Jurisprudencia"
"Taller de producción y comprensión de textos"
"Taller de producción y administración del discurso y lenguaje judicial"
"Idiomas" vinculado a la comprensión de textos jurídicos en otro idioma
COMO MATERIAS OPTATIVAS: También se proponen algunos espacios como materias o seminarios optativos, los que podemos citar:
"Derecho de la Comunicación"
"Derecho Industrial"
"Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales"
"Criminología y control social"
"Derecho de la Integración"
"Derecho de la Educación"
"Idiomas"
"Pedagogía del Derecho"
Particularmente vinculado al establecimiento de materias optativas, la propuesta de la Agrupación Estudiantil Franja Morada propone la incorporación de nuevos espacios curriculares que en la actualidad se cumple mediante el régimen de seminarios de grado, siendo que los proponen como nuevas materias optativas, a saber:
Criminología
Idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Chino
Derechos de Género
Producción y Comprensión de discurso
Historia del Derecho – Evolución de las Instituciones
Derecho Deportivo
Derecho y Tecnología de la Información
Derecho de la Integración
Relaciones Internacionales
Derechos del Usuario y del Consumidor
Taller de Jurisprudencia
Derecho Bancario y Bursátil
Historia de las Instituciones Argentinas
Partidos Políticos y Sistemas Electorales
Globalización y Desarrollo
Derecho de daños
Derecho Cooperativo y Mutuario
Políticas Públicas y Desarrollo Local
Derechos Intelectuales e Industrial
Responsabilidad Civil Profesional
Instituciones del Common Law
Ecología jurídica
Análisis y biotecnológico de las relaciones jurídicas
Evolución pormenorizado de la evolución del derecho con las diferentes formas de Estado
Derecho Constitucional Bonaerense

Régimen Jurídico de las Comunicaciones
Medicina Legal
Derecho Aduanero
Derecho Constitucional Comparado
Derecho de los Pueblos Indígenas –comprendiendo propiedad comunitaria y el respeto a su etnia y cultura-

COMO MATERIAS DE PROFUNDIZACION DEL DERECHO PENAL: Se han propuesto algunas disciplinas tendientes a complementar y profundizar la enseñanza vinculada al Derecho Penal, como ser:
Investigación Criminal
Política Criminal
Medicina Legal

INCORPORACION DE NUEVAS MATERIAS INTERDISCIPLINARES: Se han recibido propuestas para la formación de futuros investigadores en ciencias jurídicas y sociales, como una posible incumbencia profesional del futuro abogado, siendo que se ha propuesto la formación en materias interdisciplinares como ser:
Epistemología
Metodología de la Investigación
Escritura de documentos científicos
PROPUESTAS VINCULADAS A LA ENSEÑANZA DEL DERECHO: Se han presentado diferentes propuestas vinculadas a la metodología de enseñanza del derecho (podemos citar las propuesta del Prof. Bibiloni, Prof. Palacio, Prof. Orler, Prof. Montero Labat, Prof. De Rosa, Agrupación “Construyendo Derechos”. Agrupación “Movimiento Universitario Independiente”, “Agrupación Franja Morada”, entre otros), que en su esencia proponen la utilización de nuevas metodologías o estrategias de enseñanza de la ciencia jurídica.- Así podemos sintetizarlas en lo siguiente:
La investigación en ciencias jurídicas y sociales como método de aprendizaje
La extensión universitaria como método de enseñanza y aprendizaje de lo jurídico
La enseñanza del derecho privado (Derechos Reales) a partir de la jurisprudencia

DIVISION O MODIFICACION DE MATERIAS: También se ha propuesto el desdoblamiento o separación de materias actuales, entre las que ha existido cierta reiteración en la misma, comprendiendo a las materias “Derecho Social (del Trabajo y de la Seguridad Social)” para convertirla en dos (2) materias: Derecho Social I (teoría general y derecho individual del trabajo) y Derecho Social II (derecho colectivo del trabajo y derecho de la seguridad social); y la actual materia “Derecho Civil V (Familia y Sucesiones)” para convertirla en dos (2) materias “Derecho Civil V (Familia)” y “Derecho Civil VI (Sucesiones)”.-
Todo lo expuesto, es cuanto tenemos para informar a los Sres. miembros del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quedando a su disposición en lo que consideren que deba ser aclarado o presentada ampliación del presente informe.-